



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 3913 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO ABR. 24 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 397 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 650 DEL 2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	30193
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 398 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN USO DE BUEN RETIRO COMO REFERENTES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ”	30220
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 399 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE PRETENDE LA REGULACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS DE DROGAS”	30238
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 400 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE PROMUEVE EL USO RESPONSABLE Y ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL POSICIONANDO A BOGOTÁ D.C. COMO CIUDAD LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS”	30253
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 401 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE A ALIMENTARTE FOOD FESTIVAL COMO UN EVENTO DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO PARA LA CIUDAD”	30264
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 402 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA LA CALLE 26 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10 COMO ‘LA CALLE DEL MENSAJERO’ EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE ESTABLECE EL DÍA DEL MENSAJERO EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR HISTÓRICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS CIUDADANOS QUE PRESTAN ESTA LABOR EN BOGOTÁ.”	30272
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 403 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA A LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y TIEMPOS PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”	30282
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 404 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO DISTRITAL DE PERSONAS REPORTADAS COMO EXTRAVIADAS Y DESAPARECIDAS EN BOGOTÁ D.C.”	30315
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 405 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES MINIMAS DE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES EN BOGOTÁ D.C.”	30326

Pág.

<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 406 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LOS CONSEJOS TUTELARES DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE MODIFICA EL ACUERDO 110 DE 2003”.....	30343
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 407 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA “ESTRATEGIA CIUDADANA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA EN BOGOTÁ D.C. COMO CONTRIBUCIÓN A LA RECONCILIACIÓN, LA NO REPETICIÓN, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ”.....	30362
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 408 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA DE REFLEXIÓN POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN CONMEMORACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A BOGOTÁ”.....	30378
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 409 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE ADOPTAN MECANISMOS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON FAMILIARES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA LA BÚSQUEDA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESAPARECIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL”.....	30383
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 410 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL EN RELACIÓN CON LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN BOGOTÁ D.C.”...	30395
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 411 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “ POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INCLUSO DE LA DOSIS PERSONAL, EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL”.....	30412
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 412 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA INCENTIVAR LOS EMPLEOS VERDES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	30469
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 413 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 268 DE 2006 Y SE REGLAMENTA LA ASISTENCIA ESPIRITUAL EN INSTITUCIONES DEL DISTRITO CAPITAL (CAPELLANÍAS)”.....	30488
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 414 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR EL CUAL SE PROPONE PROGRESIVAMENTE EN EL DISTRITO CAPITAL LA IMPLEMENTACIÓN DEL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS ESPECÍFICAMENTE EN LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS -RAEES, A TRAVÉS DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	30511
<u>PROYECTO DE ACUERDO NO 415 DE 2025 PRIMER DEBATE</u> “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE (ALTERNATIVAS) EN LAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE AGUA POTABLE Y	

Pág.

RESIDUAL EN AMBIENTES DOMÉSTICOS, INSTITUCIONALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 30527

PROYECTO DE ACUERDO NO 416 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES) EN BENEFICIO DE VIVANDEROS, VIVANDERAS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 30560

PROYECTO DE ACUERDO NO 417 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO POLICIAL, CON ENFOQUE DE JUVENTUDES, EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL EN BOGOTÁ” 30576

PROYECTO DE ACUERDO NO 397 DE 2025

PRIMER DEBATE

POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 650 DEL 2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

1. OBJETO DEL PROYECTO

Modificar parcialmente el Acuerdo 650 de 2016 “*Por medio del cual se crea el programa “Innovadores Escolares en Seguridad Vial” en los planes de formación en seguridad vial escolar en el Distrito Capital*” y se dictan otras disposiciones”. Con el objetivo de ampliar su cobertura a los Jardines del Distrito y en las Escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, en pro del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, así como derechos de protección; bajo el marco de la corresponsabilidad.

2. JUSTIFICACIÓN- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2.1 Glosario

ACCIDENTE DE TRÁNSITO: “*Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la circulación normal de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho*” (Código Nacional de Tránsito, 2002).

ACTOR EN LA VÍA: “*Son actores de la vía, todas las personas que asumen un rol determinado, para hacer uso de las vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro, por lo tanto, se consideran actores de tránsito y de la vía los peatones, los transeúntes, los pasajeros y conductores de vehículos automotores y no automotores, los motociclistas, los*

ciclistas, los acompañantes, los pasajeros, entre otros”. (Corporación Fondo de Prevención Vial, 2011).

OMS: Organización Mundial de la Salud *(Corporación Fondo de Prevención Vial, 2011).*

PASAJERO: *Persona distinta al conductor que se transporta en un vehículo público (Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002, Art. 2).*

PEATÓN: *Persona que transita a pie o por una vía (Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002, Art. 2).*

PESV: *Plan Estratégico de Seguridad Vial, “es una herramienta de gestión encaminada a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos”. (Ministerio de Transporte)*

PME: *El Plan de Movilidad Escolar es un “conjunto de orientaciones y acciones que buscan generar un escenario privilegiado para salvar vidas y fomentar [de manera participativa] una cultura vial segura y sostenible en las instituciones educativas” (Secretaría de Educación del Distrito).*

PDSV: *Plan Distrital de Seguridad Vial, “una hoja de ruta que permite definir y coordinar las acciones entre entidades públicas y privadas con el propósito de lograr una reducción en el número de fatalidades y lesiones graves” (Secretaría Distrital de Movilidad).*

PNSV: *Plan Nacional de Seguridad Vial, “es la principal apuesta de política pública que tenemos en el país y que permite dar continuidad y fortalecer las acciones contra la siniestralidad vial, esta busca principalmente a prevenir las muertes y lesiones graves en la vía” (Agencia Nacional de Seguridad Vial).*

RIESGO: *Evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible (Ministerio de Transporte, 2014).*

SEGURIDAD VIAL: *“Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados” (Ley 1702 del 2013).*

2.2 Contexto de la siniestralidad

Teniendo en cuenta la siniestralidad en el mundo y la tasa de mortalidad, se observa un tendiente creciente a causa de siniestros viales, que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente genera la pérdida de más de 1,24 millones de personas, generando en promedio 3.000 fallecimientos diarios en el mundo.

En este sentido, es importante referir que los siniestros viales, son considerados una enfermedad de Salud Pública, una epidemia silenciosa (OMS), y según cifras del observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad y anuarios de siniestralidad, se puede evidenciar que infortunadamente en Bogotá, durante la vigencia 2020-2022: 1360 personas perdieron la vida a causa de un siniestro vial y 52.746 personas quedaron lesionadas.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que en el año 2021 respecto a la vigencia 2020 hubo un incremento del 26% en el número de fallecidos y en el año 2022 respecto al año 2021 hubo un incremento del 17% con un total de 76 fallecidos más respecto al año anterior. De igual forma, según cifras preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se evidencia que en el año 2023 con corte a junio en comparación con el mismo periodo del año 2022 hubo un incremento del 9,61% con un total de 27 fallecidos más, para un total de 308 víctimas.

Para un mayor contexto del comportamiento de la siniestralidad durante la vigencia 2020-2022, se expone en detalle a continuación:

Tabla 1
Comportamiento siniestralidad Bogotá 2020-2022

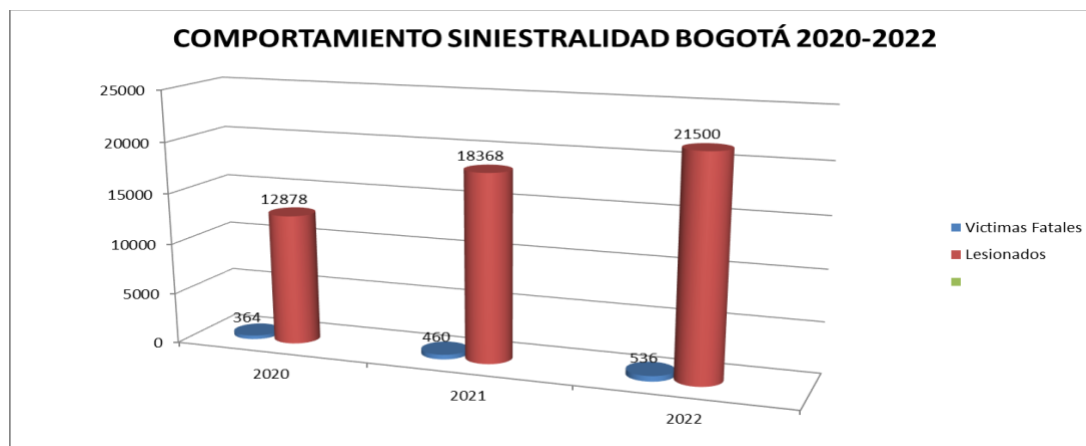
COMPORTAMIENTO SINIESTRALIDAD BOGOTÁ 2020-2022				
Categoría/año	2020	2021	2022	Total
Victimas Fatales	364	460	536	1360
Mujeres	64	83	115	262
Hombres	282	345	417	1044
Sin información	18	32	4	54
Lesionados	12878	18368	21500	52746
Mujeres	4125	5847	7028	17000
Hombres	8723	12484	14419	35626
Sin información	30	37	53	120

Nota. Comportamiento siniestralidad Bogotá 2020-2022. Con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad

Como se observa en la tabla 1, durante la vigencia 2020-2022, en la Ciudad de Bogotá hubo un total de 1360 víctimas fatales y 52746 lesionados a causa de siniestros viales. De tal modo, se observa que, durante la vigencia referida, se evidencia que respecto a las víctimas fatales: 262 con un 19% corresponde a mujeres, 1044 con un 77% a hombres y 54 con un 4% no se tiene información.

Ahora bien, respecto a los lesionados, se evidencia que 17000 con un 32% corresponde a mujeres, 35626 con un 67% a hombres y 120 personas sin información con 4%.

Figura 1
Comportamiento siniestralidad Bogotá 2016-2020



Nota. Comportamiento siniestralidad Bogotá 2020-2022. Con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Como se observa en la figura 1, el comportamiento de los siniestros viales, durante la vigencia 2020-2022, es de la siguiente manera: en el año 2022 hubo un total de 12878 lesionados y 364 víctimas fatales; para el año 2021, un total de 18368 lesionados y 460 víctimas fatales y para el año 2022, 21500 lesionados y 536 víctimas fatales.

Tabla 2

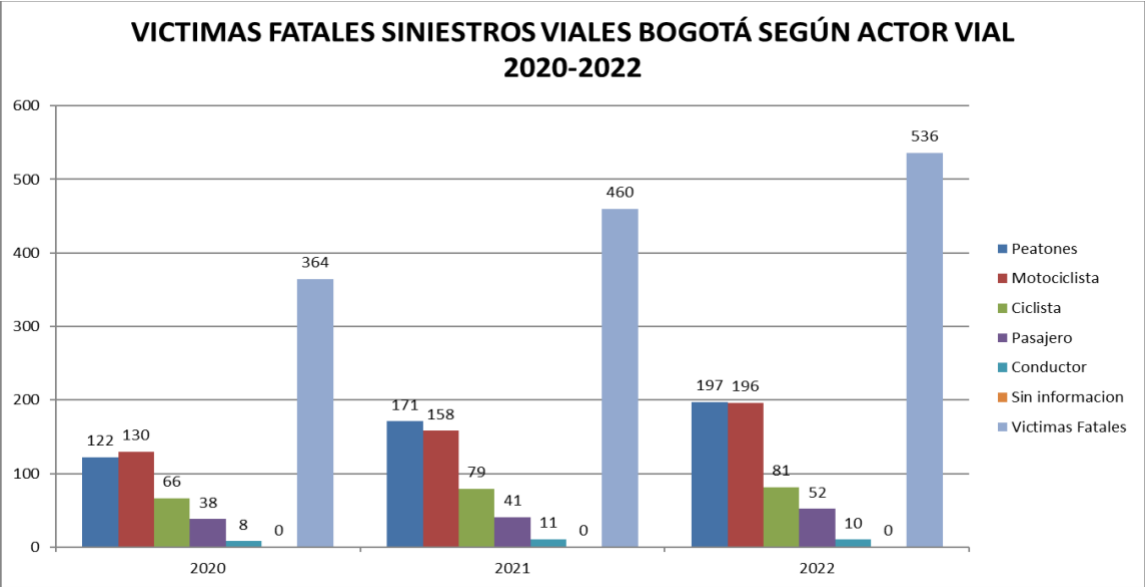
Víctimas Fatales Siniestros Viales Bogotá según actor vial 2020-2022

VÍCTIMAS FATALES SINIESTROS VIALES BOGOTÁ SEGÚN ACTOR VIAL 2020-2022				
Categoría/año	2020	2021	2022	Total
Peatones	122	171	197	490
Motociclista	130	158	196	484
Ciclista	66	79	81	226
Pasajero	38	41	52	131
Conductor	8	11	10	29
Sin informacion	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	364	460	536	1360

Nota. Víctimas Fatales Siniestros Viales Bogotá según actor vial 2020-2022 Con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Figura 2

Víctimas Fatales Siniestros Viales Bogotá según actor vial 2020-2022



Nota. Víctimas Fatales Siniestros Viales Bogotá según actor vial 2020-2022 con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Como se puede evidenciar en la tabla 2 y la figura 2, durante la vigencia 2020-2022 hubo 1360 víctimas fatales, de las cuales 490 corresponde a peatones con una participación del 36.03%; 484 a motociclistas con un 35.59%; 226 ciclistas con un 16.62%; pasajeros 131 con un 9,63% y 29 conductores con un 2,13%. De tal modo, se observa que los actores vulnerables son los más tendientes a perder la vida con un 88.24%, correspondientes a: peatones, motociclistas y ciclistas.

Tabla 3

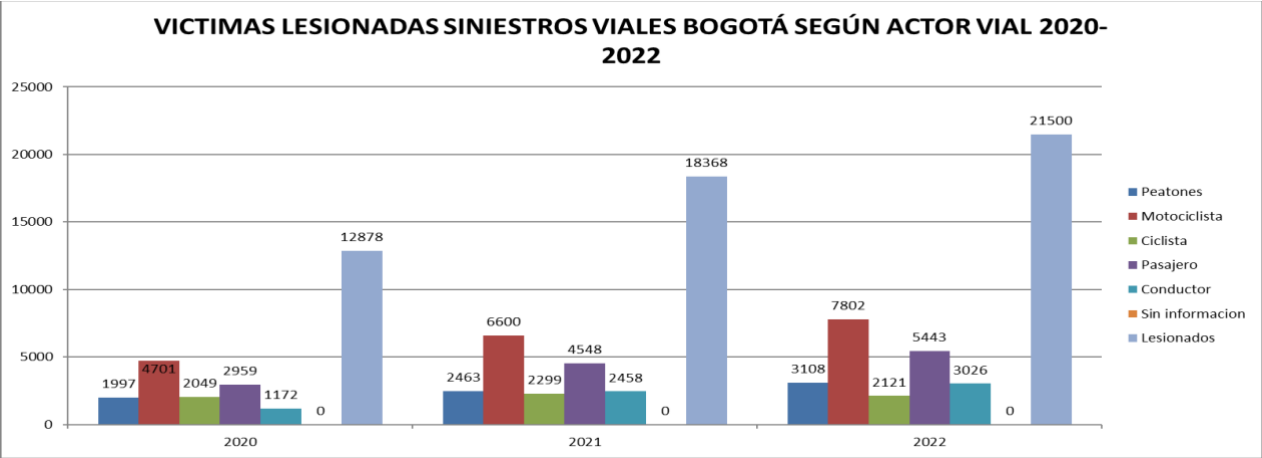
Lesionadas Por Siniestros Viales Bogotá según actor vial 2020-2022

VICTIMAS LESIONADAS SINIESTROS VIALES BOGOTÁ SEGÚN ACTOR VIAL 2020-2022				
Categoría/año	2020	2021	2022	TOTAL
Peatones	1997	2463	3108	7568
Motociclista	4701	6600	7802	19103
Ciclista	2049	2299	2121	6469
Pasajero	2959	4548	5443	12950
Conductor	1172	2458	3026	6656
Sin informacion	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	12878	18368	21500	52746

Nota. Lesionadas Siniestros Viales Bogotá según actor vial 2020-2022 Con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Como se puede evidenciar en la tabla 3, durante la vigencia 2020-2022, hubo 52746 lesionados, de los cuales 19103 corresponden a motociclistas con una participación del 36%; 12950 pasajeros con un 25%; 7568 peatones con un 14%; 6656 conductores con un 13% y 6469 ciclistas con un 12%.

Figura 3

Lesionadas Por Siniestros Viales Bogotá según actor vial 2020-2022



Nota. Lesionadas Siniestros Viales Bogotá según actor vial 2020-2022 con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Como se puede evidenciar en la figura 3, durante la vigencia 2020-2022, hubo 52746 lesionados, donde el comportamiento por año es el siguiente:

En el año 2020 un total de 12878 lesionados, de los cuales 4701 corresponden a motociclistas con un 36,50% de participación; 2959 a pasajeros con un 22,98%; 2049 ciclistas con un 15,91%; 1997 peatones con un 15,51% y 1172 a conductores con un 9,10%.

En el año 2021 un total de 18368 lesionados, de los cuales 6600 corresponden a motociclistas con un 35,93%; 4548 a pasajeros con un 24,76%; 2463 a peatones con un 13,41%; 2458 a conductores con un 13,38% y 2048 ciclistas con un 12,52%.

En el año 2022 un total de 21500 lesionados, de los cuales 7802 son motociclistas con una participación del 36,29%; 5443 personas pasajeros con un 25,32%; 3108 peatones con un 14,46%; 3026 con un 14,07% y 2121 ciclistas con un 9,87%.

Tabla 4
Análisis Horizontal Siniestros Viales Bogotá 2020-2022

ANÁLISIS HORIZONTAL SINIESTROS VIALES BOGOTÁ 2021-2022				
Categoría/año	2022	2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
Victimas Fatales	536	460	76	17%
Lesionados	21500	18368	3132	17%

Nota. Análisis Horizontal Siniestros Viales Bogotá 2020-2022 con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con la tabla 4, se puede evidenciar que, en el año 2022, respecto al año 2021, las víctimas fatales tuvieron un aumento 17% con total de 76 víctimas más.

Respecto a los lesionados, en el año 2022, respecto al año 2021, hubo un aumento de 3132 lesionados más con un aumento del 17%.

Tabla 5

Análisis Horizontal Víctimas Fatales Sinistros Viales Bogotá Según Actor Vial 2020-2022

ANÁLISIS HORIZONTAL VÍCTIMAS FATALES SINIESTROS VIALES BOGOTÁ SEGÚN ACTOR VIAL 2021-2022				
Categoría/año	2022	2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
Peatones	197	171	26	15%
Motociclista	196	158	38	24%
Ciclista	81	79	2	3%
Pasajero	52	41	11	27%
Conductor	10	11	-1	-9%

Nota. Análisis Horizontal Víctimas Fatales Sinistros Viales Bogotá Según Actor Vial

2020-2022 con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Considerando la tabla 5, se puede evidenciar que las víctimas fatales por siniestros viales según actor vial en el año 2022 respecto al año 2021, tuvieron el siguiente comportamiento: los pasajeros un aumento del 27% con 11 fatalidades más; los motociclistas un aumento del 24% con 38 fatalidades más; los peatones un aumento del 15% con 26 fatalidades más; los Ciclistas con aumento del 3% y 2 fatalidades más y finalmente solamente los conductores tuvieron una reducción del 9% con 1 fatalidad menos.

Tabla 6

Análisis Horizontal Víctimas Lesionadas Sinistros Viales Bogotá Según Actor Vial 2020-2022

ANÁLISIS HORIZONTAL VÍCTIMAS LESIONADAS SINIESTROS VIALES BOGOTÁ SEGÚN ACTOR VIAL 2021-2022				
Categoría/año	2022	2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA %
Peatones	3108	2463	645	26%
Motociclista	7802	6600	1202	18%
Ciclista	2121	2299	-178	-8%
Pasajero	5443	4548	895	20%
Conductor	3026	2458	568	23%
TOTAL	21500	18368	3132	17%

Nota. Análisis Horizontal Víctimas Lesionadas Sinistros Viales Bogotá Según Actor Vial 2020-2022 con base en datos obtenidos del Observatorio de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Respecto a los lesionados, en el año 2022, respecto al año 2021, hubo un aumento de 3132 lesionados más con un aumento del 17% y por actor vial se evidencia el siguiente

comportamiento: los peatones un aumento del 26% con 645 lesionados más; los conductores un aumento del 23% con 568 lesionados más; pasajeros un aumento del 20% con 895 lesionados más; motociclistas un aumento del 18% con 1202 lesionados más y finalmente solamente en los ciclistas hubo una reducción del 8% con 178 lesionados menos en el año 2022.

De igual forma, es importante referir que no se efectúa comparación con las cifras del año 2020, considerando que el mismo fue un año atípico, debido a las acciones realizadas a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19, motivo por el cual no se llevaron a cabo los viajes que se realizan en un año normal, debido a las distintas medidas de restricción a la movilidad establecidas por la administración, no obstante, se evidencia un alto número de siniestros y 364 fatalidades, lo cual demuestra el rol del factor humano en la generación de los siniestros viales, con la práctica de malas acciones como el exceso de velocidad.

Ahora bien, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, *en Colombia los siniestros viales son la primera causa de muerte en los niños y adolescentes entre los 5 y los 14 años¹*

En el mismo sentido, la Secretaría Distrital de Movilidad², refiere:

Los siniestros viales que cuentan con información de hipótesis, el mayor porcentaje están asociados al factor humano (conductor), y esto tiene que ver básicamente con la toma de decisiones en el momento de movilizarse en la ciudad, decisiones que son totalmente modificables y que pueden en el caso de la siniestralidad vial disminuir la cantidad de personas que podrían resultar heridas o muertas por una mala decisión.

Así mismo, de manera particular, el exceso de velocidad es un factor de riesgo clave en la siniestralidad vial ya que, a mayor velocidad, aumenta la probabilidad de colisión y la distancia necesaria para detener totalmente el vehículo se incrementa. Además, a mayor velocidad se aumenta la gravedad de las heridas en el cuerpo humano y consecuencias de una colisión, pues la fuerza del impacto es mayor.

De igual forma, es importante referir que, en Colombia según el Instituto De Medicina Legal y Ciencias Forenses, los Siniestros Viales son la segunda causa de muerte violenta (Fondo de prevención vial, 2010), así como la primera causa de muerte de los jóvenes colombianos menores de 30 años (Contraloría General, 2012). (PNSV, 2011).

Ahora bien, el panorama de la seguridad vial de niños, niñas y adolescentes especialmente en la región de América Latina y el Caribe es crítico, pues los siniestros viales son, según María Ceval, “la principal causa de muerte entre niños de cinco a 14 años, la segunda entre adolescentes de 15 a 19 años y se encuentra entre las causas más frecuentes de discapacidades entre aquellos que logran sobrevivir” (ANSV).

De igual forma, *“en Colombia, según los datos del Observatorio de Seguridad Vial, durante los años 2017, 2018 y 2019, los siniestros viales constituyeron la segunda causa de muerte*

¹ La Seguridad Vial infantil en la agenda de salud pública nacional- ANSV

² Respuesta SDM SDQS 2333652023

³ Guía para la elaboración del PME- ANSV

violenta por lesión de causa externa en niños, niñas y adolescentes. Según el Boletín estadístico Colombia. Fallecidos y lesionados. Serie nacional. Final 2018 - 2019 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 114 niños y niñas (entre 0 y 9 años), y 640 jóvenes (entre 10 y 19 años) murieron en siniestros viales durante el 2019 (julio del 2020, p. 4). En este periodo, también resultaron lesionados 1148 niños y niñas, y 3385 jóvenes (p. 12) por la misma causa⁴.

De tal modo, como lo refiere la Organización Mundial de la Salud, en general, niños, niñas y adolescentes son actores especialmente vulnerables en la vía, a causa de las características del desarrollo físico, cognitivo y social propias de la etapa vital en la que se encuentran. En términos físicos, las niñas y niños son más vulnerables debido a que su baja estatura dificulta su visibilidad. Por otra parte, “los niños más pequeños pueden tener dificultades para interpretar las diferentes señales y sonidos, lo que podría influir en su apreciación de la proximidad, velocidad y dirección de vehículos en movimiento⁵.

Es así, que como lo define la Agencia Nacional de Seguridad Vial, precisamente para trabajar sobre la movilidad segura en instituciones educativas, se debe reconocer la vulnerabilidad de los menores de edad y la prevalencia de su protección. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, en todo aquello que involucre a menores de dieciocho años se debe tener en cuenta el concepto de interés superior de niños, niñas y adolescentes que se entiende como “el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus

Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes” (art. 8). El Código de Infancia y Adolescencia reconoce a los menores de dieciocho años como sujetos poseedores de derechos, entre otros, del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal y de derechos de protección que incluye ser protegidos contra “cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos” (art. 20, núm. 19)⁶.

2.3 Accionar mundial

Naciones Unidas: 2010- se proclama el Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2011-2020): con el objetivo de estabilizar y después reducir las muertes por accidentes viales al 2020.

Naciones Unidas: 2020 proclama el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2021-2030): objetivo: prevenir al menos el 50% de las muertes y lesiones en el tránsito para 2039.

⁴ Ídem Pág. 4.

⁵ Organización Mundial de la Salud

⁶ Guía para la elaboración del PME- ANSV

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Eje salud y Bienestar, Eje Ciudades y comunidades sostenibles y la Nueva agenda Urbana: se establece, la necesidad de incorporar la seguridad vial en los procesos de planificación y gestión del desarrollo urbano.

En el año 2007, se establece el Decreto 164 DE 2007, “por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá D.C.”

En el año 2011, se proclama la Ley 1503 del 2011: Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. En el 2013, se estableció el Plan Nacional de Seguridad Vial, su objetivo es: Implementar acciones que permitan la disminución del número de víctimas fatales en un **25%** por hechos de tránsito a nivel nacional para el año 2021.

A su vez, en el PNSV, establece, *dentro del pilar de comportamiento humano, el programa de formación en seguridad vial, que incluye una acción dirigida a la transformación de las instituciones educativas en comunidades seguras. Las instituciones educativas, como comunidades seguras, son aquellas en las que se identifican los modos de transporte que usan los estudiantes para su desplazamiento y los riesgos viales en el camino desde casa hasta la institución y viceversa. A partir de esto, se establecen e implementan las acciones necesarias para lograr una movilidad segura en cada institución educativa*⁷ (ANSV)

En el año 2013, se crea la Agencia Nacional De Seguridad Vial, cuyo objetivo es: La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tendrá como *objeto la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país.* (Ley 1702, 2013)

En el año 2010, en la Ciudad de Bogotá, se estableció el Plan Distrital de Seguridad Vial, el cual fue modificado en el año 2017, desarrollando de esta manera el Plan Distrital de Seguridad Vial-PDSV 2017-2026, en el mismo se incorpora principalmente la Política de Visión Cero y dentro de sus metas está el “Disminuir los heridos graves y muertes en un 35% en los próximos 10 años, tomando como base el año 2015.”

En el año 2016, mediante el Acuerdo 650 de 2016, se crea el programa “Innovadores Escolares en Seguridad Vial” en los planes de formación en seguridad vial escolar en el Distrito Capital” y se dictan otras disposiciones”.

En el año 2022, se proclama el Decreto 1430 de 2022: Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031- Meta: Reducir el 50% de muertes y lesionados por siniestros viales.

En octubre del año 2023, se expide el Decreto 494 de 2023, por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial 2023-2032 y se dictan otras disposiciones. Cuya Meta estratégica es: la meta del PDSV 2023-2032 es reducir en un 50% el número de víctimas fallecidas (indicador a 30 días) en siniestros viales para el año 2032, tomando como base la cifra definitiva del año 2022.

⁷ Ídem Pág. 6.

De acuerdo con el estudio realizado por el equipo de trabajo, se evidencia respecto a las acciones realizadas por la Secretaría Distrital de Educación para la vigencia 2020-2022, para el cumplimiento del Acuerdo 650 del 2016⁸, lo siguiente:

Año 2020: *El Concurso intercolegiado de historietas “Una historia para sanar a Bogotá”:* con el objetivo de promover y fortalecer valores, actitudes y comportamientos ciudadanos que se reflejaran en el conocimiento, apropiación y uso adecuado del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá en los actuales y futuros usuarios, se propuso el concurso de historietas, en el que participaron 1.600 estudiantes, de grados 3o a 8o, la mayor cantidad pertenecen a colegios de Kennedy (488 estudiantes), y que 636 son de colegios públicos y 964 de privados. Por otra parte, de los 636 de colegios públicos, la mayor cantidad corresponde a Kennedy (328) y de los privados a Suba (249). Esta iniciativa se da en el marco del convenio entre Transmilenio y la Secretaría de Educación, pero tuvo también el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Fueron tres los temas, orientados a:

1. Ayudar a que la población se cuide y prevenga el contagio del COVID-19 en TM,
2. Promover el respeto por las reglas y que nadie se cuele en el sistema; 3. Cómo hacer de Transmilenio un espacio seguro para las niñas y las mujeres.

Talleres de imaginarios con el IDU: propuesta para que los estudiantes hicieran sus propuestas a partir de metodologías participativas de talleres. La convocatoria fue acogida por colegios privados y distritales, con el siguiente resultado de inscritos: 13 de primaria, 29 de bachillerato. Los resultados fueron ideas expresadas mediante la participación en talleres hacia cómo imaginan el Corredor Verde, promoviendo la movilidad segura y sostenible, y la prevención de siniestros viales.

Año 2021: se desarrolló el concurso de historietas “Una historia para sanar a Bogotá”, en el marco del convenio suscrito con Transmilenio: participaron 719 estudiantes de grados 9o, 10o y 11o, que considera el Sistema Integrado de Transporte Público como la posibilidad de explorar, reconocer y reflexionar la ciudad, sus espacios, desplazamiento seguros en el sistema, su gente, su cultura, como el escenario en el que se desarrolla cada individuo, y con el que también tenemos un compromiso colectivo. Finalmente, en el Aula Virtual de Promoción de Bienestar Estudiantil, se reforzaron los temas de seguridad vial, atendiendo que dentro de las principales actividades y estrategias pedagógicas a implementar desde el componente pedagógico de la Dirección de Bienestar Estudiantil con comunidades educativas, se centran en temas de cuidado y autocuidado, desde la prevención de enfermedades transmisibles, uso de protocolos y medidas de bioseguridad y fomento de estilos de vida saludable en actividad física, alimentación saludable, movilidad segura y prevención de accidentalidad, bajo el principio de corresponsabilidad. por medio de las siguientes interacciones:

Tabla 7

⁸ Respuesta SDQS 2334082023 Secretaría Distrital de Educación.

Acciones realizadas por la Secretaría Distrital de Educación, durante la vigencia 2022 en cumplimiento al Acuerdo 650 del 2016.

Materiales y notas informativas publicadas	Cantidad de visualizaciones	Línea pedagógica
Prevención de accidentes	304	Prevención de accidentes
Invitación al concurso de historietas	4.377	Movilidad escolar segura
Concurso Inter colegiado de historietas SED - TM	552	Movilidad escolar segura
Guía imaginar el Corredor verde SED - IDU (secundaria-media)	228	Movilidad escolar segura
Guía imaginar el Corredor verde SED - IDU (primaria)	179	Movilidad escolar segura
Nota proyecto Corredor Verde SED - IDU	537	Movilidad escolar segura
Visualizaciones colección Pedagogía del Bienestar Estudiantil	7.291	Todas las líneas
Visualizaciones Guías de prácticas de estilos de vida saludable en familia	2.123	Todas las líneas

Nota. Acciones realizadas por la Secretaría Distrital de Educación, durante la vigencia 2022 en cumplimiento al Acuerdo 650 del 2016, obtenidos a través de la Secretaría Distrital de Educación.

Año 2022: *En el marco del convenio suscrito con Transmilenio, desde la estrategia "Transmi al Cole" con el objetivo de aportar en los comportamientos ciudadanos adecuados y seguros en los medios de transporte público en particular el Sistema Transmilenio, 153 colegios con 613 actividades lúdico-pedagógicas, aplicadas en 63.412 estudiantes, de los cuales 23.091 fueron de género femenino.*

A través de secuencias didácticas y su implementación pedagógica en las líneas pedagógicas de alimentación, actividad física, prevención de accidentes escolares, movilidad segura, con incidencia en el bienestar socioemocional, En total 126 colegios implementaron secuencias didácticas con 13.299 estudiantes beneficiados.

El mayor logro es el fortalecimiento de los vínculos familiares a partir de las acciones con sus hijos, la toma de consciencia acerca del autocuidado y cómo estas propuestas complementan el aprendizaje. De igual forma, que la lúdica y dinámicas como están propuestas las guías facilitaron el trabajo familiar.

En el aula virtual se reportó con relación a dinámicas y usos de contenidos, información y recursos educativos que se requieren para la implementación en las IED. 489 usuarios activos con 63.642 interacciones o acciones de interacción con los contenidos pedagógicos. Ahora bien, respecto a las acciones formativas en Seguridad Vial en las Instituciones Educativas, se evidencia que por parte de la SDM⁹:

Tabla 8

Acciones de Capacitación 2020-2022 Capacitaciones en seguridad vial a Docentes vigencia 2020-2022 SDM

⁹ Respuesta SDQS 2333992023.

Acciones
2020-
en
Docentes
2022

ACCIONES DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL SDM 2020-2022 DOCENTES		
AÑO 2020		
NÚMERO DE COLEGIOS	NÚMERO DE CAPACITADOS	TIPO DE COLEGIO
6	324	Distrital
5	227	Privado
AÑO 2021		
3	117	Distrital
5	360	Privado
AÑO 2022		
12	691	Distrital
6	147	Privado
37	1866	Distrital- Privado

Nota.
de Capacitación
2022
Capacitaciones
seguridad vial a
vigencia 2020-
SDM con base

en datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

En la tabla 8, se puede evidenciar, que, por parte de la SDM, durante la vigencia 2020-2022 se efectuó capacitación a Docentes en seguridad vial, a través de la intervención en 37 Colegios con un total de 1866 Docentes capacitados, de tal modo para dicha vigencia solo se intervino el 2% de los 1979 Colegios que existen en la Ciudad.

Tabla 9

Acciones de Capacitación 2020-2022 Capacitaciones en seguridad vial a Padres de Familia vigencia 2020-2022 SDM

ACCIONES DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL SDM 2020-2022 PADRES DE FAMILIA		
AÑO 2020		
NÚMERO DE COLEGIOS	NÚMERO DE CAPACITADOS	TIPO DE COLEGIO
2	328	Distrital
2	151	Privado
AÑO 2021		
2	70	Distrital
1	145	Privado
AÑO 2022		
5	1127	Distrital
6	117	Privado
18	1938	Distrital- Privado

Nota. Acciones de Capacitación 2020-2022 Capacitaciones en seguridad vial a Padres de Familia vigencia 2020-2022 SDM con base en datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

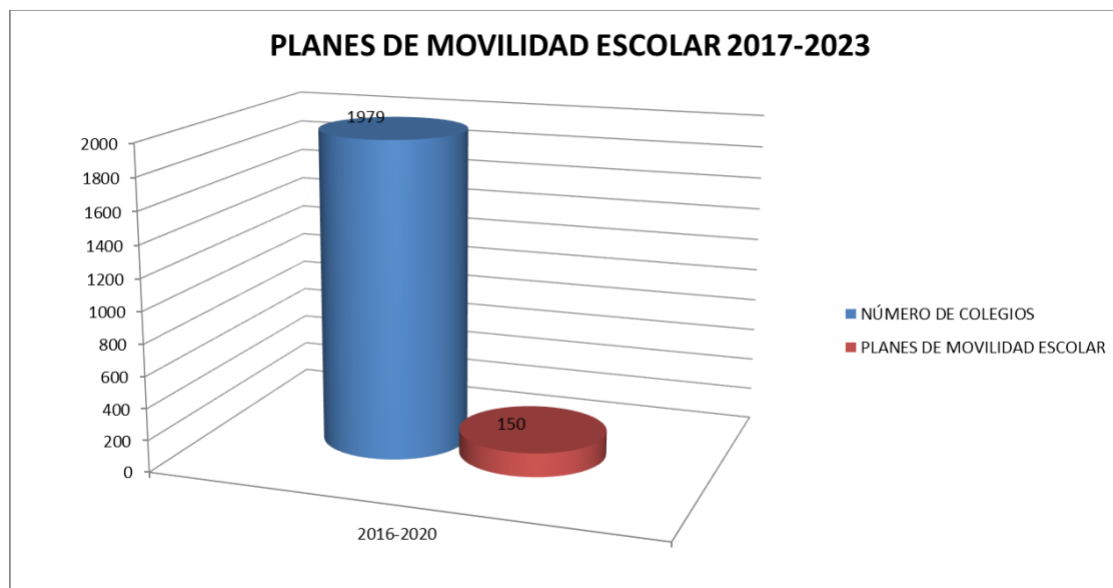
En la tabla 9, se puede evidenciar, que, por parte de la SDM, durante la vigencia 2020-2022 se efectuó capacitación a Padres de Familia en seguridad vial, a través la intervención en 18 Colegios con un total de 1938 Padres de Familia capacitados, de tal modo para dicha vigencia solo se intervino el 1% de los 1979 Colegios que existen en la Ciudad.

Así mismo, por parte de la Secretaría de Educación¹⁰, indica que bajo la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado implementa el programa SEPA (Sector Educativo Privado Articulado), se realizaron 5 capacitaciones en movilidad segura y sostenible con un total de 252 asistentes, sin indicar el rol de estos. De tal modo, se evidencia el bajo accionar respecto a acciones formativas de seguridad vial.

¹⁰ Respuesta SDQS 2334082023

Figura 4

Planes de Movilidad Escolar-PME 2017-2023



Nota: Planes de Movilidad Escolar-PME 2017-2023 con base en información suministrada por la Secretaría de Educación¹¹

Por otra parte, tal como se evidencia en la figura 4, se observa que, con corte a marzo del 2023, en Bogotá hay un total de 1979 Colegios y con corte a mayo del 2023 hay un total de 150 PME aprobados. De tal modo es preocupante dicha cifra considerando que corresponde al 8% de los Colegios existentes y la meta al 2026 según el Decreto 813 de 2017 es contar con el 100% de los Colegios aprobados con el PME y una visita de seguimiento. Y de acuerdo con el parágrafo del artículo 4, Acuerdo 650 del 2016, se indica: "se fortalecerá el cumplimiento del Decreto 594 de 2015 y demás normas vigentes, con lo que se garantiza la participación de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa; docentes, familias y estudiantes"

De tal modo, considerando lo anterior, se observa un alto accionar, no obstante, no se refleja una reducción en el número de lesionados y víctimas fatales a causa de siniestros viales, es así, al evidenciar que el factor humano es quien más interviene en la generación de los siniestros viales, se debe fortalecer la educación vial y por ende se hace necesario garantizar iniciar la inclusión de prácticas de seguridad vial en los Jardines del Distrito y Escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, esto a través del Programa

¹¹ Respuesta Secretaría de Educación SDQS 2333992023

Innovadores en Seguridad Vial, así como garantizar la adopción y cumplimiento del PME, considerando que es una herramienta clave para la adopción y práctica de la seguridad vial a través de comportamientos asertivos en la vía, bajo el marco de la corresponsabilidad.

Lo anterior, considerando que, tal como lo establece el Decreto 164 del 2007, *“La formación en Seguridad Vial Escolar como Proyecto Pedagógico Transversal, se implementará en las instituciones educativas públicas y privadas, de educación formal y no formal del Distrito Capital y que ofrezcan cualquier nivel o modalidad del sistema educativo con el fin de contribuir a la formación de una amplia y sólida cultura del respeto por la vida, por la sana movilidad, el cuidado y protección de los niños y niñas”*

A su vez, el propósito del Programa Innovadores en Seguridad Vial es: *“generar espacios pedagógicos para desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, utilizando y creando herramientas tecnológicas en seguridad vial sobre normas de comportamiento en el tránsito y transporte, y de convivencia, que permitan a la comunidad educativa una movilidad libre y segura ejerciendo liderazgo sobre la conducción de automóviles, motocicletas y medios alternativos de transporte en la ciudad”*.

Ahora bien, el rol de la enseñanza en seguridad vial es vital, en los niños y niñas de los Jardines del Distrito, toda vez, que como lo refiere el Ministerio de Educación: *“está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los cinco primeros años”*.

Es así, que la educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos (MEN).

De tal modo, *“las extraordinarias capacidades de los niños y las niñas durante sus primeros cinco años de vida, es una riqueza de posibilidades que tienen los niños para descubrir y conquistar el mundo. Éstas suponen una nueva concepción del desarrollo, como un proceso de transformaciones y reorganizaciones permanentes que convierten a los niños en sujetos ejecutores, individuos activos en la construcción de su conocimiento, competentes para trenzar complejos entramados de relaciones afectivas y sociales, para expresar y comprender ideas, sentimientos y valores propios y de los otros”*¹²

Ahora bien, como lo refiere la UNICEF, en su informe *“La primera infancia importa para cada niño”*, las investigaciones científicas realizadas en los últimos 30 años nos han enseñado que el período más importante del desarrollo humano es el que comprende desde el nacimiento hasta los ocho años de edad, durante esos años, el desarrollo de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la competencia social y una buena salud física y mental forma una sólida base para el éxito incluso bien entrada la edad adulta. Aunque el aprendizaje tiene lugar durante toda la vida, en la primera infancia se produce con una rapidez que luego nunca se igualará¹³.

Así mismo refiere, que, el cerebro de un niño no nace tal y como es, sino que se va desarrollando, sobre todo en los primeros años de vida. Este proceso comienza antes del

¹² Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia- MEN.

¹³ La primera infancia importa para cada niño-UNICEF

nacimiento e implica una compleja interacción de las conexiones neuronales que van formándose a partir de la experiencia y el entorno. Estas conexiones se producen a gran velocidad en los primeros años de vida y no vuelven a repetirse de tal manera¹⁴

De igual modo, el desarrollo cerebral es una parte esencial del desarrollo en la primera infancia. Es el proceso mediante el cual el niño adquiere sus habilidades físicas, motrices, cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas básicas. Estas habilidades le permiten pensar, resolver problemas, comunicarse, expresar emociones y tejer relaciones. Sientan las bases de la vida adulta y preparan el camino para gozar de la salud, el aprendizaje y el bienestar¹⁵.

En el mismo sentido, de acuerdo con la *Dra. Jessica Alvarado de la Universidad Nacional de Estados Unidos de América*, el objetivo de esta etapa es el desarrollo integral de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas de un niño con el fin de construir una base sólida y amplia para el aprendizaje y el bienestar a lo largo de toda la vida¹⁶.

En consecuencia es vital, ampliar el Programa Innovadores en Seguridad Vial a jardines del Distrito, toda vez, que, el cerebro tiene la capacidad de aprender a lo largo de la vida, pero, es evidente que, ningún otro periodo es más propicio como lo son los primeros años de vida, en los cuales el niño aprende y adquiere muchos de los hábitos que tendrá durante toda su vida.

Así mismo, contemplando lo evidenciado en el Código de Infancia y Adolescencia y en la Política Educativa en el marco de una atención integral en la primera infancia, donde se refiere “el derecho a la atención integral de los niños menores de 5 años y busca garantizarles un desarrollo en el marco de sus derechos y sembrar las bases para que todos puedan ser cada vez más competentes, felices y gozar una mejor calidad de vida”.

Ahora bien, es importante incorporar la parte lúdica y cultural en el Programa Innovadores en Seguridad Vial, toda vez, que, *aprender jugando es la mejor manera de desarrollar el aprendizaje temprano en los niños, ya que de esta manera potencializan sus características natas como lo son la curiosidad, la observación, adaptabilidad e identificación¹⁷.*

Así mismo, la UNICEF, en su informe, “Aprendizaje a través del juego”, indica que, *el juego constituye una de las formas más importantes en las que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales. El desarrollo y el aprendizaje son de naturaleza compleja y holística; sin embargo, a través del juego pueden incentivarse todos los ámbitos del desarrollo, incluidas las competencias motoras, cognitivas, sociales y emocionales¹⁸.*

Es así, que, *el juego sienta las bases para el desarrollo de conocimientos y competencias sociales y emocionales clave. A través del juego, los niños aprenden a forjar vínculos con los demás, y a compartir, negociar y resolver conflictos, además de contribuir a su capacidad de autoafirmación. El juego también enseña a los niños aptitudes de liderazgo,*

¹⁴ Ídem Pág. 1

¹⁵ Ídem Pág. 3

¹⁶ Aprendizaje temprano y su importancia en el desarrollo infantil

¹⁷ Ídem Pág. 1

¹⁸ Aprendizaje a través del juego- UNICEF

además de a relacionarse en grupo. Ayudan a afrontar las cosas, a ser capaces de disfrutar y a utilizar nuestra capacidad imaginativa e innovadora. De hecho, las aptitudes esenciales que adquieren los niños a través del juego forman parte de lo que en el futuro serán los elementos constitutivos fundamentales de las complejas¹⁹.

Por otra parte, respecto a la Inclusión del Programa Innovadores en Seguridad Vial, en las Escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, cuyo objeto es *“fomentar la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, niñas y adolescentes en su formación integral²⁰”*, es vital, dado, que como se refirió anteriormente, en gran proporción un gran índice de los siniestros viales es generado a causa de las malas decisiones del factor humano.

De tal modo, a través de dicha inclusión se busca lograr romper el paradigma que las normas de seguridad vial son creadas para generar multas, cuando el verdadero objetivo es salvar vidas, logrando la generación de todos aquellos actos asertivos en la vía bajo el marco del autocontrol y autorregulación.

Dado, que, según el psicólogo Wilde, el índice de eventos en el tránsito, no dependen tanto de los factores objetivos de peligro, sino del nivel de riesgo aceptado por las personas.

De este modo, a través de la inclusión del Programa de Innovadores en Seguridad Vial, en las Escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, se busca la generación de ambientes viales seguros y protectores de la vida a partir de comportamientos individuales y colectivos responsables y solidarios; bajo el marco de la corresponsabilidad, la autorregulación y el autocontrol.

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS- SUSTENTO JURIDICO

3.1 Normatividad Internacional

ONU 2010	Se proclama el Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2011-2020): objetivo de estabilizar y después reducir las muertes por accidentes viales al 2020.
ONU 2020	Proclama el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial (2021-2030): objetivo: prevenir al menos el 50% de las muertes y lesiones en el tránsito para 2039.

3.2 Constitución Política

¹⁹ Ídem Pág. 10

²⁰ Ley 2025 del 2020.

Artículo 2.	Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Artículo 24.	Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

3.3 Normatividad Nacional

Decreto 463 de 1938	Establece que tanto las Universidades como todos los Colegios oficiales y privados, deberán impartir las reglas de regulación y tránsito a sus alumnos.
Ley 336 de 1996	Estatuto General del Transporte
Ley 769 del 2002	Código Nacional de Tránsito Terrestre ARTÍCULO 4o. PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Transporte deberá elaborar un plan nacional de seguridad vial para disminuir la accidentalidad en el país que sirva además como base para los planes departamentales, metropolitanos, distritales y municipales, de control de piratería e ilegalidad. ARTÍCULO 7o. CUMPLIMIENTO RÉGIMEN NORMATIVO. <Artículo modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022. Las autoridades de

	<p>tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.</p> <p>ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito.</p> <p>ARTÍCULO 56. OBLIGATORIEDAD DE ENSEÑANZA. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 2222 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Se establece como obligatoria, en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, la enseñanza en educación vial de manera sistemática, de conformidad con los objetivos y propósitos señalados en la presente ley, con énfasis especial en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al relacionarse en el espacio público, con especial atención de los ciclistas, a fin de que se promueva el desarrollo de las competencias necesarias en la educación vial, para el uso adecuado, responsable y seguro de la bicicleta y otros medios de movilidad.</p>
Directiva 13 de 2003 Ministerio de Educación Nacional	La educación en tránsito y seguridad vial tiene como propósito el desarrollo

	de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan a niños, niñas y jóvenes ejercer su derecho a la movilidad libre y segura, conocer y respetar las normas del tránsito, y respetar los derechos de los demás en los espacios públicos.
Ley 1383 de 2010	<p>Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.</p>
Ley 1503 del 2011	Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.
Ley 1562 del 2012	ARTÍCULO 13. Sanciones - no cumplimiento PESV.
Ley 1702 del 2013	se crea la Agencia Nacional De Seguridad Vial, cuyo objetivo es: La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tendrá como objeto la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país.
Ministerio de Salud 2013	Establece la guía para la elaboración de planes estratégicos para la promoción del consumo responsable de alcohol.
Decreto 2851 del 2013	Artículo 6°. Objetivos de los planes estratégicos de consumo responsable de alcohol. Los siguientes serán los

	<p>objetivos de los Planes Estratégicos a adoptar por parte de los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas:</p> <p>a) Ofrecer alternativas para los usuarios de los establecimientos de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas que no consumen bebidas alcohólicas y para quienes van a conducir, en el contexto de seguridad y educación vial;</p> <p>b) Promover el consumo responsable de alcohol entre los usuarios del establecimiento de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas con el fin de prevenir situaciones problemáticas que alteren el ambiente del lugar o que pongan en riesgo a los demás usuarios del establecimiento y al personal del mismo;</p> <p>c) Generar las condiciones dentro del establecimiento de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas para responder efectivamente a situaciones problemáticas derivadas del consumo inmoderado de alcohol.</p>
Resolución 2273 de 2014	Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 y se dictan otras disposiciones
Ley 1811 de 2016	Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito.
Ley 1843 de 2017	Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones.

Decreto- Ley 2106 de 2019	<p>Artículo 110. Diseño, implementación y verificación del plan estratégico de seguridad vial. El artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 quedará así:</p> <p>“Artículo 12. Diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>
Ley 2025 DE 2020	Por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país.
Ley 2050 del 2020	Disposiciones generales para la consolidación y difusión de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.
Decreto 1251 del 2021	"Por el cual se modifica el literal a del artículo 2.3.2.1 del Título 2 de la Parte 3 del Li-bro 2 y se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, único Reglamentario del Sector Transporte, en lo relacionado con los Planes Estratégicos de Seguridad Vial"
Ley 2251 del 2022	Establece disposiciones normativas que orienten la formulación, implementación y evaluación de la

	política pública de seguridad vial con el enfoque de sistema seguro.
Decreto 1430 del 2022	Aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial para la vigencia 2022-2031
Resolución 40595 del 2022	Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.

3.3 Normatividad Distrital

Decreto 164 de 2007	Por el cual se adopta la formación en seguridad vial escolar como proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá D.C
Decreto 185 del 2012	Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial. Siendo su naturaleza: “La Comisión Intersectorial de Seguridad Vial es una instancia que hace parte del Sistema de Coordinación de la Administración Distrital, encargada de articular y coordinar a las entidades y organismos responsables de la implementación y cumplimiento de las metas y/o programas contemplados en el Plan Distrital de Seguridad Vial para Bogotá, Distrito Capital y efectuar el seguimiento a la ejecución del mismo”
Decreto 594 de 2015	Se adopta el Plan de Movilidad Escolar, el cual estará orientado al adecuado desplazamiento de estudiantes en medios motorizados y no motorizados, con medidas de regulación o control del tránsito en vías adyacentes a instituciones educativas
Acuerdo 650 DE 2016	Por medio del cual se crea el programa “innovadores escolares en seguridad vial” en los planes de formación en seguridad vial escolar en el distrito capital” y se dictan otras disposiciones.

Decreto 813 de 2017	Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 2017-2026. (derogado por el Decreto 494 de 2023).
Acuerdo 708 de 2018	Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de la bicicleta en el distrito capital y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 761 del 2020	<p>se adopta el “el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, y en su artículo 12 metas trazadoras - Propósito 4: Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, meta 63:</p> <p>“A 2024 Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía”.</p>
Acuerdo 836 de 2022	Por el cual se dictan los principios generales, y lineamientos de la política pública del peatón “En Bogotá, primero el peatón” y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 834 de 2022	Por medio del cual se retoman elementos de la iniciativa de “estrellas negras” para una campaña de seguridad vial, cultura ciudadana y conmemoración de víctimas de siniestros.
Decreto 494 de 2023	Por medio del cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial 2023-2032 y se dictan otras disposiciones. La meta del PDSV 2023-2032 es reducir en un 50% el número de víctimas fallecidas (indicador a 30 días) en siniestros viales para el año 2032, tomando como base la cifra definitiva del año 2022.

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO

El Concejo de Bogotá, tiene la competencia para tramitar el presente proyecto de acuerdo, considerando lo estipulado en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, el cual establece que a la Corporación le corresponde “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito” (Decreto 1421 de 1993).

5. BIBLIOGRAFIA

Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Seguridad Vial infantil en la agenda de salud pública nacional. Febrero del 2023. <https://ansv.gov.co/es/prensa-comunicados/9407>.

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Guía para la elaboración del Plan de Movilidad Escolar (PME). https://ansv.gov.co/contenidos/escuela/fase1/on/ANSV_PT018_PDF01/ANSV_PT018_PD F01.pdf.

Alcaldía Mayor de Bogotá (2007, 26 de abril). Decreto 164 del 2007. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23928#:~:text=%C2%ABP or%20el%20cual%20se%20adopta,y%20privadas%20de%20Bogot%C3%A1%20D.C.%2 0%C2%BB>.

Alcaldía Mayor de Bogotá (2015, 30 de Diciembre). Decreto 594 del 2015. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64245>

Asamblea Nacional Constituyente (1991. 04 de Julio). Constitución Política de Colombia 1991.

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#:~:text=Todas%20la s%20personas%20nacen%20libres,religi%C3%B3n%2C%20opini%C3%B3n%20pol%C3 %ADtica%20o%20filos%C3%B3fica>.

Concejo de Bogotá (2018, 15 de junio) Acuerdo 708 de 2018 Concejo de Bogotá. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78754>

Concejo de Bogotá (2018, 15 de junio) Acuerdo 761 de 2020 Concejo de Bogotá. <https://intranet.secretariajuridica.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/acuerdo-761-2020>

Concejo de Bogotá (2022, 10 de marzo) Acuerdo 836 de 2022 Concejo de Bogotá. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=121658&dt=S>

Concejo de Bogotá (2022, 10 de marzo) Acuerdo 834 de 2022 Concejo de Bogotá. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=121642&dt=S>

Congreso de la República de Colombia (2002, 6 de Julio). Ley 769 del 2002. Código Nacional de Tránsito. https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_col_ley_769_2002.pdf

Congreso de la República de Colombia (2013, 27 de Diciembre). Ley 1702 del 2013. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56286#:~:text=Coordina%20los%20organismos%20y%20entidades,reducir%20los%20accidentes%20de %20tr%C3%A1nsito>.

Congreso de la República de Colombia (2011, 29 de Diciembre). Ley 1503 del 2011. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45453>.

Ministerio De Educación Nacional. Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia. https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-178053_archivo_PDF_libro_desarrolloinfantil.pdf.

Ministerio de Transporte (2014). Plan Nacional De Seguridad Vial 2011-2021. <https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/3239/plan-nacional-de-seguridad-vial/>

Ministerio de Transporte (2013). Plan Nacional De Seguridad Vial 2013-2021. https://culturavial.files.wordpress.com/2014/01/consulta_plan_nacional_de_seguridad_vial_colombia_2013-2021.pdf

Observatorio de criminología vial. (2013). Teoría de compensación del riesgo de Wilde. <http://www.criminologiavial.com/2013/09/teoria-de-compensacion-del-riesgo-de.html>

Secretaría Distrital de Movilidad (2014). Plan Distrital de Seguridad Vial 2011-2021

Secretaría Distrital de Movilidad (2017). Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2021. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/23-09-2021/plan_distrital_de_seguridad_vial_2017-2026.pdf

Secretaría Distrital de Movilidad. Respuesta a radicado SDQS 2333652023.

Secretaría Distrital de Educación. Respuesta a radicado SDQS 2333652023.

UNICEF. La primera infancia importa para cada niño. https://www.unicef.org/peru/sites/unicef.org/peru/files/2019-01/La_primera_infancia_importa_para_cada_nino_UNICEF.pdf

UNICEF. Aprendizaje a través del juego. <https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-01/UNICEF-Lego-Foundation-Aprendizaje-a-traves-del-juego.pdf>

6. IMPACTO FISCAL

Considerando lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2003, la ejecución del presente proyecto no implica costos presupuestales que afectan las finanzas del Distrito en el marco fiscal de mediano plazo, dado, que no se asignan apropiaciones presupuestales diferentes a las inherentes al desarrollo de las funciones ya existentes de las entidades enunciadas.

Cordialmente,

ANDRÉS GARCÍA VARGAS
Concejal de Bogotá

7. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 397 DE 2025**PRIMER DEBATE****POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 650 DEL 2016 Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En uso de las facultades legales que le confiere el numeral 1 del artículo 12 del Decreto
Ley 1421 de 1993,

ACUERDA

Artículo 1. El artículo 1 del Acuerdo 650 del 2016, quedará así:

ARTÍCULO 1. El programa “Innovadores Escolares en Seguridad Vial” hace parte de los planes de formación en seguridad vial escolar de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Educación. El programa complementará la educación sobre normas, comportamientos y hábitos seguros en la vía y sobre tránsito y transporte dirigida a la comunidad educativa en la ciudad incluyendo los Jardines del Distrito y las Escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, a través de las articulaciones a que haya lugar y la adhesión de la Secretaría de Integración Social, fomentando la cultura ciudadana que promueva la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía a partir de comportamientos individuales y colectivos responsables y solidarios; bajo el marco de la corresponsabilidad, la autorregulación y el autocontrol, encaminados a la generación de ambientes viales seguros y protectores de la vida.

Artículo 2. Adiciónese un párrafo al artículo 1, de la siguiente manera:

PARÁGRAFO: Se generarán y ejecutarán estrategias para incentivar la ejecución del programa “Innovadores Escolares en Seguridad Vial”, en Jardines privados, bajo el marco de la corresponsabilidad en pro del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, así como derechos de protección en los niños y niñas.

Artículo 3. El artículo 2 del Acuerdo 650 del 2016, quedará así:

ARTÍCULO 2. El programa “Innovadores Escolares en Seguridad Vial” tiene como propósito generar espacios pedagógicos para desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas, que promueva la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía, utilizando y creando herramientas tecnológicas, lúdicas y culturales en seguridad vial, sobre normas de comportamiento en el tránsito y transporte, y de convivencia, que permitan a la comunidad educativa una movilidad libre y segura, ejerciendo liderazgo seguro y corresponsable sobre la conducción de automóviles, motocicletas y medios alternativos de transporte en la ciudad, así como actos colectivos responsables en las personas que actúan como peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y de este modo,

lograr una mejor interacción entre los mismos, que garanticen la protección de la vida en la vía.

Artículo 4. Adiciónese un párrafo al artículo 2, de la siguiente manera:

PARÁGRAFO: La administración presentará al Concejo de Bogotá D.C. un informe anual, que dé cuenta del cumplimiento del Programa Innovadores en Seguridad Vial, así como el cumplimiento del Decreto 594 del 2015, especialmente a lo referente a: parques infantiles de tránsito; audiolibros (para personas con discapacidad sensorial (sordos, ciegos, sordo-ciegos) y cognitiva, referentes a realizar prácticas concernientes a comportamientos seguros como actor vial); maletas de seguridad vial, módulos para impulsar gradualmente el uso de la bicicleta en condiciones de seguridad vial y los Planes de Movilidad Escolar implementados. El mismo se hará público y será de fácil acceso para toda la Ciudadanía.

Artículo 5. El artículo 3 del Acuerdo 650 del 2016, quedará así:

ARTÍCULO 3. La Secretaría Distrital de Educación, La Secretaria Distrital de Movilidad, La Secretaría Distrital de Integración Social, El Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD y la Secretaría de Cultura, promoverán y ejecutarán para dar cumplimiento al programa “Innovadores Escolares en Seguridad Vial”; espacios lúdicos, pedagógicos y culturales de interacción denominados “Laboratorios de Seguridad Vial” en donde se forme a las y los estudiantes de los Colegios Públicos y Privados y de los Jardines del Distrito, así como a los padres y madres de familia y cuidadores, acerca de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía, y de convivencia, por medio de herramientas tecnológicas, recreativas y culturales, de tal manera que se contribuya a reconocer, desincentivar y corregir los malos hábitos ciudadanos, a través del análisis de casos reales.

Artículo 6. El párrafo del artículo 4 del Acuerdo 650 del 2016, quedará así:

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de este artículo, se generarán y ejecutarán estrategias que permitan verificar y garantizar la implementación y cumplimiento del Decreto 594 de 2015 y demás normas vigentes, con lo que se garantizará la participación activa e incidente de todas las comunidades educativas; docentes, familias y estudiantes.

Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 398 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN USO DE BUEN RETIRO COMO REFERENTES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ”*****I. OBJETO DEL PROYECTO.**

El objeto del presente proyecto de acuerdo es priorizar la participación de de miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro como *Referentes de Seguridad* en las localidades de Bogotá. Este proyecto de acuerdo se alinea con las necesidades de fortalecimiento de la seguridad en Bogotá y busca aprovechar el potencial de los ex miembros de la fuerza pública para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad ciudadana es un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra ciudad. En este sentido, la figura del *Referente de Seguridad* en cada localidad se convierte en un eje central para la articulación de estrategias que promuevan la convivencia pacífica y la prevención del delito. Por ello, se propone un proyecto de acuerdo que priorice la participación de miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá.

Lo anterior teniendo en cuenta que la descentralización de la seguridad permite una mayor cercanía y comprensión de las dinámicas locales, facilitando respuestas más efectivas y adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad. Así también, los miembros de la fuerza pública, en uno de buen retiro, poseen conocimientos y experiencias valiosas que, al ser aplicados en un contexto local, pueden contribuir significativamente a la seguridad ciudadana.

Adicionalmente, considerando que los retirados o veteranos de las fuerza pública, al integrarse como referentes de seguridad, aportan su experiencia, disciplina y liderazgo, fortaleciendo así las capacidades operativas y estratégicas de la seguridad local. Su transición a roles civiles representa una oportunidad para capitalizar sus habilidades en beneficio de la comunidad (Pita & Suárez, 2017; Brown & Densley, 2019).

La confianza ciudadana es esencial para una colaboración efectiva en la prevención del delito. Los miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro, al asumir roles de liderazgo en seguridad, pueden mejorar la percepción de efectividad y transparencia, elementos clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad (Buil-Gil, Barberet & Aparicio, 2018; PNUD, 2013).

Contexto

La seguridad en Bogotá se ha convertido en un tema de discusión crítico, reflejando una crisis que se manifiesta en el aumento de delitos y la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Las cifras actualizadas del año 2023 y 2024 muestran un panorama desafiante que requiere una intervención experta y una estrategia integral que aborde las problemáticas específicas de cada localidad.

De esta manera, el panorama de la seguridad en el último año demostró un impacto significativo tanto en las cifras de delitos de alto impacto como en la percepción ciudadana. En el primer aspecto que refleja la situación de la seguridad en la ciudad, se puede evidenciar que durante el año 2023 hubo aumento en casos de al menos 6 delitos de alto impacto, dentro de los que se encuentran extorsión (28,3%), homicidios (6,6%), hurto a personas (9,6%), hurto a residencias (2,2%), hurto a automotores (8,9%) y hurto a

motocicletas (4,1%). De esto, en 2024 se encontró que de dichos delitos el comportamiento en las localidades de Bogotá fue el siguiente:

Tabla 1. Delitos de alto impacto por localidad durante 2024.

Localidad	Extorsión	Homicidios	Hurto personas	Hurto residencias	Hurto automotores	Hurto motocicletas
Usaquén	117	47	8.573	621	118	143
Chapinero	105	18	10.924	292	68	81
Santa Fe	223	90	9.484	148	52	72
San Cristóbal	50	53	3.216	235	131	250
Usme	63	88	2.374	241	139	219
Tunjuelito	18	27	2.301	88	61	68
Bosa	113	118	5.297	316	191	484
Kennedy	290	174	11.874	650	983	927
Fontibón	147	37	8.02	313	138	169
Engativá	214	65	12.273	628	408	616
Suba	264	75	12.754	808	253	476
Barrios Unidos	85	21	5.102	219	131	134
Teusaquillo	96	11	7.502	304	136	142
Los Mártires	337	46	11.621	179	130	147
Antonio Nariño	29	14	2.225	74	128	137
Puente Aranda	119	25	5.569	257	436	249
Candelaria	31	4	1.787	39	14	8
Rafael Uribe Uribe	67	54	3.336	279	254	308

Ciudad Bolívar	129	236	4.696	319	295	604
Sumapaz		1				
Sin Localización			897	26	5	7
Total	2.497	1.204	129.825	6.036	4.071	5.241

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en el Tablero de “Análisis de datos Siedco” de la SDSCJ²¹. *(Fecha de consulta: 21 de enero de 2025).*

En concordancia, en el año 2024, la Defensoría del Pueblo presentó la Alerta 4 por el aumento de la inseguridad en la ciudad relacionado con las “disputas por el control social y territorial entre estructuras locales de delincuencia, los cuales pueden tener acuerdos con grupos armados ilegales”²², presentando que la violencia se incrementó en la ciudad por lo menos en 9 localidades entre las que se encuentran, Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Por otro lado, en cuanto a la impresión que tienen los ciudadanos de la seguridad, según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Bogotá Cómo Vamos²³, en el año 2023 empeoró la sensación de inseguridad tanto a nivel ciudad como a nivel barrial respecto a las 2 encuestas anteriores. En este sentido, en el año en cuestión, con respecto a la seguridad en general en Bogotá, se contó con un aumento del 15,1 puntos porcentuales de ciudadanos que se sienten “inseguros” en la ciudad, llegando a representar el 52,4% de los encuestados. Dicha percepción, según la referida medición de 2024²⁴, tuvo una muy pequeña reducción, apenas 4 puntos, estableciéndose en un 48%. Esto quiere decir, que

²¹ <https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal>

²² <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91902>

²³ https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2023/11/Encuesta-Percepcion-Ciudadana-2023_c.pdf

²⁴ <https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2024/12/Encuesta-de-Percepcion-Ciudadana-2024-presentacion.pdf>

de 10 personas en Bogotá, 5 se sienten inseguras. En términos porcentuales, no hubo mayor cambio.

Por otro lado, como se puede evidenciar en esta misma encuesta, con respecto al nivel más cercano a la ciudadanía, como lo es su barrio, históricamente los bogotanos se han sentido más seguros en este espacio, no obstante, a la pregunta “¿Qué tan seguro se siente en su barrio?” el 33,4% de los habitantes respondieron que se sentían inseguros en el 2023, esto representa un aumento de 8,8% con respecto al año 2022. Ahora bien, de acuerdo con la misma encuesta pero de 2024²⁵, la percepción de inseguridad de los bogotanos en sus barrios se mantuvo estable, presentó una reducción de un punto, ubicándose en 32%

Adicionalmente, se evidencia que dentro de los problemas que más han afectado este incremento de percepción de inseguridad en los barrios son los atracos callejeros, la drogadicción y el tráfico de drogas.



* Tomado de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Bogotá Cómo Vamos

²⁵ <https://bogotacomovamos.org/wp-content/uploads/2024/12/Encuesta-de-Percepcion-Ciudadana-2024-presentacion.pdf>

Por lo anterior, para el presente Proyecto de Acuerdo, se realizó un corto estado del arte en el que se priorizaron las categorías de investigación de confianza en los miembros retirados de la fuerza pública y el rol de estos en la seguridad local presentado a continuación.

Rol de los miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro y la seguridad local

El papel de los retirados o veteranos en la seguridad local se refiere al aporte que pueden hacer estos miembros una vez se incorporan a las acciones en sus localidades y barrios. Estos, pueden aportar su experiencia, su formación, su disciplina, su liderazgo y su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana.

El IACP (2018)²⁶ destaca las ventajas y los beneficios de contratar a veteranos militares para la policía comunitaria, y proporciona ejemplos de buenas prácticas y recursos para facilitar su transición y desarrollo profesional. El informe señala que los veteranos pueden contribuir a la seguridad y la convivencia ciudadana con su experiencia, su formación, su disciplina, su liderazgo y su compromiso, y que se requiere una mayor colaboración entre las agencias policiales y las organizaciones de veteranos para apoyar su inserción y bienestar.

Confianza en la policía

La confianza en la policía es el grado de credibilidad, legitimidad y satisfacción que la ciudadanía tiene hacia la institución policial y sus miembros. Esta confianza se basa en la percepción que la ciudadanía tiene sobre la capacidad, la honestidad, la imparcialidad, la responsabilidad y la sensibilidad de la Policía para prevenir y combatir el delito, proteger y respetar los derechos humanos, y atender y resolver los problemas de convivencia ciudadana.

²⁶ International Association of Chiefs of Police (IACP). (2018). Veterans as Assets in Community Policing. IACP. <https://www.theiacp.org/sites/default/files/2018-08/Veterans%20as%20Assets%20in%20Community%20Policing.pdf>

La confianza en la Policía es un factor clave para la seguridad y la convivencia ciudadana, ya que influye en el nivel de cooperación, denuncia, obediencia y apoyo que la ciudadanía brinda a la policía, así como en el nivel de respeto, confianza y compromiso que la policía brinda a la ciudadanía.

De esta manera, la confianza en la policía se ve afectada negativamente por la victimización, la exposición a los medios de comunicación, la ideología política, el género y el nivel socioeconómico, y positivamente por la calidad de los servicios policiales y el grado de rendición de cuentas (Bergnam y Flom, 2012)²⁷.

Así, la confianza en la policía se ve afectada por la percepción de la eficacia, la legitimidad, la proximidad, la identificación y la reciprocidad de la policía, así como por la experiencia previa de victimización y contacto con la policía (Ávila Guerrero, Vera Jiménez, Martínez Ferrer y Bahena Rivera, 2016)²⁸.

En esta vía, según Toloa et al (2022) citando a Martínez et al. (2018) y Nalla et al. (2018):

"cuando los ciudadanos se sienten seguros en sus barrios, también se sienten satisfechos con la labor de la policía y, por ende, hay un potencial para fortalecer esa relación de confianza; por el contrario, la población no confía en la policía al considerar que no tiene un buen desempeño en el desarrollo de sus funciones".

López Portillo Vargas (2015)²⁹ reflexiona sobre la reconciliación entre la policía y la sociedad, y propone que la ciudadanía se involucre y combata la indiferencia en el tema. El orador, que es un

²⁷ Bergman, M., & Flom, H. (2012). Determinantes de la confianza en la policía: una comparación entre Argentina y México. *Perfiles latinoamericanos*, 20(40), 97-122.

²⁸ Ávila Guerrero, M. E., Vera Jiménez, J. A., Martínez Ferrer, B., & Bahena Rivera, A. (2016). Un análisis psicosocial de la confianza en los grupos policiales: el caso de Cuernavaca (México). *Perfiles latinoamericanos*, 24(47), 151-174.

²⁹ López Portillo Vargas, E. (2015). Entré a la policía y me di de baja en la sociedad [Video]. TEDx.

<https://www.youtube.com/watch?v=7QY8Z2eXF9w>

ex policía, comparte su experiencia personal y profesional, y plantea que la confianza en la policía se puede construir a partir de la comunicación, la educación, la participación y la transparencia.

Se espera que con este proyecto haya un impacto positivo en la seguridad local, pues como se dijo anteriormente, al encontrar perfiles en los que confluyen tanto la experiencia en la fuerza pública, como el rol en la vida civil, se pueden hallar puntos de encuentro entre los miembros de la Policía que prestan servicios locales, la administración local y la ciudadanía, generando puntos de diálogo y confianza.

III. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

Proyecto de Acuerdo 087 de 2024

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA INCENTIVAR LA INTEGRACIÓN DE LOS VETERANOS DE LA FUERZA PÚBLICA EN LOS FRENTE DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ

Autor: H.C. Diana Diago Guaquetá

Estado: Archivado

IV. MARCO JURÍDICO

INTERNACIONAL

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.

1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal (...).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 9.

1.Todo individuo tiene derecho a la libertad y la seguridad personales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuenciaas y representativas que respondan a las necesidades.

NACIONAL

Constitución Política de Colombia

Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.

Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de

Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

Ley 1861 de 2017

Por la cual se reglamenta el Servicio De Reclutamiento, Control De Reservas y la movilización, señala en el artículo 57 que “son reservas de la Fuerza Pública, todos los hombres y mujeres reservistas de primera clase con orientación, instrucción y formación militar o policial; o de segunda clase que voluntariamente quieran ingresar, organizados dentro de una estructura estratégica, para satisfacer las necesidades misionales de la Fuerza Pública, con el propósito de atender las exigencias en la defensa y seguridad nacional, dando cumplimiento a los planes de movilización.”

Igualmente establece que, “hacen parte de esta organización de reservas los oficiales y suboficiales de la reserva activa, soldados profesionales en retiro temporal con pase a la reserva y quienes son reservistas de primera clase, modalidades que se encuentran desarrolladas en la presente ley y en los decretos de carrera de oficiales, suboficiales, soldados profesionales del Ejército y sus equivalentes en las demás Fuerzas y la Policía Nacional y los ciudadanos colombianos que reúnan los requisitos para su ingreso”.

Ley 1979 de 2019

Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones.

Dentro de su contenido legal, el **Artículo 1** señala que esta población ha “realizado sacrificios que van desde el enfrentamiento constante a peligros, daños físicos irreparables, hasta numerosas muertes, las cuales durante años han sido enfrentadas por las familias de estos héroes, lo que también los convierte en un actor relevante en el proceso de defensa del país”.

El **Artículo 2** fija como ámbito de aplicación al veterano, a quienes define como “todos los miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reservistas de honor. También son veteranos todos aquellos que hayan participado en nombre de la República de Colombia en conflictos internacionales. Así como, aquellos miembros de la Fuerza Pública que sean víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por hechos ocurridos en servicio activo y en razón en ocasión del mismo”.

El anterior literal de este artículo fue declarado condicionalmente exequible por la **Sentencia C-116 de 2021**, en virtud del cual la Corte Constitucional advierte que “se excluyen de la definición de veteranos y de los beneficios correspondientes a los retirados que la fuerza pública cuya responsabilidad haya sido declarada en decisión que constituya cosa juzgada por autoridad administrativa o judicial en relación con graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.

De igual manera, el **Artículo 33** de la misma Ley establece que la reserva activa de la Policía Nacional “está conformada por el personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Patrulleros y Agentes retirados del servicio activo de la Policía Nacional y los Auxiliares de la Policía, estos últimos cuando hayan cumplido su servicio militar”.

Decreto 1345 de 2020

Por el cual se reglamenta la acreditación, se rinden honores en actos, ceremonias y eventos públicos, se reconocen beneficios en servicios financieros de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en la liquidación en la pensión de invalidez y se dictan otras disposiciones.

"Por la cuál se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."

Decreto Nacional 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Acuerdo Distrital 257 de 2006

Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.

Acuerdo Distrital 637 de 2016

Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

Decreto Distrital 807 de 2019

Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Resolución 0673 de 2020

Por la cual se adopta el Plan Estratégico del Sector Administrativo de Gobierno.

Resolución 0673 de 2020

“En el 2024 Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad Distrital y Local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales, por la relación de la Administración Distrital con las

corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital"

"Secretaría Distrital de Gobierno tiene por objeto "orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles".

Decreto Distrital 411 de 2016

Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

"ARTÍCULO 5°. ALCALDÍAS LOCALES. Corresponde a las Alcaldías Locales el ejercicio las siguientes (sic) funciones:

(...) b) Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública local en el marco de las orientaciones distritales en la materia.(...)"

Acuerdo Distrital 740 de 2019

Alcaldía Local es una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, responsable de las competencias asignadas a los Alcaldes Locales, de conformidad en lo establecido en el numeral 6, del artículo 5 que especifica: "6. Promover la seguridad y convivencia ciudadana".

DECRETO 079 DE 2018

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 657 de 2011, en lo atinente con la reglamentación del Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 321 de 2008

Por el cual se establecen las Juntas Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se dictan otras disposiciones.

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la ley 819 de 2003, la implementación de la presente iniciativa no genera impacto fiscal que afecte las finanzas del distrito en el mediano plazo, por lo que no genera erogaciones presupuestales adicionales a las ya establecidas.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ**DECRETO 1421 DE 1993**

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

ARTÍCULO 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Cordialmente,

ANDRÉS BARRIOS BERNAL

Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 398 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN USO DE BUEN RETIRO COMO REFERENTES DE SEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ”

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en los numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en concordancia con los artículos 25 y 313 de la Constitución Política de Colombia,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. El objeto de este Acuerdo Distrital es priorizar la participación de miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá, en concordancia con los principios de eficacia, eficiencia y equidad en la gestión de la seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 2°. La Secretaría Distrital de Gobierno priorizará la identificación y selección de miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro que cumplan con los requisitos de idoneidad, experiencia y compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, para ejercer como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá.

ARTÍCULO 3°. La selección de los miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá se llevará a cabo mediante un proceso que cumpla con los principios de igualdad, equidad, participación y transparencia, en el cual se evaluarán criterios objetivos como la experiencia y la formación, garantizando la idoneidad del personal seleccionado.

ARTÍCULO 4°. La Secretaría Distrital de Gobierno en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia diseñarán e implementarán un programa de capacitación integral para los miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro seleccionados como referentes de seguridad en las localidades de Bogotá.

ARTÍCULO 5°. Los miembros de la Fuerza Pública en uso de buen retiro seleccionados como referentes de seguridad trabajarán en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y demás Autoridades pertinentes con el fin de mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en cada una de las localidades de Bogotá.

ARTÍCULO 6°. El presente Acuerdo Distrital rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 399 DE 2025

PRIMER DEBATE

" POR MEDIO DEL CUAL SE PRETENDE LA REGULACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS DE DROGAS"

1. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto de acuerdo pretende la promoción de entornos seguros de drogas en el espacio público, específicamente en los parques y entornos escolares. Lo anterior obedece a que estos espacios son utilizados normalmente por menores de edad los cuales se ven expuestos a sustancias que pueden afectar su normal desarrollo.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Es importante señalar que colegas, como la H.C Carolina Arbeláez y el H.C Diego Molano, en periodos pasados, presentaron proyectos de acuerdo cuyo objeto buscaba, en primera instancia que la administración distrital realizara delimitaciones de espacio público como los parques distritales, zonas aledañas a los colegios, espacios culturales y deportivos y en segundo lugar establecer señalizaciones en espacios o zonas libres de drogas. El insumo propuesto por los 'entonces concejales, ha sido utilizado en este documento con la intención de robustecer nuestra propuesta.

Dejando atrás esta salvedad inicial, es prioridad para este órgano colegiado, la promoción de entornos seguros de drogas, con el fin de garantizar a los menores su completo desarrollo y el disfrute de un espacio seguro, estos espacios serán delimitados y en ellos NO debe existir presencia de sustancias psicoactivas, cabe mencionar que la presente iniciativa en ningún caso busca cercenar o vulnerar los derechos de los demás ciudadanos frente al libre desarrollo de su personalidad, el principal motivo es cumplir con el mandato constitucional en el cual todas las políticas públicas y los organismos estatales están en la obligación de proteger los derechos de los menores, por encima de cualquier otro.

La legislación existente en esta materia es abundante, en ella no solo encontramos normas constitucionales como la establecida en el artículo 44 de la carta política de nuestro país, donde se estableció que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, o la ley 1098 de 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, el cual busca establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de dicha población, garantizar, también, el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Sino, también, leyes que han adoptado tratados internacionales, como sucede con la “Ley 12 de 1991, mediante la cual se aprueba la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”³⁰. Sin embargo, a pesar de esta basta legislación y correspondiente desarrollo jurisprudencial, la situación actual que viven estos frente a la problemática de drogas es altamente preocupante.

Con el transcurso del tiempo, se ha podido evidenciar que el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad va en aumento, esto es una problemática que está enlazada con delitos mayores tales como el microtráfico, el hurto, la prostitución, entre otros, es por ello que nace la necesidad de propender por entornos seguros de drogas, especialmente los lugares donde concurren menores con mayor frecuencia para el desarrollo de sus actividades recreativas, deportivas y académicas.

Genera gran preocupación que, el inicio de consumo de drogas se presenta en población joven, tal y como lo estableció el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas Colombia 2019³¹, donde se evidenció que la edad promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas ilegales es la siguiente:

³⁰ Defensoría del Pueblo. Selección de la normatividad sobre la niñez y la adolescencia en Colombia 2020. <https://www.defensoria.gov.co/o/ninos-y-ninas-theme/html/Normatividad%20ninez%20-%20Digital.pdf>

³¹ ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS COLOMBIA 2019 <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Consumo/Estudios/estudio%20Nacional%20de%20consumo%202019v2.pdf?csf=1&e=iV5lh3>

Tabla N° 44: Edad de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita#
según sexo.

Variable	Promedio	Moda	Mediana	Percentil 25	Percentil 25
Sexo					
Hombres	18,82	18	18	15	20
Mujeres	20,73	18	18	16	22
Estrato socioeconómico					
1	18,67	18	17	15	20
2	19,22	18	18	15	20
3	19,61	18	18	16	20
4-5-6	20,44	18	18	17	21
Total	19,42	18	18	15	20

Considera la edad de inicio de las siguientes sustancias: Marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, metanfetamina, inhalables, dick, Popper, metadona, analgésicos opiode, LSD, otros alucinógenos, ketamina, GHB y 2CB

Lo que quiere decir que cada vez los jóvenes se encuentran más vulnerables ante el inicio del consumo de Drogas, es por ello que se hace sumamente necesario y de gran importancia la creación y el mantenimiento de entornos libres de este tipo de sustancias, con el fin de proteger a los menores de caer en estos vicios que solo generan para ellos y sus familias un deterioro en la calidad de vida.

Por otro lado, es importante señalar que el consumo temprano de Drogas como la marihuana, cocaína y basuco genera dependencia en los consumidores tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 47: Porcentaje y número de personas con abuso o dependencia de cualquier sustancia ilícita¹, e intervalos de 95% de confianza, según edad.

Grupos de edad	% respecto consumidores último año	% respecto total de población	Intervalo de confianza (%)	Número de personas con abuso o dependencia
12-17	58,04	1,42	0,86 - 1,98	43.451
18-24	50,39	3,67	3,03 - 4,32	137.436
25-34	44,64	2,07	1,68 - 2,46	108.300
35-44	37,34	0,73	0,52 - 0,94	32.690
45-65	43,78	0,41	0,26 - 0,55	29.399
Total	47,16	1,48	1,31 - 1,65	351.276

¹incluye las siguientes sustancias: marihuana, cocaína y basuco.

Acá se puede observar que el rango de edad en los cuales existen más números de personas con abuso o dependencia de sustancias psicoactivas es entre los 18 y 24 años, lo que tiene relación también con el porcentaje de consumidores en el último año que demuestra que el inicio de consumo se está dando principalmente en menores de 12 a 17 años, lo cual es preocupante porque se presenta en la etapa escolar, marcando así una alarma y punto de partida para que como organización desde nuestras facultades, generemos iniciativas que velen por la prevención del consumo de Drogas con el fin de salvaguardar los Derechos de los niños, niñas y jóvenes, para que así, no se genere dependencia desde tan temprana edad como ha sido evidenciado. Es preocupante los resultados del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022 ³² donde expresa que “la marihuana es la sustancia ilícita que los escolares manifiestan que pueden conseguir más fácilmente (20,5%) seguida del Popper (12,0%), la cocaína (7,5%), el basuco (7,3%), éxtasis (5,1%) y Dick, Ladys, Fragancia (4,9%).” Lo que nos muestra desde una perspectiva más amplia y desde la base del estudio, la cual son los menores, que el acceso a Drogas en espacios donde ellos permanecen normalmente es

³² Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022
<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Estudio%20nacional%20escolares.pdf>

amplio y que no está siendo controlado por ninguna autoridad el consumo, porte y distribución de estas.

Teniendo en cuenta el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactiva de Bogotá D.C del año 2022³³ se puede evidenciar que “Respecto al uso problemático —abusivo o dependiente— de cualquier sustancia ilícita, cerca de 161 mil personas estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia para disminuir o dejar el consumo de drogas, lo que representa el 36.30% de los consumidores en el último año y el 2.49% de la población de 12 a 65 años.” Esto evidencia la gran problemática de consumo de Drogas por parte de menores de edad en la capital y deja claro que las autoridades Distritales han hecho caso omiso a esta problemática.

Es importante ver el inicio de consumo de sustancias psicoactivas y cuál es la droga que genera apertura para la adicción o abuso de las mismas, es así que el Boletín 11, Es la marihuana una puerta de entrada a otras drogas, del observatorio chileno de Drogas³⁴, después de un arduo estudio, concluye que “Se encontró evidencia que apoya la hipótesis de la marihuana como puerta de entrada a drogas más “duras” relacionando esto con el Estudio de Sustancias Psicoactivas de Bogotá, se confirma que esta relación entre el consumo y la sustancia genera mayor riesgo cuando el inicio del mismo se da en edades tempranas, ahora, como se puede evidenciar en la siguiente tabla (Tabla 106), el acceso a la marihuana es fácil para niños, niñas y jóvenes, lo que motiva este Proyecto de Acuerdo, buscando la protección de los menores y su normal desarrollo, generando entornos seguros

³³ Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactiva de Bogotá D.C del año 2022

https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/ESTUDIO_DE_CONSUMO_DE_SUSTANCIAS_PSICOACTIVAS_BOGOTA_2022.pdf

³⁴ Boletín 11, Es la marihuana una puerta de entrada a otras drogas, del observatorio chileno de Drogas del año 2015. <http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/boletines/Boletin%2011%20Es%20la%20marihuana%20una%20puerta%20de%20entrada%20a%20otras%20drogas.pdf>

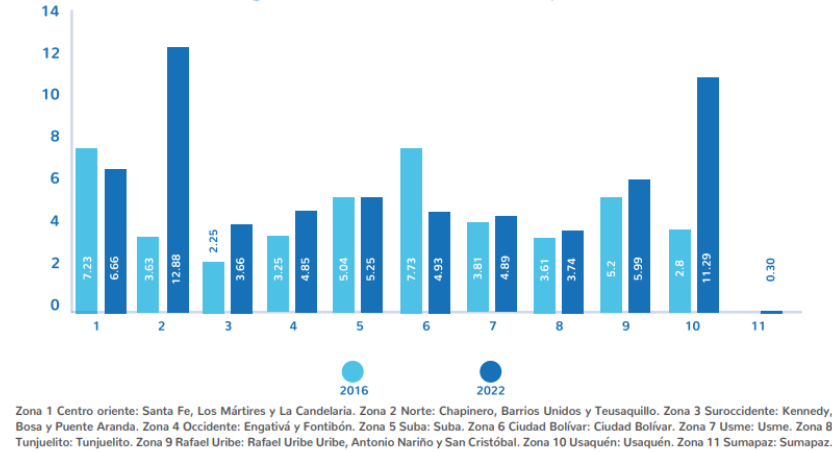
en los espacios donde ellos se encuentran regularmente, con el fin de salvaguardar y evitar el contacto de los niños con sustancias psicoactivas.

Tabla 106 Porcentaje de personas que perciben que es fácil conseguir marihuana y porcentaje que han recibido oferta de marihuana, según grupos de edad (%)

Grupo de edad	Fácil de conseguir	Le ofrecieron últimos 30 días	Le ofrecieron últimos 12 meses
12 a 17 años	30.01	15.75	10.95
18 - 24 años	45.34	18.09	19.48
25 - 34 años	42.51	9.41	9.62
35 - 44 años	36.05	4.45	4.91
45 - 65 años	30.00	1.86	1.55
Total	35.72	6.93	6.84

Ahora bien, en la gráfica 42 se puede evidenciar que la prevalencia del consumo de

Gráfica 42 Prevalencia de consumo del último año de marihuana según zona en los estudios 2016 y 2022 (%)



marihuana en el año 2022 tuvo un aumento significativo y que el mismo se presenta en mayor proporción en las zonas del norte, dejando en evidencia que las autoridades NO han generado medidas efectivas ni zonales, ni Distritales para acabar con esta problemática de Salud pública.

Según el informe Mundial Sobre las Drogas, realizado por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito³⁵, los puntos especiales de interés ofrecen un marco en torno a las principales conclusiones e implicaciones políticas extraídas del análisis de las últimas tendencias y estimaciones del segmento en línea y del debate sobre cuestiones contemporáneas relacionadas con las drogas. Acá se logra evidenciar que "PP. 6 La juventud sigue siendo el grupo más vulnerable al consumo de drogas. A nivel mundial, en 2021, la prevalencia anual del consumo de cannabis en las personas de 15 y 16 años era del 5,34 %, frente al 4,3 % en el caso de los adultos. El consumo de drogas es además especialmente perjudicial para los jóvenes. En algunas regiones, los jóvenes se ven más gravemente afectados por trastornos por consumo de sustancias" es por lo anterior que nace la prioridad de generar entornos libres de drogas, con el objetivo de cuidar a los niños, niñas y adolescentes.

Ahora bien, la Asamblea General de las Naciones Unidas³⁶, expone los desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos fundamentales del problema mundial de las drogas y de igual forma, ofrece una reseña de los avances positivos recientes en favor de la adopción de políticas en materia de drogas más centradas en los derechos humanos y se proporcionan recomendaciones sobre la manera de avanzar en vista del próximo examen de mitad de período de la Declaración Ministerial de 2019 y para contribuir a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, encontrando que "PP. 11. La población joven es vulnerable al consumo de drogas y se ve gravemente afectada por los trastornos relacionados con dicho consumo. En comparación con las generaciones anteriores, ahora hay más jóvenes que consumen más drogas."

En consonancia con lo anterior, es importante poner en conocimiento del Concejo de Bogotá que esto es un problema de ciudad. Tanto así que en los últimos años, se han presentado casos puntuales en Instituciones educativas de la capital, como por ejemplo, en el 2024 el colegio Gustavo Morales Morales (IED), ubicado en la Calle 129 #55-55, del barrio Prado Sur de la localidad de Suba, se encuentra a escasos metros de una olla de microtráfico y narcomenudeo identificada en un predio perteneciente al Acueducto en inmediaciones del Humedal Córdoba primer sector, en este lugar, la comunidad y los padres de familia manifiestan el malestar y preocupación generalizado producto de la falta de acompañamiento profesional e institucional para la protección de los derechos de los menores y sus familias, es de suma importancia agilizar la intervención y el seguimiento continuo en puntos como estos, que han sido identificados de riesgo para los menores.

³⁵ UNODC (2023). Special Points of Interest. World Drug Report 2023. https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_SPI_Spanish.pdf

³⁶ Naciones Unidas. Asamblea General .(2023) Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas. <https://www.dianova.org/wp-content/uploads/2023/10/A-HRC-54-53-ES.pdf>

Así mismo, gracias a la información que nos brinda la ciudadanía, en junio del año hicimos un público un video donde un padre de familia denunciaba la situación por la que atraviesan tres colegios de la localidad de Ciudad Bolívar. En este se pone presente la grave situación de consumo en entornos escolares y como, presuntamente, utilizan a los menores para transportar la droga. (Ver la denuncia en el siguiente URL <https://www.youtube.com/watch?v=j5JHH4h1wzY>)

De igual manera, en derecho de petición elevado a la Secretaría de Salud, donde preguntamos por los trastornos relacionados con el consumos de sustancias psicoactivas en menores de edad, nos informaron que, entre enero de 2020 y **julio** de 2024, se presentaron 10.686 atenciones a menores de edad. Así mimos, se indicó que los jóvenes de 14 a 17 años son los que han recibido el mayor número de atenciones.

TABLA 1 ATENCIONES Y NÚMERO DE PERSONAS DE 0 A 17 AÑOS ATENDIDAS EN LA RED PÚBLICA DISTRITAL POR TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. BOGOTÁ 2020 A 2024 (PARCIAL)

Año	Hombres		Mujeres		TOTAL	
	Atenciones	Individuos*	Atenciones	Individuos*	Atenciones	Individuos*
2020	1.347	585	663	284	2.010	869
2021	1.997	859	1.071	501	3.068	1.360
2022	1.728	615	940	317	2.668	932
2023	1.998	626	874	261	2.872	887
2024	15	6	53	6	68	12
TOTAL*	7.085	2.399	3.601	1.279	10.686	3.678

Derecho de

petición secretaria de Salud 2024-EE-12159 del 26 de julio de 2024

De igual manera, la Secretaría de Educación, a través del Sistema de Alertas, registró 6.431 casos de consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes durante 2023. De las cifras más alarmantes se incluye el aumento de casos reportados de menores de 6 a 11 años en un 37%.

Estas cifras solo evidencian la problemática por la que atraviesa Bogotá. Situación que ha sido tratada por este concejo, el año pasado se presentaron 7 proyectos de acuerdo, de diferentes bancadas, sobre el tema en específico. A pesar de tener ponencia positiva conjunta de los concejales Juan Daniel Ovideo Arango y Juan Javier Baena Merlano, no se pudieron debatir.

Por otro lado, con el anuncio que hizo el Alcalde Mayor de Bogotá en enero de 2024, sobre el papel que jugaría el concejo en la expedición de una nueva reglamentación en esta materia, se creó la comisión accidental sobre la reglamentación de entornos seguros de drogas, espacios que lidero y busca una mejor articulación con la administración.

Hemos enviado múltiples misivas en compañía de padres de familia y rectores de colegios donde preguntamos a la administración por los avances en la respectiva reglamentación. Sin embargo, no hemos tenido respuesta a la fecha.

De esta manera, basándose en la competencia que tiene el Concejo de Bogotá, se hace necesaria la intervención, con el objetivo de minimizar las situaciones de riesgo en las cuales puede incurrir la población en especial los menores al encontrarse con el consumo, porte y distribución de estupefacientes en espacios públicos que están diseñados para el goce y disfrute de los niños, niñas y adolescentes de la capital. Como órgano legislativo Distrital, es nuestro deber velar por la protección de las nuevas generaciones, ayudando a garantizar el interés superior de los jóvenes y los menores.

Ahora bien, teniendo claro nuestro interés frente a esta problemática, y es crear entornos seguros de drogas para los menores de edad, es necesario hacer una revisión jurisprudencial sobre el tema. Naturalmente encontramos la Sentencia C-253 de 2018 de la Corte Constitucional, cuya magistrada ponente fue la Dra. Diana Fajardo Rivera.

En esta sentencia, la Corte evalúa la constitucionalidad de unas normas de la Ley 1801 de 2016, específicamente el numeral 2, literal C del artículo 33, que establecía que el consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para su consumo como comportamiento que afecta la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y el numeral 7 de la referida ley, que determinaba que el consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, como comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público.

La Corte al estudiar dicha controversia consideró que existían algunas expresiones que no eran compatibles con la constitución y en consecuencia declaró su inexequibilidad. Frente al numeral 2, literal c del artículo 33 consideró que no se ajustaban a la carta las expresiones “*alcohólicas, psicoactivas*”, y, sobre el numeral 7 del artículo 14° del referido código, estableció la inconstitucionalidad de “*bebidas alcohólicas*” y “*psicoactivas*”.

Si bien la Corte estableció lo anterior, fue enfática en afirmar que no le corresponde a esta decidir el tiempo, modo y lugar para realizar el consumo, que dicha actividad le “*corresponde al Congreso de la República y a los órganos colegiados territoriales respectivos (Asambleas Departamentales y Concejos) ejercer sus facultades de policía legislativas, subsidiarias y residuales, respectivamente, con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos que se encuentran en tensión y facilitar el ejercicio de la actividad de policía, y así asegurar la tranquilidad, las relaciones respetuosas y la integridad del espacio público*”

Bajo este mandato de la Corte Constitucional, el Congreso de la República expidió la ley 2000 de 2019 *“Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones”*, dicha norma busca que no haya presencia de drogas en los espacios, donde habitualmente, hay presencia de menores.

Dentro de estos lugares -cuyo perímetro para la restricción del consumo de drogas será determinado por los alcaldes- se incluyeron los entornos escolares, centros deportivos, parques, zonas históricas o declaradas de interés cultural. Además, facultó a las asambleas o consejos de administración para regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en ciertas áreas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o en las unidades de propiedad horizontal de propiedades horizontales.

Una vez el Congreso, en virtud del poder de policía consagrado en el artículo 11 de la ley 1801 de 2016, expide la ley 2000 de 2019, permite al Concejo de Bogotá reglamentar esta situación, en virtud del poder subsidiario y residual de policía, consagrado en los artículos 12 y 13 de la ley 1801 de 2016.

Ahora bien, en la Sentencia C-127 de 2023 cuyo magistrado ponente fue Juan Carlos Cortes González, la Corte determinó la constitucionalidad de los numerales 13 y 14 (parciales) y los numerales 13 y 14 del párrafo 2 del artículo 140 de la ley 1801 de 2016, adicionados por el artículo 3 de la Ley 2000 de 2019 haciendo la salvedad que ciertas expresiones como *“portar”* no aplica cuando se trate de porte con fines de consumo propio o de dosis medicada. Sin embargo, fue enfática en sostener que *“la prohibición absoluta de consumo de sustancias psicoactivas, aún la dosis personal, en parques y espacios donde concurren menores es idónea para proteger y garantizar los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que garantiza un entorno seguro para el ejercicio integral de sus derechos”*.

Con esta Sentencia, se aclara y ratifica que los Derechos de los NNA son protegidos mediante leyes sancionatorias, pero de igual manera esta sentencia se contempla el consumo propio desde un amplio aspecto, lo que brinda un sentido garantista para los consumidores, pero esto no significa que se deje abierta la posibilidad de violar o desamparar los Derechos de los menores, por el contrario, se enfatiza en la creación de espacios seguros para el desarrollo de estos.

Se reafirma que esta iniciativa busca únicamente la protección de los menores de edad y la protección prevalente de los derechos de los niños, niñas y jóvenes mediante la imposición de medidas de carácter restrictivas con el fin de disminuir y erradicar la distribución y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, especialmente en entornos frecuentados por menores de edad y jóvenes como lo son parques, escenarios deportivos y colegios. Igualmente se busca dotar al distrito de herramientas con el fin de delimitar y controlar estas zonas para evitar un mayor deterioro en la salud de nuestros jóvenes y niños. Así mismo, nos unimos a la recomendación dada en el Estudio Nacional de Consumo de

Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022 donde "Es fundamental continuar apostándole a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas, en edades tempranas, pues a los 12 y 17 años ya se presentan tasas de abuso y dependencia" Reiterando que los entornos escolares libres de drogas son un vehículo para lograr dicho objetivo.

Por último, al revisar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), encontramos que este proyecto contribuye al cumplimiento del tercero de estos "Salud y Bienestar" puesto que dentro de las metas que este se traza esta la de meta *Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.*

3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

PROYECTO DE ACUERDO	AUTOR	BANCADA	ESTADO
278 DE 2019	H.C. Diego Molano Aponte	Centro Democrático	ARCHIVADO
382 DE 2021	H.C. Adriana Carolina Arbeláez Giraldo	Cambio Radical	ARCHIVADO
025 de 2024	Hs.Cs. Rolando Alberto González García y Emel Rojas Castillo	Cambio Radical - Nueva Fuerza Democrática	ARCHIVADO
Acuerdo 044 de 2024	Hs.Cs. Emel Rojas Castillo y Rolando Alberto González García	Nueva Fuerza Democrática – Cambio Radical	ARCHIVADO
071 de 2024	H.C. Darío Fernando Cepeda Peña	Partido Liberal	ARCHIVADO
080 de 2024	H.C. Humberto Rafael Amín Martelo	Centro Democrático	ARCHIVADO
130 de 2024	H.C. Diana Marcela Diago Guaqueta	Centro Democrático	ARCHIVADO
170 de 2024	Hs.Cs. Andrés Barrios Bernal, Daniel Felipe Briceño Montes, Sandra Forero Ramírez, Diana Marcela Diago Guaqueta y Óscar Jaime Ramírez Vahos	Centro Democrático	ARCHIVADO
199 de 2024	Hs.Cs. Daniel Felipe Briceño Montes, Angelo Schiavenato Rivadeneira	Centro Democrático	ARCHIVADO

--	--	--	--

4. MARCO JURÍDICO

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 30 de 1986, "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones"
- Ley 12 de 1991 Mediante la cual se aprueba la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989
- Ley 745 de 2002, "Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia",
- Ley 1453 de 2011, "Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad".
- Acuerdo 376 de 2009, "Mediante el cual se establecen lineamientos para la Política Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, D.C.",
- Acuerdo 536 de 2013 "por el cual se dictan disposiciones para la promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas -spa- en las entidades del distrito capital."

5. IMPACTO FISCAL

De acuerdo con mencionado dentro del artículo 7º de la ley 819 de 2003:

. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Se estima que la iniciativa que se presenta al Honorable Concejo de Bogotá no genera gastos ni otorga beneficios tributarios.

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En virtud lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993:

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*
- 7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”.*

A su vez, a la revisar la iniciativa de los proyectos de acuerdo establecida en el artículo 13, del referido decreto, se encuentra que:

“ARTICULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

De igual manera, la ley 1801 de 2016 faculta a los Concejos para que a través del poder subsidiario y residual de policía dictan normas.

ARTÍCULO 12. Poder subsidiario de Policía. *Las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de Policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley.*

Estas corporaciones en el ejercicio de poder subsidiario no podrán:

- 1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.*
- 2. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.*

3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

PARÁGRAFO 1. *El Concejo Distrital de Bogotá podrá establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.*

PARÁGRAFO 2. *Las normas de Policía y convivencia expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.*

ARTÍCULO 13. Poder residual de Policía. *Los demás Concejos Distritales y los Concejos Municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán reglamentar residualmente los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales de Policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la presente ley.*

Estas Corporaciones en el ejercicio del poder residual no podrán:

1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o auto-rizadas por el legislador.

2. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

PARÁGRAFO . *Los Concejos Municipales y Distritales podrán establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.*

Cordialmente,

ANDRÉS BARRIOS BERNAL
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 399 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE PRETENDE LA REGULACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS DE DROGAS”***

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en concordancia con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en concordancia con los artículos 25 y 313 de la Constitución Política de Colombia,

ARTÍCULO 1º. El objeto de este Acuerdo Distrital es establecer la regulación de entornos escolares seguros de drogas en el distrito capital

ARTÍCULO 2º. El Concejo de Bogotá, en ejercicio de los artículos 12 y 13 de la ley 1801 de 2016, atendiendo el llamado de la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-127 de 2023 y con la intención de proteger los derechos de los niños, establece como entornos seguros de droga el espacio público aledaño los parques e instituciones educativas de la ciudad

ARTÍCULO 3º. La delimitación establecida en el artículo 2 de este Acuerdo Distrital, deberá ser establecida por la Administración en un plazo máximo de dos (2) meses desde la vigencia de esta norma.

ARTÍCULO 4º. El presente Acuerdo Distrital rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 400 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR EL CUAL SE PROMUEVE EL USO RESPONSABLE Y ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL POSICIONANDO A BOGOTÁ D.C. COMO CIUDAD LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS”*****I. OBJETO DEL PROYECTO.**

El objetivo central de este proyecto de acuerdo es promover el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial (IA). Para ello, se propone establecer lineamientos a nivel distrital que aseguren y fomenten la adecuada implementación de los sistemas de IA que se están adoptando en las entidades públicas de Bogotá. Esta iniciativa surge como una respuesta a los desafíos que presenta la rápida adopción de tecnologías emergentes en el entorno urbano y social, garantizando que su desarrollo y utilización se realicen en armonía con los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como con los principios de sostenibilidad, transparencia y equidad.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Inteligencia Artificial está revolucionando la forma en que las ciudades administran sus recursos, brindan servicios y toman decisiones. No obstante, su integración también presenta desafíos significativos, como la discriminación algorítmica, la invasión de la privacidad, la falta de transparencia, el aumento de las disparidades y los sesgos sociales. Ante esta realidad, esta iniciativa busca también establecer un marco ético que permita mitigar estos riesgos y maximizar los beneficios de la inteligencia artificial en beneficio de toda la ciudadanía.

Los lineamientos que se presentan en esta iniciativa tiene como objetivo asegurar que la Inteligencia Artificial se utilice como una herramienta en pro del bienestar común, respetando los derechos fundamentales y promoviendo valores esenciales como la transparencia, la equidad y la justicia social. A través de su labor, el lineamiento propondrá fomentar la confianza en el uso de la IA, empoderar a los ciudadanos y fortalecer la gobernanza tecnológica en Bogotá.

En síntesis, este proyecto de acuerdo refleja el compromiso que debe tener la ciudad con un desarrollo tecnológico ético, inclusivo y sostenible. El desarrollo de estos lineamientos no solo posicionará a la ciudad como un referente en la regulación responsable de la Inteligencia Artificial, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa en la era digital.

JUSTIFICACIÓN

Que la ciudad capital de Colombia cuente con unos lineamientos que promuevan el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial representa una medida fundamental para asegurar que los sistemas de IA respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, fomenten la equidad y prevengan la aparición de sesgos o discriminación. Esta iniciativa no solo aborda los retos éticos y sociales que plantea la tecnología, sino que también establece un marco que permite maximizar los beneficios de esta, al tiempo que se mitigan sus posibles riesgos.

La presente iniciativa se alinea directamente con el Programa 35 “Bogotá Ciudad Inteligente” del Plan de Desarrollo 2024-2027, el cual establece como prioridad la adopción y promoción de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA). Esta iniciativa constituye un marco habilitante fundamental para materializar dicho programa, pues establece las salvaguardas y lineamientos necesarios para que la implementación de estas tecnologías se realice de manera responsable, transparente y centrada en el ciudadano, garantizando que el proceso de transformación digital de la ciudad proteja los derechos fundamentales mientras se aprovecha el potencial de la IA para mejorar la eficiencia administrativa, la toma de decisiones y la interacción con los diferentes actores de la ciudad.

En concordancia con el actual Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, esta iniciativa adopta principios fundamentales como la transparencia y explicación, privacidad, control humano de las decisiones, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y beneficio social.

Según AI Governance in 2023, de la OCDE (2023), más de 60 países han desarrollado estrategias nacionales de IA que incluyen consideraciones éticas, destacando:

- La Unión Europea con "AI Act" (2023), primer marco regulatorio integral sobre IA.
- Helsinki Implementó "AI Register" en 2020, el primer registro público de sistemas de IA gubernamentales.
- Barcelona estableció la "Oficina de Algoritmos y Datos" (2021), que supervisa el uso ético de la IA.

La rápida adopción de la inteligencia artificial presenta desafíos importantes que demandan una intervención ética y regulatoria. Sin un marco adecuado, la IA puede:

- Discriminar a grupos vulnerables debido a sesgos en los algoritmos, pues a pesar de su avance técnico, los algoritmos de IA dependen de los datos con los que son entrenados. Si estos datos incorporan sesgos históricos, como la discriminación por género, raza o estatus socioeconómico, los sistemas tienden a perpetuar y amplificar esas desigualdades (Floridi, 2019). Estas distorsiones pueden afectar decisiones críticas, como la aprobación de créditos, el proceso de selección de empleo o la asignación de recursos públicos.
- Comprometer la privacidad de los ciudadanos por medio del uso no autorizado de datos personales, ya que con frecuencia, los sistemas de IA recopilan y procesan enormes cantidades de información personal sin el

consentimiento informado de los usuarios. Esto no solo infringe derechos fundamentales, sino que también expone a las personas a riesgos significativos, como el robo de identidad o la explotación comercial de su información (OECD, 2021).

- Generar desconfianza en la población al implementar sistemas poco transparentes o mal explicados. La falta de claridad sobre el funcionamiento de los algoritmos de IA puede cultivar percepciones negativas entre los ciudadanos. Cuando las personas no comprenden cómo y por qué se toman determinadas decisiones automatizadas, es probable que desconfíen de estas tecnologías y de las instituciones que las utilizan (Russell y Norvig, 2021).
- Propiciar la exclusión social al diseñar soluciones tecnológicas que no tengan en cuenta la diversidad cultural y económica de la población. La IA implementada sin considerar esta diversidad puede dejar fuera a comunidades marginadas. Por ejemplo, tecnologías que no reconocen acentos regionales o que no son accesibles para personas con discapacidades pueden reforzar las barreras de exclusión, perpetuando desigualdades estructurales (Eubanks, 2018).

CONTEXTO NACIONAL.

Colombia, a través del CONPES 3975 de 2019 "Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial", establece la necesidad de desarrollar marcos éticos para el uso de la IA. En línea con esta política, el gobierno colombiano, ha incluido la creación de 73 Microcentros de aprendizaje de IA en 27 municipios y el desarrollo de una nueva política nacional de IA con seis objetivos estratégicos.

La creciente digitalización y el uso masivo de datos han propiciado un entorno donde la IA se convierte en una herramienta esencial. Sin embargo, esta rápida adopción a menudo carece de la supervisión ética necesaria. La falta de regulación puede provocar violaciones a derechos fundamentales, un aumento en las desigualdades, la exclusión de comunidades vulnerables y una disminución de la confianza en las instituciones públicas. En cambio, la creación de un Comité Ético puede generar múltiples beneficios, como la mejora en la calidad de los servicios públicos y el fortalecimiento del tejido social.

Por último, teniendo en cuenta el objeto de este proyecto es un uso ético y responsable de la IA por parte de las entidades de la administración, el mismo generará una mejor gestión y transparencia de los datos que maneje. Esto es muy importante pues alinea esta iniciativa con los ODS, en tanto el objetivo 16, denominado como *Paz, Justicia e Instituciones Sólidas*, vemos que la meta 16.6 pretende “*Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes*”.

III. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

A la fecha no hay proyectos de acuerdo en este sentido

IV. MARCO JURÍDICO

MARCO NORMATIVO

NACIONAL

1. Constitución Política de Colombia:

- *“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”*
- *“Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.”*
- *“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.*

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”

2. Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”

“Artículo 2. Principios orientadores: La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo,

cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.

Son principios orientadores de la presente ley:

1. ***Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.*** *El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad. En el cumplimiento de este principio el Estado promoverá prioritariamente el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país.*
(...)"

3. Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”

Artículo 1º. Objeto. *La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.*

4. **Decreto 1263 de 2022 “Por el cual se adiciona el Título 22 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables a la Transformación Digital Pública”**

“Artículo 2.2.23.1.2. Definiciones. Para la interpretación del presente título, las expresiones aquí utilizadas deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica:

(...)

3.1 Transformación Digital: *Corresponde al proceso de explotación de tecnologías digitales que tiene la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas en todos los sectores de la administración pública, generando nuevos modelos de desarrollo, procesos y la creación de productos y servicios, que a su vez produce valor, principalmente a través de la digitalización que representa la conversión de datos y procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y procesados por máquinas.*

3.2. Inteligencia artificial: *Corresponde a un campo de la informática dedicado a resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes, entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos.”*

5. Documento CONPES 3995 del 01 de julio 2020 “Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital”:

“El presente documento CONPES formula una política nacional que tiene como objetivo establecer medidas para ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital de manera que Colombia sea una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se fortalecerán las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y del sector privado del país; en segundo lugar, se actualizará el marco de gobernanza en materia de seguridad digital para aumentar su grado de desarrollo y finalmente, se analizará la adopción de modelos, estándares y marcos de trabajo en materia de seguridad digital, con énfasis en nuevas tecnologías.”

6. Documento CONPES 3975 del 08 de noviembre de 2019 “Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial”

“El presente documento CONPES formula una política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial. Esta política tiene como objetivo potenciar la generación de valor social y económico en el país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el sector privado, para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos, así como generar los habilitadores transversales para la transformación digital sectorial, de manera que Colombia pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial (4RI).”

7. Directiva Presidencial 03 de 2021 “Lineamientos para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos”

“2. Inteligencia Artificial (IA):

2.1. El uso de sistemas de IA deberá propender por el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos. La IA debe mejorar la calidad de vida de los colombianos.

2.2. En caso de implementar proyectos de IA, deberán informar sobre sus avances, dentro de los respectivos informes anuales de rendición de cuentas.

2.3. Fomentar la participación de los funcionarios públicos en cursos, capacitaciones o programas de talento dirigidos a generar mayor conocimiento y capacidades sobre IA, su implementación, características y funcionalidades, dando cumplimiento a las directrices de austeridad en el gasto.

2.4. Facilitar la realización de sandboxes regulatorios en IA en el marco de la coordinación y articulación interinstitucional.

2.5. Efectuar el desarrollo de los Proyectos de IA en el marco de la coordinación interinstitucional y en apoyo a la cooperación internacional que surja en la materia, permitiendo el intercambio de información y el seguimiento a las recomendaciones, con sujeción a las funciones asignadas y a la normativa aplicable.

2.6. En el marco de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", informar a la ciudadanía cuando estén implementando un proyecto que incorpore sistemas de IA y el propósito de su uso, brindando información clara y actualizada, con el fin de asegurar el conocimiento de esta tecnología y las características de los proyectos.

2.7. Formular y desarrollar proyectos de IA, dando cumplimiento a las recomendaciones y principios éticos en la materia.

2.8. Desplegar los sistemas de IA sobre la base de sus funciones, el contexto y en consonancia con el estado de la técnica. Para este fin implementarán medidas que permitan demostrar de forma activa su diligencia y cuidado en la implementación de estos sistemas.

2.9. Según sus roles, el contexto y su capacidad para actuar, aplicar un enfoque sistemático de gestión de riesgos en cada fase del ciclo de vida del sistema de IA para abordar los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su implementación, reduciendo cualquier riesgo de discriminación, entre otras posibles afectaciones.

2.10. Documentar los procesos y las decisiones adoptadas durante el ciclo de vida del sistema de IA, para permitir el análisis de sus resultados, teniendo en cuenta el contexto y siendo coherente con el estado de la técnica. (...)”

V. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la ley 819 de 2003, la implementación de la presente iniciativa no genera impacto fiscal que afecte las finanzas del distrito en el mediano plazo, por lo que no genera erogaciones presupuestales adicionales a las ya establecidas.

VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

DECRETO 1421 DE 1993

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

ARTÍCULO 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Cordialmente,

ANDRÉS BARRIOS BERNAL
Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 400 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR EL CUAL SE PROMUEVE EL USO RESPONSABLE Y ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL POSICIONANDO A BOGOTÁ D.C. COMO CIUDAD LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS”***

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en los numeral 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en concordancia con los artículos 25 y 313 de la Constitución Política de Colombia,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Establecer los lineamientos que garanticen y promuevan el uso responsable y ético de la inteligencia artificial posicionando a Bogotá como una ciudad líder en la implementación de nuevas tecnologías.

ARTÍCULO 2. La implementación y reglamentación de los lineamientos deberá ser liderada por la Secretaría General, la Alta Consejería para las TIC y la Secretaría Distrital de Gobierno, en conjunto con las demás entidades distritales que sean necesarias.

Parágrafo. Las anteriores entidades reglamentarán los procedimientos y brindarán la asesoría necesaria para la activación y la garantía de la aplicación de los lineamientos en un lapso no mayor a seis (6) meses desde la sanción de este Acuerdo Distrital.

ARTÍCULO 3. Líneas de Acción. Los lineamientos se orientarán según los principios y disposiciones del Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia vigente. Las líneas de acción comprenderán, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Establecer un lineamiento obligatorio para el uso responsable de sistemas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Perplexity, etc.) en entidades distritales, prohibiendo expresamente el ingreso de datos personales, información confidencial o sensible de la ciudadanía.
2. Establecer un código de conducta distrital para el uso de IA que defina claramente qué prácticas están permitidas y cuáles prohibidas en todas las entidades del distrito.
3. Desarrollar lineamientos específicos para el uso de IA en sectores críticos como salud, educación y seguridad, con énfasis en la protección de derechos fundamentales.
4. Crear un sistema de registro y monitoreo del uso de herramientas de IA en las entidades distritales, donde se documente qué herramientas se utilizan, para qué propósitos y qué tipo de información se procesa.

5. Implementar un proceso de verificación humana obligatoria para todas las respuestas o contenidos generados por IA que vayan a ser utilizados en comunicaciones oficiales o servicios ciudadanos.
6. Desarrollar un programa de capacitación obligatoria para funcionarios públicos sobre el uso ético y responsable de herramientas de IA, incluyendo mejores prácticas, riesgos de seguridad y protección de datos.
7. Incluir mecanismos específicos para el manejo de datos sensibles en sistemas de IA, como la anonimización.
8. Establecer la obligatoriedad de etiquetar todo contenido generado por IA (imágenes, videos, textos, voces, etc.) que sea utilizado en comunicaciones oficiales o servicios públicos.
9. Crear un canal de denuncias ciudadanas para reportar el uso inadecuado de IA en entidades distritales o posibles violaciones al lineamiento ético.
10. Desarrollar guías específicas para el uso de IA en la automatización de procesos administrativos, estableciendo qué decisiones no pueden ser delegadas a sistemas automatizados.
11. Definir lineamientos para la contratación de servicios que incluyan IA, exigiendo a proveedores garantías de transparencia, seguridad y protección de datos.
12. Implementar laboratorios de innovación ciudadana en las alcaldías locales donde se brinde capacitación gratuita sobre el uso y desarrollo de soluciones tecnológicas usando IA de manera ética y responsable.
13. Implementar talleres prácticos en colegios distritales sobre el uso ético de IA generativa, adaptados a diferentes niveles educativos y orientados a desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes.
14. Establecer un programa de certificación distrital en uso ético de IA para docentes de colegios públicos, que les permita guiar adecuadamente a los estudiantes en el uso de estas herramientas.
15. Establecer la obligatoriedad de incluir en los manuales de funciones y contratos las responsabilidades específicas sobre el uso ético y responsable de la IA y las consecuencias que conllevan el incumplimiento.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 401 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE A ALIMENTARTE FOOD FESTIVAL COMO UN EVENTO DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO PARA LA CIUDAD”****1. OBJETO DEL PROYECTO.**

El Proyecto de Acuerdo, que se presenta a consideración del honorable Concejo, tiene como objeto reconocer el festival gastronómico “Alimentarte Food Festival”, como un evento cultural y turístico de la ciudad de Bogotá, con el propósito de generar un espacio de entretenimiento gastronómico distrital para los habitantes y visitantes de la ciudad.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La gastronomía juega un papel fundamental en el desarrollo económico, turístico y culturas de Bogotá. La ciudad ofrece a sus ciudadanos y visitantes una amplia variedad de restaurantes, plazas de mercado, pastelerías y cafés, sin embargo, hace falta un escenario que pueda brindar una experiencia gastronómica única, con una gran diversidad de opciones tanto de la cocina nacional como internacional.

Es importante reconocer que la culinaria comprende no sólo las experiencias, sino también las técnicas y métodos de elaboración de los alimentos, lo cual la convierte en una parte esencial de la cultura de nuestro país, especialmente de la ciudad de Bogotá. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado la gastronomía como patrimonio cultural inmaterial, lo que implica la necesidad de velar por la conservación y difusión de los usos, tradiciones, conocimientos y técnicas relacionados con la preparación y consumo de los alimentos, así como la utilización de los ingredientes locales.

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el sector gastronómico representa el 8% del empleo en el país y aporta alrededor de \$30.000 millones al Producto Interno Bruto (PIB). Además, de acuerdo con el informe “*La contribución de la Gastronomía a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*” de Masque Culinary Center y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) define la gastronomía como un sector con enorme potencial para el desarrollo de las sociedades contemporáneas y una valiosa trascendencia cultural, social, económica y medioambiental.

En relación con lo anterior, en desarrollo del cumplimiento del primer (01) Objetivo de Desarrollo Sostenible “*Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo*”, se establece que la gastronomía es un sector el cual necesita de gran capacidad en capital humano, por lo cual es uno de los sectores que mayor empleo genera en una economía de una ciudad.

Frente al segundo (02) objetivo de Desarrollo Sostenible, se indica que “se debe poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. En relación con lo anterior, se puede establecer que a partir del apoyo a la gastronomía se permite la protección y promoción de las cocinas tradicionales y de los conocimientos ancestrales sobre los alimentos y sus elaboraciones.

De acuerdo con el cuarto (04) Objetivo de Desarrollo Sostenible se dispone que “*se debe promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos*”. Respecto a lo anterior, a partir del desarrollo de estrategias que promuevan la gastronomía local y nacional se apoya el desarrollo al emprendimiento y el fortalecimiento de empresas del sector gastronómico, lo cual a la vez permite la generación de empleo, lo que al final genera un crecimiento económico.

En este sentido, el reconocimiento del "Alimentarte Food Festival" como un evento de interés cultural y turístico para la ciudad de Bogotá se convierte en una estrategia fundamental para promover la culinaria nacional e internacional, y consolidar a la capital como un destino de turismo gastronómico. Este festival, que se ha realizado desde el año 2002 durante dos fines de semana consecutivos, permite que los ciudadanos y visitantes disfruten de una experiencia gastronómica excepcional, compartiendo un espacio agradable junto a sus familias y amigos.

Tras veintitrés versiones, este festival ha logrado consolidarse y posicionarse como un referente en la ciudad, al permitir la promoción, visibilización y posicionamiento de los restaurantes y el sector gastronómico de la ciudad y el país, de sus productos y servicios; impulsando al sector gastronómico y brindando alternativas para aportar en la liquidez de las empresas.

El Alimentarte Food Festival forma parte de la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia como miembro fundador, y también pertenece a la estrategia "Colombia a la Mesa" liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se resalta que, con este evento se ha representado a Colombia en la red de eventos gastronómicos latinoamericanos, donde participan otros como Ñam (Chile), Masticar (Argentina), Paladar (Paraguay) y Prazeres da Mesa (Brasil). Así mismo, a través de este festival, se busca aportar desde el sector privado al fortalecimiento de la promoción de la buena cocina colombiana, y posicionar a Bogotá como un destino turístico gastronómico, brindando a los asistentes la oportunidad de disfrutar de la diversidad cultural del país.

En los últimos 5 años, el festival ha tenido un impacto significativo, ofreciendo a alrededor de 80 restaurantes la oportunidad de presentar sus productos y servicios, logrando la venta de más de 50.000 platos. Además, junto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se han convocado 40 emprendimientos cada año, permitiéndoles promocionar y comercializar sus productos elaborados con mano de obra 100% capitalina. En el marco de este festival, se han generado más de 3.400 empleos directos y más de 4.800 indirectos.

En cuanto al aporte ambiental del Festival, en el desarrollo de sus versiones cada año se generaron 1.900 kg residuos orgánicos que fueron sometidos a un proceso de compostaje controlado, el cual lo convierte en abono natural destinado específicamente a iniciativas de restauración de la calidad del sueño. Así mismo, se generan 4.500 kg de residuos aprovechables de materiales como Tetra Pack, cartón, PET, plástico, chatarra, vidrio, entre otros, los cuales tienen un tratamiento y proceso adecuado para su aprovechamiento.

Igualmente, es necesario resaltar que la Fundación Corazón Verde³⁷, como organizadora del festival gastronómico, ha logrado un impacto social sostenible en todo el territorio nacional. Dentro de sus programas de impacto social se encuentran:

- a. Grado Once: programa por medio del cual se facilita la permanencia en el sistema educativo de los niños huérfanos de la policía nacional e hijos de policía en condición de discapacidad.
- b. Vincularte: este programa busca abrir las puertas a los jóvenes auxiliares de policías más vulnerables que se destacaron durante la prestación de sus servicios para que puedan culminar el sueño de ser policías.
- c. Presentes: Es un programa que acoge a los familiares de policías en espacios terapéuticos grupales para el manejo sano del duelo.
- d. Premio Corazón Verde: Reconocimiento de la sociedad civil a la labor realizada por los policías en todo el territorio nacional.
- e. Edificarte: es un programa que entrega vivienda a las familias de los policías víctimas de la violencia que están en un alto grado de vulnerabilidad.

Por todo lo expuesto, se propone reconocer al Alimentarte Food Festival como un evento de interés cultural y turístico para la ciudad de Bogotá, en virtud de su contribución a la promoción de la gastronomía colombiana, la generación de empleo y el posicionamiento de Bogotá como un destino turístico gastronómico.

3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa no tiene antecedentes en el Concejo de Bogotá.

³⁷ Es una entidad sin ánimo de lucro colombiana, cuyo propósito es mejorar integralmente la calidad de vida de las familias de los policías de Colombia víctimas del conflicto armado del país. tomado de <https://fundacioncorazonverde.org/> el 08 de agosto de 2024.

4. MARCO JURÍDICO

a. Del Orden Constitucional:

En virtud de la Constitución Política de Colombia:

- i) Artículo 1: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
- ii) Artículo 2: “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
- iii) Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”
- iv) Artículo 8 “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
- v) Artículo 70: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.
- vi) Artículo 71: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.

b. Del Orden Legal:

- i) Numeral 13 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993: “Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la constitución y la Ley (...) 13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.”
- ii) Ley 397 de 1997: “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
- iii) Ley 1185 de 2008: “Por la cual se modifican y adicionan la ley 397 de 1997- Ley General de cultura - y se dictan otras disposiciones. (Ley de Patrimonio Cultural de la Nación)”.
- iv) Ley 1493 de 2001: “Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones”.

c. Del Orden Distrital:

- i) **Decreto 555 de 2021 “Plan de Ordenamiento Territorial: “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”**
 - a. Artículo 570 “Programa Territorios Productivos, Competitivos e Innovadores. El programa aporta a los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial de promover el dinamismo, la reactivación económica y la creación de empleos, alcanzar el Desarrollo Rural Sostenible y a reducir los desequilibrios y desigualdades para un territorio más solidario y cuidador. Se apuesta por el impulso a proyectos que generen actividades económicas asociadas al emprendimiento, la creatividad, la innovación y la cultural, que se complementa con las áreas residenciales donde se interactúa a partir del sistema de movilidad.
- ii) Acuerdo 927 de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura””:
 - a. Artículo 5.2. Bogotá confía en su bienestar: Bogotá ha de ser un sitio donde sus habitantes quieran estar y puedan desarrollar todo su potencial. (...) Para lograr este cometido es necesario impulsar el acceso equitativo e incluyente y de calidad a la educación, a la salud, a los servicios de cuidado, a la cultura, la recreación, el deporte y la actividad física”.

- b. Artículo 12.4. Programa 19. Desarrollo empresarial, productivo y empleo: “El programa parte de la necesidad que tiene Bogotá de posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, la creación y potencialización de empresas innovadoras, la realización de grandes eventos, realizar aprovechamiento económico racional del espacio público y la atracción de turistas. Para ello, este programa fortalecerá el tejido empresarial de Bogotá mediante estrategias que promuevan mejoras en la productividad de las empresas a través de la innovación, la participación en mercados internacionales y el posicionamiento de la ciudad como destino de inversión extranjera directa y epicentro de eventos de ciudad con alcance internacional.

Adicionalmente, se desarrollarán acciones mediante las cuales emprendimientos de la economía social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas podrán recibir asistencia técnica y financiera para su fortalecimiento, con el fin de que se potencialicen sectores económicos en los que viene creciendo la ciudad. Tal es el caso de los servicios, el comercio y la industria, agro culturales y creativas, el deporte y el turismo.

(...)

De igual manera, el programa buscará posicionar a Bogotá como un destino turístico, religioso, cultural, recreo-deportivo y de grandes eventos, destacado a nivel nacional e internacional. Para ello se apoyarán, financiarán y fortalecerán las iniciativas que han venido teniendo lugar en materia turística y deportiva.”

- c. Artículo 106. Estrategia Distrital de Turismo: “El Instituto Distrital de Turismo, adelantará una estrategia para el desarrollo del sistema Distrital de Turismo, en consonancia con el artículo 570 del decreto 555 de 2021, como esquema que permita generar acciones y proyectos interinstitucionales para la consolidación de Bogotá Región como destino líder en Colombia y Latinoamérica”.
- d. Artículo 168. Bogotá Destino Turístico Inteligente. “Las entidades distritales trabajarán, en cabeza del Sector Desarrollo Económico, en la implementación de estrategias que permitan generar experiencias, promocionar a nivel nacional e internacional la ciudad, mejorar la competitividad del destino, fortalecer el tejido empresarial y trabajar en el diseño de productos turísticos innovadores,

en el marco de los ejes de gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, tecnología, innovación, seguridad y desarrollo empresarial.”

5. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se debe precisar que el presente proyecto de Acuerdo no tiene ningún impacto fiscal que implique modificación del marco fiscal de mediano plazo, en tanto la materialización de las reglas contenidas en este proyecto no representa ningún gasto adicional para el Distrito.

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En virtud lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993:

“ARTÍCULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”.

A su vez, a la revisar la iniciativa de los proyectos de acuerdo establecida en el artículo 13, del referido decreto, se encuentra que:

“ARTÍCULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Cordialmente,

ANDRÉS BARRIOS BERNAL

Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 401 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE A ALIMENTARTE FOOD FESTIVAL COMO UN EVENTO
INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO PARA LA CIUDAD”***

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en concordancia con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,

ARTÍCULO 1º. Reconocer el Festival Gastronómico “Alimentarte Food Festival”, como un evento de interés cultural y turístico para la ciudad de Bogotá.

ARTÍCULO 2º. La Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en coordinación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo, promoverán la realización del evento de interés cultural y turístico “Alimentarte Food Festival”, con el propósito de generar un espacio de entretenimiento gastronómico para los ciudadanos y visitantes de la ciudad.

PARÁGRAFO. Las entidades mencionadas brindarán las garantías necesarias a los participantes y organizadores para el desarrollo del evento de carácter anual en la ciudad.

ARTÍCULO 3º. La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y del Instituto Distrital de Turismo, promoverá acciones para visibilizar y posicionar la gastronomía colombiana y bogotana en el mercado de “Alimentarte Food Festival”, con el fin de consolidar a Bogotá como un destino turístico gastronómico.

ARTÍCULO 4º. El presente Acuerdo Distrital rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 402 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA LA CALLE 26 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10 COMO ‘LA CALLE DEL MENSAJERO’ EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE ESTABLECE EL DÍA DEL MENSAJERO EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR HISTÓRICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS CIUDADANOS QUE PRESTAN ESTA LABOR EN BOGOTÁ.”

1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de acuerdo, a través de la designación de la Calle 26, en el tramo de la carrera 7 y la carrera 10, pretende reconocer y exaltar la labor histórica de los mensajeros en Bogotá. Dicho reconocimiento, viene de su importante labor en la capital, permitiendo la comunicación y envío de bienes y servicios en la ciudad. De igual manera, se resalta su labor durante la pandemia por el Covid-19 y se reconoce la importancia de su trabajo como esencial para las dinámicas presentes en la ciudad.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de la historia, los mensajeros han jugado un papel esencial en la estructura social y económica de las comunidades. Su función como facilitadores del transporte de información, bienes y servicios ha sido clave para la construcción y el desarrollo de civilizaciones. En el caso de Bogotá, estos mensajeros han desempeñado un papel crucial en la dinámica económica y social de la ciudad, asegurando que los ciudadanos y las empresas puedan operar de manera eficiente. Lo anterior, se ha podido ver aún desde finales del siglo XX, donde se entiende que el oficio de la mensajería ha sido importante para el transporte y la circulación de correspondencias y encomiendas, tanto que llegó a ser clave para quienes tenían intereses económicos e impulsaban el proyecto de nación en el país para ese entonces³⁸.

Teniendo esto en cuenta, el objetivo del presente proyecto de acuerdo es rendir homenaje a los hombres y mujeres que, a través de su labor como mensajeros, han sido fundamentales para la economía de Bogotá, especialmente en momentos críticos como la pandemia del COVID-19. Esto, designando la calle 26 entre la carrera 7 y carrera 10 como “La Calle del

³⁸Hernández, G.-A., & Gutiérrez-Flórez, J. F. (2024). Estructuración del correo en Colombia en el paso del siglo XIX al XX. *Historelo: Revista de Historia Regional y Local*, 16(35), 98-127. <https://doi.org/10.15446/historelo.v16n35.103540>

Mensajero”. A través de este proyecto, se busca dignificar su esfuerzo y promover el reconocimiento y respeto hacia esta valiosa profesión.

2.1 JUSTIFICACIÓN

Importancia histórica de los mensajeros:

Los mensajeros han sido fundamentales en la evolución de las comunicaciones y en el desarrollo social, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Durante la época colonial en América se crearon servicios postales que aprovecharon sistemas de mensajería ya establecidos como los chasquis incas, reconocidos por su velocidad y eficiencia en la transmisión de mensajes a grandes distancias³⁹. También, en el virreinato de la Nueva Granada, los chasquis no solo se encargaban de comunicar información, sino que también figuraban como conectores sociales en territorios dispersos⁴⁰.

Con el paso del tiempo, la profesión de mensajero fue evolucionando y se logró consolidar como una ocupación que es esencial para el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, en la edad media, las cortes reales contrataban mensajeros para el envío y entrega de correspondencia y paquetes, lo que subraya la importancia de su labor en la vida cotidiana⁴¹.

En Bogotá, la relevancia de los mensajeros ha estado íntimamente relacionada con la historia y la evolución de los sistemas de transporte y comunicación. Desde los primeros servicios postales hasta la llegada de tecnologías modernas, los mensajeros han sido actores clave en la conectividad de la ciudad⁴². Empresas nacionales como Inter Rapidísimo han demostrado cómo la logística y la mensajería pueden adaptarse a las necesidades del mercado. Fundada en 1988, además de ofrecer soluciones de envío urbano y nacional, también ha desempeñado un papel crucial en el transporte de paquetes esenciales, especialmente en la pandemia, cuando muchas personas dependían de sus servicios para recibir bienes imprescindibles, documentos y productos de primera necesidad⁴³. Esto, se puede resaltar de la gran cantidad de empresas de mensajería que operan en el país, donde todas han estado presentes para garantizar sus servicios para todos los ciudadanos.

³⁹J.M.Sadurní (2021). Chasquis, los mensajeros del Inca. Recuperado de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/chasquis-mensajeros-inca_15459

⁴⁰Pita Pico, R. (2021). Tras el rastro de los Chasquis en la Nueva Granada: Mensajeros peregrinos y articuladores de la sociedad colonial. *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/357680411_Tras_el_rastro_de_los_chasquis_en_la_Nueva_Granada_mensajeros_peregrinos_y_articuladores_de_la_sociedad_colonial

⁴¹Colombia International Trading S.A.S. (2024). 10 cosas que no sabías sobre la historia de las entregas a domicilio. Recuperado de <https://citsas.co/10-cosas-que-no-sabias-sobre-la-historia-de-las-entregas-a-domicilio/>

⁴²Archivo de Bogotá. (2020). Historia del transporte en Bogotá. Recuperado de <https://archivobogota.secretariageneral.gov.co/noticias/historia-del-transporte-bogota>

⁴³Inter Rapidísimo. (2024). Nuestra historia y compromiso con Colombia. Recuperado de <https://www.interrapidisimo.com.co/historia/>

Aporte a la economía bogotana:

El sector de la mensajería desempeña un papel crucial en la economía de Bogotá, facilitando la interconexión entre diversos actores económicos, optimizando procesos logísticos y garantizando un flujo continuo de bienes y documentos en una ciudad de alta densidad poblacional y dinamismo comercial. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Bogotá aporta aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, destacándose sectores como el comercio, los servicios y la logística, los cuales son fundamentales en esta contribución⁴⁴. En esta línea, los servicios de mensajería actúan como un vínculo esencial que promueve una operativa eficiente en estos sectores.

La mensajería no solo conecta empresas y consumidores, sino que también elimina barreras logísticas al garantizar el transporte rápido y seguro de productos y documentos, tanto dentro de la ciudad como hacia otras regiones. Este sector, que abarca tanto empresas formales como mensajeros independientes, genera miles de empleos directos e indirectos, cubriendo roles desde conductores y repartidores hasta personal administrativo y logístico.

La creciente urbanización de Bogotá ha incrementado la demanda de servicios logísticos y de mensajería. Con una población que se acerca a los 8 millones de habitantes, la necesidad de interconectar áreas comerciales, residenciales e industriales en una ciudad que se extiende por cerca de 1,600 kilómetros cuadrados ha convertido al sector de mensajería en un pilar estratégico de la economía local. Este sector facilita la optimización de las cadenas de suministro y fortalece las relaciones comerciales, beneficiando tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones. Además, su eficacia contribuye a reducir los costos relacionados con la distribución, lo que a su vez favorece la competitividad de las empresas locales.

No sobra mencionar el impacto económico del servicio de mensajería en el país, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el primer trimestre del 2024 el sector reportó ingresos de \$518 mil millones de pesos, con un total de 69,7 millones de envíos⁴⁵

Un estudio del Observatorio de Desarrollo Económico (2022) revela que las actividades de transporte y almacenamiento experimentaron un crecimiento del 27,3%, gracias a la normalización en el transporte de pasajeros y carga. Este

⁴⁴ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). *Cuentas nacionales departamentales: PIB trimestral Bogotá D.C.* <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales/cuentas-nacionales-departamentales-pib-trimestral-bogota-d-c>

⁴⁵ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2024). *Informe de cifras del sector de mensajería y correo en Colombia.* Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-383009_presentacion_cifras.pdf

incremento también se debe al aumento de la demanda de servicios logísticos, tanto por vía terrestre como aérea, en las rutas nacionales e internacionales⁴⁶.

Un aspecto fundamental que merece ser destacado es la influencia del sector de mensajería en la formalización y dinamización del comercio en Bogotá. Esta ciudad se ha consolidado como el principal centro de comercio electrónico del país, con la mensajería desempeñando un papel crucial como intermediario, garantizando así el efectivo despliegue de productos adquiridos a través de plataformas digitales.

Además, el sector de mensajería fomenta la interconexión entre diversas áreas económicas de la ciudad. Desde el transporte de documentos importantes para el sector financiero hasta el traslado de componentes para la industria manufacturera, sin olvidar las entregas personalizadas de productos agrícolas a mercados locales, la mensajería se convierte en un conector esencial dentro de la economía circular de Bogotá. Este impacto se intensifica al considerar que muchos sectores dependen de un flujo eficiente de bienes y servicios.

El sector de mensajería no solo es responsable de una parte significativa del empleo y la actividad económica de Bogotá, sino que también es vital para mantener la operatividad de sectores estratégicos que requieren su capacidad para conectar diferentes eslabones de la cadena de valor. Aunque su función a menudo pasa desapercibida, es indispensable para preservar la competitividad de la ciudad y su rol como motor de la economía nacional.

Labor durante la pandemia:

Durante la pandemia de COVID-19, los mensajeros fueron reconocidos como trabajadores esenciales. En ese periodo, aseguraron y garantizaron el suministro de bienes básicos, apoyaron el comercio local y garantizaron la continuidad de las actividades económicas. En Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió el decreto No.121 del 26 de abril de 2020, que estableció medidas transitorias para garantizar la prestación de servicio de transporte público y la movilidad en la ciudad, permitiendo a las empresas de mensajería operar a pesar de las restricciones de movilidad y del riesgo que involucraba la exposición al virus⁴⁷.

⁴⁶ Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. (2022). *Boletín crece y conoce: Análisis del crecimiento económico de Bogotá*. https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/bol_crececono_35_.pdf

⁴⁷ Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). Decreto 121 de 2020. Recuperado de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92560>

De igual manera, durante la pandemia se experimentó un notable crecimiento. Según datos de la Cámara de Comercio, se registró un aumento de hasta un 30% en los servicios de domicilio y transacciones en línea. Asimismo, el sector de carga y mensajería creció un 39% debido a la expansión del comercio electrónico⁴⁸.

Las empresas de mensajería desempeñaron un papel esencial durante este tiempo, asegurando la distribución de mercancías a nivel nacional y contribuyendo al sostenimiento de la economía en tiempos de crisis. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y mantener activa la cadena de suministro fue vital para enfrentar los desafíos que generó la pandemia. Todo esto lleva a la reflexión sobre la necesidad de visibilizar y dignificar esta importante labor.

Finalmente, consideramos importante que la ciudad de Bogotá destine un día para conmemorar esta relevante labor. Debido a esto, en la investigación realizada se determinó que el 27 de octubre ha sido la fecha donde tradicionalmente se celebra este oficio, razón por la cual, proponemos esa misma fecha para realizar dicho homenaje.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

El reconocimiento a los mensajeros a través de la designación de “La Calle del Mensajero” está directamente relacionado con varios de los ODS adoptados por Colombia y el Distrito Capital:

ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos:

Los mensajeros representan un sector laboral importante que impulsa el comercio, el transporte y la logística. Reconocer su labor fomenta el respeto por su rol, visibiliza las condiciones laborales que enfrentan e incentiva la promoción de empleos dignos y seguros.

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

El presente proyecto de acuerdo, no solo resalta la labor de la mensajería, sino que también promueve la reducción de las desigualdades al visibilizar su importancia en la sociedad y reconociendo la importancia de condiciones laborales óptimas para una labor tan importante.

Selección de la vía:

La elección del tramo de la Calle 26, entre las carreras 7 y 10, como "La Calle del Mensajero" no es un hecho al azar. Esta vía principal de Bogotá conecta puntos esenciales, como el Aeropuerto Internacional El Dorado, el centro financiero y el corazón histórico de la ciudad. Además, se conoce como un corredor emblemático que representa movilidad, comunicación y conectividad, aspectos fundamentales de la labor que realizan los mensajeros.

⁴⁸ La República. (2021). El sector de carga y mensajería creció 39% por aumento en operaciones e-commerce. Recuperado de <https://www.larepublica.co/empresas/el-sector-de-carga-y-mensajeria-crecio-39-por-aumento-en-operaciones-e-commerce-3162884>

Otro aspecto relevante de la Calle 26 es su valor simbólico, ya que es una de las vías más transitadas de la capital, garantizando que este homenaje sea visible para millones de bogotanos y visitantes. Tal reconocimiento, en un lugar de gran impacto, no solo dignifica la labor de los mensajeros, sino que también refuerza la memoria histórica de su contribución a la ciudad.

Impacto esperado:

Con la aprobación de este proyecto de acuerdo, se espera:

- **Reconocimiento público:** resaltar la importancia de los mensajeros y promover su respeto y dignificación en la sociedad.
- **Memoria histórica:** generar un espacio de reflexión sobre el papel histórico y actual de los mensajeros.
- **Fortalecimiento de la identidad cultural:** contribuir al sentido de pertenencia y orgullo de los ciudadanos hacia su ciudad.

3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

En el Concejo de Bogotá, no se han presentado iniciativas de proyectos de acuerdo que establezcan reconocimiento a la labor histórica de los mensajeros en Bogotá.

4. MARCO JURÍDICO**Constitución Política de Colombia:**

- **Artículo 2:** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Ley 17 de 1905:

- **Artículo 11:** Erígese en Distrito capital que será administrado por el Gobierno Nacional, el Municipio de Bogotá, por los límites que le señala la Ley 26 de 1883 del Estado de Cundinamarca.

Ley 65 de 1909:

- **Artículo 5:** El Distrito de Bogotá, no obstante su carácter de Distrito Capital, desde la promulgación de la presente Ley será administrado por un Consejo Municipal, un Alcalde y un personero Municipal, conforme a las leyes sobre régimen político y municipal (...).

Ley 136 de 1993: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

- **Artículo 32:** Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:

(...) 5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

Ley 88 de 1947:

- **Artículo 1:** Para los efectos de esta ley se entiende por área urbana de los municipios la extensión comprendida dentro de la nomenclatura legal correspondiente o la determinada por los concejos municipales por medio de acuerdos

Los concejos municipales que no hayan señalado el área urbana de sus poblaciones procederán a hacerlo, determinando además la nomenclatura de las calles y carreras.

Ley 1369 de 2009: Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1421 de 1993:

- **Artículo 2:** Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.

5. IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la ley 819 de 2003, la implementación de la presente iniciativa no genera impacto fiscal que afecte las finanzas del distrito en el mediano plazo, por lo que no genera erogaciones presupuestales adicionales a las ya establecidas.

COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En virtud lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993:

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

A su vez, a la revisar la iniciativa de los proyectos de acuerdo establecida en el artículo 13, del referido decreto, se encuentra que:

“ARTÍCULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

De igual manera, la ley 1801 de 2016 faculta a los Concejos para que a través del poder subsidiario y residual de policía dicten normas.

ARTÍCULO 12. Poder subsidiario de Policía. *Las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de Policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley.*

Estas corporaciones en el ejercicio de poder subsidiario no podrán:

- 1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.*
- 2. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.*
- 3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.*

PARÁGRAFO 1. *El Concejo Distrital de Bogotá podrá establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.*

PARÁGRAFO 2. *Las normas de Policía y convivencia expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.*

ARTÍCULO 13. Poder residual de Policía. *Los demás Concejos Distritales y los Concejos Municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán reglamentar residualmente los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales de Policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la presente ley.*

Estas Corporaciones en el ejercicio del poder residual no podrán:

1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.

2. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

PARÁGRAFO. *Los Concejos Municipales y Distritales podrán establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.*

Cordialmente,

ANDRÉS BARRIOS BERNAL

Concejal de Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 402 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA LA CALLE 26 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA CARRERA 10 COMO ‘LA CALLE DEL MENSAJERO’ EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE ESTABLECE EL DÍA DEL MENSAJERO EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR HISTÓRICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS CIUDADANOS QUE PRESTAN ESTA LABOR EN BOGOTÁ.”

El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en concordancia con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,:

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º. Objeto. Denomínese la Calle 26 en el tramo de la carrera 7 y la carrera 10, como “La Calle del Mensajero” en el Distrito Capital.

Parágrafo. Corresponderá a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital darle cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2º. Conmemoración. El 27 de octubre se conmemorará el día del mensajero en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 3º. Vigencia. El presente Acuerdo Distrital rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 403 DE 2025**PRIMER DEBATE*****POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA A LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y TIEMPOS PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*****4. OBJETO DEL PROYECTO.**

El Proyecto de Acuerdo que se presenta a consideración del honorable concejo tiene como objetivo dinamizar el mercado de la vivienda en la ciudad, facilitar las condiciones para la habilitación del suelo y reactivar los licenciamientos de la vivienda urbana, para ello se propone generar unos lineamientos para:

- Simplificar los trámites en el distrito
- Fortalecer la ventanilla única de construcción.

Las cifras presentadas y parte del diagnóstico ha sido el resultado de varias mesas de trabajo realizadas con CAMACOL en los años 2023 y 2024.

Este proyecto fue presentado en el año 2024, con los radicados 030, 257, 547 y 714, contó con ponencias positivas de los Hs.Cs. Julián Espinosa Ortiz y Cristina Calderón Restrepo.

5. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La generación de viviendas nuevas desempeña un papel crucial en la dinamización económica y el desarrollo sostenible de una ciudad. Este proyecto de acuerdo busca sustentar la necesidad de crear unos lineamientos que permita fomentar la construcción de viviendas nuevas y la necesidad de implementar acciones que incentiven este proceso, especialmente en una revisión del marco normativo asociado a la simplificación de trámites del Distrito y en fortalecer la gobernanza de las acciones de la Ventanilla Única de la Construcción.

La implementación de estos lineamientos no solo generará beneficios a corto plazo, como la creación de empleo, la revitalización de la ciudad, el incremento en el recaudo del impuesto predial en la ciudad y superar la demanda habitacional, sino que también sentará las bases para un crecimiento urbano planificado, sostenible e inclusivo; aspectos se encuentran inmersos en las Políticas del ordenamiento territorial del Distrito Capital establecida el nuevo POT expedido por Decreto 555 de 2021.

Aunque la vivienda es un eje central de los tratamientos urbanísticos⁴⁹ y de las áreas de actividad⁵⁰ establecidos en el POT vigente, se observan vacíos y dificultades que deben ser rápidamente corregidos, si se desea que este sector se convierta en un motor fundamental de desarrollo de la ciudad.

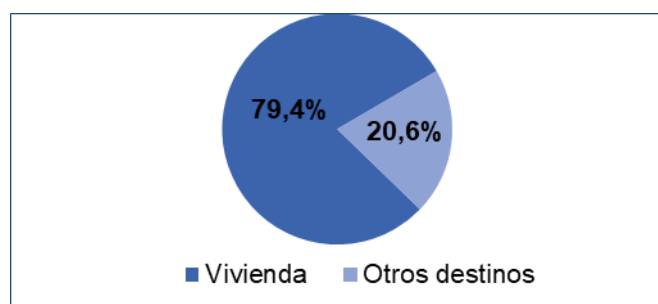
Es imperativo que el gobierno distrital y puntualmente la Secretaría Distrital de Hábitat, reconozca la importancia estratégica de la construcción de viviendas nuevas y trabajen en colaboración con el sector privado para garantizar un futuro próspero y equitativo para sus ciudadanos.

Es importante anotar que Bogotá no tiene déficit de suelo para vivienda ya que de acuerdo con el Documento Técnico de Soporte - DTS, del Decreto 555 de 2021, a 2035 se puede llegar a 1.067.000 soluciones habitacionales, concentradas principalmente en el tratamiento de renovación urbana.

2.1 Radiografía de la vivienda en Bogotá.

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2023, el 11,1% de hogares en Bogotá tienen déficit habitacional o su equivalente en 336 mil hogares de los cuales: 21 mil hogares tienen déficit cuantitativo y se requiere adicionar nuevas viviendas a la ciudad; mientras que 315 mil hogares presentan déficit cualitativo; es decir, requieren mejoramientos o ajustes para cumplir con condiciones de habitabilidad adecuadas.⁵¹

Bogotá requiere dinamizar el mercado de la vivienda nueva, toda vez que representa el 79,4% del total del área licenciada en Bogotá.



Fuente: Dane tomado de informe estadístico 2024 –Septiembre

⁴⁹ Los tratamientos urbanísticos orientan las actuaciones urbanísticas mediante un conjunto de incentivos y de contraprestaciones que otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a través de las normas de uso y aprovechamiento del suelo. (Artículo 255 de 2021). De acuerdo al POT son 5: Conservación, consolidación, renovación urbana, mejoramiento y desarrollo

⁵⁰ El nuevo POT estableció tres áreas de actividad: proximidad, estructurante y grandes servicios metropolitanos, conforme al artículo 240 del Decreto 55 de 2021.

⁵¹ Ver: Cuadro 32, anexo. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2022>

Tal como se revela en el boletín de construcción que reporta el Observatorio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y como se ilustra en el siguiente cuadro comparativo del año corrido 2023 y 2024, se ha observado una variación negativa con respecto a años anteriores ya que en el mes de septiembre de 2024 el área licenciada para vivienda VIS tuvo una disminución de 30% con respecto al mismo mes del 2023, y la vivienda No VIS disminuyó en el mismo valor del 30% su área licenciada.

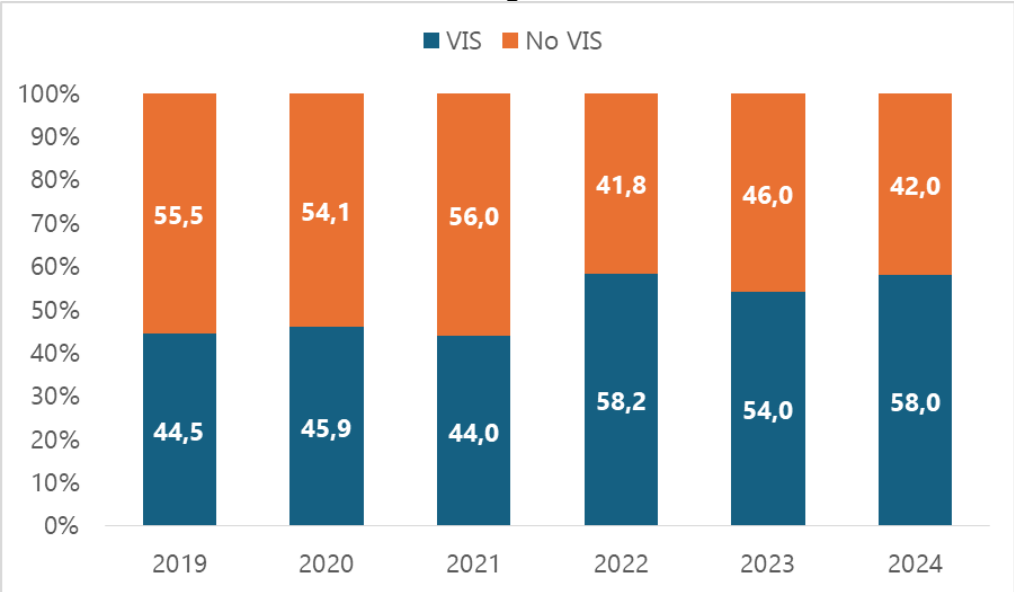
	Área licenciada para vivienda y otros destinos en Bogotá							
	Miles de metros cuadrados 2023-2024							
	Año corrido a agosto		% Cambio '23/'24	% del total '24	agosto		% Cambio '23/'24	% del total '24
	2023	2024			2023	2024		
Total construcción	3.286	2.167	-34,0	100,0	347	296	-14,5	100,0
Vivienda	2.464	1.721	-30,2	79,4	305	232	-23,8	78,5
Industria	38,8	10,5	-72,8	0,5	1	3	317,0	0,9
Oficina	258,6	47,3	-81,7	2,2	1	22	2.074,8	7,4
Bodega	2,1	8,1	287,8	0,4	0	3		1,0
Comercio	150,3	108,8	-27,6	5,0	25	12	-50,3	4,2
Hotel	116,6	1,7	-98,6	0,1	1	1	18,6	0,4
Educación	43,6	92,8	112,8	4,3	11	22	103,4	7,3
Hospital	140,1	153,7	9,7	7,1	2	1	-69,3	0,2
Admón pública	9,2	2,3	-74,8	0,1	0	0		0,1
Religioso	16,9	9,8	-42,0	0,5	0	0	-100,0	0,0
Social	45,1	9,2	-79,6	0,4	1	0	-94,0	0,0
Otro	0,0	2,6		0,1	0	0		0,0
Total vivienda	2.464	1.721	-30,2	100	305	232	-23,8	100
VIS ¹	1.394	976	-30,0	56,7	228	112,7	-50,7	48,5
No VIS ²	1.070	745	-30,4	43,3	76	119,8	56,6	51,5

Fuente: DANE. Elaboración SDDE-ODEB

https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/bases_informes/informe_cons_no155.xlsx

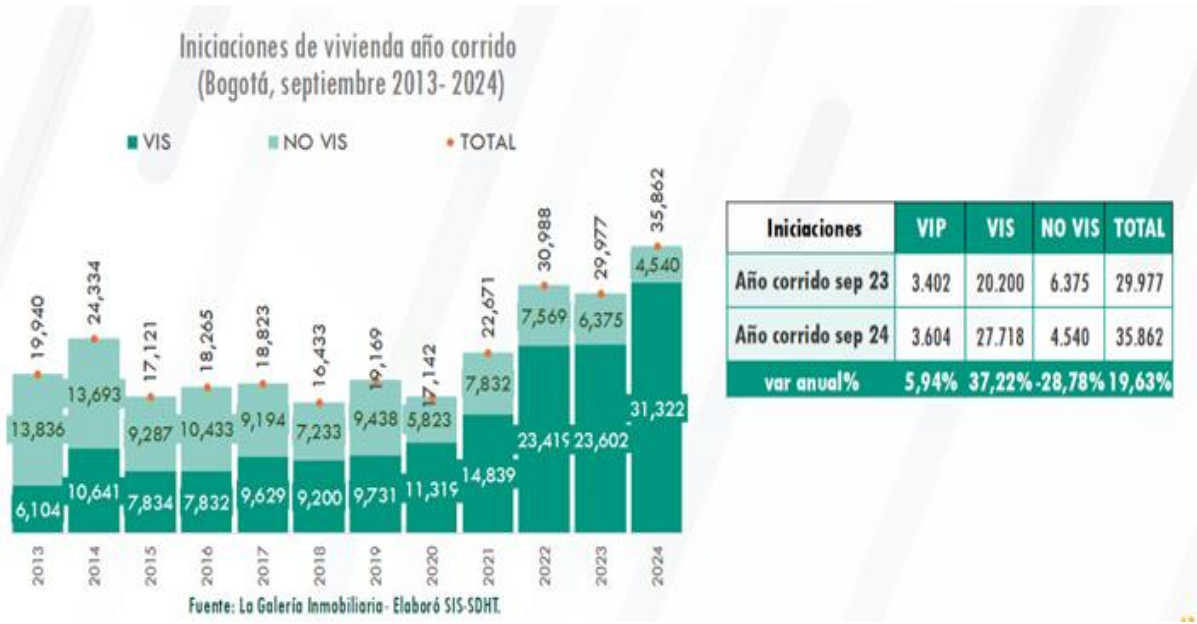
En cuanto a la participación se evidencia que la vivienda VIS representa el 585 del área licenciada, manteniendo los niveles de 2022 y 2023. Mientras que la NO VIS representa un 42%, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:

Participación del área licenciada para VIS y No VIS en Bogotá
Año corrido a Agosto 2019-2024



Fuente: Dane. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C.

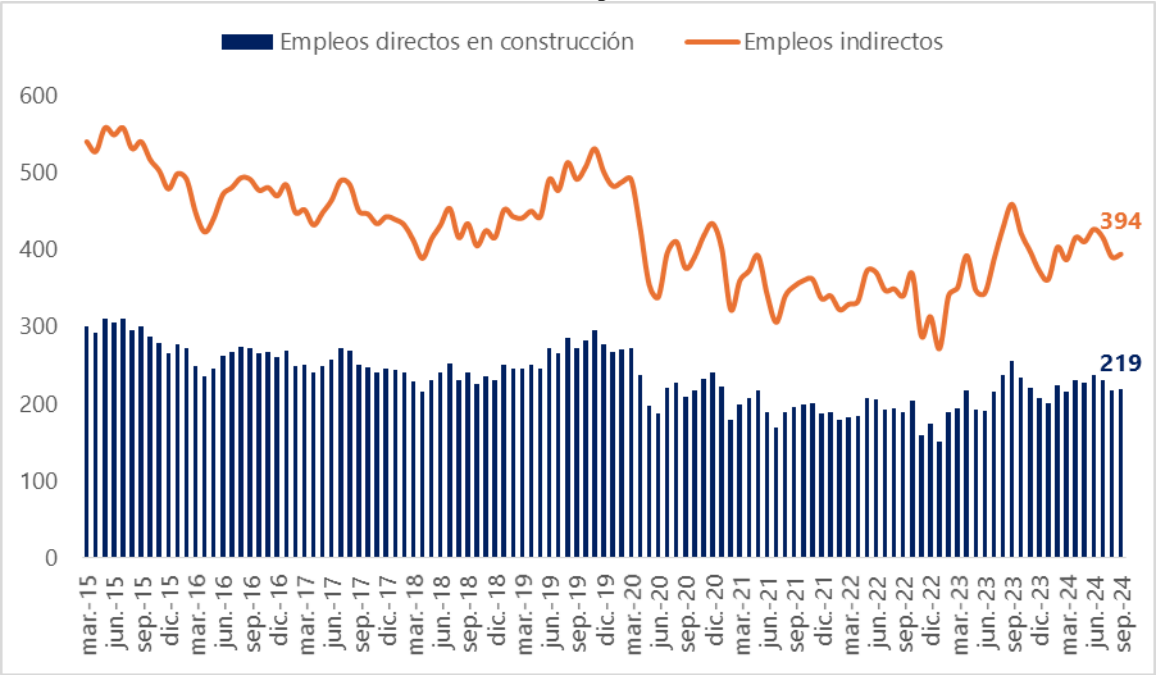
Las iniciaciones de vivienda alcanzaron un total de 35.862 unidades, lo que representa un aumento del 19,63% anual. La VIS + VIP participaron con el 82%



La vivienda es uno de los motores para la reactivación económica y la generación de empleo con más de 219 mil empleos directos y 394 mil puestos de trabajo indirectos en el trimestre móvil a septiembre del 2024. Este impacto económico positivo se extiende a lo largo de la cadena de valor, como el suministro de materiales de

construcción, lo que se traduce en empleo adicional en la producción, distribución y venta de estos materiales; en el comercio y el retail y genera empleo en las industrias relacionadas con la innovación.

Número de ocupados directos e indirectos en el sector de la construcción en Bogotá (miles)
Trimestre móvil a septiembre de 2024



Fuente: CAMACOL

Una de las principales preocupaciones en el sector, es la fuerte caída de la actividad comercial y de los inicios de nuevas obras, que afectarían la generación de empleo, tal como se observa en el cuadro facilitado por Camacol B&C, las unidades de proceso en construcción en la ciudad de Bogotá en el mes de septiembre de 2024 aumentaron levemente en 1,4% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el año corrido a septiembre de este año las iniciaciones cayeron 9,6%, las ventas 13,5% y los lanzamientos 31,4% con respecto al mismo periodo del año 2023.

		Unidades de vivienda	Variación % anual
Unidades en proceso de construcción (mes de septiembre de 2024)	Colombia	367.555	-5,4%
	Bogotá	115.037	1,4%
	Colombia	104.929	-13,9%

Iniciaciones (año corrido a septiembre de 2024)	Bogotá	26.765	-9,6%
Ventas (año corrido a septiembre de 2024)	Colombia	106.496	-1,2%
	Bogotá	26.253	-13,5%
Lanzamientos (año corrido a septiembre de 2024)	Colombia	78.081	-19,9%
	Bogotá	17.162	-31,4%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C con base en Coordinada Urbana ®

Metros cuadrados licenciados para vivienda nueva en Bogotá Años 2017-2024*	
2017	2.113.167
2018	1.902.184
2019	2.746.529
2020	1.873.794
2021	2.090.705
2022	4.324.484
2023	2.301.298
2024*	684.766

*2024 hasta el mes de agosto

Entre los años 2002 y 2022 se han adoptado en la ciudad 74 Planes Parciales, en el periodo 2020-2024 se lograron adoptar 26 planes parciales con un potencial de desarrollar 138.138 viviendas.

Planes Parciales adoptados	Cantidad	Unidades de Vivienda	
2020	2	19.553	
2021	5	50.401	
2022	2	6.044	
2023	15	45.851	
2024	2	16.289	
TOTAL	26	138.138	
		57.511	NO VIS
		58.771	VIS
		21.856	VIP
PP Desarrollo	14		
PP Renovación	2		

Fuente: CAMACOL B&C

2.2 Política de vivienda en el Plan de desarrollo 2020-2024

Del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social”, el tema de vivienda quedaron reseñados varios avances en materia de vivienda, puntualmente en lo que compete al proyecto:

- Iniciación de Vivienda de Interés Social -VIS y Vivienda de Interés Prioritario –VIP: se gestionaron 77.954 iniciaciones de vivienda, de las cuales 55.649 corresponden a VIS y 22.305 son VIP, beneficiando 212.622 habitantes de todos los grupos étnicos y etarios, de las localidades de Kennedy, Engativá, Usme, Usaquén, San Cristóbal, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.
- Subsidios de Mejoramiento de Vivienda: durante el transcurso del PDD 2020-2024, se asignaron 958 subsidios de mejoramiento de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva, distribuidos en las localidades de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba y Ciudad Bolívar; logrando así beneficiar aproximadamente 2.682 personas. Ahora bien, frente a la implementación se reportó una ejecución de 1.065 intervenciones, contabilizadas a partir de la firma de los contratos de obra y frente a las entregas realizadas, el cumplimiento es de 201 intervenciones realizadas.⁵²

2.3 Política de vivienda en el Plan de desarrollo 2024-2028

El actual Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, en el Objetivo Estratégico 4, “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”, se definió el programa “4.31. Acceso equitativo de vivienda urbana y rural” donde quedaron plasmadas las siguientes metas:

- Promover la iniciación de 80.000 Unidades de Viviendas VIS y VIP en Bogotá.
- Ejecutar 48 Trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos en la Herramienta Tecnológica –Ventanilla Única de la Construcción
- Promover 9.000 soluciones habitacionales en el marco del portafolio de vivienda, incluyendo un 5% de viviendas en reuso.
- Promover la iniciación de 1.200 unidades de vivienda nueva en estratos 1 y 2.⁵³

Del mismo modo, en el programa 2 “Bogotá confía en su bienestar” se estableció dentro del programa “2.07. Bogotá, una ciudad con menos Pobreza”, la siguiente meta producto:

⁵² Informe de balance y rendición de cuentas del plan de desarrollo distrital 2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo xxi. Corte a mayo 2024.

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/informe_de_balance_de_resultadospdd_cierre_mayo2024_16102024.pdf

⁵³ https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/anexo_4._metas_de_producto.pdf

- Asignar 75.000 subsidios y/o instrumentos financieros para adquisición de vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento en los diferentes programas de la SDHT.

Ahora un avance importante que trae el actual plan de desarrollo y que permite darle viabilidad a lo plasmado en este proyecto es el artículo 177:

***Artículo 177. Comisión Intersectorial de Suelo e Infraestructura de Hábitat del Distrito Capital.** Créese la Comisión Intersectorial de Suelo e Infraestructura de Hábitat a partir de la expedición del presente Plan de Desarrollo, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Acuerdo 257 de 2006, con el fin de promover el desarrollo urbano formal, la reactivación económica, la articulación interinstitucional y la promoción del empleo.*

Dicha instancia de coordinación distrital será liderada por el Alcalde Mayor quien podrá delegar en la Secretaría de Distrital de Hábitat y tendrá la función de asegurar la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda formal y de infraestructura social y permitirá realizar el seguimiento, agilización y racionalización de trámites, con las distintas entidades involucradas en la cadena de urbanismo y construcción.

***Parágrafo 1.** Esta Comisión Intersectorial será una de las instancias del Sistema de Coordinación del Distrito Capital del que trata el artículo 98 de este Plan Distrital de Desarrollo.*

***Parágrafo 2.** La administración distrital reglamentará las funciones, competencias, conformación y funcionamiento de la Comisión.*

***Parágrafo 3.** El funcionamiento de la Comisión no implicará un incremento en los gastos de funcionamiento de la Secretaría Distrital de Hábitat.*

2.4 Política de vivienda en el POT.

El nuevo POT estableció unas políticas en materia de vivienda dentro del nuevo POT, que van de acuerdo al tratamiento ya sea desarrollo, renovación urbana, consolidación o el de mejoramiento integral.

Del mismo modo, el POT contempla diversos instrumentos jurídicos de planificación, como las Actuaciones Estratégicas son intervenciones urbanas integrales en ámbitos espaciales determinados donde confluyen proyectos o estrategias de intervención orientadas a la gestión integral del hábitat y la producción de vivienda para concretar el modelo de ocupación territorial.

La meta contemplada es poder hacer iniciaciones de vivienda proyectadas en 786.639 soluciones de vivienda entre oferta nueva y otras alternativas (De las cuales 197.457 se producirán en alternativas como el reuso de edificaciones, así como por la generación de oferta pública de vivienda). Básicamente, dicha propuesta se concentraría en:

- Centralidad Reverdecer del sur
- Ciudad Lagos de Torca
- Ciudadela Educativa y del Cuidado (entre Juan Amarillo y la Conejera)
- Revitalización 20 de Julio en torno al cable aéreo de San Cristóbal
- Revitalización de Los Mártires
- Revitalización zona de Reencuentro

La otra apuesta está enfocada en la vivienda de Interés Social y Prioritario, allí la meta es de 531.777 viviendas de interés social y prioritario iniciadas (incluye reúso y oferta pública).

No obstante a ello, uno de los aspectos más polémicos en el POT fue establecer un mínimo de área en las viviendas que fue de 42 metros cuadrados para VIS, esta situación conllevaría a que no se construya en las zonas donde el precio de suelo es más alto y conllevaría a la expulsión de este tipo de proyectos a los municipios cercanos. Otro de los aspectos considerados críticos en el nuevo POT fue el incremento de las cargas urbanísticas en los diferentes tratamientos y las consideraciones generales de cesiones para espacio público.

Cálculo de la obligación de cargas locales asociadas a parques, plazas y plazoletas aplicables al tratamiento de desarrollo.

Índice de Construcción	CESIÓN POR ANU			
	Con obligación VIS y VIP en sitio		Sin obligación VIS y VIP en sitio	
	Total Obligación en Espacio Público	% Máximo a trasladar o compensar	Total Obligación en Espacio Público	% Máximo a trasladar o compensar
≤ 1	17%	0%	22%	0%
$\leq 1,25$	23%	0%	28%	0%
$\leq 1,75$	34%	0%	39%	0%
$\leq 2,00$	39%	5%	44%	5%
$\leq 2,25$	45%	11%	50%	11%
$\leq 2,50$	50%	16%	NA	NA
$\leq 2,82$	57%	22%	NA	NA

ANU: Cesión por Área Neta Urbanizable –ANU

Fuente: POT Decreto 555 de 2021

Cálculo de la obligación urbanística de cesión en suelo para espacio público.

RENOVACIÓN URBANA SIN PLAN PARCIAL		
IC Efectivo (ICe)	Cálculo de obligación total Porcentaje de cálculo para obligación en suelo (Fs)	Condición para el desarrollo del proyecto
$ICe \leq 1,3$	N/A	Licenciamiento urbanístico
$1,3 < ICe \leq 2$	20%	
$2 < ICe \leq 3$	27%	
$3 < ICe \leq 4$	35%	
$4 < ICe \leq 5$	45%	

Fuente: POT Decreto 555 de 2021

2.5 Papel de las entidades en la política de vivienda en Bogotá.

El Sector Hábitat en su conjunto es el responsable de formular los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat para el Distrito Capital y gestionar soluciones habitacionales en la modalidad de vivienda nueva, usada o en arriendo, otorgar mejoramiento integral de barrios, y dar acceso a los servicios públicos.

El decreto 561 de 2022, adopta la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat de Bogotá 2022-2031, en dicho marco normativo se plantea como estrategia para generar herramientas que faciliten la producción a soluciones habitacionales, la de:

“Promover la oferta de vivienda. A través de instrumentos, acciones y actuaciones que incentiven, faciliten y habiliten el desarrollo de soluciones habitacionales para solventar las necesidades de vivienda en el territorio. Asimismo, se gestionará suelo útil destinado para la construcción de vivienda social y prioritaria con los adecuados soportes de bienes y servicios urbanos y rurales”.

Del mismo modo, en su artículo 14 se expresa:

Apoyo a la gestión de la Cadena de trámites de Urbanismo y Construcción. Con la finalidad de fortalecer la Cadena de trámites de Urbanismo y Construcción en el Distrito Capital, todas las entidades del nivel central y descentralizado de la administración distrital, entidades privadas, sociedades de economía mixta y demás que participen en esta cooperarán para la gestión y producción de vivienda y equipamientos de calidad en la ciudad.

Y se plantea, como uno de los lineamientos el apoyo para la gestión de los trámites por medio de la Ventanilla única de Construcción.

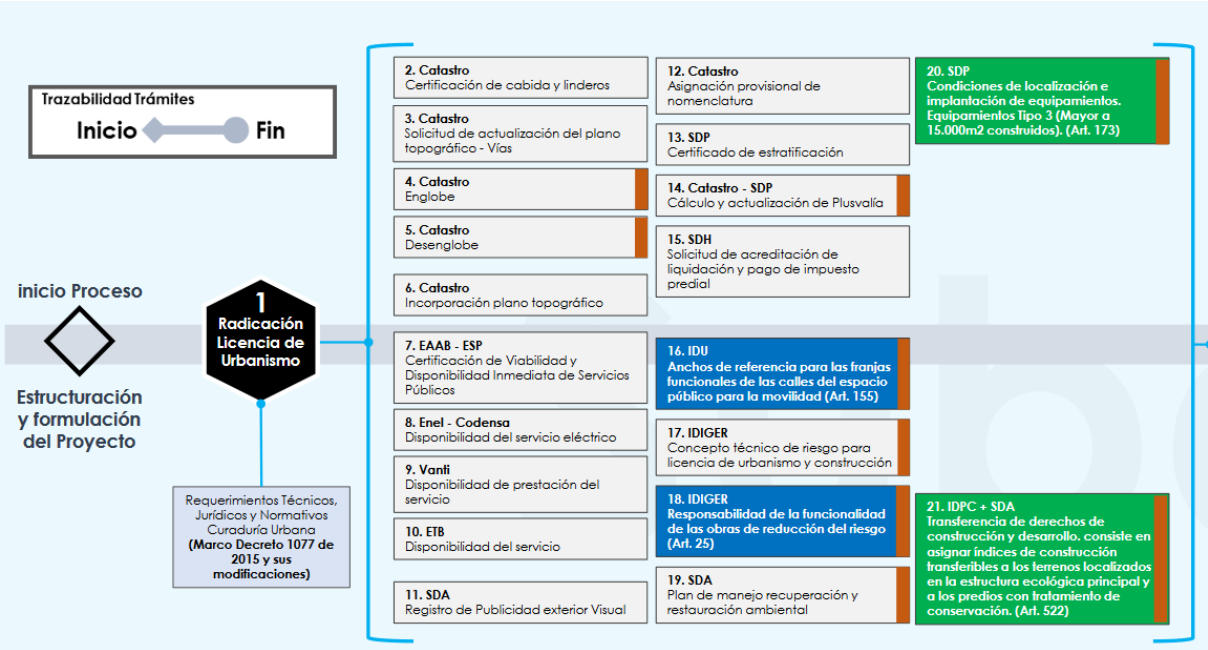
Apoyo para la gestión de los trámites por medio de la VUC. A través de la ejecución de acciones necesarias para la revisión, validación y/o entrega de la documentación de los trámites que se realicen a través de la plataforma Virtual Ventanilla Única de la Construcción (VUC), cumpliendo con los lineamientos que para el efecto emita la Secretaría Distrital del Hábitat, y considerando que:

2.1. Los proyectos que se adoptan mediante instrumentos que priorice la Secretaría Distrital del Hábitat, serán acompañados por medio del Banco de Proyectos de Gestión de Suelo y podrán contar con convenio asociativo que facilite su gestión.

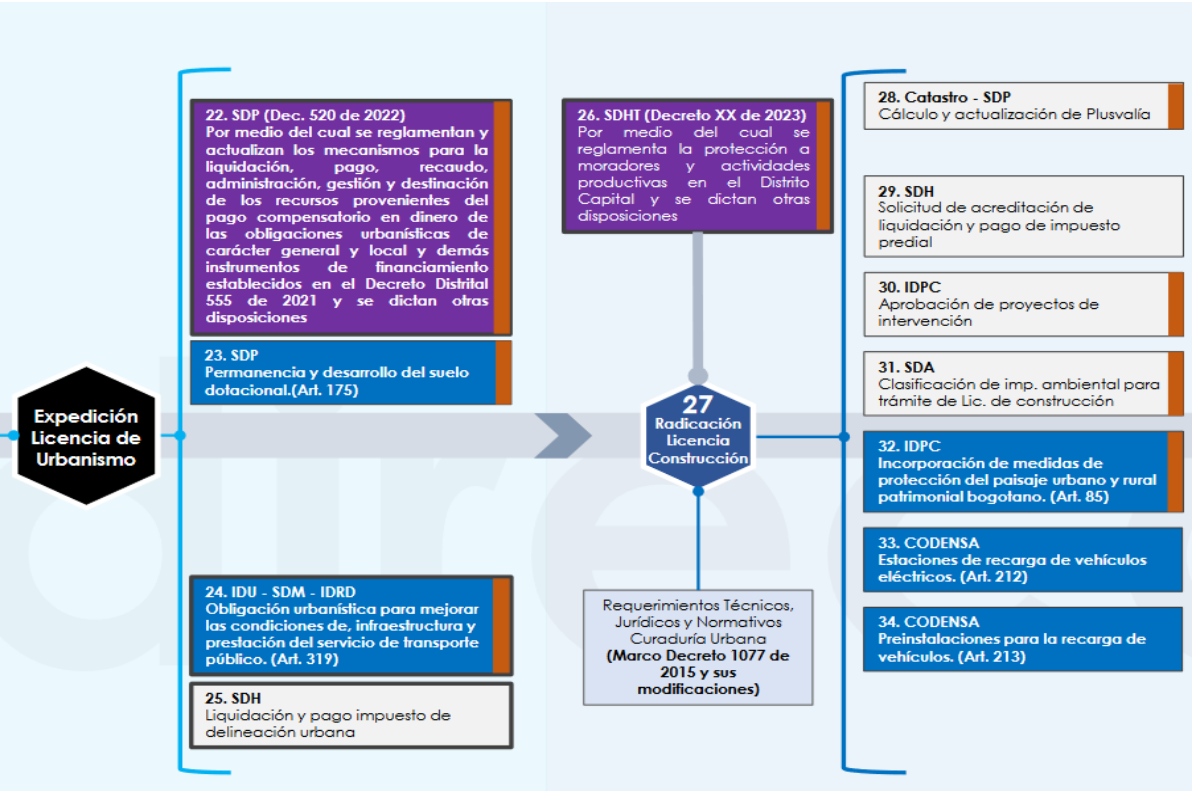
2.2. Los proyectos que acudan directamente a licenciamiento y que se prioricen por la Secretaría Distrital del Hábitat, serán acompañados por la Mesa de Soluciones desde el proceso de licenciamiento y hasta la entrega y recibo de las obras de urbanismo y las cesiones obligatorias correspondientes que faciliten su gestión.

Parágrafo. Para facilitar la gestión de equipamientos de la ciudad las entidades distritales podrán gestionar los trámites a través de la VUC. De igual manera, con el objetivo de promover la dinámica económica en el sector de la construcción, la oferta de vivienda y el empleo, en la VUC se podrán tramitar proyectos de las diferentes soluciones habitacionales.

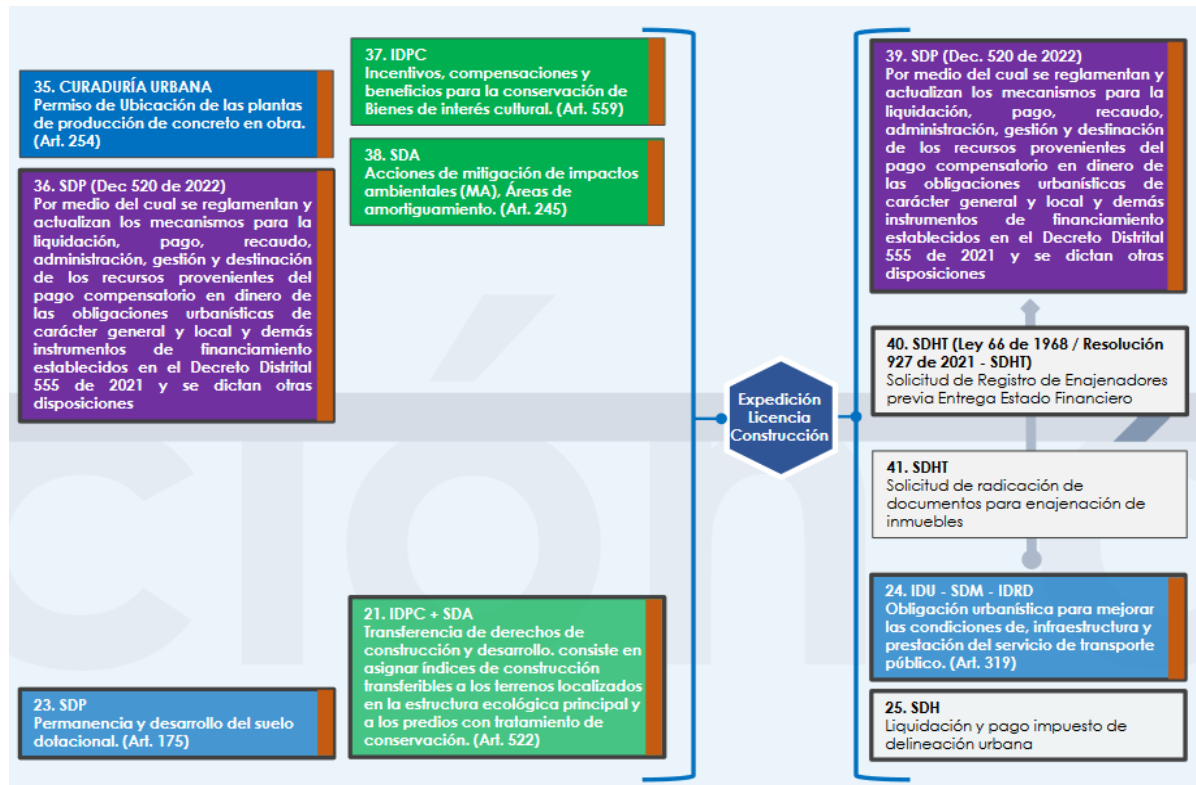
En Bogotá funciona la plataforma Virtual Ventanilla Única de la Construcción (VUC), es un canal virtual único de entrada a la información, solicitud, seguimiento y respuesta de los trámites asociados al proceso de urbanismo y construcción en Bogotá, respondiendo así al modelo distrital de supermercado virtual de trámites y servicios interconectados a través de una sola plataforma. A pesar de ello aún persiste una cadena de trámites de urbanismo y construcción que hace engorroso sacar adelante un proyecto de vivienda en Bogotá. De acuerdo con el gremio en Bogotá son más de 90 trámites en Bogotá.



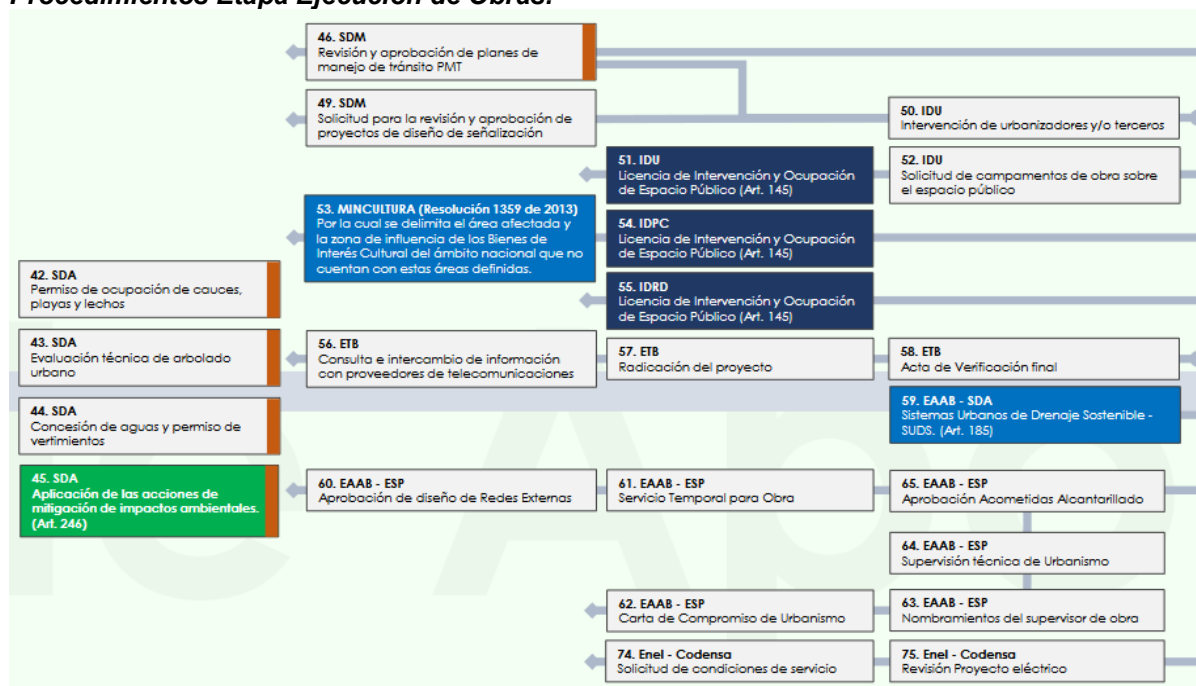
Fuente: CAMACOL

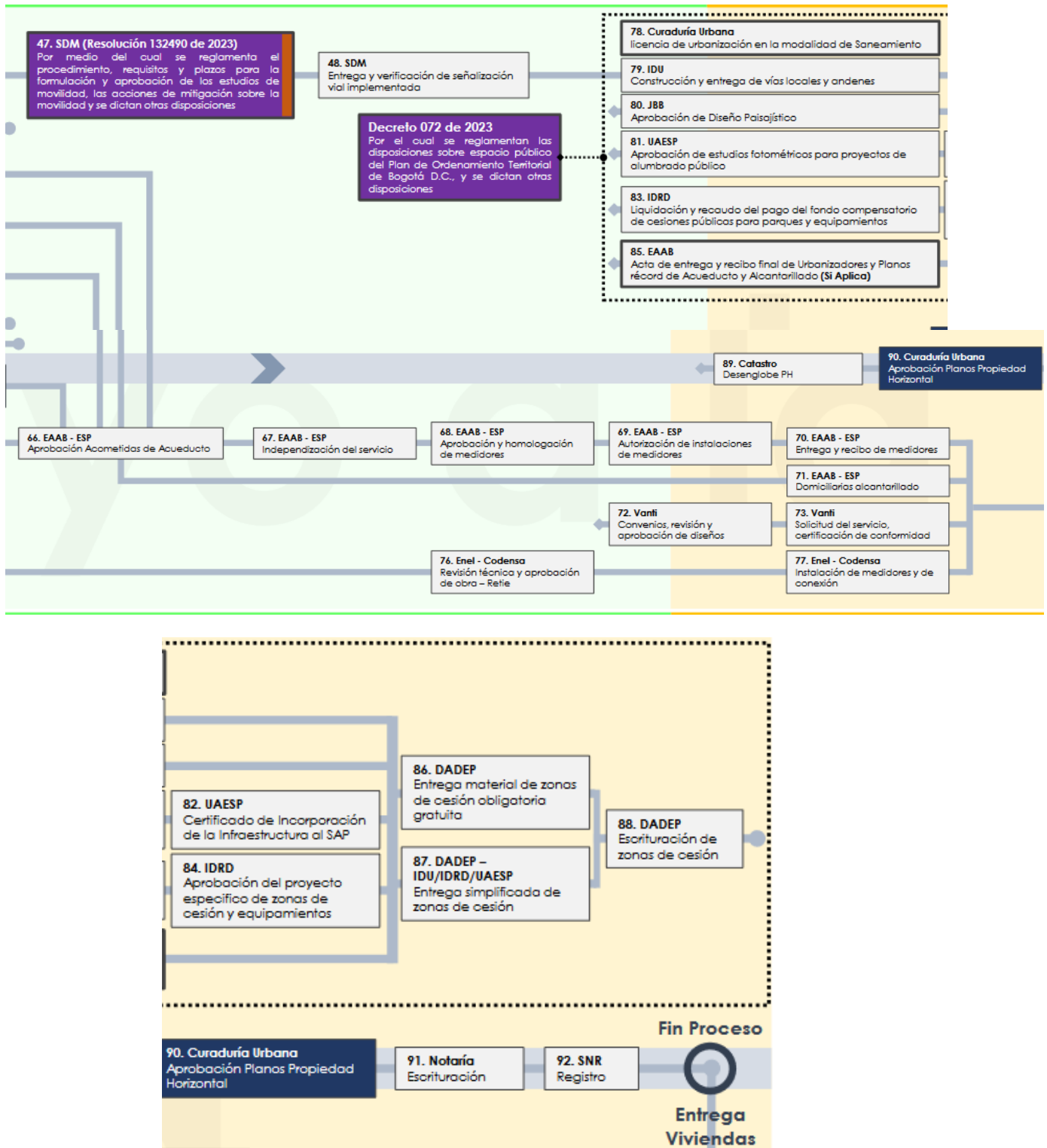


Fuente: CAMACOL



Procedimientos Etapa Ejecución de Obras.





Comisión Intersectorial de suelo e infraestructura para el hábitat

Esta Comisión es una figura creada en el Plan Distrital de DesalTollo 2024-2027 "Bogota Camina Segura", (Acuerdo 927 de 2024), y que vendría a reemplazar o ampliar el alcance de la actual Comisión Intersectorial para la Gestión del Suelo.

Tiene como objetivo promover "el desarrollo urbano formal, la reactivación económica, la articulación interinstitucional y la promoción del empleo, y tendrá la función de asegurar la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda formal y de infraestructura social y permitirá realizar el seguimiento, agilización y racionalización de trámites, con las distintas entidades involucradas en la cadena de urbanismo y construcción".

En tal sentido, el tercer informe publicado en la web de la SDHT, correspondiente al tercer trimestre de 2024 informa:

"se viene estructurando el proyecto de decreto a través del cual se atienda el mandato del Acuerdo 927 de 2024 de poner en marcha la nueva Comisión Intersectorial de Suelo e Infraestructura de Hábitat del Distrito Capital, reglamentando su funcionamiento. La Comisión Intersectorial de Suelo e Infraestructura de Hábitat del Distrito Capital, será la máxima instancia de coordinación, articulación para la toma de decisiones y seguimiento de:

(...) 3. Racionalización de trámites asociados a la cadena de urbanismo y construcción para la eficaz formulación y ejecución de proyectos de infraestructura para el hábitat, de espacio público y equipamientos para el cuidado asociados.

Adicional a ello, se va a crear la Unidad Técnica de Apoyo de Gestión de trámites. Esta unidad estará conformada por los siguientes integrantes:

- a) Subdirector/a de Apoyo a la Construcción o de SDHT quien la presidirá*
- b) Subdirector/a de Gestión del Suelo de SDHT*
- c) Subsecretario/a de Planeación Territorial de SDP*
- d) Director/a Técnico/a de predios del IDU*
- e) Gerencia de atención al cliente de EAAB*
- f) Subgerencia de planeamiento y estructuración de RENOBO*
- g) Gerente de Información Catastral de UAEC*
- h) Subdirector/a de Registro Inmobiliario de EP de DADEP*
- i) Subdirector/a de análisis de riesgos y efectos de cambio climático de IDIGER*
- j) Director/a del IDPC*
- k) Subdirector/a técnico/a de construcciones del IDRD*
- l) Subdirector/a técnica y operativa del JBB*
- m) Director/a de Gestión Ambiental de SDA*
- n) Subsecretario/a de Gestión de SDM*
- o) UAESP*
- p) Secretaria General y asuntos corporativos de ETB*
- q) Director/a Oficina de atención al ciudadano SDH*
- r) Demás entidades que formen parte de la cadena de urbanismo y construcción Conformadas por los siguientes directivos o sus delegados: Se podrá invitar a las UAT a los Directores a cargo de trámites de urbanismo y construcción (o quien*

*haga sus veces) de las empresas de servicios públicos como VANTI, ENEL, y las demás que participen en la cadena de urbanismo y construcción.*⁵⁴

6. MARCO LEGAL

Nivel Constitucional:

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 313, faculta a los concejos municipales y distritales para:

“(...) 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.”

De igual manera, el artículo 51, reconoce el derecho a que todos los colombianos puedan acceder a una vivienda digna, por ello expone que es menester del Estado *“fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”*

La Corte Constitucional ha señalado en sentencia de unificación **Sentencia SU016/21**

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y OBLIGACIONES CORRELATIVAS

El derecho a la vivienda también conlleva obligaciones, entre las que se encuentran: (i) un ejercicio conforme al principio de buena fe, lo cual implica actuar con honestidad, lealtad y rectitud; (ii) observar los mandamientos constitucionales y legales que regulan el debido aprovechamiento y protección del espacio público, y la protección del medio ambiente; (iii) utilizar los mecanismos y canales legales instituidos para el acceso a la vivienda y la postulación a los programas correspondientes; y, en general, un ejercicio del derecho que considere, no sólo el interés particular, sino a la sociedad en su conjunto.

Asimismo, a través de la sentencia T-420/18, la corte constitucional establece el alcance del derecho a la vivienda digna:

La Corte Constitucional ha analizado la naturaleza jurídica de esta garantía y ha determinado que se trata de un derecho fundamental autónomo, (...), que se aplica para todos, indistintamente de que se trate de personas o familias e independientemente de su edad, sexo o situación económica, es decir, sin sujeción a cualquier tipo de discriminación. De igual manera, ha establecido que este derecho no debe contener una

⁵⁴ https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/documents/2024-12/TERCER_INFORME_DE_GESTION_TRIMESTRAL_COMISION_INTERSECTORIAL_PA_RA_LA_GESTION_DEL_SUELO_2024.PDF

interpretación restrictiva, la cual lo limite simplemente a contar con un “*techo por encima de la cabeza*”, sino que este debe implicar el “*derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte*”.

Al respecto la doctrina menciona que el derecho a la vivienda digna, “no es un derecho de carácter fundamental, sin embargo, dictamina, que es el Estado quien debe proporcionar medidas necesarias para dotar a los colombianos de una vivienda de igual condición, portando unos parámetros que den una legalidad igualitaria definida.”⁵⁵

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- PIDESC, señala en el Artículo 11 núm. 1º que toda persona tiene derecho “*a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia*”

Leyes.

En el artículo 5 de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 27 de la Ley 1469 de 2011, establece como solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro, siendo acciones conducentes para su obtención, entre otras, el mejoramiento, habilitación y subdivisión de vivienda.

Es importante señalar que la Ley 388 de 1997, expedida por el Gobierno Nacional, la cual se dio a conocer como la “Ley de Desarrollo Territorial”, establece

“Artículo 1o. OBJETIVOS. La presente ley tiene por objetivos:

(...) 2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.”

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.

(...)

⁵⁵ (2006, Dikaion U. Sabana. Vol 15) <https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1349> Olano García, H. A. (2009). El derecho a la vivienda digna en Colombia. *Dikaion*, 15(2). Recuperado a partir de [tps://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1349](https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1349)

Artículo 3 Función pública del urbanismo.

1. *Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.*
2. *Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.*

(...)

4. *Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.*

Artículo 18. El programa de ejecución describe que dentro del programa de ejecución se definirán los programas y proyectos de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios que se ejecutarán en el período correspondiente, se localizarán los terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social en el municipio o distrito y las zonas de mejoramiento integral, señalando los instrumentos para su ejecución pública o privada. Igualmente se determinarán los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren prioritarios. Todo lo anterior, atendiendo las estrategias, parámetros y directrices señaladas en el plan de ordenamiento.

ARTICULO 91. CONCEPTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. <Consultar vigencia de este artículo directamente en la Ley 9 de 1989> El artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, quedará así:

"Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda.

En el artículo 99 extiende los plazos sobre las Licencias urbanísticas por parte de las entidades competentes y los Curadores Urbanos Licencias:

Modificado por el artículo 182 del decreto nacional 019 de 2012. Licencias Urbanísticas

(...) *"Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amueblamiento.*

La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y realizar el loteo o subdivisión de predios.

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma.

Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición."

(...) Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento (sic). [Ver el Decreto Nacional 1052 de 1998](#)

(...) numeral 3: "Las entidades competentes y los curadores urbanos, según sea del caso, tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la fecha de la solicitud. Vencidos los plazos sin que las autoridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderán aprobadas en los términos solicitados, quedando obligados el curador y los funcionarios responsables a expedir oportunamente las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto presentado mediante la aplicación del silencio administrativo positivo. El plazo podrá prorrogarse hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten"

4. La invocación del silencio administrativo positivo se someterá al procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo.

5. El urbanizador, el constructor, los arquitectos que firman los planos urbanísticos y arquitectónicos y los ingenieros que suscriban los planos técnicos y memorias son responsables de cualquier contravención y violación a las normas urbanísticas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que se deriven para los funcionarios y curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravención o violación de las normas correspondientes.

6. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo.”

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, en aplicación del principio de coordinación, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus funciones, de igual forma, el literal d) del artículo 3 de la Ley 1537 de 2012, establece que la coordinación entre la Nación y las Entidades Territoriales se refiere, entre otros, al otorgamiento de estímulos y apoyos para el mejoramiento de vivienda.

En el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 prevé que: “(...) *corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: (...) 76.2.2. Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad con los criterios de focalización nacionales, si existe disponibilidad de recursos para ello*”.

En la Ley 1469 de 2011 dentro de sus objetivos en el artículo 1, se encuentra:

1. Facilitar la ejecución de operaciones urbanas integrales en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, organización y gestión de la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, los particulares, las autoridades ambientales y las empresas de servicios públicos domiciliarios con la política nacional urbana, a fin de promover la sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano, controlar la especulación del suelo, velar por la defensa del espacio público y la protección del medio ambiente y promover una política integral de la gestión del riesgo.

2. En desarrollo de los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, definir los mecanismos y procedimientos que permitan al Gobierno Nacional en conjunto con las administraciones de los municipios y distritos y, en ejercicio de sus respectivas competencias, promover, formular, adoptar y ejecutar operaciones urbanas integrales eficientes, mediante la figura de Macroyectos de Interés Social Nacional, que tengan por objeto agilizar el proceso de habilitación de suelo urbanizable e incrementar la escala de producción de vivienda teniendo en cuenta el respectivo déficit de vivienda urbana de cada municipio o distrito.

3. Complementar la política nacional urbana con instrumentos que promuevan la participación y concurrencia efectiva del Gobierno Nacional con las Entidades Territoriales en el desarrollo de operaciones urbanas integrales de impacto urbano, metropolitano o regional, que garanticen la utilización equitativa y racional del suelo, conforme al interés general, para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna y a los servicios públicos domiciliarios.

(...)

7. Promover que los Macroproyectos se desarrollen con criterios de urbanismo social, lo cual implica realizar modelos de intervención con el objetivo de transformar positivamente, desde los componentes social, físico e interinstitucional, un territorio determinado, al incorporar todos los elementos del desarrollo en forma simultánea y planeada, dirigidos a garantizar que la construcción de los proyectos urbanísticos se realicen con adecuados estándares de calidad urbanística y ambiental, incorporando mecanismos de participación ciudadana según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 388 de 1997."

En el Decreto 19 de 2012 y con respecto a las licencias Urbanísticas en su artículo 182 modifica los numerales 1 y 7 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, quedarán así:

"1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.

La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y realizar el loteo o subdivisión de predios.

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma.

Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición."

(...) "7. El Gobierno Nacional establecerá los documentos que deben acompañar las solicitudes de licencia y la vigencia de las licencias, según su clase. En todo caso, las licencias urbanísticas deberán resolverse exclusivamente con los requisitos fijados por las normas nacionales que reglamentan su trámite, y los municipios y distritos no podrán establecer ni exigir requisitos adicionales a los allí señalados."

Y en el cumplimiento de las normas técnicas en el artículo 183 del mismo Decreto, define que el artículo 2 de la ley 400 de 1.997 queda:

"ARTÍCULO 2. *Alcance.* Las construcciones que se adelanten en el territorio de la República deberán sujetarse a las normas establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que la reglamenten.

Corresponde a las oficinas o dependencias distritales o municipales encargadas de conceder las licencias de construcción, la exigencia y vigilancia de su cumplimiento. Estas se abstendrán de aprobar los proyectos o planos de construcciones que no cumplan con las normas señaladas en esta Ley o sus reglamentos.

La construcción deberá sujetarse estrictamente al correspondiente proyecto o planos aprobados.

PARÁGRAFO. *En todo caso, salvo disposición legal en contrario, las autoridades municipales y distritales no podrán expedir ni exigir el cumplimiento de normas técnicas o de construcción diferentes a las contempladas en esta ley y en las disposiciones que la reglamenten."*

Artículo 185 *Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, el artículo 71 de la Ley 962 de 2005, quedará así:*

En el artículo 71. Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. El interesado en adelantar planes de vivienda deberá radicar únicamente los siguientes documentos ante la instancia de la administración municipal o distrital encargada de ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles contempladas en la Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979:

a. Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a tres (3) meses;

b. Copia de los modelos de contratos que se vayan a utilizar en la celebración de los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirentes, a fin de comprobar la coherencia y validez de las cláusulas con el cumplimiento de las normas que civil y comercialmente regulen el contrato;

c. El presupuesto financiero del proyecto;

d. Licencia urbanística respectiva, salvo que se trate del sistema de preventas;

e. Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre gravado con hipoteca, ha de acreditarse que el acreedor hipotecario se obliga a liberar los lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante el pago proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción.

PARÁGRAFO 1. *Estos documentos estarán a disposición de los compradores de los planes de vivienda en todo momento con el objeto de que sobre ellos efectúen los estudios necesarios para determinar la conveniencia de la adquisición.*

PARÁGRAFO 2. *El Gobierno Nacional reglamentará la forma de radicar los documentos y los términos y procedimientos para revisar la información exigida en el presente artículo.*

PARÁGRAFO 3. *En ningún caso podrá exigirse la ejecución parcial o total de obras de urbanización o construcción, según sea el caso, como condición previa a la radicación de documentos de que trata el presente artículo; sin embargo, se deberá atender lo previsto en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 9 de 1989. En el evento que se requiera radicar nuevos documentos o se cambie alguna condición de los ya radicados, la autoridad municipal o distrital no podrá solicitar permiso, autorización o trámite adicional diferente a la simple radicación del nuevo documento."*

"ARTÍCULO 186. *Resolución de las solicitudes con base en las normas que fundamentaron la expedición de la licencia. En los trámites urbanísticos que se deban realizar con posterioridad a la expedición de una licencia urbanística, la autoridad competente tendrá la obligación de resolver las solicitudes únicamente con base en las normas que fundamentaron la expedición de la respectiva licencia.*

(...) ARTÍCULO 188. Servicios públicos en el trámite de licencias urbanísticas. En el trámite de la licencia de urbanización con el concepto de disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios, la autoridad competente deberá aprobar el servicio temporal de acueducto y alcantarillado.

(...) ARTÍCULO 191. Requisitos para solicitar una licencia. Para solicitar una licencia de urbanización, parcelación y subdivisión, las entidades municipales y distritales no podrán exigir requisitos o documentos adicionales a los establecidos en la Ley y en sus reglamentos."

En el Decreto 075 de 2013 "Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas de Vivienda de Interés Social para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y renovación urbana y se dictan otras disposiciones. Disposiciones generales con definiciones" se determinan los porcentajes mínimos para desarrollo de programas de VIS en tratamientos de desarrollo, renovación urbana, la adecuación de las normas urbanísticas.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En el Decreto 1077 DE 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio"

Artículo 1, Objeto, debe lograr "formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del

país (...) teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico”.

(...) En su Artículo 2.2.6.1.1.2 Clases de licencias

(...) Artículo 2.2.6.1.1.4. Licencia de urbanización

(...) Artículo 2.2.6.1.1.6. Licencia de subdivisión y sus modalidades.

(...) Artículo 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades

(...) Artículo 2.2.6.1.1.9 Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés cultural.

(...) Artículo 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanísticas

(...) Artículo 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervención y ocupación del espacio público

(...) Artículo 2.2.6.1.1.15 Responsabilidad del titular de la licencia.

(...) SECCIÓN 2. PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y SUS MODIFICACIONES

(...) Artículo 2.2.6.1.2.1.1 Solicitud de la licencia y sus modificaciones

(...) Artículo 2.2.6.1.2.1.2 Radicación de la solicitud. Presentada la solicitud de licencia, se radicará y numerará consecutivamente, en orden cronológico de recibo, dejando constancia de los documentos aportados con la misma. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la documentación para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará dejando constancia de este hecho y advirtiéndole que deberá allanarse a cumplir dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes so pena de entenderse desistida la solicitud, lo cual se hará mediante acto administrativo que ordene su archivo y contra el que procederá el recurso de reposición ante la autoridad que lo expidió. Parágrafo. Si durante el término que transcurre entre la solicitud de una licencia o su modificación y la expedición del acto administrativo que otorgue la licencia o autorice la modificación, se produce un cambio en las normas urbanísticas que afecten el proyecto sometido a consideración del curador o de la autoridad municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias urbanísticas, el solicitante tendrá derecho a que la licencia o la modificación se le conceda con base en la norma urbanística vigente al momento de la radicación de la solicitud, siempre que la misma haya sido presentada en legal y debida forma.

(...) Artículo 2.2.6.1.2.1.3 Sistema de categorización para el trámite de estudio y expedición de licencias de construcción en función de su complejidad.

(...) *Artículo 2.2.6.1.2.1.4 Categorías.*

(...) *Artículo 2.2.6.1.2.1.5 Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción.*

(...) *Artículo 2.2.6.1.2.1.6 Titulares de la licencia de intervención y ocupación del espacio público*

(...) *Artículo 2.2.6.1.2.1.7 Documentos para la solicitud de licencias.*

SUBSECCIÓN 2. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA Y SUS MODIFICACIONES

En esta sección se encuentra la citación a vecinos, Intervención de terceros,

(...) *Artículo 2.2.6.1.2.2.3 De la revisión del proyecto*

(...) *2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones*

(...) *2.2.6.1.2.2.5 Información de otras autoridades.*

(...) **SUBSECCIÓN 3. DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, SUS MODIFICACIONES Y REVALIDACIONES**, en esta sección se encuentran los tiempos para resolver

(...) *Artículo 2.2.6.1.2.3.1 Término para resolver las solicitudes de licencias, sus modificaciones y revalidación de licencias.*

Los curadores urbanos y la entidad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias, según el caso, tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación de licencia vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en legal y debida forma. Vencido este plazo sin que los curadores urbanos o las autoridades se hubieren pronunciado, se aplicará el silencio administrativo positivo en los términos solicitados, pero en ningún caso en contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, quedando obligadas la autoridad municipal o distrital competente o el curador urbano, a expedir las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto presentado. La invocación del silencio administrativo positivo, se someterá al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten, el plazo para resolver la solicitud de licencia de que trata este artículo podrá prorrogarse por una sola vez hasta por la mitad del término establecido mediante acto administrativo de trámite que solo será comunicado. Las solicitudes de revalidación de licencias se resolverán en un término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.

Parágrafo 1°. Cuando se encuentre viable la expedición de la licencia, se proferirá un acto de trámite que se comunicará al interesado por escrito, y en el que además se le requerirá para que aporte los documentos señalados en el artículo 2.2.6.6.8.2 del presente decreto, los cuales deberán ser presentados en un término máximo de treinta (30) días contados a partir del recibo de la comunicación. Durante este término se entenderá suspendido el trámite para la expedición de la licencia.

El curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias, estará obligado a expedir el acto administrativo que conceda la licencia en un término no superior a cinco (5) días contados a partir de la entrega de los citados documentos. Vencido este plazo sin que el curador urbano o la autoridad municipal haber expedido la licencia operará el silencio administrativo a favor del solicitante cuando se cumpla el plazo máximo para la expedición de la misma. Si el interesado no aporta los documentos en el término previsto en este parágrafo, la solicitud se entenderá desistida y en consecuencia se procederá a archivar el expediente, mediante acto administrativo contra el cual procederá el recurso de reposición.

Parágrafo 2°. Con el fin de garantizar la publicidad y la participación de quienes puedan verse afectados con la decisión, en ningún caso se podrá expedir el acto administrativo mediante el cual se niegue o conceda la licencia sin que previamente se haya dado estricto cumplimiento a la obligación de citación a vecinos colindantes y demás terceros en los términos previstos por los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del presente decreto. Esta norma no será exigible

(...) En el Artículo 2.2.6.1.2.3.2 Plazos indicativos para pronunciarse sobre la solicitud de licencias de construcción.

Una vez se adopte por los curadores urbanos o por la autoridad municipal o distrital competente para la expedición de licencias el sistema de categorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.1.3 del presente decreto se tendrán en cuenta los siguientes plazos indicativos para pronunciarse sobre las solicitudes de las licencias de construcción: 1. Categoría IV Alta Complejidad: Cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma. 2. Categoría III Media-Alta Complejidad: Treinta y cinco (35) días contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma. 3. Categoría II Media Complejidad: Veinticinco (25) días contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma. 4. Categoría I Baja Complejidad: Veinte (20) días contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.

Estos plazos son de carácter indicativo y en los casos de los curadores urbanos se tendrán en cuenta para la evaluación anual sobre la calidad del servicio a cargo del curador urbano, de conformidad con lo previsto en el presente decreto. En todo caso, cuando no sea posible cumplir con los plazos previstos en el artículo 2.2.6.6.4.4 del presente decreto, los curadores urbanos podrán disponer de los cuarenta y cinco (45) días hábiles y la prórroga

de que trata el artículo 99 numeral 3 de la Ley 388 de 1997 para resolver la solicitud y el artículo anterior.

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.6.4.5 del presente decreto, los curadores urbanos deberán presentar un informe trimestral a las alcaldías municipales y distritales o a las entidades que estas designen, en el que reporten la fecha de radicación en legal y debida forma de las solicitudes de licencias de construcción y sus modalidades señalando la categoría de complejidad a la que pertenece cada una y la fecha en que se resolvió o desistió la solicitud, con el fin de verificar el cumplimiento de los plazos indicativos de que trata este artículo.”

En el Decreto No. 1083 DE 2021 *"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y se dictan otras disposiciones"* el decreto mantiene las generalidades del sector vivienda, subsidios, construcción, entidades y actores comprometidos, servicios públicos, propiedad horizontal; las definiciones y descripciones técnicas; Proceso de Planificación territorial; destinación del suelo para VIS y VIP

LEY 2079 DE 2021 (enero 14)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

“ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY. *La presente ley tiene por objeto reconocer la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos.*

La política pública de hábitat y vivienda, a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, diseñará los instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que se consideren necesarios para la asesoría e implementación de programas y proyectos habitacionales que contemplen de manera integral la producción de vivienda en las modalidades de adquisición, de vivienda, construcción de vivienda de interés social y prioritaria, mejoramiento de vivienda y entornos rurales dignos, orientados a la generación de la oferta requerida para satisfacer los requerimientos del país.”

“ARTÍCULO 2. OBJETIVOS. *La presente ley tiene por objetivos:*

1. Reconocer la política pública de vivienda y hábitat digno, como una política de Estado en aras de garantizar a largo plazo el desarrollo de los mecanismos y acciones que permitan su promoción, garantía y satisfacción.

2. Establecer mecanismos que permitan reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en Colombia, mediante el aumento subsidios, del financiamiento a la demanda y la promoción de la oferta y el suelo urbanizable en el país.

3. Garantizar la utilización del suelo y habitabilidad por parte de sus propietarios ajustada a la función social y ecológica de la propiedad y que permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios.

(...) 6. Facilitar la ejecución integral de la política de vivienda urbana y rural, mediante el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial.

7. Facilitar el acceso a la vivienda y hábitat en condiciones dignas de equidad, transparencia y enfoque diferencial, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y de las poblaciones en ellos asentadas.

8. Promover estrategias en las entidades territoriales, para el saneamiento de la falsa tradición.

PARÁGRAFO: Es deber del Estado, promover las políticas, planes y estrategias adecuadas, que garanticen la disminución progresiva del déficit habitacional, del que trata el numeral segundo.”

“(…) ARTÍCULO 4. POLÍTICA DE ESTADO DE VIVIENDA Y HÁBITAT. A través de la promulgación de la presente ley se reconoce a la política pública de vivienda y hábitat como una política de Estado, lo cual representa el entendimiento de la sociedad sobre la importancia que tiene la vivienda y el hábitat de calidad como motor de superación de la pobreza multidimensional y de dignificación de los colombianos.

Las autoridades gubernamentales, mediante programas, proyectos y acciones propenderán por la reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país, teniendo en cuenta las características y necesidades particulares de la población urbana y rural, así como la aplicación de un enfoque diferencial y territorial a favor de los grupos poblacionales que por sus características sociales, étnicas, culturales, económicas, ecológicas o de género requieran de un reconocimiento especial. El Gobierno Nacional debe promover las condiciones para que la equidad en el acceso a una vivienda digna y hábitat sea real y efectiva, el reconocimiento, respeto, la protección y la garantía del derecho a una vivienda.

Esta política de Estado traza directrices a largo plazo para que mediante un trabajo mancomunado e intersectorial; con participación del Gobierno Nacional y territorial, la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, se logre la satisfacción del derecho a una vivienda digna y de calidad, en donde los servicios públicos esenciales y la dotación de equipamiento colectivo constituyan mecanismos de articulación entre las viviendas y el hábitat, se resalte la importancia del ordenamiento del territorio en la búsqueda de un equilibrio armonioso entre el respeto al medio ambiente y la ocupación del suelo, y se promueva su correcta utilización con el fin de garantizar la función social de la propiedad y la prevalencia del interés general sobre el particular. (...)”

Decretos Distritales:

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), fue creada mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 e inició su operación a partir del 1 de enero de 2007, siendo la entidad rectora del sector hábitat. Su objeto es formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental. (Hábitat)

El Sector Hábitat en su conjunto es el responsable de formular los lineamientos e instrumentos de vivienda y hábitat para el Distrito Capital y gestionar soluciones habitacionales en la modalidad de vivienda nueva, usada o en arriendo, otorgar mejoramiento integral de barrios, y dar acceso a los servicios públicos.

Dentro del decreto 213 del 2020 y el 145 del 2021 la Secretaría Distrital del Hábitat ha evidenciado en (i) la operatividad del Manual de Oferta de Vivienda de Interés Social y Prioritaria, adoptado mediante Resolución 479 de 2021, modificada por la Resolución 756 de 2021, expedidas por la misma entidad; (ii) la asistencia de los ciudadanos a las ferias de vivienda; así como en (iii) la evaluación del proceso de asignación del subsidio distrital de vivienda, plasmada en los Documentos Técnicos de Soporte *“Balance de la asignación de subsidios para la adquisición de vivienda nueva a través del Programa Oferta Preferente”* y *“Documento Técnico de Soporte sobre la Variación del Costo Proyectado de Intervención en la Vivienda Progresiva”* la necesidad de hacer modificaciones a las referidas normas.

El decreto 561 de 2022, adopta la Política Pública de Gestión Integral del Hábitat de Bogotá 2022-2031, en dicho marco normativo se plantea como estrategia para generar herramientas que faciliten la producción a soluciones habitacionales, la de:

“Promover la oferta de vivienda. A través de instrumentos, acciones y actuaciones que incentiven, faciliten y habiliten el desarrollo de soluciones habitacionales para solventar las necesidades de vivienda en el territorio. Asimismo, se gestionará suelo útil destinado para la construcción de vivienda social y prioritaria con los adecuados soportes de bienes y servicios urbanos y rurales”.

Del mismo modo, en su artículo 14 se expresa: ***Apoyo a la gestión de la Cadena de trámites de Urbanismo y Construcción. Con la finalidad de fortalecer la Cadena de trámites de Urbanismo y Construcción en el Distrito Capital, todas las entidades del nivel central y descentralizado de la administración distrital, entidades privadas, sociedades de economía mixta y demás que participen en esta cooperarán para la gestión y producción de vivienda y equipamientos de calidad en la ciudad.***

Y se plantea, como uno de los lineamientos el *apoyo para la gestión de los trámites por medio de la Ventanilla única de Construcción.*

“Apoyo para la gestión de los trámites por medio de la VUC. A través de la ejecución de acciones necesarias para la revisión, validación y/o entrega de la documentación de los trámites que se realicen a través de la plataforma Virtual Ventanilla Única de la Construcción (VUC), cumpliendo con los lineamientos que para el efecto emita la Secretaría Distrital del Hábitat, y considerando que:

2.1. Los proyectos que se adoptan mediante instrumentos que priorice la Secretaría Distrital del Hábitat, serán acompañados por medio del Banco de Proyectos de Gestión de Suelo y podrán contar con convenio asociativo que facilite su gestión.

2.2. Los proyectos que acudan directamente a licenciamiento y que se prioricen por la Secretaría Distrital del Hábitat, serán acompañados por la Mesa de Soluciones desde el proceso de licenciamiento y hasta la entrega y recibo de las obras de urbanismo y las cesiones obligatorias correspondientes que faciliten su gestión.

Parágrafo. Para facilitar la gestión de equipamientos de la ciudad las entidades distritales podrán gestionar los trámites a través de la VUC. De igual manera, con el objetivo de promover la dinámica económica en el sector de la construcción, la oferta de vivienda y el empleo, en la VUC se podrán tramitar proyectos de las diferentes soluciones habitacionales”.

En el Decreto 241 DE 2022 “*Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales 213 de 2020 y 145 de 2021 relacionados con el Manual de Oferta de Vivienda de interés social e interés prioritario, y la promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales, y se dictan otras disposiciones*” donde genera los sistemas de informe de las preventas por parte de las constructoras a través de la Ventanilla Única de la Construcción VUC y a su vez la forma en que la Secretaría del Hábitat procederá , los beneficiarios , aportes distritales entre otros.

La [Ventanilla Única de la Construcción \(VUC\)](#) fue creada, desarrollada y puesta en marcha, como estrategia de apoyo al propósito del proyecto “Trámite Fácil”, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat, con el objetivo de automatizar los trámites de la cadena de Urbanismo y Construcción en Bogotá.

El 23 de octubre de 2013 la Secretaría del Hábitat de Bogotá, presentó la Ventanilla Única de la Construcción VUC, para simplificar y lograr automatizar los trámites relacionados al Urbanismo y la construcción.

La VUC permite solicitar los trámites de la cadena de manera virtual, diligenciando el formulario y adjuntando los requisitos exigidos por las entidades del Distrito, adicionalmente los constructores pueden solicitar citas para asesorías, revisiones, consultar el estado de sus trámites y utilizar los simuladores dispuestos en el portal.

La VUC permite a los funcionarios del Distrito agilizar su trabajo en la revisión de requisitos exigidos en los trámites ya que permite hacer consultas en otras entidades distritales de documentos como: certificado de tradición y libertad, certificado de existencia y representación legal, certificado catastral, certificado de estratificación, certificado de plusvalía, certificado de

vigencia de la matrícula de ingenieros de COPNIA, consulta de licencias de urbanismo y construcción, reporte de licencias de urbanismo y construcción.

3.1 Competencia del Concejo

El Concejo de Bogotá es competente para dictar normas relacionadas con el objeto del proyecto de acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales mencionadas que obligan al Estado a brindar las garantías para llevar a cabo planes de construcción de vivienda y la ejecución de estos.

Con el **Decreto Ley 1421 de 1993**, el Concejo Distrital de Bogotá D.C. es competente de conformidad con el artículo 12, cuya Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

(...)

- 1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.*
- 12. *Promover y estimular la industria de la construcción, particularmente la de vivienda; fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las normas vigentes sobre uso del suelo; y disponer las sanciones correspondientes. Igualmente expedir las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.”*

3.2 Impacto Fiscal

El presente proyecto no genera impacto fiscal toda vez que no afecta el MFMP, toda vez que en la ciudad existe la Política de Gestión Integral del Hábitat 2021-2030 (PGIH), que establece la estimación presupuestal para un horizonte de 10 años.

Tabla 16. Financiamiento de la PGIH (millones a pesos reales)

Objetivo Específico	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Costo total
1. Promover el acceso y disfrute a territorios de calidad y del cuidado.	108.606	94.324	47.936	80.343	66.604	67.771	62.997	64.128	71.944	28.061	692.714
2. Generar herramientas que faciliten la producción, acceso y mejora de soluciones habitacionales.	187.423	164.303	73.989	150.891	155.017	159.338	144.395	172.790	177.937	106.533	1.492.655
3. Potenciar los procesos de gobernanza en la gestión del hábitat.	11.806	7.482	4.112	4.067	6.226	2.511	6.361	4.635	6.798	1.184	55.183
Total general	307.835	266.110	126.037	235.302	227.847	229.620	213.752	241.553	256.679	135.779	2.240.552

Fuente: SDHT – SIS.

Nota: La información desagregada por cada acción está en el Plan de Acción Anexo 1 de este documento de política.

Adicional a ello, en el Banco Distrital de Programas y Proyectos se encuentra registrada la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D # 8084 “Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C,” tal como se ve en el cuadro este proyecto apuntaría a las metas de dicho proyecto de inversión, por lo que su implementación no causaría destinación adicional de recursos.

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D							
8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO							
(Cifras en millones de pesos corrientes)							
Producto MGA	Actividad	Insumo	2023	2024	2025	2026	2027
4509025 (V0624) -	Racionalizar 48 Trámite(s) y Otros procedimientos Administrativos para ser ejecutados en la VUC	Servicios de Información Implementados	\$ 0,00	\$ 204,46	\$ 424,73	\$ 370,44	\$ 403,74
4501001 (V0624) -	Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Vivienda VIS y VIP en Bogotá.	Servicios de Asistencia Técnica	\$ 0,00	\$ 410,38	\$ 1.043,66	\$ 642,85	\$ 1.189,68
4501001 (V0624) -	Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados.	Servicios de Asistencia Técnica	\$ 0,00	\$ 1.343,99	\$ 3.631,07	\$ 2.685,46	\$ 2.760,98
4509025 (V0624) -	Presentar 48 Informe(s) de uso del modulo tecnologico del banco de materiales y curaduría social de la VUC.	Servicios de Información Implementados	\$ 0,00	\$ 204,46	\$ 424,73	\$ 370,44	\$ 403,74
4509025 (V0624) -	Presentar 48 Informe(s) de resultados del estudio de solicitudes recibidas de Estaciones Radioelectricas en Bogotá.	Servicios de Información Implementados	\$ 0,00	\$ 272,61	\$ 566,30	\$ 493,92	\$ 538,32
4509025 (V0624) -	Ejecutar 48 Trámite(s) y/u otros procedimientos administrativos en la VUC.	Servicios de Información Implementados	\$ 0,00	\$ 481,30	\$ 991,03	\$ 864,36	\$ 942,06
Totales			\$ 0,00	\$ 2.917,21	\$ 7.081,55	\$ 5.427,47	\$ 6.238,52

Cordialmente, Honorables Concejales

ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA
Concejal de Bogotá D.C. - Partido Cambio Radical

EMEL ROJAS CASTILLO
Concejal de Bogotá D.C. - Partido Nueva Fuerza Democrática

Proy/Camilo Torres Castañeda - UAN HCRAGG
Álvaro Fernando Vera - UAN HCEMC

PROYECTO DE ACUERDO NO 403 DE 2025

PRIMER DEBATE

POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA A LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y TIEMPOS PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El Concejo de Bogotá, Distrito Capital,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el Numeral 1º del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO– El presente Acuerdo tiene por objeto implementar lineamientos que incentiven la generación de vivienda nueva y construcciones en Bogotá, facilitando la simplificación de los trámites y tiempos en la cadena de procedimientos de urbanismo y construcción en Bogotá.

ARTICULO 2. ALCANCE– El presente proyecto tiene como alcance la revisión de todos y cada uno de los procedimientos que deben gestionar los privados en acompañamiento con las diferentes entidades administrativas establecidas para las diferentes etapas, entre ellos en la etapa de licenciamiento, construcción, ejecución de Obras, terminación de obras y entrega de áreas de cesión.

ARTICULO 3. LINEAMIENTOS. Para la simplificación de los trámites y tiempos en la cadena de procedimientos de urbanismo y construcción en Bogotá, en cada una de las etapas enunciadas en el artículo segundo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientadores.

- a) Identificación de los procedimientos que hacen parte de la Cadena de Trámites de Urbanismo y Construcción que pueden ser objetos de simplificación.
- b) Creación de una estrategia de racionalización de trámites y tiempos en los nuevos procedimientos establecidos en el POT -Decreto Distrital No. 555 de 2021- y sus decretos reglamentarios.
- c) Acondicionamiento de las exigencias en tiempos para los tramites de licenciamiento y otras actividades, en especial las contenidas en el Decreto Ley No. 3680 de 2011, o las normas que se le adicione, lo complemente o modifique.
- d) Mejoramiento de la ventanilla única de construcción como mecanismo facilitador en las acciones que permitan la simplificación.
- e) Las demás que permitan el cumplimiento del artículo primero.

ARTICULO 4. COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ENTIDADES. Con el fin de concertar y articular las acciones que permitan la simplificación de trámites y los tiempos en la cadena de procedimientos de urbanismo y construcción en Bogotá, la Administración Distrital en la Comisión Intersectorial de Suelo e Infraestructura de Hábitat del Distrito Capital, creada en el Acuerdo Distrital 927 de 2024, podrá promover las acciones que den cumplimiento a los presente lineamientos.

ARTÍCULO 5. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 404 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO DISTRITAL DE PERSONAS REPORTADAS COMO EXTRAVIADAS Y DESAPARECIDAS EN BOGOTÁ D.C.”

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO.

Recientemente hemos conocido varios casos de personas reportadas como extraviadas, desaparecidas en extrañas circunstancias en Bogotá D.C., especialmente de niños, niñas y adolescentes. Varios de estos casos fueron conocidos a la luz pública a través de medios de comunicación o por cadenas de redes sociales de los familiares o amigos. Producto de estas situaciones, hemos observado que no se cuenta con un nivel de información detallada que permita medir y abordar el fenómeno en la ciudad de Bogotá.

Una persona reportada como extraviada y desaparecida por su familia o personas cercanas, es aquella cuyo paradero se desconoce y puede estar siendo víctima de algún delito. Un vivo ejemplo es lo que hemos observado en lo corrido de los últimos años, pues estas personas reportadas como extraviadas y desaparecidas aparecieron vivos, algunas fueron víctimas de sustancias narcóticas como escopolamina y demás sustancias similares. En otros casos aparecieron muertos, desconociendo el origen de estos hechos.

Es por eso, que como herramienta de política pública y criminal es importante examinar si estos casos obedecen a situaciones de desaparición voluntaria o efectivamente hacen parte de hechos delictivos que conllevan con la desaparición temporal de dicha persona.

En la mayoría de casos se desconoce la información o la causal de desaparición. La entidad que reporta oficialmente este tipo de hechos, es el *Instituto Nacional de Medicina Legal-INML*, a través del *Forensis* y los *boletines del Observatorio de Violencia*, en la cual muchos casos aparecen “Sin Información”

Proponemos en este proyecto, crear un registro distrital de personas reportadas como perdidas y desaparecidas que permita hacer seguimiento cualitativo y cuantitativo de este tipo de situaciones en la ciudad de Bogotá. El registro permitirá abordar y caracterizar el fenómeno, divulgar los derechos de los familiares, publicar información estadística de forma permanente y facilitar diferentes mecanismos de información para ayudar a las autoridades en la búsqueda de las personas extraviadas y desaparecidas.

Este proyecto fue presentado en el periodo anterior, con los siguientes radicados:

Radicados	Comisión	Ponentes	Ponencias
423-471 de 2022	Gobierno	H.C.Nelson Enrique Cubides Salazar H.C. Samir José Abisambra Vesga	positiva
055-229-518-646 de 2023	Hacienda	H.C. Juan Javier Baena Merlano H.C. Samir José Abisambra Vesga	Positiva
498 – 681 de 2024.	Gobierno	H.C. Diana Marcela Diago (Coordinadora) H.C. Quena Ribadeneira Miño	Positiva

Del mismo modo, la ex - concejala María Clara Ramírez Ferro, en el año 2005 presentó en diferentes oportunidades una iniciativa para crear un escenario de encuentro distrital de personas perdidas, extraviadas y desaparecidas y un sistema Distrital para el Encuentro de Personas Extraviadas y Desaparecidas, con los consecutivos 010 de 2005 y 094 de 2005.

II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

De acuerdo con las cifras del *Instituto Nacional de Medicina Legal-INML*, en promedio se reportan más de **2 mil casos** de personas desaparecidas en Bogotá D.C., en el año 2021 se evidenció un crecimiento del 22% comparado con la vigencia anterior y no ha logrado reducirse a los niveles del año 2020. A noviembre de 2023, el INML reportó para Bogotá **2.137 personas** en esta situación.

COMPARACIÓN ANUAL 2020 - 2024 GENERAL			
Vigencia	Periodo	Casos	Porcentaje
2020	Anual	2.007	
2021		2.446	22%
2022		2.435	-0.4%
2023		2.378	-2%
2024	Enero –Noviembre	2.137	

Fuente: <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa>

De los 2.1375 casos, 51 aparecieron muerto, 847 aparecieron vivos y van 1.239 que continúan perdidos. El rango de edad más común de personas desaparecidas en Bogotá se da entre los menores de 17 años, que para el 2024 sumaron 710 casos. Seguido por el rango de 20 a 29 años con 492.

(00 a 05) Primera Infancia	39
(06 a 11) Infancia	39
(12 a 17) Adolescencia	632
(18 a 28) Juventud	520
(29 a 59) Adultez	717
(Más de 60) Adulto Mayor	190

Fuente: INML

La caracterización de las personas desaparecidas que hace el INML incluye las clasificaciones de Desaparición Presuntamente Forzada (DPF) y Sin Información (SI). Esta última, se utiliza en aquellos casos en los cuales no se cuenta con información que permita presumir la comisión de un delito atentatorio contra la libertad personal y por las circunstancias de los hechos que no se pueden clasificar como situaciones asociadas a desastres naturales o casos remitidos para verificación de identidad.

2.1 Etiología de la palabra desaparecida.

Para definir este tipo de hechos, es importante remitirse a los informes FORENSIS, documento que cita a la criminóloga Carlota Barrios, para hacer una división del fenómeno de desaparición, clasificándolo según la causa, por un lado, y a las víctimas del delito por tipo de desaparición. (Accidental⁵⁶ y Criminal⁵⁷).

Con respecto a las desapariciones voluntarias, tenemos las personas que quieren ‘desaparecer’, y se marcha a donde nadie puede encontrarlo. En estos casos encontramos personas con dependencia de consumo de sustancias psicoactivas, trastornos mentales y aquellas que por diversa circunstancias o decisiones personales deciden ‘desaparecer’. (Deudas, relaciones amorosas, crisis económica, violencia familiar, entre otros).

Por su parte, están aquellas que pertenecen al grupo de las desapariciones forzosas, que implican que la persona no quiere desaparecer voluntariamente, sino que sufre alguna situación externa que genera su desaparición, en la cual, interviene una tercera persona. En estos casos, la autora señala que hay tres tipos de perpetradores:

1. *Agentes independientes*: Donde solo actúa un agresor, o como mucho cuenta con un colaborador necesario, un cómplice, un encubridor, etc., pero no están organizados.
2. *Agentes estatales*: Asociada a situaciones del conflicto armado interno, guerras civiles o internas, acá donde operan diferentes actores, como miembros de las fuerzas militares, por integrantes de sus servicios de inteligencia, cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares.
3. *Organizaciones criminales*: Casos en los que detrás de una desaparición existe un grupo criminal organizado, como puede ser un cártel, una mafia, un grupo terrorista, etc.⁵⁸

Bogotá sigue siendo la ciudad que más casos concentra desapariciones, con un **40%** del reporte a nivel nacional, es por ello que consideramos que la Administración Distrital debe tener una herramienta institucional que permita el abordaje de este fenómeno.

2.2 Mejorar el abordaje de una persona reportada como extraviada o desaparecida.

De acuerdo al INML, cuando se presume la desaparición de una persona, es decir, que pasa mucho tiempo sin reportar su ubicación, se debe iniciar la búsqueda consultando a los familiares y amigos más cercanos, recorrer los sectores aledaños al lugar donde fue visto por última vez, indagar en Estaciones de Policía, Hospitales, Clínicas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Fiscalía.

⁵⁶ La persona desaparecida accidental es aquella ha sido víctima de una catástrofe o accidente. Este tipo de desapariciones son provocadas por un fenómeno natural, producto de una enfermedad mental o un accidente, sin la intervención directa (dolo), de una tercera o terceras personas

⁵⁷ La persona desaparecida criminal es aquella que en contra de su voluntad es secuestrada, o es víctima de un crimen y su agresor la ‘hace desaparecer’ bien porque se deshace del cuerpo, o bien porque la persona es trasladada a un lugar donde no se la localiza.

⁵⁸ Información tomada del Forensis 2019. Publicado por el INML en su página web bajo el siguiente enlace:

<https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60>

De no obtener información en ninguno de estos lugares, los familiares o allegados, pueden dirigirse a cualquier punto de atención del *Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses*, para reportar el caso. Sin embargo, en muchos casos, las personas cuando acuden se les indican que solo puede activarse la búsqueda 72 horas después de sucedido el hecho.

No obstante, ante la ausencia de la persona, la *Fiscalía General de la Nación cuenta con el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU)*, una herramienta que se activa para ubicar a las personas que se presumen como desaparecidas. Su objetivo es que las autoridades judiciales ordenen en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a su localización. Esta se activa de manera verbal o escrita ante un juez o un fiscal.⁵⁹

Este método está estipulado en la Ley 971 de 2005, que reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente.⁶⁰ Aunque muchas personas creen que debe activarse a las 72 horas, la norma no determina un tiempo mínimo y el mecanismo puede activarse en cualquier momento de reportada la persona como desaparecida. Sin embargo, el mecanismo dura dos meses, para lo cual se reporta si apareció vivo, si apareció muerto o si no fue posible encontrarlo.

El artículo 6 de la **Ley 971 del 2005**, expresa: "*En ningún caso podrá exigirse que transcurra un determinado lapso para la presentación de la solicitud de activación del mecanismo de búsqueda urgente, ni las autoridades podrán negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten, o les sean ordenadas, so pretexto de que existen plazos legales para considerar a la persona como desaparecida.*"

Si la persona reportada como desaparecida aparece con vida, el protocolo exige que quien lo haya reportado debe presentarse ante la Policía Judicial o Fiscalía, para diligenciar acta de supervivencia, en la que se constatará su estado y se cerrará el caso.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, existen muchas dificultades para acceder a las rutas de atención, barreras jurídicas para el acceso a servicios institucionales, la débil presencia del Estado en las zonas más alejadas. Adicional a ello, expresa que:

*"estas dificultades también se expresan en los instrumentos existentes para averiguar el paradero de sus seres queridos. Un ejemplo es el Mecanismo de Búsqueda Urgente que, aunque es adecuado, muchas veces no se aplica correctamente. Esta herramienta posibilita que las autoridades ordenen de forma inmediata las diligencias necesarias para localizar a una persona desaparecida. No obstante, de manera inexplicable, a algunos familiares les siguen diciendo que deben esperar 72 horas para activar el trámite"*⁶¹

Ahora bien, teniendo en cuenta la situación del conflicto armado interno, el país ha hecho un análisis del fenómeno desde el punto de vista del conflicto armado, sin embargo, observamos que no existe una observación del fenómeno producto de otras estructuras criminales diferentes a esta situación.

Entre 1930 y el año 2020, hay **46.386 personas reportadas como desaparecidas en Bogotá**, lo que nos llamó la atención de las cifras es que más de 27 mil personas, prácticamente un **60%**, se desconoce el paradero de estas. **16.915 aparecieron vivo y 1.532 aparecieron muerto**. En Bogotá solamente 555 casos, durante ese periodo correspondió a desaparición forzada.

⁵⁹ Tomado de <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Mecanismo-de-Bu%CC%81squeda-Urgente-MBU.pdf>

⁶⁰ http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0971_2005.html

⁶¹ Tomado de: <https://www.icrc.org/es/document/colombia-personas-desaparecidas-2022>

Personas reportadas como desaparecidas según departamento/municipio del hecho y sexo de la víctima.
Bogotá, consolidado años 1930 – 2020

Tipo de Caso	Desaparición forzada	Sin Información
Apareció muerto	39	1.532
Apareció vivo	89	16.915
Desaparecido	427	27.384
Total	555	46.386

Fuente: INML

Aunque el Estado Colombiano cuenta con el *SIRDEC - Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres*, es una base de datos del Registro Nacional de Desaparecidos (RND), creado para guardar toda la información que se conoce sobre las personas desaparecidas, no ha sido fácil para las autoridades nacionales tener un abordaje de este fenómeno. Durante la búsqueda, las autoridades deben ingresar al SIRDEC la información nueva que conozcan del caso para que todos los datos estén en un mismo lugar y la búsqueda sea más efectiva.⁶²

La Ley 1531 de 2012, establece en su artículo segundo la creación de la “Acción de declaración de ausencia por desaparición forzada”. Allí se establece:

“Créase la acción de la Declaración de Ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria, entendiendo esta, como la situación jurídica de las personas de quienes no se tenga noticia de su paradero y no hubieren sido halladas vivas, ni muertas.”

2.3 Se debe fortalecer los mecanismos de información sobre personas extraviadas o desaparecidas.

El pasado mes de abril, la Revista Semana publicó un informe denominado: “¿Quién está desapareciendo a las personas en Bogotá? Así avanzan las investigaciones”. En dicho artículo se cita al secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, quien afirmó: “Son múltiples las causales y cada caso es diferente. Por eso se investiga y se busca resolver de manera inmediata por parte de las autoridades (...) pero no hay un patrón común o que estén relacionadas las desapariciones, son casos individuales”.

Por eso consideramos fundamental que desde el distrito se cuente con un registro que permita de forma oficial y no a través de redes sociales, establecer si efectivamente una persona ha sido reportada por su familia como “desaparecida”, donde por diferentes medios se active la búsqueda de personas extraviadas. Esto, teniendo en cuenta que se ha evidenciado un alto número de reportes de personas que fueron desaparecidas en contra de su voluntad y donde algunas aparecieron y manifestaron haber sido víctimas de sustancias tóxicas como escopolamina o benzodiazepinas.

Consideramos importante, que desde la Secretaría de Seguridad y su oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos-OAIEE, se pueda generar insumos para que las autoridades puedan tener elementos de análisis y generar recomendaciones para el abordaje del fenómeno en el Distrito Capital.

⁶² Ver: <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-14-2022-cuantos-desaparecidos-hay-realmente-en-colombia>

Se hace necesario que en el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia, se evidencie dentro de sus categorías de información, una caracterización sobre este tema que complemente el contenido actual que reporta los Homicidios, Lesiones personales, Delitos Sexuales, Violencia Intrafamiliar, Hurto a personas, Hurto a residencias, Hurto de automotores, Hurto de motocicletas, Hurto de celulares, Hurto de bicicletas, Delitos en Transmilenio, Delitos en transporte público, NUSE – riñas, NUSE – narcóticos NUSE – Ruido, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Casas de Justicia).

Muchas de estas personas reportadas como pérdidas son víctimas de diferentes delitos, el más común es el *hurto* de sus pertenencias o residencia, pero en otros casos pueden ser víctimas de trata de personas, de tráfico de órganos, pero a la fecha desconocemos una medición del fenómeno.

3 MARCO LEGAL DEL PROYECTO DE ACUERDO

La Constitución Política de Colombia señala en su artículo 12 que: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En desarrollo de este precepto, la **Ley 589 de 2000**, tipifica como delito la desaparición forzada de personas y crea la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el propósito de enfrentar y prevenir el delito de desaparición forzada como fenómeno sistemático y generalizado en el marco del conflicto armado interno.

La **Ley 1418 de 2010**, Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas", adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

La **Ley 1531 de 2012** “Por medio de la cual se crea la Acción de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles” esta establece:

Artículo 2: Acción de declaración de ausencia por desaparición forzada créase la acción de la Declaración de Ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria, entendiendo esta, como la situación jurídica de las personas de quienes no se tenga noticia de su paradero y no hubieren sido halladas vivas, ni muertas.

El **Decreto-Ley 589 de 2017**. “Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado” puso en marcha la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) por un período de veinte (20) años, prorrogables por ley.

La **Resolución No. 000281 de 2008 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses** “Por medio del cual se reglamenta al acceso al Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres”. (SIRDEC).

Las diferentes normas nacionales, están dadas en el contexto y en razón del conflicto armado y la violencia política, es por eso que tras la firma del Acuerdo de Paz, y para contribuir a la satisfacción de sus derechos a la verdad y a la reparación, se han implementado una serie de acciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que el fenómeno puede reunir otras circunstancias, se debe avanzar en una caracterización desde el distrito capital.

La **Ley 2326 de 2023, “Por medio de la cual se adopta la alerta rosa y otras medidas de prevención, protección y reparación para las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición el congreso de Colombia”**, crea y regula el funcionamiento de un mecanismo de búsqueda inmediata nacional, estandarizado, multicanal y de difusión masiva y pública, de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidos, denominado "Alerta Rosa" a efecto de garantizar su vida, libertad, seguridad, integridad y dignidad, así como, contar con un mecanismo que permita su pronta localización y protección para evitar que tras su desaparición puedan ser objeto de otro tipo de violencias basadas en género.

Artículo 1°. OBJETO. La presente ley crea y regula el funcionamiento de un mecanismo de búsqueda inmediata nacional, estandarizado, multicanal y de difusión masiva y pública, de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidos, denominado "Alerta Rosa" a efecto de garantizar su vida, libertad, seguridad, integridad y dignidad, así como, contar con un mecanismo que permita su pronta localización y protección para evitar que tras su desaparición puedan ser objeto de otro tipo de violencias basadas en género”.

ARTÍCULO 10°. CONCEPTO. La Alerta Rosa constituye el conjunto de acciones coordinadas, planificadas y articuladas entre las instituciones públicas, equipos locales de búsqueda, autoridades locales, juntas de acción comunal, vecinos, cuerpos de bomberos, medios de comunicación, entidades y organizaciones del sector religioso en el marco de su autonomía, organizaciones de mujeres y la sociedad en general, que permitan agilizar y lograr la localización, ubicación y protección de las niñas niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que se encuentran desaparecidas a través de una alerta masiva multicanal que se activa a estas Instituciones, organizaciones, ciudadanía y otros actores que se disponen a la búsqueda inmediata de una niña, niño, joven, adolescente o mujer desaparecida y reportada en dicha alerta. La autoridad competente que reciba el reporte o denuncia, Fiscalía General de la Nación o Policía Nacional deberá remitirla de manera

inmediata y urgente a la Secretaría Ejecutiva de la Alerta Rosa, para que desde allí se haga la difusión de la información.”

El Ministerio de Justicia y del Derecho, publicó la expedición del decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, para reglamentar el mecanismo de Alerta Rosa, y se dictan otras disposiciones”

El Decreto 1428 del 27 de noviembre de 2024, **“Por el cual se adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, para reglamentar el mecanismo de Alerta Rosa, y se dictan otras disposiciones”**, estableció como Mecanismo de búsqueda Alerta Rosa.

“Es un mecanismo de búsqueda inmediata consistente en el conjunto de acciones coordinadas y planificadas entre las instituciones públicas, equipos locales de búsqueda, autoridades locales, juntas de acción comunal, vecinos, cuerpos de bomberos, medios de comunicación, entidades y organizaciones del sector religioso en el marco de su autonomía, organizaciones de mujeres y de otros sectores y liderazgos sociales relevantes, y la sociedad en general, encaminadas a agilizar y lograr la localización, ubicación y protección de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que se encuentran desaparecidas, a través de la activación de una alerta masiva multicanal que se emitirá a estas instituciones, organizaciones, ciudadanía y otros actores que se disponen a la búsqueda inmediata de la persona desaparecida y reportada en dicha alerta.”

3.1 Competencia del Concejo.

Es competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para la aprobación de esta iniciativa lo dictado en el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.

“Art. 313. Corresponde a los Concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

Adicionalmente, el Decreto- Ley 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”. En su artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: 1. *Dictar normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito...*

En consonancia con eso, se ha aprobado los siguientes Acuerdos Distritales, que son herramientas muy útiles para la administración distrital, entre las más importantes:

- Acuerdo 677 de 2017, “Se crea el sistema distrital de registro e información integral de violencia de género – VIOLETA”
- Acuerdo 612 de 2015, “por medio del cual se crea el sistema integrado de información poblacional del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
- Acuerdo 365 de 2009 “Registro Único Distrital para los casos de Violencia Sexual en el Distrito Capital –RUDPA”

Adicional a ello, **el ACUERDO 162 de Agosto 19 de 2005** "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DISTRITAL PARA EL ENCUENTRO DE PERSONAS EXTRAVIADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

ARTÍCULO PRIMERO. CREACIÓN. Créase el "Sistema Distrital para el Encuentro de Personas Extraviadas" en Bogotá, como instrumento estratégico que permita a la Administración Distrital, diseñar y ejecutar las políticas necesarias, que faciliten el encuentro y garanticen los derechos fundamentales de las personas extraviadas, conforme a las disposiciones legales.

3.2 Impacto Fiscal.

Este proyecto no genera impacto fiscal, teniendo en cuenta que puede ser atendido con los recursos proyectados de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá y atendidos a través del objetivo estratégico "Bogotá avanza en seguridad" y el programa 5. Espacio público seguro e inclusivo.

ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Cambio Radical

MARIA CLARA NAME RAMÍREZ
Concejala de Bogotá
Partido Alianza Verde

*Proyectaron: Camilo Torres C –Asesor UAN RAGG
Mauricio Ardila UAN MCNR*

PROYECTO DE ACUERDO NO 404 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO DISTRITAL DE PERSONAS REPORTADAS COMO EXTRAVIADAS Y DESAPARECIDAS EN BOGOTÁ D.C.”**

El Concejo de Bogotá, Distrito Capital,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el Numeral 1º del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

Artículo 1. Crease el Registro Distrital de Personas reportadas como extraviadas y desaparecidas, como un instrumento para consolidar la información oficial sobre el fenómeno de desaparición voluntaria e involuntaria en Bogotá D.C.

Artículo 2. *Lineamientos.* Para hacer el seguimiento y gestión del conocimiento de este fenómeno, el Registro Distrital de Personas reportadas como extraviadas y desaparecidas tendrá en cuenta, como mínimo los siguientes lineamientos para su funcionamiento:

- a) Promover la caracterización del fenómeno de desaparición en el Distrito Capital y su relación con la presunta comisión de diferentes delitos, identificando los factores de riesgo que permita reducir los casos en la ciudad.
- b) Priorizar de inmediato la denuncia del extravió o desaparecimiento de niños, niñas y adolescentes – NNA, incluyendo la autorización de tratamiento de datos de quien tenga la custodia y/o representación legal de ellos.
- c) Generar estrategias de difusión y divulgación de manera inmediata bajo los principios de celeridad, eficacia y publicidad para los reportes del extravió o desaparecimiento de los niños, niñas y adolescentes – NNA.
- d) Divulgar los derechos que tienen las familias de las personas reportadas como extraviadas o desaparecidas.
- e) Facilitar la divulgación a la ciudadanía de la información de las personas extraviadas y desaparecidas para activar su identificación y búsqueda inmediata, mediante el desarrollo de una herramienta de contenido digital.
- f) Impulsar la publicación de la información estadística periódica para la toma de decisiones, que articule con los sistemas oficiales del ámbito nacional.

Artículo 2. *Datos de naturaleza pública.* El Registro Distrital de Personas reportadas como extraviadas y desaparecidas, contará con la información básica que permita identificar la identidad de las personas inmersas en dicha situación hasta que la persona se reporte aparecida. Para ello se podrán publicar los datos personales de las personas reportadas, conforme a la política y procedimiento de tratamiento de datos que se establezca para tal fin, en especial las contenidas en la ley estatutaria 1581 de 2012.

Parágrafo: Cuando se traten de la información sensible de niños, niñas y adolescentes, esta deberá ser autorizada por su representante legal y/o quien tenga la custodia, teniendo en cuenta el respeto del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y el de sus derechos fundamentales.

Artículo 3. *Responsable.* La administración distrital en cabeza de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia será la encargada de recopilar, analizar y producir la información cualitativa y cuantitativa que hará parte del Registro Distrital de Personas reportadas como extraviadas y desaparecidas. Para ello, podrá articular las acciones para la implementación de la ALERTA ROSA en Bogotá, contenida en la Ley 2326 de 2023 y demás disposiciones reglamentarias.

Artículo 4. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLESE

PROYECTO DE ACUERDO NO 405 DE 2025**PRIMER DEBATE****POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES
MÍNIMAS DE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ESTRUCTURALES EN BOGOTÁ D.C.****III. ANTECEDENTES Y OBJETO.**

Bogotá carece de una norma expedida por el Concejo Distrital que establezca los lineamientos mínimos para orientar la ruta de acción que deben desarrollar los organismos de emergencias de la capital, para revisar los sistemas de protección contra incendios (SPCI) y las condiciones de seguridad humana, prevenir de esa forma los riesgos de incendio y la presencia de materiales peligrosos que se presentan en las edificaciones o establecimientos del distrito.

Por su parte, solamente existen dos Acuerdos, el **Acuerdo 11 de 1988** y el **Acuerdo 9 de 1992**, que solo hacen referencia a las tarifas y los servicios por cuales puede cobrar el Cuerpo Oficial de Bomberos en la ciudad y que dada su antigüedad no guardan correspondencia con la Ley 1575 de 2012 o Ley General de Bomberos y sus modificaciones ni con el Código Nacional de Policía, aspecto que fue corregido en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, al establecer en el **parágrafo 2 del artículo 290, la eliminación del cobro del concepto de inspección técnica y en consecuencia derogar el literal a) del artículo 28 del Acuerdo 11 de 1988 y el parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 9 de 1992.**

Bajo esa medida, este proyecto tiene por objeto establecer los lineamientos para orientar y fortalecer las condiciones de revisión de los sistemas de protección contra incendios, mejorar las condiciones de seguridad humana en cuanto a riesgos de incendios estructurales y materiales peligrosos que se presentan en las edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, en el marco de sus funciones y competencias, es la entidad encargada para realizar la revisión del Sistema de Protección contra Incendios (SPCI) y de las condiciones de seguridad humanas (SH) en las edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital, el proyecto propone lo siguiente:

- a. Impulsar acciones encaminadas a generar una mayor cobertura de los servicios relacionados con la revisión de los sistemas de protección contra incendios que permita anualmente alcanzar un mayor número de edificaciones y establecimientos de comercio con condiciones de seguridad humana.
- b. Implementar estrategias dirigidas a los propietarios y administradores de las edificaciones y establecimientos de comercio para que puedan hacer un proceso de auto revisión, previniendo situaciones de riesgo de incendios y materiales peligrosos.
- c. Fomentar la virtualización de los servicios prestados por parte de la UAECOB, generando corresponsabilidad en la gestión del riesgo de incendios por parte de los propietarios y administradores de las edificaciones y establecimientos de comercio.
- d. Promover las herramientas de capacitación y conocimiento de los elementos y situaciones que respondan a las condiciones mínimas de seguridad humana y protección contra incendios, de conformidad con la normatividad vigente.

Este proyecto tiene como antecedente el número 393 y 436 de 2021 con ponencia positiva conjunta de los Hs Cs Manuel Sarmiento y Armando Gutiérrez González. En el año 2022, con los radicados 073, 149, 294, 467, cuyos ponentes fueron H.C. Samir José Abisambra Vesga y Diego Guillermo Laserna Arias.

En la vigencia 2023 el Proyecto de Acuerdo fue radicado en cuatro oportunidades con los números 156, 233, 522 y 650 (ponentes: H.C. Javier Alejandro Ospina Rodríguez y H.C. Celio Nieves Herrera.

Posteriormente en el año 2024, también se presentó contando con las ponencias positivas de los Hs.Cs. Julián David Rodríguez Sastoque y Cristina Calderón Restrepo. Radicados: 028, 256, 546 y 713.

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La Comisión de Seguridad Humana de las Naciones Unidas define la seguridad humana como la de proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades y la plena realización del ser humano. En otras palabras, es proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas).⁶³

En este sentido, la Comisión ha señalado:

*“La seguridad humana se basa en un entendimiento fundamental de que los gobiernos mantienen la función primordial de asegurar la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de sus ciudadanos. Es un instrumento inestimable para ayudar a los gobiernos a determinar amenazas graves y generalizadas al bienestar de su población y la estabilidad de su soberanía”*⁶⁴

En ese orden de ideas, las Naciones Unidas han sido enfáticos que la prevención es el objetivo fundamental de la seguridad humana. Para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la seguridad Humana, la prevención *“Ayuda a desentrañar las causas profundas de las vulnerabilidades, presta especial atención a los riesgos incipientes y hace hincapié en la intervención temprana. La prevención refuerza la capacidad local para crear resiliencia y promueve soluciones que consolidan la cohesión social y hacen valer el respeto de los derechos humanos y la dignidad.”*

Es así que este proyecto parte de un profundo concepto de prevención en esta materia, buscando mediante una serie de acciones, proteger la vida e integridad de las personas de los riesgos asociados por incendios y demás tipo de daños que pueden originarse al interior de un establecimiento de comercio o una edificación en la ciudad.

Una de las preocupaciones que aún persisten en materia de seguridad humana son los incendios y la presencia de materiales peligrosos que puedan causarlos.

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, *“Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse, en el cual se puede ver afectado estructuras y seres vivos”*.

⁶³ Comisión de la Seguridad Humana: La Seguridad Humana Ahora, Nueva York, 2003, p. 3. Tomado de:

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/11_2011/d31ae043-1976-4d83-86e9-35323eef3393.pdf

⁶⁴ Naciones Unidas. Seguridad humana. Informe del Secretario General, Asamblea General, Sexagésimo cuarto periodo de sesiones. Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas, A/64/701, 8 de marzo de 2010. Tomado de:

https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/11_2011/d31ae043-1976-4d83-86e9-35323eef3393.pdf

Entre las principales causas de estos incendios se encuentran los accidentes domésticos, fallas eléctricas, manipulación inadecuada de líquidos inflamables, fugas de gases combustibles, acumulación de basura, velas y cigarrillos mal apagados, artefactos de calefacción en mal estado y niños jugando con fósforos, entre otros. Los incendios estructurales o en edificaciones corresponden a fenómenos que en la mayoría de los casos son de origen humano, en su mayoría son por situaciones no intencionales.⁶⁵

Cuando ocurre un incendio se activa el equipo de emergencias de la ciudad, al incidente asisten los bomberos como primer respondiente, apoyan esta labor otras entidades como la Secretaría Distrital de Salud para valorar el personal, el IDIGER para examinar las edificaciones afectadas por posibles daños estructurales, la respectiva alcaldía local realiza la extracción de escombros y las empresas de servicios públicos revisan las estructuras afectadas y verificar posibles daños en las redes de energía o gas.

Dado, el enorme esfuerzo que se requiere a la hora de apagar un incendio y evitar la pérdida de vidas humanas y de daños a la infraestructura, es importante que la ciudadanía tome conciencia de los cuidados que deben tener para prevenir la ocurrencia de este tipo de fenómenos y de darse como tal tener los elementos necesarios de protección que permita minimizar el riesgo por la ocurrencia de los mismos.

Como consecuencia de ello, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá revisa las condiciones de seguridad humana, los riesgos de incendios, presencia de materiales peligrosos, los sistemas de protección contra incendios (SPCI) y las condiciones de seguridad humanas (SH) que se presentan en las edificaciones o establecimientos de comercio del Distrito.

Como resultado de esa verificación se emite un **Concepto Técnico de Bomberos**, que se define como *“la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a través de la cual se revisan las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos del distrito. También se realizan las pruebas de presión a las redes hidráulicas del establecimiento.”*⁶⁶

A nivel general, la principal normativa que se revisa durante las inspecciones es el Acuerdo 20 de 1995, el Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-98 y NSR10, la Resolución 1016 de 1989 y el Acuerdo Distrital 341 de 2008.

De esa forma la UAECOB por solicitud del propietario, verifica las condiciones de seguridad para prevenir posibles riesgos y mitigar su impacto en caso de ocurrir un accidente, por lo cual se revisan que las edificaciones cuenten con extintores, señalización, detectores de humo, redes eléctricas en perfecto estado y salidas de evacuación rápida y segura de sus ocupantes.

En el 2019 fue el año en que se recibieron la mayor cantidad de solicitudes de inspección en la historia de la UAECOB, más de 44 mil, durante 2020 con la entrada de la Pandemia disminuyeron a solo un 31% de las solicitudes del año anterior para cerca de 14 mil.

En 2021 se presentó un incremento del 139% para cerca de 23 mil solicitudes. En 2022 el incremento fue de un 118% para aproximadamente 23 mil inspecciones solicitadas. En 2023 las solicitudes fueron solo el 86% del año anterior para cerca de 19.5 mil.

Con la expedición del Acuerdo 927 de 2024, Bogotá Camina Segura, en su artículo 290, parágrafo 2, donde se establece la sobretasa bomberil y se elimina el cobro de las inspecciones técnicas, se ha evidenciado un

⁶⁵ Consultado en Caracterización General de Escenarios de Riesgo.

⁶⁶ Ver: <https://www.bomberosbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/concepto-tecnico-visitas-inspeccion>

aumento muy importante en las solicitudes de inspecciones. Entre enero y junio de 2024, las solicitudes fueron de un poco más de 10 mil, mientras que, entre julio y septiembre superaron las 17 mil, es decir un incremento del 170%. Lo anterior nos permite proyectar 40 mil solicitudes a finales de diciembre del 2024 y para el próximo 2025, alcanzar entre 50 y 60 mil solicitudes. El incremento en las solicitudes se traduce en establecimientos más seguros en la ciudad.⁶⁷

Año	Ene	Feb	mar	abr	may	jun	jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2019	1330	3668	4937	4399	5336	4212	4891	3921	3722	4025	2202	1973	44.616
2020	2534	4150	2655						544	1221	758	2051	13.913
2021	1362	1116	1973	1575	893	1250	1585	2766	2001	2188	1651	1029	19.389
2022	506	789	1753	2002	2660	3300	3180	1110	1858	1758	2036	1915	22.867
2023	1207	1467	1627	511	1057	1259	1593	2786	2013	2198	1658	2253	19.629
2024	1295	989	1019	1891	2439	2444	7471	5549	4021				27.118
Total													147.532

Fuente: UAECOB Radicado E-01052-2024005940-UAECOB Id: 20842

De las 22.867 solicitudes de 2022, se realizaron 9.698 visitas oculares, en el proceso de auto gestión se realizaron 9.929, solicitudes canceladas por motivos como inexistencia del establecimiento, dirección no encontrada, entre otras fueron un total de 826 y desistimientos de los solicitantes fueron 2414.

En 2022 se emitieron un total de 19.627 para un 86% de las solicitudes. En 2023 realizaron 19.629 solicitudes, se realizaron 7.219 visitas oculares, en el proceso de auto gestión se realizaron 8.289, solicitudes canceladas un total de 596 y desistimientos de los solicitantes fueron 3.525 Se emitieron un total de 15.508 para un 79% de las solicitudes del 2023.⁶⁸

AÑO	Total	Visitas Oculares	Auto Gestión	Conceptos emitidos	%	Cancelado	Desiste	Procesos terminados sin concepto	%
2022	22.867	9.698	9.929	19.627	86%	826	2.414	3.240	14%
2023	19.629	7.219	8.289	15.508	79%	596	3.525	4.121	21%
2024	27.118	3.406	6.627	10.033	37%	569		569	2%
Total	69.614	20.323	24.845	45.168	65%	1.991	5.939	7.930	

Fuente: UAECOB Radicado E-01052-2024005940-UAECOB Id: 20842

2.1 ¿Cómo funciona actualmente el Concepto Técnico de Bomberos?

La Ley entregó la facultad de inspección y la realización de revisiones técnicas al Cuerpo Oficial de Bomberos, sin embargo, en ningún parte de la norma, existe una obligatoriedad de tener certificación de bomberos en

⁶⁷ Respuesta: UAECOB Radicado E-01052-2024005940-UAECOB Id: 20842. Octubre de 2024.

⁶⁸ Respuesta: UAECOB Radicado E-01052-2024005940-UAECOB Id: 20842. Octubre de 2024.

establecimientos comerciales para operar, pero eso no significa que la ciudadanía deba omitir lo reglamentado, es decir tener sistemas de protección contra incendios y cumplir con los temas de Seguridad Humana.

Así, el hecho que no sea obligatoria la expedición de un concepto técnico o certificación, no omite al generador del riesgo a cumplir con la norma. No obstante, como no es obligatorio, muchos propietarios y administradores de establecimientos de comercio y edificaciones se abstienen ya sea de forma intencional o por desconocimiento de la norma, del cumplimiento de sus sistemas de protección contra incendios.

Con este proyecto se busca entonces trabajar en varios aspectos:

2.1.1- Reducir el nivel de desconocimiento de los protocolos y aumentar el número de solicitudes de revisión.

Al no ser obligatorio, muchos propietarios y administradores, desconocen los protocolos vigentes para implementar un sistema apto contra incendios; a esto se le suma, que tampoco solicitan una visita de revisión para que el Cuerpo de Bomberos pueda hacer la visita técnica para hacer su inspección y permita tener un sistema de seguridad humana y un sistema contra incendios acorde a su actividad económica.

A pesar de lo anterior, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en su página web explica el trámite para el cumplimiento de condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios, así como las visitas técnicas.

En este sentido, en la página web⁶⁹ se explica que debe hacer un establecimiento cuando se encuentra clasificado en riesgo bajo:

Si el establecimiento se encuentra clasificado en riesgo bajo llegará al correo registrado por la ciudadanía en el portal de servicios, un usuario y contraseña para que realice la capacitación. Una vez realizado el curso virtual, se realiza revisión y aprobación para continuar el proceso de auto revisión en el portal de servicios. El certificado de seguridad estará disponible en el portal de servicios, una vez sea diligenciado del formulario de AUTO-REVISION.

Así mismo, se explica que para los establecimientos de riesgo moderado o alto se requiere lo siguiente:

Si el establecimiento se encuentra clasificado en riesgo moderado o alto, a partir de la fecha de registro y dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, desde la Subdirección de Gestión del Riesgo de la entidad, se programa visita. El concepto de seguridad estará disponible en la oficina de Servicio a la Ciudadanía dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a realizada la visita. Si la ciudadanía participa en la feria de servicio recibirá la capacitación de manera presencial, y posterior al diligenciamiento del formulario de AUTO-REVISION recibirá el certificado de seguridad.

⁶⁹ <https://www.bomberosbogota.gov.co/content/inspeccion-tecnica-y-certificado-bomberos>

Finalmente, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá señala que todas las edificaciones, establecimientos de comercio y lugares donde se encuentren personas de forma permanente y/o temporal, deberían cumplir con las normativas de seguridad humana y protección contra incendios, por lo cual es importante contar con el concepto de Bomberos, que indica si cumplen o si deben generar acciones de mejora, esto propendiendo a la corresponsabilidad de la prevención y mitigación de riesgos que tienen como deber todos los ciudadanos.

2.1.2- La no obligatoriedad en la expedición del Concepto Técnico de Bomberos es interpretado como que no es necesario cumplir con temas de seguridad y protección contra incendios.

En la web de la Secretaría general de la alcaldía mayor se observa en el siguiente enlace <https://secretariageneral.gov.co/ivc/requisitos-de-funcionamiento-de-establecimiento-comercial>, lo siguiente:

3. Cumplir las Condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de Policía - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Ley 1801 de 2016, Artículo 87.

a. Condiciones de seguridad: Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. (artículo 42. Inspecciones y certificados de seguridad. Ley 1575 de 2012)

En el pasado reciente, una de las dificultades que hemos evidenciado es que para la inspección técnica, el usuario (ya sea administrador o propietario de un establecimiento de comercio o de una edificación) debe liquidar y pagar por dicha solicitud.

Este pago se determinaba con base al Acuerdo 11 de 1988 en su artículo 28. Posteriormente, el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 9 de 1992 en los artículos 2 y 7, estableció que para establecimientos nuevos o aquellos no obligados a declarar (propiedad horizontal, fundaciones, etc.) se les debe cobrar dos salarios mínimos diarios vigentes. El Acuerdo 11, ya había creado la estrategia para los que declaran el Impuesto de Industria y Comercio.

La inspección técnica por las edificaciones obligadas a declarar el Impuesto de Industria y Comercio equivale al 1% del ICA más 1 SMMDLV por cada establecimiento de comercio que tengan abierto, (\$30.300 para el 2021). Para los negocios que pagan el ICA bimestral (Régimen Común), el cálculo se hace con base a la sumatoria de los 6 formularios y los \$30.300 por cada uno. Para los establecimientos nuevos o no obligados a declarar deben pagar 2 SMMDLV.

Durante los primeros tres primeros trimestres del año 2024, Bogotá Distrito Capital ha recaudado, en virtud de lo dispuesto en los Acuerdo 11 de 1988 en su del Acuerdo 9 de 1992 Acuerdo 9 de 1992 Concejo de Bogotá, respecto de servicios que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos presta a la ciudadanía, un valor de \$6.559.166.990.

Con la entrada en vigor de la Sobretasa Bomberil, la UAECOB no ha recibido recaudos en materia de inspecciones técnicas.

Por lo que esta decisión representa una oportunidad para que más establecimientos de comercio y edificaciones puedan hacer su proceso de autogestión de forma más rápida y de esa forma poder tener un protocolo en esta materia.

2.2 Radiografía actual de las visitas de inspección y expedición de conceptos técnicos.

Como ya se demostró, aunque la inspección no es obligatoria, los establecimientos de comercio deben cumplir ciertos aspectos determinados en la ley, en ese sentido, la Ley 1801 “Código de Policía” establece que se puede solicitar conceptos técnicos para el cumplimiento de requisitos de prevención y protección contra incendios.

Sin embargo, como se evidenció estamos alrededor de 30 mil conceptos emitidos en el último año (2024) esta cifra es un muy pequeña comparada con el universo de edificaciones y puntualmente de establecimientos que operan en la ciudad. (420.020 con matrículas activas)

Número de empresas, noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre
	2022	2023	2024
Bogotá	694.485	718.171	721.458
Vigente	420.867	419.260	420.020
Hasta un año sin renovar	79.491	92.474	87.184
Hasta dos años sin renovar	53.530	54.635	65.265
Hasta tres años sin renovar	71.628	46.121	47.455
Hasta cuatro años sin renovar	43.060	65.790	42.648
Más de cinco años sin renovar	25.909	39.891	58.886

<https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/temas/dinamica-empresarial/informes>

Total empresas con matrícula activa y vigente en Bogotá según actividad económica	420.867	419.260	420.020
Servicios	194.982	196.287	198.525
Comercio	139.637	137.492	136.358
Industria	74.117	73.169	72.738
Agropecuaria y minera	5.727	6.065	6.302
Otras actividades	6.404	6.247	6.097

Total establecimientos con matrícula activa y vigente en Bogotá según actividad económica	242.241	243.440	230.143
Comercio	113.697	113.039	106.002
Servicios	95.837	97.608	92.696
Industria	31.334	31.344	29.926
Agropecuaria y minera	701	665	582
Otras actividades	672	784	937

Esto significa que actualmente en la ciudad existe una enorme cantidad de establecimientos de comercio que no han pasado por ninguna verificación del Cuerpo Oficial de Bomberos, lo que generaría una mayor condición de amenaza por omisión de parte de estos establecimientos al no adelantar las acciones preventivas y correctivas, ya sea por el almacenamiento inadecuado o manipulación de material combustible, líquidos inflamables y/o productos químicos.

En ese orden de ideas, este proyecto busca ampliar la cantidad de propietarios y administradores que se capaciten y obtengan un concepto técnico de bomberos incluyendo a los establecimientos de bajo riesgo, que le ayude a mejorar sus condiciones de seguridad y sus sistemas de protección contra incendios.

Recordemos que este concepto es anual de acuerdo a la Resolución de la Dirección Nacional de Bomberos, o pueden tener una menor vigencia en la medida que el usuario realice algún tipo de intervención física que aumente el riesgo y conlleve a que se deba modificar el concepto.

2.3 La UAECOB no realiza IVC (inspección, vigilancia y control)

Para los bomberos no se encuentran dentro de sus competencias o funciones las de realizar actividades de Vigilancia y Control, por lo tanto, se deben fortalecer las acciones de prevención dado que estas acciones se realizan en operativos conjuntos con otras autoridades.

Los Cuerpos de Bomberos en Colombia no tiene funciones de Vigilancia y Control, de acuerdo con el artículo 42 de la ley 1575 de 2012 (modificado por el artículo 7 de la Ley 1796 de 2016.), solo somos competentes para la realización de inspecciones técnicas, se transcribe textualmente el artículo 42.
(-...)

ARTÍCULO 42. INSPECCIONES Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1796 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos:

1. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio de acuerdo a la normativa vigente.
2. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad humana. Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnicas que el cuerpo de bomberos realice como medida de prevención y durante las acciones de control.

Así mismo a nivel distrital, en el numeral 9 del Decreto 509 de 2023, "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D.C. se encuentra:

Artículo 9º.- Subdirección de Gestión del Riesgo. Son funciones de la Subdirección de Gestión del Riesgo:

g) Implementar los proyectos y gestionar programas y campañas sobre la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en coordinación con las áreas y entidades a que haya lugar.

o) Proponer y gestionar alternativas para la revisión y aprobación de diseños de instalaciones desde el punto de vista pasivo y activo contra incendio, y demás actividades de prevención en obras y mantenimiento durante la vida útil de las edificaciones.

7. Emitir conceptos técnicos para los sistemas de protección contra incendio y seguridad humana, durante la formulación de proyectos nuevos y remodelaciones, la ejecución de obra y durante el funcionamiento de establecimientos públicos y comerciales.

La no obligatoriedad del concepto de bomberos para la apertura o funcionamiento de establecimientos de comercio y/o edificaciones. No obstante, se cuenta con procedimiento establecido para la realización de inspecciones a solicitud de los usuarios.

Según el Código Nacional de Policía, en su artículo 86 denominado “Control de Actividades que Trascienden a lo Público” en el párrafo 2, se facultó a las autoridades de policía a realizar actividades de vigilancia y control; sin embargo, las competencias de vigilancia están en cabeza de la Secretaría de Gobierno a través de las Alcaldías Locales.

2.4 Se requieren fortalecer las medidas de reducción de riesgo de incendios estructurales en Bogotá.

De acuerdo con el IDIGER; existen tres tipos de medidas en la caracterización, estas van variando conforme a la localidad que hace la caracterización y a los fenómenos que hayan ocurrido lo que hace un llamado a la necesidad de fortalecer las medidas de reducción del riesgo. Se citan algunas extraídas de los informes de las localidades de Kennedy, Barrios Unidos y Bosa.

Medidas de reducción de la amenaza:

- a) Incrementar la exigencia a las empresas los sistemas contra incendios como la construcción de muros cortafuegos.
- b) Demandar de las empresas, que se instalen en el sector, la compra y utilización de equipos contra incendio requeridos para la reducción de la amenaza.
- c) Capacitación y sensibilización a todos los actores que puedan generar dicha amenaza.
- d) Inspección y control de riesgos que puedan generar incendio.
- e) Capacitar en plan de emergencia a la Junta de Acción Comunal.

Medidas de reducción de la vulnerabilidad:

- a) Realizar inspecciones periódicas y exigir el mantenimiento adecuado de los sistemas contra incendios que se adquieran en el mercado.
- b) Generar el espacio y tiempo óptimo para realizar capacitaciones y entrenamientos para combatir incendios.
- c) Aumentar la presencia de elementos como detectores de humo y la ubicación de Extintores.

Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad:

- a) Revisión periódica a establecimientos de comercio e informes de cumplimiento de la normatividad.
- b) Hacer el acompañamiento de operativos por parte de todas las entidades del distrito para verificar el funcionamiento correcto de las empresas.
- c) Realizar Simulacros y entrenamientos en manejo y uso de extintores y evacuación.
- d) Implementar una brigada básica contra incendios.

Cada vez que se produce un evento de estas magnitudes no solamente se pone en riesgo las vidas humanas, sino el patrimonio del negocio, las edificaciones vecinas y se debe activar el sistema de emergencias representando un costo social y económico para la ciudad, dado que tienen que acudir las diferentes autoridades a verificar la situación.

Entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, la UAE Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá ha atendido 1.550 incendios estructurales en la ciudad, de los cuales el 89% han sido en edificaciones de uso vivienda y residencial, comercial, industrial y personal. Del total de incendios atendidos, 40 han sido en edificios de gran altura mayores a siete pisos.

2.5 Partes beneficiadas del proyecto.

Recientemente, este Concejo expidió el Acuerdo 786 de 2020 que modificó el Acuerdo 470 de 2011, (Autor: H.C. Rolando González y suscrito por varios cabildantes), esta norma establece disposiciones normativas para prevenir la ocurrencia de accidentes en los sistemas de transporte vertical en edificaciones, tales como ascensores, escaleras mecánicas, rampas eléctricas, plataformas elevadoras y en similares, y en las puertas eléctricas que estén al servicio público y privado en el Distrito Capital, a través de la revisión general anual de los mismos.

Por su parte, este proyecto apunta a un objetivo similar y es evitar que ocurran incendios estructurales en las edificaciones, para ello es importante que el Distrito fortalezca y logre un mayor alcance en la aplicación de medidas de seguridad humana y protección contra incendios, que beneficie a toda la población que acude a un inmueble ya sea por motivos de trabajo o de realizar alguna actividad temporal, compras, entretenimiento, entre otras.

En ese orden de ideas, este proyecto beneficia a toda la sociedad en general, facilitando la labor tanto de las entidades del distrito en especial de la UAECOB como de los usuarios, propietarios y administradores de establecimientos de comercio y otras edificaciones para que cumplan las medidas contra incendio y que requieran solicitar una visita de verificación y deseen tener un concepto técnico favorable.

2.6 Impacto como política pública:

Mediante la Ley 1575 de 2012, *“Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”*, se creó la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), con el objeto de dirigir, coordinar y acompañar la actividad de los Cuerpos de Bomberos del país, para la debida implementación de las políticas y normativas que se formulen en materia de gestión integral del riesgo contra incendio; los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, que permitan prestar de manera eficiente este servicio público esencial.

Adicionalmente, el artículo 7 de la **Ley 1796 de 2016** indica que los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos:

1. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio de acuerdo a la normativa vigente.
2. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad humana.

Esta modificación del año 2016, suprimió dentro de las inspecciones el tema de la revisión de los diseños de los sistemas de protección contra incendio y seguridad humana de los proyectos de construcciones nuevas y/o reformas de acuerdo a la normatividad vigente, que estaban contempladas en la Ley 1575 de 2012.

Adicionalmente, se debe señalar que el numeral 3 de la parte segunda del artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, Código de Policía, establece el cumplimiento de las medidas de seguridad, que incluye las de seguridad estructural y seguridad humana, entre las que se encuentran las medidas de evacuación y prevención de incendio.

Por lo tanto, el funcionamiento oportuno, en la labor de prevención, de los establecimientos de comercio y demás edificaciones, es importante, eso permite que el personal que asiste a un lugar bajo un principio de confianza, tengan la tranquilidad que está en un sitio que ha tomado previamente las medidas oportunas que los preserve de un eventual peligro.

Bogotá cuenta con el **Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá D.C., 2015 – 2050**, elaborado en diciembre del año 2015, allí se establece que, los riesgos que se presentan cotidianamente en el territorio del Distrito Capital tienen que ver básicamente con accidentalidad (accidentes de tránsito e incendios estructurales).

Es así que Bogotá cuenta con los Protocolos Distritales de Respuesta, que contemplan las actividades interinstitucionales encaminadas a atender directamente en terreno las consecuencias adversas sobre la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible; y restaurar condiciones de normalidad sin restablecer condiciones de riesgo.

“Los incendios estructurales, especialmente aquellos que afectan viviendas, se presentan con alta frecuencia en el Distrito capital. La bitácora del SIRE permite señalar que se han reportado un total de 6870 incendios en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 12 de diciembre de 2015, es decir una media anual de 624,5 incendios por año. Adicionalmente, se han presentado 9.599 conatos de incendio en el mismo período. Del total de incendios reportados, el 72% aproximadamente reporta daños y pérdidas asociados, especialmente en términos de muertos, heridos, afectados y viviendas afectadas o destruidas. Estos se distribuyen de la siguiente manera, de acuerdo con los cálculos realizados por el Sistema de registro histórico de emergencias y cálculo de daños y pérdidas del IDIGER”⁷⁰

.MARCO LEGAL DEL PROYECTO DE ACUERDO

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Es así que Colombia ha expedido diferente normatividad en materia de gestión del riesgo.

⁷⁰ Secretaría de Ambiente,

http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ac0bc27e-68f5-4739-926b-3f3c608eef29&groupId=3564131

A nivel nacional existe la siguiente normatividad:

- **Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos.**

Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad.

- **Ley 1523 - 24 de abril del 2012.** “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres”.

ARTÍCULO 2o. DE LA RESPONSABILIDAD. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendiéndose: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

- **Ley 1575 De 2012.** “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”.

*Artículo 2. La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos, **constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado.***

*Artículo 3. **Los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas, proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos en los instrumentos de planificación territorial e inversión pública.** Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los municipios la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. En cumplimiento del principio de subsidiariedad, los municipios de menos de 20.000 habitantes contarán con el apoyo técnico del departamento y la*

financiación del fondo departamental y/o nacional de bomberos para asegurar la prestación de este servicio.

Artículo 42. Inspecciones y Certificados de Seguridad. *Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1796 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:*

Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos:

1. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio de acuerdo a la normativa vigente.

2. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad humana.

Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnicas que el cuerpo de bomberos realice como medida de prevención y durante las acciones de control.

- **Resolución 661 de 2014 del Ministerio del Interior**, “Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia”.

Artículo 203. Definición. *La visita técnica de inspección ocular de seguridad es una actividad que debe realizar un cuerpo de bomberos dentro de su jurisdicción, al interior de cada establecimiento de comercio, en el que se desarrolle una actividad de índole comercial en el territorio nacional incluido aquellos en los que no se tengan avisos y tableros. Con el objeto de identificar los riesgos conexas a incendios y seguridad humana, que dicho establecimiento puedan inducir al entorno o la comunidad en general, cuyo efecto dará lugar a un concepto técnico de bomberos emitido mediante certificado.*

Artículo 213. *El Cuerpo de Bomberos expedirá un Certificado de Inspección a las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales que cumplan con las condiciones de Seguridad Humana y Protección Contra incendio, este Certificado contará con una vigencia no mayor a un (1) año para*

todos los objetos. Así mismo, si las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales realiza remodelaciones, ampliaciones, modificaciones u otros que implique variación en la parte arquitectónica, invalida el Certificado actual y deberá solicitar inmediatamente una nueva inspección para expedir el nuevo Certificado de Seguridad Humana y Protección Contra incendio.

Artículo 216. Tarifas. *El cobro de las tarifas de las inspecciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos se destinará a cubrir los gastos que demanden la prestación del servicio de inspección de las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales de los Sistemas de Protección Contra incendio y Seguridad Humana.*

- **El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10** en su título J: Requisitos de Protección Contra Incendio en Edificaciones y su título K: Requisitos Complementarios, despliega los requisitos mínimos que toda edificación deberá cumplir para la protección contra incendio de acuerdo a su uso y grupo de ocupación.

Del mismo modo existen una diversidad de normas urbanísticas y de las condiciones de diseño y construcción de las edificaciones y de redes, que deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios y proveer áreas de acceso adecuadas para el cuerpo de bomberos y salidas de emergencia.

En ese orden de ideas la National Fire Protection Association-NFPA, tiene una serie de normas como las NFPA 1971, NFPA 10, NFPA 101, NFPA 551 y NFPA 14, entre otras.

A nivel Distrital tenemos las siguientes normas:

- **Acuerdo 20 de 1995.** *"Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá, se fijan sus políticas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para su aplicación, se fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su actualización y vigilancia."*
- **Acuerdo 637 de 2016.** *"Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones".*
- **Acuerdo 581 de 2015.** *"Por el cual se crea el sello seguro como reconocimiento al cumplimiento de normas y parámetros legales que contribuye a la calidad de los servicios de los establecimientos de comercio dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito capital" Para hacerse merecedor al "SELLO*

SEGURO", el respectivo establecimiento deberá "Contar con un sistema contra incendios, el cual debe tener un (1) extintor multipropósito y un (1) dispersor contra incendios por cada 150 metros cuadrados."

- **Acuerdo 580 de 2015.** *"Por el cual se modifica el Capítulo 6° del Título IX del Acuerdo 079 de 2003 y se dictan otras disposiciones Obliga a todos los parqueaderos públicos de la ciudad a "Contar con los equipos necesarios y conservarlos en óptimas condiciones para la protección y control de incendios."*

3.1 Competencia del Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá es la suprema autoridad del Distrito Capital es competente como lo señala expresamente el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 12 numeral 1º: *"Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del Distrito".*

3.2 Impacto Fiscal.

De conformidad con lo que establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos deberá hacerse explícito cuál es su impacto fiscal y establecerse su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Para el efecto dispone que en las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate, se deben incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la fuente de ingreso adicional para cubrir los mencionados costos.

En ese orden de ideas, este proyecto de acuerdo no genera dicho costo dado que lo que se requiera para la implementación del acuerdo puede ser cubierto a través de los recursos que anualmente se presupuesta en la entidad.

ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
H. Concejal
Partido Cambio Radical

PROYECTO DE ACUERDO NO 405 DE 2025

PRIMER DEBATE

POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES MINIMAS DE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ESTRUCTURALES EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El Concejo de Bogotá, Distrito Capital,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el Numeral 1º y 25 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos para orientar y fortalecer las condiciones mínimas de revisión de los sistemas de protección contra incendios y mejorar las condiciones de seguridad humana en cuanto a riesgos de incendios estructurales y materiales peligrosos que se presentan en las edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital.

Artículo 2. Responsable. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, en el marco de sus funciones y competencias, será la entidad encargada de definir los criterios y la forma de realizar la revisión del sistema de protección contra incendios y de las condiciones de seguridad humanas en las edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital.

Artículo 3. Lineamientos. La gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, para realizar la revisión del sistema de protección contra incendios y de las condiciones de seguridad humanas en las edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital se podrá orientar con base a los siguientes lineamientos:

- a. Masificación.** Impulsar acciones encaminadas a generar una mayor cobertura de los servicios relacionados con la revisión de los sistemas de protección contra incendios que permita anualmente alcanzar un mayor número de edificaciones y establecimientos de comercio con condiciones de seguridad humana.
- b. Autogestión.** Implementar estrategias dirigidas a los propietarios y administradores de las edificaciones y establecimientos de comercio para que puedan hacer un proceso de autorevisión, previniendo situaciones de riesgo de incendios, materiales peligrosos.
- c. Virtualización.** Fomentar la virtualización de los servicios prestados, generando corresponsabilidad en la gestión del riesgo de incendios por parte de los propietarios y administradores de las edificaciones y establecimientos de comercio.
- d. Capacitación.** Promover las herramientas de capacitación y conocimiento de los elementos y situaciones que respondan a las condiciones mínimas de seguridad humana y protección contra incendios, de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4. Certificado de Bomberos. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos,

expedirá concepto técnico sin costo para el usuario, para aquellas edificaciones y establecimientos de comercio categorizados en riesgo bajo, moderado y alto que realicen su proceso de autogestión de forma virtual y/o ocular, siempre y cuando cumplan con las medidas mínimas de protección contra incendios y seguridad humana, de conformidad con el marco legal vigente.

Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLESE

PROYECTO DE ACUERDO NO 406 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LOS CONSEJOS TUTELARES DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE MODIFICA EL ACUERDO 110 DE 2003”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto modificar el Acuerdo Distrital 110 de 2003, “Por el cual se crean los Consejos Tutelares de los derechos de los niños y las niñas en el Distrito Capital” y genera varios lineamientos para fortalecer la gestión que realizan los Consejos Tutelares de los derechos de los niños y de las niñas y el apoyo institucional de las entidades del distrito en el funcionamiento del mismo.

Estos Consejos se constituyen como organizaciones cívicas y comunitarias, orientadas a la promoción, protección y defensa integral de los derechos de la niñez. El proyecto busca fortalecer la participación comunitaria, promover la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la protección de la infancia, implementando estrategias que contribuyan al desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas en el Distrito Capital.

Este proyecto surge luego de varias mesas de trabajo con los diferentes consejos tutelares de Bogotá, que de forma conjunta en diversas mesas de trabajo se trabajó en un diagnóstico y en unos lineamientos que recogiera el sentir de los mismos.

Entre los participantes de las mesas encontramos a los siguientes consejeros:

- Gloria Murcia, Consejera de Antonio Nariño
- Flor Alba Jiménez Pérez, Consejera de Usme
- Denis Soraya Wilches Toto, Consejera de Ciudad Bolívar
- Maricel del pilar Bernal Camacho, Consejera de Tunjuelito
- Pablo Enrique Briceño, Consejero de Rafael Uribe Uribe,
- Clara Inés Caro, Consejera de Suba
- Elsa Quevedo Quintana, Consejera de Kennedy
- Lorena Nataly Rico, Consejera de San Cristóbal
- Luz Amanda Díaz, Consejera de San Cristóbal
- John Eduardo Arias Castillo, Consejero de San Cristóbal
- Martha Elena Ruiz, Consejera de Engativá
- Carlos Rodríguez, Consejero de Teusaquillo.
- Enrique Huertas Garai, Consjero de Sumapaz,



Mesa de Trabajo con consejeros tutelares de 12 localidades.

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO

La defensa de los derechos de los niños y las niñas en Bogotá ha sido una preocupación de ciudad, reflejada en la implementación de diversos marcos normativos distritales y la creación de instancias de participación de entidades del distrito como consejos, comités, mesas entre otros espacios comunitarios para promover la participación ciudadana en el ámbito de la promoción de derechos de la infancia en la ciudad.

El Acuerdo Distrital 110 de 2003 se destacó por ser pionera en Bogotá a la hora de establecer una figura normativa donde los ciudadanos podía generar un marco de actividades en la promoción de los derechos de los niños, así nacieron los Consejos Tutelares de los derechos de los niños y las niñas en el Distrito Capital, como una iniciativa construida desde la administración distrital en cabeza del Alcalde Mayor Antanas Mockus, con la radicación del proyecto de acuerdo 120 de 2003.⁷¹

Esta normativa reconoció la importancia de la participación cívica y comunitaria para la promoción, defensa, vigilancia y control social de los derechos de la niñez, buscando una

⁷¹ Ver: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10503> Proyecto de Acuerdo 120 de 2003, "Por el cual se crean los Consejos Tutelares Locales y el Consejo Tutelar Distrital de los derechos de la niñez y se dictan otras disposiciones"

mayor corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado. Fue así como en dicha época, se estableció como meta en el Plan de Desarrollo Distrital, la creación de una red de 20 veinte Consejos Tutelares encargados de proteger los derechos fundamentales de los niños y las niñas, uno por cada localidad.

Esta labor quedó en cabeza de la Veeduría Distrital, quien quedó con la función de impulsar este proyecto dentro del Plan de Desarrollo porque, como tarea misional, debe promover la Participación Ciudadana y el Control Social.

Con el Acuerdo Distrital 110 de 2003, se definió la estructura de los Consejos Tutelares en diferentes niveles territoriales (comunidad, Unidad de Planeación Zonal - UPZ, localidades y distrito) y promovió la participación de niños, niñas y adultos comprometidos con la defensa de sus derechos. Asimismo, estableció las funciones y responsabilidades de los consejeros tutelares, la conformación de grupos de apoyo, y el funcionamiento y los recursos necesarios para que los Consejos Tutelares pudieran desempeñar sus labores.

El Acuerdo 110 fue pioneros en la formalización de la defensa de los derechos de los niños y las niñas, estableciendo un marco normativo que empoderara a las comunidades para participar activamente en la construcción de una cultura de respeto y protección hacia la niñez.

Sin embargo, con el paso de los años, surgieron desafíos adicionales y cambios en las condiciones normativas, en las políticas públicas, ejemplo de ello es que en el año 2006 se expide la Ley 1098 o ley de Infancia y Adolescencia.

Adicional a ello, en las dinámicas sociales, económicas y tecnológicas que exigían una revisión y actualización de estos marcos normativos. La experiencia acumulada por los Consejos Tutelares a lo largo de dos décadas reveló la necesidad de adaptarlos a las nuevas realidades de los niños y niñas en el Distrito Capital. Problemáticas como la persistencia de las condiciones de los diferentes tipos de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, los problemas de salud mental, entre otros aspectos, requieren un enfoque más integral y articulado con el funcionamiento de las entidades del distrito.

Por otro lado, la experiencia mostró que los Consejos Tutelares necesitaban una mayor claridad en su estructura organizacional y un fortalecimiento en sus procesos de capacitación y articulación con las autoridades locales y distritales. Las lecciones aprendidas indican la necesidad de mejorar la representatividad, la eficiencia en la toma de decisiones, y la capacidad de los consejos para incidir en la formulación y seguimiento de las políticas públicas en beneficio de la niñez.

Dado este contexto, el presente proyecto de acuerdo surge como una respuesta a la necesidad de renovar y fortalecer el marco legal que rige la defensa de los derechos de los

niños y las niñas en el Distrito Capital. Se propone la reorganización y actualización de los Consejos Tutelares, promoviendo una mayor participación comunitaria y ciudadana, y estableciendo mecanismos más eficientes y efectivos para abordar las problemáticas actuales que enfrenta la niñez en Bogotá. De esta manera, se busca empoderar a la sociedad civil en la promoción, protección y en el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, cumpliendo con las nuevas demandas sociales y consolidando una cultura que favorezca la realización de los derechos de la infancia en el Distrito Capital.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

De acuerdo con el último reporte de la Veeduría Distrital para el año 2022, 11 (once) Consejos Tutelares Locales activos y el Consejo Tutelar Distrital, es decir, 12 (doce), sumados sus integrantes, nos da un total de 131 consejeros, y un total de 9 (nueve) Consejos Tutelares inactivos.

La labor de los CT es activa en algunas localidades, en otras no hay conformación de CT y solo cuentan con un representante para el Consejo Tutelar Distrital, la proporción depende de la participación de la comunidad y su interés en la defensa de los derechos de la niñez, esta participación requiere de un ejercicio constante y altruista toda vez que esta labor es desarrollada por la comunidad ad honorem tal y como lo indica el Acuerdo 110 de 2003 así:

Artículo 4: Calidades para ser Consejero o Consejera Tutelar. -Puede ser Consejero o Consejera tutelar toda persona mayor de nueve (9) años que:

- a. Sea habitante de la comunidad, corregimiento, UPZ, la localidad y el Distrito, o realice una actividad permanente en beneficio de la misma.*
- b. Cumpla la fase de aspirante señalada en el Parágrafo del presente artículo.*
- c. No se encuentre vinculado o vinculada en hechos de violencia intrafamiliar o vulneración de los derechos de las niñas o los niños.*
- d. Goce del reconocimiento y el respeto de su comunidad.*

Parágrafo: Quien desee ser consejero o consejera tutelar deberá cumplir una fase de aspirante durante la cual participará en actividades de sensibilización y capacitación y asistirá en condición de tal a las reuniones del respectivo Consejo Tutelar por seis (6) meses. Finalizada esta fase, adquirirá su condición de consejero o consejera tutelar.

Todo niño o niña que desee participar en un Consejo Tutelar podrá hacerlo en su calidad de aspirante y adquirirá la condición de consejero o consejera cuando cumpla los requisitos.

Durante la última administración, observamos cómo se fue diluyendo el apoyo institucional tanto de la Secretaría de Integración Social como de la veeduría en el fortalecimiento de estos espacios. No se ha visto un rol claro de ambas entidades para generar estrategias de vincular nuevos consejeros tutelares por la niñez concientizando a la comunidad sobre la importancia de hacer parte de este importante espacio.

Ejemplo de ello, es que poco o nada se ha cumplido el mandado dado por el Artículo 12 del Acuerdo, que expresó lo siguiente

Recursos y Apoyo para los Consejos Tutelares de los derechos de la niñez.- El Departamento Administrativo de Bienestar Social incluirá dentro del proyecto de presupuesto, los recursos para el funcionamiento de los Consejos Tutelares y el apoyo logístico de los mismos.

Tampoco se ha cumplido el artículo 13 del Acuerdo que expresa:

*Artículo 13: Relación de los Consejos Tutelares con las entidades y autoridades y su participación en las redes existentes. Las entidades de los órdenes Distrital y Local asegurarán canales de interlocución con los Consejos Tutelares. **La Veeduría Distrital vigilará el cumplimiento de esta obligación.***

Igualmente del párrafo que señala: “La Veeduría Distrital ejercerá la Secretaría Operativa del Consejo Tutelar Distrital, para facilitar su funcionamiento efectivo”, de acuerdo con ello, se supone que el área encargada del seguimiento al papel que cumplen los CL Y CTD es la Veeduría Delegada para la Participación y Programas Especiales-VDPPE, pero poco o nada se informa de esta labor en la página web de la entidad o en los informes de gestión.

En un derecho de petición formulado a la Veeduría Distrital, esta respondió lo siguiente:

En lo que respecta a una de las funciones de los Consejos Tutelares relacionada con el “seguimiento, vigilancia y control a las políticas, planes, programas destinados a la niñez y adolescencia”, y con el acompañamiento técnico de la Veeduría Distrital, se realizó una “Campaña contra el Maltrato y Abuso Infantil”, llamada “Ponte en mi lugar”. El documento fue revisado por la Veeduría Distrital, al cual se le realizaron observaciones y recomendaciones, con el fin que el Consejo Tutelar Distrital-CTD lo ajustara y lo socializara con las diferentes Alcaldías Locales y los equipos de la Política de Infancia de la Secretaría Distrital Integración Social-SDIS. El objetivo principal de la propuesta estaba encaminado en lograr que las alcaldías locales destinaran los recursos necesarios para la defensa de los derechos del sector de la infancia y la adolescencia como una prioridad, solicitud que fue avalada por la

*Veeduría Distrital como Secretaría Operativa del Consejo Tutelar Distrital.
(Rta. Derecho de petición)*

La Veeduría Distrital destaca las experiencias positivas de los consejeros, actuaciones que recalcamos también en los diferentes espacios donde nos reunimos con los consejeros, entre ellas:

- *La permanencia, el compromiso y el altruismo de algunos Consejeros Tutelares que desde 2003 han impulsado la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.*
- *Las campañas contra el maltrato y abuso infantil.*
- *Los pronunciamientos sobre el cumplimiento de la Política de Infancia.*
- *El dialogo permanente con las entidades del orden local y distrital para poner en la agenda pública el tema de infancia.*
- *La participación de los Consejos Tutelares en diferentes instancias de participación en donde se debaten y concretan temas de política y en donde tienen la oportunidad de ser la voz de los niños, niñas y adolescentes de sus localidades. (Rta. Derecho de petición)*

Es por ello, que la presente iniciativa busca fortalecer y adecuar los Consejos Tutelares de los Derechos de los Niños y las Niñas en el Distrito Capital, actualizando el Acuerdo 110 de 2003. El fortalecimiento de los Consejos Tutelares a través de esta iniciativa es esencial para la efectiva defensa y promoción de los derechos de los niños y las niñas. Los retos actuales en materia de derechos de la niñez requieren una reformulación y optimización de la labor de los Consejos Tutelares para garantizar su efectividad y adaptabilidad a las nuevas circunstancias.

La presente propuesta, al modificar el Acuerdo 110 de 2003, tiene como finalidad mejorar la estructura organizativa, generar lineamientos precisos y promover una gestión eficiente y coordinada de los Consejos Tutelares tanto a nivel local como distrital con las entidades del distrito y la comunidad.

Asimismo, el proyecto propone la articulación efectiva de los Consejos Tutelares con las autoridades locales y distritales, como la Veeduría Distrital, y la generación de un banco de memoria institucional para preservar el conocimiento acumulado. La creación de lineamientos y cronogramas de actividades permitirá que los Consejos Tutelares planifiquen adecuadamente sus acciones y obtengan el apoyo logístico necesario, evitando improvisaciones y garantizando la continuidad y coherencia en su labor.

Actualmente la ciudad tiene varias instancias en las cuales también participan actores sociales que deben ser articuladas a la labor de los consejeros tutelares.

- **Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y adolescentes y los Consejos Locales de niños, niñas y adolescentes (CCLONA) Creado mediante Decreto 121 de 2012.** Este es un espacio de participación, análisis y discusión de las temáticas de la ciudad, en especial aquellas que les conciernen a los niños, niñas y adolescentes y que garantizan el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. El Consejos Consultivos Locales de Niñas, Niños y Adolescentes, este se encuentra integrado por 12 niñas o adolescentes y doce 12 niños o adolescentes mayores de 7 y menores de 14 años. En esta instancia se promueve la participación incidente de los niños, niñas y los adolescentes para que aporten a la construcción de políticas, proyectos, planes, programas e iniciativas de su interés que aporten a la construcción de su territorio.
- **“Bogotá como La ciudad de las niñas y los niños”** Creada mediante el Acuerdo 887 de 2023 allí establece en su artículo segundo, que la Administración Distrital, a través de sus secretarías, entidades adscritas y vinculadas promoverá la participación incidente, expresión y diálogo social de las niñas, niños y adolescentes en la formulación e implementación de planes, programas, proyectos y servicios sociales a su cargo. Para este fin, brindarán asistencia técnica a las iniciativas y propuestas que presenten las niñas, niños y adolescentes, implementarán acciones en materia de liderazgo y empoderamiento; y fortalecerán los escenarios de participación al interior de la Administración, a través del juego, la literatura, el arte y la exploración del medio ambiente
- **Consejo Distrital y Consejos Locales para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual. Creado mediante el Acuerdo 152 de 2005,** es un cuerpo consultor y asesor encargado de formular políticas que articulen los programas de las entidades responsables en Bogotá D.C. en ella participa formalmente el Delegado de los Consejeros Tutelares para la Defensa y Promoción de Derechos de Niños y Niñas.
- **Semana Distrital del Buen Trato en Bogotá D.C.,** Creada mediante Acuerdo 329 de 2008. Institucionaliza la la cual se llevará a cabo anualmente, iniciando el 19 de noviembre (Día internacional para la prevención del abuso contra los niños) y finalizando el 25 de noviembre (Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer). Establece que la Secretaría de Integración Social a través del Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Explotación Sexual, o quien haga sus veces, coordinará su realización, definirá los ejes temáticos de las jornadas, diseñará las actividades y vinculará a las entidades y funcionarios de la administración distrital en su ejecución, publicando la agenda de actividades que se llevará a cabo en la semana distrital del buen trato, con 30 días de anterioridad.

- **Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA) Y Comités Operativo Locales de Infancia y Adolescencia (COLIA)**, es un es un escenario de participación, análisis y discusión de carácter mixto con representación de organismos o entidades estatales y participación de representantes de la academia, el sector privado y organizaciones sociales y comunitarias con conocimiento de temáticas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes y del ejercicio pleno de sus derechos, aca asiste un(a) representante del Consejo Distrital Tutelar.

La sociedad juega un papel fundamental en la protección de los derechos de los niños y niñas en los barrios de la ciudad, especialmente en la creación de un entorno seguro y libre de violencia. Como actor colectivo, la comunidad tiene la capacidad de generar un entorno de apoyo y vigilancia mutua, donde los derechos de los niños y niñas sean respetados y promovidos. Entre ellos los consejeros tutelares pueden ser claves en varios aspectos:

1. Los y las consejeros(as) tutelares pueden actuar como una red de protección al estar atenta a las situaciones de abuso, negligencia o violencia. El permanente contacto con los vecinos, líderes comunitarios y organizaciones locales tienen la posibilidad de facilitar la denuncia de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los niños, contribuyendo a la intervención temprana y evitando hechos que vulneren la integridad y vida de la niñez.
2. Los y las consejeros(as) tutelares pueden generar espacios y actividades para promover la educación y sensibilización en derechos de la infancia. A través de campañas, talleres o actividades culturales, se pueden generar consciencia sobre la importancia de respetar los derechos de la niñez, fomentar prácticas de crianza respetuosa y desnormalizar el castigo físico como pauta de crianza, haciendo énfasis en el cumplimiento de las diferentes normas distritales y nacionales.
3. Los y las consejeros(as) tutelares pueden ser un interlocutor entre la institucionalidad y las familias. En muchas situaciones, las familias enfrentan dificultades para garantizar los derechos de los niños debido a la falta de apoyo institucional, tales como conocer la ruta de atención a diferentes programas sociales. Este tipo de apoyo, reduce las probabilidades de que los niños sean expuestos a situaciones de vulnerabilidad.
4. Promoción de entornos seguros: La comunidad es clave para asegurar que existan entornos seguros donde los niños puedan crecer y desarrollarse, especialmente en el espacio público. Los y las consejeros(as) tutelares al involucrarse en los asuntos públicos, en la participación que hacen de diferentes instancias pueden fomentar con las autoridades un entorno positivo que protege a los niños y niñas del riesgo de situaciones de violencia o del consumo de drogas, especialmente en parques y entornos escolares.

5. Los y las consejeros(as) tutelares son un actor importante que empoderan los niños y niñas generando un espacio de interlocución donde se promueva la participación activa de los niños y niñas en los asuntos que les afectan. Al darles voz y empoderarlos, se les fomenta la importancia de reconocer sus derechos, defenderlos y participar en los escenarios institucionales.

Pero no se trata, que los funcionarios de las entidades deleguen su trabajo en los consejeros y evadan su responsabilidad desde la institucionalidad, se trata es de generar corresponsabilidad entre el estado, la sociedad y la familia. Por ello se requiere el apoyo de las entidades no solo en capital humano, sino físico y financiero que permitan desarrollar su labor.

La radiografía de delitos en Bogotá, muestra que los niños siguen siendo sujetos de vulneración de derechos, por ello instancias como los consejeros tutelares representan una oportunidad para que la ciudadanía pueda ser actores claves en la promoción y protección de los derechos de los niños.

ACTIVIDAD DELICTIVA REGISTRADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ POR RANGO VITAL VÍCTIMAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (Entre 0 y 17 años)

CONDUCTA	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR				DELITOS SEXUALES			
RANGO VITAL	2020	2021	2021	2022	2021	2022	2022	2023
PRIMERA INFANCIA	168	266	3	4	3	4	14	21
INFANCIA	408	285	0	0	0	0	360	338
ADOLESCENCIA	1.470	1.029	23	23	23	23	2.007	2.003
Total	2.046	1.580	26	27	26	27	2.381	2.362

CONDUCTA	HOMICIDIOS				LESIONES PERSONALES			
RANGO VITAL	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
PRIMERA INFANCIA	2	3	4	1	33	44	37	38
INFANCIA	0	0	0	1	30	67	76	74
ADOLESCENCIA	34	23	23	29	948	1.001	1.587	1.807
Total	36	26	27	31	1.011	1.112	1.700	1.919

Actividad delictiva registrada en la ciudad de Bogotá por conducta y localidad.
Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información con corte a 31 de diciembre de 2023. FUENTE: SIEDCO.

IV. MARCO JURÍDICO

Hace 35 años se promulgó la **Convención de los Derechos del Niño**, cuyo propósito fue favorecer el desarrollo humano de las infancias del mundo. En Colombia este compromiso se ratifica en la Constitución de 1991 y se reitera en la Ley 12 de 1991 cuando el país adopta la Convención de 1989.

Es entonces que la arquitectura institucional y sus normativas inician una reestructuración para posibilitar la protección integral y donde los derechos de participación entran para involucrar a los niños y niñas en el ejercicio de sus derechos, ya no como un objeto de protección sino reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos, sujetos históricos y sujetos políticos.

El artículo 4° de la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas e incorporada en la legislación interna a través de la **Ley 12 del 22 de enero de 1991**, estableció como deber de los Estados Partes, adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la convención, en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y niñas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA– *“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física y moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia.*

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (2, 11, 12, 13, 16, 17, 42, 43, 45, 48, 50, 67)”

LEY 12 de 1991. “Se aprueba la Convención de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. – reiteración de Colombia al suscribir el tratado internacional.

Derechos de Participación: son aquellos que conforman esta categoría de derechos y que componen lo que permite el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las niñas y niños. Contenidas en la Convención de 1989 y en la Ley 12 de 1991:

- **Artículo 12:** derecho a tener un juicio propio y libertad de opinión – ser oídos y escuchados.
- **Artículo 13:** Libertad de Expresión.
- **Artículo 14:** Libertad de pensamiento.
- **Artículo 15:** Libertad de asociación, celebrar reuniones pacíficas.

LEY 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia.

El artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, dispone que desde la primera infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el mismo Código de Infancia y Adolescencia. Del mismo modo, expresa que son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra peligros físicos y la educación inicial.

Tenemos el Decreto Nacional 936 de 2013 - por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

Artículo 5°. Objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. *En el marco de la necesaria articulación y coordinación, los objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar serán los siguientes:*

4. Mejorar el ejercicio de la participación y movilización social en torno a la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar en los niveles nacional y territorial.

Artículo 8°. Instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. *En el marco de la necesaria articulación y coordinación, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar organizará su funcionamiento a través de las siguientes instancias de decisión y orientación, de operación, de desarrollo técnico y de participación:*

En el ámbito nacional, las instancias son:

(...) 4. Instancias de participación: *Cada departamento deberá definir la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes correspondiente, con el liderazgo de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces.*

En los municipios y distritos, las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar son:

1. Instancia de decisión y orientación: *La instancia máxima de decisión, orientación y evaluación de la operación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el ámbito distrital o municipal son los Consejos Distritales o Municipales de Política Social.*

2. Instancia de operación: *La coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar estará a cargo de la Mesa Distrital/Municipal de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces. La coordinación técnica de estas mesas la realizará el ICBF como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.*

3. Instancias de desarrollo técnico: *El desarrollo técnico del Sistema Nacional de Bienestar Familiar estará a cargo de las mesas poblacionales, mesas temáticas y las estructuras de operación distrital o municipal de otros sistemas administrativos siempre que aborden la situación de la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar. Cada instancia de desarrollo técnico se conformará por los agentes que por sus competencias frente a la protección integral de niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar se consideren necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Teniendo en cuenta su capacidad y estructura funcional, cada municipio y distrito definirá cuáles de las mesas y comités interinstitucionales existentes serán parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en calidad de instancias de desarrollo técnico, en todo caso, todas las mesas y comités que trabajen temas relacionados con infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar deberán hacer parte de dicho sistema.*

4. Instancias de participación: *Cada municipio/distrito deberá definir la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes correspondiente, con el liderazgo de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces.*

Parágrafo 1°. *En la conformación del Consejo Nacional de Política Social se tendrá en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 1444 de 2011, así como las demás modificaciones introducidas a la estructura de la administración pública a partir de la misma. En especial, hará parte de dicha instancia el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, organismo principal del Sector Administrativo de la Inclusión Social y la Reconciliación.*

Parágrafo 2°. *Las mesas departamentales, distritales y municipales de infancia, adolescencia y familia o quien haga sus veces serán instancias de operación de carácter permanente. Estas mesas sesionarán según las necesidades determinadas por el plan de acción del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en su jurisdicción.*

Parágrafo 3°. *En desarrollo de las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Social, del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de coordinación técnica de las Mesas Departamentales, Municipales/Distritales de Infancia, Adolescencia y Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindará el apoyo técnico operativo y de coordinación interinstitucional que se requiera.*

LEY 1804 de 2016 - Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones.

Que el inciso cuarto del mencionado artículo 22, establece que los gobiernos departamentales, distritales y municipales deberán mantener relación directa con la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI) por vía del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en todos sus niveles, para canalizar la asistencia técnica para sus iniciativas y para el desarrollo de políticas, programas y proyectos en materia de primera infancia.

El artículo 25 de la Ley 1804 de 2016 prescribe que el Gobierno nacional reglamentará los esquemas de financiación y cofinanciación entre la nación y el territorio para lograr la sostenibilidad en la atención integral de la primera infancia, para lo cual las entidades territoriales deberán gestionar y ejecutar oportunamente las fuentes financieras complementarias a los recursos de la nación.

Que para efectos de la priorización y conforme la Política de Estado dispuesta en la Ley 1804 de 2016, se debe promover la inversión de recursos por parte de las entidades territoriales en acciones efectivas en la primera infancia.

LEY 2025 DE 2020 Participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, niñas y adolescentes en su formación integral. Esta ley fomenta la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, niñas y adolescentes en su formación integral: académica, social, de valores y principios de los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones educativas públicas y privadas

LEY 2328 de 2023 Política de Estado para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia. En esta Ley se establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas, financieras y de gestión para, de manera progresiva garantizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes entre los seis (6) y los dieciocho (18) años en el marco del desarrollo integral.

Artículo 4: Atención Integral.

Componente c) Construcción de Identidad, Participación y ejercicio de la Ciudadanía.

Documento CONPES D.C. No. 27: Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2023-2033. Los 3 objetivos son:

- Reducir las situaciones de amenaza, inobservancia, y vulneración de los derechos de personas gestantes, niñas, niños y adolescentes
- Reconocer la capacidad de agencia de las niñas, niños y adolescentes para la construcción y desarrollo de su autonomía a partir de sus subjetividades y diversidades.
- Fortalecer la arquitectura Interinstitucional para la gestión de la política que permita las realizaciones de la primera infancia, infancia y adolescencia.

FACTOR ESTRATEGICO 2: No reconocimiento de la capacidad de agencia de niñas, niños y adolescentes para la construcción y desarrollo de su autonomía			
OBJETIVO	RESULTADOS	FIN	
Reconocer la capacidad de agencia de las niñas, niños y adolescentes para la construcción y desarrollo de su autonomía a partir de sus subjetividades y diversidades	2.1 Aumento en la capacidad de agencia y participación de niñas, niños y adolescentes en la construcción de ciudad desde el reconocimiento de sus diversidades y subjetividades como ejercicios autónomos de su ciudadanía.	Transformar los imaginarios, concepciones y actitudes de las personas adultas e institucionales sobre la capacidad de agencia de niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Bogotá D.C.	
	2.2 Posicionamiento de los temas de interés y prácticas colectivas y ciudadanas de niñas, niños y adolescentes en la agenda pública de la ciudad.		

Documento CONPES D.C. No. 05: Política Pública Integral de DDHH 2019 – 2034

El objetivo general de la Política Pública Integral de Derechos Humanos es garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan Bogotá, a través de la articulación interinstitucional y ciudadana en el marco del Sistema Distrital de Derechos humanos.

Del mismo modo, hay varias sentencias que protegen los derechos de los niños, para mencionar algunas de ellas tenemos:

- **SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD 740 de 2008** Definición de niño y adolescente.
- **SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD 442 de 2009** Protección contra el maltrato y los abusos de toda índole a los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.
- **SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD 577 de 2011** Derecho de los niños a tener una Familia

- **SENTENCIA CONSTITUCIONALIDAD 848 de 2014**, Establece el deber de denunciar delitos que afecten a menores de edad.

COMPETENCIA DEL CONCEJO

Este Concejo es competente para expedir la presente iniciativa de conformidad con lo establecido en la siguiente normatividad:

DECRETO LEY 1421 DE 1993. “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.”

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, con conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”.

Ahora bien, el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece como atribución del Alcalde Mayor *“Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos”*. En ese sentido, este Proyecto de Acuerdo da el marco general y le corresponde al gobierno distrital en su capacidad reglamentaria desarrollar, lo plasmado en el objeto de esta iniciativa normativa.

El Concejo permanente ha sido un motor de iniciativas que promueven la participación pero también que promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7o, establece que el impacto fiscal de todo Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual en la respectiva Exposición de Motivos deberán incluirse expresamente los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional que se generaría para financiar tales costos.

De acuerdo a una respuesta de la Secretaria de Integración Social:

“En este sentido, en torno a la asignación presupuestal para el actual cuatrienio 2024 – 2027, los delegados de los Consejos Tutelares Locales al Consejo Tutelar Distrital, realizarán la entrega del plan de acción, el cual es analizado y revisado por la Secretaría Distrital de Integración Social, donde se analizará la viabilidad de recibir recursos asociados a las compras de la Subdirección para la Infancia. De esta manera, en lo correspondiente a la vigencia 2024 se articulará conforme al Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” por medio de lo contemplado en el Proyecto de Inversión 7940: Implementación de estrategias de inclusión social y productiva para la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad en Bogotá D.C.” (Respuesta Radicado No. 2024EE13865 del Concejo de Bogotá D.C. Radicado No. E2024040079 de la Secretaría Distrital de Integración Social. Prop. 1039 de 2024)

9. FLUJO FINANCIERO					
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2024					HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4
Ejecutado Planes anteriores	2024	2025	2026	2027	Total Proyecto
\$0	\$2,650	\$14,102	\$15,107	\$15,779	\$47,638

Cordialmente,

ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA
Concejal de Bogotá D.C.
Cambio Radical

ANDRÉS GARCÍA VARGAS
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

MARIA CLARA NAME RAMIREZ
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO
Concejal de Bogotá
Partido de la U

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE
Concejal de Bogotá
Partido Político MIRA

EMEL ROJAS CASTILLO
Concejal de Bogotá
Partido Nueva Fuerza Democrática

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal Colombiano

ROCÍO DUSSÁN PÉREZ
Concejala de Bogotá D.C.
Partido Polo Democrático

SAMIR JOSE ABISAMBRA VESGA
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal Colombiano

JULIÁN RODRÍGUEZ SASTOQUE
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Alianza Verde

FABIÁN ANDRÉS PUENTES
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Político MIRA

CLARA LUCÍA SANDOVAL
Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal

PROYECTO DE ACUERDO NO 406 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA FORTALECER LOS CONSEJOS TUTELARES DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE MODIFICA EL ACUERDO 110 DE 2003”**

El Concejo De Bogotá D.C. En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. Objeto. Adoptar los lineamientos que tienen como propósito adecuar la integración, operación y funcionamiento de los Consejos Tutelares de los Derechos de los niños y las niñas en el Distrito Capital, creado mediante Acuerdo 110 de 2003, con el propósito de fortalecer su gestión y labor en favor de la niñez.

ARTÍCULO 2° Lineamientos. La Secretaría Distrital de Integración Social de manera participativa, acordará conjuntamente con los consejeros y consejeras tutelares distritales y en cada localidad con los Consejeros y Consejeras Tutelares Locales, un Plan de Acción Anual que permita fortalecer e implementar las capacidades y las funciones de los Consejos Tutelares de los Derechos de los niños y las niñas en el Distrito Capital a nivel distrital y local, para ello se tendrá en cuenta, como mínimo, los siguientes lineamientos:

- a) Diseñar una caracterización de los consejos tutelares, que permita salvaguardar la información de forma actualizada del funcionamiento de cada uno de estos espacios, así como generar una estrategia que fomente la vinculación de nuevos consejeros, cuando se realicen procesos de elección de estos.
- b) Apoyar en las localidades la divulgación de las funciones de los Consejeros y Consejeras Tutelares a la ciudadanía y a las diferentes instancias locales y distritales, con una estrategia de comunicación conjunta y consensuada, que permita fomentar la participación ciudadana y de las entidades en este espacio comunitario.
- c) Propiciar acciones de acompañamiento técnico, logístico y operativo, que permita la organización e implementación del funcionamiento del Consejo Tutelar local y Distrital durante cada vigencia, de acuerdo a las particularidades, dinámicas y problemáticas propias identificadas en cada localidad.

- d) Promover los vínculos de colaboración armónica entre el Consejo Tutelar Distrital y los Consejos Tutelares Locales con los diferentes actores institucionales y entidades de las instancias que coordinan y ejecutan la política pública de infancia y adolescencia y en aquellas donde tienen participación los consejeros.
- e) Garantizar el acompañamiento y el apoyo operativo permanente de un servidor público y/o contratista de la Subdirección para la Infancia o quien haga sus veces, para potenciar e implementar el plan de acción distrital y los planes locales con la finalidad de ejecutar las tareas propias para el debido funcionamiento, e igualmente de las actividades y elementos para el apoyo logístico de estos mismos, respetando su autonomía, dichas actividades, serán orientadas y concertadas con los consejeros tutelares.

ARTÍCULO 3° Reconocimiento. Los Consejeros y Consejeras Tutelares a nivel distrital y local continuarán siendo reconocidos por su carácter cívico y comunitario, para ello, la Veeduría Distrital en coordinación con la Secretaría de Integración Social, diseñarán cada dos años, un informe y promoverá la realización de actividades comunitarias, que sinteticen las acciones realizadas y los logros alcanzados por los Consejos Tutelares a nivel distrital y local.

ARTÍCULO 4°. Estructura Organizacional. Modifíquese el artículo tercero del Acuerdo 110 de 2003, el cual quedará así:

Podrán existir Consejos Tutelares de los derechos de los niños y de las niñas en toda comunidad reconocida como barrio de las diferentes unidades de planeamiento local y en las veredas de la zona rural del distrito capital. Los Consejos Tutelares de los derechos de la niñez estarán conformados por:

Los Consejos Tutelares de los derechos de los niños y de las niñas, estará conformado por un Consejo Tutelar Distrital y en cada una de las localidades podrá funcionar un Consejo Tutelar Local.

El Consejo Tutelar Local estará integrado por mínimo 5 personas y hasta el número máximo de barrio que tenga la localidad. El Consejo Tutelar Distrital estará integrado por un representante delegado por cada uno de los Consejos Tutelares Locales. En todo caso, la integración de estos, se definirán con base a los criterios que se definan al interior del Consejo Tutelar Distrital, previo al proceso de convocatoria en consonancia con las dinámicas sociales y particularidades de cada territorio.

ARTÍCULO 5°. Calidades para ser Consejero o Consejera Tutelar.- Modifíquese el artículo cuarto del Acuerdo 110 de 2003, el cual quedará así:

Puede ser consejero o consejera tutelar local toda persona mayor de 7 años que:

- a. Sea habitante o que realice una actividad permanente dentro de la respectiva localidad que representaría.
- b. Cumpla la fase de aspirante que se establezca en la convocatoria que se establezca para tal fin.
- c. Durante su vida académica, profesional, social y/o comunitaria desarrolle o haya desarrollado alguna actividad en favor de los derechos de los niños y/o de la comunidad.

Parágrafo: Quien desee ser Consejero o Consejera tutelar local deberá cumplir una fase de aspirante y su periodo será de cuatro años, podrán ser reelegidos hasta tres veces. El Consejero Tutelar Distrital será designado cada año y podrá ser reelegido, de acuerdo a la reglamentación que se establezca en cada Consejo Tutelar Local.

ARTÍCULO 6. Recursos y apoyos para los consejos tutelares. Modifíquese el artículo sexto del Acuerdo 110 de 2003, el cual quedará así:

La Secretaría Distrital de Integración Social incluirá dentro del proyecto de presupuesto de cada vigencia, los recursos necesarios para el funcionamiento de los consejos tutelares y el apoyo logístico de los mismos, con base a los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 7°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 407 DE 2025**PRIMER DEBATE****POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA “ESTRATEGIA CIUDADANA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA EN BOGOTÁ D.C. COMO CONTRIBUCIÓN A LA RECONCILIACIÓN, LA NO REPETICIÓN, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ”****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****I. OBJETIVO**

El objeto del presente Acuerdo es impulsar un proceso social, cultural y pedagógico que, en articulación con la Administración Distrital, en cabeza de la Oficina de Paz, Víctimas y Reconciliación, contribuya a la reconciliación, no repetición, convivencia y la materialización de la paz, mediante la adopción de los lineamientos de la “Estrategia Ciudadana por la Verdad y la Memoria Histórica en Bogotá D.C.”.

II ANTECEDENTES

Este proyecto de acuerdo fue radicado por la Honorable Concejal Ana Teresa Bernal de la Colombia Humana – UP el 9 de noviembre de 2023 con el Número: 730.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO

Diversos sectores académicos, sociales y políticos del orden nacional e internacional coinciden en reconocer la importancia de la verdad como hecho ético, moral y acto de justicia que guarda una relación directa con los procesos de reconciliación de una sociedad, en el tránsito de la guerra a la paz.

De otra parte, la reparación integral a las víctimas abarca una amplia gama de mecanismos legales, políticos y sociales que contribuyen en su dignificación y superación del daño entre las cuales se encuentra, la verdad. Este es un derecho y medida transversal a todo esfuerzo social y político que no solo aporta a las decisiones judiciales, sino a la integridad moral y ética de quienes padecieron directamente el conflicto armado interno. En la perspectiva de la Justicia Transicional el derecho a la verdad aporta sustancialmente en la superación de la confrontación armada y al proceso de normalización de la vida social, económica y política, al esclarecer los hechos y factores que la motivaron.

En este sentido, el Acuerdo Final de paz dado entre el Gobierno Nacional y las FARC EP en el año 2016 crea el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición – SIVJRNR - para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición el cual está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD).

Este Sistema Integral refuerza lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011, "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", en todos los órdenes de la reparación integral, la verdad y la justicia.

Por su parte la Ley 2272 de 2022 “Por Medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la Política de Paz de Estado, se crea El Servicio Social para La Paz, y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 2, literal b, dispone

“que la política de paz es una política de Estado que será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En tal sentido, cumpliendo con los requisitos constitucionales vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a su implementación y cumplimiento. Los gobiernos deberán garantizar los enfoques de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional en la construcción de las políticas públicas de paz.”

En este sentido, con este proyecto de acuerdo se propone que Bogotá siga avanzando en el desarrollo de lo adoptado en la Ley 1448 de 2011, el Acuerdo Final de Paz de 2016, y la Ley 2272 de 2022, especialmente en los ámbitos de la reconciliación, garantías de no repetición y la convivencia; a partir de procesos y acciones de construcción de memoria a través de Iniciativas ciudadanas apoyadas por la institucionalidad distrital y la sociedad en su conjunto, para la socialización del informe de la Comisión de la Verdad,” en el marco de la **“ESTRATEGIA CIUDADANA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA EN BOGOTÁ D.C. COMO CONTRIBUCIÓN A LA RECONCILIACIÓN, LA NO REPETICIÓN, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ”**

Finalmente, esta ruta ciudadana es un aporte a la construcción de una paz, desde la diversidad territorial y poblacional de la ciudad.

IV. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

La Comisión de la Verdad (2022) caracteriza al conflicto armado interno como un entramado de alianzas, actores e intereses que no se reduce al enfrentamiento entre armados y a los móviles de carácter ideológico. De otra parte en su declaración final que denominó: Convocatoria a la Paz Grande, señala que los hechos más dolorosos del conflicto armado interno en Colombia son: Los desaparecidos, más de 110.000 a partir de 1982, los secuestros, las más de 2000 masacres la mayoría ejecutadas por paramilitares “con el apoyo de miembros de la fuerza pública” (p. 23), más de 6.402 llamados Falsos Positivos (jóvenes en su mayoría en pobreza, asesinados y contados por la Fuerza Pública como bajas en combate), más de 30.000 niños y niñas menores de 18 años vinculados a las filas, cuerpos usados y destrozados como campos de guerra, el de las mujeres y de población LGTBI especialmente, una multitud errante, es decir alrededor de 8 millones de personas que fueron desplazadas forzosamente, de estos “más de 4 millones menores de 18 años” (p.27), los campesinos y campesinas las principales víctimas desde 1.948, amplios campos de zonas minadas y más de 8 millones de hectáreas despojadas a 2.016.

En materia de derecho internacional humanitario, los principios de Joinet () disponen que las víctimas y la sociedad que padecieron conflictos armados tienen tres derechos principales: el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho de obtener reparación. Esto en gran parte obedece a los desarrollos jurisprudenciales que parte del reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y de la necesidad de hacer frente a hechos que ultrajan la conciencia de la humanidad.

En este orden,

“Tanto la lucha contra la impunidad como el derecho a obtener reparaciones se derivan de la obligación general de todos los Estados de respetar y hacer respetar los derechos humanos, concretamente en relación con los deberes estatales en materia de administración de justicia”. (Comisión Colombiana de Juristas, 2007)

Por lo tanto el derecho a la verdad es un conjunto amplio de medidas y campos que el Estado debe impulsar para que las víctimas y la sociedad puedan dialogar, reconocerse y esclarecer los hechos.

4.1 Verdad y Memoria Histórica:

En este acápite del análisis de conveniencia se debe precisar unos mínimos conceptuales sobre la verdad y la memoria histórica como dos categorías de amplia discusión en el orden filosófico, epistemológico y político.

De una parte, la memoria histórica alude al proceso individual y colectivo de reconocimiento y visibilización en tiempo presente de los hechos que padecieron las personas y sus comunidades en aquellas sociedades que han vivido y aún viven el sometimiento a guerras cruentas, despojo, genocidios y vulneraciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Algunos teóricos (Atehortúa, 2020) reconocen en esta práctica social, un proceso de construcción colectiva que se hace legítimo al enunciarse desde la voz de las víctimas y pretende determinar qué ocurrió, cómo, quiénes fueron los responsables y qué dejó en las personas y comunidades.

La memoria histórica no tiene relevancia exclusiva en el pasado sino que tiene implicaciones hacia el futuro, Matas Morell (2010), citado por Atehortúa (2020) indica: “La recuperación del pasado es el lugar donde se decide el futuro. Los lugares de la memoria no nos hablan del pasado sino del futuro” (p. 122).

Por último, es ampliamente reconocido que la memoria histórica es también producto de los marcos culturales, sociales y políticos de las comunidades y su construcción en gran parte sucede transitando el dolor y el sufrimiento que causó el hecho victimizante. En este orden, al estar inscrita en el campo de la subjetividad social y política y supeditada a las relaciones sociales que disputan en medio de sociedades polarizadas y con amplios procesos de estigmatización y desprestigio, esta se constituye en un campo de fuerzas y de discusión social en la que pueden imponerse relatos dominantes. Estos fallos hacen indispensable la intervención del Estado a través de políticas públicas que posibiliten y garanticen procesos de memoria amplios y diversos.

La verdad desde una perspectiva convencional, según Schaff (1982), citado por Atehortúa; requiere de la tríada: sujeto cognoscente, objeto de conocimiento y resultado del conocimiento, lo que significa que en su construcción se da un acto epistemológico con pretensión de universalidad y materialidad objetiva, lo que no implica desconocer las particularidades de los individuos y sus procesos autónomos y diversos. De otra parte, para la fenomenología hermenéutica (Gilardi, 2011) el fenómeno de la verdad se sitúa de forma más compleja, más allá del esquema sujeto-objeto impuesto por la modernidad.

Desde la filosofía clásica se ha asociado la “verdad con el ser” (Gilardi, 2011), los griegos, sobre la *alétheia* se referían al acto de descubrir, desvelar, retirar del ocultamiento. Según (Ferrater, 1952) esta es el “descubrimiento del ser, es decir, como la visión de la forma o perfil de lo que es verdaderamente, pero que se halla oculto por el velo de la apariencia».

De otra parte la verdad histórica en los procesos de transición de la guerra a la paz, es reconocida como proceso colectivo y amplio que es construida de forma metódica desde la perspectiva de las víctimas, para esclarecer los hechos de sufrimiento, dolor, pérdida y dialogar en la búsqueda de sentido colectivo.

Por su parte el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición precisa que la verdad es *un bien público*. Con esta perspectiva reconoce la importancia de carácter social y colectivo de la verdad. Textualmente refiere de Roux,

“La verdad debe ser un bien público, un derecho y una deber ineludible cuando se trata explicar por qué la vida y la dignidad fueron arrasadas en miles de masacres, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos extrajudiciales, abusos a las mujeres, desplazamientos, robos de tierra a los campesinos y de hatos a los ganaderos, exclusión y expropiación a los indígenas y a los afrocolombianos, homicidios de sindicalistas, educadoras, políticos, gobernantes y empresarios, muertes en combates sin sentido de multitud de jóvenes en una guerra absurda, y destrucción de ríos, montañas y especies nativas....para citar solo algunas de las formas de nuestra ruptura humana y del territorio”.

La verdad como derecho, deber y bien público debe ser acogida y refrendada por la sociedad colombiana en su conjunto.

4.2 Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la No Repetición: “Hay Futuro si hay verdad”.

En este orden de ideas, la memoria histórica y la verdad en el marco de la Justicia Transicional son complementarias y apuntan a generar un diálogo social y procesos de esclarecimiento para la reconciliación, la no repetición y la convivencia. En el caso del cierre del conflicto armado interno dado por casi 60 años entre el Gobierno Nacional y las FARC EP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición adoptada en el Acuerdo de Paz, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral para la Paz entregó a la sociedad colombiana un informe final en el que se dio esclarecimiento de los trece puntos de su mandato, con toda su complejidad, y que aportó recomendaciones para evitar la repetición de una “historia aciaga como la que ha vivido Colombia” (Comisión de la Verdad, Informe de Hallazgos y Recomendaciones, 2022, pag, 24).

Este informe denominado: **“Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”**, consta de diez tomos y una declaración llamada “Convocatoria a la Paz Grande” en la cual se exponen las verdades más dolorosas y concluyentes del informe final que nos interpelan como sociedad.

Los tomos que comprende el informe son:

Tabla 1. Relación de tomos del informe de la Comisión de la Verdad, (2022).

Nº	TOMO	DESCRIPCIÓN
----	------	-------------

1	Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia	Contiene una primera parte con la síntesis de once temas que fueron investigados en profundidad por la Comisión, muchos de ellos ampliamente sustanciados en otros tomos de este mismo Informe y en un notable archivo de casos. Estos once documentos se presentan de manera separada, pero en realidad corresponden a una lectura sistémica de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado interno.
2	No matarás.	Relato histórico del conflicto armado es la narración histórica de la guerra y su misión es ampliar el contexto de lo ocurrido durante los últimos sesenta años.
3	Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas	Presenta un exhaustivo y completo panorama de esos hechos.
3	Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado	Está compuesto por catorce volúmenes que relatan específicamente qué ocurrió en las regiones y con el campesinado.
5	Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias	Revela los impactos sufridos durante la guerra por todas las víctimas, excombatientes, comunidades y la naturaleza.
6	Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia	Netamente testimonial y coral. Una curaduría de voces que van del pasado al porvenir, pasando por el presente.
7	Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia	Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia es un aporte a la verdad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom
8	Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y de personas LGBTIQ+ en el conflicto armado	Hace visible la experiencia de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en los distintos momentos de la guerra y, en particular, las violencias sexuales enfrentadas.

9	No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado.	Recoge la experiencia de este sector de la población.
10	La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio	Es un trabajo pionero en hacer visible al millón de personas exiliadas en razón del conflicto armado interno.

Finalmente Comisión de la Verdad (2022) describe la naturaleza del informe así:

Estos tomos no agotan la noción de Informe Final. Este no pretende ser un ejercicio académico para engrosar las bibliotecas, sino un ejercicio vivo, un proceso social, político y cultural de debate democrático sobre el pasado y la transformación del presente, sin pretensión de convertir estos textos en una «verdad oficial». Dejamos para el país el Informe como un hito importante de la reflexión sobre el pasado que hace esa sociedad que mira al futuro con esperanza. (Tomo Hallazgos y Recomendaciones, pág 27)

Con esta iniciativa normativa se promoverá este informe, máximo ejercicio de esclarecimiento de la verdad en los últimos tiempos en el país en articulación con procesos pedagógicos, culturales y de memoria histórica en Bogotá.

4.3 Experiencias internacionales de Comisión de la Verdad

Las Comisiones de la Verdad se han desarrollado en procesos de transición de la guerra a la paz en países de África, Europa y América Latina. En el caso argentino, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas - CONADEP - presidida por Ernesto Sábató, en su informe “Basta Ya” identificó casos de tortura y desaparición forzada en la dictadura militar. Entre sus recomendaciones “la continuación de las investigaciones por la vía judicial, la entrega de asistencia económica, y la aprobación de normas legales que declaren la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad”. (Comisión de la Verdad Colombia).

En Perú la Comisión de la Verdad, primera en América Latina, logró esclarecer hechos en materia de violencia sexual contra las mujeres. En Chile la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación investigó hechos relacionados con tortura, desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su resultado fue el Informe Rettig. En El Salvador, la Comisión de la Verdad presidida por el expresidente colombiano, Belisario Betancourt, fue un organismo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este conflicto bélico entre sus recomendaciones una de las de mayor impacto fue la depuración de la Fuerzas Militares y la creación de la Policía Nacional Civil. Y en Guatemala, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala identificó actos de genocidio en especial contra el pueblo Maya de ese país y reconoció la violencia de género.

En Canadá la Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada en 2008 esclareció una serie de abusos sistemáticos contra los pueblos indígenas durante más de un siglo. Un año después de la publicación de este informe, Justin Trudeau, ofreció disculpa a los indígenas

En este contexto, la Comisión de la Verdad de Colombia (2022) refiere que,

“aunque en general las comisiones de la verdad se enfrentan a contextos adversos (tareas complejas, un corto tiempo para desarrollar su mandato, recursos económicos reducidos, contradictores y campañas de desprestigio), pueden hacer contribuciones fundamentales dentro del proceso de transición del país donde se desarrollan, especialmente cambiando la forma de ver y entender algunos aspectos polémicos de la violencia que se ha vivido recientemente en estos países”.

Las experiencias internacionales han demostrado que estas instituciones aportan de forma sustancial en la generación de confianza, promoción de procesos de reconciliación y de sanación de las personas y sus comunidades. En todos los países en donde se han implementado sectores influenciados por los relatos dominantes guerrilleros se muestran resistencia a este ejercicio que fundamentales se hace desde las víctimas. En general a mediano y largo plazo, estas comisiones desatan procesos democratizadores, principalmente en el ámbito de las mentalidades.

4.4 Bogotá, memoria histórica y verdad.

Bogotá juega un papel protagónico en el campo de lo político y lo social para avanzar en la construcción de condiciones para la materialización de la paz total. La profundización de la democracia, el fortalecimiento del ejercicio pleno de la ciudadanía, la construcción de confianza en las instituciones, la puesta.

En el Plan de Desarrollo 2024 - 2028 continúa el propósito central de adoptar a la Paz como derecho humano a garantizar en los próximos cuatro (4) años, así como plantea territorializar los Acuerdos de Paz. Esta intención se suscribe en los artículos 48, 49, 50 y 51.

De otra parte, la OCDPVR tiene como misión, para el periodo 2024-2028, territorializar el Acuerdo de Paz en Bogotá, por medio de la transformación integral de las zonas más vulnerables; la estabilización socioeconómica de las personas en proceso de reincorporación y reintegración o que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz; y la atención, reparación, integración local y la satisfacción de los derechos de las víctimas que quieren reconstruir su proyecto de vida en el Distrito Capital. Su objetivo es: Mejorar la calidad de vida de quienes han sido más afectados por el conflicto armado y han escogido Bogotá para desarrollar su proyecto de vida, así como brindar garantías para la no repetición.

Dentro de sus objetivos específicos, está específicamente:

Implementar estrategias para promover los derechos a la verdad y la justicia, así como la construcción de memoria, paz y reconciliación.

Para la vigencia 2024- 2028, estos temas responden a la estrategia Número 4:

- Bogotá promueve la reconciliación a través de la memoria
- Se fortalecerá el esclarecimiento y la construcción de memoria histórica frente a las graves violaciones a Derechos Humanos e infracciones al DIH ocurridos en la ciudad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la visión de la OCDPVR para este periodo es que la ciudad sea un territorio de paz y reconciliación, para que las poblaciones más vulnerables –incluyendo víctimas, excombatientes y habitantes de los territorios afectados por las consecuencias del conflicto armado- puedan volver a empezar.

En este orden se relacionan los artículos del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” que orientan la gestión pública de la ciudad en materia de paz, reconciliación y aporte a la reparación de las víctimas del conflicto armado interno para los próximos cuatro años. Ver tabla anexa.

Tabla 2. Artículos PDD 2024 - 2028

ARTÍCULO	Nº	DESCRIPCIÓN
Artículo 51. Estrategia transversal para territorialización del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera	51	<p>En virtud del inciso segundo del artículo transitorio de la Constitución Política, incorporado en el artículo 1º del Acto Legislativo 002 de 2017, la Secretaría General, a través de la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, ejecutará una estrategia transversal que permita contribuir a la implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.</p> <p>El Gobierno Distrital trabajará de manera articulada y colaborativa con las entidades que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.</p> <p>El Gobierno Distrital formulará, articulará y adecuará las políticas, planes, programas y proyectos restaurativos que sirvan para el desarrollo y sostenibilidad de las sanciones propias y de otras medidas de contribución a la reparación a las víctimas a cargo de los comparecientes ante la JEP que se adelantan en Bogotá y que sean competencia del Distrito, y contando con la participación de las víctimas.</p> <p>Parágrafo 1. Lo adoptado en esta materia tendrá en consideración las garantías de seguridad que faciliten la construcción de paz y de bienes públicos, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 154 de 2017.</p> <p>Parágrafo 2. En las acciones emprendidas se garantizará la integración del enfoque de género, étnico, LGBTQ+, de discapacidad y derechos humanos de las mujeres en cumplimiento de la normativa distrital, nacional e internacional vigente.</p>

Artículo 50. Ruta socioeconómica para personas en proceso de reincorporación o reintegración personas que hayan culminado la ruta de reintegración o comparecientes ante la JEP.	50	<p>Las entidades distritales, de manera coordinada y armónica, desde el ámbito de sus competencias legales y funcionales, coordinadas por la Secretaría General, a través de la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, adelantarán acciones que respondan a las necesidades particulares de la ciudad para la implementación de la “ruta socioeconómica para personas en proceso de reincorporación, reintegración, personas que hayan culminado la ruta de reintegración o comparecientes ante la JEP”.</p>
Artículo. Transformaciones Rurales Integrales	48	<p>La territorialización del Acuerdo de Paz en Bogotá se dará mediante la incorporación de planes de desarrollo territorial con enfoque rural, conforme a lo contemplado en el punto 1.2 del Acuerdo Final. Se diseñarán e implementarán Transformaciones Rurales Integrales en bordes urbanos y rurales como una estrategia, construida mediante procesos participativos, que incluya medidas en materia de inclusión social y productiva, para el cierre de brechas de exclusión social en la población de Bogotá. En el marco de la implementación de esta estrategia, se desarrollará la Hoja de Ruta PDET-BR, con un enfoque en lo rural, para focalizar recursos e impulsar transformaciones integrales de los diferentes sectores en la implementación de las iniciativas definidas en los PDET-BR. Los compromisos adquiridos por las entidades en los PDET BR y en los demás lugares priorizados, deberán reflejarse en su presupuesto anual y en sus indicadores de ejecución de sus proyectos. El Distrito, en el marco de sus competencias, adelantará los esfuerzos para impulsar la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Sostenible – PDS– de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz. La elaboración de la Hoja de Ruta PDET BR tendrá en cuenta el Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC de Sumapaz. En el marco de la implementación de dichos instrumentos, se buscará generar acuerdos con entidades del orden nacional que permitan el cumplimiento de las acciones previstas en el marco de la territorialización del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Parágrafo. Las Transformaciones Rurales Integrales tendrán una vigencia de 10 años.</p>

Artículo Atención, asistencia y reparación integral.	49	Se fortalecerán las instancias de adopción y ejecución de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, en cumplimiento de las competencias de la Ley 1448 de 2011 y el Acuerdo de Paz para las entidades territoriales, y demás normas reglamentarias. En el marco de las competencias de las entidades territoriales frente a la reparación integral, se elaborará la política pública de integración local a víctimas del conflicto armado. En razón a lo anterior, a través de las instancias de articulación creadas con ocasión a la Ley 1448 de 2011, se podrán articular esfuerzos con las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJNR- que permitan aportar a la materialización de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.
---	-----------	--

En este orden de ideas, se considera que esta iniciativa normativa cuenta con programas y proyecto marco en el actual Plan de Desarrollo Distrital (2024 - 2028).

V. MARCO JURÍDICO

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario

Estos aprueba interponer recursos y obtener reparaciones. De otra parte, determinan que, en los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas. Además, en estos casos los Estados deberán, en conformidad con el derecho internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales competentes a investigar tales violaciones y enjuiciar a los responsables.

Igualmente determinan que, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Y que, una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de ahora CIDH, precisa que, entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 2. "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo." (Negrilla de los autores de la Iniciativa).

ARTÍCULO 45 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud

El derecho a la paz

LEYES Y DECRETOS DE LA NACIÓN

Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones." establece en su artículo 23 el DERECHO A LA VERDAD el cual textualmente refiere,

"Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas vivas o muertas"

El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial".

En el literal 1 del artículo 28 refiere los Derechos de las Víctimas son el: el derecho a la verdad, la justicia y la reparación

Y en su artículo 142 se adoptó el DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS, textualmente refiere,

"El 9 de abril de cada año, se celebrará el día de la memoria y solidaridad con las víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas".

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 - Acuerdo Final - refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016, prevé la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR o Sistema), en cumplimiento del compromiso del Gobierno Nacional y las FARC-EP de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo y en respuesta a sus testimonios, propuestas y expectativas. Este

Sistema está compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales, incluida la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV).

En consecuencia se reglamentó el Decreto 588 de 2017, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, entidad de régimen legal propio que, en un periodo de tres años tenía como mandato. En su artículo 2 se establece,

“Buscar la verdad de lo ocurrido, en el marco del conflicto armado interno, y contribuir a esclarecer las violaciones cometidas en el mismo y ofrecer a la sociedad una explicación amplia de su complejidad y un relato que recoja todas las voces”.

Además promover

“el reconocimiento del derecho a la verdad de las víctimas y el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto. (...) y la convivencia en los territorios teniendo como horizonte la no repetición”. (Artículo 2)

Y en el numeral 5 del artículo 13 se reglamenta que esta debe,

“Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo, incluyendo garantías de no repetición. La CEV presentará el Informe de manera oficial mediante acto público a las ramas del poder público y al conjunto de la sociedad colombiana, y lo socializará. La publicación del Informe Final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la CEV”

Por último en el numeral 8 reglamenta

“Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta, durante su funcionamiento, de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de la CEV, y asegurar la mayor participación posible. El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como, por ejemplo, la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo. En todo caso, las conclusiones de la CEV deberán ser tenidas en cuenta por el Museo Nacional de la Memoria”

NORMATIVA DISTRITAL

En Bogotá el Acuerdo 491 de 2012 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 370 de 2009, se crea el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en Bogotá, D.C., se adicionan lineamientos a la política pública y se dictan otras disposiciones” en su artículo 8 establece,

ARTÍCULO OCTAVO. Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En concordancia con lo establecido en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, el Concejo de Bogotá celebrará una sesión plenaria el 9 de abril de cada año, para que la Administración presente el informe de avance de la política y escuchar a las víctimas del conflicto establecidas en la ciudad, de conformidad a lo dispuesto en el presente Acuerdo

El Acuerdo Distrital 784 de 2020 “Por el cual se establecen medidas para la recuperación, el fortalecimiento y la promoción de la memoria histórica, la paz y la reconciliación en Bogotá D.C. y se dictan en otras disposiciones”, en su artículo 5 define,

ARTÍCULO 5.- Institucionalización de los ejes de la memoria y la paz en Bogotá. Institucionalícense en la ciudad de Bogotá los ejes de la memoria y la paz como espacios de encuentro con enfoque diferencial, de género, étnico y generacional que representan hechos históricos en la ciudad para promover acciones de conservación de la memoria histórica y la cultura de paz y reconciliación.

El Decreto 339 de 2020 “Por medio del cual se actualiza el Comité Distrital de Justicia Transicional para Bogotá, D.C”

Los Planes integrales de reparación colectiva- PIRC

El Decreto Distrital 489 de 2021: Por medio del cual se crea y se reglamenta la Mesa Intersectorial para la implementación del Acuerdo de Paz para Bogotá, D. C.

El Decreto 624 de 2023: Por medio del cual se promueven las estrategias para la construcción de memoria histórica local en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.

Y el Decreto 537 de 2023: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia, y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038 y se dictan otras disposiciones

VI. COMPETENCIA CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. es competente para estudiar, tramitar y promulgar la presente iniciativa, conforme las atribuciones reconocidas en la Constitución Política y el Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., a saber:

Artículo 313 numeral 1 de la Constitución Política:

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. [...]”.

Artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993:

“ARTÍCULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. [...]”.

23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales.

VII. IMPACTO FISCAL

Teniendo en cuenta los mandatos de la ley 819 de 2003 "Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El presente proyecto de acuerdo NO genera impacto fiscal, ya que no compromete apropiaciones presupuestales para su implementación. El proyecto no genera nuevos gastos tributarios

Cordialmente

ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ

Concejal de Bogotá D.C.

PROYECTO DE ACUERDO NO 407 DE 2025**PRIMER DEBATE****POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA “ESTRATEGIA CIUDADANA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA EN BOGOTÁ D.C. COMO CONTRIBUCIÓN A LA RECONCILIACIÓN, LA NO REPETICIÓN, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.**

En cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política y en especial las atribuciones constitucionales y legales, conferidas en el numeral 1o del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es adoptar lineamientos de la “Estrategia Ciudadana por la Verdad y la Memoria Histórica en Bogotá D.C.”. para impulsar un proceso social, cultural y pedagógico que en articulación con las entidades competentes que contribuya a la reconciliación, no repetición, convivencia y la materialización de la paz.

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES: Para efectos del presente Acuerdo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

a. Estrategia Ciudadana para la Verdad y la Memoria Histórica: Es un proceso de elaboración participativa donde se construirán iniciativas ciudadanas para hacer pedagogía y socialización del Informe Final de la Comisión de la Verdad y de otros informes institucionales sobre el conflicto armado interno en Colombia tendientemente al esclarecimiento de la verdad en Colombia. Esta contará con un momento pedagógico, un momento creativo y un momento de socialización.

b. Momento pedagógico: Encuentros formativos para la socialización del Informe de la Comisión de la Verdad y de otros informes institucionales sobre el conflicto armado interno en Colombia tendiente al esclarecimiento de la verdad en Colombia, así como en procesos de memoria histórica en el marco del conflicto interno armado. Este momento será liderado por la entidad competente de la administración distrital.

c. Momento de creación de iniciativas: Encuentros liderados por la entidad competente de la administración distrital para la construcción de las iniciativas ciudadanas de la Estrategia de Verdad y Memoria Histórica en las áreas de: Trabajo escrito, producción audiovisual, artes plásticas y artes escénicas.

d. Momento de Divulgación: En el Día Nacional de las Víctimas se darán a conocer las iniciativas ciudadanas que fueron elaboradas en los momentos anteriores de la estrategia, por los medios de comunicación que se estimen. Este momento será liderado por la entidad competente de la administración distrital.

e. Memoria histórica: Todo ejercicio individual y colectivo que permita recordar, nombrar y reflexionar sobre lo sucedido en el marco del conflicto armado en el país y la ciudad, a través de diversas narrativas orales, audiovisuales, artísticas y culturales con enfoque diferencial y poblacional, limitado a las acciones en el marco del conflicto interno armado.

f. Verdad: Es un derecho inalienable de los pueblos conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El insumo que se usa para la implementación de la Estrategia del presente Acuerdo es el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

g. Lugar Emblemático: Es el espacio geográfico de la ciudad, incluyendo la ruralidad; que tiene un valor cultural, político, social y/o simbólico, en el marco del conflicto armado interno colombiano.

ARTÍCULO 3. INSCRIPCIÓN EN LA ESTRATEGIA CIUDADANA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA EN BOGOTÁ.

La Administración Distrital, en el marco de sus competencias se encargará de definir en la fase de reglamentación del presente Acuerdo la forma de inscripción, requisitos, modalidades y demás aspectos relevantes para el espacio de construcción de iniciativas en el marco de la Estrategia Ciudadana por la Verdad y la Memoria Histórica en Bogotá.

En el espacio de construcción de iniciativas podrán participar entre otras:

- a. Personas Naturales.
- b. Organizaciones Sociales.
- c. Colectivos comunitarios.
- d. Comunidades Educativas.
- e. Víctimas del Conflicto Interno Armado.
- f. Población NARP.
- g. Pueblos indígenas
- h. Pueblo Rrom

ARTÍCULO 4. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PARA EL ESPACIO DE CREACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN LA ESTRATEGIA CIUDADANA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA EN BOGOTÁ.

La Administración Distrital en la fase de reglamentación del presente Acuerdo definirá el número específico de iniciativas ciudadanas participantes en la Estrategia, así como las modalidades de presentación, dependiendo de la capacidad institucional.

En la Estrategia Ciudadana se podrán tener en cuenta las siguientes modalidades:

- a. Artículo académico o de reflexión.
- b. Cuento o ensayo científico.
- c. Fotografía.
- d. Pintura.
- e. Escultura.

- f. Danza.
- g. Teatro.
- h. Las demás que se consideren pertinentes.

ARTÍCULO 5: ENFOQUES DIFERENCIALES

Las iniciativas presentadas en la Estrategia Ciudadana por la Verdad y la Memoria Histórica en Bogotá tendrá en cuenta los enfoques: poblacionales, territoriales y étnico, discapacidad, derechos humanos, género, poblacional diferencial y el de trabajo comunitario.

ARTÍCULO 6. SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA CIUDADANA POR LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA EN BOGOTÁ. La Administración Distrital, en el marco de sus competencias, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el 9 de abril de cada año, socializará las iniciativas ciudadanas en lugares emblemáticos de la ciudad.

ARTÍCULO ° 7. REGLAMENTACIÓN. La Administración Distrital reglamentará las disposiciones del presente Acuerdo en el plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 8. INFORMES. La Administración Distrital, en cabeza de las entidades competentes, en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, rendirá anualmente ante el Concejo de Bogotá D.C. un informe sobre la implementación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 408 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA DE REFLEXIÓN POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN CONMEMORACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A BOGOTÁ”

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital.

- **DE ORDEN CONSTITUCIONAL**

ARTÍCULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

- **DE ORDEN LEGAL**

Ley 33 de 1994: “Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.”

- **DECRETOS**

Decreto 1396 de 1997: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994, el artículo 45 del Decreto-ley 2150 de 1995 y se modifica el Decreto 782 de 1995.”

- **NORMATIVIDAD DISTRITAL**

Acuerdo 683 de 2017: “Por el cual se rinde homenaje al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, con motivo de su visita a Bogotá D.C.”

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA

El Papa aterrizó en Bogotá el 6 de septiembre del 2017, en su primer recorrido en la ciudad desde el Aeropuerto El Dorado una multitud sin precedentes por la Calle 26, salieron a saludarlo a su paso hacia la Nunciatura Apostólica. A su llegada lo esperaban unos jóvenes del IDIPRON quienes fueron los encargados de darle la bienvenida a la que sería su casa en Colombia durante los siguientes 4 días.

La segunda jornada del Papa Francisco en Colombia fue el 7 de septiembre, la agenda del Sumo Pontífice en Bogotá inició en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en donde fue recibido por el presidente de la República y las autoridades nacionales. Posteriormente se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, en donde destacó los esfuerzos por alcanzar la paz.

Posteriormente, el Papa Francisco recorrió en el papamóvil la Plaza de Bolívar, en donde lo esperaban más de 25 mil jóvenes de todo el país y las autoridades Distritales. Visitó la Catedral Primada en donde le dedicó unos minutos de oración a la Virgen de Chiquinquirá. Ante los jóvenes presentes en la Plaza de Bolívar desde el balcón del Palacio Cardenalicio, dio un discurso sobre lo importante de soñar y los bendijo. Posteriormente se reunió allí mismo con los obispos del país. Recorrió en el papamóvil la carrera séptima de regreso a la Nunciatura Apostólica. En horas de la tarde, tuvo un encuentro con el comité directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica.

En su último evento oficial en Bogotá, el papa Francisco ofició una Eucaristía ante 1.360.000 feligreses en el Parque Simón Bolívar. Una vez arribó el máximo jerarca de la Iglesia Católica al parque, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, empezó la interpretación de la música. La acompañaba el Coro Filarmónico Juvenil de Bogotá, la Sociedad Coral Santa Cecilia y el Coro Infantil de la Catedral. Todos los asistentes a la misa lograron apreciar de cerca al papa Francisco, quien recorrió en su papamóvil el interior del parque Simón Bolívar. En conclusión, el Papa realizó cinco recorridos en el papamóvil por las calles de Bogotá, cinco recorridos en automóvil y cuatro actos de bienvenida cada noche en la Nunciatura Apostólica, todos incluyeron una masiva afluencia de público deseoso de ver y manifestar su afecto al máximo jerarca de la Iglesia Católica.

Según las estimaciones hechas por los observatorios de la Secretaría de Desarrollo y el Instituto Distrital de Turismo, la inyección a la economía de la ciudad por la visita del Papa Francisco ascendió a más de 180 mil millones de pesos.

La seccional Bogotá de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) reportó una ocupación del 62,7 %, lo que significó un repunte de casi 10 puntos con respecto al

promedio del primer semestre de este año (53,4 %) y una demanda adicional de mil habitaciones, aproximadamente.

La ciudad acogió durante la visita del papa a unos 600 mil visitantes, lo que le representó a la ciudad ingresos por este concepto de 115 mil millones de pesos, correspondiente a los gastos generados en los eventos previos y durante la visita del papa a la ciudad.

De otro lado, se observó que el 53 % de los visitantes llegó a la ciudad en bus intermunicipal; el 26 %, en avión; el 15 %, en vehículo particular y el 6 %, en transporte especial. Además, cerca del 90 % de los turistas nacionales y el 70 % de los internacionales llegaron a Bogotá para asistir a la misa campal que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar.

Otro dato entregado por la Alcaldía de Bogotá, las compañías de telefonía celular también tuvieron un repunte importante en cuanto al consumo de datos móviles, que se dispararon en un 40 % durante los días que estuvo el papa en la capital del país. El sistema de transporte masivo (Transmilenio y SITP) reportó, a su vez, que movilizó de manera fluida a más de 6,3 millones de personas los días 6 y 7 de septiembre, una cifra récord.

Los cálculos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico destacaron que al menos tres millones de personas acudieron al encuentro del papa Francisco durante su paso por Bogotá, en los distintos eventos y desplazamientos.

Según cálculos aproximados, cada asistente residente a la misa campal gastó en promedio 40 mil pesos. Y en las demás actividades como recorridos y Plaza de Bolívar se tiene un estimativo de 20 mil pesos para ver al sumo pontífice, lo que generó ingresos adicionales de los residentes para la ciudad cercanos a los 65 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Adicionalmente, el encuentro del papa con más de 25.000 jóvenes que se congregaron el jueves 6 de septiembre en la Plaza de Bolívar les generó ingresos a comerciantes y empresarios de la capital por 500 millones de pesos, según proyecciones del Observatorio de Desarrollo Económico.

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

EL Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993 No. 13, principalmente en el numeral 1 que facultan a la Corporación para dictar normas así:

(...)

DECRETO LEY 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural.

IV. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento de la Ley 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones y que

en su artículo 7 determina que: “Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (...) Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”

Aclaramos que las presentes iniciativas **NO generan un impacto fiscal** que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

Cordialmente,

H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ.

Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

V. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS

PROYECTO DE ACUERDO NO 408 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA DE REFLEXIÓN POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN EN CONMEMORACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A BOGOTÁ”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 12 numeral 13 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA

I. ARTICULADO

ARTÍCULO 1. OBJETO. El Distrito Capital establecerá una jornada de reflexión por la paz y la reconciliación en conmemoración de la visita del Papa Francisco.

ARTÍCULO 2. DECLARATORIA. Declárase el 7 de septiembre de cada año como el Día en Conmemoración de la visita Papa Francisco en Bogotá.

ARTÍCULO 3: CONMEMORACIÓN: La administración propenderá por realizar actividades de carácter religioso y laico en pro de la jornada de reflexión por la paz y la reconciliación en conmemoración de la visita del Papa Francisco.

ARTÍCULO 4: INFORME: La administración Distrital a través de las entidades competentes presentará un informe anual sobre la implementación del presente acuerdo ante el Concejo Distrital de Bogotá.

ARTICULO 5: VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO DE ACUERDO NO 409 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE ADOPTAN MECANISMOS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON FAMILIARES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA LA BÚSQUEDA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESAPARECIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL”****1. OBJETIVO**

El presente proyecto de acuerdo adopta mecanismos institucionales en coordinación con familiares y organizaciones sociales, para la búsqueda de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el distrito capital.

2. ANTECEDENTES

N° PA	Nombre	autor	Ponente	Concepto
572 de 2023	“Por el cual se crea el sistema de alerta de emergencia rápida para niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el Distrito Capital”	Luis Carlos Leal	H.C Javier Alejandro Ospina Rodríguez (Coordinador) H.C Fabián Andrés Puentes Sierra	H.C Javier Ospina: Ponencia Positiva. H.C Fabián Puentes: Ponencia Negativa.

3. JUSTIFICACIÓN**3.1 Contexto, y situación actual.**

En el año 2022 según cifras de medicina legal, en Colombia, se registraron 6226² desapariciones a nivel nacional. Las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 19 años, en el Distrito Capital, fueron 946, es decir que, el 15.19% de estas desapariciones que suceden en el país son de los niños, niñas adolescentes y jóvenes de la ciudad de Bogotá. Lo más preocupante es que según las cifras presentadas por medicina legal, la cantidad de niños, niñas, jóvenes y adolescentes desaparecidos cada día son más, demostrando así que las políticas y acciones para prevenir esto no han sido suficientes o han sido ineficaces.

Uno de los factores con mayor incidencia dentro del Distrito Capital es la presencia de diferentes grupos armados delincuenciales organizados o grupos armados organizados como el ELN, las disidencias de las FARC, y paramilitares, los cuales mediante el uso de presión y control territorial en sus barrios buscan reclutar a los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes (en adelante NNAJ) para diversas labores ilegales aprovechándose que muchos de estos NNAJ son poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad por pobreza, falta de educación, insatisfacción alimentaria, y en algunas ocasiones hasta los padres que ven una oportunidad de negocio para venderlos con fines de adopción, explotación o tráfico.

Es importante indicar que a la fecha de hoy la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, emite entre el periodo de tiempo señalado, 102 Alertas tempranas que hacen referencia al riesgo de reclutamiento, uso y utilización para niñas, niños y adolescentes en el país, por parte de actores armados no estatales parte del conflicto y grupos armados del crimen organizado en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre y Tolima, y en la ciudad de Bogotá³.

El trabajo informal, el bajo logro educativo y el rezago escolar, son indicadores que presentan mayores niveles de privación, factores que, a su vez, profundizan la vulnerabilidad, especialmente de la población infantil y juvenil, para ser reclutada, vendida o instrumentalizada por diferentes actores.

En cuanto a la explotación infantil desde la plataforma de datos abiertos Bogotá pudimos identificar que en el 2021 hubo **7500** y en el año 2022 la cantidad de **11714**⁴ NNAJ entre los 0 y 17 años que participaron en actividades económicas remuneradas.

La población de desplazamiento forzado según el Registro Único de Víctimas UARIV (mayo, 2023) asciende a 8.452.997⁵ personas que corresponde al 89% de total de las víctimas. De ellas, el 1.9% corresponde a población entre 0 y 5 años; el 18.6% a población infantil y adolescente entre 6 y 17 años; el 22.6% a población joven, entre 18 y 28 años, el 41.2% a población adulta entre 29 y 60 años y el 13% a personas mayores de más de 61 años. Los lugares donde se concentra el mayor número de población son Bogotá D.C. con 366,935.

Es decir que, del total de desplazados, 4.102.454 son NNAJ que corresponden al 48% de la población afectada por la violencia, de estas 103.681⁶ NNAJ se encuentran en la ciudad de Bogotá repartida de la siguiente forma.

LOCALIDAD	PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENTES	JÓVENES
Suba	422	2.954	2.012	4.668
Usaquén	83	609	431	940
Engativá	196	1.511	1.073	2.520
Barrios Unidos	41	357	235	588
Chapinero	64	589	414	994
Fontibón	86	579	427	1.013
Teusaquillo	37	309	229	542
Kennedy	761	3.986	2.643	6.255
Puente Aranda	62	540	351	949
Los Mártires	196	1.010	669	1.790
La Candelaria	20	151	106	258
Santa fe	152	1186	762	1792
Ciudad Bolívar	632	5.421	4.082	9.039
Tunjuelito	105	657	463	1.079
Rafael Uribe	250	1.812	1.230	2.763
Antonio Nariño	48	355	231	600
San Cristóbal	267	1.991	1.423	3.076
Usme	236	1.927	1.510	3.130
Bosa	666	4.009	2.736	6.381

Para la población infantil, adolescente y joven, el desplazamiento tiene un profundo impacto a nivel psicosocial y la hace más vulnerable para afrontar los riesgos asociados a su permanencia en los lugares de llegada. Al igual que sus padres/madres, experimentan barreras para el acceso a servicios básicos como educación y salud, uso adecuado del tiempo libre, lo que sumado a la pobreza que experimentan, le conmina a la búsqueda de ingresos para la propia subsistencia y la de su familia, haciéndolos un blanco para todas las organizaciones delincuenciales que se lucran con la libertad de los menores de edad, por vía de secuestros, desplazamiento forzado y reclutamiento.

¹ https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Dinamica-reclutamiento-forzado-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-%20adolescentes-Colombia.pdf?g_show_in_browser=1

² <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/ninas-ninos-y-adolescentes-identificados-desde-el-sector-salud-en-trabajo-infantil-en-bogota-d-c>

³ https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Dinamica-reclutamiento-forzado-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-%20adolescentes-Colombia.pdf?g_show_in_browser=1

⁴ <https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/demografia-de-las-victimas-del-conflicto-armado>

3.2 Estrategias y antecedentes internacionales

Actualmente no se encuentra implementado en Colombia un mecanismo especializado en la búsqueda de menores de edad desaparecidos, que permita la vinculación y el trabajo coordinado entre distintos entes gubernamentales, la difusión de la información del menor y las circunstancias de su desaparición, de tal forma que la comunidad pueda participar activamente en su localización, reportando ante las autoridades competentes datos que resulten relevantes para la búsqueda del niño, niña o adolescente. Al respecto, es importante recordar la importancia de la participación de la comunidad para lograr el cumplimiento del objetivo de un sistema de alerta temprana que permita localizar al menor de edad desaparecido y el retorno a su hogar.

Alerta Amber

A manera de ejemplo es de mencionar el caso de Canadá y Estados Unidos, en donde el objetivo de una Alerta Amber en estos países es involucrar a tantos miembros de la comunidad como sea posible en la búsqueda de menores desaparecidos, de manera que, al difundir la información de forma inmediata, cada miembro de la comunidad se convierta en los ojos y los oídos de las fuerzas de orden público ante este tipo de situaciones⁷.

Comparativo de los resultados de la Alerta AMBER en EE. UU. y la UE (2015-2018).

Año	Estados Unidos				Unión Europea			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Alertas activadas	182	179	195	161	29	29	27	26
Menores de edad buscados a través de la Alerta³⁴	224	231	263	203	30	33	31	30
Menores de edad recuperados gracias a la Alerta	58	54	53	34	27	32	29	29
% de Menores de edad recuperados gracias a la Alerta	26%	23%	20%	17%	90%	97%	94%	97%

Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU., NCIC y AMBERAlert.eu. Elaboración CRC

Consideramos entonces que es necesario por los NNJA, tomar acciones concretas, en primer lugar, establecer como directriz del PDD la creación de Metas relacionadas con la desaparición de NNJA, lo que obliga no solo a crear una línea base sino también a que la administración distrital realice esfuerzos permanentes para que cada vez sean menos los NNJA desaparecidos en la capital. En segundo lugar la creación de un sistema de alerta para que por medio de mensajes de texto se le informe a toda la ciudadanía en tiempo real, las características de los NNJA y circunstancias de la desaparición.

Del enfoque diferencial

Bajo este enfoque, se reconoce que existen características socioeconómicas, identitarias o de origen racial y étnico que promueven una mayor vulnerabilidad a ser víctimas de secuestros y desapariciones. Por lo tanto, resulta fundamental que la Administración Distrital preste especial atención a las necesidades de estas poblaciones en particular en la búsqueda y prevención de los casos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos.

Los casos de desaparición no solo provocan víctimas directas, sino, deja victimas indirectas⁸ del suceso como lo son los familiares, amigos o dolientes de la víctima. Por ello, es necesario que también se aplique el enfoque diferencial en las rutas de atención que garantice el debido acceso e información a los dolientes de los casos de las personas desaparecidas. Al hacerlo, se podrá abordar de manera más equitativa la problemática de la desaparición de niños, niñas y jóvenes, buscando garantizar el bienestar de todos los miembros de la sociedad.

Del enfoque territorial

Bajo este enfoque, se reconoce que históricamente existen localidades dónde se observa una mayor prevalencia de este problema social, creando una mayor vulnerabilidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan en esos territorios. Por lo tanto, resulta fundamental que la Administración Distrital preste especial atención a las necesidades y realidades territoriales, que se tienen en las diferentes localidades de la ciudad, para trabajar de forma más efectiva en la búsqueda y prevención de los casos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos.

Protocolo de atención en caso de personas desaparecidas

A nivel nacional se cuenta con diferentes rutas de atención que permiten garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación integral, la búsqueda de nuestro ser desaparecido, a reencontrarnos con el ser querido desaparecido, a recibir el cadáver de

nuestro ser querido en caso de ser encontrado sin vida y el derecho a sepultar dignamente al ser querido desaparecido⁹.

⁷ MISSINGKIDS.CA, Amber Alert. [En línea] Disponible en: <https://missingkids.ca/en/help-us-find/amber-alert/>

Estos derechos se garantizan por medio de distintas instituciones a nivel nacional como lo son la Fiscalía general de la Nación, La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y entre otras instituciones¹⁰. De igual forma, también se cuenta con el apoyo de organismo no gubernamentales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En total se tienen 6 rutas de atención diferentes para los casos de personas desaparecidas. En ellas se abarca la búsqueda, la investigación judicial, las medidas de asistencia y reparación integral, la protección patrimonial, las medidas de rehabilitación y la ampliación de red de apoyo y orientación para las víctimas indirectas de los casos. Es así que:

“La primera se refiere a la búsqueda del ser querido desaparecido, su ubicación, exhumación, identificación, y la entrega digna del cadáver; la segunda, a la investigación judicial para conocer los hechos ocurridos y sus responsables.

La tercera ruta tiene que ver con los procesos que deben realizar para acceder a las medidas de asistencia y reparación integral; la cuarta informa sobre los trámites para proteger los bienes de la persona desaparecida y dar continuidad a los derechos laborales, y presenta las exenciones tributarias a las que tienen derecho los familiares.

La quinta ruta contiene lo referente a las medidas de rehabilitación, con el objetivo de que las personas conozcan la oferta estatal para recibir atención psicosocial y atención médica a nivel físico y mental; y la sexta, busca ampliar la red de apoyo y orientación con la que pueden contar las familias, de forma que siempre tengan alguien a quien acudir, ya sea una institución del Estado, un organismo internacional o una organización de la sociedad civil”¹¹.

Con ellas, no solo se garantizan la atención durante el proceso de búsqueda por parte de las víctimas indirectas de los casos de desaparición, sino, que tiene un componente de acompañamiento después de haber encontrado a la persona desaparecida.

⁸ Centro Nacional de Memoria Histórica. [En línea]. Disponible en:
<https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/balances-jep/desaparicion.html>

⁹ <https://observatorio.victimasmagdalena.gov.co/sites/default/files/documentos/Anexo%201.%20Rutas%20de%20Atencion%CC%81n%20por%20Hecho%20Victimante.pdf>

¹⁰ <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/rutasparafamiliares-uariv30agosto2019.pdf>

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Ley N° 1098 DE 2006

Esta impone las siguientes

obligaciones Como sociedad:

Nos corresponde (Artículo 40) con fundamento en el principio de corresponsabilidad y solidaridad a: las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tomar parte activa en el logro de la efectiva vigencia de los derechos y garantías de los niños y en desarrollo de estos principios debemos responder por:

- .- acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos.
- .- Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o los amenacen.
- .- Ejecutar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Como Estado Nos corresponde (Artículo 41) Obligaciones del Estado, velar por el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:

1. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia.
- 2.- Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.

- 3.- Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos.
- 4.- Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes.
- 5.- Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia.
- 6.- Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
- 7.- Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad
- 8.- Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la mayor brevedad posible cuando sean menores de edad no acompañados.
- 9.- Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a los medios de comunicación.

A los medios de comunicación:

Obliga a los medios de comunicaciones (Artículo 47) en el ejercicio de su autonomía:

1. Promover, mediante la difusión de información, los derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y mental.
- 3.- Promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o personas responsables de niños, niñas o adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes.

¹¹ <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/la-unidad-para-las-victimas-presento-la-guia-de-rutas-para-familiares-de-desaparecidos>

V.I COMPETENCIA DEL CONCEJO

El Concejo de Bogotá es competente para aprobar el presente proyecto de acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, numeral 1 que establece como atribución del Concejo:

“1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito

V. IMPACTO FISCAL

El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, estableció:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007 señaló con claridad que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, sobre el punto es clara al señalar:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

En consecuencia, la Secretaría de Hacienda debe elaborar el correspondiente estudio de impacto fiscal y determinar si con los recursos asignados a las entidades que tienen que ver con la ejecución de esta iniciativa.

Cordialmente,

ANA TERESA BERNAL

Concejala de Bogotá D.C.

PROYECTO DE ACUERDO NO 409 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE ADOPTAN MECANISMOS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON FAMILIARES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA LA BÚSQUEDA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DESAPARECIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto del presente acuerdo es la adopción mecanismos institucionales en coordinación con familiares y organizaciones sociales, para la búsqueda de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el Distrito Capital con el fin de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.

ARTÍCULO 2. Acciones preventivas para la erradicación de la desaparición forzada. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaria de Gobierno promoverán acciones informativas, preventivas y de respuesta inmediata para el tratamiento de casos de desaparición forzada de niños, niñas y adolescente. En este sentido, se incluirá en los Planes de Desarrollo, Distrital y local, programas y metas específicas para la erradicación y manejo de este grave hecho victimizante.

ARTÍCULO 3. Red de apoyo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el Distrito Capital. La Secretaria de Gobierno conformará una red de apoyo con familiares y organizaciones sociales, para la búsqueda de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el Distrito Capital. En este sentido, la Alcaldía de Bogotá tendrá vigente un formulario web para que cualquier ciudadano se pueda vincular y ser parte de la red de búsqueda de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el Distrito Capital.

Esta red tendrá como única finalidad la difusión de información sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 4. Alerta. La Administración Distrital creará un mecanismo de difusión para la búsqueda inmediata niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el distrito capital.

ARTÍCULO 5. Procedimiento. La administración distrital articulará de manera inmediata con las entidades pertinentes, de nivel nacional, la difusión de la información cuando la Policía Nacional o la Fiscalía general de la Nación en cabeza de la SIJIN o CTI determinen la desaparición de un niño, niña, adolescente o joven.

La dependencia encargada de recibir la información sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos creará una breve descripción del caso donde se indique el nombre, edad, una breve descripción física, y rasgos característicos del niño, niña, adolescente o joven desaparecido, así como una breve descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se dio la desaparición o donde fue visto por última vez.

La dependencia a cargo de la información de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos remitirá a través de un canal oficial, la información descrita en el inciso anterior, para ser enviada de manera inmediata en formato de mensaje de texto por los operadores a las personas inscritas en las bases de datos de gobierno abierto de la Alcaldía y a la ciudadanía interesada en hacer parte de la red de búsqueda de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el Distrito Capital.

La información remitida por la Policía Nacional o La Fiscalía General de la Nación debe remitirse a los operadores en un plazo no mayor a las 12 horas, para que estos a su vez envíen los mensajes de texto de manera inmediata.

Parágrafo 1. Es importante destacar que la Administración Distrital debe tener en cuenta un enfoque diferencial y territorial para abordar de manera efectiva este problema.

ARTÍCULO 6. Ruta de atención. La Administración Distrital promoverá y facilitará la implementación de las rutas de atención, de las diferentes instituciones, para los casos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos en el distrito.

En este acompañamiento se activará como mínimo la alerta propuesta en el presente acuerdo, y se brindará apoyo jurídico y psicosocial. Siempre la administración velará por

garantizar una atención integral a las víctimas directas e indirectas de las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Bogotá.

ARTÍCULO 7. Estrategia comunicativa. La Administración Distrital creará una estrategia comunicativa dirigida para niños, niñas, adolescentes y jóvenes y otra para las madres, padres, acudientes y quienes realicen labores de cuidado, que permita concientizar sobre la prevención de las desapariciones y que hacer frente a los casos de desaparición.

ARTÍCULO 8. Informes. La Administración Distrital enviará anualmente un informe al Concejo de Bogotá de los resultados del presente acuerdo. Este será socializado a las organizaciones que hagan parte de la red de búsqueda y a la ciudadanía.

ARTÍCULO 9. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PROYECTO DE ACUERDO NO 410 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL EN RELACIÓN CON LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN BOGOTÁ D.C.”****OBJETO**

La presente iniciativa tiene como objeto crear acciones de prevención para la vigilancia de la salud pública veterinaria en actividades de comercialización de animales de compañía en Bogotá D.C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear acuerdos de cooperación con la comunidad académica que presente interés y capacidad técnica para el desarrollo de la presente propuesta.
- Desarrollar muestreo serológico en caninos y felinos ubicados en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá D.C., con el propósito de identificar la variabilidad genética de virus seleccionados causantes de enfermedades infecciosas de estas especies.
- Implementar el uso de pruebas PCR para identificar la presencia del genoma de virus seleccionados causantes de enfermedades infecciosas en caninos y felinos ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.
- Realizar la comparación de los genomas hallados respecto de los patrones consignados en colecciones disponibles para tal fin.
- Identificar los determinantes antigénicos similares o diferentes al patrón definido, con el objeto de evitar la difusión de enfermedades contagiosas propias de especies animales de compañía.
- Establecer las secuencias de nucleótidos que constituirán las plantillas (cebadores) para la identificación del agente infeccioso seleccionado mediante las pruebas de campo.
- Implementar el uso de pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para identificar la presencia del genoma de virus seleccionados causantes de enfermedades infecciosas en caninos y felinos ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., mediante el empleo de muestras ambientales.
- Desarrollar el lineamiento que ordena la implementación de pruebas basadas en biología molecular, como acciones de prevención para la vigilancia de la salud pública veterinaria en actividades de comercialización de animales de compañía en Bogotá D.C.

- Elaborar el documento técnico y operativo para la implementación de las acciones descritas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad las actividades de Inspección Vigilancia y Control (IVC) que se ejecutan en establecimientos de venta de animales de compañía son realizadas en conjunto por parte de personal especializado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Secretaría Distrital de Salud, de la Secretaría de Gobierno Distrital y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Las acciones corresponden a la implementación de las normas vigentes y los lineamientos operativos en materia de salubridad y saneamiento básico, bienestar animal y demás normas de seguridad. Si bien es cierto, se está dando cumplimiento a lo dispuesto en la Política de Salud Ambiental 2011 – 2023 y en la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2014 – 2038, se logra evidenciar que la integralidad de las acciones es insuficiente para controlar particularmente la aparición de enfermedades virales y algunas bacterianas propias de caninos y felinos (Ej: parvovirus, distemper, leptospirosis, leucemia felina, panleucopenia, etc.) en locales donde se comercializan animales de compañía, lo que se constituye en foco de mantenimiento de este tipo de enfermedades que se pueden diseminar al resto del Distrito Capital, situación cuyo manejo requiere un enfoque de Salud Pública Veterinaria apoyados en el concepto Una Salud, que promuevan un control más efectivo en el mediano y largo plazo.

Infortunadamente, no existen datos epidemiológicos acerca de la prevalencia, incidencia, morbilidad y/o mortalidad relacionada con el comportamiento de las enfermedades virales y algunas bacterianas más frecuentes en las especies de compañía presentes en el Distrito Capital. Se tienen planes de vacunación para prevenir la aparición de este tipo de enfermedades que cuentan con recomendaciones específicas relacionadas con la primo-vacunación y con la periodicidad de refuerzos para mantener la protección conferida por los biológicos. En este sentido, es claro que no hay recomendación u obligatoriedad de reporte de diagnóstico o mortalidad relacionada con estas enfermedades o sobre la vacunación que realizan los profesionales de Medicina Veterinaria; esta solo es obligatoria para enfermedades zoonóticas identificadas por medios técnicos y vacunación anti-rábica. La generación de esta información abarca no solo a los profesionales de la salud animal, sino también a los establecimientos que comercializan animales de compañía, bajo el cumplimiento de la Resolución 240 de 2014 y el Acuerdo 509 de 2012.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SALUD PÚBLICA VETERINARIA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) han acuñado la definición más popular de vigilancia epidemiológica, considerando que es la:

Recolección sistemática, análisis e interpretación de datos de salud necesarios para la planificación, implementación y evaluación de políticas de salud pública, combinado con la difusión oportuna de los datos a aquellos que necesitan saber.

Esencialmente, la vigilancia epidemiológica implica la recolección de datos sobre un problema de salud, su análisis y posteriormente la utilización de estos en la prevención de enfermedades y en la mejora de las condiciones de salud de la población.

La epidemiología tiene más campos de acción de lo que podría pensarse. Esta disciplina científica se encarga de investigar y describir las dinámicas de la salud en las poblaciones, combinando principios de las ciencias sociales y biológicas.

En este sentido, no solo se refiere a las enfermedades y a sus consecuencias de una forma general, sino que también ubica su atención en escenarios más complejos:

- Estudio, control y distribución de las enfermedades.
- Planificación sanitaria.
- Evaluación de posibles riesgos de las enfermedades.
- Comunicación, tecnología y marco ético-legal en el sector de la salud.
- Consecuencias biológicas, psicológicas y sociales de las enfermedades.
- Relación medio ambiente - salud pública.

Por otra parte, la epidemiología tiene por objeto detectar los problemas de salud de tal manera que sea posible modificarlos. Por tanto, esta ciencia es capaz de mejorar la calidad de vida de las personas y de los animales, así como lograr disminuir sus riesgos de mortalidad. A través de esta disciplina, es posible entender qué sucede en las poblaciones. La importancia de la epidemiología radica en que, mediante ella, es posible determinar la frecuencia y tendencia de las enfermedades, entender cuáles son las intervenciones de prevención más eficaces, así como caracterizar las prestaciones sanitarias. También se aplica en la medicina clínica y permite completar cuadros clínicos a través de la tipificación de enfermedades.

Las enfermedades infecciosas o transmisibles afectan desproporcionadamente a las comunidades con recursos limitados (lo que incluye a sus animales de compañía) y se vinculan con una compleja variedad de determinantes de la salud que se superponen, como la disponibilidad de agua potable y saneamiento básico, las condiciones de la vivienda, los riesgos del cambio climático, los factores socioculturales y la pobreza, entre otros.

Para alcanzarlo, propone estrategias como integrar y fortalecer los programas, reforzar los sistemas de vigilancia e información sanitaria, abordar los determinantes medioambientales y sociales con enfoque en las inequidades y en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Por extensión y de manera similar la salud pública veterinaria se puede definir como el conjunto de medidas que se aplican para prevenir, tratar y controlar las enfermedades que afectan a los animales y que pueden tener impacto sobre el bienestar animal, la salud pública, la producción y el medio ambiente. Es claro entonces, que la sanidad animal se apoya en la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico, la medicina preventiva y el manejo de las emergencias sanitarias.

MÉTODOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dentro de los métodos de vigilancia epidemiológica se encuentran los de tipo pasivo (declaración obligatoria de enfermedades) y aquellas de tipo activo (contacto directo con profesionales de la salud o con pacientes y búsqueda activa de agentes productores de enfermedad).

La vigilancia activa basada en laboratorios se emplea para determinados problemas de salud, como puede ser la búsqueda de determinados serotipos de bacterias (Ej. Salmonella, E. coli O157) o subtipos de virus que implique un riesgo para el control inmunoprevenible (Ej. Virus A de influenza, en la actualidad virus del distemper canino).

Por otra parte, la vigilancia de lugares centinela basada en la obtención de información de centros de salud, hospitales, unidades ambulatorias o móviles e incluso territorios delimitados, a partir de los cuales se pueda estimar la situación de una comunidad o grupo de interés.

Hay otros métodos complementarios de vigilancia epidemiológica, tales como: Vigilancia centinela, Eventos centinela y ubicación de médicos centinela, que pueden ser importantes para la conformación de redes de vigilancia que constituyan un sistema de inteligencia en salud animal para la protección de animales de compañía.

BIOLOGÍA MOLECULAR Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

La biología molecular es la rama de la biología que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. En su sentido moderno, la biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. Dos macromoléculas en particular son su objeto de estudio:

- Los ácidos nucleicos, entre los cuales el más utilizado es el ácido desoxirribonucleico (ADN), el componente de los genes.
- Las proteínas, que son los agentes activos de los organismos vivos.

Dentro del Proyecto Genoma Humano puede encontrarse la siguiente definición sobre la biología molecular: El estudio de la estructura, función y composición de las moléculas biológicamente importantes para el funcionamiento de las células.

La biología molecular se puede aplicar en diferentes áreas con diferentes fines y resultados. Algunas de sus aplicaciones son:

Medicina. La biología molecular ha permitido realizar y obtener con mayor eficacia diagnósticos y resultados más fiables sobre enfermedades infecciosas, genéticas o crónicas.

Agricultura. La biología molecular ha servido para mejorar la calidad de la leche de vaca, la carne de cerdo y de otros animales. También ha sido aplicada para el cuidado y la producción de ciertas plantas para hacerlas más resistentes al cambio climático, insectos y enfermedades.

Nutrición. La biología molecular junto con la nutrición clínica estudia en conjunto ciertos desórdenes metabólicos de origen genético, así como, las diversas reacciones que las personas tienen a ciertos alimentos. Esto ha hecho posible generar recomendaciones nutricionales personalizadas según la genética de cada individuo. Incluso, prevenir enfermedades siguiendo ciertas dietas.

TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR

1. CLONACIÓN MOLECULAR

La clonación molecular se utiliza para aislar y luego transferir una secuencia de ADN de interés a un vector (plásmido). En esta técnica, una secuencia de ADN que codifica una proteína de interés se clona mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y/o enzima de restricción, en un plásmido (vector de expresión). Este plásmido puede insertarse en células bacterianas o animales y a continuación el ADN que codifica una proteína de interés se encuentra ahora dentro de una célula y la proteína puede expresarse.

2. REACCIÓN EN CADENA DE POLIMERASA (PCR)

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica extremadamente versátil para copiar ADN. De esta forma la PCR permite copiar o modificar una secuencia de ADN específica de formas predeterminadas. La reacción es extremadamente potente y en condiciones perfectas, podría amplificar una molécula de ADN hasta convertirla en 1.070 millones de moléculas en menos de dos horas. La PCR tiene muchas aplicaciones, como el estudio de la expresión génica, la detección de microorganismos patógenos, la detección de mutaciones genéticas y la introducción de mutaciones en el ADN.

3. ELECTROFORESIS EN GEL

La electroforesis en gel es una técnica que separa moléculas por su tamaño utilizando un gel de agarosa o poliacrilamida. Esta técnica es una de las principales herramientas de la biología molecular. El principio básico es que los fragmentos de ADN se pueden separar aplicando una corriente eléctrica a través del gel, aprovechando las cargas negativas de dichos fragmentos y la carga positiva de la corriente.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA BASADA EN BIOLOGÍA MOLECULAR

El empleo de las técnicas de biología molecular permite la identificación de agentes productores de enfermedad, resultando en la caracterización, rastreo y seguimiento en campo frente a las posibles fuentes de diseminación de estos. Recopilar y analizar la información obtenida hace factible la identificación de nuevas variantes circulantes de virus o bacterias entre otros agentes, así como de aquellas responsables de nuevos brotes de enfermedad que generen confiabilidad y mayor precisión a las interpretaciones que surjan. De esta manera, los resultados de estudios de epidemiología molecular, complementados con análisis antigénicos por diferentes técnicas permitirán entender el significado epidemiológico de los cambios que se detecten, siendo particularmente importantes aquellos en los que se registra una alteración en la capacidad de ser neutralizados por cepas vacunales.

El uso coordinado de información antigénica, genética y epidemiológica permite obtener un mejor sistema de evaluación de riesgo y georreferenciación de agentes y enfermedades de interés, posibilitando analizar la extensión de los cambios y el establecimiento de mejores estrategias para la vigilancia y el control de unos y otras.

ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL

De esta manera, se ejercen acciones de salud pública que deben ser tenidas en cuenta dentro de las actividades de comercialización responsable de animales de compañía, para la prevención de transmisión de enfermedades infecciosas, en las que se establece el obligatorio cumplimiento de normas de bioseguridad con el fin de garantizar las condiciones de salud pública para las personas y la protección de los animales; estas normas están incluidas en lo que se denomina “Manual de Buenas Prácticas” o “Manual de Saneamiento Básico”, mediante el cual se debe garantizar procesos adecuados de limpieza y desinfección de áreas y superficies (uno de los cuatro procesos contemplados en dicho manual), cuyo propósito es llevar al mínimo o eliminar microorganismos (virus, bacterias, hongos y parásitos) causantes de enfermedad o muerte de los animales comercializados.

En este sentido, la Resolución 240 de 2014 por la cual se establecen directrices en materia de prevención, vigilancia y control de Zoonosis en el Distrito Capital, demarca en el parágrafo 5 del Artículo 6 “La Secretaría Distrital de Salud promoverá el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Acuerdo 509 de 2012, su protocolo y guía técnica de aplicación (Protocolo de Bioseguridad), así como los de la presente Resolución en los establecimientos que comercializan pequeños animales domésticos de compañía, mediante la expedición de una distinción de buenas prácticas en manejo responsable de estos animales, como un reconocimiento, previa evaluación y aprobación del Consejo Distrital y Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal”.

De acuerdo con información suministrada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA desde la Subdirección de Atención a la Fauna, particularmente para los establecimientos de comercialización de animales vivos en la Avenida Caracas (Localidad de Teusaquillo entre calles 53 y 57), se realizó

intervención a dichas actividades en un período comprendido entre enero de 2021 y con corte al 31 de diciembre de 2023, acompañando un total de 103 intervenciones a locales, donde se han valorado las condiciones de bienestar de 2.289 animales entre caninos, felinos, lagomorfos, aves de corral, ornamentales y roedores, realizándose la aprehensión material preventiva de 164 animales, por condiciones de salud, pobre condición corporal o condiciones inadecuadas de tenencia (alojamiento o hacinamiento). La misma entidad informa que “a diario llegan a la Unidad de Cuidado Animal – UCA, perros y gatos víctimas de maltrato y bajo condiciones de vulnerabilidad que son atendidos por el programa de Escuadrón Anticrueldad, a los cuales se les realiza diferentes pruebas rápidas (se refiere a análisis por serología) entre las cuales se incluyen: prueba rápida de distemper, prueba de parvovirus, prueba de coronavirus y prueba rápida para Brucella canis (para caninos) y prueba rápida para Leucemia viral felina (VLEF) e Inmunodeficiencia viral felina (VIF) (en el caso de felinos)”. En el período entre 2022 y 2023 se registraron casos positivos distribuidos como se muestra en la Tabla 1.

El estudio de la población canina y felina de Bogotá, efectuado en el año 2013 por la Secretaría Distrital de Salud y actualizado a 2022, evidencia que la población de estos animales de compañía supera el millón de ejemplares (1’336.371) , lo cual representa un potencial riesgo para la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente, en razón de que alrededor de 66.448 caninos han sido identificados como animales en habitabilidad de calle (IDPYBA 2022), por lo cual se hace necesario que en la ciudad se refuercen las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de las enfermedades zoonóticas y de enfermedades que ponen en riesgo a las mismas especies de compañía, dado el riesgo biológico que tal situación representa.

TABLA 1.

ESPECIE	CANINOS		FELINOS	
AÑO				
2022	PARVOVIROSIS	2	VIF	0
	DISTEMPER	0	VLEF	1
	BRUCELLA C.	0		
	CORONAVIRUS	3		
2023	PARVOVIROSIS	3	VIF	0
	DISTEMPER	7	VLEF	0
	BRUCELLA C.	1		
	CORONAVIRUS	0		

Fuente: SAF - IDPYBA

Con la implementación del CONPES 3550 de 2008, se establece que la Salud Ambiental se define de manera general como el área de las ciencias que trata de la interacción y los efectos que, para la salud humana, representa el medio en el que habitan las personas. De acuerdo con esto los componentes principales de la salud ambiental tienen un carácter interdisciplinario, multi-causal, pluri-conceptual y dinámico, y se imbrican mutuamente, en una relación dialéctica.

La Política Integral de Salud Ambiental – PISA creada en el Plan de Gobierno 2010 – 2014 y definido por el documento CONPES 3550/2008 para el sector salud, representa el fortalecimiento del ejercicio de la rectoría por parte del Estado, al generar una visión amplia, con un enfoque de prevención primaria de factores ambientales y sanitarios, identificando prioridades con base en evidencias científicas y técnicas. El éxito requiere de alianzas, coaliciones y comunicación efectiva, y trabajar para establecer un ambiente organizacional, nacional e internacional que permita unir políticas y organizaciones.

En desarrollo de la política de salud ambiental, el Distrito Capital ha definido la salud ambiental como el campo de acción de la salud pública, enmarcada en la interacción del ambiente y la salud, y en los efectos que las condiciones del ambiente tienen sobre la calidad de vida y la salud, individual y colectiva. Las condiciones ambientales se abordan como un determinante que genera un perfil de protección o deterioro de la salud humana.

POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE BIENESTAR ANIMAL

Con la promulgación de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal y adoptada por el Decreto 242 de 2015, se da paso a la implementación práctica de lo que se ha descrito como “Las Cinco Libertades”, que buscan garantizar las condiciones mínimas de bienestar de los animales. Se han descrito de la siguiente manera:

1. Libre de hambre, sed o nutrición deficiente: Asegurar una alimentación adecuada.
2. Libre de Incomodidad: Evitar la incomodidad física y térmica (resguardo).
3. Libre de dolor, lesiones o enfermedad: Asegurar un buen estado de salud.
4. Libre de miedo o estrés: Evitar el dolor, el estrés prolongado y el miedo.
5. Libertad para expresar comportamientos naturales: Permitir que los animales puedan mostrar su comportamiento natural.

Lo que busca la Política en mención es visibilizar y manejar el problema de crueldad por agresión, descuido por negligencia y falta de valores humanitarios que desconocen el sufrimiento de los animales. El ejercicio de construcción de esta identificó diferentes problemas que afectan a la fauna del Distrito Capital, dentro de los cuales, se mencionan dos que podrían tener alta incidencia dentro de la prevalencia y circulación de enfermedades infecciosas propias de nuestras especies de compañía, a saber: Abandono, adquisición y tenencia inadecuada de animales de compañía y reproducción excesiva y comercialización de animales de compañía sin regulación suficiente.

Con todo, se aprecia un aspecto central relacionado con la reproducción excesiva, comercialización y adquisición de animales de compañía (dentro de los múltiples aspectos que interviene dicha política), que exige un control, en lo posible, de toda la cadena de comercialización, para lo cual se establecen normas de obligatorio cumplimiento para la prevención, vigilancia y control de enfermedades de tipo zoonótico, así como aquellas enfermedades que se relacionen con la protección y el bienestar animal.

También el Decreto 242 de 2015 a través del cual se adopta la Política Pública Distrital de Bienestar Animal 2014 - 2038, establece las acciones en procura de otorgar a los animales escenarios de vida óptimos de acuerdo con sus necesidades y requerimientos, como se aprecia en el artículo 8, donde se plantean como objetivos específicos: 1. Generar una cultura de respeto, protección, convivencia y buen trato hacia la fauna doméstica y silvestre del Distrito Capital; 2. Fortalecer la capacidad de respuesta institucional en atención y servicio, para la protección y Bienestar de la fauna en el Distrito Capital y 3. Impulsar la gestión del conocimiento acerca de la fauna en el Distrito Capital, como soporte para su manejo, control, seguimiento y atención institucional.

Es en este sentido que la estructura programática de dicha Política Pública establece en el Eje 2. La generación de una respuesta institucional para la protección y el bienestar animal, Línea de acción 2.1 Fortalecimiento de la Gestión, el fortalecimiento de las estrategias preventivas ante situaciones que amenacen la Salud Pública o el Bienestar de los animales. A su vez, en el Eje 3. Se propone la “Gestión del conocimiento para la Protección y el Bienestar Animal, Línea de acción 3.2 Investigación, Gestión y desarrollo de mecanismos que incentiven las iniciativas de investigación académica pertinentes con la protección y el bienestar animal en la ciudad, así como su divulgación y aplicación”.

Es por todo esto que se requiere adelantar acciones que generen el conocimiento integral y suficiente para el seguimiento de las condiciones epidemiológicas de salud animal en los animales de compañía del Distrito Capital, con el propósito de mantener una vigilancia epidemiológica que permita la toma de decisiones relacionadas con prevención de brotes de enfermedades infecciosas para la protección nuestra fauna doméstica, toda vez que la persistencia de agentes biológicos en especies domésticas pueden llegar a afectar especies nativas de fauna silvestre o mantener reservorios que se trasladen de especie a especie.

REDES ACADÉMICAS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Existen instrumentos de política pública que promueven la necesidad de buscar nuevas herramientas que permitan acercar nuevos y mejores conocimientos en torno a la salud ambiental y sus determinantes en articulación con el Programa Atención Integral y eficiente en Salud, descrito dentro del Plan Territorial de Salud. Estos aspectos mencionados se entrelazan con los objetivos y criterios descritos en el Plan Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011 – 2023 (Decreto 596 de 2011) en el marco de los diferentes programas de Vigilancia Sanitaria, Entornos Saludables y Gestión Sanitaria y Ambiental y en particular con la Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico que busca el control de la presencia de las enfermedades transmisibles de origen animal a los humanos, generados por una tenencia inadecuada de animales, incluyendo

el tráfico y la comercialización de fauna silvestre, que puedan representar riesgo para la salud pública y el bienestar animal, situación que incluiría a las especies animales de compañía, como extensión de la familia multiespecie

Adicionalmente, dentro de los ejes temáticos de este decreto se incluye la “Investigación y Gestión del Conocimiento sobre eventos que potencialmente pueden afectar la salud pública y la sanidad animal en el Distrito Capital”. Con todo, es claro que el eje fundamental e integrador es la Promoción de Entornos Ambientalmente Saludables, para entender e intervenir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al mejorar las condiciones del entorno y los ecosistemas y culturizar a la población fortaleciendo las conductas de protección del ambiente y la salud. Para lograr la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se necesita de la participación intersectorial y de los diferentes actores relacionados con la identificación de necesidades a través de la gestión del conocimiento y la gestión integral del riesgo, que posibiliten el desarrollo de procesos de investigación y transferencia de alternativas para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la población, además de la capacidad para identificar los posibles daños que se puedan generar por exposición a determinantes socio-ambientales.

En el marco de la política de Ciencia Tecnología e Innovación establecida en la Ley 1286 de 2009, el núcleo o unidad básica del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación es el “Grupo de Investigación”, desde el cual se da la generación de conocimiento a partir de la investigación y se define como el conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés y trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión.

Durante décadas se ha hablado del aislamiento en el que se desarrolla el quehacer académico de la educación superior respecto de la realidad que vive la sociedad, por lo que resulta necesario acercar las industrias y el estado a las universidades para que estas puedan participar en el proceso de creación del conocimiento y de riqueza de manera cotidiana, e identificar las brechas que dificultan la cooperación entre las instituciones de educación superior y organizaciones externas. Se necesita actualizar las políticas públicas que promuevan estos cambios, partiendo de un análisis de las existentes, con sus fortalezas y debilidades. Bogotá concentra el mayor número de instituciones de educación superior y red de laboratorios, lo que genera sinergias y fortalezas para el desarrollo de redes de investigación en salud ambiental y enfermedades transmisibles de origen animal o no (incluyendo las denominadas zoonóticas), de tal manera que se constituyen en fortalezas locales para organizar el conocimiento. Podemos ver que esta posibilidad se refleja en la promulgación del Plan de Ciencia – Tecnología e Innovación Bogotá D.C. 2007 – 2019, para el desarrollo social en un medio complejo que exige manejos y tratamientos muy diversos promoviendo acciones que mejoren la calidad de vida de la población, de tal manera que los métodos y tiempos de investigación en los momentos actuales se adapten a las necesidades de los técnicos o políticos que implementan acciones y políticas. Así, se puede observar en los diferentes ejes, programas y temas descritos:

Eje A: Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico. Programa 1: Investigación sobre los determinantes sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales de las condiciones de vida de la población. Temas: Seguridad humana, salud y calidad de vida, equidad, géneros y grupos poblacionales, ambiente, cultura, actividad física, recreación y deporte.

Eje B: Formación y promoción del espíritu científico, innovador y del conocimiento y habilidades de la población. Programa 1: Apropiación social del conocimiento científico, tecnológico e innovador. Temas: Producción y publicación de materiales educativos; Difusión y aplicación de resultados de investigaciones científicas y tecnológicas; Desarrollo de espíritu científico y pensamiento innovador; Conformación y fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo tecnológico, redes, organizaciones sociales y culturales para la gestión de conocimiento e innovación.

Eje C: Desarrollo tecnológico sostenible e innovación y modernización de las actividades productivas de la ciudad región. Programa 2: Transferencia de tecnología, alianzas estratégicas, articulación interinstitucional y enlaces tecnológicos. Temas: Conformación de la Red Tripartita Universidad - Empresa – Estado; Incorporación de las TIC para la innovación y la generación de una economía de alto valor agregado; entre otros temas.

Adicionalmente, este proceso propuesto se ve fortalecido por la conformación de la Comisión Distrital de Ciencia – Tecnología e Innovación a través del Acuerdo Distrital 146 de 2005 en el cual tienen asiento las entidades la Administración Distrital y Hacienda, las entidades relacionadas con la administración de la Salud y el manejo Ambiental y la Educación, El Jardín Botánico, Las Empresas de Servicios Públicos de Bogotá, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, los Rectores de la Universidades Públicas presentes en el Distrito Capital, el Sena, las Universidades Privadas reunidas en ASCUN, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka y por otro lado se encuentra la promulgación del Decreto 167 de 2023 por el cual se crea al Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación (Codecti) del Distrito Capital D.C., en el cual se establece dentro de sus funciones fomentar que en el Distrito Capital se desarrollen actividades enfocadas en la generación y transferencia de conocimiento, así como de los resultados de los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento innovador y de base tecnológica.

UNA SALUD

Como vimos arriba, otra concepción transversal e integradora de la Salud Pública es “UN MUNDO – UNA SALUD”, que subraya la toma de conciencia colectiva del vínculo existente entre las enfermedades animales y la salud pública. Es explicada como una estrategia para promover la colaboración, el trabajo, la distribución de responsabilidades, la coordinación de acciones globales y la comunicación entre todas las disciplinas relacionadas con la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, incluidos los tomadores de decisiones, los políticos y el legislador, todos trabajando como una red de apoyo. En el mismo sentido la FAO (2010)

enfaticó que su labor en materia de salud animal se orientaría hacia el abordaje de las enfermedades infecciosas emergentes en la interfaz animal-ser humano- ecosistema. Igualmente reconoce que la sola ciencia no logra aportar todas las soluciones y que se necesitan mayores conocimientos científicos para comprender la complejidad de la emergencia de las enfermedades, su transmisibilidad y los sistemas ecológicos donde se mantienen y circulan. Además, que también resulta de suma importancia abordar las dimensiones sociales y culturales de las sociedades en las cuales se entrecruzan los problemas relacionados con la producción animal, su salud y la de la vida silvestre, la de los seres humanos y la totalidad de los ecosistemas.

Ha quedado claro que la emergencia de las enfermedades infecciosas se ve impulsada por cambios ecosistémicos que se asocian con el crecimiento de la población humana mundial, el aumento de la demanda de proteína de origen animal, el consumo insostenible de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad y la fragmentación del hábitat, los sistemas agrícolas intensivos y la presión a la que se han sometido todos los sistemas naturales (bosques, praderas, humedales, océanos, ríos), se traduce en la disminución de los servicios ecosistémicos, conduciendo a la aparición de enfermedades y al aumento de los riesgos para la salud de todas las especies incluidas en él: las plantas, la flora, la fauna silvestre y los seres humanos.

En resumen, lo anotado arriba se debe plasmar en actividades de educación tanto de los profesionales de la salud humana como animal, los estudiantes de estas disciplinas y la educación comunitaria (con base en los principios de Atención Primaria Ambiental), apoyados en los conocimientos y desarrollo de información científica de la salud ambiental y la salud pública, para lograr una adecuada comunicación del riesgo relacionado con la transmisión de enfermedades y sus condicionantes naturales. Todo esto sustentado por sistemas de vigilancia basados en el desarrollo de nuevos sistemas de detección de enfermedades y tratamientos novedosos para las mismas o la adecuada utilización de aquellos que están en uso en la actualidad con oportunidad. Y como lo anotamos antes, con el apoyo y la participación de los gobiernos, los tomadores de decisiones y los políticos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Es en el marco de las acciones de protección de la salud donde tienen relevancia todos los programas, planes y políticas que integren a la Salud Ambiental como eje fundamental y generador de la mayor parte de las enfermedades infecciosas que sufren los animales y el hombre. En la actualidad existen referentes que son vinculantes a las actividades de gobierno, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados por las Naciones Unidas en 2015 y que nos mueven hacia una visión integral del manejo de la salud de nuestros pueblos. A continuación, se enumeran los 17 ODS, así:

1. Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
2. Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y promover la agricultura sostenible.
3. Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todos en todas las edades.

4. Asegurar una educación inclusiva, de calidad, equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.
6. Asegurar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países.
11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de biodiversidad.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza global para el desarrollo sostenible.

En concreto, la presente propuesta se relaciona con el objetivo 3 "Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todos." De esta manera se busca intervenir los fenómenos de Salud y bienestar con el propósito de poner fin a las epidemias de enfermedades transmisibles. Y aún más con el objetivo 15 "Vida de ecosistemas terrestres" que menciona expresamente a las enfermedades zoonóticas desatendidas.

Cabe señalar que generar un desarrollo sostenible, implica tener en cuenta sus cuatro dimensiones, a saber: la sociedad, el medio ambiente, la cultura y la economía, que están interconectadas. Esto es, pensar en un futuro en donde las consideraciones ambientales, sociales y económicas, estén equilibradas en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Una sociedad próspera depende de un ambiente sano que provea alimentos y recursos, agua potable y aire limpio para sus ciudadanos (UNESCO. Educación para el desarrollo sostenible).

MARCO NORMATIVO

- **De orden constitucional**

Constitución Política de Colombia establece que es deber del Estado defender el derecho a la vida como supremacía proteccionista, garantizar la vigencia de un orden justo y armónico y promover la participación de

la comunidad en la protección de las riquezas naturales, entre las cuales se encuentran la diversidad e integridad del ambiente, de la cual hace parte la fauna; en el artículo 79 establece que "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo", y que "es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

- **De orden Legal**

Ley 84 de 1989 "Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia"

Ley 99 de 1993 Ley Ambiental General de Colombia. En materia ambiental, corresponde a los municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales y dictar normas para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico.

Sentencia Corte Constitucional C-666 de 2010: "Se debe establecer un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales en cuanto son seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el que hombres y mujeres desarrollan su vida".

Sentencia Corte Constitucional C-889 de 2012: Ratifica dichas disposiciones y el mandato de proteger a los animales que se desprende del deber constitucional de proteger el medio ambiente, así como la autonomía de las autoridades territoriales en ejercicio del principio de rigor subsidiario.

- **De orden Normativo**

Decreto 596 de 2011 Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023. Contiene dentro de sus líneas de acción la de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, siendo uno de sus ejes temáticos la "promoción de la tenencia responsable de animales y el bienestar animal en el Distrito Capital".

Decreto Distrital 085 de 2013 establece el Centro Ecológico Distrital de Protección y Bienestar Animal - CEA- "*Casa Ecológica de los Animales*:" como equipamiento dotacional de apoyo a los programas de protección ambiental para el manejo integral de la fauna del Distrito Capital, liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Resolución 0240 de 2014 establece directrices en materia de prevención, vigilancia y control de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico en el Distrito Capital, así como aquellas enfermedades que se relacionen con la protección y el bienestar animal.

Resolución 446 de 2018 establece directrices en materia de prevención, vigilancia y control de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico en el Distrito Capital, así como aquellas enfermedades que se relacionen con la protección y el bienestar animal.

Acuerdo 509 de 2012 promueve dentro de las actividades de comercialización responsable de pequeñas especies de animales de compañía, la adopción y cumplimiento de las normas de bioseguridad con el fin de garantizar las condiciones de salud pública para las personas y la protección de los animales.

Decreto 242 de 2015 a través del cual se adopta la Política Pública Distrital de Bienestar Animal 2014 - 2038, establece las acciones en procura de otorgar a los animales escenarios de vida óptimos de acuerdo con sus necesidades y requerimientos.

Decreto 167 de 2023 por el cual se crea al Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación (Codecti) del Distrito Capital D.C., establece dentro de sus funciones fomentar que en el Distrito Capital se desarrollen actividades enfocadas en la generación y transferencia de conocimiento, así como de los resultados de los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento innovador y de base tecnológica.

COMPETENCIA

Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la Ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito

(...)

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

IMPACTO FISCAL

Por tanto, no puede afirmarse que esta iniciativa genera impacto fiscal toda vez que las acciones que propone este proyecto implican desarrollar los mandatos del Acuerdo No. 927 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, por lo tanto, no tiene impacto ambiental.

El presupuesto se encuentra ya apropiado como meta, de suerte que puede afirmarse que esta iniciativa no genera impacto fiscal toda vez que las acciones que propone este proyecto no implican desarrollar los mandatos del Acuerdo 927 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”

Cordialmente,

EMEL ROJAS CASTILLO

Concejal de Bogotá

Partido Nueva Fuerza Democrática

ANGELO SCHIAVENATO RIVADENEIRA

Concejal de Bogotá

Partido LARA

ANDRÉS LEANDRO CASTELLANOS

Concejal de Bogotá

Partido Alianza Verde

PROYECTO DE ACUERDO NO 410 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL EN RELACIÓN CON LA COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN BOGOTÁ D.C.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en la Constitución Política y en el Artículo 12, numeral 1º del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1. Créanse acciones de prevención de salud pública veterinaria para la protección animal en relación con la comercialización de animales de compañía en Bogotá D.C.

Artículo 2. Impleméntese el uso de pruebas basadas en biología molecular para identificar la presencia del genoma de virus seleccionados causantes de enfermedades infecciosas en caninos y felinos ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., mediante el empleo de muestras ambientales.

Artículo 3. Promuévase la Creación de acuerdos de cooperación con la comunidad académica que presente interés y capacidad técnica para el desarrollo del presente acuerdo.

Artículo 4. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 411 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INCLUSO DE LA DOSIS PERSONAL, EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL”

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1. OBJETO DEL PROYECTO

El **principio de precaución**, además de concebirse primigeniamente como una garantía para el cuidado y protección al medio ambiente⁷², cumple una función tuitiva en el ordenamiento jurídico y más concretamente frente al derecho fundamental a la salud. Su principal valía, consiste en evitar que se produzcan riesgos y amenazas de futuros daños contingentes⁷³ que puedan afectar gravemente el derecho fundamental a la salud de personas no adictas al consumo de sustancias psicoactivas y de manera especial de niños, niñas y adolescentes.

Apoyado en dicho principio, lo que pretende el presente Acuerdo es amparar a todos los ciudadanos de los efectos dañinos y adversos para la salud que trae consigo conductas tales como el *porte, consumo, distribución y comercialización* de cannabis y otras sustancias psicoactivas [PSA] por parte de consumidores habituales y ocasionales adictas al uso de este tipo de drogas en espacios de interés público de la ciudad.

⁷² Los orígenes del principio de precaución se hallan en el *vorsorgeprinzip*, o principio de previsión, introducido en la legislación medioambiental alemana en la década de los setenta. El principio fue recogido posteriormente en tratados y convenciones internacionales como la Declaración de Bergen para el Desarrollo Sostenible (1990), el Tratado de Maastricht de la Unión Europea (1992), la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo (1992) o la Convención de Barcelona (1996). En EE.UU., el principio fue discutido formalmente por vez primera en la Conferencia de *Wingspread*, en 1998. Tomado de la Revista Española de Sanidad Penitenciaria versión On-line ISSN 2013-6463 versión impresa ISSN 1575-0620, Autora **Emilia Sánchez** Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas. Barcelona. Recopilada por el proyecto cooperativo para la difusión de la ciencia SciELO (Scientific Electronic Library Online) https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112002000500001#:~:text=El%20principio%20establece%20que%20C2%ABcuando,cient%C3%ADficamente%20de%20forma%20concluyente%C2%BB1.

⁷³ ARTICULO 2359. TITULAR DE LA ACCIÓN POR DAÑO CONTINGENTE. Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno **amenace** a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción. Entiéndase al daño contingente al “que puede suceder o no suceder”, empero, la amenaza de daño sí debe ser actual e importante. El daño contingente supone, en términos del profesor **JOSÉ LUIS DÍEZ SCHWERTER** una “*inminencia clara y probada*”, una “*probabilidad razonable y concreta*”, una “*posibilidad o peligro inminente*”, un “*riesgo actual, real y comprobable*”, una “*situación de peligro de la cual puede derivarse razonablemente un daño resarcible (riesgo)*” Ejemplo: es posible que “...el responsable, (...) haya desatado una cadena de mutaciones en el mundo exterior, cuyo efecto final va a ser la lesión a un bien patrimonial o extrapatrimonial de la víctima. Si esa cadena causal solo es una amenaza, la única acción que le cabe a la eventual víctima para impedirla, es la que consagran el artículo 2359 del Código Civil y la Ley 472 de 1998, relativa al daño contingente.

En ese sentido, se hace necesario crear una política pública distrital de prevención y reducción de riesgos prohibidos y daños por consumo de estas sustancias, que, de suyo, respete el derecho fundamental al libre desarrollo de personalidad y otras libertades de los consumidores sin que con ello se afecte el derecho a un ambiente sano y otros derechos fundamentales de los demás ciudadanos que concurren a espacios de interés cultural, deportivos y de recreación.

2. ANTECEDENTES

Como procesos previos relacionados a la iniciativa planteada, el autor recuerda proyectos de acuerdo conexos como los siguientes:

1. Proyecto No. 018 del 4-02-16 *"Por medio del cual se adiciona un Título Nuevo al Acuerdo 79 de 2003, que prohíbe la distribución, comercialización, uso, consumo, publicidad o cualquier modalidad de promoción, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina SEAN"*
2. Proyecto No. 301 del 21 de julio de 2016 *"Por medio del cual se establece el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los establecimientos educativos del Distrito Capital."*
3. Proyecto No.453 del 23 de septiembre de 2016 *"Por medio del cual se establece el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los establecimientos educativos del Distrito Capital."*
4. Proyecto No. 147 de 10 de febrero de 2017 *"Por medio del cual se promueven acciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas lícitas e [i]lícitas en el Distrito Capital"*
5. Proyectos Nos. 177 - 215 - 244. Acumulados por Unidad de Materia, así:
 - 5.1. *"Por medio del cual se modifica el Acuerdo 376 de 2009, mediante el cual se establecen lineamientos para política pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá";*
 - 5.2. *"Por medio del cual se regula la organización y clasificación de personas y comunidades consumidoras de sustancias psicoactivas"; y,*
 - 5.3. *"Por medio del cual se promueven acciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en el Distrito Capital"*
6. Proyecto No. 416 del 28 de Junio de 2017 *"Por medio del cual se promueven acciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en el Distrito Capital"*

7. Proyecto No. 450 del 24 de julio de 2017 *“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 376 de 2009” Mediante el cual se establecen lineamientos para la Política Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá”*
8. Proyecto No. 635 del 07 de Noviembre de 2017 *"Por medio del cual se promueve acciones de comunicación para prevenir y atender el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en el Distrito Capital"*
9. Proyectos Nos. 19 - 106 - 111 de enero de 2.018, Acumulados por Unidad de Materia, así:
 - 9.1. *“Por medio del cual se modifica el acuerdo 376 de 2009” mediante el cual se establecen lineamientos para la política pública distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá”*
 - 9.2. *“Por medio del cual se regula la organización y clasificación de personas y comunidades consumidoras de sustancias psicoactivas”*
 - 9.3. *"Por medio del cual se promueven acciones de comunicación para prevenir y atender el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en el distrito capital"*
10. Proyecto No. 206 del 23 de abril de 2018 *"Por medio del cual se promueven acciones de comunicación para prevenir y atender el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en el distrito capital"*
11. Proyecto No.416 del 17 de septiembre de 2018. *“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 376 de 2009” Mediante el cual se establecen lineamientos para la Política Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá”*
12. Proyecto No. 536 del 30 de noviembre de 2018 *"Por medio del cual se dictan para la creación de un Sistema de Información Tecnológico para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las Instituciones Educativas del Distrito Capital".*
13. Proyecto No. 148 del 19 de marzo de 2.019 *"Por medio del cual se dictan lineamientos para la creación de un sistema de información Tecnológico para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las Instituciones Educativas del Distrito Capital"*
14. Proyecto No. 286 del 25 de junio de 2019 *"Por el cual se establecen y se dictan mediadas de seguridad y educación en contra del consumo de sustancias psicoactivas en parques públicos y colegios del Distrito Capital".*

15. Proyecto No. 162 del 22 de junio de 2020 *“Por medio del cual se establece atención social a la población adulta habitante de calle del Distrito Capital sujeta a medida de traslado por protección que se encuentre en condición farmacodependiente o en consumo ocasional de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones”*
16. Proyecto No. 222 del 9 de julio de 2020 *“Por medio del cual se establecen acciones y talleres de vocación profesional, técnica y prevención de consumo de drogas en las casas de juventud de Bogotá y se dictan otras disposiciones”*
17. Proyecto No. 445 del 2021 *"Por el cual se integra el deporte en las estrategias de prevención de la delincuencia, la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y la juventud en el Distrito Capital."*
18. Proyecto No. 425 del año 2021 *"Por medio del cual se regula el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en el espacio público"*
19. Proyecto No. 382 del año 2021 *"Por medio del cual se regula el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en el espacio público"*
20. Proyecto No. 286 del año 2021 *"Por medio del cual se establecen acciones programas talleres socio ocupacionales y prevención de consumo de drogas o sustancias psicoactivas en las casas de juventud de Bogotá y se dictan otras disposiciones"*
21. Proyecto No. 259 del año *“Por el cual se integra el deporte en las estrategias de prevención de la delincuencia, la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y la juventud en el Distrito Capital”*
22. Proyectos Nos. 030, 136 y 283 del año 2022 *“Por el cual se formula una estrategia de articulación de entidades distritales para la prevención de la delincuencia, la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y la juventud en el distrito capital, mediante la promoción del deporte”*

3. JUSTIFICACIÓN, MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El presente acuerdo, tomando en consideración lo argüido en los proyectos de acuerdo que anteceden, pretende: **(i)** regular la prohibición de consumo de cannabis y demás sustancias psicoactivas (PSA) en espacios públicos y, consecuentemente, **(ii)** crear una política pública de prevención de daños a la salud de toda la población en general y

de manera particular a la familia, la cual está constituida por niños, niñas y adolescentes, ello, en el marco de lo dispuesto en los numerales 13 y 14 de la ley 1.801 de 2016 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Normas internacionales. Colombia es estado miembro desde 1.945 de las Naciones Unidas⁷⁴, por ende, está sujeta a las recomendaciones que se expidan en el marco del derecho internacional público por parte de dicho órgano.

En lo atañedor a las normas que regulan el uso de sustancias psicoactivas [PSA], la “*Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes*”⁷⁵, a propósito del principio de precaución y, por supuesto, de la prevención y reducción de riesgos prohibidos y daños por el consumo de drogas, señala que “*Las Partes [léase miembros] prestarán atención especial a la prevención del uso indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, adoptarán todas las medidas posibles al efecto y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.*”, de tal suerte que “*para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal*”⁷⁶ para que se cumpla con la “*obligación de prevenir y combatir ese mal*”⁷⁷.

Para prevenir el flagelo de la droga y proteger a los niños, niñas y adolescentes, Colombia, mediante la Ley 12 de 1991, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, según la cual, en su artículo 33, refiere que los “*Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícito de esas sustancias*”.

Además, (i) el artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, ordena que ‘*se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición*’; y (ii) el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, dispone, por su parte, que: ‘*todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado*’”⁷⁸

⁷⁴ Colombia es miembro fundador de las Naciones Unidas, al haber ratificado el 5 de noviembre de 1945, la Carta Constitutiva de San Francisco. Colombia se ha caracterizado por su activa participación en esta Organización y en sus diferentes escenarios. En 1946, nuestro país fue elegido por primera vez como miembro no permanente del Consejo de Seguridad y desde entonces ha ocupado en siete ocasiones dicho cargo: 1947-1948; 1953-1954; 1957-1958; 1969-1970; 1989-1990; 2001-2002; 2011-2012. Desde los inicios de su ingreso a la Organización, Colombia ha participado activamente en los diferentes temas y escenarios de las Naciones Unidas, contando con Misiones Permanentes en Nueva York, en Ginebra, en París y en Viena. <https://www.cancilleria.gov.co/organizacion-las-naciones-unidas-onu#:~:text=Colombia%20es%20miembro%20fundador%20de,y%20en%20sus%20diferentes%20escenarios>

⁷⁵ Enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

⁷⁶ Ib.

⁷⁷ Ib.

⁷⁸ Al respecto, véase la sentencia T-142/2019

Frente al ordenamiento jurídico patrio, es pertinente precisar que los artículos 42⁷⁹, 44⁸⁰ de la Constitución Política, concordantes con las cláusulas de integración normativa contenidas en los artículos 93 y 94 Ib., fungen como garantía de cumplimiento de las mentadas obligaciones internacionales, puesto que son claros en **proteger de manera prevalente** los riesgos prohibidos frente a los futuros daños a la salud que puedan afectar a la familia y a los niños por el consumo de drogas por parte de terceros, sobre todo, cuando quiera que estos últimos hagan uso del espacio público en lugares lúdicos, recreativos y culturales.

Por su parte, el artículo 79 superior prescribe que *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. (...) [de suerte que] Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”*. Dicha normativa, debe ser acompañada con la obligación [de protección] que prevé el artículo 82 superior, al decir que, *“[e]s deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.”*, máxime, cuando quiera que se trata de derechos de la familia y los niños, cuya protección prima sobre los derechos de los demás.

Ahora bien, es necesario resaltar que el artículo 49 superior⁸¹, más que considerar al consumidor como un infractor de la ley penal y contravencional, lo considera como un enfermo, de ahí que requiere de la atención médica

⁷⁹ ARTÍCULO 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

⁸⁰ ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

⁸¹ Modificado por el Acto Legislativo 02 del 21 de diciembre de 2009

profiláctica o terapéutica necesaria para enfrentar las patologías que deja a su paso la drogodependencia, de tal suerte que, más que un problema de política criminal resulta en un **problema de salud pública**.⁸²

Alinderado con lo anterior, si bien es cierto, el artículo 49 superior refiere que “*El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas **está prohibido**, salvo prescripción médica.*”, no es menos cierto que el consumo libre debe ser regulado “[c]**on fines preventivos y rehabilitadores** [razón por la cual] *la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto.* De tal modo que el estado:

“...dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.

Ahora, a partir de la modificación del artículo 49 Constitucional por el Acto Legislativo 02 de 2009, es claro que, salvo prescripción médica, **está prohibido** el porte y consumo de cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica (*hojas de coca, cocaína, opio, dihidromorfina, heroína, metadona, morfina, cannabis y su resina y los extractos y tinturas de cannabis, amapola, droga sintética, nitrato de amilo popper, ketamina, GHB, entre otras*), empero, dicha prohibición fue incluida como una medida para proteger la salud pública de los consumidores, lo cual no desconoce el derecho de la familia y los niños a disfrutar de ambientes de sano esparcimiento y educativos.

A tono con ello, para regular el consumo y porte, la ley la Ley 1787 de 2016, por ejemplo, respecto al *Thc Cannabis*, fijó las condiciones de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de las semillas de la planta de cannabis y de sus derivados siempre y cuando su finalidad sea médica o científica

En Colombia, ciertamente no ha sido poco el esfuerzo que, desde antes de la regulación del citado acto legislativo se ha llevado a cabo en política de prevención – *principio de precaución* – y de salud pública; por ejemplo, en el año 2007 se expidió la Política Nacional de Reducción del Consumo de Drogas y su Impacto, la cual propuso intervenciones de factores sociales para prevención y atención integrada para las personas con consumo de [sustancias psicoactivas] SPA.

De manera consecutiva se expidió el Acuerdo 029 de 2011⁸³ sobre tratamiento psiquiátrico y psicológico a menores de 18 años con consumo riesgoso y abuso de SPA y la Ley 1566 de 2012⁸⁴, donde se reconoció el abuso y la **adicción**

⁸² [E]ntre los años 1990 y 2017, las violencias ocuparon la primera causa de muerte y discapacidad en el país (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2019). Con respecto al consumo de SPA, para el 2013, el porcentaje de abuso o dependencia de cualquier sustancia ilícita con respecto a los consumidores era del 57,70 % (Observatorio de Drogas de Colombia, 2013). Así mismo, para el 2016 la edad promedio de inicio de consumo de SPA era 13,6 años (Observatorio de Drogas de Colombia, 2016). Tomado de Documento CONPES 3992 de 2020, CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

⁸³ Por el cual define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud

⁸⁴ Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas.

a SPA como asunto de salud pública, donde las patologías asociadas al consumo deben ser atendidas por el SGSSS.⁸⁵ [E]n el año 2019, la expedición de la Política Integral de Prevención y Atención del Consumo⁸⁶ por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual se articula con la Política Integral para Enfrentar el Problema de Drogas-Ruta Futuro, expedida en 2018 por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Estas reconocen a las personas consumidoras como sujetos de derechos, buscan garantizar respuestas continuas para la atención integral de las personas, familias y comunidades con riesgo o consumo problemático de SPA.⁸⁷

Pues bien, basado en el principio de precaución, la prohibición a la que acá se aspira, se irgue en arco total a que no se lleven a cabo conductas como *consumo, distribución y comercialización* de cannabis y otras sustancias psicoactivas [PSA] en espacios públicos, lo cual tampoco pretende en modo alguno soslayar la protección que el mismo estado y la constitución tienen frente al adicto consumidor y el reconocimiento de sus derechos.

La prohibición del consumo de sustancias Psicoactivas [PSA], ya sea medicinal por un tratamiento terapéutico ora recreativo como consecuencia de la dosis personal en lugares deportivos, recreativos, culturales, en donde por regla general, concurre población infantil, constituye un límite adecuado y proporcional para proteger los derechos de estos últimos, pues, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía privada **no son derechos absolutos**, y tienen sus límites en el principio constitucional que “*todo derecho llega hasta donde comienzan los derechos ajenos*,”⁸⁸ lo cual constituye un recto entendimiento de lo que se pretende el presente acuerdo

Así las cosas, las medidas restrictivas que se proponen en beneficio y protección a la familia deviene de la ponderación de los derechos fundamentales que se encuentran en tensión de unos y otros grupos poblaciones, razón por la cual, se hace necesario traer a cuento los pronunciamientos realizados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en distintos juicios de constitucionalidad sobre el particular:

1. La Corte Constitucional mediante sentencia [hito] C-221 de 1994, que declaró inexecutable el artículo 51 de la ley 30 de 1.986, (*Estatuto Nacional de Estupefacientes*). El argumento esencial de la Corte fue que esas normas violaban la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, pues la conducta del consumidor no afecta, en sí misma, derechos de otras personas, por lo que no podía ser penalizada, puesto que un Estado democrático, respetuoso de la libertad y del pluralismo, no puede imponer a la brava modelo de virtud, ni penalizar a un individuo por hacerse daño a sí mismo.

⁸⁵ CONPES 3992 de 2020, CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

⁸⁶ Resolución 089 de 2019, por la cual se adopta la Política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas

⁸⁷ CONPES 3992 de 2020

⁸⁸ Ver sentencias T-047 de 1995, T - 244 de 2.018 Desde los albores de la interpretación de los derechos, esta Corporación ha señalado que: “es un contrasentido jurídico pretender que un derecho -cualquiera que sea su importancia- sea absoluto, porque, por lo menos, todo derecho llega hasta donde comienzan los derechos ajenos. La convivencia limita, per se, los derechos, las facultades y las libertades individuales, con base en el orden público y el bien común. Además, no hay que olvidar que todo derecho tiene un deber correlativo. Así las cosas, se evidencia que el derecho de un individuo está limitado por los derechos de los otros asociados, por el orden público, por el bien común y por el deber correlativo”.

Esto obviamente no excluye que se puedan castigar las eventuales conductas peligrosas cometidas por los consumidores de droga, como conducir bajo los efectos de la marihuana o del alcohol; pero se les sancionaría por esas conductas, mas no por ser consumidores⁸⁹.

2. La posición referida al consumo ha sido reiterada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional en sentencias C-252 de 2003, T-435 de 2002 y C-491 de 2012, y, por la Corte Suprema de Justicia en sentencias 29183 de 18 de noviembre de 2008⁹⁰ y 41760 de 09 de marzo de 2016⁹¹, entendiendo que, bajo la protección del bien jurídico de la salud pública, no puede incluirse dentro de la prohibición penal la conducta del consumo de sustancias psicotrópicas o drogas sintéticas, en tanto se trata de una conducta que pertenece de forma exclusiva a la esfera interna, reconociendo, entonces, que es la autonomía de la persona lo que debe primar y, por tanto, el legislador no puede entrometerse dentro de dicho ámbito.⁹²
3. La sentencia C – 253 de 2.019, por su parte, que declaro inexecutable las expresiones ‘*alcohólicas, psicoactivas o*’ contenidas en el Artículo 33 (literal c, numeral 2) de la Ley 1801 de 2016 y *bebidas alcohólicas*’ y ‘*psicoactivas o*’ contenidas en el Artículo 140 (numeral 7) Ib., señaló que:
 - i. “...la prohibición amplia y genérica impuesta por el Código Nacional de Policía y Convivencia no es razonable constitucionalmente, pues a pesar de buscar un fin que es imperioso (la tranquilidad y las relaciones respetuosas) lo hace a través de un medio que no es necesario para alcanzar dicho fin, y en ocasiones tampoco idóneo. La generalidad de la disposición, que invierte el principio de libertad, incluye en la prohibición casos para los que el medio no es idóneo, puesto que no hay siquiera riesgo de que se afecten los bienes protegidos. El medio no es necesario, en todo caso, por cuanto existen otros medios de policía en el mismo Código que permiten alcanzar los fines buscados sin imponer una amplia restricción a la libertad. La regla también es desproporcionada al dar amplísima protección a unos derechos e imponer cargas al libre desarrollo de la personalidad.”⁹³

⁸⁹ Por Rodrigo Uprimny Yepes. Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) <https://idpc.net/es/news/2019/05/a-25-anos-de-la-sentencia-c-221-94-en-colombia-una-oportunidad-perdida>

⁹⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Rad. 29183 de 18 de noviembre de 2008. 10 de agosto de 2020 disponible en: http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_7599204253bbf034e0430a010151f034

⁹¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. “Sentencia Rad. 41760 de 09 de marzo de 2016”. En línea del 10 de agosto de 2020 disponible en: <https://cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/relatorias/pe/b2mar2016/SP2940-2016.pdf>

⁹² LA DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA CORRELATIVA PROHIBICIÓN DE SU VENTA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ANÁLISIS A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA. Dra. MARÍA EMMA PRIETO MANJARRES https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/24438/MariaEmma_PrietoManjarres_2020.pdf;jsessionid=66498C50628CF82366728A1318ABA175?sequence=2

⁹³ Fundamento 8.4 de la sentencia en comentario

- ii. *“...la prohibición impuesta por el Código Nacional de Policía y Convivencia, objeto de la acción de inconstitucionalidad, tampoco es razonable constitucionalmente. Al igual que en el problema anterior, se advirtió que el fin que se busca con la norma es imperioso (el cuidado y la integridad del espacio público). Pero en este caso ni siquiera se muestra por qué se considera que el medio es adecuado para alcanzar el fin buscado. No se advierte, ni se dan elementos de juicio que permitan establecer una relación clara de causalidad entre el consumo de las bebidas y las sustancias psicoactivas, en general, y la destrucción o irrespeto a la integridad del espacio público. En cualquier caso, los eventos en los que el consumo de las sustancias referidas podría llevar a destruir o afectar el espacio público, debe ser objeto de prevención y corrección por parte de la Policía, usando otros medios que el propio Código de Policía contempla y faculta.”*⁹⁴
4. Pese a que tan solo se cuenta con el comunicado de prensa,⁹⁵ la sentencia C – 127 de 2.023 del 27 de abril del presente año, revisó la constitucionalidad de los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la ley 1801 de 2.016. En dicha providencia se estudió la tensión de varios derechos fundamentales; por una parte, el *“...libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud de los consumidores, por cuanto se establece una limitación al porte y al consumo de sustancias psicoactivas, en general, que cubre la dosis personal, en los parques, áreas y zonas del espacio público, sin ninguna exclusión. [y, por otra] “...los derechos de los niños, niñas y adolescentes en relación con el consumo y porte de sustancias psicoactivas, en lugares del espacio público habitualmente concurridos por ellos.”*

Agregó la Corte, que el *“...análisis de constitucionalidad estuvo mediado por la aplicación de un juicio de razonabilidad y de proporcionalidad en sentido estricto, que se guió por la aplicación de los principios de interés superior del menor de edad y pro infans.”* Bajo ese entendido, la corte decidió:

“Primero. En relación con el artículo 140.13 de la Ley 1801 de 2016, DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “portar” en el entendido de que esta restricción no se aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio o de dosis medicada. Adicionalmente, **DECLARAR EXEQUIBLES** las expresiones **“consumir”, “sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal”, “y en parques” en el entendido de que la restricción aplica, además, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,** y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, **con base en los principios pro infans,** de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia

Segundo. En relación con el artículo 140.14 de la Ley 1801 de 2016, DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “portar” en el entendido de que esta restricción no se aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio o de dosis medicada. Adicionalmente, **DECLARAR EXEQUIBLES** las expresiones **“consumir”, “sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal”, “en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio.** La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a

⁹⁴ Fundamento 8.5 Ib.

⁹⁵ Comunicado 13 del 26 y 27 de abril de 2023, Divulgado por página de la Corte Constitucional 26 de abril de 2023. Proceso D-14771AC

*principios de razonabilidad y proporcionalidad”, en el entendido de que **la restricción aplica, además, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes**, y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, **con base en los principios pro infans**, de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia.”*

De lo visto, prontamente se advierte que las decisiones de exequibilidad condicionada tomadas por la Corte Constitucional en la sentencia C – 127 de 2023, sobre las normas que regulan los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, restrictivas del consumo de “*sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal*” resultan adecuadas para lograr el fin que se pretende conseguir, esto es, tener un espacio libre de drogas en lugares de interés público, recreativo, deportivo o cultural.

La decisión de la Corte persigue un fin legítimo: la protección de los riesgos prohibidos y daños en la salud de los niños, niñas, adolescentes, y personas no adictas, ello, en plena consonancia con el tan mencionado principio de precaución, con lo cual, la medida restrictiva resulta necesaria para lograr tal fin.

La prohibición que trae la norma [numerales 13 y 14 del artículo 140 de la L. 1801 de 2016] **no es desigual**, pues, si bien, limita el derecho fundamental a la libre personalidad del consumidor para que consuma sustancias psicoactivas en lugares donde concurra la familia, niños, niñas y adolescentes, de modo alguno cercena o sacrifica en su totalidad su práctica en espacios distintos, con lo cual la disposición normativa en comento resulta **idónea, adecuada y necesaria** para la protección de los no consumidores y familia en general.

El criterio fundamental que empleó la corte para sacrificar o limitar los derechos fundamentales de los consumidores estuvo basado en la aplicación de 2 principios, a saber: **(i) interés superior del menor** y **(ii) pro infans**:

El primero, según la sentencia SU433-20, es aquel “*que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes*”⁹⁶, en tanto que, el *pro infans*,⁹⁷ constituye “*...un instrumento jurídico valioso para la ponderación de derechos de rango constitucional, frente a eventuales tensiones, **debiendo escogerse la interpretación que brinde la mayor protección a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes***”.⁹⁸

Así, pues, resulta claro que la restricción contenida en la ley 1801 de 2016 es equivalente a los beneficios que reporta el uso, goce y disfrute de los espacios de interés público y demás derechos de la familia. Al regular los espacios públicos libres del consumo de sustancias psicoactivas se está dando especial aplicación de dichos principios de los menores, los cuales, como bien lo afirma la jurisprudencia vernácula de corte constitucional “*deben sopesarse frente a otras garantías (...) dada su preponderancia constitucional y el estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes*”⁹⁹

⁹⁶ Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia)

⁹⁷ Al respecto véanse las sentencias C-840/2010, C-058/2018, C-250/2019, C-193/2020, entre otras

⁹⁸ Corte Constitucional, sentencia C-177/2014

⁹⁹ Ib.

En cumplimiento del estándar de que trata el artículo 44¹⁰⁰ del CPACA – Ley 1437 de 2.011., teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, y, de ese modo, impedir que un Acto Administrativo sea arbitrario, lo pertinente es que el presente acuerdo regule la prohibición descrita en el Código de Convivencia Ciudadana (o mal llamado código de policía) para el uso o consumo de drogas en espacios de interés público, y, de suyo, se cumpla con la norma descrita para evitar que la reglamentación que aquí se pretende se torne injusta o desproporcionada.

Bajo ese panorama, previo a verificar los efectos que las drogas causan en el organismo, y, de suyo la necesidad de prohibición del consumo en espacios públicos es importante generar un marco conceptual sobre lo que se entiende por drogas y adicción. Así las cosas, las leyes 30 de 1986 y 1787 de 2016, establecen las siguientes definiciones:

1. Droga: Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus funciones fisiológicas.
2. Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia.
 - 2.1. **Estupefaciente:** Cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, y que haya sido catalogada como tal en los convenios internacionales y adoptada por la legislación colombiana.
3. Planta de cannabis: Se entiende toda planta del género cannabis.
4. Cannabis: Se entienden las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe. Se entiende por aquel cannabis psicoactivo cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es igual o superior al límite que establezca el Gobierno nacional mediante la reglamentación de la presente ley.
5. Adicción o Drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de síntomas físicos cuando se suprime la droga.

De la Clasificación de los estupefacientes de manera particular, la convención de 1.961 clasificó las sustancias de uso médico y científico con riesgo potencial de abuso en cuatro listas:

¹⁰⁰ Según el cual “...el contenido de una decisión, de carácter general o particular, (...) debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y **proporcional** a los hechos que le sirven de causa”. Disposición contenida en el derogado CCA Decreto 01 de 1984 artículo 31.

1. **Lista I.-** sujetas a todas las medidas de fiscalización aplicables a los estupefacientes de acuerdo a los artículos de la Convención;
2. **Lista II.-** sujetas a las mismas medidas de fiscalización que los de la Lista I, salvo las medidas prescritas en el artículo 30, incisos 2 y 5, respecto del comercio al por menor;
3. **Lista III.-** sujetas a las mismas medidas de fiscalización que los que contengan estupefacientes de la Lista II, exceptuando las disposiciones del artículo 31, párrafos 1 b y 3 a 15, ni, en lo que respecta a su adquisición y su distribución al por menor, las del artículo 34, apartado b;
4. **Lista IV.-** incluidas en la Lista I y además sujetas a medidas especiales de fiscalización.¹⁰¹

Lista I	Lista II	Lista III	Lista IV
Sustancias que son muy adictivas o de probable uso indebido, y precursores que se pueden convertir en estupefacientes que son igualmente adictivos y también de probable uso indebido	Sustancias que son menos adictivas y cuyo uso indebido es menos probable que las de la Lista I	Preparados que contienen una cantidad baja de estupefacientes, son poco susceptibles de uso indebido y están exonerados de la mayoría de medidas de fiscalización impuestas sobre las sustancias que contienen	Determinados estupefacientes también enumerados en la Lista I considerados como «particularmente nocivos por sus propiedades adictivas» y con escaso o nulo valor terapéutico
Ejemplos:			
cannabis, opio, heroína, metadona, cocaína, hoja de coca, oxicodona	codeína, dextropropoxifeno	<2,5 % codeína, <0,1 % cocaína	heroína

Así las cosas, se tiene que en Colombia se consumen mayoritariamente las siguientes drogas:

- **Tabaco/ Cigarrillo:** Es una planta que se cultiva por sus hojas, las cuales se secan y luego se usan en varios productos. Contiene nicotina, un ingrediente que puede conducir a la adicción, lo que explica por qué a muchas personas que consumen tabaco les resulta difícil dejar de consumirlo. También contiene muchas otras sustancias químicas potencialmente nocivas, y otras más se generan al quemarlo. El tabaco se puede

¹⁰¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_sobre_Estupefacientes

fumar, masticar o aspirar. Los productos para fumar incluyen cigarrillos, cigarros, bidis y cigarrillos de clavo. Algunas personas fuman hojas sueltas de tabaco en pipa o en una pipa de agua llamada narguile o hookah¹⁰²

- **Alcohol:** Es un sedante/hipnótico con efectos parecidos a los de los barbitúricos. Además de los efectos sociales de su consumo, la intoxicación alcohólica puede causar envenenamiento o incluso la muerte; el consumo intenso y prolongado origina en ocasiones dependencia o un gran número de trastornos mentales, físicos y orgánicos. Fuente: Glosario de términos de alcohol y drogas. Organización Mundial de la Salud (OMS), 1994.¹⁰³
- **Heroína (hache o "H"):** es una droga opioide producida a partir de la morfina, una sustancia natural que se extrae de la bellota de la amapola, también conocida como "adormidera asiática". La heroína suele presentarse en forma de polvo blanco o marrón, o como una sustancia negra y pegajosa conocida como "alquitrán negro". Fuente: <https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/la-heroína#:~:text=La%20hero%C3%ADna%20es%20una%20droga,conocida%20como%20%22alquitr%C3%A1n%20negro%22.>¹⁰⁴
- **Estimulantes sin prescripción:** son medicamentos que generalmente se emplean para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia (episodios incontrolables de sueño profundo). Los estimulantes recetados aumentan el estado de alerta, la atención y la energía.¹⁰⁵
- **Tranquilizantes sin prescripción:** medicamento con efectos calmantes; término general que designa varios grupos de medicamentos empleados en el tratamiento sintomático de diversos trastornos mentales. El término puede usarse para diferenciar entre estos¹⁰⁶
- **Marihuana:** Se refiere a las hojas secas, flores, tallos y semillas de la planta Cannabis sativa o Cannabis indica. La planta contiene tetrahidrocannabinol (THC), una sustancia química que provoca alteraciones mentales, además de otros compuestos similares.¹⁰⁷

¹⁰² [Ficha metodologica.pdf](#) Ficha Metodológica Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas - ENCSPA

¹⁰³ [Ficha metodologica.pdf](#) Ficha Metodológica Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas - ENCSPA

¹⁰⁴ [Ficha metodologica.pdf](#) Ficha Metodológica Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas - ENCSPA

¹⁰⁵ <https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/estimulantes-deprescripcionmedica#:~:text=Los%20estimulantes%20recetados%20por%20los,la%20atenci%C3%B3n%20y%20la%20energ%C3%ADa>

¹⁰⁶ [Ficha metodologica.pdf](#) Ficha Metodológica Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas - ENCSPA

¹⁰⁷ <https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/la-marihuana>

- **Cocaína:** Es una droga estimulante poderosamente adictiva hecha de las hojas de la planta de coca, nativa a Sudamérica. Como una droga de la calle, la cocaína se parece a un polvo fino blanco cristalino. Los distribuidores de la calle a veces la mezclan con otras cosas como almidón de maíz, polvo de talco o harina para aumentar las ganancias¹⁰⁸
- **Basuco:** Producto obtenido de las hojas de la coca durante el primer paso del proceso de extracción de la cocaína. Es una droga de bajo costo similar al crack elaborada con residuos de cocaína y procesada con ácido sulfúrico y queroseno. En ocasiones suele mezclarse con cloroformo, éter o carbonato de potasio, entre otras cosas¹⁰⁹.
- **Éxtasis:** El término “éxtasis” se refiere a sustancias sintéticas químicamente relacionadas con las anfetaminas, pero cuyos efectos son algo diferentes. La sustancia más conocida de la familia del éxtasis es la 3,4-metilenedioximetanfetamina (MDMA), aunque en ocasiones también pueden encontrarse otras sustancias análogas en las pastillas de éxtasis (MDA y MDEA). De igual modo, existe una alta probabilidad de que las pastillas comercializadas como éxtasis contengan también una variedad de otras sustancias. En este informe llamaremos éxtasis o sustancias tipo éxtasis a todas aquellas en las que se supone que el compuesto químico es la MDMA. Fuente: UNODC, III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria, Informe Regional, 2016.¹¹⁰
- **Popper:** sustancia depresora inhalante que proviene de los nitritos de amilo, butilo e isobutilo. Estos son líquidos suelen ser color amarillento y aromáticos que se venden en pequeños frascos para inhalar. El nitrito de amilo es una sustancia volátil y altamente inflamable con elevados riesgos en caso de ser ingerida (puede ser mortal). Los nitritos son potentes vasodilatadores que al entrar en contacto con el Sistema Nervioso Central contienen propiedades para relajar los músculos.¹¹¹
- Otras sustancias ilícitas.

De los Efectos del Tabaco/ cigarrillo en la salud.

¹⁰⁸ [Ficha_metodologica.pdf](#) Ficha Metodológica Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas - ENCSPA

¹⁰⁹ [Ficha_metodologica.pdf](#) Ficha Metodológica Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas - ENCSPA

¹¹⁰ Ib.

¹¹¹ Ib.

Múltiples y dañinos son las consecuencias del tabaquismo sobre el organismo humano tal y como se expone a continuación:

Estudio	Consecuencias en salud
Centers for Disease Control and Prevention (cdc) ¹¹²	<ul style="list-style-type: none"> • El humo del tabaco tiene al menos 70 sustancias químicas que causan cáncer, también conocidas como carcinógenos. • Los cánceres de pulmón y colorrectal representan más de la mitad de todos los tipos de cáncer vinculados al consumo de tabaco. • Aproximadamente 3 de cada 10 muertes por cáncer son causadas por fumar cigarrillos. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer. • Dejar de consumir tabaco a cualquier edad puede reducir el riesgo de tener cáncer o morir por esta enfermedad.
OMS ¹¹³	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno están entre las grandes causas de enfermedades cardiovasculares (ECV) (1), y contribuyen a aproximadamente un 17% de las muertes mundiales por ECV, es decir, unos 3 millones de defunciones al año (3). • Fumar solamente un cigarrillo al día conlleva la mitad del riesgo de cardiopatía coronaria y accidente vascular cerebral (AVC) que fumar 20 cigarrillos al día (5). • La exposición al humo ajeno puede causar cardiopatía coronaria en el adulto y aumenta el riesgo en alrededor de un 25%-30% • Alrededor del 55% de las cerca de 890 000 defunciones de adultos que se producen cada año en el mundo por exposición al humo ajeno son atribuibles a la cardiopatía isquémica (1, 7).
American cancer society ¹¹⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Fumar no aumenta solamente el riesgo de cáncer de pulmón, sino que también es un factor de riesgo para los cánceres de boca, laringe, faringe, esófago, riñón, cuello uterino,

¹¹² CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. El cáncer y el consumo de tabaco. Disponible en la página web: (cdc):<https://www.cdc.gov/Spanish/SignosVitales/pdf/2016-11-vitalsigns.pdf>

¹¹³ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, El tabaco rompe corazones, 2018. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272833/WHO-NMH-PND-18.4-spa.pdf>

¹¹⁴ AMERICAN CANCER SOCIETY, Riesgos para la salud debido al tabaquismo, 2018. Disponible en:<https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/tabaco-y-cancer/riesgos-para-la-salud-debido-al-tabaquismo.html>

	<p>higado, vejiga, páncreas, estómago, colon y recto, leucemia mieloide</p> <ul style="list-style-type: none">● La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD, por sus siglas en inglés) es el nombre para referirse a enfermedades de pulmón de largo plazo incluyendo bronquitis crónica y enfisema (las cuales se detallan más adelante). El riesgo de COPD aumenta mientras más usted fume y cuánto más tiempo lo haga. Esta enfermedad empeora con el tiempo, y no existe cura.● El hábito de fumar causa daños al corazón y a los vasos sanguíneos (sistema cardiovascular), incrementando el riesgo de cardiopatía y accidente cerebrovascular. Es una causa importante de enfermedad coronaria, que puede conducir a un ataque al corazón.● Asimismo, fumar causa la hipertensión arterial, reduce su capacidad para ejercitarse y aumenta la probabilidad de coagulación de la sangre. También disminuye los niveles del colesterol HDL (bueno) en la sangre.● Fumar es un factor de riesgo principal para la enfermedad arterial periférica (PAD), en la cual se acumula placa en las arterias que llevan sangre a la cabeza, los órganos y las extremidades. Esto aumenta su riesgo de enfermedades del corazón, ataques cardíacos y accidente cerebrovascular.
--	---

De los Efectos del Alcohol en la salud.

El alcohol es una de las drogas socialmente aceptadas pero la cual también tiene serias consecuencias en la salud cuando se consume en exceso y es la causa de múltiples enfermedades y lesiones, a saber:

Estudio	Consecuencias en salud
OMS y organización	

[panamericana de la salud](#)¹¹⁵

- Aparte de ser una droga que causa dependencia, el alcohol es la causa de **más de 60 tipos distintos de enfermedades y lesiones**, como trastornos mentales y del comportamiento, condiciones gastrointestinales, cáncer, trastornos inmunológicos, enfermedades esqueléticas, trastornos reproductivos y daños congénitivo.
- El consumo de alcohol es una de las **causas más importantes en lo que respecta a enfermedad y muerte prematura en toda las Américas**. Es más significativo que el tabaquismo (a excepción de Estados Unidos y Canadá) y la hipertensión arterial, el hipercolesterolemia y la obesidad.
- Existe una relación entre el uso de alcohol y el riesgo de **causar lesiones y accidentes fatales y no fatales** (Cher-pitel et al. 1995; Brismar y Bergman, 1998; Smith et al. 1999). En un estudio realizado en Australia, el riesgo de sufrir una lesión luego de haber consumido más de 60g de alcohol, en un periodo de seis horas, era 10 veces mayor para las mujeres y dos veces para los varones.
- El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo grave en lo que **respecta a suicidios y comportamiento suicida**, tanto entre jóvenes como entre adultos
- De cada ocho personas que sufren trastornos de **ansiedad**, más de una también sufre trastornos por el consumo de alcohol. El alcohol también agrava los trastornos del sueño
- Durante un periodo sostenido de tiempo y dependiendo de la dosis, el alcohol aumenta el riesgo de dañar el sistema nervioso periférico.
- El consumo excesivo de alcohol acelera la contracción del cerebro, lo que a su vez lleva a una **disminución de la capacidad cognitiva**. Pareciera existir un continuo de daño cerebral en personas con dependencia del alcohol prolongada.
- El consumo excesivo de alcohol **aumenta el riesgo de padecer un deterioro cognitivo** de manera dosis-dependiente.
- El consumo de **alcohol y de tabaco son conductas estrechamente relacionadas**; un mayor consumo de tabaco está asociado con una mayor ingesta de alcohol.
- El consumo alcohólico de riesgo es frecuente en personas con diagnóstico de **esquizofrenia**. Aún un consumo bajo de alcohol puede empeorar los síntomas e interferir con el tratamiento.
- El alcohol incrementa el riesgo de padecer **cirrosis** de manera

¹¹⁵ OMS Y ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Alcohol y atención primaria en Salud. 2008. Disponible en la página web: [:https://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_atencion_primaria.pdf](https://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_atencion_primaria.pdf)

	<p>dosis dependiente. Las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar esta enfermedad que los hombres</p> <ul style="list-style-type: none"> • El alcohol incrementa el riesgo de padecer pancreatitis crónica o aguda • Aumenta riesgo de diabetes tipo II. • El alcohol incrementa los riesgos de padecer cáncer de boca, esófago y laringe y, en menor escala, cáncer de estómago, colon o recto, en ese orden. • El consumo de alcohol aumenta en forma exponencial el riesgo de padecer cáncer de hígado. • Existen fuertes evidencias de que el alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama. • El alcohol eleva la presión arterial e incrementa el riesgo de hipertensión • La intoxicación alcohólica es un factor de riesgo importante tanto de accidentes isquémicos como de accidentes hemorrágicos y es particularmente importante como causa de accidentes cerebrovasculares en jóvenes y adolescentes. • Los episodios de ingesta importante aumentan el riesgo de padecer arritmias cardíacas y muerte coronaria repentina. • Consumir más de 20g diarios (el nivel de consumo menos riesgoso) aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. • El alcohol puede interferir con el normal funcionamiento del sistema inmunológico y hace a la persona más propensa a contraer enfermedades infecciosas, incluyendo neumonía, tuberculosis y VIH. • Aparentemente existe una relación dosis-dependiente entre consumo de alcohol y el riesgo de fracturas en hombres y mujeres, aunque es mayor en hombres. • El alcohol puede afectar la fertilidad en hombres y mujeres. • En jóvenes (mujeres menores de 45 y varones menores de 35 años), cualquier nivel de consumo de alcohol incrementa el riesgo general de muerte dependiendo de la dosis.
<p>Harvard Oct. 15, 2015, in the International Journal of Cancer¹¹⁶</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque el alcohol puede jugar un rol menor en el aumento del riesgo de cáncer de seno, hay razones Fuertes para que las mujeres limiten su consumo a una bebida al día, dentro de la que se incluye el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular o Alzheimer.

¹¹⁶ HARVARD HEALTH PUBLISHING, Study suggests scant increased risk of breast cancer from alcohol intake, ,Oct. 15, 2015, Disponible en: <https://www.health.harvard.edu/womens-health/research-were-watching-study-suggests-scant-increased-risk-of-breast-cancer-from-alcohol-intake>

Harvard ¹¹⁷	<ul style="list-style-type: none"> ● El consume de alcohol fue la séptima causa de muerte y discapacidad a nivel mundial en 2016, de cerca del 2% de las muertes en la población femenina y el 7% de la población masculina (2.8 millones de muertes en total relacionadas con el alcohol), ● Para las edades de 15 a 49 años, el alcohol fue el riesgo mayor para las muertes y discapacidades a nivel mundial. Tuberculosis, accidentes de tránsito y daño auto infligido fueron las mayores causas (el riesgo de cada una de estas condiciones se aumenta con el consumo de alcohol). ● Para los adultos mayores, el cáncer relacionado con el consumo de alcohol fue la principal causa de muerte.
Harvard ¹¹⁸	<ul style="list-style-type: none"> ● Las consecuencias del alcohol incluyen enfermedades del Hígado, incluyendo la cirrosis y el fallo de la función renal, terminando en la necesidad de trasplantes. ● También aumenta el riesgo de presión alta, falla cardíaca y demencia. ● También aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer como aquellos del tracto digestivo, cáncer de colon, seno e hígado. ● Un mayor riesgo de sufrir un accidente especialmente automovilístico, así como caídas, homicidios y suicidios también se relacionan con el consumo de alcohol. ● Un mayor riesgo de depresión y ansiedad. ● Envenenamiento por alcohol. Mucha gente no se da cuenta de que beber demasiado alcohol en un corto periodo de tiempo puede ser fatal. ● El alcohol puede causar problemas en el feto, así como en su desarrollo.

De los Efectos de la Marihuana en la Salud.

¹¹⁷ SHMERLING, Robert H. M.D. Alcohol and your health: In none better than a little?. Publicado en Harvard Health Publishing. Septiembre 19 2018. Disponible en : <https://www.health.harvard.edu/blog/alcohol-and-your-health-is-none-better-than-a-little-2018091914796>

¹¹⁸ SHMERLING, Robert H. M.D. Sorting out the health effects of alcohol. Publicado en Harvard Health Publishing. Agosto 2018 Disponible en: <https://www.health.harvard.edu/blog/sorting-out-the-health-effects-of-alcohol-2018080614427>

Diferentes estudios atestiguan los efectos del consumo de la marihuana en la salud como se expone a continuación:

Estudio	Consecuencias en la salud
Resumen del Informe de la OMS (2015)¹¹⁹ - Codajic	<ul style="list-style-type: none"> El consumo de cannabis provoca una inhibición de los receptores CB1 lo que tiene efectos perjudiciales sobre la memoria de trabajo, la planificación y la toma de decisiones. También en la velocidad de respuesta, la precisión, la coordinación motora, el estado de ánimo y la cognición. <p>Efectos a corto plazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> El efecto más claro para la salud se caracteriza por alteraciones en el nivel de conciencia, la cognición, la percepción, el afecto o el comportamiento, y otras funciones de respuesta psicofisiológicas. Informes recientes sobre historias médicas y estudios de casos sugieren que fumar cannabis puede aumentar el riesgo de enfermedades coronarias en fumadores jóvenes que tienen un riesgo de estas enfermedades <p>Efectos a largo plazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Síntomas positivos, negativos y cognitivos, similares a la esquizofrenia transitoria en algunos individuos sanos En personas con un trastorno psicótico, el consumo de cannabis puede empeorar los síntomas, desencadenar recaídas y tener consecuencias negativas en el curso de la enfermedad. En consumos muy altos, se puede desarrollar una enfermedad psicótica que se asocia con la edad de inicio del consumo, la potencia del THC en el cannabis, la frecuencia y duración del consumo. El consumo de cannabis se asocia con la aparición precoz de la esquizofrenia. Los síntomas de la esquizofrenia aumentan con el consumo de cannabis y la potencia. Síntomas de bronquitis crónica y aguda, así como lesiones microscópicas en las células de revestimiento bronquial, pero no parece producir EPOC.

¹¹⁹ CODAJIC, Resumen Informe de la OMS (2015). Disponible en la página: <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Resumen%20Informe%20%20OMS%20Los%20efectos%20sociales%20y%20de%20salud%20del%20consumo%20de%20cannabis%20no%20m%C3%A9dico.pdf>

	<ul style="list-style-type: none"> • Puede desencadenar en infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares en jóvenes consumidores de cannabis. <p>Consumo diario en la adolescencia y la adultez temprana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abandono precoz de los estudios. • Discapacidad cognitiva. • Mayor riesgo de consumo de otras drogas ilícitas. • Mayor riesgo de síntomas depresivos • Aumento de las tasas de ideación y comportamiento suicida.
American Thoracic Society ¹²⁰	<ul style="list-style-type: none"> • Las personas que fuman mucha marihuana también tienen probabilidad de dañarse los pulmones porque el humo de la marihuana contiene muchas de las mismas sustancias químicas que tiene el humo del tabaco, • Puede empeorar enfermedades del pulmón tales como el asma y la fibrosis quística. • La marihuana contiene sustancias químicas que causan cáncer (cancerígenas) • La marihuana se ha relacionado con infecciones pulmonares por un hongo denominado “aspergillus”. Esta infección puede causar neumonía e incluso la muerte. • El humo de segunda mano o pasivo (la inhalación del humo de marihuana de otra persona) puede causar problemas de salud graves, sobre todo en los niños o en cualquier otra persona con una enfermedad pulmonar crónica. El humo pasivo de la marihuana contiene muchas sustancias tóxicas como cianuro y amoníaco.
The new england journal of medicine ¹²¹	<ul style="list-style-type: none"> • Asociado con un aumento de riesgo de ansiedad y depresión. • Por ejemplo, el uso de marihuana por el equivalente de 30 o más pitillos por año fue asociado con un incremento incidental de cáncer pulmonar y varios tipos de cáncer ubicados en el tracto digestivo superior. • Fumar marihuana es también asociado con la inflamación de las largas vías respiratorias. • El uso de marihuana ha sido al mismo tiempo asociado con condiciones vasculares que incrementan el riesgo de infartos

¹²⁰ AMERICAN THORACIC SOCIETY, Fumar marihuana y los pulmones. 2013. Disponible en la página web: [:https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/spanish/marijuana.pdf](https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/spanish/marijuana.pdf)

¹²¹ VOLKOW, BALER, COMPTON WEISS, Efectos negativos a la salud derivados del consume de marihuana. Publicado en The New England Journal of Medicine. Disponible en: http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/Efectos-negativos-a-la-salud-derivados-del-consumo-de-marihuana-espanol.pdf

	al miocardio, ataques, y ataques isquémicos.
Harvard Aug. 9, 2017, <i>European Journal of Preventive Cardiology</i>. ¹²²	<ul style="list-style-type: none"> • La gente que fuma marihuana puede enfrentarse a un mayor riesgo de fallecer por complicaciones de presión alta. • Adicional al incremento de riesgo de enfermedades cardíacas, presión alta puede llevar a enfermedades del riñón y fallas cardíacas.
Harvard ¹²³	<ul style="list-style-type: none"> • Una de las pocas cosas que los científicos conocen con seguridad sobre la marihuana y la salud cardiovascular es que la gente que consume marihuana y tiene enfermedades cardíacas y se encuentran bajo estrés desarrollan dolor en el pecho más rápido que aquellas que no consumen marihuana. • Algunos de los efectos son aumento de la tasa de Descanso del corazón, dilatación vaso celular, y aumentan los latidos cardíacos.
UNAM ¹²⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Existe la certeza, aunque limitada, de que una persona puede sufrir un infarto durante los primeros sesenta minutos posteriores al consumo de marihuana y el riesgo es mayor al normal en cuatro veces. La explicación radica en que el corazón se acelera y el transporte de oxígeno en la sangre se ve disminuido. • Los fumadores de marihuana tienen a menudo gran cantidad de los síntomas respiratorios que aquejan a los consumidores de tabaco: tos, generación cotidiana de flema, mayor cantidad de problemas respiratorios serios y frecuentes infecciones pulmonares. • Aunque el consumo de marihuana sea poco frecuente, los efectos pueden consistir en ardor y picazón de boca y garganta con una tos intensa. Además, ésta aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y en otras partes del aparato respiratorio porque contiene hasta un 70% más irritantes y carcinógenos que el humo del tabaco.

¹²² HARVARD HEALTH PUBLISHING, Marijuana linked to high blood pressure risk. Noviembre, 2017. Traducido de la página: [:https://www.health.harvard.edu/heart-health/marijuana-linked-to-high-blood-pressure-risk](https://www.health.harvard.edu/heart-health/marijuana-linked-to-high-blood-pressure-risk)

¹²³ HARVARD HEALTH PUBLISHING, Marijuana and heart health: what you need to know. Traducido de la página web, Agosto 2017. Traducida de la página web: <https://www.health.harvard.edu/heart-health/marijuana-and-heart-health-what-you-need-to-know>

¹²⁴ UNAM REVISTA DIGITAL UNIVERSITARIA, Marihuana, por qué tanta controversia. Disponible en la página web: <http://www.revista.unam.mx/vol.17/num5/art32/art32.pdf>

Sobre el Incremento del Consumo de Drogas en la población estudiantil y en Bogotá.

1. Incremento del consumo de drogas.

Diferentes estudios demuestran que el uso de ciertas sustancias ha venido aumentando tanto en Colombia como en Bogotá de manera preocupante pese a los esfuerzos realizados por prevenir el consumo y la adicción.

Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar en Colombia- 2016¹²⁵

• Alcohol.

Si bien el estudio evidencia una disminución en la prevalencia del último mes de uso alcohol comparado con las encuestas de 2004 y 2011 este aún sigue siendo bastante alto ya que al menos 1 de cada 3 estudiantes consume alcohol.

Gráfico 114. Prevalencia último mes de uso de alcohol, 2004, 2011 y 2016, según sexo

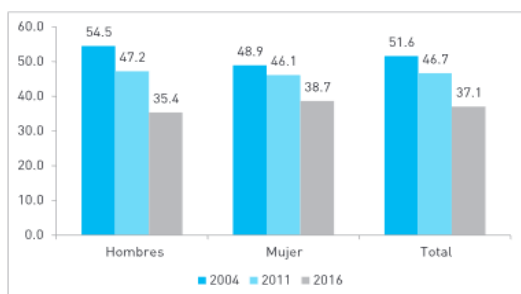
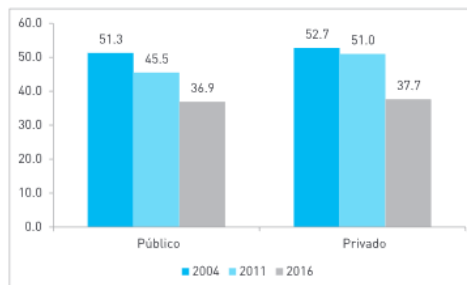


Gráfico 116. Prevalencia último mes de uso de alcohol, 2004, 2011 y 2016, según tipo de colegio



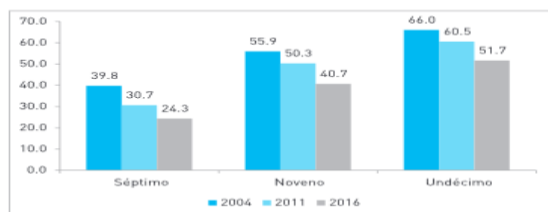
126

• Tabaco.

En cuanto al consumo del tabaco se evidencia que este aumenta conforme aumenta el grado escolar y si bien se ha reducido el consumo en el último mes frente a las anteriores encuestas aún sigue siendo muy problemático pues uno de cada dos estudiantes de undécimo grado fumó un cigarrillo en el último mes. Esto afecta de manera similar tanto a los estudiantes de colegios públicos como privados.

¹²⁵ OBSERVATORIO DE DROGAS DE COLOMBIA, Estudio Nacional de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar en Colombia- 2016. Disponible en la página web: https://www.unodc.org/documents/colombia/2018/Junio/CO03142016_estudio_consumo_escolares_2016.pdf

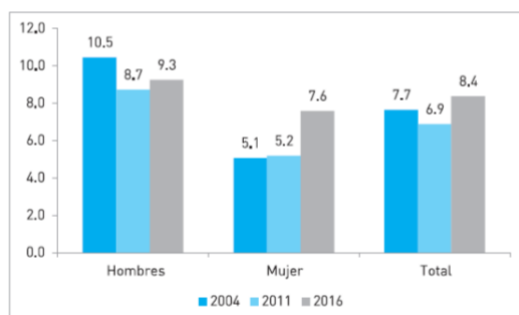
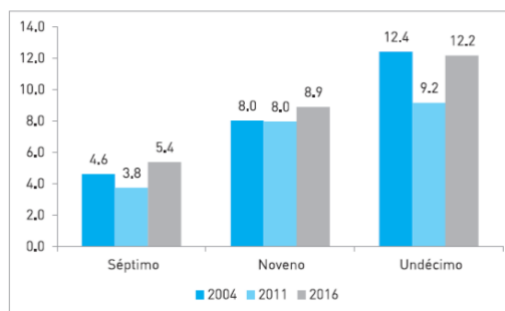
¹²⁶ Ibídem, pág 163 y 164.

Gráfico 115. Prevalencia último mes de uso de alcohol, 2004, 2011 y 2016, según grado**Gráfico 116.** Prevalencia último mes de uso de alcohol, 2004, 2011 y 2016, según tipo de colegio

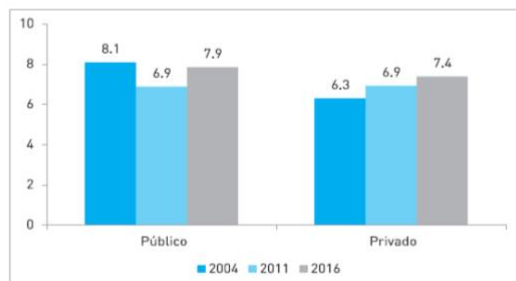
127

- **Marihuana.**

La encuesta evidencia que la sustancia ilícita de mayor uso por parte de los estudiantes colombianos es la marihuana. Sobre el consumo de esta sustancia se presentan las siguientes estadísticas sobre la prevalencia en las cuales se evidencia que el consumo ha aumentado al pasar de 7.7% a 8.4%, también se observa una relación directa entre el consumo y el mayor grado de escolaridad. Por otra parte, es posible concluir que el consumo de esta sustancia es similar tanto en los colegios privados como en los públicos.

Gráfico 120. Prevalencias de uso de marihuana último año, 2004, 2011 y 2016, según sexo**Gráfico 121.** Prevalencias de uso de marihuana último año, 2004, 2011 y 2016, según grado

128

Gráfico 122. Prevalencias de uso de marihuana último año, 2004, 2011 y 2016, según tipo de colegio

129

¹²⁷ Ibídem, pág 163 y 164.

¹²⁸ Ibídem, pág 167 y 168.

¹²⁹ Ibídem, pág. 169 y 170.

- **Cocaína.**

Con relación al consumo de cocaína en la población escolar del país se tiene lo siguiente:

Gráfico 123. Prevalencias de uso de cocaína último año, 2004, 2011 y 2016, según sexo

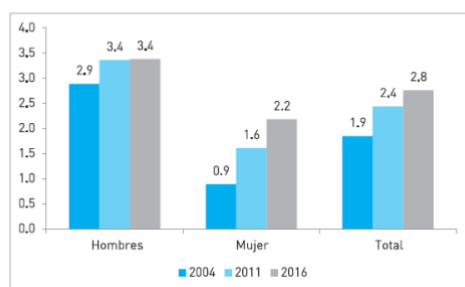


Gráfico 124. Prevalencias de uso de cocaína último año, 2004, 2011 y 2016, según grado

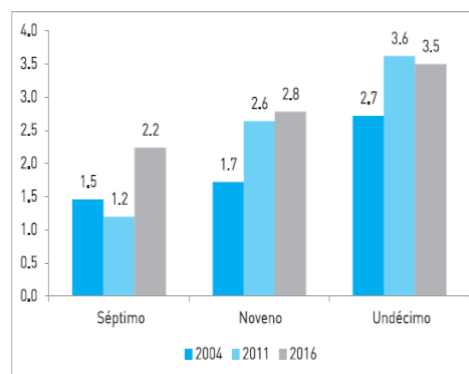
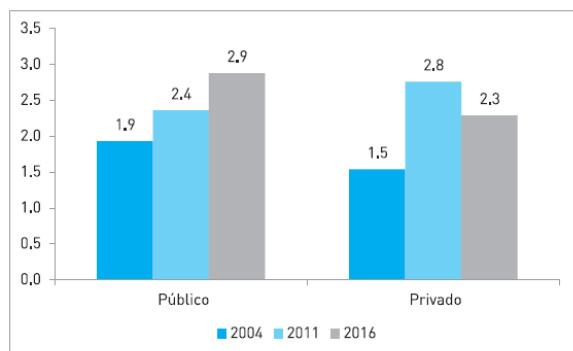


Gráfico 125. Prevalencias de uso de cocaína último año, 2004, 2011 y 2016, según tipo de colegio



130

Con relación a la prevalencia del uso de cocaína se establece que en los hombres se mantuvo prácticamente igual entre los años 2011 y 2016 pero tuvo un aumento significativo en las mujeres al pasar de 1.6% a 2.2%. Así mismo, existe una relación directa entre mayor grado escolar y mayor consumo de cocaína. Es relevante señalar que, en el caso de la prevalencia del uso de la cocaína, esta ha aumentado en los colegios públicos mientras ha disminuido en los privados.

¹³⁰ Ibídem, pág. 171.

- **Inhalables.**

Antes de analizar el comportamiento del uso de sustancias inhalables en los entornos escolares, es preciso aclarar que para el año 2004 las preguntas hacían alusión a “solventes o inhalables” como una de las categorías de sustancias. Sin embargo, en los estudios de 2011 u 2016 las preguntas lo especificaban con el uso de “pegantes, solventes y pinturas” y se adicionaron preguntas específicas como el uso de “Popper” y “dick”.

Gráfico 127. Prevalencias de uso de inhalables último año, 2004, 2011 y 2016, según sexo

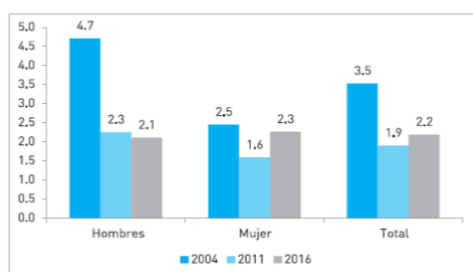


Gráfico 128. Prevalencias de uso de inhalables último año, 2004, 2011 y 2016, según grado

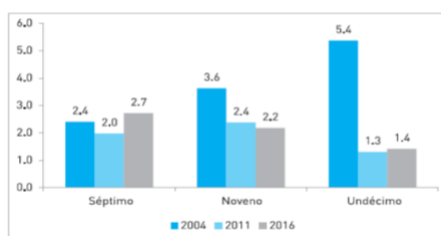
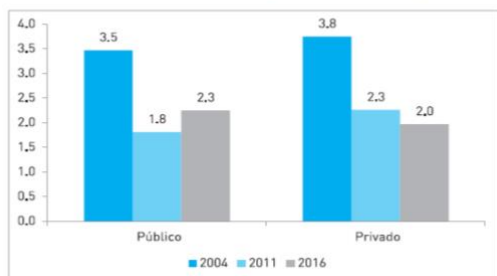


Gráfico 129. Prevalencias de uso de inhalables último año, 2004, 2011 y 2016, según tipo de colegio



131

En este punto es de resaltar que si bien el consumo de inhalables cayó marginalmente en los hombres entre 2011 y 2016, este aumentó significativamente en las mujeres al pasar de 1.6% a 2.3%. Llama la atención que con respecto al uso de este tipo de sustancias se evidencia una diferencia con respecto a las otras y es que el aumento de su uso no es directamente proporcional al aumento del grado sino que por el contrario se reduce. Así las cosas, este pasa de 2.7% en séptimo a 1.4 en undécimo.

De igual forma, se destaca que si bien el uso de inhalables es ha venido creciendo en los establecimientos educativos públicas y reduciéndose en los privados, el consumo es equivalente y existe sólo una diferencia de 0.3% si se comparan con los datos de 2016.

¹³¹ Ibídem, pág. 173-175

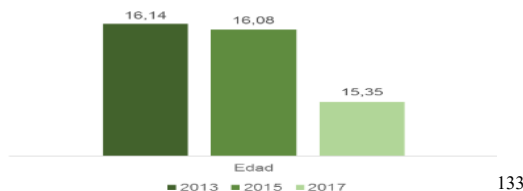
Encuesta realizada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), de la Universidad de los Andes¹³²

También es importante traer a colación los resultados de la encuesta sobre consumo de drogas en Bogotá publicado en enero de 2018 por el CESED y el cual evidencia también el crecimiento del consumo en la ciudad, así como la reducción de la edad del primer consumo.

Alcohol

En el caso del alcohol la encuesta evidencia que el consumo de esta sustancia se inicia a una edad cada vez menor siendo esta los 15 años. Es importante resalta que en cuatro años el inicio del consumo cayó un año lo que hace que los menores hoy consuman alcohol a una edad más temprana que aquellos menores del lustro pasado.

Gráfica 4. Edad de primer consumo alcohol

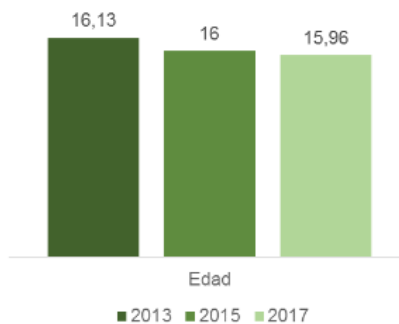


133

Tabaco

También llama la atención la disminución de la edad del primer consumo de tabaco la cual se mantiene estable en comparación con la encuesta realizada en 2015 ubicándose en los 15.96 años pero reduciéndose frente a la edad del primer consumo de 2013.

Gráfica 7. Edad de primer consumo de tabaco



134

Marihuana

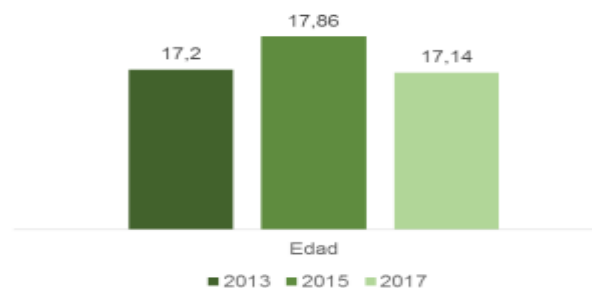
¹³² CESES, Boletín No. 7. Enero de 2018.
<https://economia.uniandes.edu.co/images/archivos/pdfs/CESED/Boletin7CESED.pdf>

¹³³ Ibídem, pág 2

¹³⁴ Ibídem, pág 3

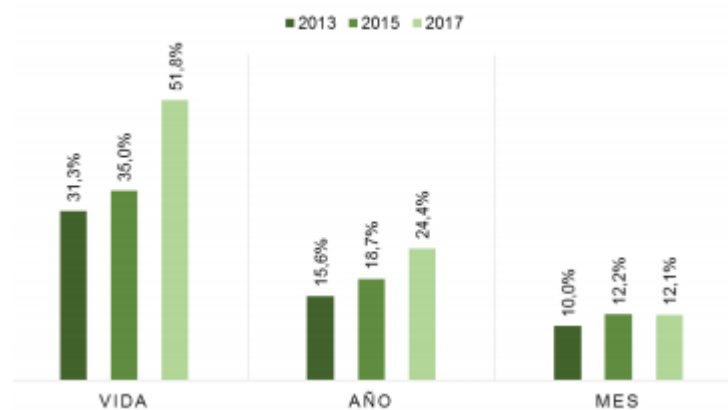
En cuanto a la edad de consumo de la marihuana se tiene que esta aumentó de 17.2% en 2013 a 17.86% en 2015 pero cayó significativamente para 2017 llegando a 17.14%. Así mismo, se evidencia que la prevalencia del consumo de marihuana ha venido aumentando tanto en los que han consumido alguna vez en su vida, los que han consumido el último año y quienes han consumido el último mes (tendencia que se mantuvo estable entre 2015 y 2017). Por otra parte, causa preocupación que en 2017 la mitad de los encuestados manifestó haber consumido marihuana en alguna vez en su vida.

Gráfica 10. Edad de primer consumo de marihuana



135

Gráfica 9. Prevalencias consumo de marihuana



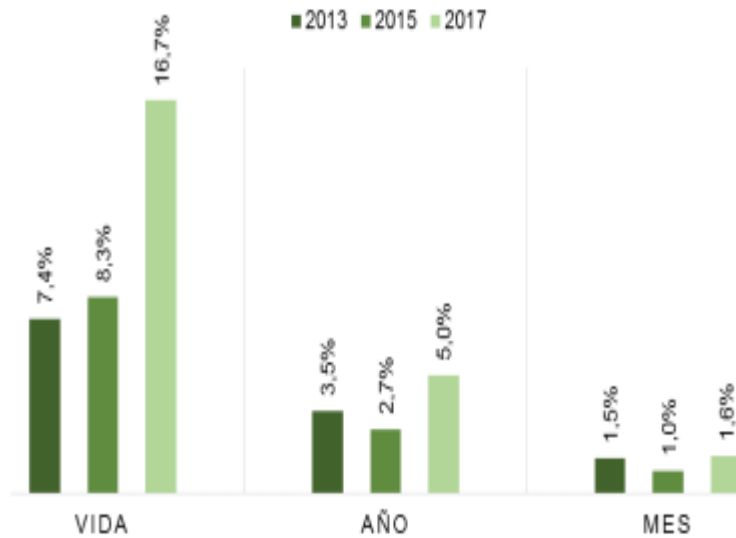
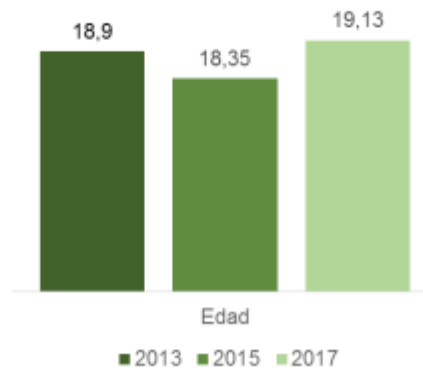
136

Cocaína

El comportamiento de la Cocaína se asimila al de la marihuana en el entendido que este ha tenido un incremento en cuanto a su prevalencia entre 2015 y 2017. Sin embargo, llama la atención que frente al consumo de cocaína hubo un aumento en la edad del primer consumo al pasar de los 18.35 años en 2015 a 19.13 en 2017. Sin embargo, aumentó radicalmente el número de personas que han consumido cocaína una vez en la vida al pasar del 8.3% en 2015 al 16.7% en 2017 como se desprende de las siguientes gráficas:

¹³⁵ Ibídem, pág 4.

¹³⁶ Ibídem.

Gráfica 12. Prevalencias consumo de cocaína**Gráfica 13. Edad de primer consumo de cocaína**

137

Así las cosas, del estudio del CESED se concluye que ha habido una disminución en la edad de consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco y la marihuana, así como un incremento de su prevalencia con lo cual es necesario que el distrito tome cartas en el asunto de forma tal que se prevenga su consumo.

a. Sobre El microtráfico que acecha los parques y centros educativos en el Distrito.

Escudados en la dosis mínima los llamados jíbaros o traficantes de drogas han decidido no sólo vender sustancias psicoactivas a los adictos sino conquistar nuevos mercados induciendo al consumo a nuevas personas, esta vez a nuestros niños, niñas y adolescentes. Así las cosas, estos criminales buscan atrapar a los

¹³⁷ Ibidem, pág. 5.

menores de edad en las redes de tráfico de la ciudad al volverlos consumidores y, en algunos casos, colaboradores.

La situación ha sido tan preocupante que el distrito priorizó 58 colegios de todas las localidades para evitar que las bandas de microtráfico perjudiquen a los menores:

*“La situación que se presenta en la ciudad ha despertado la preocupación por parte de las autoridades, quienes revelaron la presencia de **grandes bandas de microtráfico de droga en las inmediaciones de los colegios**. El objetivo de los delincuentes sería **reclutar a menores** para poder distribuir los estupefacientes al interior de las instituciones.”*¹³⁸

Para lograr su cometido han desarrollado técnicas macabras con las cuales se busca instrumentalizar a los menores de edad para infiltrar los colegios y crear mercados de estupefacientes al interior de las instituciones educativas tal y como lo han denunciado diferentes medios de comunicación:

“Una de las modalidades más perversa es reclutar a menores a los que matriculan en colegios y cuya función es vender droga en el centro educativo infiltrado. “Ellos son estudiantes problema, no van a estudiar, solo van a clase para expender la droga. Cuando son descubiertos y expulsados los matriculan en otro colegio”, *señalaron* *investigadores.*

*Para inducir a los menores se usan dulces, chicles y galletas con droga que son entregadas de forma gratuita. Se identificó por ejemplo a ‘los Gatilleros’ que, en Soacha, vendían en colegios y ‘los Gomeles’ que en Engativá ofrecían la prueba gratis de la droga. Esta es una de las razones por las que el fiscal Néstor Humberto Martínez propuso al Congreso penas de prisión de entre 10 y 20 años a quienes suministren droga a menores de edad a través de productos engañosos.”*¹³⁹

Y es que los delincuentes dedicados al narcomenudeo se sienten tan a sus anchas que han ingresado a los mismos salones de clase buscando cada vez niños, niñas de edades cada vez más pequeñas.

*“Afortunadamente en niños de 9-10 años no es un fenómeno tan grande, pero sí estamos encontrando cada vez más casos en niños de primaria. **En mi concepto, la edad crítica está entre los 13 y los 19**”, explica Jorge Quiteño Londoño del Consejo Nacional de Prevención Contra la Droga.”*¹⁴⁰

¹³⁸ RCN RADIO, Más de 50 colegios intervenidos en Bogotá para atacar el consumo de drogas. 29 de julio de 2018. Tomado de la página web: <https://www.rcnradio.com/bogota/mas-de-50-colegios-intervenidos-en-bogota-para-atacar-consumo-de-drogas>

¹³⁹ EL TIEMPO, Caballo de Troya en los colegios. 08 de septiembre de 2018. Tomado de la página web: <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/droga-en-los-colegios-infiltran-a-estudiantes-para-comercializar-265934>

¹⁴⁰ NOTICIAS CARACOL, “EL jibaro está dentro del colegio”: alarma por 70 nuevos tipos de droga que ofrecen a estudiantes”. 7 de mayo de 2019. Tomado de la página web: <https://noticias.caracoltv.com/salud/bogota/el-jibaro-esta-dentro-del-colegio-alarma-por-70-nuevos-tipos-de-droga-que-ofrecen-estudiantes>

Tan grande se ha vuelto el negocio que el pasado mes de abril las autoridades capturaron a 328 personas en todo el país que traficaban drogas en las inmediaciones de 68 colegios y 9 universidades del país.¹⁴¹

Pero si los colegios están siendo sitiados por el microtráfico los parques no son la excepción. Los parques vecinales de Bogotá son utilizados por los ciudadanos para tener momentos de esparcimiento, practicar algún deporte, y sacar a jugar a los niños. Muchos de estos parques se han visto tomados por expendedores de drogas y consumidores afectando la tranquilidad de los padres de familia quienes ven con preocupación cómo los menores son expuestos al olor y al humo de sustancias como la marihuana.

En algunos casos, los vecinos de los barrios se han unido para crear frentes de seguridad para atacar el consumo de drogas en sus parques y han instaurado cámaras o alarmas y trabajado de la mano de policía buscando el disfrute de este tipo de equipamientos por parte de los menores y sus familias. Este es el caso de barrios como Bonanza, Álamos, Los Ángeles y otros barrios en el occidente de Bogotá.¹⁴²

i. Estados Unidos.

En Estados Unidos las Zonas Libres de Drogas se han utilizado como una herramienta clave en la lucha contra este tipo de sustancias. El porte y consumo de drogas en estas zonas acarrea al infractor a una pena más severa que si la hiciera en cualquier otra zona. Las penas pueden ser de tipo penal o administrativo dependiendo del Estado y originalmente se establecieron cerca a los colegios y demás centros educativos, pero luego se expandieron a otros lugares como alrededor de las iglesias, guarderías parques y centros comerciales. Estas zonas varían su tamaño dependiendo de la legislación estatal:

	State	Percent Covered by Drug-Free Zones	Total Area Covered ¹ (Square Miles)
1.	Alabama	73%	38,267
2.	South Carolina	18%	5,764
3.	Arizona	17%	19,378
4.	Pennsylvania	13%	5,987
5.	Connecticut	11%	610
6.	Florida	10%	6,576
7.	Mississippi	10%	4,844
8.	Utah	10%	8,490
9.	Nevada	9%	9,952
10.	Rhode Island	6%	93

143

¹⁴¹ EL ESPECTADOR, Capturan 328 personas por tráfico de droga en colegios y universidades de Colombia. 2 de abril de 2019. Tomado de la página web: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/capturan-328-personas-por-trafico-de-droga-en-colegios-y-universidades-de-colombia-articulo-848339>

¹⁴² NOTICIAS CARACOL, La estrategia de la comunidad de un barrio en Bogotá para combatir consumo de drogas en los parques. 8 de junio de 2019. Disponible en la página web: <https://noticias.caracoltv.com/bogota/la-estrategia-de-la-comunidad-de-un-barrio-en-bogota-para-combatir-consumo-de-drogas-en-los-parques>

¹⁴³ PROJECT KNOW, Analyzing Drug Free Zones across America, Disponible en la página web: <https://www.projectknow.com/discover/analyzing-drug-free-zones-across-america/>

Ámsterdam.

Incluso la ciudad de Amsterdam, famosa por su política suave o no represiva en materia de drogas y por la posibilidad de consumir cannabis en los *Cofeeshops*, ha establecido medidas para vetar la venta y consumo cerca a los colegios. Así las cosas, en 2017 fue noticia¹⁴⁴ un fallo de una corte holandesa que estableció que la alcaldía podía regular los horarios de apertura de los *coffeshops* que se encontraran a 250 metros de las escuelas de forma tal que sólo pudieran vender cannabis en las tardes después de que los estudiantes hubieran salido de los colegios.

Portugal.

Portugal es reseñado como uno de los países hito en materia de drogas, particularmente del uso de estupefacientes por su enfoque de salud pública. Hasta el año 2001 el consumo de drogas era considerado como un delito castigable con multa o prisión de acuerdo con la cantidad incautada. La ley 30 de 2000 despenalizó el uso y la posesión de las drogas ilícitas y una ley posterior de 2001 mantuvo el estatus de ilegalidad de todas las drogas que se utilizaran sin autorización, pero cambió el modelo de sanciones para los consumidores. Ahora, la persona que es encontrada en posesión de una determinada cantidad de drogas, que no exceda la cantidad de abastecimiento para 10 días, y si no hay sospecha de tráfico, es remitida a un comité local donde es atendido por un abogado, un doctor y un asistente social quienes evalúan la situación de adicción del consumidor y promueven su rehabilitación.

Así las cosas, puede verse que si bien se permite el uso individual de drogas no se permite su consumo en espacio público ya que este se presupone como zona libre de drogas.¹⁴⁵

Es entonces que, si bien el establecer Zonas Libres de Drogas no erradicará per se ni milagrosamente el consumo de estas sustancias en los menores si será una barrera de protección en contra de los expendedores y garantizará que los parques y entornos escolares sean espacios protegidos para el sano disfrute de toda la sociedad. Si bien la administración distrital deberá adoptar diferentes medidas tendientes a procurar los menores se desarrollen en ambientes y vidas libres de drogas mediante la correcta ocupación del tiempo libre de los menores (*como se ha probado exitosamente en otras latitudes*), este proyecto es un avance significativo en materia de protección de la infancia y la adolescencia

De las Zonas Libre de Drogas en el Distrito

La sentencia C – 127 de 2.023 del 27 de abril del presente año, sobre la cual se funda la presente medida restrictiva, que declaró exequibles los numerales 13 y 14 del parágrafo 2º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, ordeno, además, lo que sigue:

“Cuarto. ORDENAR al Gobierno nacional que, si no lo ha hecho, dentro de los 3 meses contados a partir de la notificación de esta decisión, expida un protocolo de aplicación de las normas estudiadas por la Corte. Aquel, deberá enfatizar en: i) la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; ii) el respeto por los derechos fundamentales de los consumidores; iii) la razonabilidad

¹⁴⁴ NEWS 24, Amsterdam can curb hours on cannabis cafes near school. Noviembre 2017. Disponible en: <https://www.news24.com/World/News/amsterdam-can-curb-hours-on-cannabis-cafes-near-schools-20171115>

¹⁴⁵ EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION. Country Legal Profiles, Portugal. Disponible en: <http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&country=PT>

y la proporcionalidad de la actuación policiva para sancionar el porte y el consumo propio y con fines médicos de sustancias psicoactivas en los parques o zonas o áreas del espacio público determinadas por los concejos distritales y municipales en los planes o esquemas de ordenamiento territorial; iv) el respeto por la autonomía territorial y el autogobierno; v) la protección del carácter diverso y plural de la nación; y, vi) la observancia del debido proceso, la aplicación de los procedimientos sancionatorios y la necesidad y carga de la prueba que siempre recae en el funcionario que impone la sanción. En cualquier caso, dicho documento estará orientado en que la actividad material de policía se gobierna por un absoluto principio de interdicción de la arbitrariedad.”

El fundamento de la anterior decisión fue el siguiente:

En este punto, la Corte resaltó la pertinencia constitucional de observar el principio de territorialidad, para que a través de regulaciones locales se precisen las condiciones para la aplicación razonable y proporcionada de las normas estudiadas, conforme las especificidades de los territorios y las comunidades. Bajo ese entendido, la regulación que deben expedir las autoridades de policía, en los distintos niveles, debe hacerse en los estrictos términos de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1801 de 2016. En concreto, el poder de policía que tiene el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de incumplimiento. De igual forma, el poder subsidiario y residual de policía que tienen las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, así como los demás concejos distritales y municipales, respectivamente, para dictar normas que no tengan reserva legal y no impliquen limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas por el Legislador. Tampoco pueden establecer medios o medidas correctivas diferentes a las establecidas en la ley.

En ejercicio del Poder Subsidiario y Residual de Policía de que tratan los artículos 11; 12 y 13 de la ley 1801 de 2016, resulta necesario, adecuado y proporcional determinar en qué espacios de interés público aplica la medida restrictiva que acá se impone. Al respecto, el Decreto 555 de 2.021 es claro en señalar los espacios públicos que pueden ser objeto de regulación en el distrito capital, conforme lo pretendido.

A continuación, las normas que regulan los espacios públicos peatonales y para el encuentro; parques, centros culturales y recreativos en el POT Decreto 555 de 2021:

SECCIÓN 1. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL PARA EL ENCUENTRO

Artículo 89. Política Distrital de Espacio Público y objetivos del Sistema de Espacio Público Peatonal para el Encuentro. Este Plan establece los mecanismos que permitan aumentar la oferta cuantitativa y cualitativa de espacio público en la ciudad, promoviendo su valoración ciudadana, garantizando su uso, goce y disfrute para todos. Reforzando su carácter estructurante como configurador del territorio y su valoración ciudadana.

Con tal propósito, el Sistema de Espacio Público Peatonal para el Encuentro contempla los siguientes objetivos específicos:

1. Aumentar el Espacio Público con condiciones adecuadas y equitativamente en todo el territorio distrital.

2. Restituir jurídica, físico-espacial, ambiental, social y culturalmente, los espacios públicos en condición inadecuada para su uso, goce y disfrute por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta el acceso universal y la igualdad de oportunidades.

3. Aumentar la calidad ambiental del espacio público para reverdecer a Bogotá, adaptarse y mitigar el cambio climático.

4. Consolidar los lineamientos e instrumentos necesarios para la sostenibilidad del espacio público y la gestión e implementación del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro.

Artículo 90. Componentes del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro. Está constituido por áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados en suelo urbano y rural cuyo propósito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro social, la recreación, el deporte, la cultura, la contemplación y el contacto con la naturaleza, que permiten garantizar una circulación y recorridos seguros, autónomos y confortables. Está conformado por franjas de circulación peatonal, franjas de paisajismo y calidad urbana, parques, plazas, plazoletas, elementos complementarios y elementos privados afectos al uso público.

Las disposiciones aplicables al presente sistema se complementan con lo señalado en la infraestructura peatonal que se desarrolla en La Sección “Sistema de Espacio Público Peatonal Para el Encuentro” de Espacio Público para la Movilidad del presente Plan.

Hacen parte de este sistema los elementos que se encuentran delimitados en el Mapa CU-4.1. “*Sistema de espacio público peatonal y para el encuentro*” y en el Anexo “*Inventario de Espacio Público Peatonal y Para el Encuentro*” y todos aquellos que se incorporen en el inventario de espacio público como producto de procesos de urbanización, legalización y demás actuaciones distritales.

Este sistema se organiza a partir de los siguientes elementos:

1. Parques de la Red Estructurante. Corresponden a los denominados en el inventario como Parques Metropolitanos y Zonales y en general, aquellos de más de una hectárea que proveen una oferta cualificada para el aprovechamiento del tiempo libre que dan soporte a la escala regional y distrital, no solo en términos de las interacciones humanas que ahí tienen lugar, sino también por su aporte a la conectividad ambiental y ecosistémica del territorio bogotano.

2. Parques de la Red de Proximidad. Son principalmente aquellos de menos de una hectárea, que proveen una oferta desconcentrada y diversa de actividades de aprovechamiento del tiempo libre a escala local, atendiendo criterios de proximidad.

3. Plazas. Espacios libres y abiertos y bordeados por edificaciones. Son espacios de encuentro estructurantes del trazado urbano en los que se desarrollan actividades cívicas de convivencia ciudadana, manifestaciones culturales y políticas y corresponden a las plazas fundacionales y a aquellas que tienen reconocimiento y significado para los habitantes de Bogotá.

4. Plazoletas. Son espacios libres y abiertos con un área menor a la de las plazas, y con mayores porcentajes de endurecimiento con respecto a los parques. Generalmente son espacios de tránsito, encuentro y descanso de peatones, de corta permanencia, a lo largo de los itinerarios de proximidad.

5. Zonas verdes. Las zonas verdes son espacios abiertos y empedrados de menos de 400 m², de dominio o uso público, compuestos de jardines, arbustos y árboles, que se destinan al ocio y la contemplación y que contribuyen a la generación de valores paisajísticos y ambientales en el Distrito, pero que por sus dimensiones no conforman parques. Ofrecen espacios para el desarrollo de actividades de esparcimiento que no requieren de instalaciones o dotaciones especializadas, por lo que serán empedradas y libres de edificaciones permanentes.

6. Espacios públicos de encuentro rural. Son espacios abiertos, multifuncionales, que permiten la congregación de las comunidades rurales en actividades recreativas, deportivas, culturales, cívicas, comerciales y las que demanden las dinámicas locales, conformando nodos junto con los equipamientos rurales.

7. Espacios privados de uso público para el encuentro. Son el conjunto de espacios privados afectos al uso público y que, a través de soluciones arquitectónicas y paisajísticas organizan la transición entre el espacio público y las edificaciones privadas. Pueden ser terrazas, galerías, cubiertas, culatas, fachadas, antejardines, y demás áreas privadas afectas al uso público, que hacen parte del paisaje urbano, aportando con sus condiciones y características a consolidar la imagen y el funcionamiento del espacio público para el encuentro.

8. Elementos complementarios. Objetos o elementos naturales o contruidos que hacen parte del diseño integral de las áreas, cualifican el sistema y ayudan a garantizar su operación y funcionamiento. Son parte de estos elementos el mobiliario, la cobertura vegetal, la señalización, los monumentos conmemorativos y los objetos artísticos.

Artículo 91. Estrategias del Sistema de Espacio Público Peatonal para el Encuentro. Entendiendo la función social del urbanismo y reiterando la visión del espacio público como elemento estructurante del territorio y por tanto de la ciudad, son estrategias del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro las siguientes:

1. Generación de nuevo espacio público, mediante parques estructurantes y de proximidad, para incrementar la cobertura con equilibrio territorial de los espacios públicos para el encuentro, atendiendo el déficit cuantitativo de Espacio Público, y las claras desigualdades en términos de equidad territorial en la distribución de esos espacios públicos, lo que causa inequidad entre las diferentes Unidades de Planeamiento Local de la ciudad en relación con el acceso a espacios más y mejores espacios para su uso, goce, disfrute y aprovechamiento de toda la ciudadanía, a través de la disminución del déficit de Espacio Público y las condiciones de inequidad territorial.

2. Cualificación, integración y conectividad del sistema con las demás estructuras territoriales, para propiciar experiencias cualitativas, seguras y corresponsables del espacio público.

3. Renaturalización de los espacios públicos peatonales y para el encuentro público con el fin de cualificar sus condiciones ambientales y de confort, mitigar impactos ambientales que afectan directamente a la población, así como de reducir el nivel de vulnerabilidad frente amenazas socio-naturales y las amenazas por el cambio climático, generando resiliencia.

4. Sostenibilidad y gestión orientada a salvaguardar los valores, calidades y las formas de uso del espacio público para su aprovechamiento, goce y disfrute con enfoque de género. Reconociendo la necesidad de articulación interinstitucional para la gestión, seguimiento y evaluación de las acciones sobre el espacio público, que identifiquen instrumentos y normas que permiten alcanzar una gestión integral del espacio público.

(...)

SECCIÓN 3. SISTEMA DEL CUIDADO Y DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo 94. Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales. Es el conjunto de equipamientos, espacios, edificaciones, instalaciones o construcciones temporales, infraestructura o unidades móviles, donde se prestan los diferentes servicios de cuidado y servicios sociales que responden a las necesidades de la población de manera diferencial, con el fin de permitir su inclusión y participación social en condiciones de igualdad en Bogotá. Resolución 1325 de 2023 Secretaría de Educación del Distrito - SED

Con este Sistema se territorializa el cuidado en el POT, garantizando suficientes equipamientos y correctamente distribuidos en el territorio para responder a las demandas locales y a los recorridos poligonales que realizan cotidianamente las personas cuidadoras en Bogotá.

Este Sistema está compuesto por:

1. Sistema Distrital del Cuidado. Es un conjunto de redes que articulan equipamientos y servicios sociales para reconocer, redistribuir y reducir el tiempo dedicado, especialmente por mujeres, al trabajo de cuidado no remunerado. Su objetivo es devolverles a las personas cuidadoras tiempo para su descanso y respiro, formación, generación de ingresos, goce de una vida libre de violencias y promoción de su autonomía. Los equipamientos y servicios del sistema de cuidado están conformados principal, pero no exclusivamente, por jardines infantiles, colegios, parques, bibliotecas, centros de desarrollo comunitario, centros de salud, hospitales, casas de igualdad de oportunidades, centros de atención a personas mayores y con discapacidad y centros felicidad, agrupados en manzanas del cuidado en UPL, unidades móviles en zonas rurales y urbanas o en equipamientos que, aunque dispersos, operan articuladamente. El sistema distrital de cuidado ofrece tres tipos de servicios: de cuidado a personas cuidadoras (respiro, formación y generación de ingresos), de cuidado a niños y niñas, personas con discapacidad y personas mayores (educación, recreación, deporte, cultura, cuidado temporal, cuidado domiciliario y cuidado institucionalizado) y de transformación cultural para erradicar el machismo y promover masculinidades cuidadoras y corresponsables.

Abarca los siguientes servicios:

a. **Servicios del cuidado:**

i. **Educación primera infancia, preescolar, básica y media.** Aquellos destinados a la formación intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su integración a la sociedad, asociados a los niveles de educación formal determinados por la Ley 115 de 1994 o la norma que la modifique o sustituya, incluyendo los espacios destinados para la prestación complementaria de servicios de bienestar que permitan el funcionamiento del servicio educativo y las edificaciones administrativas que se encuentren dentro del mismo predio o colinden con él.

ii. **Educación superior, educación para el trabajo, desarrollo y talento humano, y educación técnica, tecnológica, para la ciencia e innovación.** Aquellos destinados a la formación académica de población joven y adulta, incluyendo: instituciones de educación superior; educación para el trabajo y desarrollo Humano; centros tecnológicos y técnicos; y escuelas de formación artística, así como los espacios destinados para la prestación complementaria de servicios de bienestar que permitan el funcionamiento del servicio educativo, entre ellos residencias estudiantiles. No se consideran como servicios de educación los que alberguen enseñanza automovilística, estética, idiomas, gastronomía, turismo, o instituciones de educación abierta, a distancia o virtual, que no incluyan

ambientes de aprendizaje según lo definido en la NTC 4595 de 2020 o la norma que le modifique, sustituya o haga sus veces.

iii. **Salud con enfoque social y resolutivo.** Servicios destinados a promover el cuidado de la salud, prevenir, diagnosticar, recuperar y rehabilitar la salud física y mental de la población, mediante la integración de las acciones en salud individuales y colectivas, acorde a planes de beneficio en salud vigentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, habilitados y ofertados en equipamientos en armonía con el entorno los cuales cuentan con capacidad instalada para brindar servicios ambulatorios de consulta externa, urgencias, apoyo diagnóstico y terapéutico, así como servicios hospitalarios de internación y quirúrgicos, de diversos niveles de complejidad, en las diferentes modalidades de prestación de servicios intramurales, extramurales y de telesalud, a fin de garantizar el desarrollo de la prestación de los servicios de salud integrales, con enfoque diferencial, poblacional y de género en el contexto del modelo de atención primaria que reconozca y aborde las acciones en salud mediante estrategias territoriales para modificar los determinantes en salud. No se consideran como servicios de salud con enfoque social y resolutivo cuando se preste el servicio dirigido para o con animales

iv. **Integración Social.** Aquellos destinados al desarrollo promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, diferenciales, de género, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza, vulnerabilidad, en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social. Se incluyen los servicios sociales y servicios sociales de emergencia para la atención de las personas mayores que se prestan en espacios como, los clubes de personas mayores, los centros día, de jóvenes; comedores comunitarios especializados, centros de corta y larga estancia, y centros de atención y asistencia a víctimas del conflicto armado y excombatientes. Los centros de protección a la persona mayor son equipamientos especializados que incluyen alojamiento y espacios dirigidos y adecuados a este tipo de población, sin que pueden estar sometidos a régimen de propiedad horizontal.

b. **Igualdad de Oportunidades.** Aquellos destinados a garantizar y proteger derechos y equidad, y acceso a oportunidades con enfoque diferencial y de género, incluyendo aquellos para el empoderamiento de las mujeres, los que se prestan en casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, casas de todas y centros de atención a personas que realicen actividades sexuales pagadas, en todo caso no asociadas al área comunal privada de una edificación.

c. **Cultura.** Aquellos destinados al desarrollo de actividades y prácticas culturales a la custodia, transmisión y difusión de conocimientos y fomento de la cultura y el arte, tales como la danza, el teatro, la música, la pintura, la escultura, incluyendo los de propagación cultural y científica (museos, centros culturales y artísticos, salas de exhibición, galerías, teatros, auditorios, planetarios, archivos generales científicos y artísticos, casas de la cultura, entre otros) y los de información y memoria: bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, centros de documentación, entre otros.

d. **Recreación y Deporte.** Espacios destinados a la práctica deportiva, al ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas, así como a los espectáculos con propósito recreativo, incluyendo los centros de alto rendimiento, coliseos y estadios, polideportivos o espacios deportivos convencionales cubiertos o descubiertos de uso público, y los clubes campestres y deportivos públicos o privados. No se incluyen en los servicios sociales de recreación y deporte los gimnasios privados, e instalaciones privadas cubiertas, salvo los clubes y centros recreo deportivos privados.

2. Servicios Sociales. Son aquellos, que, a partir de acciones integradas, buscan atender las necesidades sociales identificadas en las personas, familias y comunidades, en el marco de la protección social y la integración territorial,

poblacional y diferencial, y con criterios de proximidad a las áreas residenciales, con el fin de aportar progresivamente a la superación de condiciones de vulnerabilidad, ampliación de capacidades, generación de oportunidades y acciones de corresponsabilidad.

CAPÍTULO 4
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DEL CUIDADO
SUBCAPÍTULO 1
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL PARA EL ENCUENTRO
SECCIÓN 1
NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES PARA EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL
PARA EL ENCUENTRO

Artículo 121. Cobertura de espacio público Atendiendo a la estrategia de generación de espacio público peatonal y para el encuentro, se busca incrementar el espacio público efectivo en el largo plazo del POT, para lo cual, se implementarán las siguientes acciones:

1. Generación de espacio público a través de programas y proyectos señalados en el presente Plan.

1.1 Parques de borde. Se delimitan áreas a habilitar como zonas de uso público en los bordes del área urbana y que se configuran como espacios de transición y articulación que sirven a las personas que habitan en la ciudad y se articulan con otros componentes de la Estructura Ecológica Principal, de acuerdo con el Mapa n.º CG - 3.2 “*Estructura Ecológica Principal*”. Se encuentran conformados por:

- a. Red de Parques del Río Bogotá: i) Parque Lineal del Río Bogotá y ii) Áreas complementarias para la adaptación al cambio climático.
- b. Parque de Borde de los Cerros Orientales.
- c. Parque de Borde de Cerro Seco.

La descripción, zonificación y régimen de usos de los parques de borde es la indicada en el Subcapítulo 1 – Estructura Ecológica Principal del Componente General del presente Plan.

1.2. Generación de parques de proximidad en UPL deficitarias. Se delimitan áreas a habilitar como zonas de uso público localizados en las Unidades de Planeamiento Local que presentan los mayores déficits cuantitativos y cualitativos de espacio público para reducir los desequilibrios existentes mediante la estrategia de ámbitos integrales de cuidado. Se identifican en el Mapa n.º C-U 4.1 “*Sistema de Espacio Público peatonal y para el Encuentro*”.

2. Generación de espacio público a través de acciones y actuaciones urbanísticas. Las cesiones para espacio público derivadas de las acciones y actuaciones urbanísticas contempladas en los instrumentos definidos en el presente Plan y de acuerdo con lo establecido en las obligaciones urbanísticas aplicables a cada tratamiento.

Las cesiones para espacio público que deben cumplir los proyectos que se desarrollen en el Distrito capital corresponderán con el establecido en los respectivos tratamientos urbanísticos que les aplique.

3. Transformación de espacio público total en espacio público peatonal y para el encuentro. Realizar acciones con el fin de transformar elementos que conforman el inventario de espacio público de Bogotá pero que no constituyen espacio público efectivo por su naturaleza. De esta manera, se busca que mediante diferentes tipos de intervenciones estos espacios califiquen para ser concebidos como espacio público peatonal y para el encuentro.

Para lo anterior, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

- a. Ser espacios públicos de propiedad del Distrito.
- b. Contar con condiciones de accesibilidad universal.
- b.(sic) Estar habilitados para el uso, goce y disfrute público.
- c. Garantizar la permanencia y el encuentro ciudadano.

Artículo 122. Criterios de diseño para el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. Atendiendo la estrategia de cualificación, integración y conectividad del sistema con las demás estructuras territoriales, se propiciará recorridos seguros, accesibles, autónomos, sostenibles, limpios y equitativos, con garantía de accesibilidad universal y calidad para todas las personas que hacen uso del espacio público, en especial para las mujeres, los niños y las niñas, las personas mayores y personas con discapacidad, se deberán seguir los siguientes criterios de diseño:

1. Accesibilidad. El espacio público peatonal y para el encuentro debe integrarse con el entorno, ser continuo, accesible y seguro, permitiendo el libre desplazamiento de la ciudadanía de la siguiente manera:

- a. Se deben garantizar condiciones físicas adecuadas para la circulación segura, incluyente, autónoma y confortable de los usuarios, independientemente de su edad y capacidades cognitivas o físicas.
- b. Se debe garantizar la accesibilidad universal en todos los espacios públicos, inclusive en zonas con condiciones topográficas de alta pendiente y desarrollos en ladera, para lo cual se deberán realizar las adecuaciones necesarias del terreno.
- c. Se debe garantizar la conectividad y continuidad de las circulaciones peatonales, tanto en su trazado como en sus superficies, sin interrupción por obstáculos y facilitando el acceso a puntos de encuentro, actividad o aglomeración de personas, para permitir recorridos seguros, confortables y directos.
- d. La administración distrital concertará con la nación la intervención y manejo de cruces peatonales con corredores férreos para garantizar la continuidad y conectividad de las circulaciones peatonales con accesibilidad universal.
- e. Se debe incluir señalización clara, visible y de fácil comprensión, con lenguaje incluyente.
- f. Se prohíben los cerramientos de los elementos que conforman el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. Excepcionalmente se permitirá el cerramiento de la infraestructura deportiva al interior de los parques de la red estructurante cuando se requiera para su correcto funcionamiento. Para los parques existentes que cuenten con

cerramiento a la fecha de expedición del presente plan se deberá prever la eliminación paulatina del cerramiento atendiendo los criterios de vitalidad, conforme a la programación de su mantenimiento, diseño y/o construcción.

g. La intervención de los espacios públicos peatonales y para el encuentro propenderá por realizarse de paramento a paramento, a fin de garantizar su articulación con el espacio público para la movilidad colindante, cruces seguros, continuidad de la circulación peatonal y conexión con el entorno.

h. La infraestructura peatonal debe minimizar los riesgos y conflictos con elementos externos como tráfico vehicular, flujo de ciclistas, mobiliario, siendo fundamental asegurar la velocidad adecuada según el contexto y cuando se presenten conflictos.

2. Vitalidad. Deben contemplarse diseños que promuevan la vitalidad para que los espacios permanezcan activos en el mayor rango horario posible a fin de garantizar su control social. Los espacios deben ser versátiles, para permitir el desarrollo de servicios conexos a las actividades recreativas, deportivas, culturales de manera permanente o temporal. Para esto:

a. Los diseños deben ser funcionales, innovadores e incluyentes y responder a las expectativas y necesidades de la población y del contexto urbano.

b. La infraestructura peatonal debe ser cómoda para fomentar los desplazamientos a pie, reconocer capacidades diferenciales, y propiciar el cambio modal en los recorridos de proximidad y la integración con el transporte público.

c. Se pueden habilitar accesos peatonales a los predios públicos y privados a través de cualquiera de los elementos del sistema, mediante la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas, este licenciamiento estará condicionado a la habilitación de la infraestructura peatonal que permita el acceso a todos los predios colindantes con el espacio público. En la correspondiente licencia de construcción, el Curador Urbano autorizará la intervención de la infraestructura peatonal, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo Intervención y Ocupación del Espacio Público del presente plan.

c. (sic) Se deben generar fachadas activas en los primeros pisos de las edificaciones contiguas a las áreas del sistema, mediante accesos y ventanas translúcidas, que permitan la integración visual entre el espacio público y los predios privados.

d. Se priorizará la localización de las áreas de mitigación de los servicios sociales y del cuidado contigua a espacios públicos de encuentro.

e. Los espacios deben contar con el mobiliario necesario para su correcto funcionamiento, fomentando la permanencia y cualificación de los recorridos peatonales.

f. Se deben otorgar soluciones de diseño que incluyan a las personas con discapacidad y los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

g. Se deben incorporar dotaciones para la presencia de caninos o felinos domésticos o mascotas en zonas delimitadas dentro del diseño de los espacios públicos de encuentro.

h. La localización de servicios conexos en los elementos del Sistema de Espacio Público Peatonal y para el Encuentro deberá ser compatible con la naturaleza y función de los espacios públicos, en ningún caso podrá obstaculizar la circulación peatonal y libre tránsito y se regulará por el Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico.

i. Se deberá priorizar la localización de zonas de actividad y permanencia en los bordes de los parques existentes donde se elimine el cerramiento.

j. Se implementarán acciones de urbanismo táctico y acupuntura urbana con el fin de cualificar física y socialmente los espacios públicos, mediante intervenciones participativas con la comunidad.

k. Se promoverá la participación ciudadana incidente en el diseño e intervención de los espacios públicos con el fin de fomentar la apropiación y sostenibilidad de los espacios en el tiempo. Por lo tanto, en el marco de los procesos de participación para la reglamentación de las UPL se deberá realizar un balance de la oferta recreativa y deportiva, a fin de establecer demandas de reconversión de dicha oferta para garantizar condiciones de equilibrio y diversidad en las dotaciones de los espacios públicos peatonales y para el encuentro

3. Seguridad. Debe promoverse la creación de ambientes con una correcta iluminación y visuales continuas entre el espacio público y el espacio privado, para lo cual:

a. La iluminación debe proporcionar condiciones de visibilidad y seguridad con eficiencia lumínica, que permita usar el espacio en el rango más amplio de horario, especialmente en las noches. Se promoverá el uso de tecnología y energías limpias o renovables para los sistemas de iluminación del espacio público.

b. El diseño de la iluminación deberá tener en cuenta la conservación y no afectación del hábitat de fauna presente en el espacio público.

c. Se permite la apertura y acceso de las fachadas cerradas y culatas colindantes con el espacio público peatonal y para el encuentro, para reducir los focos de inseguridad y favorecer la relación visual interior- exterior, o en su defecto estas deberán ser tratadas con acabados que permitan su articulación con el entorno. Para parques, plazas y plazoletas los accesos señalados serán únicamente peatonales.

d. Se debe garantizar el control visual de los espacios mediante la definición de rutas seguras entre dos o más puntos, con iluminación dirigida, señalización clara, mobiliario que apoye la presencia natural de personas y cobertura vegetal y eliminando los obstáculos que bloquean, entorpecen o limitan la línea de visión.

e. Los criterios de diseño del espacio público peatonal para el encuentro deben generar actuaciones integrales para la creación de entornos seguros, desde la perspectiva de género y de las poblaciones y comunidades diversas con mayor grado de vulnerabilidad.

4. Conectividad ambiental. El diseño de los espacios públicos peatonales y para el encuentro debe aportar a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, incrementando las coberturas verdes, mejorando la permeabilidad del suelo, regulando el ciclo hidrológico, reduciendo la escorrentía superficial y los fenómenos de islas de calor, a través de superficies permeables, coberturas vegetales, agricultura urbana e infraestructura verde en las edificaciones, para lo cual:

- a. El diseño de los componentes del sistema debe integrar los elementos naturales existentes y mejorar sus condiciones para prestar mejores servicios ecosistémicos.
- b. Se deben implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible -SUDS, manejo y tratamiento de aguas lluvias de escorrentía.
- c. Se deben utilizar materiales que observen criterios de bajas emisiones, procesos constructivos y de integración con el entorno y que en su desarrollo que propendan por la sostenibilidad ambiental, de acuerdo con las condiciones que se reglamenten para la construcción sostenible; uso de materiales reciclados e innovadores, con muros y terrazas verdes, promoción de huertas urbanas, nanotecnología con bio-concreto, ciclo vías solares, plataformas que produzcan energía al ser pisadas (PAVEGEN), nano-partículas en hojas;
- d. Se deben implementar los índices de diseño de coberturas vegetales y superficies aplicables al área contenidos en el presente Subcapítulo.
- e. Mitigación de impactos en la calidad del aire por emisiones atmosféricas de fuentes fijas y móviles (priorizando el material particulado), para ello, se debe incorporar cobertura vegetal con predominancia del porte arbóreo en la infraestructura peatonal que mejore la calidad ambiental urbana y paisajística, mitigue los impactos del ruido y del material particulado y proporcione protección y confort al recorrido peatonal. Además, se debe garantizar las coberturas vegetales del suelo para evitar la re-suspensión del material particulado. Se deberán seleccionar especies que se adapten al entorno, garantizando el espacio adecuado para su desarrollo sin afectar la estabilidad de las superficies, de acuerdo con el manual de espacio público y coberturas vegetales que adopte conjuntamente la Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá.
- f. Implementación de nuevas tecnologías que permitan el uso de energías renovables y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que dote al espacio público de sostenibilidad ecológica, a través de la adopción de criterios de eco urbanismo en las intervenciones de los espacios públicos existentes, en sinergia con la reducción de los efectos contaminantes, manejo integral de residuos sólidos y la promoción de servicios eco sistémicos; todo en el marco de la promoción para el uso adecuado y la apropiación de los espacios públicos naturales, de acuerdo a sus cualidades ambientales.
- g. Incorporación de prácticas sostenibles que promuevan el buen uso de los elementos constitutivos naturales del espacio público y fomenten la valoración de las condiciones sociales, culturales y económicas, entendiendo las dinámicas propias de cada lugar, asociadas a su uso y simbología por parte de las comunidades.
- h. Conectividad ecológica con la Estructura Ecológica Principal, para ello, cuando los espacios públicos peatonales y de encuentro colinden con otras áreas de la Estructura Ecológica Principal, y para priorizar la conectividad eco sistémica, y el disfrute visual, las intervenciones en los espacios públicos peatonales y para el encuentro deberán tener en cuenta en el diseño lo siguiente:
 - i) Se deben plantear puntos claros de articulación con los elementos de la Estructura Ecológica Principal colindante, mediante conexiones peatonales y plazoletas de acceso en el espacio público peatonal y para el encuentro.
 - ii) Se deben articular funcionalmente actividades y servicios conexos en el espacio público de encuentro con el fin de garantizar la vitalidad y consolidar la transición desde el espacio público hacia la Estructura Ecológica Principal.

iii) Se evitarán cerramientos para generar continuidad espacial entre el espacio público y la Estructura Ecológica Principal. En el evento de requerirse, se implementarán cerramientos con transparencia mínima del 90% que garanticen la continuidad visual y el disfrute de la Estructura Ecológica Principal.

iv) Se deberán privilegiar, dentro del espacio público peatonal y para el encuentro, intervenciones paisajísticas que promuevan la restauración y preservación de ecosistemas y comunidades bióticas del entorno, tanto nativas como emergentes.

v) El diseño de las calles localizadas perimetralmente a la Estructura Ecológica Principal debe reconfigurar su perfil vial para garantizar la prioridad de la franja de circulación peatonal, de la franja de calidad ambiental y la localización de mobiliario para el disfrute efectivo de la calle.

vi) La localización de las cesiones producto de procesos de desarrollo o renovación urbana deben privilegiar articulación y conexión con los elementos de la Estructura Ecológica Principal.

Parágrafo. Las disposiciones del presente artículo son aplicables exclusivamente a la intervención de espacios públicos peatonales para el encuentro y no serán aplicables a los elementos de la Estructura Ecológica Principal.

Artículo 123. Tipologías de parques estructurante y de proximidad. Se promoverá la diversidad de actividades recreativas en todos los parques de la ciudad, privilegiando en todo caso la vocación para la cual se ha destinado, entre:

1.Parque Contemplativo: Promueve la riqueza y diversidad de coberturas vegetales en espacios diseñados para el disfrute ambiental y las actividades humanas de bajo impacto. Se enfocan en una relación de tipo contemplativo y educativo a través de la permanencia y el recorrido.

2.Parque Lúdico: Brinda espacios y dotaciones para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas que promueven el relacionamiento entre los individuos, el desarrollo de habilidades y las actividades libres de rutina o práctica reglamentada. Promueven las dotaciones para los diferentes grupos etarios y condiciones físicas, tales como primera infancia de 0-5 años, infancia 6 - 11 años, adolescencia 12 - 18 años, adultos y adultos mayores.

3.Parque Cultural: Promueve los lugares de encuentro y permanencia para el desarrollo de actividades y eventos cívicos y/o culturales al aire libre, que resaltan los valores culturales, tradiciones y memoria colectiva. Pueden incorporar en su diseño diferentes servicios del cuidado y sociales.

4.Parque Deportivo: Brinda espacios para el desarrollo de actividades físicas y de práctica deportiva en los diferentes niveles: recreativo, formativo y de competencia. Las actividades se enfocan al acondicionamiento físico de diferentes grupos etarios de manera individual o colectiva.

Parágrafo 1. Las actividades recreativas derivadas de las tipologías de los parques se complementan con los servicios conexos y actividades del espacio público establecidas en el presente Plan.

Parágrafo 2. La Secretaría Distrital de Planeación determinará los parámetros para la definición de la tipología de parques, así como la asignación de la escala a la que pertenecen, mediante el Manual de Espacio Público.

Parágrafo 3. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte aplicará los parámetros citados y actualizará mediante resolución el inventario correspondiente al Anexo No. 3 “*Inventario de Espacio Público Peatonal y para el Encuentro*” que será remitido a la Secretaría Distrital de Planeación para su incorporación en la cartografía urbanística oficial.

Parágrafo 4. Se prohíbe el desarrollo de actividades asociadas a las peleas de gallos o perros y de cualquier otra que implique maltrato animal, en cualquiera de las tipologías de parques de las redes estructurante y de proximidad.

Artículo 124. Zonas verdes. En espacios de dominio y uso público de menos de 400 m2, se priorizará la creación de zonas verdes compuestos de jardines, arbustos y árboles, abiertos y empradizados, para el ocio, la contemplación y la generación de valores paisajísticos y ambientales en el Distrito.

2. Administración de los espacios públicos de encuentro. Corresponde a aquellos relacionados con la administración, gestión y operación de los espacios públicos de encuentro según su función y reglamentación, tales como, oficinas de administración, bodegas, baterías de baños, porterías, portales de recepción de visitantes y salas de información.

(...)

9. Servicios del cuidado y servicios sociales. Aquellos que prestan los diferentes servicios sociales, del cuidado y servicios básicos para la inclusión, protección, igualdad y equidad social.

Artículo 126. Índices de diseño para los elementos del Sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. En el diseño de los elementos del sistema existentes y de los que se generen en el marco del presente Plan, producto de proyectos públicos o de cesiones de cargas urbanísticas, se deberán implementar según su tipología, los índices para el manejo de superficies, coberturas vegetales y edificabilidad aquí señalados y calculados con respecto al área total:

Elementos del Sistema de espacio público peatonal para el encuentro	Superficies			Cobertura vegetal			Índices para edificaciones permanentes o temporales	
	% Superficie verde natural (mínima)	% Superficie dura semipermeable e impermeable (máxima)	Total superficies	Bosque urbano en superficie verde natural (mínima)	Cobertura arbórea en superficie dura (mínima)	Total Cobertura vegetal	Índice de ocupación (máximo)	Índice de construcción (máximo)
	S1	S2		C1	C2		IO	IC
Parque contemplativo	75%	25%	100%	50%	10%	60%	0.1	0.1
Parque lúdico	65%	35%	100%	40%	10%	50%	0.1	0.5
Parque cultural	55%	45%	100%	30%	20%	50%	0.15	0.8
Parque deportivo	50%	50%	100%	30%	20%	50%	0.15	0.8
Plaza y plazoleta	10%	90%	100%	N/A	20%	20%	0.1	0.1
Zonas verdes	90%	10%	100%	60%	N/A	60%	N/A	N/A
Franja de paisajismo y para la resiliencia urbana (*)	60%	40%	100%	30%	20%	50%	N/A	N/A
APAU(*)	10%	90%	100%	N/A	20%	20%	N/A	N/A

S1 Superficie verde natural. Superficies naturales en césped o cubresuelos que permite la infiltración natural y el paso de aguas lluvias hacia el suelo natural en plena tierra. En los casos en que existan cuerpos lénticos naturales o artificiales en los elementos del sistema, su área será cuantificada dentro de este tipo de superficie.

En Franjas de Paisajismo y para la calidad urbana el mínimo de superficie verde natural varía según la localización de la franja, de acuerdo a lo establecido en el artículo “*Franjas Funcionales del Espacio Público para la Movilidad.*”

<p>S2 Superficie dura: En todos los elementos señalados, se deberá destinar un porcentaje mínimo del 10% de la superficie dura en materiales semipermeables como <i>decks</i>, pavimentos permeables, adoquín ecológico y pisos filtrantes que permiten la retención y/o infiltración del agua lluvia hacia el suelo, entre ellas las tipologías mayores y menores de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible - SUDS.</p> <p>En parques de borde el porcentaje de superficie dura en materiales semipermeables deberá ser como mínimo del 15%.</p> <p>En Franjas de Paisajismo y para la Calidad Urbana el máximo de superficie dura varía según la localización de la franja, de acuerdo a lo establecido en el artículo <i>Franjas Funcionales del Espacio Público para la Movilidad</i>.</p> <p>En sótanos bajo parques se deberán adecuar jardines y zonas verdes como mínimo en el 35% de la superficie dura de sus cubiertas.</p>
<p>C1 Bosques urbanos: Cobertura arbórea agrupada en masa o lineal con entrelazado o superposición de las copas, con una composición vegetal diferencial, que integra especies nativas y naturalizadas con diferentes portes (árboles altura superior a 5 m), los cuales facilitan el tránsito, la anidación y el refugio de fauna silvestre. Contribuyen a la protección del patrimonio natural y cultural de la ciudad y aumentando la calidad del paisaje, reducen la contaminación del aire, aportan a la regulación climática, brindan sombra y proporcionan beneficios para la salud mental y física de las personas. Este tipo de cobertura se puede acompañar de arbustos, jardines y/o huertas y cobertura arbórea dispersa.</p>
<p>C2 Cobertura vegetal en superficie dura: Porcentajes mínimos del área total del espacio público peatonal para el encuentro cubiertos por árboles en contenedores o materas. Estas coberturas son medidas con base en el 50% de la proyección del diámetro de copa de los individuos en edad adulta.</p>
<p>IO Índice de ocupación: índice máximo calculado sobre el área total del parque para la implantación de edificaciones, y construcciones temporales-de soporte al espacio público, según se establece en el presente Plan. En todo caso, este índice se contabilizará dentro de las superficies duras y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del parque.</p>
<p>IC Índice de construcción: Expresado por el cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por el área total del predio. En espacios públicos de encuentro de la red de proximidad únicamente se permite la instalación de los módulos previstos en el manual de mobiliario que se requieran para complementar el uso recreativo y sus actividades conexas, y se contabilizarán dentro de los índices para edificaciones permanentes o temporales aquí señalados, a excepción de los equipamientos de seguridad CAI.</p>
<p>(*) APAUP: Áreas privadas afectas al uso público. Se exceptúan los antejardines que deberán cumplir con las condiciones para la franja de áreas privadas afectas al uso público.</p>

Parágrafo 1. Las tipologías de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) se reglamentan en la Estructura Funcional y del Cuidado, Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial Sostenible del Presente Plan.

Parágrafo 2. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente Plan, la Secretaría Distrital de Planeación adoptará mediante acto administrativo el Manual de Espacio Público, en el cual se indiquen los requerimientos técnicos de diseño para las intervenciones, que deberán cumplir los agentes públicos y privados, incorporando la perspectiva de género los principios de ciudades seguras para mujeres y niñas, para dar cumplimiento a los lineamientos y parámetros de diseño técnico específicos de los elementos del sistema de espacio público peatonal y para el encuentro.

(...)

Artículo 131. Proyectos priorizados del Sistema Urbano de Espacio Público Peatonal para el Encuentro. Los proyectos priorizados en el marco de las estrategias definidas para el sistema se encuentran señalados en el Mapa n.º CU-4.1 “*Sistema de Espacio Público peatonal y para el Encuentro*” y en los artículos “*Programa de reverdecimiento y renaturalización del Distrito capital*”, “*Programa para la recualificación del paisaje urbano*” y “*Programa de territorios para la vitalidad y el cuidado*”.

(...)

Artículo 137. Acciones de recuperación de zonas de interés patrimonial y cultural y de espacios vacíos, residuales y culatas. Se potenciará el carácter de escenario de estos espacios en la búsqueda constante de su apropiación por parte de la ciudadanía en su diversidad, orientadas a recuperar el espacio público en condición inadecuada y restituir las calidades del espacio público existente para su uso, goce y disfrute por parte de toda la ciudadanía:

1. Adecuándolos con condiciones de accesibilidad universal que promuevan un acceso igualitario en respuesta a las necesidades de la población con discapacidad y de acuerdo a las necesidades diferenciales de la ciudadanía según enfoques;
2. Realizando intervenciones que mejoren las condiciones de uso, goce y disfrute por parte de todos los sectores y grupos poblacionales, lo cual precisa realizar intervenciones tácticas físico espaciales y socioculturales en el espacio público (temporales, semipermanentes y/o permanentes) para mejorar las condiciones de uso del mismo por parte de mujeres, primera infancia, infancia, adolescencia y personas mayores, así como de otros grupos y sectores poblacionales, en el marco de la promoción de una ciudad segura en su espacio público, sin violencias ni discriminación en relación con grupos históricamente discriminados, personas de los sectores LGBTI, mujeres, habitantes de calle, jóvenes estigmatizados por prejuicios, entre otros;
3. Promoviendo las expresiones artísticas de carácter temporal, permanente y regular;
4. Promoviendo las movilidades alternativas con la adaptación de las condiciones de los espacios públicos que prioricen el peatón y al ciclista, en dicho orden, por encima del desplazamiento vehicular, que suministren a la ciudadanía la posibilidad de acceder a una mayor oferta de espacios cualificados para realizar actividades físicas;
5. Revalorizando los espacios públicos patrimoniales como las plazas fundacionales u otros espacios o Sectores de Interés Urbanístico (urbanístico-arquitectónico, gastronómico, comercial, institucional, turístico, religioso, etc.) como componentes fundamentales para promover las identidades locales;
6. Recuperando integralmente los espacios públicos de borde y aquellos en los centros poblados rurales del Distrito;
7. Recuperando espacios residuales, vacíos o culatas a través de una intervención integral que vincule a la comunidad, buscando incrementar la apropiación de estos espacios para disminuir las sensaciones de abandono e inseguridad que están asociadas a ellos.

Artículo 138. Implementación de procesos pedagógicos para el fomento de la construcción colectiva de ciudadanía y de Cultura Ciudadana. Son el conjunto diverso y cambiante de modos de ser, sentir, pensar y actuar en la ciudad que reconocen y valoran la diferencia, que facilitan la convivencia y la construcción del tejido social, que respetan lo público y las normas colectivas, que promueven las sociabilidades pacíficas y el desarrollo libre de proyectos de vida individuales y colectivos, en armonía con el entorno ambiental:

1. Empoderando a las comunidades para valorar los espacios públicos como lugares de encuentro y desarrollo de prácticas culturales, artísticas y deportivas y que desarrollen un sentido de responsabilidad compartida entre la ciudadanía, tanto desde el Estado, con la promoción de un escenario permanente para el desarrollo de dichas prácticas, así como, desde los habitantes, líderes y organizaciones que pueden participar, involucrarse, concientizar y dar

continuidad a los procesos donde se proteja y mejore el espacio público de la ciudad y se valoren los beneficios que éste ofrece a la ciudadanía y la ciudad;

2.Promoviendo la responsabilidad en el espacio público de dueños para su manejo en espacios públicos;

3.Haciendo pedagogía orientada a eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las personas LGTBI; mujeres, niños y adolescentes, jóvenes, personas mayores, grupos étnicos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, habitantes de calle, y cualquier representante de grupo poblacional o sector social, para lo cual se deben modificar imaginarios sociales discriminatorios que promuevan y faciliten el ejercicio de la ciudadanía plena para estos sectores a través del uso óptimo, seguro y libre del espacio público;

4.Implementando, en los espacios públicos que colinden con elementos de la Estructura Ecológica Principal, aulas ambientales para la enseñanza y promoción del cuidado de la misma, así como de la importancia de esta para la sostenibilidad de la vida y su función en la capacidad de resiliencia de la ciudad, permitiendo así que los ciudadanos la valoren, protegiéndola y aportando en su mantenimiento y protección.

(...)

Artículo 140. Señalamiento de espacios públicos. Las zonas definidas como de uso público en los instrumentos de planificación y en los proyectos urbanísticos o parcelaciones aprobados por las autoridades competentes y respaldados por la correspondiente licencia de urbanización, cuando aplique, quedarán afectas a este fin específico, aun cuando permanezcan dentro del dominio privado, con el solo señalamiento que de ellas se haga en los instrumentos de planificación o en las licencias urbanísticas.

En los proyectos de iniciativa pública que generen espacio público se elaborará el plano definitivo de los diseños aprobados por la entidad encargada de su ejecución. El plano será el documento de soporte para su recibo e inclusión en el inventario de patrimonio inmobiliario de la ciudad, sin que para ello se requiera plano urbanístico.

(...)

Artículo 143. Delimitación de cesiones públicas señaladas como zonas verdes y/o comunales. Las cesiones públicas, zonas verdes y/o comunales, producto de procesos de urbanización o desarrollos legalizados antes de la entrada en vigencia del Decreto Distrital 619 de 2000, se regularizarán cuando:

1.No se encuentren ubicadas en suelos de protección.

2.No se encuentren construidas, caso en el cual:

- a. Se deberán alinderar, amojonar y calcular las áreas destinadas al equipamiento público independiente de las áreas correspondientes a zona verde en un porcentaje de 40% y 60% respectivamente, en el plano urbanístico. En todo caso, producto de la anterior distribución, no podrán resultar zonas verdes con área inferior a 1.000 m², situación en la cual el área corresponderá en su totalidad a parque.
- b. El procedimiento para determinar los porcentajes se concreta en el estudio y expedición de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, en la modalidad de licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento de que trata el numeral primero del artículo [2.2.6.1.1.13](#) del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, o las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

(...)

Artículo 145. Intervención y Ocupación del Espacio Público. De conformidad con lo establecido en el artículo [99](#) de la Ley 388 de 1997, modificada por el artículo 35 de la Ley 1796 de 2016, se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amueblamiento o para la intervención del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes, directamente o a través de los terceros encargados de su administración.

Dentro de los tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente plan, las entidades competentes para el trámite y expedición de las diferentes modalidades de licencias de intervención y ocupación del espacio público son las siguientes:

Instituto Distrital de Patrimonio	Aprobar las intervenciones de los espacios públicos con valor patrimonial, espacios públicos declarados como Bienes de Interés Cultural y el espacio público localizado en los Sectores de Interés Cultural.
Instituto Distrital para las Artes - IDARTES	Autorizar la ubicación de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio público del Distrito Capital.
Instituto de Desarrollo Urbano	Autorizar la reconstrucción, rehabilitación o redistribución de cualquiera de las franjas funcionales de las calles que conforman el espacio público para la movilidad. Autorizar las obras requeridas por las empresas de servicios públicos o los particulares que intervengan el espacio público. Autorizar la utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados, o entre inmuebles privados y elementos del espacio público.
Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Autorizar la reconstrucción o rehabilitación parques tanto de la escala estructurante como de la de proximidad.

Parágrafo. De conformidad con el artículo [2.2.6.1.1.3](#) del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya, los curadores urbanos al expedir licencias de construcción en sectores urbanizados o desarrollados autorizarán, en la respectiva licencia, la reconstrucción o rehabilitación de los andenes o cualquiera de las franjas funcionales de las calles colindantes con el predio o predios objeto de licencia, de conformidad con las normas y demás especificaciones de diseño, construcción y accesibilidad definidas en el Manual de Espacio Público o la norma que haga sus veces.

(...)

Artículo 148. Instancia de coordinación institucional en materia de espacio público. Con el fin de garantizar la concurrencia y articulación de las entidades administradoras del espacio público, el Comité Distrital del Espacio Público o la instancia que haga sus veces, será el órgano de consulta y de asesoría a la administración distrital en el diseño de los fundamentos teóricos, ambientales, artísticos, patrimoniales, urbanos y técnicos con la finalidad de garantizar la pertinencia y calidad de las intervenciones en el espacio público de ámbito distrital, acordar mecanismos para la gestión de suelo y construcción de nuevo espacio público, definir esquemas interinstitucionales de gestión en proyectos específicos en espacios públicos existentes, así como para coordinar la destinación de recursos para estos fines, provenientes de los instrumentos de financiación definidos en el marco del presente Plan.

(...)

Artículo 150. Red de infraestructura peatonal. Está conformada por las franjas de circulación peatonal del espacio público para la movilidad y la franja de Paisajismo y para la resiliencia urbana; por las zonas de permanencia y conexión peatonal del espacio público peatonal y para el encuentro, y por las áreas de circulación de la infraestructura de acceso y tránsito del sistema de movilidad. La intervención y configuración de esta red debe cumplir con las siguientes características:

1. **Accesibilidad.** Permitir que las personas usuarias, sin importar sus condiciones o características sensoriales y/o psicomotrices, puedan circular y aprovechar la ciudad, disminuyendo las barreras físicas para su libre movimiento.
2. **Seguridad.** Reconocer la vulnerabilidad y los riesgos a los que se expone al peatón (a las personas) para así disminuirlos y evitar accidentes (siniestros). La implementación de infraestructura vial y la cualificación del entorno urbano debe configurar entornos seguros y confiables para todas las personas a través de diseños que generen vitalidad en la calle.
3. **Dirección y conexión.** Conectar el inicio y destino del recorrido peatonal con la menor distancia y tiempo posible dando prelación en el desarrollo de los proyectos de infraestructura a las personas que se desplazan peatonalmente.
4. **Calidad urbana.** Las condiciones constructivas de la red deben garantizar que todas las personas caminen sin tropiezos, de manera cómoda, con elementos de paisajismo que brinden protección, reducción de contaminación y posibilidades de permanencia, y brinden una imagen de ciudad amable y caminable.

Parágrafo. La Secretaría Distrital de Movilidad – SDM en coordinación con las entidades competentes, en concordancia con las normas del presente plan y con el Manual de Espacio Público, realizará los estudios y diseños para la intervención de la red de infraestructura peatonal en el corto, mediano y largo plazo según la priorización establecida en las Unidades de Planeamiento Local - UPL.

Artículo 151. Red de ciclo infraestructura. Está conformada por las franjas de ciclo infraestructura por donde circulan bicicletas, patinetas o vehículos de micro movilidad y las áreas de servicios complementarios a estos vehículos. En esta red está prohibida la circulación de motocicletas y vehículos automotores. La infraestructura de soporte de esta red se rige bajo el Decreto Único Reglamentario [1079](#) de 2015, Código Nacional de Tránsito, Resolución [160](#) de 2017 y [3258](#) de 2018 o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

(...)

Artículo 175. Permanencia y desarrollo del suelo dotacional. Se entienden permanentes en suelo urbano, el área de funcionamiento y prestación del servicio de los equipamientos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. Equipamientos existentes de escala urbana o metropolitana en los términos definidos en el Decreto Distrital 190 de 2004 y demás normas reglamentarias existentes a la entrada en vigencia del presente Plan.
2. Los predios señalados como institucionales por normas anteriores al Decreto Distrital 619 de 2000 en los cuales existan equipamientos en funcionamiento a la entrada en vigencia del presente Plan.
3. Los equipamientos tipo 2 y 3 que a futuro se destinen 100% a usos dotacionales

La condición de existencia hace referencia a que los predios cuenten con edificaciones construidas a la entrada en vigencia del presente Plan destinadas al uso dotacional, lo cual podrá ser verificado mediante certificación catastral que expida la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, elementos fotográficos, planimétricos y otros tipos de soporte que permitan determinar dicha condición.

De manera complementaria a la permanencia, en el predio donde se localiza el equipamiento existente, se pueden aplicar las disposiciones del artículo de “Condiciones de mezcla de uso en predios en edificaciones con uso dotacional” del presente Plan, y hacer edificaciones aisladas con usos diferentes al del equipamiento, siempre que:

a. Se mantenga al menos el área construida o índice de construcción del equipamiento existente, y las áreas libres necesarias para el funcionamiento de la actividad propia del equipamiento existente, tales como patios, canchas, plazoletas, áreas de parqueo, entre otros, según sea definido en el estándar de calidad espacial, siempre que el Distrito no requiera el equipamiento existente, o parte de este, para otro uso dotacional o proyecto de utilidad pública o interés social. Lo anterior será certificado por la Secretaría Distrital de Planeación, previa consulta a la entidad que pertenezca el servicio que predomine, en una proporción de al menos el 70% del área construida existente, contando para ello con un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, y conforme a la reglamentación que expida para el efecto la Secretaría Distrital de Planeación, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan.

Las condiciones de edificabilidad aplicables a la totalidad del predio, en este caso, serán las definidas por el tratamiento de renovación urbana, salvo que se trate de un predio urbanizable no urbanizado en cuyo caso aplicarán las normas del tratamiento de desarrollo, las cuales serán aplicables en el marco del licenciamiento urbanístico.

b. Haga parte de un nodo de equipamiento, al interior de los cuales se podrá reorganizar sus áreas libres y ocupadas, y las prestaciones de los servicios, así como no tendrán índice de ocupación o de construcción, siendo la edificabilidad la resultante de la optimización del suelo que se requiera.

c. Se garantice el acceso directo al equipamiento que permanece, desde el espacio público.

d. En el área que no se requiere para el funcionamiento del equipamiento existente se deben aplicar las normas del área de actividad y tratamiento urbanístico asignado en el presente Plan, en cuyo caso el área de terreno se entiende como el área resultante luego de descontar el área que ocupa el funcionamiento y prestación del servicio del equipamiento objeto de la permanencia.

(...)

CAPÍTULO 3

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DEL CUIDADO

SUBCAPÍTULO 1

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO RURAL PEATONAL Y PARA EL ENCUENTRO

Artículo 412. Sistema de espacio público rural peatonal y para el encuentro. El sistema de espacio público rural es el conjunto de áreas libres del suelo rural, usadas o destinadas a la circulación peatonal, el encuentro y la recreación; incluye las vías rurales, los parques, plazas, senderos miradores, entre otros. El sistema reconoce las características propias del espacio público en el suelo rural, a partir de la multifuncionalidad de las actividades y servicios conexos que le permiten a las comunidades campesinas y rurales contar con espacios diversos de interacción

comercial, social, ambiental y de desplazamiento, en especial en los centros poblados rurales y en las zonas delimitadas para la localización de nodos de equipamientos.

Artículo 413. Lineamientos para la cualificación, conectividad ambiental y funcional del sistema con las demás estructuras territoriales. Son lineamientos para la cualificación, conectividad ambiental y funcional del sistema con las demás estructuras territoriales:

1. **Accesibilidad universal:** el sistema debe integrarse con el entorno, ser continuo y accesible, permitiendo el libre desplazamiento de las comunidades campesinas y rurales, para lo cual deberá:
 - a. Garantizar condiciones físicas adecuadas para la circulación segura, incluyente, autónoma y confortable de todas las personas usuarias, independientemente de la edad y las capacidades cognitivas o intelectuales, mentales o psicosociales, físicas o motoras, auditivas y visuales.
 - b. Garantizar la conectividad y continuidad de las circulaciones peatonales y de cicloinfraestructura, tanto en su trazado como en sus superficies, sin interrupción por obstáculos, con señalización adecuada e iluminación en las vías principales y facilitando el acceso a puntos de atracción peatonal, a fin de permitir recorridos seguros, accesibles, confortables y directos.
 - c. Incluir señalización clara, visible y de fácil comprensión, con lenguaje incluyente.
 - d. Reconocer la vulnerabilidad y los riesgos a los que se exponen las peatonas y peatones para disminuirlos y evitar siniestros, implementando la infraestructura vial necesaria y la cualificación del entorno rural que genere confianza y seguridad.
 - e. El diseño de la vía debe respetar el paisaje rural y la identidad y cultura campesina, conectar los diferentes servicios sociales existentes haciéndolos más accesibles y seguros para las comunidades campesinas y rurales.
 - f. El diseño de la vía debe cumplir un rol de conector con los sitios de comercialización de productos y la oferta de servicios sociales, y debe permitir el disfrute de los diferentes elementos que enriquecen el paisaje natural.

2. Vitalidad. Deben contemplarse diseños que promuevan la vitalidad para que las áreas permanezcan activas en el mayor rango de horario posible. Los espacios deben ser versátiles, y permitir desarrollar actividades recreativas, deportivas, culturales, productivas y actividades conexas; de manera permanente o temporal. Para cumplir con este lineamiento, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

- a. En las áreas de producción agrícola y ganadera el sistema requiere contar con espacio de circulación peatonal y de encuentro cómodos, que puedan incluir espacios de permanencia para el intercambio y almacenamiento de productos. Se deben integrar al paisaje y protegerlo.

- b. En los entornos próximos a ecosistemas conservados los espacios de circulación peatonal deberán estar segregados para proteger el patrimonio natural, y complementarse con las actividades de permanencia, como miradores y centros de visitantes, cuyo espacio se asocia al de la vía.
- c. En los centros poblados debe procurarse la generación de nuevos espacios de congregación y circulación de peatonas y peatones que permitan el encuentro cómodo y la aglomeración de usuarias y usuarios y la ubicación adecuada de todo tipo de vehículos, incluyendo los de tracción animal, así como la mitigación de los impactos asociados con los usos del suelo.
- d. En los centros poblados y en los lugares en que se realicen ferias campesinas, se habilitará la instalación de puntos de descanso para los animales usados como modo de transporte de la comunidad campesina y rural.
- e. En los bordes urbano-rurales debe procurarse la generación de nuevos espacios públicos peatonales y para el encuentro que sirvan de transición entre el área urbana consolidada y los territorios rurales.
- f. Los diseños deben ser funcionales, sostenibles o sustentables, atractivos, incluyentes, accesibles y versátiles, que respondan a las expectativas y necesidades principalmente de las comunidades campesinas y rurales, incorporando criterios de multifuncionalidad. Los diseños deben incorporar efectivamente los enfoques de derechos humanos, de género, diferencial-poblacional, ambiental y territorial.
- g. Se deben priorizar actividades sociales, recreativas, deportivas y culturales, considerando servicios y actividades conexas de comercio, servicios, turismo, entre otras.
- h. Los espacios deben contar con el mobiliario necesario para su correcto funcionamiento, fomentando la permanencia y garantizando la seguridad.
- i. Se deberán diseñar los espacios públicos de forma tal que incluyan las personas con discapacidad y los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, reconociendo y valorando la identidad y cultura campesinas. Los diseños deben incorporar efectivamente los enfoques de derechos humanos, de género, diferencial-poblacional, ambiental y territorial.
- j. Se debe promover la participación ciudadana para la apropiación y sostenibilidad de los espacios en el tiempo.
- k. Se debe propiciar la ubicación de actividades conexas recreativas, deportivas, culturales y de aprovechamiento económico del espacio público con el fin de generar sostenibilidad, vigilancia y control social sobre el espacio público.

- l. Los espacios públicos de permanencia rural deben incluir estructuras cubiertas y cerradas cuando aplique que respondan a las condiciones climáticas del entorno y permitan el desarrollo de diferentes actividades.

3. Seguridad. Debe promoverse la creación de ambientes con una correcta iluminación y visuales continuas entre el espacio público y el espacio privado, para lo cual:

- a. La iluminación debe proporcionar condiciones de visibilidad y seguridad con eficiencia lumínica, que permita usar el espacio público en el día y la noche.
- b. Se debe generar continuidad visual, reduciendo o eliminando los obstáculos que bloquean, entorpecen o limitan la visión.
- c. Se permite la apertura y acceso de las fachadas cerradas y culatas colindantes con el espacio público, para reducir los focos de inseguridad y favorecer la relación visual interior- exterior
- d. Se debe garantizar el control visual de los espacios mediante la definición de rutas seguras entre dos o más puntos, con iluminación dirigida, señalización clara, mobiliario que apoye la presencia natural de personas y cobertura vegetal que no bloquee campos visuales.
- e. La infraestructura peatonal y de cicloinfraestructura debe estar libre de obstáculos y minimizar conflictos con elementos externos como tráfico vehicular, flujo de ciclistas, mobiliario, siendo fundamental asegurar bajas velocidades cuando se presenten conflictos.

Parágrafo. Las intervenciones que se realicen en suelo rural deberán tener en cuenta soluciones basadas en la naturaleza y la integridad social, económica, cultural y ecosistémica del área.

Artículo 414. Coberturas verdes y superficies aplicables a los espacios públicos rurales peatonales y para el encuentro. Los índices para el diseño y construcción de las superficies y la adecuación de coberturas vegetales para el sistema son:

Sistema de espacio público rural peatonal y para el encuentro	% de Superficie permeable natural (mín.)	% de Superficie permeable artificial y dura (máx.)	Coberturas verdes (mín.)	
			cobertura vegetal de porte arbóreo en cualquier superficie (mín.)	Cobertura vegetal Arbustiva, jardinería y huertas en cualquier superficie (mín.)
Parque rural	30%	70%	40%	10%
Plazas y plazoletas rurales	N/A	N/A	5%	5%

Red peatonal de conexión urbana y rural	0%	100%	0%	0%
---	----	------	----	----

Parágrafo. Dentro del Manual de Espacio Público que expida la Secretaría Distrital de Planeación, se definirán, entre otros, los lineamientos para el diseño del espacio público rural para el encuentro, teniendo en cuenta los principios de ciudades seguras para mujeres y niñas y las necesidades específicas de los entornos rurales que garanticen la seguridad y equidad de género.

Artículo 415. Régimen de actividades del sistema de espacio público rural peatonal y para el encuentro. Para propiciar la vitalidad, multifuncionalidad y mejorar la experiencia en el uso, goce y disfrute por parte de la población rural de los elementos del Sistema y generar mayor percepción de seguridad, se establecen los siguientes servicios conexos que pueden desarrollarse al interior de las edificaciones, construcciones temporales de baja ocupación, instalaciones, elementos complementarios o unidades móviles, salvaguardando la destinación del espacio público sin obstaculizar la circulación peatonal y en armonía con las actividades del Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público, donde se interviene.

Además de los artículos 89, 90, 91, 94, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 137, 138, 140, 143, 145, 148, 150, 175, 412, 413 y 414, antes transcritos del Decreto 555 de 2.021, téngase como espacios libres de drogas, siempre que en dichos lugares concurren niños, niñas adolescentes y no consumidores, los señalados y delimitados en el Anexo 3 del mismo intitulado “*Inventario de Espacio Público Peatonal y Para el Encuentro*”, todo ello, para prevenir los efectos dañinos de apareja el uso y consumo de cannabis y sustancias psicoactivas – PSA

4. IMPACTO FISCAL

Esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el Acuerdo 927 de 2024, “**POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”**”, por lo tanto, no tiene impacto ambiental.

El presupuesto se encuentra ya apropiado como meta, de suerte que puede afirmarse que esta iniciativa no genera impacto fiscal toda vez que las acciones que propone este proyecto no implican desarrollar los mandatos del Acuerdo 927 de 2024, “**POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”**”

Cordialmente,

EMEL ROJAS CASTILLO
Concejal de Bogotá
Partido Nueva Fuerza Democrática

ROLANDO ALBERTO GONZALEZ
Concejal de Bogotá
Partido Cambio Radical

PROYECTO DE ACUERDO NO 411 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE PROHÍBE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INCLUSO DE LA DOSIS PERSONAL, EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numeral 1º., en concordancia con los Artículos 13 y 19 de la Constitución Política, Artículo 8 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 y el Decreto Reglamentario 354 de 1998;

ACUERDA:

ACUERDA: ARTÍCULO 1. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es establecer Zonas Libres de Drogas (Z.L.D.), en el Distrito Capital de Bogotá D.C. con la finalidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la calidad de vida, a un ambiente sano, a la integridad personal, a la protección, a la salud, a la educación, a la recreación y participación en la vida cultural y al desarrollo de la libre personalidad, entre otros, así como garantizar la sana convivencia en los parques, los espacios deportivos y culturales de la ciudad y los entornos escolares así como establecer otras disposiciones para tal fin.

ARTÍCULO 2. ZONAS LIBRES DE DROGAS EN EL DISTRITO CAPITAL. A partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo declárense los parques de escala Metropolitana, Regional, Zonal, Vecinal y de Bolsillo y demás espacios deportivos y culturales de la ciudad de Bogotá D.C., así como el espacio público para el encuentro y el espacio público colindante a las instituciones educativas del Distrito Capital en suelo urbano y suelo rural, como Zonas Libres de Drogas (Z.L.D).

En las Zonas Libres de Drogas se prohíbe el *consumo, distribución y comercialización* de cannabis y otras sustancias psicoactivas [SPA], tales como marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la cocaína, heroína o sustancias derivadas de la amapola, drogas sintéticas, cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas que figuran en la listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su Protocolo de Modificación, celebrada en Ginebra el 25 de marzo de 1972, aprobada por medio de la Ley 13 del 29 de noviembre de 1974; que se encuentren incorporadas en las listas I, II, III y IV del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, aprobado por medio de la Ley 43 del 29 de diciembre de 1980; o cualquier otra sustancia que se encuentre legalmente prohibida.

Parágrafo. En un plazo no superior a seis (6) meses después de la entrada en vigencia del presente acuerdo, la administración distrital regulará la distancia alrededor de las instituciones educativas en que aplicará la restricción a la cual se refiere el inciso segundo del presente artículo.

ARTÍCULO 3. SEÑALIZACIÓN. La administración distrital podrá instalar progresivamente y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que para ello se asigne, elementos de señalización que indiquen que los lugares establecidos en el presente acuerdo son Zonas Libres de Drogas (Z.L.D.) e indicarán, que dentro de ellas no se puede consumir distribuir y comercializar drogas.

ARTÍCULO 4. DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. A quienes consuman cualquier tipo de las drogas enunciadas en el artículo segundo del presente acuerdo, le serán aplicadas las medidas correctivas establecidas en el párrafo 1 del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia.

ARTÍCULO 5. PEDAGOGÍA. La administración distrital realizará acciones de comunicación y pedagogía, tanto en las instituciones educativas del Distrito como en sitios de alta afluencia de público, en la cual se socializará el presente acuerdo y se dará a conocer los efectos en la salud del consumo de drogas, mínimo en una ocasión cada semestre del año.

ARTÍCULO 6. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 412 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA INCENTIVAR LOS EMPLEOS VERDES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*****OBJETO**

La presente iniciativa tiene como objeto dictar los lineamientos para incentivar, los empleos verdes de la ciudad de Bogotá, siguiendo los parámetros establecidos en el Plan de Distrital de Desarrollo y los dispuestos en el articulado de este proyecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En septiembre del año 2008, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), con la intención de abordar las cuestiones apremiantes por las que pasaba el mundo, dieron paso al concepto de empleo verde como una esperanza de la humanidad para poder hacer frente a dos de los desafíos más determinantes del siglo XXI, i) un desafío social principalmente causado por la pobreza y el desempleo y ii) la degradación ambiental y su empeoramiento por el cambio climático. (PNUMA, 2008)

Un mes más tarde, vino la recesión económica con la crisis bursátil mundial, lo cual dejó presiones inflacionarias, déficits fiscales y millones de desempleados en el mundo, esto hizo que el tema de empleos verdes cobrara mayor relevancia en un escenario post-crisis.

En 2019 se estableció lo que hoy se conoce como el “Nuevo acuerdo verde global” o “Global Green New Deal”, el cual fue liderado por una comisión del PNUMA y en donde se evaluó si las respuestas que se iban a dar a la crisis estimularían realmente una economía sostenible post-recesión para el mediano y largo plazo, o si quizás era importante invertir en la construcción de esa sostenibilidad futura y de la misma manera estimular el crecimiento económico, el empleo y la lucha contra la pobreza (PNUMA, 2009).

Más tarde, 34 países firmarían una Declaración sobre Crecimiento Verde en la que manifestaron que fortalecerían sus capacidades para trabajar en estrategias de crecimiento verde, con las que pudieran responder a la crisis, reconociendo que el respeto y la protección del medio ambiente y el crecimiento económico pueden ir de la mano, de manera que a su vez puedan preservarse los recursos para las generaciones futuras (OCDE, 2011).

Era claro que hacer inversiones verdes y orientarse a una transición verde tendría un efecto muy positivo en el empleo en el largo plazo, sin embargo, sería cada vez más necesario vincular a los mercados laborales para

que los trabajadores pudieran participar de una nueva economía verde, de allí que promover los empleos verdes se volviera prioridad.¹⁴⁶

La crisis económica y financiera no es la única crisis a la que se está enfrentando el mundo. La degradación del medio ambiente, la erradicación de la pobreza y el creciente desempleo también son algunas de las cuestiones que revisten carácter de urgencia desde hace mucho tiempo. La preocupación que suscita el medio ambiente y los debates emergentes sobre la economía verde hacen sumamente pertinente pasar revista a las condiciones de empleo y de trabajo y a las cuestiones laborales y relativas al trabajo decente en diferentes sectores de la economía.

Elaborar un plan de acción eficaz para impulsar la recuperación económica, afrontar la degradación del medio ambiente, y atender las diferentes necesidades sociales será fundamental para asegurar la sostenibilidad a largo plazo en el mundo. En el Informe sobre Economía Verde elaborado por el PNUMA en 2011 se explica cómo lograr este objetivo mediante la inversión en sectores verdes, limpios y sostenibles. El hecho de centrarse en cada uno de los sectores de la economía puede fomentar la creación de empresas sostenibles y crear oportunidades de trabajo decente para todos, en particular para aquéllos que más lo necesitan. A tal efecto, el Departamento de Actividades Sectoriales (SECTOR) proporciona conocimientos y análisis matizados, y asesoramiento en materia de política, en los diversos sectores que abarca, lo cual puede mejorar la posición de la OIT por lo referente al tema de los empleos verdes y la economía verde.

En 2012, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) gestó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible por medio de la cual se sustituyeron los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000, con el fin de adaptarlos a las necesidades del mundo moderno en el marco de la creación de la Agenda 2030. El resultado fueron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan promover la integración de las esferas de prosperidad, paz, planeta, alianzas y personas. Este tratado entró en vigor desde el año 2015, generando la obligación en los estados miembros de velar por el cumplimiento de cada una de las metas allí propuestas. El concepto de economía y empleabilidad verdes están directamente ligados al objetivo número 8 “trabajo decente y crecimiento económico”. Sin embargo, los ODS tienen la característica de codependencia e interconexión, por lo que el cumplimiento de uno de ellos contribuye al cumplimiento de uno o varios más. En este caso, la puesta en marcha de programas de empleos verdes aportaría también a los objetivos 1 “fin de la pobreza”, 9 “infraestructura innovación y emprendimiento”, 11 “ciudades y comunidades sostenibles”, 12 “producción y consumo responsables” y 13 “acción por el clima”.¹⁴⁷

Hasta la fecha, los análisis sectoriales han permitido comprender la vital importancia del diálogo social como punto de partida para todo tipo de transición hacia una economía más verde. La participación de los agentes interesados ha demostrado ser esencial para asegurar que se aporten respuestas de manera apropiada a las preocupaciones de los trabajadores —lo cual es particularmente cierto en el caso de los sectores en los que se prevé una reducción temporal del empleo.

Las tendencias en la producción, el consumo y el empleo están experimentando un cambio importante, y se prevé que seguirán evolucionando en los próximos años. La transición a una economía más verde ya ha comenzado, si bien se observan diversos grados de madurez dependiendo de los países y sectores de que se

¹⁴⁶ <https://www.ecointeligencia.com/>

¹⁴⁷ <https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs>

trate. Es posible – y, en realidad, es un hecho, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros efectos en el medio ambiente, mejorar las condiciones de vida, crear empleos verdes y reducir la pobreza, aumentando al mismo tiempo la competitividad de las empresas y los sectores de la economía, en sectores como la construcción o las energías renovables en diferentes países del mundo.

Los empleos verdes son entonces puestos de trabajo que contribuyen a la conservación, restauración y mejora de la calidad del medioambiente en cualquier sector económico (agricultura, industria, administración y servicios). Los empleos verdes reducen el impacto ambiental de las empresas y de los sectores económicos aumentando la eficiencia del consumo de energía, materias primas y agua, descarbonizando la economía y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, minimizando o evitando cualquier forma de residuo y contaminación, restaurando los ecosistemas y la biodiversidad, y permiten adaptarse al cambio climático.

No existe una definición única de economía verde. La principal característica del concepto es el reconocimiento del valor económico del capital natural y de los servicios ecológicos, y la necesidad de proteger esos recursos.

La mayoría de las definiciones incluyen no sólo aspectos ambientales, sino que incorporan un enfoque más holístico del desarrollo sostenible. Elementos como sostenibilidad ambiental, justicia social y producción localmente arraigada e intercambio de bienes y servicios pueden encontrarse, por tanto, en la mayoría de las definiciones de economía verde.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define una economía verde como “aquella que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. En su forma más elemental, una economía verde sería aquella que genera bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente inclusiva.”

El concepto de economía verde no tiene intención de sustituir al de desarrollo sostenible, más bien se emplea como un medio para conducirnos a la sostenibilidad. El documento final de Río +20, El futuro que queremos, afirma “[...] consideramos que la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y que podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas, pero no debería consistir en un conjunto de normas rígidas. Ponemos de relieve que la economía verde debería contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra.”¹⁴⁸

Según Ecoembes “El empleo verde es aquel que contribuye a preservar y reparar el medio ambiente, tanto en los sectores tradicionales como los manufacturados o la construcción. Incluso en nuevos sectores relacionados con la eficiencia energética y la energía renovable.”

Por todo ello, los empleos verdes se están convirtiendo en una de las piezas claves para poder mitigar las consecuencias del cambio climático. Tanto es así que en los últimos tiempos se ha producido un aumento de los puestos de trabajo relacionados con el medio ambiente, no sólo en Europa (donde ya hay alrededor de 7.360.000 empleos en la UE en sectores verdes -energías renovables, eficiencia energética, construcción

¹⁴⁸ https://www.ilo.org/Search5/search.do?searchWhat=EMPLEOS+VERDES&locale=es_ES

eficiente, agricultura orgánica, gestión de residuos y reciclaje*-) si no que hay un aumento en el ámbito laboral español.

En este caso la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cuenta con el Programa Empleos Verdes el cual trabaja para un desarrollo social y económico ambientalmente sostenible. Promueve la creación de empleos verdes a través de todo el mundo como una forma de generar trabajo decente y oportunidades de ingresos con un impacto ambiental reducido y una capacidad mayor para hacer frente a los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos.

Para ello, el programa sigue dos estrategias principales: por un lado, aborda el empleo y la dimensión social de las políticas ambientales para garantizar el trabajo decente a las generaciones presentes y futuras. Por otro lado, integra las preocupaciones ambientales en el mundo del trabajo para modificar los patrones de consumo y producción.

A nivel nacional, el programa opera en muchos países diferentes y en cuestiones muy variadas. A nivel internacional, el programa participa en debates políticos internacionales acerca del cambio climático y el desarrollo sostenible y construye, junto a sus socios, una base importante de conocimientos sobre la dimensión social de los problemas ambientales y el cambio climático.

En general, se puede decir que la transición hacia una economía más verde tiene potencial para crear millones de puestos de trabajo. Pero es posible que también conduzca a la reducción de personal en industrias con alta tasa de emisiones. Es difícil predecir la repercusión exacta puesto que las realidades nacionales son diversas. Sin embargo, la mayoría de los escenarios sugieren que el efecto neto será positivo. Los países que ya avanzan hacia una economía verde están siendo testigo de estos efectos.

Una economía más verde no es inclusiva ni socialmente sostenible de manera predeterminada. Las políticas sociales y de mercado de trabajo tendrán que complementar las políticas económicas y ambientales para amortiguar los inconvenientes de la transición hacia una economía verde. A nivel nacional, la progresión positiva dependerá también en gran medida de la coordinación de políticas y la planificación previa incluyendo nueva formación para trabajadores y mejora de competencias. Merecen especial atención los jóvenes, mujeres y hombres, que requieren conocimientos y habilidades apropiados para integrarse con éxito en la economía verde.¹⁴⁹

Para promover la creación de empleos verdes a nivel nacional, sub-nacional y local, el Programa Empleos Verdes aprovecha diferentes medios de acción:

1. Investigación nacional y sectorial del potencial de creación de empleos verdes.
2. Asesoramiento político basado en resultados de investigaciones para conectar mejor las políticas ambientales y laborales.
3. Creación de capacidades y formación para los mandantes a fin de facilitar y mejorar el diálogo social y asegurar su plena participación en debates políticos pertinentes y en estrategias nacionales.

¹⁴⁹ <https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs>

4. Proyectos piloto a nivel sectorial y local sobre iniciativa empresarial verde, negocios verdes, formación profesional, infraestructuras con alto coeficiente de empleo, etc.



Fuente: Comisión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Informe 'Better Business, Better World' publicado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Enero 2017

Generalmente, cuando uno piensa en empleos verdes rápidamente piensa en el sector del reciclaje o de las energías renovables, cuando en realidad hay empleos verdes en muchísimos más sectores laborales¹⁵⁰. Algunos ejemplos son:

- Agricultura ecológica
- Ganadería ecológica
- Auditoría, consultoría e ingeniería ambiental
- Ecodiseño
- Reciclaje
- Prevención y control de la contaminación
- Ecoemprendimiento
- Energías renovables
- Rehabilitación energética de los edificios
- Responsabilidad social corporativa
- Residuos
- Servicios energéticos dirigidos a empresas, ciudadanos e instituciones para que sea más eficiente.

¹⁵⁰ <https://elblogverde.com/>

ALGUNOS EMPLEOS VERDES INTERNACIONALES:

ESPAÑA:

En este país se habla de empleos verdes desde el año 2013 y han venido desarrollándolos en diferentes sectores de su economía como por ejemplo la rehabilitación energética de edificios. Esta actividad es un nicho de empleo que ofrece muchas oportunidades a los antiguos trabajadores de la construcción, muchos de ellos ahora en situación de desempleo. Además, ha reducido la dependencia energética del país y ha ayudado a mitigar el cambio climático.

La agricultura ecológica es otro gran ejemplo de empleo verde. España tiene la mayor superficie de agricultura ecológica de Europa, por lo que hay un tremendo nicho de empleo en el país en este sector. Ya cuentan con una gran tradición agrícola, enfocada en la producción ecológica.

El turismo sostenible, se da en las zonas rurales del interior, donde el turista puede tener una experiencia alternativa sin perder la calidad de su servicio al tiempo que fomenta el desarrollo rural y local.

La movilidad sostenible con los automóviles eléctricos, los sistemas de transporte eficiente y los combustibles alternativos son el motor de este sector en España.¹⁵¹

MEXICO:

La OIT organizó dentro de su programa de empleos verdes al país de tal forma que desarrollaron las siguientes estrategias¹⁵²:

Organizó y compartió la información para desarrollar una amplia base de conocimientos, herramientas probadas y enfoques prácticos; contribuyó con el análisis y la evaluación del potencial de empleos verdes en las actividades económicas verdes clave de la economía y los debates sectoriales sobre el tema; promovió la capacitación de los actores claves sobre políticas, programas y estrategias para promover empleos verdes y el desarrollo sostenible; identificaron buenas prácticas en sectores y territorios específicos, y promovieron la incorporación de los empleos verdes dentro de la política nacional como un elemento necesario para lograr el crecimiento de industrias ambientales emergentes, y la transición hacia una economía más sostenible y baja en carbono del país.

También establecieron las siguientes actividades: (i) Desarrollo de una plataforma virtual operativa para el intercambio de información y conocimientos sobre empleos verdes, (ii) Un curso de capacitación sobre empleos verdes y formulación de políticas, programas y planes de acción para su promoción para los mandantes, (iii) Foros de sensibilización e información sobre el tema, mesas de diálogo sectoriales y boletines semestrales, y (iv) Generación de nuevos conocimientos sobre los retos y oportunidades de creación de empleos verdes en sectores estratégicos de construcción, energía renovable, industria manufacturera y turismo

¹⁵¹ <https://www.ecoemprende.com/empleo-verde-espana>

¹⁵² <https://www.ilo.org/mexico/areas-de-cooperaci%C3%B3n/empleos-verdes>

en dos estados de la República, para lo que lograron llegar a grandes acuerdos y así pudieron poner en marcha el programa de los empleos verdes de la mano con la OIT.

ARGENTINA:

En Argentina se han tenido en cuenta diferentes variables para implementar los empleos verdes en el país, este trabajo se viene desarrollando desde el año 2015:

Se deben identificar los sectores que desempeñan actividades sostenibles. Para ello, se consideraron dos criterios: (i) ramas de actividad que constituyen sectores verdes por definición y (ii) sectores y empresas que desarrollan buenas prácticas ambientales.

Las actividades de saneamiento y las de gestión de residuos y parques nacionales, las energías renovables o la producción de bienes para uso ambiental constituyen un claro ejemplo de actividades verdes.

Para identificar los sectores y empresas que desarrollan buenas prácticas ambientales, se consideraron distintos criterios como: (i) políticas públicas, (ii) iniciativas privadas orientadas a promover un desarrollo sustentable, (iii) certificaciones con contenido ambiental (p. ej. GLOBAL G.A.P., certificaciones orgánicas, ISO 14001 y normas de calidad). Es importante mencionar que algunos sectores y conjuntos de empresas con buenas prácticas ambientales no pudieron ser identificados con la información disponible.¹⁵³

Por otro lado, para estimar el empleo verde también es necesario identificar el trabajo decente. Si bien los indicadores que lo definen son objeto de un debate muy complejo, en este estudio sobre la Argentina se utilizó como indicador principal la condición de asalariados registrados en el sistema de seguridad social, la cual incluye muchas dimensiones de trabajo decente:

Figura 1

El fortalecimiento de la economía verde genera beneficios en las áreas económica, ambiental y social; además, favorece el mutuo beneficio entre estas dimensiones.



- Cobertura de salud para el trabajador y su familia a través de una obra social.
- Percepción de las asignaciones familiares.
- Inserción en el sistema previsional.
- Cobertura de riesgos del trabajo.
- Seguro de desempleo.

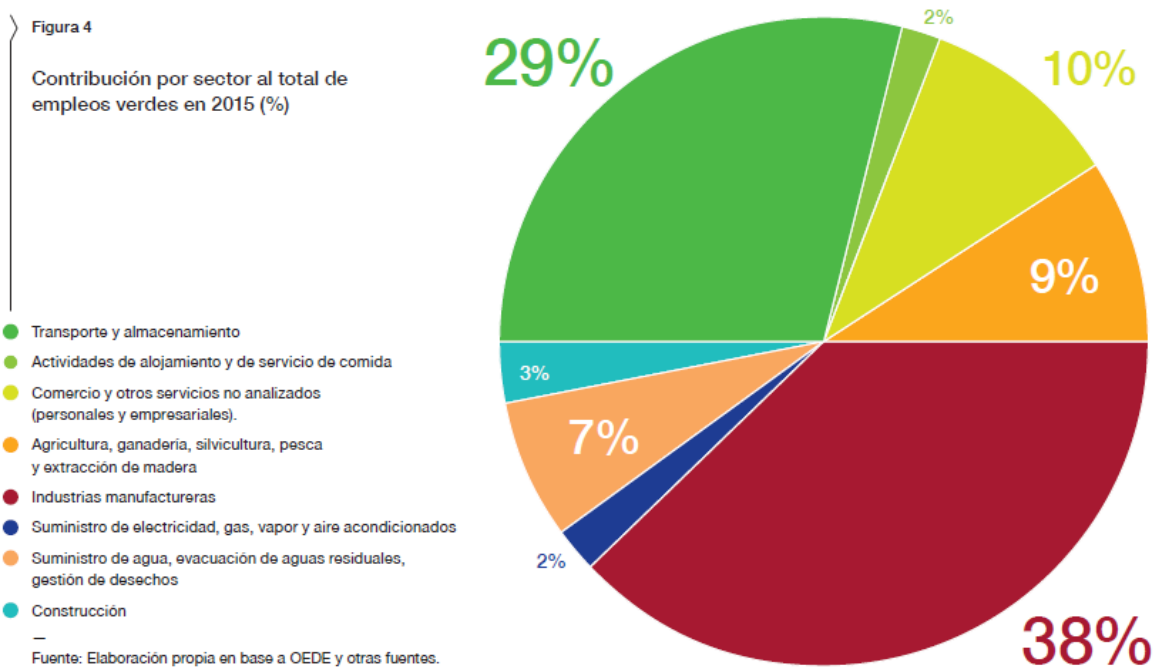
¹⁵³ https://www.ilo.org/buenosaires/temas/empleos-verdes/WCMS_556477/lang--es/index.htm

- Salario mínimo y básico de convenio.



Para 2015, se estimó que existieran 650.000 empleos verdes en Argentina, lo que representaba el 7% del total de los asalariados registrados. La mayor parte del empleo verde se concentró en la industria manufacturera (38%), transporte (29%), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (9%), y en el suministro de agua y gestión de residuos (7%). Las actividades de servicios y comercio vinculadas con la protección ambiental sumaron un 10%.

Figura 4
Contribución por sector al total de empleos verdes en 2015 (%)

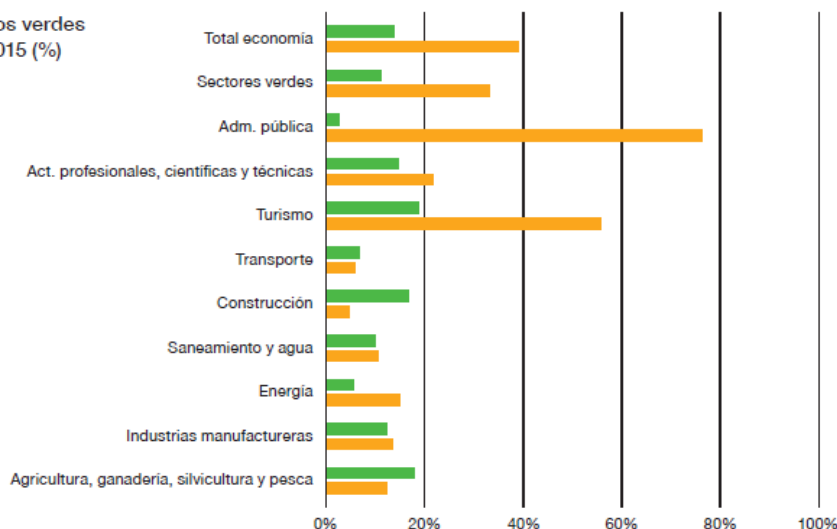


La investigación relevó toda la estructura productiva argentina y se enfocó en algunos perfiles de trabajadores. La presencia de jóvenes y trabajadoras con un empleo verde en diversos sectores de la economía, entre los cuales se destacan la administración pública y el turismo (con alta presencia de trabajadoras), y la construcción, agricultura y turismo (con un 20% de jóvenes⁶, aproximadamente).

Figura 5

Jóvenes y mujeres con empleos verdes por actividad económica en 2015 (%)

● Jóvenes
● Mujeres



Muchos aspectos de la transición a una economía verde requieren un firme apoyo. Las políticas sociales deben elaborarse al paso que las políticas medioambientales y económicas. Es preciso invertir en las competencias profesionales que requerirá una economía mundial con bajas emisiones de carbono, y elaborar unas políticas con miras a gestionar los ajustes en el empleo en diferentes sectores de la economía. Asimismo, desde el punto de vista de la solidaridad social, y con el fin de movilizar el apoyo político y en el lugar de trabajo a los cambios que se necesitan, es imperativo formular políticas para garantizar que se proteja a aquéllos que se ven negativamente afectados a través del apoyo a los ingresos, oportunidades de readaptación profesional y el apoyo al realojamiento.

CHILE:

En el Cono Sur de América Latina, la OIT provee asistencia técnica en la formulación de políticas y medidas que contribuyan al desarrollo de empresas y economías sostenibles que sean eficientes, socialmente justas y ambientalmente correctas. Algunos componentes importantes del programa son la capacitación de los actores sociales, la promoción de empleos verdes en el manejo y reciclaje de los desechos, la creación de empleos verdes en la energía renovable y la creación de empresas medioambientalmente sostenibles. El programa en este país inició en el año 2010.¹⁵⁴

¹⁵⁴ <https://www.ilo.org/santiago/temas/empleos-verdes/lang--es/index.htm>

En el contexto de la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y considerando el aporte importante de los recicladores de base en el manejo de los residuos, el Ministerio de Medio Ambiente creó, en diciembre de 2010, una mesa de trabajo para la elaboración de una política pública que aborde la inclusión de los recicladores en la gestión de residuos. En la mesa participan representantes de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Municipalidades, la Organización Internacional del Trabajo, el Movimiento Nacional de Recicladores de Chile y la Fundación AVINA. Con la activa participación de todos estos actores, se elaboró un estudio y un borrador propuesta de política.

La OIT también participa en la organización del Ciclo “Empresa, Sociedad, Estado y Reciclaje de Residuos”, que convoca a empresas, organizaciones empresariales, fundaciones, centros de estudio y actores vinculados a la recuperación de residuos, preocupados por avanzar en Chile hacia una gestión más sustentable de los mismos. Los otros organizadores son el Centro de Envases y Embalajes, la Fundación Casa de la Paz, el Movimiento Nacional de Recicladores de Chile y la Fundación AVINA, bajo el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente.

Como resultado de este ciclo, se generó una propuesta que pretende dar forma al diseño de un marco regulatorio para la Responsabilidad del Productor (REP) que plantea el Proyecto de Ley impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente. Dicha propuesta intenta conciliar ciertas estrategias público-privadas esenciales para alcanzar determinados niveles de reciclaje de envases y embalajes post-consumo con la necesidad de asegurar oportunidades adecuadas para la dignificación del trabajo de los recicladores de base.

COSTA RICA

Durante los últimos años, Costa Rica se ha caracterizado por ser uno de los países pioneros en desarrollo sostenible. De hecho, en septiembre de 2016, se convirtió en el primer país en suscribir un Pacto Nacional por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su plan de acción se ha basado en la integración de actores como los tres poderes de la República, los sindicatos, el sector privado, la academia y la sociedad civil, dentro del cumplimiento de los ODS, anteponiendo aquellos objetivos que son prioridad para la población de este país y sus necesidades específicas.

La actividad en la cual este país se ha convertido en un referente a nivel regional e incluso internacional es el turismo sostenible. Todo esto, con la colaboración del Instituto Nacional de Biodiversidad y la transformación de las políticas de Estado., por medio de las cuales se promueven las economías verdes a través de la introducción de tecnologías verdes e innovaciones ecológicas. Gracias a que el país identificó la biodiversidad y los recursos naturales como capital, se ha logrado la creación de diversos negocios verdes que fomentan la empleabilidad en esta área.

Algunos de los programas desarrollados por el Estado para incentivar la economía, los negocios y los empleos verdes son el Programa de Promoción de Empresas Responsables y Sostenibles (SCORE), la promoción de la Responsabilidad Ampliada del Productor, el Entorno Propicio para la Empresa Sostenible (EPES), la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y la Dirección de Cambio Climático del gobierno (DCC) liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía cuyo objetivo

es consolidar lo que ellos denominan como una “visión eco competitiva” para posicionar al país como referente en reducción de emisiones y adaptación y mitigación del cambio climático.

COLOMBIA:

En Colombia se habla de empleos verdes aproximadamente desde el año 2018, cuando el 4 de diciembre mediante la resolución número 001242 de 2018 el Ministerio de Trabajo a través de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, otorgó a Talento Verde S.A.S la autorización para prestar los servicios de gestión y colocación de empleos verdes a través de su punto virtual www.talentoverde.com¹⁵⁵

En Colombia el panorama es muy alentador, pues se ha visto cómo el Gobierno ha hecho una apuesta por incluir el tema de la generación de empleos verdes en la Política de Crecimiento Verde y en la Política Nacional de Negocios Verdes. Que hoy el Ministerio de Trabajo a través de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público otorgue esta autorización, confirma su disposición con la construcción del capital humano para lograr la sostenibilidad del país.

Hasta el momento Talento Verde es la primera agencia privada autorizada para la prestación del servicio público de empleos verdes a nivel nacional, lo que representa no solo un reto, sino una responsabilidad muy grande de parte de esta organización con las expectativas del gobierno, de los oferentes y de los demandantes; una de las principales metas de esta organización es que para el año 2030 se podrían llegar a generar un total de 84.115 empleos verdes nuevos en el país, lo que eliminaría considerablemente los altos índices de contaminación en el país.

Parece increíble que se haya vivido una nueva crisis económica mundial, hoy causada por el COVID-19 y la cual podría convertirse según el Fondo Monetario Internacional en la peor desde hace 90 años. Esta agencia desde su fundación ha tenido tiempo para hacer las cosas diferentes, para impulsar una verdadera transición verde, pero el deterioro en el medio ambiente es cada vez más notorio.

Aunque el panorama luce desalentador, una recuperación económica verde sigue siendo una de las mejores y más importantes apuestas de los gobiernos del mundo y detrás de la pandemia y sus terribles efectos a nivel social y económico, viene una problemática de la cual no podemos seguir siendo ajenos, la crisis climática.

No es momento para seguir dilatando los compromisos internacionales de la Agenda a 2030, la recuperación esta vez debe ser diferente y más si con ello se podrá garantizar nuevas formas y oportunidades de empleo decente, pero esto requerirá de líderes políticos con ímpetu, que prioricen los sectores verdes y permitan a partir de normativas y políticas públicas dar mayor certidumbre a las inversiones para que prospere una economía verde, además son necesarios líderes

¹⁵⁵ <https://talentoverde.com>

organizacionales que hagan apuestas contundentes en contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente.

Si hay intención de los gobiernos del mundo en hacer una reactivación económica verde, estaremos dando un gran paso hacia la generación de nuevos empleos verdes, que pueden desarrollarse en muchos sectores económicos tanto a escala urbana como rural. Hay evidencia de cómo toda la fuerza laboral, desde los trabajadores que desempeñan actividades operativas hasta los más especializados tiene oportunidad de emplearse en un mercado laboral que responde a las presiones cada vez mayores sobre protección y preservación del medio ambiente.

Las experiencias internacionales muestran la importante contribución que hacen los empleos verdes a un crecimiento económico bajo en emisiones en países en desarrollo (de los más afectados por la actual crisis), al reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida de la población, además promueven la inclusión laboral de personas en condición de vulnerabilidad.

Avanzar hacia un crecimiento verde generará millones de empleos en el mundo, pero también puede haber pérdidas de empleos ocasionadas principalmente por la desaparición de algunas actividades de los sectores tradicionales, por lo que es imperativo que a la par que se promueven los empleos verdes para superar la crisis, también se gestione una transición justa para todos, con políticas públicas coherentes y el fomento del diálogo social.

Tendrá un gran efecto sobre los trabajadores y las comunidades. Muchos se beneficiarán, pero otros pueden encontrar dificultades dado que ciertas industrias y ocupaciones están en declive. Desde el punto de vista de la solidaridad social y con el fin de movilizar el apoyo en el ámbito político y en los lugares de trabajo para realizar los cambios necesarios, es imperativo desarrollar políticas que aseguren que aquellos que puedan verse afectados negativamente estén protegidos mediante prestaciones salariales, oportunidades de reconversión, ayudas para la reubicación y similares.

El diálogo social es un componente de importancia crítica en una Transición Justa, especialmente en los lugares de trabajo, donde se necesitan las voces de trabajadores y empleadores para determinar el diseño de nuevos sistemas de producción y prácticas de trabajo sostenible. En algunos casos, empleadores y sindicatos están empezando a trabajar juntos para hacer más verde el lugar de trabajo basándose en una larga tradición de colaboración en materia de seguridad y salud en el trabajo y otros temas.

El marco de Transición Justa de la OIT se dibuja en el Programa de Trabajo Decente, en su mandato de establecimiento de normas y en la Declaración (de la OIT) sobre la justicia social para una globalización equitativa. El marco puede aplicarse en ámbitos como políticas activas de mercados de trabajo, protección del salario, nuevas formaciones, respeto a las normas internacionales de trabajo, desarrollo de iniciativas empresariales y creación de oportunidades de ingresos alternativas.¹⁵⁶

En general, se puede decir que la transición hacia una economía más verde crea y seguirá creando empleo en toda una variedad de sectores. Según el nuevo informe de OIT/PNUMA/CSI/OIE “Hacia

¹⁵⁶ <https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang-es/index.htm>

el Desarrollo Sostenible”, la mayoría de los estudios indican un incremento del orden del 0,5-2 por ciento, lo que se traduciría, globalmente, en 15-60 millones de nuevos puestos de trabajo.¹⁵⁷

Se espera que se produzcan pérdidas de empleo en algunos sectores de la economía provocadas por el cambio hacia una economía más verde. Hasta el uno por ciento de mano de obra en países industrializados donde es previsible un mayor impacto en sus mercados de trabajo, es susceptible de verse afectado por la transición entre sectores económicos.

Está previsto que los movimientos de trabajadores entre empresas sean diez veces mayores. Sin embargo, este impacto sería incluso pequeño en comparación con experiencias asociadas a la globalización experimentadas en las últimas décadas.

En general, se puede decir que la transición hacia una economía verde tiene potencial para crear millones de puestos de trabajo. Pero es posible que también conduzca a la reducción de personal en industrias con alta tasa de emisiones. Es difícil predecir la repercusión exacta puesto que las realidades nacionales son diversas. Sin embargo, la mayoría de los escenarios sugieren que el efecto neto será positivo. Los países que ya avanzan hacia una economía verde están siendo testigo de estos efectos.

Una economía más verde no es inclusiva ni socialmente sostenible de manera predeterminada. Las políticas sociales y de mercado de trabajo tendrán que complementar las políticas económicas y ambientales para amortiguar los inconvenientes de la transición hacia una economía verde. A nivel nacional, la progresión positiva dependerá también en gran medida de la coordinación de políticas y la planificación previa incluyendo nueva formación para trabajadores y mejora de competencias. Merecen especial atención los jóvenes, mujeres y hombres, que requieren conocimientos y habilidades apropiados para integrarse con éxito en la economía verde.

¿Qué hace la organización Talento Verde?

Básicamente buscan y desarrollan el talento para la sostenibilidad ambiental de Colombia, en donde los usuarios se suscriben al igual que las empresas, y tanto el usuario como la empresa buscan los perfiles indicados para el empleo verde que se esté requiriendo.

Trabajan también en 4 aspectos:

1. Servicios de gestión y colocación de empleo verde - Personas
2. Servicios de gestión y colocación de empleo verde - Empresas
3. Desarrollo del talento para la sostenibilidad ambiental - Empresas – IES
4. Consultoría organizacional

En este caso la Administración Distrital debe tratar de encaminar esfuerzos para que las estrategias utilizadas para cumplir las metas del nuevo Plan de Desarrollo Distrital estén enfocadas como lo ha

¹⁵⁷ <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/>

realizado esta organización para que la transición justa en Bogotá se haga con un mayor profesionalismo y para que se aprovechen al máximo las experiencias ya obtenidas por ellos y así poder sacar a flote prontamente los empleos verdes en la ciudad de una manera exitosa, eficiente y eficaz.

En la ciudad de Bogotá se viene hablando de empleos verdes y poco a poco se han realizado pequeños esfuerzos para que los ciudadanos capitalinos adquieran conciencia del tema ambiental y climático de la ciudad, del país y del mundo; es así que en cinco ocasiones se ha realizado un programa de divulgación denominado Semana Ecoempresarial que busca mostrar las tendencias de negocios verdes e inclusivos; en el mes de junio del año 2020, los días 23, 24, 25 y 26, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó la quinta versión de esta semana con un panel virtual el cual contó con la participación de Jorge Enrique Jiménez Guacaneme, jefe Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente; Sergio Rengifo, director de Capitales del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible y Diego Francisco Rubio Goyes, subdirector de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente.¹⁵⁸

Durante cuatro días se habilitaron diferentes espacios para visibilizar las acciones lideradas desde la Secretaría de Ambiente para incentivar los negocios verdes en Bogotá. En total se vincularon cerca de 3.000 personas entre líderes de las 36 empresas validadas y comunidad en general, quienes se interesaron en conocer y aprender acerca de la oferta de bienes y servicios sostenibles de la capital.

Los participantes, a través de una encuesta virtual, mostraron estar satisfechos con la oferta de formación y sensibilización de la Secretaría de Ambiente en torno a esta actividad empresarial. Las temáticas más llamativas y de mayor aceptación fueron aquellas que mostraron los procesos de los negocios verdes y cómo fomentar la creación de nuevos emprendedores, que van en búsqueda de la sostenibilidad y respeto por el medioambiente.

En este panel virtual la Secretaría Distrital de Ambiente, aprovechó para divulgar el “Ecodirectorio”, una herramienta por medio de la cual se busca la promoción de bienes y servicios que demuestren responsabilidad e incorporación de criterios ambientales y además cuenta con información referente a los 36 negocios verdes avalados por la Administración Distrital.¹⁵⁹

MARCO NORMATIVO

- **Tratados internacionales**

Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático. Este protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Convenio de Diversidad Biológica. Es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas.

¹⁵⁸ <http://www.ambientebogota.gov.co/>

¹⁵⁹ http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. El Convenio tiene por objetivo alentar a las Partes a promover la cooperación para el intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono

Convención de Ramsar. Promueve la conservación y el uso racional de los humedales.

Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Rio+20). Sus principales objetivos fueron asegurar un acuerdo político en desarrollo sostenible abordando nuevos retos.

- **De orden constitucional**

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

- **De orden Legal**

Ley 99 de 1993 *“POR LA CUAL SE CREA EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, SE REORDENA EL SECTOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, SE ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL, SINA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*

- **De orden Normativo**

Acuerdo No. 19 de 1996 *“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL”*

Acuerdo No. 248 de 2006 *“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*

Acuerdo No. 197 de 2005 *“POR EL CUAL SE ESTABLECE LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE”*

Decreto 322 de 1994 *“POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL”*

Decreto 456 de 2008 *“POR EL CUAL SE REFORMA EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL”*

Resolución 6562 de 2011 - Secretaría Distrital de Ambiente – *“ADOPTA EL PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ”*

Resolución 081 de 2017 - Secretaría Jurídica Distrital – *“LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, ESTABLECE EL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL”*

COMPETENCIA

Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la Ley:

2. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito

(...)

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

IMPACTO FISCAL

Esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el Acuerdo No. 927 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, por lo tanto, no tiene impacto ambiental.

El presupuesto se encuentra ya apropiado como meta, de suerte que puede afirmarse que esta iniciativa no genera impacto fiscal toda vez que las acciones que propone este proyecto no implican desarrollar los mandatos del Acuerdo No. 927 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”

Cordialmente,

EMEL ROJAS CASTILLO

Concejal de Bogotá

Partido Nueva Fuerza Democrática

PROYECTO DE ACUERDO NO 412 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA INCENTIVAR LOS EMPLEOS VERDES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

Artículo 1. La presente iniciativa tiene como objeto dictar los lineamientos para incentivar, los empleos verdes de la ciudad de Bogotá, para lo cual la Administración Distrital a través de diferentes sectores y sus competencias funcionales, seguirá los parámetros establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo y los dispuestos a continuación:

- a) Identificar las actividades económicas verdes clave en la economía de la ciudad.
- b) Desarrollar investigaciones y reportes que contribuyan con el análisis y la evaluación del potencial de la empleabilidad verde en la ciudad.
- c) Promover la capacitación de los actores clave sobre las políticas, programas y estrategias que incentivan los empleos verdes.

- d) Fomentar la generación de nuevos conocimientos sobre los retos y oportunidades que supone la creación de empleos verdes en sectores estratégicos.
- e) Facilitar espacios que permitan el intercambio de información y conocimientos sobre empleos verdes.
- f) Adelantar la implementación de una plataforma virtual para la divulgación de la demanda y oferta de empleos verdes, en la cual se favorezca la interacción entre empresas y la comunidad en general.
- g) Identificar los sectores y empresas que desarrollan buenas prácticas ambientales y ejecutar planes de incentivos dirigidos a estas entidades considerando distintos criterios como la obtención de certificaciones con contenido ambiental, la implementación de Programas de Gestión Ambiental y otras iniciativas orientadas a promover el desarrollo sostenible.

Artículo 2. La Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de realizar el diseño, implementación y desarrollo de las estrategias necesarias para implementar y poner en marcha los empleos verdes en la ciudad de Bogotá.

Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico promoverán de manera conjunta el desarrollo e implementación de los empleos verdes en la ciudad de Bogotá.

Artículo 3. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente, llevará un control de los resultados de la implementación de los empleos verdes en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las metas trazadas en el Plan Distrital de Desarrollo.

Artículo 4. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente, podrá buscar alianzas o articular acciones con otras secretarías distritales y/o entidades públicas o privadas, que le permitan cumplir el presente Acuerdo.

Artículo 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 413 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 268 DE 2006 Y SE REGLAMENTA LA ASISTENCIA ESPIRITUAL EN INSTITUCIONES DEL DISTRITO CAPITAL (CAPELLANÍAS)”

EXPOSICION DE MOTIVOS**1. ASPECTOS GENERALES**

Desde la Constitución de 1.991, donde se reconoció que Colombia es un estado Laico con libertad de Cultos, los cuales existen bajo diferentes confesiones religiosas, que así mismo cada una de ellas mantienen familias de feligreses a lo largo de la geografía Distrital, teniendo un gran auge en su población juvenil, la cual se encuentra descuidada o no existe en los Centros de enseñanza del Distrito capital, así mismo pasa también en los adultos jóvenes que pertenecen a las entidades de estudios superiores;

El Culto es un derecho constitucional donde todos sus adeptos deben poder desarrollar su fe, en todos los lugares preponderantes de la sociedad.

La importancia que revisten las organizaciones religiosas en nuestra ciudad.

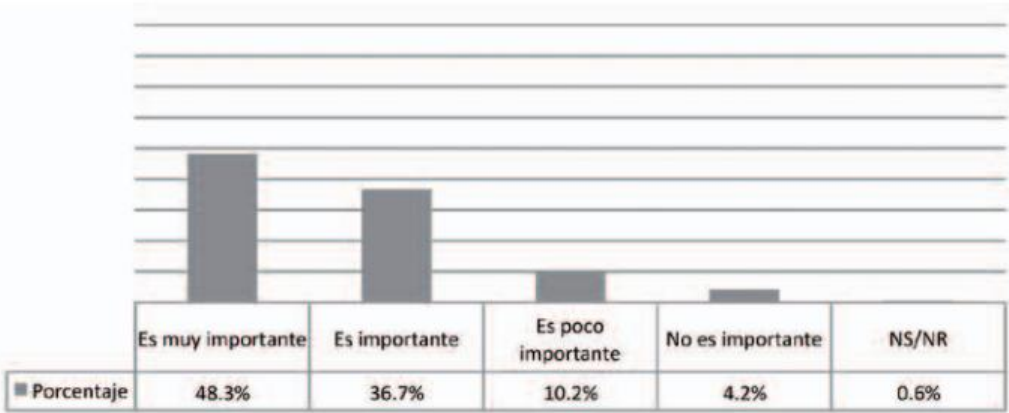
Según el registro de entidades religiosas no católicas – ARNC del Ministerio del interior, Bogotá D. C. cuenta con aproximados 1544 lugares de culto¹ e iglesias determinadas en organizaciones confesionales con personería jurídica reconocida, distintas a las de la Iglesia Católica, lo cual, aunado a lo explicado anteriormente, suman un estamento importante en la vida cotidiana de nuestra ciudad. Es Inexplicable que, ante tal preponderancia de las organizaciones religiosas, estas solo cuenten con la posibilidad de asistir a sus seguidores en los espacios determinados por el acuerdo no cuenten con un espacio con la posibilidad de servir a sus seguidores, y dentro del seno de lugares donde aún no se ha logrado establecer su función en la vida de sus feligreses.

Por otra parte, es importante señalar lo expresado en el informe de la Universidad Nacional de Colombia denominado “*Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia*” el cual luego de ejecutar análisis y prácticas de tipo estadístico concluyó lo siguiente:

“Pese a observar un constante avance de la secularización, la gran mayoría de los colombianos se siguen considerando “creyentes” –94,1% de la población–; el 58,2% se considera “creyente practicante” y el 35,9% “creyente pero no practicante”. Ateos y diagnósticos suman cerca del 5% de la población. Asimismo, la gran mayoría de la población (85%) considera que la religión “es importante” o “muy importante” en sus vidas. (Ver tabla2).

1. Hernández (13 01 2024) Iglesias en Bogotá: Cuántas hay actualmente en la capital de Colombia? *El Tiempo*. recurso electrónico <https://www.eltiempo.com/bogota/iglesias-en-cuantas-hay-actualmente-en-la-capital-de-colombia-844292>

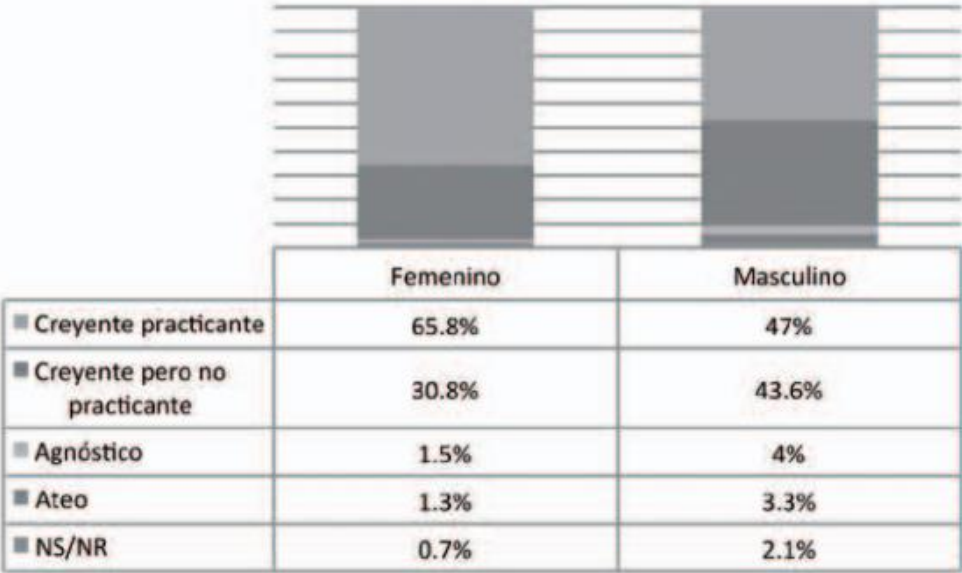
Tabla 2. ¿Qué tan importante es la religión en su vida?



Por lo tanto, la sociedad colombiana es una sociedad “creyente”, donde el ateísmo y el agnosticismo constituyen aún un fenómeno marginal. A diferencia de

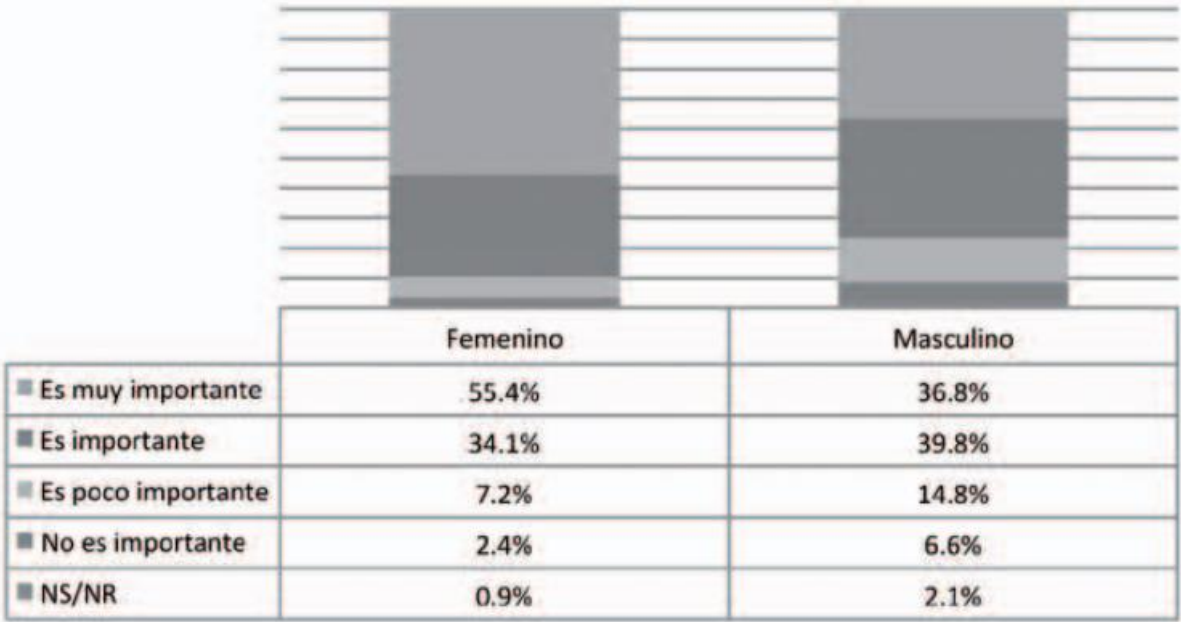
Europa occidental, en Colombia el proceso de secularización no ha implicado un crecimiento drástico del ateísmo, ni un declive de las prácticas religiosas institucionales. Paradójicamente, más que el declive de la religión, la secularización ha acarreado la recomposición de las fuerzas religiosas. (Ver tabla 3), el porcentaje de “creyentes” y de “creyentes practicantes” aumenta notoriamente entre la población femenina. El 96,6% de las mujeres se define como creyentes, frente al 90,6% de los hombres.

Tabla 3. Creyentes, ateos y agnósticos / distribución por sexo



Asimismo, el 65,8% de las mujeres se consideran “creyentes practicantes” frente al 47% de los hombres. El porcentaje de ateos y agnósticos es más alto entre los hombres que entre las mujeres. Como se observa en la tabla 4, el 89,5% de las mujeres considera que la religión es “importante” o “muy importante” en sus vidas, frente al 76,6% de los hombres.”¹⁶⁰

Tabla 4. ¿Qué tan importante es la religión en su vida? / Distribución por sexo



Aunado a
lo
anterior
el

BOLETIN 24 BOGOTÁ: CAPITAL DE CULTURAS “Dimensiones de la cultura en Bogotá a partir de la Encuesta Bienal de Culturas”, de la Secretaria de Planeación de Bogotá D. C. señaló que para 2009 la pertenencia poblacional a alguna religión en Bogotá era la siguiente:

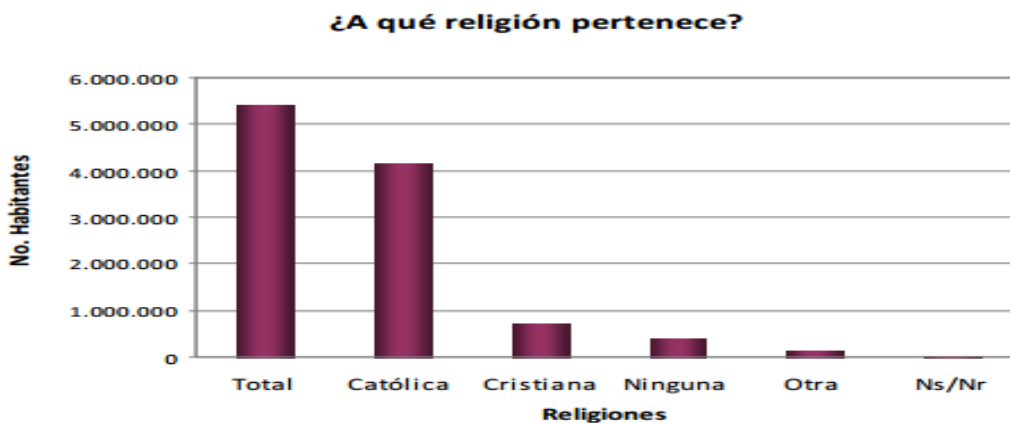
“La religión, entendida comúnmente dentro de la esfera de las creencias opera como una categoría de auto identificación de modo que es importante en las acciones y la regulación del comportamiento de las personas, aunque no necesariamente riñe con la identificación étnica u otras. La encuesta preguntó: ¿a qué religión pertenece? Como se puede observar el 76.7% de la población se reconocen como de creencia católica, el segundo grupo “cristiana” con 13.3% en tanto que los que se consideraron no pertenecientes a ninguna (afirmación diferente de reconocerse como ateo) fueron del

¹⁶⁰ Universidad Nacional de Colombia. Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia. Recurso electrónico disponible en <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/3636/4883>.

7.5%, otras religiones apenas llegan al 2.1%. La tradición histórica guarda sin duda relación con la caracterización.”¹⁶¹

Para el año 2017 de la cultura en Bogotá a partir de la Encuesta Bienal de Culturas”, de la Secretaria de Planeación de Bogotá D. C. señaló que para 2009 la pertenencia poblacional a alguna religión en Bogotá era la siguiente:

Gráfico 9.
Pertenencia a religión por autoreconocimiento
2009



Fuente: EBC 2009 - SCRD-Obs. de Culturas. Elaboración SDP – Dirección de Estudios Macro
Nota: Población de 13 años y más, residente en área urbana en predios de uso residencial

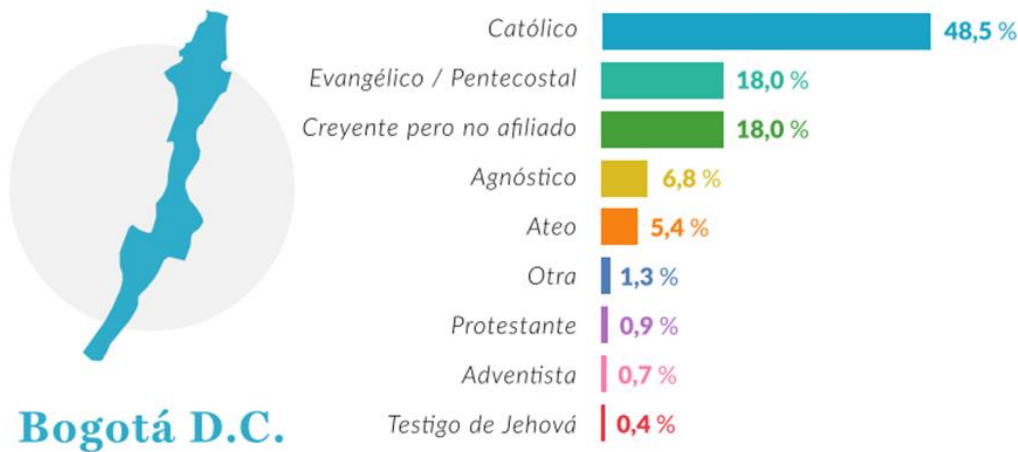
Por otro lado, para el año 2019 en “la

diversidad religiosa, valores y participación política en Colombia”, se expuso una encuesta de acercamiento

¹⁶¹ Secretaria de Planeación de Bogotá D. C. BOLETIN 24 BOGOTÁ: CAPITAL DE CULTURAS Dimensiones de la cultura en Bogotá a partir de la Encuesta Bienal de Culturas de la Secretaría de Planeación de Bogotá D. C. Recurso electrónico disponible en <http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2010/DICE107-CartillaBogCapitalCultural-2010.pdf>.

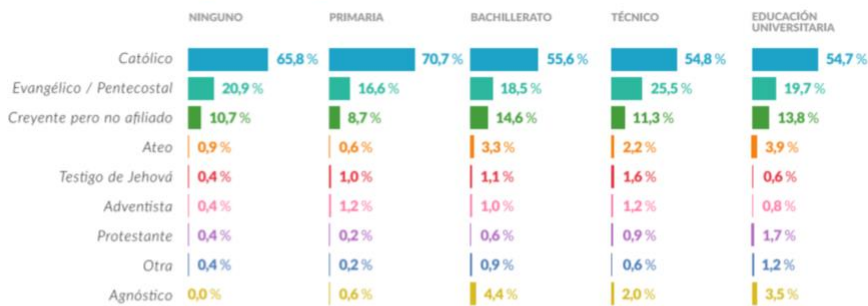
y de pertenencia a alguna creencia religiosa en el Distrito Capital, mostrando que es un gran porcentaje de creyentes en las diferentes confesiones, de la siguiente manera:

Identidad religiosa según región

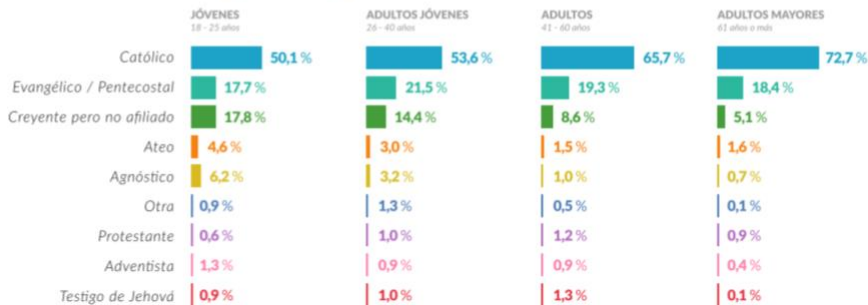


Como se puede evidenciar la población Bogotana que profesa alguna religión es la inmensa mayoría, por lo que es importante contar con espacios efectivos en la consecución y priorización de las metas en los planes de Desarrollo.

Identidad religiosa según nivel educativo



Identidad religiosa según edad



Las anteriores estadísticas nos muestran, la realidad de la población mayormente joven que se encuentra desde las edades tempranas hasta las universitarias, manifiesta una identidad religiosa establecida en un porcentaje mayoritario del 94.5% lo que presupone realizar acciones que detonen en un bienestar general de sus creencias

Organizaciones religiosas como entes activos de ciudadanía.

En la actualidad, la práctica de la democracia establece nuevos mecanismos de control y participación, capaces de limitar, influir y decidir en las funciones que corresponde realizar al Estado, permitiendo el análisis de los fines de la democracia desde el desarrollo de la libertad y la igualdad, que son, por su esencia y significado, los verdaderos valores de la democracia. (Vila, 2008:4).

Si bien es cierto que la ciudad ha presentado una serie de avances de tipo social, cultural y urbano en los últimos años, también hay que decir que dichos adelantos han excluido notoriamente a la población religiosa de la capital.

Capellanías

Origen y Concepto de Capellanía

Wikipedia

La enciclopedia Wikipedia enuncia que: La capellanía o beneficio eclesiástico es una "institución hecha con autoridad de Juez Ordinario y fundación de rentas competente con obligación de Misas y algunas con asistencia a la Horas Canónicas. Las hay colativas, perpetuas y otras ad nutum amovibles."

Iglesia del Pilar,

La figura del capellán ha sido una constante en la historia de la religión, especialmente en el cristianismo. Su papel, aunque a menudo se confunde con el de un pastor, tiene matices únicos que lo distinguen y lo hacen invaluable en la vida espiritual de las personas. [El Capellán En La Biblia: Un Viaje Espiritual A Través De La Historia | Iglesia Del Pilar](#)

Algunas iglesias y/o ministerios cristianos:

Dichas entidades nos determinan los inicios históricos de las capellanías y los remontan a tiempos bíblicos. como lo son “ *Noami K. Paget y Janet R McCormack (altas autoridades en Capellanía) y la North American Misión Board (de la SBC),* ” donde dan los inicios en uno de primeros sucesores de la casta sacerdotal hebrea de esta manera: “ *la larga historia de la capellanía se inicia con el personaje de “Finees”, levita nieto de Aarón que respondió al llamado de Moisés para luchar como capellán (ver Num. 31:6).*”

Los levitas reciben este nombre por ser descendientes directos de Leví, uno de los hijos de Jacob, quien a su vez era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Aarón, hermano de Moisés, y sus descendientes directos eran levitas. Finees, mencionado en los textos bíblicos, era un levita o sacerdote por sucesión, es decir, elegido para este oficio por nacimiento y linaje.

La Biblia menciona este linaje sacerdotal en varios pasajes. En Éxodo 28:1, Dios instruye a Moisés: *“Harás que se acerquen a ti Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes: Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón”*. De manera similar, en Números 3:10 se establece: *“Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio”*. Estos versículos subrayan claramente el rol sacerdotal de Aarón y sus descendientes

En otros tiempos las capellanías:

El ministerio Shalom (cristianos con compromiso) nos comenta “En los tiempos más cercanos es a partir de John Gano, ministro Bautista de la ciudad de Nueva York que sirvió de Capellán militar bajo las órdenes del General George Washington (aprox. 1790). De allí es que los Bautistas del Sur encontraron las raíces de su ministerio de Capellanía. -A través de la historia, Capellanes de diferentes denominaciones de la buena fe cristiana han sido guiados por el Espíritu Santo y han respondido al llamado de Dios para servir a la gente en sus diversas necesidades.

Otras referencias que da Shalom, La historia de los capellanes, aunque se remonta a tiempos bíblicos, se asocia con una antigua leyenda sobre un joven conocido como San Martín de Tours. Nacido en el año 316 d.C. en Panonia, una provincia romana que actualmente es parte de Hungría, Martín seguía religiones paganas. A los 16 años, se enlistó en las fuerzas militares romanas, donde se destacó como soldado y oficial.

A los 21 años, la tropa que comandaba fue enviada a Amiens, en la Galia (hoy Francia). Una noche muy fría, mientras caminaba fuera del campamento, Martín notó a un mendigo que suplicaba ayuda y era ignorado por los transeúntes. Sin nada más que ofrecer, Martín rompió su capa en dos y le dio la mitad al mendigo, conservando la otra mitad.

Esa misma noche, Martín tuvo una visión en la que se le reveló que el mendigo era Jesucristo. Esta experiencia lo perturbó y lo motivó a convertirse al cristianismo, siendo bautizado más tarde por el obispo San Hilario. Al compartir su testimonio, muchas personas aceptaron el cristianismo.

La mitad de la capa que Martín retuvo se convirtió en una reliquia y un símbolo del encuentro con Jesucristo. Esta capa fue guardada en un cofre especial llamado “capilla” o “capella”. De ahí proviene el término “capilla”, que literalmente significa el lugar donde se guarda la capa. La persona encargada de proteger la capa era el “capellanus”, que en español es “capellán”.

En tiempos más cercanos: El inicio también tiene trasfondos arcaicos; “las raíces de la historia de la capellanía se remontan a cuando Ilustres hombres y mujeres de religión frecuentemente acompañaban a Ejércitos que iban a la guerra, estos partían “No” como guerreros, sino como Sacerdotes al cuidado Espiritual de los guerreros. Capellanes viajaron con Sir Francis Drake y con George Washington durante la guerra de la revolución. Los Capellanes han sido consejeros y consultados por Reyes, Magistrados, Parlamentos y Gobiernos; también los encarcelados, enfermos y desahuciados o condenados consultan y se apoyan en complejo trabajo de los Insignes Capellanes.”

Así, los capellanes están encargados de compartir y ofrecer el amor de Dios a todos aquellos que estén en necesidad. Estos hombres y mujeres aceptan el reto de ir donde otros no quieren ir y estar con quienes nadie atiende.

Se debe aclarar que esto

Donde se ejerce las capellanías:

Las capellanías se ejercen de diversas maneras en todo el mundo, dependiendo del contexto y las necesidades de la comunidad a la que sirven. Aquí podemos observar un resumen de algunos tipos de capellanías y cómo se ejercen:

Capellanía Militar: Los capellanes militares brindan apoyo espiritual y emocional a los miembros de las fuerzas armadas y sus familias. Ofrecen servicios religiosos, asesoramiento y acompañamiento en situaciones de estrés y conflicto¹.

Capellanía Hospitalaria: Los capellanes en hospitales, clínicas y centros de salud; proporcionan apoyo espiritual a pacientes, familiares y personal médico. Ayudan a las personas a enfrentar enfermedades, hospitalizaciones y el duelo¹.

Capellanía Carcelaria: Los capellanes en prisiones trabajan con los reclusos, ofreciendo servicios religiosos, asesoramiento y programas de rehabilitación. Su objetivo es apoyar la reintegración social y el bienestar espiritual de los internos¹.

Capellanía Escolar y Universitaria: En instituciones educativas, los capellanes apoyan a estudiantes, profesores y personal administrativo. Ofrecen orientación espiritual, asesoramiento y organizan actividades religiosas y de bienestar ¹, mejoran las relaciones de conflicto entre la comunidad educativa; ayudan a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, previenen el suicidio y el bullying.

Capellanía Empresarial: En el ámbito empresarial, los capellanes brindan apoyo a empleados y empleadores, ayudando a manejar el estrés laboral, conflictos y promoviendo un ambiente de trabajo saludable¹.

Capellanía Deportiva: Los capellanes deportivos trabajan con atletas y equipos, ofreciendo apoyo espiritual y emocional, ayudando a manejar la presión y promoviendo valores éticos en el deporte¹.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO

El Proyecto de Acuerdo fue presentado con anterioridad:

PROYECTO 047 2024	PONENCIA POSITIVA CONJUNTA	H.C. SAMIR ABISAMBRA H.C. OSCAR BASTIDAS
-------------------	-------------------------------	---

3. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO:

El objetivo de la modificación es actualizar los avances normativos que la libertad religiosa ha tenido en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (en adelante “el Sistema Interamericano”), su incidencia en el ordenamiento jurídico colombiano con relación a la libertad religiosa.

OBJETIVOS GENERALES:

1. Cumplir con la participación democrática equitativa y sostenible
2. Resarcir los derechos de los jóvenes y niños de las diferentes comunidades religiosas, como paralelo al Sistema Interamericano
3. Permitir la interacción de todos los integrantes de la sociedad en los espacios donde no se les ha tenido en cuenta, como lo son, los Centros Educativos y de Enseñanza del Distrito.
4. Alcanzar a una población que con facilidad da a conocer, divulga y logra modificar conductas que mejoran los ambientes
5. Proteger la vida espiritual de los jóvenes de la ciudad, que, por influencias negativas, se entregan a actividades que van en contra de su propia estabilidad emocional y física.
6. Potenciar, posibilitar y fortalecer la generación de espacios y mecanismos que no se tienen en cuenta en el acuerdo 268 de 2.006
7. Posibilitar el aumento de las soluciones a los jóvenes que pasan por momentos difíciles de atención y que por ello toman decisiones no correctas en sus vidas
8. Fomentar el libre desarrollo de la personalidad, de aquellos que quieran ahondar en sus creencias.
9. Evitar el embarazo no deseado y las muertes por suicidio, pues muchos de los problemas emocionales, son a causa de la falta de la esperanza, que la asistencia espiritual puede fortalecer en los jóvenes.
10. Promover los encuentros e intercambios culturales y sociales en las diferentes confesiones religiosas, para la construcción de la paz total.

4. MARCO NORMATIVO

Desde el tratado que puso fin a la primera guerra mundial en el año 1919 – el de *Versalles* – y cuya entrada en vigencia se dio el 10 de enero de 1920, se incluyó por vez primera la protección de los derechos a garantías a la libertad religiosa. Así, por ejemplo; el artículo Art. 22 señaló que:

Los principios siguientes se aplican a las colonias y territorios que, a raíz de la guerra, han cesado de hallarse bajo la soberanía de los Estados que los gobernaban anteriormente y que son habitados por pueblos aun incapaces de regirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno. El bienestar y desarrollo de esos pueblos constituye una misión sagrada de civilización, y conviene incluir en el presente pacto garantías para el cumplimiento de esta misión.

Y, de manera concreta indicó:

El grado de desarrollo en que se encuentran otros pueblos, especialmente los del África Central, exige que el mandatario asuma la administración del territorio en condiciones que, con la prohibición de abusos tales como la trata de esclavos, el tráfico de armas y de alcohol, garanticen la libertad de conciencia y de religión sin otras limitaciones que las que puede imponer el mantenimiento del orden público y de las buenas costumbres, y la prohibición de establecer fortificaciones o bases militares o navales y de dar instrucción militar a los indígenas para otros fines que los de policía o defensa del territorio, y que aseguren igualmente a los otros miembros de la sociedad, condiciones de igualdad para el intercambio y el comercio.

La libertad religiosa, además, se encuentra regulada en el derecho público internacional y su protección, además del tratado de Versalles, deviene de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre cuya proclamación se llevó a cabo por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 (Resolución 217 A (III), la cual señaló:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia así: como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” Artículo 18

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en vigor desde el 23 de marzo de 1976 y ratificada por 167 países – entre ellos Colombia mediante la Ley 74 de 1968 – por su parte, señala en su artículo 18 lo que sigue:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

De igual modo, la Resolución 36/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que recoge la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones de 1981, ha llevado la responsabilidad del desarrollo progresivo de este derecho humano desde hace más de 50 años.

Por su parte, en esta parte del hemisferio, se tienen referencias expresas de protección y garantías a la libertad religiosa.

En ese sentido, la primera referencia a la libertad religiosa, aunque indirecta, se encuentra en la Carta de la OEA, la cual, según el Literal l) del artículo 3° de la Carta.

“Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: los Estados americanos reconocen los derechos de las personas sin distinción de raza, nacionalidad, credo ni sexo”

La Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por su parte, retoma lo dispuesto en la Carta de la OEA y, además, alude de forma específica a la libertad religiosa al señalar en sus artículos 2° y 3°, lo que sigue:

“Artículo 2° de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Derecho de igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.

Artículo 3°: “Derecho de libertad religiosa y de culto. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.”

En el ordenamiento jurídico colombiano, el preámbulo; los artículos 1, 2, 4, 5, guardan relación con la protección de los derechos inalienables, la supremacía de la Constitución sobre las demás normas que integran el plexo normativo nacional, y el amparo de la familia como garantía de los connacionales respecto a toda forma de discriminación.

De manera específica, el artículo 13 superior, que recoge el derecho a la igualdad, también proscribe que el ejercicio de la libertad religiosa se torne en un criterio de discriminación (acciones afirmativas) al señalar:

Todas las personas [...] recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de [...] religión... (Resaltado fuera del texto)

Por su parte, el artículo 19, refiere:

*“Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.*

Dicho canon constitucional señala la facultad de profesar y difundir una religión. No obstante, dicha prerrogativa debe ser entendida desde el llamado “Bloque de Constitucionalidad” en sentido estricto, vale decir, que todos los tratados que regulan la protección de libertad religiosa ratificados por Colombia, tienen el mismo rango y eficacia de aplicación en Colombia por contener derechos fundamentales e inalienables, aspecto este que se encuentra regulado en el mismo texto fundamental en el artículo 93, según el cual:

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

LEYES

La Ley 25 1992, (Reglamentado parcialmente Decreto 782 de 1995), por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política, modificó varios artículos del código civil y el decreto 1260 de 1970 sobre libertad religiosa

En ese mismo sentido constitucional, la Ley Estatutaria 133 de 1994 “*Por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos*”, refiere “*El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.*

Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República.”

Por ser ley estatutaria, cabe agregar que, en Colombia, según la Corte Constitucional¹¹, del derecho a la Libertad religiosa se desprenden los siguientes 11 contenidos:

(i) la libertad de profesar cualquier creencia religiosa libremente escogida²⁰, que implica la libertad de información y de expresión sin las cuales la persona no podría formarse una opinión ni expresarla; (ii) la libertad de cambiar de religión y (iii) de no profesar ninguna, (iv) la posibilidad de practicarlas sin perturbación o coacción externa, contraria a las propias convicciones, y de realizar actos de oración y de culto, (vi) de recibir asistencia religiosa de la propia confesión en cualquier lugar, incluso los de reclusión, cuarteles y centros médicos, (vii) de conmemorar festividades, (viii) de recibir sepultura digna conforme a los ritos y preceptos de la religión del difunto y a sus deseos o a los de su familia, (ix) a contraer matrimonio y a establecer una familia conforme a la religión y a sus normas, (x) de recibir e impartir libremente educación religiosa o de rehusarla o de (xi) determinar, de conformidad con la propia convicción, la educación de los hijos menores o la de los incapaces bajo su dependencia².

Ley 171 de 1994 aprobó el “*Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)*” Protección de derechos a víctimas del conflicto, entre ellos, a su libertad religiosa y de culto.

Ley 340 de 1996, aprobó la “*Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado*”. Uno de los bienes culturales susceptibles de protección es lo relativo a monumentos religiosos que se encuentren en los territorios.

La Ley 875 de 2004 Regula el uso del emblema de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 - Protección a personal religioso adscrito a la fuerza pública y civil.

Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo**DECRETOS Y RESOLUCIONES.**

El Decreto 372 de 1996 *“Por el cual se establece la estructura interna del Ministerio del Interior, se determinan sus funciones y se dictan disposiciones complementarias.”*

Artículo 5 El Ministerio del Interior se ocupará de adoptar y formular políticas en la siguiente materia: numeral 3. Los derechos y libertades fundamentales, el orden público, la paz, la convivencia ciudadana y la protección del derecho de libertad de religión y cultos.

El Decreto 1319 de 1998 *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994”*

El Decreto 1519 de 1998 *“Por el cual se establecen medidas tendientes al libre ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto en los centros penitenciarios y carcelarios.”*

El Decreto 354 de 1998 *“Por el cual se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas no católicas.”*

El Decreto 505 de 2003 *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994”*

El Decreto 1066 de 2015, señaló en el libro

1. Estructura del Sector Administrativo del Interior. Parte 1. Sector Central. título 1, lo siguiente:

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-088 del 3 de marzo de 1994, M.P.: Fabio Morón Díaz.

² Texto tomado de la revista de derecho Revista Derecho del Estado n.º29, julio-diciembre del 2012, pp. 215-232 y citado por la Dra. Xiomara Lorena Romero Pérez, en su escrito La libertad religiosa en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (Análisis comparativo con el ordenamiento El Ministerio del Interior

ARTÍCULO 1.1.1.1. Cabeza del sector. *El Ministerio del Interior tendrá como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa, derecho de autor y derechos conexos, los cuales se desarrollaran a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.*

Igualmente, el Ministerio del Interior coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional.

El Decreto 437 de 2018, que adoptó la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, entre otros, señaló que los objetivos específicos de dicha política no eran otros que:

- a) *Identificar y posicionar el aporte al bien común, a la resolución de conflictos y a la convivencia pacífica en la familia y la sociedad, a la cohesión social y a la transformación de contextos comunitarios, que las entidades religiosas y sus organizaciones desarrollan.*
- b) *Promover y promocionar en la sociedad civil, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación la no discriminación, la tolerancia y la no estigmatización por motivos religiosos,*
- c) *Fortalecer al Ministerio del Interior en los asuntos del derecho de libertad religiosa y de cultos, de manera integral.*
- d) *Divulgar la normatividad nacional e internacional, integrante del bloque de constitucionalidad, que desarrolla el derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos en Colombia y promover en el Estado y la sociedad civil el conocimiento del hecho y la cultura religiosa.*
- e) *Amparar el derecho de las entidades religiosas, sus fieles y sus organizaciones y, de crear y dirigir iniciativas de aporte al bien común, en forma individual o colectiva, y de inspirar su funcionamiento en el propio ideario moral y religioso, en los términos del artículo 13 de la Ley Estatutaria 133 de 1994.*
- f) *Generar acciones que propendan por garantizar el ejercicio de la participación ciudadana de las entidades religiosas y sus organizaciones.*
- g) *Proponer modificaciones a la normatividad vigente, que reconozcan las nuevas realidades en la aplicación del derecho de libertad religiosa y de cultos y su incidencia en el orden religioso, social, cultural y educativo.*
- h) *Mejorar el Registro Público de Entidades Religiosas.*
- i) *Fortalecer la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial, en los 32 departamentos del país, para la garantía del derecho de libertad religiosa y de cultos.*
- j) *Generar acciones que faciliten el entendimiento de la conexidad entre el derecho de libertad religiosa y el derecho a la educación conforme a sus creencias religiosas.*
- k) *Promover la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones en " " los escenarios de perdón y reconciliación, para la construcción de la paz*
- l) *Facilitar los espacios para la articulación institucional, que permitan la identificación de la victimización individual y colectiva de las personas, las entidades religiosas y sus organizaciones, en el marco del conflicto armado interno.*
- m) *Implementar mecanismos que permitan el fortalecimiento, la colaboración, cooperación y coordinación entre las entidades públicas del nivel nacional y territorial, las entidades religiosas y sus organizaciones y los organismos internacionales de cooperación, en la contribución al desarrollo de la Nación, en el marco del logro de los objetivos del desarrollo sostenible.*

La Resolución No. 889 de 2017 *“Por la cual Se establecen los lineamientos que el grupo de organizaciones sociales basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia y entidades religiosas deberán considerar la participación y articulación interinstitucional, intersectorial y territorial en la formulación de la política pública Integral de Libertad Religiosa y de Culto”*

El Decreto 437 de 2018 *“Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 2 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto número 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, denominado Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos.”*

El Decreto 922 de 2023 Convenio de Derecho Público interno, entre el Estado Colombiano y algunas iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros.

(...) En el Capítulo II De la enseñanza, educación e información religiosa

“De la enseñanza religiosa en los planteles educativos de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros suscribientes del presente Convenio”

(...) Artículo IX, De la Libertad de Enseñanza

(...) Artículo X, *“El Estado en desarrollo de la obligación establecida en los artículos 67 y 68 de la Constitución Política, podrá Suscribir con las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros Suscribientes de este Convenio, contratos o convenios a través de instituciones públicas que desarrollen programas educativos oficiales, acorde con las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar.”*

(...) Artículo XII, De la Asistencia Espiritual a los Miembros de la Fuerza Pública

Este artículo actualiza la forma en que los miembros de la fuerza pública, pueden acceder a la asistencia espiritual de su predilección, sin distingo del culto que profese, establece la posibilidad del uso los lugares donde puede ser objeto de esta asistencia dentro de las instalaciones de las instituciones.

“La asistencia espiritual tiene por objeto atender el servicio pastoral para los miembros de la Fuerza Pública, que sean fieles de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros suscribientes, sin perjuicio de las actividades, funciones y disponibilidad propia de los miembros de la Fuerza Pública.”

(...) Artículo XII De la Asistencia Espiritual en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios.

El acuerdo del motivo de esta modificación ya contiene esta actuación del decreto ley,

“El Estado colombiano garantiza en los establecimientos penitenciarios y carcelarios la libertad para la práctica de culto religioso a los internos fieles a las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros suscribientes, de acuerdo a lo preceptuado en el régimen penitenciario y carcelario. En desarrollo de este derecho, las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros suscribientes del presente Convenio, podrán ingresar a todas las instituciones que componen el sistema nacional

penitenciario y carcelario en donde cualquier interno solicite su asistencia espiritual. La forma como se prestará el servicio será convenida bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o las autoridades competentes.”

En el mismo artículo de esta ley, proporciona la forma de las visitas pastorales tipo capellanía

(...) Artículo XV, Del ejercicio de la misión pastoral en centros asistenciales y sociales

Parte del acuerdo del motivo, ya contiene estos usos

(...) “Las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, suscribientes, prestarán asistencia espiritual a toda persona que lo solicite y se encuentre en centros de salud, hospitales, clínicas, centros de salud mental, ancianatos, orfanatos, etc. “

(...) Artículo XVIII, De los lugares de culto en las instituciones del Estado

En este artículo el Estado reconoce como derecho el utilizar lugares para la celebración de culto en igualdad de condiciones todos los cultos reconocidos.

(...) “En el ejercicio de su misión pastoral, en especial la asistencia religiosa, las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros que suscriben el presente Convenio, tendrán derecho a utilizar un lugar ecuménico destinado a la celebración de cultos, en todas las instituciones en donde ejerzan funciones el Estado. Al efecto, el Director o cabeza responsable de cada institución, emitirá las autorizaciones necesarias y coordinará el pleno ejercicio de este derecho, con todas las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros Suscribientes del presente Convenio.”

Artículo 2

(...) Capítulo I De la enseñanza, educación e información religiosa

(...) Artículo II De la libertad de la Enseñanza

(...) Artículo III Educación

“El Estado en desarrollo de la obligación establecida en los artículos 67 y 68 de la Constitución Política, podrá Suscribir con las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros Suscribientes de este Convenio, contratos o convenios a través de instituciones públicas que desarrollen programas educativos oficiales, acorde con las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar.

Parágrafo. Sin perjuicio de las competencias normativas propias de la respectiva cartera ministerial.”

Dentro de las consideraciones de la presente ley, se clarifica el término de capellanías como parte de la función eclesiástica en todas las instituciones, sin denominación o distingo

Que la asistencia espiritual se encuentra en estrecha relación con derechos inherentes a la dignidad del ser humano, tales como las libertades individuales, de conciencia, de cultos, de expresar y difundir su pensamiento y opiniones.

(...)) *“Que el Estado debe garantizar la creación de un vínculo institucional, mediante el cual las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, que cumplan con los requisitos de ley, que cuenten con un número significativo de fieles en gran parte del país y se les haya reconocido la personería jurídica hace más 20 años de haberse establecido en él, puedan ejercer la instrucción, guía y apoyo espiritual a quien la solicite en establecimientos docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo la dependencia del Estado, asistencia que podrá llevarse a cabo por medio de **capellanías** o instituciones similares por parte de una autoridad pastoral autorizada para ello, conforme lo establecido en el artículo 8° de la Ley Estatutaria 133 de 1994”* (el subrayado es nuestro)(El mismo ápice se menciona 4 veces)

Pronunciamiento Altas Cortes

Sentencia T – 662 de 1999“La libertad de cultos entendida como el derecho a profesar y a difundir libremente la religión, es un derecho fundamental indispensable en una sociedad democrática, participativa y pluralista, que reconoce la necesidad de la autorrealización del individuo y la garantía de la dignidad humana. Por ende, las libertades de religión y de cultos hacen parte esencial del sistema de derechos establecido en la Constitución de 1991, junto con el mandato de tolerancia, que se encuentra íntimamente ligado a la convivencia pacífica y al respeto de los valores fundantes del Estado colombiano”.

(...)“La libertad religiosa comprende, de conformidad con los artículos 18, 19, 42 y 68 de la Constitución Nacional y la ley 133 de 1994, entre otras cosas, los siguientes elementos: “(i) la libertad de profesar cualquier creencia religiosa libremente escogida”, (que implica la libertad de información y de expresión sin las cuales la persona no podría formarse una opinión ni expresarla); (ii) la libertad de cambiar de religión y (iii) de no profesar ninguna, entre otras conductas que, no obstante pertenecer el individuo a una religión o confesión religiosas, deben ser respetadas por encima de cualquier propósito de coacción; (...) la posibilidad de (iv) practicarlas sin perturbación o coacción externa, contraria a las propias convicciones, y (v) de realizar actos de oración y de culto, (vi) de recibir asistencia religiosa de la propia confesión en cualquier lugar, incluso los de reclusión, cuarteles y centros médicos, (vii) de conmemorar festividades, (viii) de recibir sepultura digna conforme a los ritos y preceptos de la religión del difunto y a sus deseos o a los de su familia, (ix) a contraer matrimonio y a establecer una familia conforme a la religión y a sus normas, (x) de recibir e impartir libremente educación religiosa o de rehusarla o de (xi) determinar, de conformidad con la propia convicción, la educación de los hijos menores o la de los incapaces bajo su dependencia”.

Sentencia C-088 de 1994 “(...) allí se destaca que todas las confesiones e iglesias son igualmente libres ante la ley, reproduciendo el texto del inciso segundo del artículo 19 de la Carta; allí también se señala que el Estado reconoce la diversidad de creencias religiosas, y se advierte que estas creencias religiosas no pueden constituir motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. Desde luego, una consecuencia del derecho a la libertad religiosa es la igualdad entre todas las religiones y cultos y de los individuos en relación con ellos; empero, la igualdad en esta materia no significa uniformidad absoluta, sino que no se produzca discriminación, ni molestia por motivos religiosos o de creencia y culto”.

(...)“Se trata de reforzar las garantías sobre el ejercicio de los derechos fundamentales con los que de diversos modos se relaciona esta libertad, y de destacar que todos los individuos deben gozar de los derechos constitucionales, sin más limitaciones que las establecidas dentro del ordenamiento jurídico en relación con los derechos de los demás; igualmente, se advierte que el ejercicio o práctica de una o de otra religión o creencia religiosa, no puede en ningún caso servir de causa o razón para afirmar o argumentar fórmula alguna de restricción, discriminación o desigualdad”

Sentencia T-621/14 “Sí, esta condición igualitaria presupone para el Estado que (i) el ordenamiento jurídico “funja como receptor-difusor de dicho principio y resistencia-refractaria ante cualquier asomo de discriminación que por razones de origen religioso se pretenda implantar” y (ii) los poderes públicos, en ejercicio de sus facultades, estén subordinados al ordenamiento jurídico, encaminados hacia su respeto y protección, a fin de promover las condiciones para que la igualdad jurídica que se predica de las confesiones religiosas sea de orden material, real y efectivo”.

(...)“En ese entendido, tanto la expedición, interpretación como la aplicación de las disposiciones que desarrollen aspectos atinentes a la libertad religiosa y de culto, deberá procurar la efectividad del principio de igualdad y contrarrestará cualquier situación contraria al mismo. De manera que, en caso de que un precepto contenga un trato desigual injustificado, el mismo sería inconstitucional al desconocer el principio de igualdad en el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos”.

Sentencia C-664 2016 "A través de la cual se declara la inexecutable del numeral 4 del art. 7 y del numeral 2 del art. 8 de la Ley 119 de 1994, por medio de la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-, se deroga el decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones. En tanto que se declara la exequibilidad, por los cargos analizados, del art. 17 de la referida Ley 119/94.

Del respeto a dicho derecho, entre muchas otras, se tiene la Sentencia T-524 de 2017, a través de la cual se realiza un análisis respecto a la libertad religiosa y de conciencia, reiterando que las instituciones educativas oficiales no pueden adherirse ni favorecer a ninguna religión en particular en virtud del principio de laicidad y el deber de neutralidad en materia religiosa y que si bien estas instituciones educativas pueden facilitar la realización de actos religiosos, ello no implica la institucionalización de los mismos.

La Sentencia STL5798 de 2020 A través de la cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia hace un análisis acerca de la libertad de cultos en Colombia, así como el alcance y límites de los derechos y deberes de los funcionarios públicos al utilizar tanto sus cuentas personales como las institucionales, para difundir aspectos de su ámbito interno y asuntos propios derivados de sus funciones o cargo.

NORMAS DISTRITALES.

Decreto ley 1421 de 1993 estatuye que es competencia del Concejo de Bogotá lo siguiente:

El numeral 1º del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, establece que es competencia del Concejo de Bogotá D.C.: “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”

Acuerdo Distrital 257 de 2006. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 267 de 2007 "Por el cual se adopta la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones"

Resolución 109 de 2023 Secretaria Distrital de Gobierno

Por medio de la cual se adoptan los Estándares de Calidad Espacial para los Equipamientos Sociales de Culto en Bogotá Distrito Capital

Decreto 093 de 2018

“Por el cual se crea la Política Pública Distrital de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, para el Distrito Capital”

Acuerdo 927 de 2024 Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá camina segura”

El cual contiene la defensa del derecho de religión, culto y conciencia, su divulgación y permanencia.

(...) Artículo 8. Programa del Objetivo estratégico “Bogotá avanza en seguridad”

8.1. Programa 1. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza. *“Para lograr el fomento de una cultura ciudadana que recupere la confianza, se deberá trabajar en el fortalecimiento del diálogo para la resolución pacífica de conflictos.*

Así mismo, es importante realizar esfuerzos institucionales orientados a identificar conflictividades e interviniendo factores de riesgo, reconociendo el derecho fundamental de la ciudadanía a la protesta social acompañándolos mediante el diálogo en este tipo de situaciones, asegurando la garantía de los derechos y del bienestar integral de la población.

En cuanto a la gobernanza, se propone una estrategia que desarrolle las siguientes herramientas: acciones de cultura del diálogo bajo el principio de corresponsabilidad, actividades para transformar situaciones de alto riesgo de conflictividad en el espacio público garantizando la armonía de derechos, y mesas de diálogo y/o pactos, que aseguren un gobierno abierto a la ciudadanía. Estas herramientas se han de materializar con la generación de condiciones que fortalezcan la apropiación de la ciudad y de lo público, la protección del interés común y el aumento de la confianza ciudadana en los entornos públicos y privados, incluyendo los lugares de culto. Además, la Administración distrital profundizará la puesta en marcha de acciones de prevención y materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC).”

(...) 10.6. Programa 12. Bogotá cuida a su gente. *“Con el objetivo de lograr un acceso efectivo a los diferentes grupos poblacionales y diferenciales a los servicios sociales y, en especial, buscando que la ciudad sea, aún más, garante de derechos, equitativa e incluyente, se proponen cuatro grandes acciones. La primera de dichas acciones se orienta a fortalecer las rutas para la prevención de vulneraciones de los derechos humanos de mujeres, personas de los sectores sociales LGBTI, víctimas de trata de personas, víctimas de abuso de autoridad, defensores y defensoras de derechos humanos, población migrantes, población*

desplazada, población en proceso de reintegración o reincorporación y derechos fundamentales de religión, culto y conciencia, de manera que estas personas reciban orientación y atención sociojurídica, así como formación en derechos humanos, en este sentido, la persona que individualmente o junto con otras, con uso de una personería jurídica o colectividad de hecho, se esfuerce en formar o educar, divulgar o promover, defender o proteger los DDHH, tendrá una especial cuidado y vigilancia sobre sus derechos y necesidades, con atención prioritaria en el desarrollo de actividades de defensa de los DDHH y con proyectos y estrategias que fortalezcan sus labores organizativas y ampliación de espacios de difusión de las rutas de atención en las localidades”

(...) Artículo 101. Creación del Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa. Créase con carácter permanente el Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa, fortaleciendo el aporte social que desarrollan las entidades religiosas, con sus comunidades en la ejecución de acciones sociales.

Parágrafo 1. El Gobierno Distrital contará con un plazo de dos (2) años para la reglamentación del funcionamiento del Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa y para ello, contará con la participación de los comités de libertad religiosa.

Parágrafo 2. El Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa podrá ser financiado por diversas fuentes, entre ellas, recursos de inversión públicos y privados, donaciones o recursos de cooperación nacional e internacional.

Artículo 181. *Adiciónese un [parágrafo](#) al artículo 4 del Acuerdo 695 de 2017 el cual quedará así: “(...)*

Parágrafo 3. Los vehículos que transporten a los fieles hacia los lugares de culto tendrán permitido estacionar en zonas adyacentes a los lugares de reunión religiosa, bajo las consideraciones establecidas en el presente artículo y de acuerdo con las habilitaciones y los estudios técnicos que realice la Secretaría de Movilidad, en consideración a las condiciones de tráfico, disponibilidad de espacio y de seguridad vial, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 154 del Decreto 555 de 2021”.

(...) Artículo 253. Evaluación y reformulación de Política Pública de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia. La Administración Distrital adelantará los procesos de evaluación e inicio de la reformulación de la Política Pública de Libertad Religiosa, Culto y Conciencia para Bogotá Distrito Capital 2018-2028, conforme a lo establecido en la guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito y los lineamientos técnicos definidos en la materia por la Secretaría Distrital de Planeación.

Parágrafo 1. La Administración Distrital diseñará un instrumento, herramienta o sistema que permita la valoración con criterios técnicos del aporte social del sector interreligioso en Bogotá. Para ello, podrá realizarlo directamente o a través de la celebración de alianzas, contratos o convenios con actores públicos y/o privados.

Parágrafo 2. En el marco de la fase de implementación de la política pública, la administración distrital fortalecerá técnicamente las instancias de participación del Comité Distrital de Libertad Religiosa, conforme a lo establecido en el Acuerdo Distrital 685 de 2017.

IMPACTO FISCAL.

Esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el Acuerdo 927 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS

PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, por lo tanto, no tiene impacto ambiental.

El presupuesto se encuentra ya apropiado como meta, de suerte que puede afirmarse que esta iniciativa no genera impacto fiscal toda vez que las acciones que propone este proyecto no implican desarrollar los mandatos del Acuerdo 927 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, Especialmente con su artículo 67.

Cordialmente,

EMEL ROJAS CASTILLO

Concejal de Bogotá

Partido Nueva Fuerza Democrática

PROYECTO DE ACUERDO NO 413 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 268 DE 2006 Y SE REGLAMENTA LA ASISTENCIA ESPIRITUAL EN INSTITUCIONES DEL DISTRITO CAPITAL (CAPELLANÍAS)"**

El Artículo Primero quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las entidades del Distrito y especialmente en: Los Centros de encuentros para la Paz y la Integración Local de Víctimas del conflicto armado; salud, hospitales, Clínicas ,CAPs, CAMIs centros de enfermedades terminales; Centros de enseñanza, Primaria, Secundaria, Tecnológicos, Universitarios, no formales; Jardines Infantiles; Orfanatos, Hogares de paso, Asilos de ancianos, Hogares Geriátricos, Centros de Atención Habitante de Calle, Centros de Atención a Drogodependientes; Casas de la Igualdad para la Mujer, Casas Refugio; Bomberos, Cárceles, Centros de detención y Reclusión, URIs; Centros CEFE; Terminales de Transporte, garantizarán a quienes se encuentren dentro de sus instalaciones y así lo soliciten, la prestación de asistencia espiritual, la cual podrá ser ofrecida por entidades religiosas legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio del Interior, conforme lo establece la Ley 133 de 1994 Estatutaria de Libertad Religiosa y de Culto y su Decreto Reglamentario 354 de 1998.

PARÁGRAFO: Fijase el término de (12) doce meses, para que las respectivas autoridades y establecimientos públicos del Distrito Capital, adopten las medidas necesarias e implementen los procedimientos que permitan la asistencia espiritual, de que trata el presente artículo.

El artículo segundo quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO. –La Secretaria General, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaria de Educación del Distrito, , Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de la Mujer , Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, serán las encargadas de velar por el real y efectivo cumplimiento de la asistencia espiritual de que trata el artículo primero del presente Acuerdo, con plena igualdad entre las distintas entidades religiosas legalmente constituidas, que existen en el Distrito Capital y especialmente en:

PARÁGRAFO:

La Secretaria General, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaria de Educación del Distrito, , Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de la Mujer , Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, deberán informar al Concejo de Bogotá anualmente en el sexto mes del año, sobre la implementación de los mecanismos para garantizar la asistencia espiritual, en los establecimientos y entidades indicadas en el artículo primero de este Acuerdo.

Nuevos artículos

ARTÍCULO TERCERO. CAPELLANÍAS DISTRITALES. En general, las capellanías conformadas por los capellanes son las personas dedicadas a ofrecer apoyo espiritual y emocional en diversos contextos, adaptándose a las necesidades específicas de las comunidades a las que sirven. Las capellanías se componen de dirigentes espirituales nombrados por las diferentes confesiones religiosas y reconocidas por el Estado Colombiano.

ATÍCULO CUARTO La Secretaria General, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, podrán destinar un área o espacio definido si así lo prefieren dentro de las instalaciones de cada Secretaria y sus dependencias, para facilitar el cumplimiento del artículo primero de este Acuerdo.

ATÍCULO QUINTO - El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

Dado en Bogotá, a los ____ días del mes de _____ del 2025

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO DE ACUERDO NO 414 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR EL CUAL SE PROPONE PROGRESIVAMENTE EN EL DISTRITO CAPITAL LA IMPLEMENTACIÓN DEL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS ESPECÍFICAMENTE EN LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEES, A TRAVÉS DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

1. OBJETO

El objeto del presente proyecto de acuerdo es implementar de manera progresiva en el Distrito Capital, el reciclaje de *Residuos Sólidos y/o peligrosos específicamente en los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -Raees*, a efectos de controlar la contaminación y, por ende, proteger el medio ambiente y la salud de los seres vivos y se dictan disposiciones.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

De acuerdo con el “Boletín Técnico Cuenta Satélite Ambiental del DANE del 2019”, se señaló que la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos del citado año fue de 11,82%, con una proyección para el año 2022 del 14,6%

Con la entrada al mercado de productos de innovación tecnológica y la reducción en el ciclo de vida de los aparatos es decir la obsolescencia programada, como principales factores de generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEES, hacen que en el mundo tanto en los países industrializados y aquellos que se encuentran a la vanguardia de crecimiento se generen altas tasas de incrementos en los Raees entre 20 y 50 toneladas anuales, situación que está desbordando los altos problemas de contaminación ambiental

En Colombia y más exactamente en Bogotá, las ventas de electrodomésticos y gasodomésticos, se han incrementado en los últimos años, como se aprecia en el informe del diario la República.

“El 2020 fue un año positivo para las empresas de electrodomésticos, ya que hubo una demanda constante de estos productos durante todo el año. Este comportamiento obedeció al cambio en el comportamiento de los consumidores derivado por la pandemia y a los tres días sin IVA que se realizaron durante ese año.

De acuerdo a la firma GFK, se vendieron 2.841 unidades por un monto superior a los \$3,3 billones de pesos lo que representó un incremento del 0.4% en artículos del hogar. Los electrodomésticos más demandados por los colombianos el año pasado fueron: lavadoras, lavavajillas, aspiradoras, batidoras y lo relacionado con procesamiento de alimentos.

Uno de los productos que más creció durante el 2020 fue la categoría de neveras de congelador inferior (BMF) que aumentó sus ventas en un 50%, en el que Samsung acaparó la mitad este mercado. También lo hicieron las aspiradoras, pues se vendieron 129.416 unidades dando como resultado un incremento del 22% en ventas de este producto.

Caber recordar que las empresas de electrodomésticos dividen sus productos en 3 categorías:

Línea blanca: que incluye aparatos clásicos como neveras, lavadoras, estufas, secadoras de ropa, calentadores, aires acondicionados, entre otros

Línea marrón: encontramos televisores, equipos de sonido, DVD y todo lo relacionado con electrodomésticos de video y audio.

Pequeños electrodomésticos: Son artefactos de menor tamaño como licuadoras, planchas, cafeteras, sandwicheras, entre otras.”¹⁶²

De lo anterior se puede resaltar que esta venta de equipos eléctricos y electrónicos hacen que en pocos años por el problema de obsolescencia programada convirtiéndose en residuos; estimándose la generación de residuos de 4 a 7 kg/año por persona (observatorio mundial de residuos electrónicos 2017). “Los crecientes niveles de residuos electrónicos y la inadecuación y falta de seguridad de su tratamiento y eliminación, mediante incineración al aire libre o arrojándolos a vertederos, supone importantes riesgos para el medio ambiente y para la salud de las personas. Además, plantea varios retos al desarrollo sostenible y al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)” (observatorio mundial de residuos electrónicos 2017).

En lo que respecta a la presente iniciativa, se toma en consideración la experiencia del sector privado con empresas especializadas en este modelo de reciclaje que permiten trabajar con mayor exactitud y rapidez.

Se toma como referencia el proyecto de acuerdo 298 de 2020.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

3.1. Del fundamento y desarrollo normativo sobre la materia.

Tanto la Constitución Política de Colombia como el Estatuto Orgánico de Bogotá le otorgan competencia expresa a esta Corporación para dictar normas que garanticen la defensa y preservación del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente, por ello consideramos de suma urgencia abordar soluciones concretas para enfrentar el problema significativo que representa la falta de implementar de forma progresiva un modelo eficiente de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEES.

De conformidad con el artículo 313, numeral 9 de la Constitución Política, le corresponde a los Concejos:

*“Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del **patrimonio ecológico** y cultural del municipio”.* (Negrilla fuera de texto original)

La Corte Constitucional en Sentencia C-243 de 1997, señala en cuanto a la protección del patrimonio ecológico, que:

*“El objetivo de la disposición acusada no es óbice para que los **concejos municipales produzcan la normativa que consideren pertinente para proteger su patrimonio ecológico**, siempre que lo hagan atendiendo las limitaciones que les impongan la*

¹⁶² Fuentes:

<https://www.larepublica.co/empresas/electrodomesticos-tecnologicos-son-tendencia-de-compra-durante-la-pandemia-3018244>

<https://www.portafolio.co/economia/covid-disparo-la-compra-de-electrodomesticos-inteligentes-en-el-pais-547366>

<https://news.samsung.com/co/2020-el-ano-en-que-los-colombianos-renovaron-sus-electrodomesticos>

<https://www.sectorial.co/informativa-electrodomesticos>

<https://www.sectorial.co/informativa-electrodomesticos/item/376932-con-la-pandemia-aument%C3%B3-la-compra-de-electrodom%C3%A9sticos>

Constitución y la ley, con lo que se garantiza un manejo coordinado y armónico de temas que trascienden el interés local, lo que quiere decir que no se vacía de contenido la facultad de origen constitucional que los actores consideran desconoció la norma impugnada.

(...) De la interpretación armónica de los postulados mencionados no se puede colegir que desapareció la facultad que tenían los concejos para reglamentar el ejercicio de las actividades que realizan los ciudadanos con fines de explotación económica dentro del respectivo municipio, pues la, ley fundamental vigente les reconoce autonomía de gestión para el manejo de los asuntos de interés local con arreglo tanto a ella como a la ley." (Negrilla fuera de texto original)

La Ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones." establece en el artículo 63, los principios normativos, que rige al País en materia medioambiental:

"ARTÍCULO 63. PRINCIPIOS NORMATIVOS GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo. (...)

Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientalistas expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se descende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley."(Negrilla y subrayado fuera de texto original)

De igual manera, en cuanto a las atribuciones ambientales que le corresponden al Distrito Capital, la Ley General Ambiental en su artículo 65, dispone:

"ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS DISTRITOS Y DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: (...)

2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio (...)” (Negrilla y subrayado fuera de texto original)

Frente al Principio de Rigor Subsidiario la Corte Constitucional, mediante sentencia C-554 de 2007, precisa, que:

“Esta corporación ha señalado que en materia ambiental, con los propósitos de dar una protección integral y coherente a los recursos naturales y de armonizar los principios de Estado unitario y de autonomía de las entidades territoriales y de las corporaciones autónomas regionales, concurren en el orden constitucional las competencias de la Nación y las de dichos organismos, de modo que le corresponde al legislador dictar la normatividad básica nacional y les corresponde a las corporaciones autónomas regionales y a las entidades territoriales dictar la normatividad complementaria o adicional propia de la región, departamento, distrito, municipio o territorio indígena respectivo, en desarrollo de la gestión de sus intereses y de acuerdo con sus condiciones y necesidades particulares.

En esta forma, la asignación de competencia a las corporaciones autónomas regionales y a las entidades territoriales será contraria a la Constitución si rebasa el límite regional o local respectivo, (...) Así mismo, la regulación de una materia por parte del legislador será inconstitucional si desborda su naturaleza básica nacional e invade el campo propio de las corporaciones autónomas regionales y de las entidades territoriales, de modo que elimina o reduce sustancialmente el contenido de la autonomía de estas últimas.” (Negrilla fuera de texto original)

Así mismo, la Corte es exegética en precisar que, en el marco del Principio de Rigor Subsidiario, la autonomía de las entidades territoriales para reglamentar normas propias en materia medioambiental dentro de sus respectivos límites territoriales, debe basarse en un interés superior, a saber:

“Las limitaciones a la autonomía de las entidades territoriales y regionales en materia ambiental, deben estar justificadas en la existencia de un interés superior. La sola invocación del carácter unitario del Estado no justifica que se le otorgue a una autoridad nacional, el conocimiento de un asunto ambiental que no trasciende el contexto local o regional, según sea el caso. Ello equivale a decir que las limitaciones a la autonomía resultan aceptables constitucionalmente, cuando son razonables y proporcionadas. Para determinar la razonabilidad de una limitación de la autonomía de una entidad, es necesario entrar a analizar específicamente la función limitada (...)” (Negrilla fuera de texto original)

Por su parte el Consejo de Estado¹⁶³ frente al Principio de Rigor Subsidiario cuando esté involucrado el patrimonio ecológico, señala que:

¹⁶³ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 26 de abril de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00387-01, C.P. María Elizabeth García.

*“Entonces, la Sala comparte el argumento de que el examen de competencias reglamentarias en materia de publicidad exterior visual - PEV, **se rige por el principio de rigor subsidiario cuando está involucrado el patrimonio ecológico.***

*A tal conclusión se llega porque la comunicación visual que se transmite a través de dicha publicidad **está ligada necesariamente a la garantía y al respeto de un medio ambiente sano**. Este vínculo lo reconoció expresamente el Tribunal Constitucional, al señalar: (Negrilla y subrayado fuera de texto original)*

*“[...] **el tema de la publicidad exterior visual hace parte de la noción de "patrimonio ecológico" local, por lo cual se está frente a una competencia propia de los concejos municipales y distritales,** así como de los órganos de gobierno de los territorios indígenas, la cual les es asignada en función del interés territorial subyacente, pues **los problemas de modificación del paisaje que le están asociados abarcan primariamente un ámbito local, por lo cual su regulación corresponde también, en principio, a las autoridades municipales y de los territorios indígenas.** Sin embargo, la Corte reitera que eso no significa que la ley no pueda establecer una normatividad básica nacional en este campo pues, como se señaló en el fundamento 14 de esta sentencia, se trata de competencias concurrentes. **Lo que no puede el Legislador es vaciar la competencia constitucional propia de los concejos y las autoridades indígenas de dictar normas para proteger, conforme a sus criterios, normas sobre la protección del patrimonio ecológico local [...].**”*

En concordancia con lo anteriormente señalado el estado colombiano podrá generar alianzas público privadas con el objeto de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico. La Ley 1508 de 2012 en su artículo primero señala que *“Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.”*

Por su parte el artículo diez y siete ibídem nos ordena *“Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos. Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador de la iniciativa, pero requiriendo la ejecución del proyecto desembolsos de recursos públicos, se abrirá una licitación pública para seleccionar el contratista que adelante el proyecto que el originador ha propuesto, proceso de selección en el cual quien presentó la iniciativa tendrá una bonificación en su calificación entre el 3 y el 10% sobre su calificación inicial, dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto, para compensar su actividad previa, en los términos que señale el reglamento. En esta clase de proyectos de asociación público-privada, los recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser superiores al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. Tratándose de proyectos de infraestructura vial de carreteras dicho porcentaje no podrá ser superior al 20% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato, deberá recibir del adjudicatario el valor que la entidad pública competente haya determinado, antes de la licitación, como costos de los estudios realizados para la estructuración del proyecto. En todos los casos la entidad*

estatal competente, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11, numerales 11.2 y siguientes de la presente ley".

Amén de lo anterior, también es preciso recordar que la protección del patrimonio ecológico local, está reforzada por acuerdos internacionales que el Estado colombiano ha incorporado a su ordenamiento jurídico, siendo ellos de obligatorio acatamiento, como es el caso de los referentes al cambio climático, tema estrechamente relacionado con el objeto de esta iniciativa, pues tal como lo ha reconocido ONU y el gran desafío de los RAEES *La transición hacia un mundo más digital conlleva el crecimiento del consumo de aparatos eléctricos y electrónicos y, en consecuencia, implica mayores cantidades de RAEE (residuos de esos aparatos).*

Los equipos usados, rotos u obsoletos, como teléfonos, ordenadores portátiles, sensores, televisores y frigoríficos contienen sustancias peligrosas y contaminantes que deben tratarse de forma adecuada. En la actualidad, la mayoría de los RAEE no están debidamente documentados y no se gestionan a través de cadenas y métodos de reciclaje apropiados. Como resultado, los residuos electrónicos abandonados en grandes vertederos crecen en todo el mundo.

Mediante una carta de intención, siete agencias pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han sellado un compromiso para enfrentar los desafíos relacionados con la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):*
- *La base estadística sobre los residuos electrónicos sigue siendo limitada: la información no se presenta de forma concisa y no está disponible para quienes sería útil, como autoridades competentes regionales, gobiernos, autoridades portuarias, etc.*
- *No hay un mensaje claro sobre los residuos electrónicos para el usuario. Los aparatos electrónicos son productos complejos compuestos por muchos materiales y, por tanto, con flujos de residuos diferenciados. Cómo y por qué llevar a cabo su reciclaje es aún algo desconocido por la mayoría de consumidores.*
- *La formación de una coalición sobre residuos electrónicos debe ser multilateral, para contar así con la experiencia de una amplia gama de participantes.*¹⁶⁴

Dentro del marco legal internacional y conforme a las necesidades de poder reciclar los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEES, Debemos considerar las siguientes normas:

Marco Legal Internacional

En los últimos 40 años se ha visto que el medio ambiente ha sido un tema de ámbito internacional; en la reunión que realizó la ONU en 1972 en Estocolmo, en el cual el tema principal fue crear conciencia y preocupación por la preservación de los recursos naturales, se trataron temas de cómo debe de ser el manejo de los residuos sólidos, cómo debe ser la jurisdicción, transporte y control dentro de las fronteras de desechos. Se identificó además que el problema de la contaminación que generan las grandes industrias de todo el mundo, es un problema que se está saliendo de control, contaminando no solo el ecosistema si no también causando un

¹⁶⁴ <http://gestionderesiduosonline.com/la-onu-y-el-desafio-de-los-raee/>

cambio climático que preocupa a toda la humanidad en general. Por lo tanto, los países desarrollados han elaborado diferentes tratados para enfrentarlo.

El acuerdo de Basilea plantea que la manera más eficaz para proteger el medio ambiente y la salud de las personas con respecto a estos desechos peligrosos es poder reducir al máximo la generación de dichos materiales. Ciertamente lo más fácil sería tratar de incentivar a las industrias a reducir la producción de estos desechos peligrosos, otra manera sería también incentivar a los clientes o consumidores que dejarán de demandar productos que generen desechos peligrosos; así se atacaría por lado y lado este punto. Además los estados deben de generar políticas públicas encaminadas a tomar medidas frente al manejo de estos desechos peligrosos, el manejo que se debe dar al interior del país, debe comprender también el manejo o movimiento transfronterizo, todo con el fin de mejorar el medio ambiente y asegurar la protección de la salud de las personas, garantizando en lo posible la eliminación de los desechos peligrosos, esta eliminación debe ser compatible con la protección de la salud humana y del medio ambiente. También es importante recalcar que se han generado normas donde no solo se le exige a un país eliminar estos desechos, sino que se le está trasladando dicha responsabilidad a las empresas o industrias que generan estos desechos.

Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto, integra a muchos países y los vincula directamente con objetivos obligatorios relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los objetivos propuestos es lograr reducir los niveles de emisión de diferentes gases los cuales se proponen realizar reducciones a niveles cercanos al 8% del nivel de emisión presentados en 1999 para los diferentes países, con miras a obtener compromisos de reducir el total de las emisiones de gases a nivel inferiores del 5% para el período comprendido entre el año 2008 y el 2012 y que se extendió ahora de 2012 hasta el 2020. Los límites exigen importantes reducciones de las emisiones actualmente proyectadas. Dichas emisiones son causadas en su mayoría por la producción de CO₂. (Naciones Unidas, 1998)

Una de las características más importantes del este protocolo y eje principal es el desarrollo sostenible, el cual busca la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, el desarrollo sostenible ha sido base clave para el desarrollo mundial y por lo tanto pilar principal en el que se basa el protocolo, cabe aclarar que dicho desarrollo sostenible debe conseguir equilibrar, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Al buscar este equilibrio, se encuentra que el protocolo da parámetros para utilizar las materias primas en los procesos de producción y que dichos procesos deben estar alineados con la parte social y con el medio ambiente que los rodea.

El protocolo de Kioto al igual que el convenio de Basilea enfocan sus esfuerzos en crear conciencia y que esto se vea reflejado en la elaboración de políticas públicas que estén enfocadas a mejorar la calidad de vida por medio del cuidado del medio ambiente, dichas políticas deben de fomentar el uso óptimo de los recursos naturales, mejorar los sistemas de generación de energía, el adecuado manejo y mejora de los sumideros y/o depósitos de los gases de efecto invernadero (basureros), en este punto hace gran énfasis, ya que es muy importante el manejo y reciclaje de materiales que llegan a estos depósitos, al poder clasificar de forma correcta dichos materiales se podrá dar mejor uso y posteriormente reutilizarlos, así se evita que se utilicen nuevamente materias primas para la elaboración de nuevos productos, ya que con la obtención de dicho material reciclado se podrá reutilizar para crear un nuevo producto, y es ahí donde se genera una cadena de eventos, ya que al reutilizar los materiales desechos, se evita utilizar insumos de carácter natural, se reduce la explotación de la

naturaleza, se reduce el consumo de energía para procesar las materias primas, se utiliza menos componentes, por último se disminuye la contaminación.

Con la implementación de protocolo se busca fomentar reformas en los sectores que más afecten el medio ambiente y que utilicen o generen gases de invernadero o que produzcan elementos no biodegradables que generen gran contaminación, esto con el fin de promover políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero o materiales que ayuden al efecto invernadero. Se busca también limitar y/o reducir la utilización o generación de los desechos sólidos.

Relacionados con el tema medio ambiental y de cómo estos productos contaminantes están afectando el planeta tierra, adicionalmente dichos países han elaborado e implementado convenios y acuerdos internacionales para darle un manejo específico a los materiales contaminantes y no biodegradables, todo con el fin de mejorar los procesos de reciclaje y generar un impacto positivo en el medio ambiente y controlar y mejorar en cierta medida el cambio climático. (Naciones Unidas, 1972)

Marco legal Nacional

Colombia no es ajena al proceso de regulación en materia ambiental que se desarrollan a nivel internacional, es por eso que el marco legal y regulatorio que le da origen a la actividad de reciclaje y transformación de estos materiales, permite crear el marco de acción de las empresas que desean realizar y desarrollar su negocio basado en estos procesos a saber:

Constitución Política.

Título I - de los principios fundamentales - artículo 8.

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Capítulo 3. - de los derechos colectivos y del ambiente -artículo 79.

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 80.

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Titulo XI - de la organización territorial - capitulo 3.- del régimen municipal - artículo 313.

Corresponde a los concejos: Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

LEYES

Ley 1672 del 19 de julio de 2013 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones”. Esta ley establece la responsabilidad extendida del productor como principio rector de la política y asigna obligaciones y responsabilidades a todos los actores de la cadena como los fabricantes e importadores, los comercializadores, los consumidores, y los gestores de RAEE. Así mismo, establece obligaciones a las diferentes entidades que conforman el Gobierno nacional y a las autoridades ambientales y las entidades territoriales.

RESOLUCIONES

Como antecedentes normativos de la implementación de sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de los RAEE, se encuentran las siguientes resoluciones:

- Resolución 1511 de 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) “por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones”.
- Resolución 1512 de 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) “por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y periféricos y se adoptan otras disposiciones”.
- Resolución 1297 de 2010 (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) “por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y acumuladores y se adoptan otras disposiciones”.

Con base en lo expuesto anteriormente, podemos concluir:

- I.** La Constitución Política le otorga competencia a los Concejos municipales para controlar, preservar y defender el patrimonio ecológico local mediante la expedición de acuerdos.
- II.** Con base en los artículos 12, numeral 7, y 13 del Estatuto Orgánico de Bogotá, esta Corporación es competente para expedir por su propia iniciativa, el proyecto de acuerdo en estudio.
- III.** La Ley General de Ambiente (Ley 99 de 1993) en desarrollo constitucional, otorga en el artículo 65, en concordancia con lo establecido en el artículo 313 numeral 9 de la Constitución, atribuciones, en materia ambiental, al Concejo del Distrito Capital para que, dentro de su autonomía, pueda controlar, preservar y defender del patrimonio ecológico propio.

- IV. La Ley 99 de 1993, incorpora como unos de sus principios rectores (art. 63) el de Rigor Subsidiario, que faculta a que las entidades territoriales en ejercicios de su autonomía puedan adoptar normas más rigurosas para preservar y defender su medioambiente.
- V. Las Sentencias C-243 de 1997 y C-554 de 2007 proferidas por la Corte Constitucional, establecen la interpretación aplicable en relación con la autonomía territorial y la protección del patrimonio ecológico, toda vez que, advierten que las necesidades y condiciones propias de cada territorio hace fundamental la expedición de normas propias, más estrictas.
- VI. La Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera del Consejo de Estado, en la Sentencia del 26 de abril de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00387-0, frente al rigor subsidiario, asegura que el Legislador no puede vaciar la competencia constitucional de los Concejos para proteger el patrimonio ecológico local.
- VII. Normatividad relacionada con los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- Raees.

3.2. Conveniencia

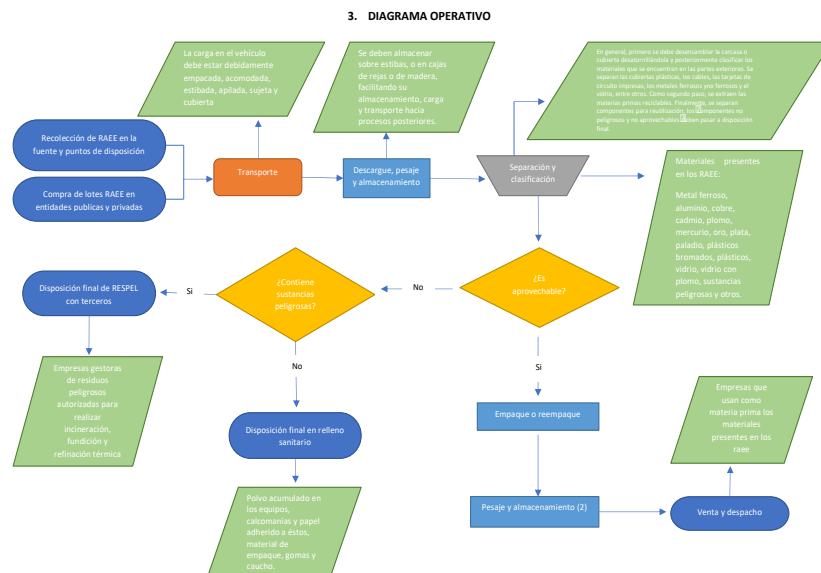
Basta tan solo observar a nuestro alrededor tanto a nivel local, nacional y mundial para percibir que el clima, la naturaleza y todos sus ecosistemas se están deteriorando a velocidades cada vez mayores y probablemente irreversibles, como consecuencia de acciones directas del hombre, que nos obligan como miembros de esta corporación pública, que representa a los ciudadanos, a adoptar medidas efectivas que contribuyan a erradicar y revertir este desastre contra el patrimonio ecológico y la salud de los bogotanos.

Por ello, hemos considerado que, desde el Concejo de Bogotá, podemos construir herramientas jurídicas de carácter administrativo encaminadas a generar cambios reales en nuestra ciudad, tendientes a mejorar el ambiente y la salud mediante la adopción de estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles. Al respecto cabe tener en cuenta que esta no es la primera vez que esta Corporación ha demostrado su interés en este tema que tanto preocupa a los bogotanos. En efecto en diversas oportunidades, como ya lo hemos señalado, se han presentado proyectos de Acuerdo que por distintos motivos no han prosperado.

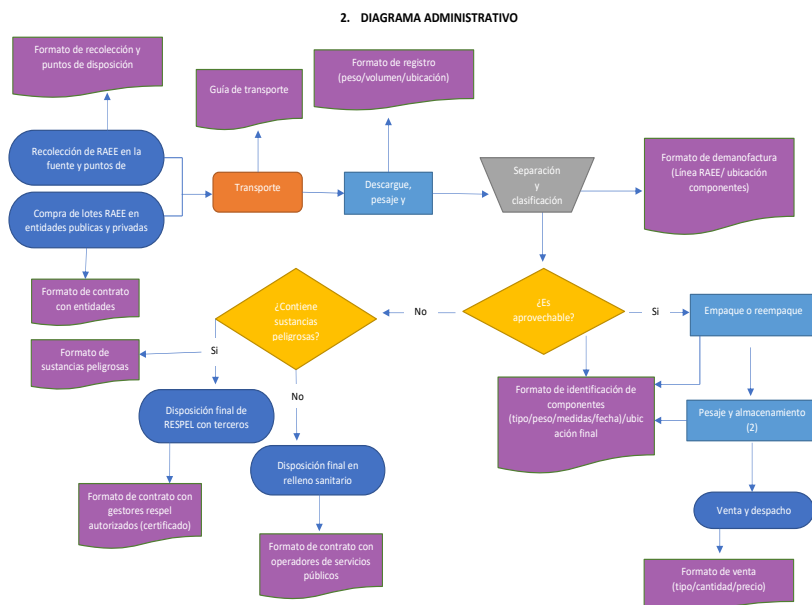
Considerando que el Distrito Capital tiene la obligación de actuar sobre este gran problema social y ambiental, ni se puede quedar esperando que sea la nación la que tenga la iniciativa a sabiendas de la cantidad de desechos que son altamente peligrosos frente a la normatividad citada anteriormente, tenemos la responsabilidad de generar normas que permitan implementar progresivamente estos modelos de mejoramiento de nuestro patrimonio ecológico por intermedio de alianzas público privadas, que gracias a sus conocimientos y experiencia podrán aportar a Bogotá un valor importante en el conocimiento y el manejo de esta serie de residuos.

En la siguiente ilustración se mostrará el proceso de transformación de los residuos de acuerdo con la clasificación de los mismos y de sus grandes componentes.

Al igual que el proceso Administrativo necesario para poder realizar la actividad del reciclaje de Raees, con la mayor eficiencia.



Fuente: Raeco Colombia SAS



Fuente: Raeco Colombia SAS

3.2.1 Responsabilidad ambiental del Concejo.

Con todo lo señalado anteriormente, es deber del Concejo, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, implementar un modelo gradual de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en el Distrito Capital, y dictar disposiciones para su sustitución y cierre de ciclos, y de esta manera hacerle frente a la problemática de la contaminación por residuos sólidos que trasciende a todo el territorio nacional, pero que afectan de manera particular la riqueza ecológica de nuestro territorio como son los humedales que aún nos quedan, pues muchos han desaparecido, y las fuentes hídricas, entre otros, y por ende la flora y fauna que en ellos habita.

Este proyecto de acuerdo propone para la ciudad la adopción de prohibiciones progresivas, así: **2023, 2024 y 2025**, atendiendo a la disponibilidad de asignación de recursos y con la intención de dar cumplimiento a los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), en particular el Objetivo 14: “*Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible*”, cuya meta 14.1 señala que:

*“14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida **por actividades realizadas en tierra**, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.” (Negrilla fuera de texto original)*

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

Decreto Ley 1421 de 1993

*“**ARTÍCULO 12. Atribuciones.** Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:*

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito... ”*
(...)
- 7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente (...)”*

Es importante resaltar que de acuerdo con el artículo 13 del Decreto Ley 1421 las competencias previstas en los numerales 1 y 7 citados anteriormente, pueden ser ejercidas directamente por el Concejo sin que medie la iniciativa del Alcalde Mayor.

5. IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA

Esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el Acuerdo 927 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, por lo tanto, no tiene impacto ambiental.

El presupuesto se encuentra ya apropiado como meta, de suerte que puede afirmarse que esta iniciativa no genera impacto fiscal toda vez que las acciones que propone este proyecto no implican desarrollar los mandatos del Acuerdo 927 de 2024, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 "BOGOTÁ CAMINA SEGURA"

Cordialmente,

EMEL ROJAS CASTILLO

Concejal de Bogotá

Partido Nueva Fuerza Democrática

PROYECTO DE ACUERDO NO 414 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE PROPONE PROGRESIVAMENTE EN EL DISTRITO CAPITAL LA IMPLEMENTACIÓN DEL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS ESPECÍFICAMENTE EN LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS -RAEES, A TRAVÉS DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política; los Artículos 63 y 65 de la Ley 99 de 1993; y El Artículo 12, numerales 1 y 7 y el Artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es incorporar progresivamente en el Distrito Capital la implementación del reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos específicamente en los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -Raees, a través de alianzas público privadas y se dictan otras disposiciones.

ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES. Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación del presente acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones.

RAESS: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

APP: Alianzas Público Privadas.

RECICLAJE: Proceso de recolección y transformación de materiales, para convertirlos en nuevos productos y que usualmente son convertidos en basura.

RESIDUO SOLIDO: Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por lo general por si solos carecen de valor económico.

RESIDUO SOLIDO APROVECHABLE: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido, que no tiene valor uso para quien los genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.

RESIDUO SÓLIDO ESPECIAL: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona, prestadora del servicio público de aseo.

PÁTOGENOS: Microorganismos que pueden causar enfermedades en otros organismos, como los seres humanos, animales o plantas.

ARTÍCULO 3°. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS:

- Según la peligrosidad de los residuos.
- Según el origen de los residuos.
- Según su composición.

Según su peligrosidad: Son aquellos residuos que no experimentan transformaciones o que sencillamente no se pueden volver a utilizar, no son solubles, ni combustibles, ni tienen reacciones químicas, obviamente no son biodegradables, un ejemplo de esta es el residuo de las obras de construcción o demolición.

Otro de los ejemplos, son los ácidos de las baterías de los carros, que son de alta peligrosidad.

Según el origen de los residuos:

- ❖ Hospitalarios.
- ❖ Domésticos
- ❖ Industriales
- ❖ Residuo eléctrico o electrónico- RAESS

Según su composición:

- Orgánico
- Inorgánico.
- Mezcla de Residuos

ARTÍCULO 4°. PROGRESIVIDAD en la implementación del reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos específicamente en los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -Raees, a través de alianzas público privadas.

La progresividad de la presente iniciativa será desde el 1 de enero de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2025, se espera durante este tiempo, las familias bogotanas y las autoridades del Distrito, puedan entender la generación de un nuevo sistema de reciclaje con altos índices de auto sostenimiento y disminución del impacto ambiental.

En la anterior iniciativa por su experiencia, se requiere del sector privado, quienes de acuerdo con sus aportes en esta serie de procesos pueden aportar al Distrito en este tratamiento de residuos que son muy importantes en el modelo ambiental y que permitirán ir generando las alianzas entre Gobierno y particulares para hacer un esfuerzo en su proceso de implementación.

ARTÍCULO 5°. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES POR FALTA DE RECICLAR ELEMENTOS DE BASTANTE PELIGROSIDAD.

ENFERMEDADES MICROBIOLÓGICAS:

Parasitosis, Amebiasis, Tenías, Fiebre Tifoidea, enfermedades micóticas,

ENFERMEDADES ESPARCIDAS POR EL AIRE:

Respiratorias como: Bronquitis, Asma, Neumonía, Cáncer pulmonar, Edema pulmonar, entre otras.

Enfermedades en la Piel.

Fatiga y migraña.

ENFERMEDADES ESPARCIDAS POR EL AGUA.

Enfermedades infecciosas: Cólera, fiebre tifoidea, Hepatitis A y B.

Por presencia de tóxicos químicos en el agua

Trastornos nerviosos, digestivos y renales, causados por el plomo. Ejemplo la diarrea

AFECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Contaminación del agua.
- Contaminación del aire.
- Contaminación del suelo.
- Daños Paisajísticos.
- Efecto Invernadero (calentamiento global)

ARTÍCULO 6°. VIGILANCIA, CONTROL Y PROMOCIÓN. Las autoridades ambientales competentes en la jurisdicción del Distrito Capital tendrán a su cargo la implementación, seguimiento y control de la implementación del reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos específicamente en los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -Raees, a través de alianzas público privadas. Quienes harán los procesos que sean necesarios en el Distrito para dar a conocer la peligrosidad de no llevar a cabo este proceso, y empezar a clasificar los residuos conforme lo señala el artículo 3° del presente acuerdo, atendiendo a la progresividad fijada en el artículo 4°; así mismo, adelantarán campañas de comunicación, concientización y cultura ciudadana ambiental en promoción de lo dispuesto en el presente acuerdo, quienes deberán reportar semestralmente los resultados al Concejo Distrital, los cuales serán publicados en la página Web de esta Corporación.

ARTÍCULO 7°. INCENTIVOS. Se exhorta a la administración distrital, para que de conformidad con las normas vigentes establezca incentivos o estímulos a través de programas, proyectos y actividades, dirigidos a las personas naturales o jurídicas que migren a esta iniciativa generada en el presente acuerdo

ARTÍCULO 8°. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO DE ACUERDO NO 415 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE (ALTERNATIVAS) EN LAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN AMBIENTES DOMÉSTICOS, INSTITUCIONALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”****1. OBJETO**

El objetivo principal es establecer un marco normativo integral que promueva la implementación obligatoria de infraestructuras y tecnologías avanzadas para la optimización del uso del agua potable y residual en ámbitos domésticos, comerciales institucionales e industriales, garantizando la sostenibilidad hídrica, la eficiencia en el consumo y el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad, con el fin de preservar los recursos hídricos del Distrito Capital y fomentar una cultura de ahorro y reúso del agua.

1.1 OBJETIVOS SECUNDARIOS

- Promoción de Tecnologías Sostenibles: Fomentar la adopción de tecnologías innovadoras y sostenibles para el ahorro y reúso del agua en todos los sectores.
- Incentivos Económicos: Establecer incentivos económicos, como reducciones de impuestos, subsidios u otro tipo de subsidio que la Administración determine, para las edificaciones que implementen sistemas de ahorro y reúso de agua.
- Monitoreo y Evaluación: Crear un sistema de monitoreo y evaluación continua para asegurar el cumplimiento de las normativas, medir el impacto y el éxito, de las medidas implementadas.
- Colaboración Interinstitucional: Fomentar la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales, privadas y comunitarias para asegurar una implementación efectiva y coordinada de las medidas de ahorro de agua.
- Investigación y Desarrollo: Promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos para la optimización del uso del agua potable y residual.
- Regulación y Normativa: Actualizar y fortalecer las regulaciones y normativas existentes para asegurar que todas las nuevas construcciones y renovaciones cumplan con los estándares de ahorro y reúso de agua.
- Protección de los Recursos Hídricos: Implementar medidas para proteger y conservar los recursos hídricos del Distrito Capital, asegurando su disponibilidad para las futuras generaciones.

- **Educación y Concienciación:** Implementar programas educativos y campañas de concienciación para informar a la ciudadanía sobre la importancia del ahorro de agua y las prácticas eficientes de su uso, formando una nueva cultura del agua en el Distrito Capital.

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las actuales normativas nacionales y distritales en relación con el uso y construcción de infraestructuras hidrosanitarias no establecen requisitos para un uso consciente y eficiente del agua potable en contextos domésticos, comerciales, institucionales e industriales. No promueven la racionalización del uso del agua ni la reutilización de aguas residuales (como, por ejemplo, en uso doméstico: en el lavado de ropa, limpieza del hogar, y preparación de los alimentos; en las instituciones: consumo de agua en baños y fuentes, limpieza de instalaciones y áreas comunes; igualmente en los comercios y oficinas, etc.) y agua de lluvia, los cuales podrían ser aprovechados en: cisternas, recargas de acuíferos subterráneos, en procesos industriales; refrigeración, limpieza de equipos, y también para reutilización del consumo humano; eliminando así la necesidad de usar parte del agua potable del sistema hídrico

A nivel nacional y distrital, en contextos domésticos, comerciales, institucionales e industriales, tanto públicos como privados, se ha utilizado tradicionalmente agua potable para todas las necesidades hídricas. Esta práctica ha llevado a un uso y demanda excesiva de este recurso, en algunos casos injustificada, ya que se utiliza agua potable tratada para procesos que no lo requieren. Esto ha hecho que las infraestructuras y patrones de uso del agua potable, tal como los conocemos, no solo se vuelvan obsoletos, sino que también representen un derroche de este recurso vital.

Esto genera la necesidad de prepararnos para eventos mayores, como el racionamiento en el Distrito Capital, y la posibilidad de crear normas que contribuyan a una reestructuración de las exigencias en las instalaciones hidráulicas en las nuevas construcciones y en las existentes. El objetivo es racionalizar el consumo de agua potable y promover su reemplazo por aguas residuales y agua de lluvia.

2.1 ALGUNAS MEDIDAS ESPECIFICAS QUE PODRIAN IMPLEMENTARSE PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE DEL AGUA.

Tecnologías de Ahorro de Agua: Implementar dispositivos de ahorro de agua en grifos, duchas y sanitarios, como aireadores de grifos y duchas de bajo flujo, puede reducir significativamente el consumo de agua.

Reutilización de Aguas Grises: Las aguas grises, que son las aguas residuales generadas en hogares o edificios de oficinas de procesos como lavar platos, lavar ropa y bañarse, pueden ser tratadas y reutilizadas para fines no potables como el riego de jardines o la descarga de inodoros.

Captación de Agua de Lluvia: El agua de lluvia puede ser recolectada y almacenada para su uso en actividades que no requieran agua potable, como el riego de plantas o la limpieza.

Educación y Concienciación: Es fundamental educar a la población sobre la importancia del agua y cómo su uso eficiente puede ayudar a preservar este recurso vital. Esto podría incluir campañas de concienciación y programas educativos.

Incentivos y Tarifas: Implementar tarifas de agua que incentiven el ahorro de agua puede ser una forma efectiva de promover el uso eficiente del agua. Además, se podrían ofrecer incentivos para aquellos que instalen tecnologías de ahorro de agua en sus hogares o negocios.

Normativas y Regulaciones: Finalmente, las regulaciones y normativas pueden desempeñar un papel crucial en la promoción del uso eficiente del agua. Esto podría incluir la modificación del código de construcción que requieran la instalación de tecnologías de ahorro de agua en nuevos edificios, o regulaciones que requieran la reutilización de aguas grises en ciertos contextos.

2.2 UNA APRECIACIÓN ACTUAL PARA FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE AHORRO DE AGUA:

Educación y Concienciación: Informar a la gente sobre la importancia del ahorro de agua y cómo las tecnologías de ahorro de agua pueden hacer una diferencia. Esto podría hacerse a través de campañas de concienciación, talleres educativos y programas de formación.

Incentivos Financieros: Ofrecer incentivos financieros, como descuentos o reembolsos, para aquellos que instalen tecnologías de ahorro de agua en sus hogares o negocios. Esto podría incluir descuentos en las facturas de agua o en los impuestos a la propiedad.

Regulaciones y Normativas: Implementar regulaciones que requieran la instalación de tecnologías de ahorro de agua en nuevos edificios o durante las renovaciones. También se podrían establecer normas que requieran la utilización de tecnologías de ahorro de agua en ciertos sectores o industrias.

Demostraciones y Casos de Éxito: Mostrar ejemplos de cómo las tecnologías de ahorro de agua han sido efectivas en otros lugares puede ser una forma poderosa de convencer a la gente de su valor. Esto podría incluir estudios de caso, visitas a instalaciones que utilizan estas tecnologías, o demostraciones en vivo.

Asociaciones y Colaboraciones: Trabajar con fabricantes de tecnologías de ahorro de agua, empresas de servicios públicos, organizaciones sin fines de lucro y otros grupos interesados para promover la adopción de estas tecnologías.

2.3 INVOLUCRAR EMPRESAS y CIUDADANÍA EN LA INICIATIVA DEL AHORRO DEL AGUA

Incentivos Fiscales y Subvenciones: Ofrecer incentivos fiscales o subvenciones a las empresas y/o a la ciudadanía, que implementen tecnologías de ahorro de agua puede ser un gran motivador. Esto podría incluir reducciones de impuestos, créditos fiscales, o incluso financiamiento para la instalación de estas tecnologías.

Reconocimiento Público y Certificaciones: Las empresas a menudo responden positivamente al reconocimiento público. Puede Crearse un programa de certificación o premios para las empresas que lideran en la conservación del agua puede incentivar a otras a seguir su ejemplo, al igual que puede solicitar obtenerse la certificación ISO.

Asociaciones Público-Privadas: Trabajar en colaboración con las empresas, puede llevar a soluciones más innovadoras y efectivas. Esto podría incluir proyectos de investigación conjunta, programas de formación, o incluso la creación de nuevas tecnologías de ahorro de agua.

Regulaciones y Normativas: Implementar regulaciones que requieran a las empresas a utilizar tecnologías de ahorro de agua o a seguir prácticas de conservación del agua puede ser una forma efectiva de involucrarlas. Esto podría ser especialmente relevante para industrias que son grandes consumidores de agua.

Educación y Formación: Proporcionar a las empresas la formación y los recursos necesarios para entender y implementar tecnologías de ahorro de agua puede ser muy útil. Esto podría incluir talleres, seminarios, o incluso materiales de formación en línea

2.4 DONDE SE GENERAN LAS AGUAS RESIDUALES, SERVIDAS Y DE DESHECHO:

Es importante mencionar que la Administración pública a través de la Secretaria Distrital de Planeación, ha realizado estudios donde es importante mencionar que el consumo de agua en varios de los siguientes centros es un tema de gran relevancia, y según su informe, donde ha realizado estos sobre los indicadores de consumo de agua y energía eléctrica en Bogotá desde 2012 hasta 2019, incluyendo a los diferentes usos; especialmente en “INDICADORES DE CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2020”

El cual es un resumen donde esbozan claramente la necesidad de adoptar el seguimiento anual y evaluación de impacto que debería tener esta política en la reducción del consumo del agua y energía eléctrica en todas las edificaciones.

Clarifican que es una gran preocupación para los gobiernos mundiales el problema del “CAMBIO CLIMÁTICO” y el CALENTAMIENTO GLOBAL, donde exponen, que el sector de los edificios y la construcción, emiten Gases Efecto Invernadero (GEI) en el 38%. la fuente que se ha tomado se encuentra en:

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/indicadores_de_consumo_de_agua_y_energia_electrica_-_bogota_d.c._2020_vf.pdf

En las siguientes ilustraciones y usos podemos entender el consumo pandemia por el COVID-19 y el indicador nos muestra el cambio de consumo en los diferentes usos, nos muestra lo que debía arrojar como máximo y lo que ha sucedido con el asunto, explicando de la siguiente manera:

2.5 Tipos edificaciones: aquellas que utilizan los recursos hídricos en:

2.5.1. Edificaciones: Complejos, Conjuntos, Condominios y Unidades Residenciales: Estos tienen un consumo de agua potable en jardinería, limpieza y baterías de baños comunes y uso doméstico. El agua gris puede ser utilizada para llenar las cisternas de los inodoros, lavado de pisos, riego de jardines y césped, lo que puede representar un ahorro significativo de agua potable.

Ilustración 1: Consumo diario de agua viviendas estrato día 2020, Fuente SDP, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. EAAB

“Es importante señalar que cerca del 75% del consumo diario de agua se da en los estratos 1,2 y 3 en donde suelen estar ubicadas las viviendas VIS, para las cuales los porcentajes mínimos de ahorro en agua son de optativo cumplimiento.”

Ilustración 2: Consumo agua viviendas por estrato. Fuente SDP

Según la gráfica anterior, se observa un valor alto para el año 2020 como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19, con marcado ascenso en los estratos 1,2 y 3, podemos prever que para este año 2024, este indicador puede ser relativamente parecido con el resultado del racionamiento.

Ilustración 3: Uso final del agua en dependencias de vivienda 4,5 y 6s. Fuente SDP; DTS – Resolución 1874 de 2019

Según la ilustración 3, la mayor parte de la utilización de agua en las viviendas es en las duchas, con un 54% del gasto total de agua.

Ilustración 4: Consumo de agua viviendas 2020. Fuente SDP

El indicador muestra el consumo por cada localidad, y expone que en Chapinero se da el mayor consumo del líquido vital con 117,38 lts/día/persona, y el promedio para Bogotá se encuentra en 84.34 lts/día/persona. En Chapinero los estratos mayores son 4,5 y 6. Donde se comprobó que no cumplieron con el ahorro de agua para vivienda no VIS.

2.5.2 Centros Comerciales:

Ilustración 5: Consumo de agua en Centros Comerciales 2020 Fuente SDP.

El mapa ilustra el comportamiento del indicador de consumo de agua (lts/día/m²) para el año 2020 en los centros comerciales. Donde se encuentra por debajo de 4,5 lts./diarios/m², la media tradicional es de 6 lts/día/m²

2.5.3 Oficinas

Ilustración 6: Consumo de agua Oficinas 2020 Fuente: SDP

El indicador se encuentra por debajo de 3.5 lts/día/m² y se multiplica por 9m² por persona, como límite de 31.5 lts/día/persona Y el máximo para este uso es de 45 lts/día/persona.

2.5.4 Hoteles

Ilustración 7. Consumo de agua en hoteles 2020 Fuente: SDP

El límite estimado es de 145.5 lts/día/persona en el año 2020; la línea base para este uso es de 188,5 lts/día/persona tiempo normal

2.5.5 Instituciones Educativas

Ilustración 8 Consumo agua en Colegios 2020 Fuente: SDP

El consumo se encontraba por debajo de los 4.11 lts/día/m², la línea base es de 50 lts/día/persona.

2.5.6 Hospitales

Ilustración 9 Consumo de agua en hospitales lts/día/persona, 2020

“El indicador se encuentra en 4,12 litros diarios por metro cuadrado en promedio para todos los hospitales de la ciudad. Considerando que según la Secretaría Distrital de Salud se tenían 11.278 camas hospitalarias en Bogotá de acuerdo con la información publicada en el portal SaluData con corte al 31 de diciembre de 2020. Al dividir los 4.822.046 litros diarios consumidos por persona en los hospitales entre las 11.278 camas habilitadas da como resultado un estimado de 427,6 litros consumidos por persona al día. Si se tiene en cuenta que la línea base para Hospitales se encuentra en 620 litros diarios por persona y que el porcentaje mínimo de ahorro es del 10% (equivalente a 558 litros diarios por persona), se puede inferir que en general se ha reducido el consumo de agua en la medida requerida”.

2.5.8 Algunas conclusiones, recomendaciones y resumen del indicador, donde solicita actualizar la Resolución 549 de 2015:

Como parte del resumen el indicador nos refiere que el 75% del consumo del agua se da en los estratos 1,2 y 3 y específicamente donde están las viviendas VIS, donde no es obligatorio el ahorro del agua, recomienda que se vuelva la medida obligatoria.

El indicador enuncia que hubo incremento en el sector de la vivienda en la emergencia sanitaria del COVID-19 entre el 3.5% y el 9.8%, siendo mayor en los estratos 1,2 y 3 aunque está por debajo de la línea base en la Res. 549 de 2015.

Los estratos 4,5, y 6 deben mejorar puesto que el consumo está por encima de lo recomendado por la OMS. Especialmente dentro de las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero.

Algunos sectores como las UPZ que se encuentran en los bordes de la ciudad, la academia, Parque Entrenubes; El Mochuelo; Zona Franca; San Isidro Patios y Aeropuerto el Dorado entregaron valores anormales para el consumo del agua. Debido a que el número de las viviendas en estos lugares son menores.

Faltan datos para los usos diferentes a las viviendas para poder calcular el consumo per cápita propuestos en la resolución 549 de 2015, por falta del aforo de los centros de comercio, oficinas, hoteles, educativos, y hospitales.

Expone el indicador es necesario la información consolidada de las diferentes Curadurías Urbanas “que permita indicar el tipo de medidas aplicadas en cada proyecto”, con el fin de poder realizar “una evaluación del impacto que debería tener la Política pública de Ecorbanismo y Construcción Sostenible en la reducción del consumo de agua”, para las nuevas construcciones en contraposición de las antiguas.

2.5.9 La Construcción:

El consumo de agua en la construcción en Bogotá se rige por la Política Pública de Ecorbanismo y Construcción Sostenible. Esta política busca reducir el consumo de agua y energía eléctrica en las edificaciones.

2.5.10 Uso en Concreto: tipo de mezcla grava y arena y para rocío de este en obra.

Para 1 m³ de concreto se requiere: La relación del consumo de agua en una concretera por metro cúbico de concreto depende del tipo de concreto que se esté produciendo. Por ejemplo, para un concreto de grado M25, se utiliza una relación agua-cemento de 0.55 en el diseño de la mezcla¹. Esto significa que, en promedio, se requieren 8 bolsas de cemento que pesen 50 kilos cada una para producir 1 m³ de concreto de grado M252. Entonces, el agua requerida sería = 350 kg (cemento) * 0.55 = 192.5 kg o litros de agua¹.

Es importante mencionar que estos valores son aproximados y pueden variar dependiendo de factores específicos como la calidad del cemento, la granulometría de los agregados, las condiciones climáticas, entre otros. Otra situación es que algunas mezclas se realizan directamente en las obras.

Fuente: Bing.com

2.5.11 Uso en Morteros: Mezclas de arena y cemento, igualmente requieren de bastante agua, la cual puede también ser tratada para su reutilización

Ilustración 10 Tabla de dosificación de los morteros. Fuente: ingenieriareal.com

Tanto las mezclas de Concretos y Morteros para la construcción, se realizan en fábricas de mezclas que controlan un trabajo técnicamente eficiente en la dosificación del agua; sin embargo, un porcentaje importante se realiza en las obras pequeñas donde el volumen de agua es incontrolable.

2.5.12 Instalaciones militares y de la fuerza pública:

El consumo de agua en las instalaciones militares puede variar dependiendo de una serie de factores, incluyendo el tamaño de la instalación, el número de personal, las operaciones que se llevan a cabo, entre otros.

Es importante mencionar que el agua es un recurso esencial en las operaciones militares, no solo para el consumo humano, sino también para el mantenimiento y reparación de vehículos militares, buques, aeronaves, equipos y sistemas de armas, almacenamiento y trasiego de combustibles y sustancias peligrosas, prácticas contraincendios, prácticas en campos de maniobras y en galerías y espaldones de tiro, prácticas de detonación y destrucción controlada de munición, prácticas con explosivos y lanzamiento de granadas.

Además, las instalaciones militares deben contar con sistemas de tratamiento de agua para garantizar que el agua que se consume esté libre de contaminantes. En algunos casos, las instalaciones militares pueden tener sus propios sistemas de tratamiento de agua para garantizar un suministro constante y seguro.

Sin embargo, los datos específicos sobre el consumo de agua en las instalaciones militares no suelen ser de dominio público por razones de seguridad. Hay que tener en cuenta que esta información puede estar sujeta a restricciones de seguridad, por lo que no es posible tener este insumo a la mano.

Tienen un consumo de agua potable en jardinería, limpieza y baterías de baños mayoritariamente.

2.5.13 Instalaciones y complejos gubernamentales: Estos tienen un consumo de agua potable en jardinería, limpieza y baterías de baños mayoritariamente.

2.5.14 Centros Carcelarios y lugares de reclusión: Estos establecimientos utilizan agua potable principalmente en jardinería, limpieza y servicios sanitarios.

Es importante mencionar que el consumo de agua en estos centros es un tema de gran relevancia. Según un informe de la Secretaría Distrital de Planeación, también se han realizado estudios sobre los indicadores de consumo de agua y energía eléctrica en Bogotá desde 2012 hasta 2019, incluyendo a los centros carcelarios¹. Sin embargo, no se proporcionan detalles específicos sobre el consumo de agua en estos centros.

Fuentes:

<https://es.pureaqua.com/content/pdf/Tratamiento-de-agua-para-militares>.

www.cemosa.es/2022/06/09/principales-contaminantes-emergentes-en-el-subsuelo-de-instalaciones-militares/

www.elespanol.com/alicante/cultura/20240504/acueducto-militar-termino-dando-agua-millon-personas-provincia-alicante/852415074_0.html

Además, los centros carcelarios de Bogotá se declararon en alerta verde debido a los racionamientos de agua que hay en Bogotá desde el 11 de abril. Esto subraya la importancia de las estrategias de conservación y uso eficiente del agua en el sector carcelario. En respuesta a la situación, los centros carcelarios han implementado medidas como reducir el tiempo de baño en un 50% y cerrar los grifos mientras se enjabonan y cepillan los dientes

2.5.15 Centros de reunión Religiosos en sus servicios

2.5.16 Clubes Varios: Consumo de agua potable en varias de sus dependencias.

3. ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS y VERTIENTES

A nivel nacional y distrital en Colombia, varias entidades tienen la responsabilidad de proteger y gestionar el agua.

3.1 Entidades Nacionales:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación

Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico: Esta dirección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas

Coalición Agua para Colombia: Es un esfuerzo multisectorial para proteger 15 áreas con ciudades, zonas agrícolas y energéticas de Colombia en mayor riesgo de inseguridad hídrica. Está conformada por 40 organizaciones de diversos sectores del gobierno, la industria, el sector financiero, organismos no gubernamentales y sociedad civil.

Autoridades Ambientales: Con respecto al recurso hídrico, estas autoridades se ocupan de otorgar los permisos de concesión de aguas superficiales y subterráneas, de prospección y exploración de aguas subterráneas y de la autorización de construcción en zonas que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así como hacerles seguimiento a todas las licencias otorgadas.

Cámara Colombiana del Agua: Es una organización no gubernamental que busca convertirse en un líder mundial en el suministro de soluciones hídricas sostenibles e innovadoras.

La Superintendencia de los servicios públicos Domiciliarios: Es una entidad descentralizada de carácter técnico, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. Por lo tanto, tiene jurisdicción en todo el territorio colombiano para supervisar y controlar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, donde se encuentra las situaciones del manejo del agua.

3.2 Entidades distritales:

3.2.1 Alcaldías locales: Son las encargadas de hacer operativos de control de las licencias de construcción y operativos de control de las instalaciones hidrosanitarias en las construcciones existentes en compañía de la Superintendencia de Servicios Públicos. También se encargan de adelantar operativos de revisión de las instalaciones en las construcciones en proceso y finalizadas. Así mismo son las que tienen que dar el Certificado de operación del Uso, según las Resoluciones y licencias de construcción emitidas por la Curadurías Urbanas.

También están encargadas de la verificación de los vertimientos de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD), solicitar los permisos correspondientes.

3.2.2 Secretaria de Ambiente: La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en Bogotá tiene varias responsabilidades con respecto al agua limpia y servida en el distrito¹. Algunas de estas responsabilidades incluyen:

- **Control de Vertimientos y Emisiones Contaminantes:** La SDA realiza el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y desechos o residuos peligrosos y de residuos tóxicos².
- **Corrección o Mitigación de Daños Ambientales:** La SDA dicta las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales².
- **Desarrollo de Proyectos de Saneamiento y Descontaminación:** La SDA complementa la acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para desarrollar proyectos de saneamiento y descontaminación².
- **Plan Distrital del Agua:** La SDA ha adoptado el Plan Distrital del Agua, un instrumento de planeación ambiental que busca garantizar una cantidad mínima de agua que permita a las personas llevar una vida en condiciones dignas³.
- **Control a las Fuentes Contaminantes de los Cuerpos Hídricos:** La SDA aporta al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de las Naciones Unidas, “Agua Limpia y Saneamiento”, desde el control a las fuentes contaminantes de los cuerpos hídricos⁴.
- **Monitoreo de la Calidad del Agua:** La SDA realiza el monitoreo de la calidad del agua superficial del perímetro urbano de la ciudad

Aprovechamiento agua lluvias: La Secretaría Distrital de Ambiente ha publicado un boletín sobre el aprovechamiento de agua de lluvia.

Proyecto de recolección de agua lluvia en humedales: La Secretaría de Ambiente está desarrollando un proyecto piloto de recolección de agua lluvia en humedales. Este sistema, conocido como “cosechera”, captura agua lluvia y la almacena para que se pueda aprovechar en actividades de riego, especialmente en épocas de menos lluvia.

Gestión integral del agua como medida de mitigación y adaptación al cambio climático: La Secretaría de Ambiente ha realizado una conferencia sobre la “Gestión integral del agua como medida de mitigación y adaptación al cambio climático”, en la que se discutieron estrategias, proyectos y retos implementados por las grandes ciudades en temas de aprovechamiento de aguas lluvias, servidas y regeneradas.

Estas iniciativas son parte de los esfuerzos de la Secretaría de Ambiente para promover el uso sostenible del agua y mitigar los efectos del cambio climático.

3.2.3 Secretaria Distrital de Planeación

Formula, orientar y coordina las políticas de planeación del desarrollo territorial, Coordina la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y de los planes de desarrollo local; Adelanta las funciones de regulación del uso del suelo; Coordina la formulación, ejecución y seguimiento de operaciones estratégicas de la ciudad entre otros.

3.2.4 Curadurías Urbanas

Dentro de sus funciones, son instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas que regulan la construcción y urbanismo en armonía con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada ciudad.

Las Curadurías Urbanas se encargan de expedir varias licencias urbanísticas, como las de urbanización, parcelación, subdivisión y de construcción. También se encargan de hacer el reconocimiento de las edificaciones existentes, prorrogar licencias, revalidaciones de licencias, ajuste de cotas de áreas, concepto de norma urbanística, concepto de uso del suelo, copia certificada de planos, aprobación de los Planos de Propiedad Horizontal y aprobación de piscinas.

3.2.5 La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Tiene varias funciones y responsabilidades en relación con el agua y los servicios públicos de la ciudad. Formular y proponer políticas, planes, proyectos y programas encaminados al desarrollo de la misión de la Unidad, cumplimiento de objetivos y metas en concordancia con los planes sectoriales, distritales y nacionales.

Promover la participación ciudadana en la gestión pública, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos y el cuidado del medio ambiente a través de la planeación y modelación de los servicios a cargo.

Realizar el seguimiento a los prestadores y operadores de los servicios públicos.

En cuanto al agua, aunque la UAESP no se encarga directamente de la gestión del agua, sí tiene un papel importante en la gestión de los residuos sólidos y líquidos, lo cual puede tener un impacto indirecto en la calidad del agua en la ciudad. Por ejemplo, la UAESP trabaja para reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios y promover su reutilización. Esto puede ayudar a reducir la contaminación del agua y mejorar su calidad. Sin embargo, la gestión directa del agua en la ciudad generalmente recae en otras entidades, como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.

3.2.6 Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá:

La empresa está encargada de administrar y regular el agua potable, saneamiento y recolección de residuos de la ciudad de Bogotá y de algunos municipios de Cundinamarca. Operar y mantener las redes menores de acueducto y alcantarillado en un área determinada de la ciudad.

Dentro de sus funciones esta proteger, conservar y recuperar el recurso hídrico de la región. Trabajar para el saneamiento de 4 grandes ríos, la recuperación de más de 100 quebradas, 13 humedales y el mantenimiento de los canales de la ciudad.

Generar Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para reducir los gases de efecto invernadero en el planeta, mediante la producción de energía limpia en la hidroeléctrica de Santa Ana, entre otros.

4. MARCO NORMATIVO

4.1 Constitución Política de Colombia

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares

(...) Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

(...) *Artículo 78.* La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

(...) *Artículo 88.* La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

(...) *Artículo 313.* Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

(...) *Artículo 334.* La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.

También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

a) Decretos leyes

- Ley 142 de 1994
- Decreto 1575 de 2007: Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 142 de 1994 en lo relacionado con el suministro de agua potable y el saneamiento básico. Establece los requisitos técnicos y administrativos para la prestación de estos servicios, incluyendo aspectos como la calidad del agua, la disposición de aguas residuales y la planificación del sector.
- Decreto 475 de 1998: Reglamenta el funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, incluyendo aquellas encargadas del suministro de agua potable y el manejo de aguas residuales.

- Decreto 310 de 1999: Establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, el cual define los criterios técnicos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas.
- Decreto 1077 de 2015: Compila y unifica las normas del sector ambiente y desarrollo sostenible. Contiene disposiciones relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico y la protección de fuentes de agua.
- Decreto 3930 de 2010: Reglamenta el sistema de gestión ambiental para el sector público y privado, incluyendo disposiciones relacionadas con el manejo de aguas residuales y la protección de recursos hídricos.
- Resolución 1565 de 2014: Establece los requisitos técnicos para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y control de sistemas de alcantarillado urbano.
- Resolución 2115 de 2007: Define los parámetros y criterios de calidad para el agua potable de consumo humano y su vigilancia en el territorio nacional.
- Resolución 909 de 2008: Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en aguas residuales vertidas a cuerpos de agua superficiales.
- Resolución 2119 de 2017: Regula la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en pequeñas comunidades y cabeceras municipales.
- Norma NTC 1500 - Aguas residuales domésticas e industriales - Características y condiciones de vertimiento al alcantarillado público: Define los parámetros y criterios de calidad que deben cumplir las aguas residuales vertidas al alcantarillado público.
- Norma NTC 4158 - Tubería de PVC para sistemas de alcantarillado no a presión - Especificaciones: Establece las especificaciones técnicas para la fabricación de tuberías de PVC utilizadas en sistemas de alcantarillado.
- NTC 1500 - Aguas residuales domésticas e industriales - Características y condiciones de vertimiento al alcantarillado público: Esta norma define los parámetros y criterios de calidad que deben cumplir las aguas residuales vertidas al alcantarillado público.
- NTC 4158 - Tubería de PVC para sistemas de alcantarillado no a presión - Especificaciones: Establece las especificaciones técnicas para la fabricación de tuberías de PVC utilizadas en sistemas de alcantarillado no a presión.

- NTC 1486 - Símbolos gráficos para diagramas de tuberías e instrumentación: Define los símbolos gráficos utilizados en diagramas de tuberías e instrumentación, facilitando la interpretación de planos y diseños de instalaciones hidráulicas.
- NTC 4211 - Tanques sépticos prefabricados de polietileno de alta densidad (PEAD) para sistemas sépticos y lagunas de oxidación - Requisitos y métodos de ensayo: Esta norma establece los requisitos técnicos y los métodos de ensayo aplicables a los tanques sépticos prefabricados fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD).
- NTC 4435 - Redes de alcantarillado pluvial para sistemas de evacuación de aguas de escorrentía urbana - Especificaciones: Define los requisitos técnicos para el diseño y la construcción de redes de alcantarillado pluvial utilizadas en la evacuación de aguas de escorrentía urbana.
- Ley 373 de 1997: Esta ley establece el Programa Nacional para el Uso Racional y Eficiente de los Recursos Hídricos, promoviendo la conservación, protección, recuperación y mejoramiento de los recursos hídricos del país.
- Ley 142 de 1994: La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios regula la prestación de servicios públicos, incluyendo el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales. Esta ley establece los principios, derechos y deberes en materia de servicios públicos domiciliarios.
- Decreto 1076 de 2015: Compila el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el contexto de un sistema de reciclaje de aguas residuales y pluviales, este decreto puede establecer requisitos para el manejo ambientalmente adecuado de estas aguas, así como para la obtención de permisos y autorizaciones ambientales.
- Decreto 3930 de 2010: Reglamenta el Sistema de Gestión Ambiental para el sector público y privado. En el contexto de un sistema de reciclaje de aguas, este decreto puede establecer directrices para la gestión ambiental de los procesos de tratamiento y reutilización de aguas residuales y pluviales.
- Resolución 631 de 2015: Establece los requisitos técnicos y administrativos para el uso eficiente y la reutilización de aguas residuales tratadas en Colombia. Esta resolución regula aspectos como la calidad del agua, los sistemas de tratamiento y los usos permitidos para las aguas recicladas.
- Normas Técnicas Colombianas (NTC): Varias normas técnicas, como la NTC 1500 sobre características y condiciones de vertimiento al alcantarillado público y la NTC 4435 sobre redes de alcantarillado pluvial, pueden ser relevantes en el diseño e implementación de un sistema de reciclaje de aguas residuales y pluviales.

Ley 1801 de 2016 “Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”:

- Título XIV “Del Urbanismo”: Capítulo II “Del cuidado e integridad del espacio público” Artículos. 139 “Definición del espacio público” y 140 “Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”.
- **Decreto 1783 de 2021**
"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y se dictan otras disposiciones"
- (...) **ARTÍCULO 6.** Modifíquese el artículo 2.2.6.1.1.1 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así:
- **ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1 Licencia urbanística.** Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amueblamiento o para la intervención del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes.
- La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y realizar el loteo o subdivisión de predios.
- El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y sismo resistentes y demás reglamentaciones en que se fundamenta, y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya ejecutado la obra siempre y cuando se hayan cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma.
- Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición.
- **PARÁGRAFO 1.** Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto de prórrogas, modificaciones y revalidaciones.
- Se entiende por prórroga de la licencia la ampliación del término de vigencia de esta.

- Se entiende por modificación de la licencia, la introducción de cambios urbanísticos, arquitectónicos o estructurales a un proyecto con licencia vigente, siempre y cuando cumplan con las normas urbanísticas, arquitectónicas y estructurales y no se afecten espacios de propiedad pública.
- Se entiende por revalidación el acto administrativo mediante el cual el curador urbano o la autoridad competente de la expedición de licencias urbanísticas, concede una nueva licencia, con el fin de que se culminen las obras y actuaciones aprobadas en una licencia vencida y sus modificaciones, en los términos establecidos en el artículo 2.2.6.1.2.4.3. del presente decreto o aquel que lo adicione, modifique, o sustituya. Las revalidaciones, en los casos que aplique, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 2.2.6.1.2.4.1 del presente decreto, serán objeto de prórroga.
- (...) **ARTÍCULO 10.** Modifíquese los numerales 1, 7 y 8, y los párrafos 2 y 6 y adiciónese el párrafo 7 al artículo 2.2.6.1.1.7 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales quedarán así:
 - **1. Obra nueva.** Es la autorización para adelantar obras de edificación en predios no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total.
 - **7. Demolición.** Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones. En la reconstrucción e deberá dar cumplimiento a las normas de sismo resistencia y accesibilidad, y se efectuará sin perjuicio de las disposiciones de conservación de bienes de interés cultural.
 - **8. Reconstrucción.** Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones. En la reconstrucción e deberá dar cumplimiento a las normas de sismo resistencia y accesibilidad, y se efectuará sin perjuicio de las disposiciones de conservación de bienes de interés cultural.
- (...) **PARÁGRAFO 7.** La licencia de construcción en bienes o sectores de interés cultural y en su área de influencia solo se podrá expedir cuando se aporte la autorización de intervención aprobada por la autoridad competente. En todo caso, se deberán atender las condiciones establecidas en el plan de manejo y protección de sector urbano declarado Bien de Interés Cultural o en el acto de declaratoria.
- (...) **ARTÍCULO 12.** Modifíquese el numeral 3 del artículo 2.2.6.1.1.11 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio y adiciónese los párrafos 1 y 2, así:
 - **3.** Requieren licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades, las edificaciones convencionales de carácter permanente que se desarrollen al interior del área del proyecto, obra o actividad de que trata el numeral 1.2. del numeral primero del presente artículo. Dichas licencias serán otorgadas por el curador urbano o la autoridad municipal competente con fundamento en la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan; y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-10, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya; y en todas aquellas disposiciones de carácter especial que regulen este tipo de

proyectos. En ninguno de los casos señalados en este numeral se requerirá licencia de urbanización, parcelación ni subdivisión

- (...) **ARTÍCULO 18.** Modifíquense los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 2.2.6.1.2.2.3 de la Subsección 2 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, así:
- (...) **PARÁGRAFO 2.** Hasta tanto no se implemente el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados, los profesionales que suscriben el formulario único nacional para la solicitud de licencias, deberán cumplir con los requisitos de experiencia e idoneidad profesional exigidos por el Título VI de la Ley 400 de 1997, para adelantar el desarrollo de una edificación.
- El revisor o revisores de los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no estructurales no puede ser el mismo profesional que los elaboró, ni puede tener relación laboral o contractual con este, ni con la empresa que tuvo a su cargo la elaboración de cada uno de los diseños y estudios respectivamente. Esto aplica tanto para la revisión efectuada por las autoridades municipales o distritales encargadas del licenciamiento urbanístico, como para la revisión efectuada por los curadores urbanos y los revisores independientes de diseños estructurales. Además, no debe presentarse ninguna de las incompatibilidades contenidas en la Ley 1796 de 2016 ni en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
-
- **PARÁGRAFO 3.** La revisión independiente de diseños estructurales debe realizarse conforme a lo dispuesto en el Apéndice A-6 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. La escogencia y costo del profesional independiente será asumido por el solicitante de la licencia. En municipios que no cuenten con la figura del curador urbano, la revisión independiente de diseños estructurales podrá ser realizada por el curador urbano del municipio más cercano dentro del mismo departamento, siempre y cuando el mismo acepte realizarla, cuente con el título de ingeniero civil y cumpla con las calidades de idoneidad y experiencia exigidas por la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.
- El alcance y procedimiento de la revisión de los diseños y estudios se sujetará a lo previsto en la Resolución 0017 de 2017 de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- **ARTÍCULO 23.** Modifíquense los numerales 9 y 10 y adiciónense los numerales 16 y 17 del artículo 2.2.6.1.2.3.6 de la Subsección 3 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, así:
- **9.** Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
- El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6º de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.

- **10.** Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.
- (...) **Art. 32** Adiciónense los párrafos 2 y 3 al artículo 2.2.6.1.4.1 de la Sección 4 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, así:
- **PARÁGRAFO 2.** Para las obras que no requirieron supervisión técnica independiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 400 de 1997 modificado por el artículo 5 de la Ley 1796 de 2016, la responsabilidad frente al cumplimiento de las normas sismo resistente en la ejecución de la obra, recae exclusivamente sobre el titular de la licencia urbanística y el constructor responsable del proyecto.
- **PARÁGRAFO 3.** Lo dispuesto en el presente artículo no es exigible en las obras que deban someterse a supervisión técnica independiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 6 de la Ley 1796 de 2016, las cuales deberán tramitar la Certificación Técnica de Ocupación en los términos y condiciones señalados en la referida ley.

4.2 DECRETOS DISTRITALES

El Plan de Desarrollo por una Bogotá más Segura, funge como una obligación del Distrito el propender por el ahorro del agua, teniendo en cuenta el problema del medio ambiente y buscando que el calentamiento global sea recibido con formas de defensa

(...) Artículo 13. Propósito y estrategias del Objetivo Estratégico “Bogotá Ordena su Territorio y avanza en su acción climática”.

Bogotá es la capital de Colombia que más acoge a su gente, la más diversa y multicultural, donde se ofrece mayor empleo y servicios para la población; razón por la cual Bogotá debe ser más amable, una ciudad donde los ciudadanos podamos disfrutar de ella, contar con un ambiente sano, con aire limpio, en un ambiente resiliente ante el cambio climático; con una biodiversidad próspera y ecosistemas saludables. Una ciudad donde todos tengamos derecho a un hábitat digno, acceso a vivienda y servicios públicos de calidad y, sobre todo, con una movilidad sostenible y segura. Esto es posible gracias a que, entre otras cosas, contamos con una oferta natural de gran riqueza. Tenemos un sistema de bosques y páramos que, desde la región, abastece de agua a todos los ciudadanos. Sin embargo, el hecho que seamos una ciudad de ocho millones de habitantes nos exige proyectarla a mayor escala. Para ello, se hace necesario asumir un papel activo con el Gobierno nacional, la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAP-E), la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca (RMBC) y, en general, con los municipios vecinos. Entre todos debemos visualizar el manejo de la oferta natural, ampliar la protección de las reservas de agua potable y de suelo de alta capacidad agrológica, avanzar en la recuperación ambiental de la cuenca del río Bogotá, la cuenca del río Blanco y la cuenca del Sumapaz, robustecer la conciencia ciudadana sobre la necesidad de cuidar nuestros recursos naturales para mejorar la

relación con el sistema de elementos y espacios de vida. El ordenamiento territorial es una práctica esencial para el desarrollo sostenible de Bogotá y su área de influencia, ya que permite la planificación estratégica del uso del suelo y los recursos naturales de manera que se promueva un equilibrio entre el crecimiento económico, la conservación del medio ambiente y el bienestar social. En este contexto, las funciones y servicios ecosistémicos desempeñan un papel crucial, ya que son los beneficios que los ecosistemas proporcionan a los habitantes y que son fundamentales para nuestra supervivencia y calidad de vida. Los servicios ecosistémicos contribuyen al bienestar por medio de la regulación del agua, la provisión de alimentos y materias primas; la depuración del aire y el agua, la regulación del clima y la mitigación de riesgos ante posibles desastres de origen natural; servicios culturales que enriquecen nuestra calidad de vida, como el recreo, el turismo ecológico y el valor espiritual; y servicios de soporte como la formación de suelos y los ciclos de nutrientes, que son esenciales para mantener los otros servicios. En términos regionales, este enfoque nos permite resolver las relaciones urbano-rurales utilizando una relación jerárquica de la regulación hídrica y de suelo para asegurar, entre otras cosas, la protección integral del ciclo del agua. La integración de las funciones y servicios ecosistémicos en el ordenamiento territorial implica reconocer y mapear estos servicios en el área de interés, evaluando cómo las actividades humanas afectan su capacidad para proporcionar beneficios y diseñando estrategias que maximicen su preservación y uso sostenible

(...) **13.3. Programa 26. Incremento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad.** Para lograr la reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en la ciudad, se desarrollarán acciones de adaptación que incluyan la conservación de la biodiversidad con enfoque regional, la adopción de buenas prácticas climáticamente inteligentes en la ruralidad, así como la adopción de estrategias para la atención de la población vulnerable a la variabilidad climática como migrantes y desplazados climáticos.

Como parte del cumplimiento de la Política Pública de Acción Climática (PPAC), se fortalecerá la prestación de servicios de salud y la vigilancia epidemiológica para enfermedades relacionadas con el cambio climático y se propenderá por la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Asimismo, se promoverá la participación ciudadana con un enfoque diferencial y de género en la toma de decisiones informada para el desarrollo de acciones en el ordenamiento territorial que permitirá alcanzar la resiliencia climática en el territorio

En cuanto a la adaptación, se priorizará la restauración y el mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal y Áreas de Importancia Estratégica a través de estrategias complementarias de conservación como Bosques Urbanos, conectores ecosistémicos, acuerdos de conservación y se desarrollarán proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y Pago por Servicios Ambientales (PSA) con énfasis en resultados. Así mismo, se implementarán programas de investigación de los ecosistemas, producción diversa de material vegetal, gestión y consolidación de las coberturas vegetales urbanas y rurales, gestión agropecuaria y del suelo rural, con fines de conservación, restablecimiento y sostenibilidad ambiental del territorio.

Por otro lado, se fortalecerá la formulación e implementación de instrumentos de planeación ambiental que impulsen una administración eficiente de las áreas protegidas, en la cual se desarrollen acciones de educación y sensibilización ambiental, protección de los ecosistemas estratégicos del Distrito Capital y el monitoreo de la biodiversidad.

(...) **13.6. Programa 29. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental.** Este programa abordará de manera integral los desafíos del cambio climático, con acciones de mitigación, buscando una respuesta coordinada y efectiva a nivel local y regional. Integra el ejercicio de la autoridad ambiental, desde el control a los factores de deterioro de los recursos naturales, otorgando permisos y licencias y aplicando sanciones correspondientes; la protección del recurso hídrico desde el seguimiento y control a las actividades

generadoras de vertimientos, así como el monitoreo de las principales fuentes hídricas de la ciudad; la calidad del aire, acústica y visual haciendo gestión, control y seguimiento a las fuentes generadoras de emisiones atmosféricas, de emisión de ruido y de publicidad exterior visual. Así mismo contempla la operación de las redes de monitoreo aire y de ruido de la ciudad. Por otra parte, incluye el control al aprovechamiento ilegal de flora y fauna, y a la afectación del arbolado urbano, el control a las actividades extractivas y el control a la generación y manejo de residuos sólidos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado en la ciudad. Este programa incluye el monitoreo y seguimiento a las emisiones de contaminantes criterios y Gases de Efecto Invernadero con el objetivo de alcanzar el carbono neutralidad a 2050.

(...) **13.7. Programa 30. Servicios públicos inclusivos y sostenibles.** Bajo este programa, se llevarán a cabo las acciones para el fortalecimiento de la prestación regional de los Servicios Públicos enfatizando en los temas de abastecimiento de agua para la región, tratamiento de aguas residuales y saneamiento del río Bogotá y gestión integral de residuos sólidos. Para tal fin se avanzará en el reconocimiento del Hecho Metropolitano de Provisión de Servicios Públicos en el marco de la Región Metropolitana y en la implementación del plan de acción correspondiente, desde la competencia del Distrito Capital.

Se adoptará la economía circular para la gestión de servicios públicos, buscando el uso eficiente y la reutilización de los recursos, y promoviendo la reducción de residuos en los procesos de provisión de servicios. Se fortalecerán las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios y TIC en suelo urbano y rural, de manera que se facilite la provisión de los servicios de forma acorde con las nuevas demandas de la ciudad, con especial énfasis en las áreas estratégicas de desarrollo establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y procurando disminuir las brechas existentes al interior del suelo urbano y entre el suelo urbano y el rural.

En lo relacionado con los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, y con energía y gas, por una parte, se fortalecerán las infraestructuras existentes, conforme a las nuevas demandas identificadas y se extenderán los sistemas de redes en las áreas de construcción de nueva ciudad, haciendo un uso eficiente del recurso hídrico y disminuyendo el impacto de las aguas servidas en los elementos hídricos.

En lo relacionado con la gestión integral de residuos sólidos, se estabilizará el servicio de aseo, mitigando puntos críticos de residuos, mejorando la disposición final e incluyendo nueva infraestructura y alternativas de tratamiento en la gestión integral de residuos sólidos en el relleno Doña Juana, contribuyendo así a preservar la naturaleza y reducir las emisiones de efecto invernadero. Se realizarán obras de adecuación y mantenimiento en la infraestructura de los cementerios del Distrito para ampliar la capacidad y disponibilidad del servicio. Se fortalecerá la información con la digitalización y transparencia en la gestión de residuos, con la creación de un observatorio de residuos y la promoción de un régimen regulatorio adaptado a las necesidades del Distrito, fomentando así la participación ciudadana desde las diferencias y diversidad de la población, sus expectativas, necesidades e intereses en la gestión de servicios públicos.

En lo relacionado con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se facilitará el despliegue de infraestructura para garantizar la conexión de alta velocidad en el suelo urbano y se implementarán estrategias de conexión alternativas en suelo rural, de manera que se disminuyan las brechas existentes en la actualidad.

(...) **Artículo 23. Contribución de los cinco objetivos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-** Bogotá partiendo de la identificación de los temas que preocupan a la ciudadanía, en los diferentes Objetivos del Plan de Desarrollo, visibiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible proponiendo el cumplimiento de los lineamientos contenidos en el Documento CONPES 3918 en avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

(...) A partir del OBJETIVO ESTRATÉGICO “BOGOTÁ ORDENA SU TERRITORIO Y AVANZA EN SU ACCIÓN CLIMÁTICA” se aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4.6 Agua limpia

y saneamiento, 4.11 Ciudades y comunidades sostenibles, 4.12 Producción y consumo responsable, 4.13 Acción por el clima, 4.15 Vida de ecosistemas terrestres y ODS 7 Energía asequible y no contaminantes.

4.3 Decreto 555 de 2021 POT

(...) Artículo 3. Políticas de largo plazo del ordenamiento territorial del Distrito Capital. Con el fin de responder a los desafíos identificados se definen las siguientes políticas del ordenamiento territorial de largo plazo del Distrito Capital:

(...)4. Política de Población y Poblamiento en el contexto de la emergencia climática y postpandemia. De conformidad con el Acuerdo Distrital 790 de 2020, la Política de Población y Poblamiento en el contexto de emergencia climática y postpandemia, busca la articulación e implementación de acciones que aumenten la resiliencia, controlando el crecimiento de la huella ecológica de Bogotá y adoptando acciones a partir de la correcta identificación, caracterización y gestión del riesgo.

De igual forma, se orienta a incrementar la capacidad de reacción ante eventos naturales por medio de la adaptación del territorio ante los efectos del cambio climático global, la utilización de energías limpias, la promoción de prácticas sostenibles de movilidad, y el manejo técnico y sostenible del sistema de saneamiento básico.

También busca generar un crecimiento equilibrado de la Ciudad optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual se promueve el uso y ocupación razonable del suelo, con suficientes servicios sociales y espacio público cercanos a las viviendas y los empleos, desde un enfoque de responsabilidad social del cuidado y de la seguridad ciudadana para toda la población, articulando los sistemas ambientales de soporte a escala regional y controlando dinámicas distritales de conurbación. También incorpora la política de ecourbanismo y construcción sostenible.

(...) SECCIÓN 2

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

Artículos 180 Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas. Responde a las necesidades de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales y lodos en el área urbana, en el marco de la sostenibilidad del recurso hídrico, la recuperación ambiental de la cuenca del río Bogotá y el desarrollo urbano sostenible. Este sistema contribuye a dar soporte territorial a las dinámicas urbanísticas y a la prestación efectiva del servicio público de alcantarillado sanitario a los habitantes y actividades en la ciudad.

La localización de infraestructura del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales está permitida en toda el área urbana, incluyendo áreas que conforman la estructura ecológica principal, conforme a sus usos permitidos para construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado, en concordancia con las normas específicas aplicables y a las condiciones que establezcan los planes de manejo ambiental u otros instrumentos aplicables.

Está constituido en el área urbana por las redes locales, secundarias, troncales, interceptores de aguas residuales de alcantarillado sanitario y la infraestructura para el tratamiento de aguas y lodos que corresponde a las plantas de tratamiento de aguas residuales y lodos, y todos los accesorios del alcantarillado sanitario.

Parágrafo 1. En el área urbana podrán desarrollarse plantas alternativas de tratamiento de aguas residuales de carácter privado, las cuales tratarán las aguas residuales provenientes de los sistemas de tratamiento complementarios en las sub-cuencas urbanas para dar cumplimiento a los objetivos de calidad hídrica de la ciudad y armonizadas con la adecuación hidráulica del río Bogotá, según las especificaciones técnicas y acorde con las acciones administrativas a que haya lugar en cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado No. 2500-23-27-000-2001-0479-01 del 28 del 2014 para la descontaminación del río Bogotá o las que la modifiquen o sustituyan. La operación y mantenimiento de estas plantas alternativas será responsabilidad del promotor correspondiente, quien también será responsable del cumplimiento de las normas ambientales aplicables.

Parágrafo 2. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como la ampliación y optimización de la PTAR Salitre e implementación de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR-Canoas y redes e infraestructura para su funcionamiento, deberán contar con nuevas alternativas tecnológicas que propendan por la eficiencia en el desarrollo de la actividad, considerando las posibilidades técnicas y de inversión para la construcción de la infraestructura requerida para tal fin. La ubicación y distancias mínimas para la localización de sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados serán las contempladas en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.

Parágrafo 3. Con el objeto de mejorar el caudal ambiental de los humedales y el sistema hídrico de la ciudad, el alcantarillado pluvial de los planes parciales colindantes con humedales debe alimentar estos elementos previo proceso de tratamiento primario. Las medidas de tratamiento y las conexiones al alcantarillado serán establecidas en el proceso de concertación ambiental de cada plan parcial.

Artículo 181. Saneamiento del Río Bogotá. El Saneamiento del Río Bogotá contempla medidas que pretenden fundamentalmente interceptar las aguas residuales generadas por las actividades residenciales y productivas del Distrito Capital y conducirlas a las PTAR Salitre y Canoas, en el marco de la gestión integral del recurso hídrico.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente podrá incorporar dentro del perímetro urbano sistemas de tratamiento de aguas residuales complementarios, en función de aumentar los objetivos de calidad hídrica de la ciudad.

Con lo anterior, se busca garantizar que en la cuenca media del río Bogotá, a su paso por la ciudad, no se presenten descargas de aguas sin tratar.

Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de realizar la coordinación del saneamiento del Río Bogotá, y de llevar el control efectivo que se realice de los procesos de descontaminación en la fuente de los vertimientos. Igualmente, deberá realizar las acciones necesarias para garantizar la calidad de los vertimientos industriales hacia las redes troncales, por parte de los generadores de efluentes industriales, que garanticen las calidades y concentraciones óptimas establecidas en la regulación ambiental.

Parágrafo 2. El Distrito deberá tener en cuenta la meta de carga contaminante en términos de DBO5 y SST para la cuenca del Río Bogotá para el periodo entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024 establecido en el Acuerdo CAR 20 de 2020 o la norma que lo modifique o sustituya, para dar cumplimiento a los objetivos de calidad hídrica de la ciudad.

Parágrafo 3. Toda actuación urbanística podrá incorporar sistemas o redes que permitan la recolección y el reúso de las aguas grises por fuera del sistema de agua potable, previo tratamiento.

Artículo 182. Financiación de infraestructura para la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. En desarrollo de las obras de infraestructura de los Sistemas de Acueducto, y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas para ampliar capacidades de las redes asociadas en atención a las edificabilidades adicionales en el marco de las normas de los tratamientos urbanísticos, se utilizará para su financiación las fuentes e instrumentos incluidos en el presente Plan, en complemento a los recursos programados en Planes de Obras e Inversiones Regulados - POIR de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Lo anterior en armonía con las obras que se definan en las Unidades de Planificación Local del Distrito Capital y con las obras priorizadas por los Planes de Obras e Inversiones Regulados - POIR de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los urbanizadores podrán realizar aportes excepcionalmente en la financiación de la red matriz en suelo urbano y de expansión urbana, dando aplicación al artículo 36 de la Ley 2079 de 2021.

Artículo 183. Promoción del uso racional del agua. Para promover el uso racional del agua y disminuir las pérdidas de agua en las redes secundarias y locales, se avanzará en la implementación de dispositivos para la telemedición y telegestión del sistema de acueducto.

SECCIÓN 3.

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SOSTENIBLE

Artículo 184. Sistema de drenaje pluvial sostenible. Responde a las necesidades de drenaje, recolección, manejo y conducción del recurso hídrico a cauces naturales, proveniente de las precipitaciones ocurridas en el área urbana del Distrito Capital, en el marco de la sostenibilidad del recurso hídrico, la recuperación ambiental de la cuenca del río Bogotá y el desarrollo urbano sostenible. Este sistema está constituido en el área urbana por las redes de drenaje pluvial y demás infraestructuras que contribuyen a dar soporte territorial para la recuperación y la regulación del ciclo hidrológico, la reducción de riesgos por inundación por desbordamiento y/o avenidas torrenciales, la adaptación al cambio climático, el aumento de la conectividad con la Estructura Ecológica Principal y el incremento de la oferta de espacio público natural.

La construcción, adaptación, intervención y localización de infraestructuras de este sistema está permitida en toda el área urbana, salvo en las áreas que conforman la estructura ecológica principal, en las cuales se registrará por lo establecido en los planes de manejo ambiental correspondientes o los instrumentos aplicables.

Para la incorporación de soluciones que incentiven la consolidación de Sistemas de Drenaje Sostenibles en las intervenciones públicas y las actuaciones urbanísticas se deberán acatar los siguientes lineamientos:

1. Construcción de la infraestructura y las redes necesarias para aumentar la resiliencia de la ciudad frente a los riesgos por inundación, como estrategia de adaptación frente al cambio climático.
2. Operación en condiciones de eficiencia priorizando acciones que fomenten la renaturalización, la infraestructura verde y el uso de la bioingeniería en los sectores de la ciudad que reciben mayores niveles de caudal de origen pluvial.
3. Reducción de amenazas y riesgos por inundación, realizando un manejo eficiente de los procesos de infiltración, almacenamiento, transporte y tratamiento del drenaje pluvial con énfasis en el espacio público y la infraestructura vial.
4. Integración del drenaje pluvial con los demás elementos del sistema hídrico de la ciudad y la región, como estrategia para recuperar la biodiversidad, la calidad hídrica, la oferta paisajística, y el espacio público. Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible deben estar conectados al Sistema de Alcantarillado Pluvial de la ciudad y/o al Sistema Natural.
5. Desarrollo de Sistemas Urbanos de Drenajes Sostenibles que aporten a la recuperación del sistema hídrico, aumentando la permeabilidad de la ciudad.
6. Medidas frente al fenómeno de la subsidencia mediante acciones de renaturalización evitando el endurecimiento del suelo.

Artículo 185. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS. Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS, son estructuras de soporte al sistema de alcantarillado pluvial convencional y complementarios a la red hídrica, que responden a las necesidades de drenaje, recolección, manejo y conducción del recurso hídrico a cauces naturales provenientes de las precipitaciones ocurridas en el área urbana del Distrito Capital, en el marco de la sostenibilidad del recurso hídrico, la recuperación ambiental de la cuenca del río Bogotá y el desarrollo urbano sostenible. Se clasifican en:

1. **Tipologías Mayores:** Son estructuras artificiales administradas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, las cuales son de mayor tamaño que amortiguan el agua lluvia, gestionan volúmenes mayores por tipología a 200 m³ por evento de lluvia, incluyen entre otros, la represa seca, pondajes, humedales artificiales, reservorios y canales.
2. **Tipologías Menores:** Son elementos artificiales de menor tamaño a cargo de los administradores del espacio público respectivo o del propietario del suelo, de fácil implementación en los procesos de urbanización. Dentro de ellas existe una diferenciación y son las tipologías con coberturas vegetales como: cuneta verde, cuenca seca de drenaje extendido, alcorques inundables, zonas de bioretención, zanjas de infiltración y las tipologías grises que son los tanques de almacenamiento y pavimentos permeables. Estas tipologías están adoptadas por la Norma Técnica NS166, de la EAAB.

Todas las tipologías deben estar conectadas al sistema de alcantarillado pluvial o directamente al drenaje natural y deben garantizar buenas condiciones de calidad del agua y retención de sólidos.

Los planes parciales y/o proyectos urbanísticos que se ejecuten mediante licencia de urbanización, deberán implementar sistemas urbanos de drenaje sostenible – SUDS, para lo cual se debe dar aplicación al artículo

153 de la Resolución Nacional 330 de 2017 – Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico o la norma que lo modifique o sustituya, conforme al cual se debe reducir mínimo un 25% el caudal pico del hidrograma de la crecida de diseño o de acuerdo a la norma que expida la Entidad competente. Del 25% de retención obligatoria dentro del área neta urbanizable, el 13% deberá hacerse al interior de las áreas útiles privadas y 12% deberá hacerse en las cesiones para vías, parques y zonas verdes.

En los tratamientos de renovación urbana y consolidación se implementarán SUDS con el fin de reducir mínimo 10% del caudal pico del hidrograma de la crecida de diseño. Las entidades del sector público deberán incorporar los SUDS en los diseños de infraestructura de transporte y de espacio público (vías, parques, etc.) como mínimo en el 10% del total del espacio público del proyecto, incluyendo el espacio público reconstruido.

Toda vez que estos sistemas harán parte del sistema de alcantarillado pluvial, la aprobación de los estudios técnicos propuestos para los sistemas urbanos de drenaje sostenibles hará parte de los estudios de manejo de aguas lluvias de los planes parciales y licencias de urbanización.

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad técnica de la EAAB-ESP.

Artículo 186. Competencias relacionadas con elementos que conforman los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS. Para la implementación de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible se tendrá en cuenta las siguientes competencias:

1. Para obras públicas e intervenciones en el espacio público, se promoverá la implementación de SUDS como medida de reducción de riesgos asociados a escenarios de inundación y adaptación a la variabilidad climática y cambio climático.
2. En espacio público para tipologías menores, los diseños y la construcción de los SUDS serán responsabilidad de la entidad que los construya, siguiendo la norma técnica de la EAAB y su conexión a la red de alcantarillado será aprobada por el prestador del servicio público de alcantarillado. Una vez sean construidos serán recibidos y georreferenciados por el prestador del servicio público de alcantarillado.
3. El mantenimiento general estará a cargo de la entidad administradora del espacio público respectivo. El Jardín Botánico de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, realizarán el mantenimiento preventivo de aquellas tipologías de SUDS localizados en espacio público que tengan coberturas vegetales.
4. En predios privados y/o fiscales, los diseños y la construcción de los SUDS serán revisados y aprobados dentro de los diseños de redes hidrosanitarias de proyectos urbanísticos y arquitectónicos. Su mantenimiento es responsabilidad de los titulares de los inmuebles donde se construyan siguiendo los lineamientos de la autoridad ambiental.
5. El mantenimiento de los SUDS estará a cargo del propietario del suelo en el que se ubique o del administrador del espacio público a cargo

(...) **Artículo 209. Áreas para el tratamiento, aprovechamiento y disposición de lodos y biosólidos.** El manejo y tratamiento de estos residuos se podrán realizar mediante plantas fijas o móviles de almacenamiento, tratamiento o aprovechamiento y/o valorización.

De acuerdo con el material objeto de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición y/o valorización en las plantas fijas o móviles, se podrán localizar así:

1. **De biosólidos:** Son los generados en la operación de PTAR's, se podrán localizar en suelo de protección por servicios públicos, suelo rural con uso agroindustrial, predios afectados por minería y área de actividad de grandes servicios metropolitanos.

2. **De lodos generados en el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario o pluvial o del sistema hídrico:** Se podrán localizar en suelo de protección por servicios públicos, predios afectados por minería y área de actividad de grandes servicios metropolitanos donde se permita el uso industrial de industria pesada.

3. **De lodos generados en el mantenimiento de plantas de Tratamiento de Agua Potable:** Se podrán localizar en suelo de protección por servicios públicos, suelo rural con uso agroindustrial, predios afectados por minería y área de actividad de grandes servicios metropolitanos, donde se permita el uso industrial de industria pesada.

4. **De lodos generados en el mantenimiento de baterías sanitarias, pozos sépticos, sistemas de tratamiento de agua residual industrial y demás servicios de saneamiento:** Se podrán localizar en suelo de protección por servicios públicos, predios afectados por minería y actividad de grandes servicios metropolitanos, donde se permita el uso industrial de industria pesada.

(...) **Artículo 221. Condiciones urbanísticas y arquitectónicas para la infraestructura y mobiliario de servicios públicos.** Los sistemas de servicios públicos se encuentran conformados por redes infraestructuras y mobiliario urbano, cuya instalación se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas:

1. Normas técnicas, operativas y ambientales: Las características técnicas, operativas y ambientales de las infraestructuras e instalaciones técnicas para la prestación de los servicios públicos se encuentran reglamentadas por los actos administrativos de las Autoridades Ambientales y Administrativas competentes, las normas técnicas y de seguridad, las disposiciones de las comisiones de regulación y el Reglamento Técnico del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el Manual Único de Alumbrado Público-MUAP, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) el Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y las normas que los adicionen, sustituyan y modifiquen.

Artículo 277. Actuaciones urbanísticas en el tratamiento de Desarrollo. Las actuaciones urbanísticas en aplicación del tratamiento de desarrollo se tramitarán mediante la formulación y adopción previa de planes parciales o por vía directa de trámite de licenciamiento urbanístico, según se dé el cumplimiento de las siguientes condiciones:

(...) **Parágrafo 2.** De conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 en cualquier momento podrán realizarse las obras correspondientes a la infraestructura de los sistemas generales o estructurantes del orden distrital, así como las obras de infraestructura relativas a la red vial nacional, regional y departamental, puertos y aeropuertos y sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía que deban ejecutar las entidades del nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva, las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

(...) **Artículo 437. Lineamientos aplicables al sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en suelo rural.** El sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Para los centros poblados se debe garantizar la construcción, operación y mantenimiento de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales.

2. Para los nodos de equipamientos rurales se implementarán sistemas alternativos ecoeficientes como pozos secos, tanques sépticos con lechos filtrantes o sistemas similares y/o Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR, acorde con los lineamientos establecidos en las Resoluciones 0330 de 2017 y 844 de 2018 del Ministerio de Vivienda o las normas que las modifiquen o sustituyan.

3. Para la vivienda rural dispersa y equipamientos rurales aislados se podrán implementar sistemas alternativos ecoeficientes cumpliendo lo exigido por la normativa vigente. Para las edificaciones aisladas que empleen soluciones individuales como mecanismo de tratamiento de aguas servidas, la persona propietaria o tenedora de los predios será la responsable de su mantenimiento periódico conforme a la normativa técnica vigente.

4. El Distrito Capital prestará el apoyo técnico a los prestadores del servicio de alcantarillado en suelo rural para la formulación implementación y seguimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV. Lo anterior, en el marco del Decreto Distrital 552 de 2011 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

(...) Artículo 438. Criterios de localización para las infraestructuras de los sistemas de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en suelo rural. La infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales deberá ser planeada, diseñada y construida conforme a las condiciones particulares del territorio y los usos del recurso hídrico, así como los requisitos técnicos definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente.

Para su localización se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Las plantas de potabilización deberán estar ubicadas preferiblemente en cotas superiores a las de los centros poblados, de modo que se procure la distribución del agua potable por gravedad.
2. Las plantas de potabilización de agua y de tratamiento de agua residual, deberán contar con cerramiento y aislamiento.
3. Las plantas de potabilización deberán ser diseñadas atendiendo las necesidades de la población, para garantizar calidad, continuidad y cobertura.
4. Las plantas y/o soluciones de tratamiento de agua residual deberán ser ubicadas preferiblemente en cotas inferiores de los centros poblados para minimizar los requerimientos energéticos para el transporte de éstas.
5. No se podrán implementar redes de alcantarillado combinadas en zonas rurales y se deberá evitar que los caudales pluviales ingresen al sistema de alcantarillado sanitario.

Parágrafo 1. La infraestructura construida por el Distrito Capital podrá ser entregada mediante la figura de aportes bajo condición, de conformidad con lo establecido en las Leyes 142 de 1994 y 1450 de 2011 o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 2. En el corto plazo, la Secretaría Distrital del Hábitat coordinará la elaboración de estudios técnicos para identificar y precisar la delimitación de áreas para la localización de infraestructura de servicios públicos, en los términos del artículo “Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios” del presente Plan.

Artículo 451. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. Se encuentran compuestas por:

(...) Parágrafo 1. En el corto plazo, la Secretaría Distrital del Hábitat coordinará la elaboración de estudios técnicos para identificar y precisar la delimitación de áreas para la localización de infraestructura de servicios públicos y áreas potenciales para las actividades y servicios conexos a la gestión integral de residuos. Una vez se cuente con los resultados de dichos estudios, la Secretaría Distrital de Planeación incorporará las áreas delimitadas como suelo de protección dentro

de las áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios mediante resolución motivada. Para el caso de la infraestructura asociada al alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los estudios deberán estar articulados con el respectivo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV.

Artículo 566. Programa Conectividad ecosistémica, reverdecimiento y atención de la emergencia climática. El programa aporta al objetivo del Plan de Ordenamiento Territorial que busca proteger la estructura ecológica principal y los paisajes bogotanos y generar las condiciones de una relación más armoniosa y sostenible de la ciudad con su entorno rural, a mejorar el ambiente urbano y de los asentamientos rurales y a incrementar la capacidad de resiliencia del territorio frente a la ocurrencia de desastres y derivados de la variabilidad y del cambio climático, se pretende responder, con sentido de urgencia, a la crisis climática y de pandemia y mejorar el entorno de vida para promover la salud y el bienestar de los ciudadanos. Contribuye a concretar los propósitos de todas las estructuras territoriales.

(...) Artículo 568. Programa para la vitalidad y cuidado. El programa aporta a los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial Revitalizar la ciudad y a reducir los desequilibrios y desigualdades para un territorio más solidario y cuidador a través de intervenciones y proyectos de calidad orientados a garantizar el sistema de servicios sociales del cuidado y servicios básicos, de modo que se genere un mayor equilibrio territorial y se garantice un mayor acceso de los ciudadanos a los servicios que le permitan ejercer mejor, y de manera más próxima, sus derechos. Adicionalmente, se soporta en la prestación efectiva de los servicios públicos en el marco de la sostenibilidad y la eficiencia energética y soporte territorial y regulación para la conformación de ecosistemas digitales en el marco de la sostenibilidad territorial y de calidad en el acceso a las TIC. Contribuye a concretar los propósitos de la Estructura Funcional y del Cuidado y la Estructura Integradora de Patrimonios

Contiene los siguientes subprogramas:

(...) Proyectos Estructurantes:

Meta	10 Senderos recuperados y reactivados	
Proyectos Estructurantes	Estrategia de intervención	Intervenciones y mejoramiento de espacios públicos en entornos patrimoniales
		Recuperación, puesta en valor y reactivación de senderos históricos de acceso a los cerros orientales en el marco del plan de manejo de la franja de adecuación.
	Proyecto	Cualificación del Parque de la Hacienda El Carmen y Activación del Parque Arqueológico de Usme
		Proyecto eje del Río Arzobispo: articulador del patrimonio natural de los Cerros Orientales, Parque Nacional, Parkway con los sectores de interés cultural de La Merced y Teusaquillo, generando una estructura de espacio público patrimonial.
		Reconocimiento e intervención del Palo de la Vida como un espacio de encuentro y valor sociocultural, en el marco del proyecto Parque Cerro Seco.

Ilustración 1: Subprograma, Proyectos estructurantes, artículo 568 del decreto 555

COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 12, numeral 1 y artículo 13, del Decreto Ley 1421 de 1993:

“**Artículo 12.** Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Por su parte, el artículo 13 señala:

“**Artículo 13.** Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario”.

IMPACTO FISCAL

Esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el Acuerdo No. 927 de 2024 “*Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*”, por tanto, no puede afirmarse que esta iniciativa genera impacto fiscal toda vez que

las acciones que propone este proyecto implican desarrollar los mandatos del Acuerdo No. 927 de 2024, *“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”*

Cordialmente,

EMEL ROJAS CASTILLO

Concejal de Bogotá

Partido Nueva Fuerza Democrática

PROYECTO DE ACUERDO NO 415 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE (ALTERNATIVAS) EN LAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL EN AMBIENTES DOMÉSTICOS, INSTITUCIONALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en la Constitución Política y en el Artículo 12, numeral 1º y Artículo 13, del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: Objeto. El objeto del presente proyecto de acuerdo es establecer lineamientos y ordenanzas para que la Administración Distrital, a través de las Curadurías Urbanas y las entidades distritales correspondientes, vigilen la implementación de infraestructuras y accesorios en instalaciones públicas, privadas, domésticas, comerciales e industriales, con el fin de optimizar el uso de agua potable y residual.

ARTÍCULO 2: Medidas de seguimiento y control de calidad. El Distrito Capital, a través de la Secretaría Distrital de Planeación y del Hábitat, determinará la calidad y las especificaciones técnicas para la construcción de infraestructuras necesarias para el ahorro y reúso de aguas residuales y reciclables, garantizando la seguridad sanitaria y el cumplimiento en los diferentes entornos públicos, privados, industriales y domésticos.

ARTÍCULO 3: Normas técnicas para tanques e instalaciones hidráulicas. Los sistemas tecnológicos para el reúso de aguas residuales, pluviales y reciclables deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes y homologadas según las normas sismo resistentes (NSR-10), INCOTEC, entre otras. Estas especificaciones deberán ser verificadas en las diferentes licencias de construcción.

ARTÍCULO 4: Licencias de construcción. Las Curadurías Urbanas deberán verificar y determinar si los proyectos presentados por particulares o entidades administrativas y públicas, tanto tradicionales como tecnológicos, cumplen con todos los requisitos de este acuerdo y las disposiciones nacionales y distritales pertinentes.

ARTÍCULO 5: Cumplimiento de las regulaciones. Las Alcaldías locales, durante el desarrollo de las obras, deberán verificar el cumplimiento de este acuerdo en todas las edificaciones y otorgarán el certificado de ocupación una vez se compruebe que todas las medidas de ahorro y reciclaje de agua han sido implementadas correctamente.

ARTÍCULO 6: Incentivos y sanciones. La Administración Distrital establecerá un sistema de incentivos para promover la implementación de tecnologías y prácticas de ahorro y reúso de agua en edificaciones nuevas y existentes. Estos incentivos podrán incluir reducciones en impuestos, subsidios o reconocimientos públicos. Asimismo, se establecerán sanciones para aquellos que incumplan con las normativas establecidas en este

acuerdo, las cuales podrán incluir multas, suspensión de licencias o restricciones en el acceso a servicios públicos.

ARTICULO 7 Vigencia: El presente proyecto de acuerdo rige a partir de su divulgación

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 416 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES) EN BENEFICIO DE VIVANDEROS, VIVANDERAS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El objeto del presente Acuerdo es adoptar las disposiciones del Artículo 121 y 270 del Plan Distrital de Desarrollo que busca garantizar "la eficiencia institucional en materia de depuración y saneamiento de la cartera a su cargo y el fortalecimiento del sistema distrital de plazas de mercado, así como la ejecución del Manual PA04-MN- 002 del IPES, en lo que tiene que ver con la depuración de cartera de los vivanderos y vivanderas de Bogotá, respecto a las deudas que tienen con la Administración Distrital por el uso y destinación del espacio público en las distintas plazas distritales de mercado.

2. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa no cuenta con antecedentes y es presentada por primera vez para su estudio y aprobación a la Corporación. No obstante, resulta pertinente señalar que existen iniciativas relacionadas con la materia objeto de estudio, como se detalla a continuación:

- Acuerdo Distrital 257 de 2006 Concejo de Bogotá D.C. "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones"

El Artículo 79 que trata sobre las funciones del Instituto para la Economía Social (IPES), establece un marco normativo que incorpora de manera explícita a las plazas de mercado del Distrito Capital como parte de sus competencias fundamentales. Según el literal d, se otorga al IPES la función de administrar las plazas de mercado en articulación con políticas públicas transversales, tales como el desarrollo económico, la promoción cultural y el ordenamiento del espacio público; fortaleciendo así su rol como actor clave en la economía social del Distrito Capital en concordancia con la política de abastecimiento alimentario distrital, reconociendo su importancia estratégica como centros de distribución y acceso a alimentos para la población.

- Acuerdo Distrital 877 de 2023 Concejo de Bogotá D.C. "Por medio del cual se formulan lineamientos para la política pública para las plazas distritales de mercado del distrito capital y se dictan otras disposiciones"

El Artículo 6 establece un mecanismo para la regularización y manejo de la cartera de los vivanderos en las Plazas Distritales de Mercado, al facultar a la Administración Distrital para diseñar e implementar convenios o planes de pago que permitan a los deudores legalizar el uso de los

espacios que ocupan. Este artículo reconoce la importancia de facilitar procesos de formalización contractual o administrativa, promoviendo la inclusión de los vivanderos en la economía formal mediante alternativas que consideren su capacidad de pago.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Acuerdo, pretende motivar e incentivar la economía social de los vivanderos , vivanderas y comerciantes, a través de una serie de estímulos, prerrogativas, condonaciones y medidas que depuren la cartera que se tiene por el uso y destinación del espacio público en las distintas plazas de mercado (cupos, locales, mostradores, restaurantes, bodegas etc); esto, en atención a que, de manera reiterada, dichos comerciantes denunciaron que "...durante la pandemia, la mayoría (...) no recibieron ningún tipo de ayuda"

En Bogotá D.C., existen 19 plazas de mercado que se discriminan así:

- Plaza de mercado 12 de octubre. Calle 72 #39-62 - Barrios Unidos.
- Plaza de mercado 20 de Julio. Carrera 6 #24-60 Sur- San Cristóbal.
- Plaza de mercado 7 de agosto. Calle 66 #23-30 - Barrios Unidos.
- Plaza de mercado Boyacá. Calle 68B #73A-44 - Engativá.
- Plaza de mercado El Carmen. Diagonal 49A #29-15 sur - Tunjuelito.
- Plaza de mercado Fontibón. Carrera 103 #26-71- Fontibón.
- Plaza de mercado Kennedy. Calle 42S #81A-50- Kennedy.
- Plaza de mercado La Concordia. Calle 14 #1-40- Candelaria.
- Plaza de mercado La Perseverancia. Carrera 5A #30-30 -Santa Fe.
- Plaza de mercado Las Cruces. Calle 1AF #4-60- Santa Fe.
- Plaza de mercado Las Ferias. Calle 74B #69Q-35- Engativá.
- Plaza de mercado Lucero. Carrera 17F #69A-50 Sur- Ciudad Bolívar.
- Plaza de mercado Quirigua. Calle 90 #91-51- Engativá.
- Plaza de mercado Restrepo. Carrera 19 #18-51 Sur- Antonio Nariño.
- Plaza de mercado Samper Mendoza. Carrera 25 #22A-13- Mártires.
- Plaza de mercado San Benito. Carrera 17 #56A-18 Sur - Tunjuelito.
- Plaza de mercado San Carlos. Carrera 19C #50A-90 Sur- Tunjuelito.
- Plaza de mercado Santander. Calle 26 Sur #30-51 -Antonio Nariño.
- Plaza de mercado Trinidad Galán. Carrera 60 #5-00. Puente Aranda.

La población de las plazas de mercado, según el Decreto 546 de 2022, se componen por agricultores, indígenas campesinos y artesanos; ello, sin contar que muchos tienen su residencia y/ domicilio en lugares circunvecinos que los ata no solo por su actividad u oficio, sino porque encuentran un arraigo con el sector en donde se encuentran cada una de las plazas de mercado distribuidas en las 20 localidades de la ciudad en donde se "...reúnen 3.999 puestos aproximadamente, de los cuales 3.077 están ocupados (77 %)"

Dada la importancia económica, pero, más de carácter social de la actividad que desarrollan los vivanderos, resulta claro, en la sabiduría del Concejo, que se deben tomar medidas para superar las obligaciones que en la actualidad presentan los comerciantes de las plazas de mercado con el Distrito; no hacerlo, implicaría una protesta que afectaría a todas las localidades en el orden social,

de movilidad, de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, económica y, en general, de orden público.

La actualidad económica de los vivanderos post pandemia, no es para nada halagüeña. Las medidas del gobierno nacional y distrital para la reactivación económica, luego de la recesión, los bloqueos y los paros, no fueron efectivas; esto, en atención a que las medidas, la gran mayoría, estuvieron dirigidas a las medianas y pequeñas empresas, no así para los comerciantes de las plazas de mercado, quienes, por costumbre, ni siquiera se encuentran en el panorama mercantil ya que no se encuentran registrados en la cámara de comercio de la ciudad, ni tienen certificados de existencia y representación legal de sus negocios, pues en muchos casos, sus locales no presentan razón social o nombre comercial.

Así por ejemplo, el programa Unidos por Colombia, del Fondo Nacional de Garantías (FNG), en el año 2021, logró llegar, en un año, a más de 616.000 empresas y trabajadores independientes, y, pese a contar con ocho líneas para respaldar las necesidades de los empresarios y trabajadores independientes, (...) y contar con liquidez para asumir los gastos de personal, costos fijos (arriendo, servicios públicos, etc.), entre otras obligaciones, no se tuvo en cuenta la población de comerciantes o vivanderos de las plazas de mercado

El Decreto 1422 dictó que entre el 15 y el 30 de noviembre se adelanta el pago de la prima de Navidad en el sector público, Gobierno Central; mediante el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, el Gobierno nacional creó el Fondo para la Mitigación de la Emergencia (FOME), buscó efectuar apoyos de liquidez al sector financiero; invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas y entregar directamente financiamiento a empresas; proveer liquidez a la nación, ¿y, los vivanderos?, el Decreto 562 creó una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública interna denominados Títulos de Solidaridad (TDS), cuyos recursos serán destinados a conjurar las consecuencias de la crisis: decreto sastre, hecho a la medida de los banqueros para endeudar al Estado.

En suma, el total de recursos que el Gobierno destinó para conjurar la crisis de la Covid-19 se resumen en la siguiente tabla:

Comoquiera que ninguno de los incentivos para la reactivación económica recayó en los vivanderos, se hace necesario crear uno que verse sobre las deudas que en la actualidad tiene este grupo de comerciantes con el Distrito en cabeza del IPES, en relación con los retrasos en el pago de “arriendos” que muchos tienen o en otros casos, aún sin título, pero que conservan la tenencia, han generado obligación por el uso de esos cupos, locales o bodegas en las distintas plazas, a través del denominado “Contrato de uso administrativo y aprovechamiento económico regulado”.

Dichas deudas son consideradas al tenor de lo dispuesto por la ley 1066 de 2006, que fijó normas para la normalización de la cartera pública, como deudas de carácter no tributario. En ese sentido, cada entidad está obligada a identificar los bienes, derechos y obligaciones que afecten el patrimonio público y a recopilar la documentación suficiente y pertinente para su correspondiente depuración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, que determinó la obligación de todas las entidades territoriales de adelantar el proceso de depuración contable, con base en lo cual la Contaduría General de la Nación, mediante las resoluciones 193

de 2016 y 107 de 2017 , emitió los lineamientos por seguir en los procesos de depuración contable para entidades públicas, señalando el procedimiento para la evaluación del control interno contable vigente.

Asimismo, esta propuesta se sustenta básicamente en la Sentencia C-511 de 1996 que permite las medidas exonerativas de orden económico o fiscal en casos excepcionales y en la Ley 901 de 2004 que establece las condiciones en que las entidades públicas pueden llevar a cabo depuración de saldos contables; donde la Sentencia C-511 de 1996 determina que "Las amnistías o saneamientos consagrados, en principio son inconstitucionales. Lo anterior no es óbice para que, en situaciones excepcionales, puedan adoptarse medidas exonerativas de orden económico o fiscal debidamente justificadas que contrarresten los efectos negativos que puedan gravar de una manera crítica al fisco, reducir sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores o deprimir determinados sectores de la producción."

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Bajo ese panorama, el Plan de Desarrollo Distrital vigente, estableció en su artículo 270 la obligación de las entidades distritales de depurar su cartera de cualquier índole y en cualquiera de sus etapas de cobro, con fundamento, entre otros, en la eficiencia resultante de la relación costo-beneficio, así:

"Artículo 270. Depuración de cartera. En términos de eficiencia institucional y siguiendo los criterios legales vigentes, en materia de prescripción, remisión de deudas, pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, en virtud de los cuales no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente, las entidades distritales deberán realizar acciones de depuración y saneamiento de la cartera a su cargo de cualquier índole en cualquiera de las etapas del cobro persuasivo y coactivo, mediante el castigo de la misma, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión."

A su vez, en su Artículo 121, el Plan de Desarrollo plantea el fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado, implementando acciones y gestiones encaminadas a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y la identidad cultural en la ciudad y de fortalecimiento de los procesos organizativos para el desarrollo sostenible y sustentable de estos espacios.

PROCEDIMIENTO PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA

El Instituto Para La Economía Social – IPES, mediante el documento "Código: PR-125" del 30 de diciembre de 2020, definió "...el procedimiento para la depuración de la cartera con el fin de dejar como disponible para el cobro únicamente aquellas acreencias con mayores posibilidades de recuperación, en una relación costo-beneficio, en los términos que autoriza la ley."; esto, con fundamento en el Manual de Recaudo y Gestión de Cartera.

En dicho documento se definió el Contrato de uso administrativo y aprovechamiento económico regulado, así: "Acuerdo de voluntades generador de derechos y obligaciones entre el comerciante en plaza de mercado distrital y el IPES, mediante el cual se le otorga al comerciante el uso de puesto, local o bodega existente y debidamente identificado, con destino a la venta de víveres,

alimentos y demás especies permitidas en el presente reglamento y en el respectivo contrato.” Y, en dicho procedimiento, se fijó la ruta para la depuración de cartera en el IPES:

Visto así el procedimiento, resulta procedente adoptar y/o adecuar la depuración de cartera de que trata el nuevo Plan de Desarrollo Distrital, adoptado por el distrito en el Acuerdo 927 de 2024 a lo ya establecido en el Manual de Recaudo y Gestión de Cartera PA04-MN- 002 del IPES y el propio documento “Código: PR-125” del 30 de diciembre de 2.020 habida cuenta que la reactivación económica es una realidad que no ha fenecido y, comoquiera que los vivanderos, aún cuentan con obligaciones que vienen cobrándose desde hace ya varios años, lo propio es sanear la cartera que el IPES tiene con estos comerciantes y, con ello, otorgar un alivio eficaz que contribuya de manera real al desarrollo económica y la reactivación de la economía de los vivanderos para tal efecto, el presente Acuerdo dicta los lineamientos que regulen la extinción de todas las obligaciones contenidas en los contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico suscritos por vivanderos, vivanderas y comerciantes con el distrito a través del IPES; esto, en atención a que el recaudo, normalización y cobro de cartera se hace inane en la medida que la capacidad de pago de dicho grupo poblacional hace que se haga imposible la satisfacción de los créditos que se desprenden del uso o tenencia de los cupos, locales o bodegas que fueron entregados en virtud de la celebración de los contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico de igual modo, será obligación que todos vivanderos, vivanderas y comerciantes, a partir del presente acuerdo cuenten con contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico; en ese entendido, no será admisible el uso y goce y/o tenencia de ningún cupo, local y/o bodega que no tenga justo título para poderlo explotar en las distintas plazas de mercado mencionadas con antelación.

Por esta razón, es importante tener en cuenta, además, que, en el año 2020, se expidió la Resolución 267 «por medio de la cual se deroga la Resolución 018 de 2017 y la Resolución 620 de 2019; y se expide el reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las Plazas de Mercado del Distrito Capital de Bogotá».

Esta norma produjo un profundo rechazo entre las vivanderas, vivanderos y comerciantes de las plazas de mercado, por un lado, porque no contó con una adecuada socialización y, por el otro, por no permitir la participación incidente y por desconocer abiertamente las particularidades, tradición y esencia de las plazas, permitiendo su comercialización abierta, por ejemplo, para que grandes grupos económicos accedieran a ellas.

Resistencia que ocasionó la negativa a suscribir los contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico que se les pretendían imponer, pese a la presión y amenaza de recuperación del espacio público por parte de la Administración por vía policiva. Esto, debido a que la consecuencia de estas resoluciones fue el aumento desmedido de los costos para el uso y aprovechamiento del espacio público de casi imposible cumplimiento haciéndolos impagables, lo cual vienen sufriendo hoy en día muchas de las personas que sí suscribieron dicho contrato.

Esto venía de la mano con la cantidad de papeles y requisitos para acceder a un módulo, en especial para las personas que son sujetos de especial protección constitucional (madres solteras, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, etc.); La mencionada resolución fue rechazada en ese sentido, ya que solo una persona o empresa con bastante solvencia podría cumplir con esos requisitos. Además, se permitía incluso la prestación de servicios financieros en las plazas de

mercado, lo cual hacía como estaba formulado que muchas de las personas que históricamente han estado en estos espacios debieran salir.

Por lo anterior, durante el final del periodo de la Alcaldía de Claudia López y el comienzo del mandato de Carlos Fernando Galán se desarrolla una negociación, con cierta resistencia por parte de la Administración habida cuenta de las restricciones de orden normativo que se establecen en el Decreto 493 de 2023, es decir, el reglamento para el uso y aprovechamiento del espacio público. Pues bien, este año se expidió una nueva norma que lo reemplaza, el Decreto 315 de 2024 y, en nuestra opinión, su redacción abre una ventana de oportunidad de la siguiente manera:

Dado que el artículo 19 de este decreto le ordena a cada una de las entidades gestoras del espacio público expedir un protocolo en el que se regulen las particularidades de cada espacio, se rompe el encierro normativo que había generado el Decreto 493 de 2023 y la expedición de este nuevo protocolo, mandado que fuera reiterado en el artículo 34 de la norma, y se convierte en una nueva oportunidad de concertación con las vivanderas, vivanderos y comerciantes de las plazas.

En el artículo 7 se establece que las autorizaciones de aprovechamiento económico del espacio público deben velar porque cada elemento de este se utilice para los propósitos para los que fue destinado. Ese mandato se reitera como deber de las entidades gestoras en el numeral 18.6 del artículo 18.

Por lo menos hay una barrera en principios normativos frente a la pretensión de la administración pasada de abrir las plazas de mercado a grandes conglomerados económicos.

El artículo 20 de la norma establece que en el protocolo que cada entidad expida se puede reglamentar de manera autónoma el término de duración de la autorización de aprovechamiento del espacio público, con lo que se supera una de las principales barreras que establecía la anterior regulación: la duración máxima de 1 año.

Otro escollo que se había presentado en el diálogo entre las y los comerciantes y la Administración eran las variables que hacían parte de la fórmula de retribución, lo cual eleva el costo de arrendamiento de los módulos en las plazas. Ahora, el artículo 29 le da absoluta libertad a cada entidad gestora para definir esa fórmula, más aún, el artículo 33 establece la posibilidad de formular retribuciones diferenciales en las plazas de mercado.

Situaciones que se están gestando en un espacio de negociación con las vivanderos, vivanderos y comerciantes y del cual se prevé la generación de un instrumento de normalización que subsane las irregularidades históricas en la relación entre las y los comerciantes y la administración.

Así las cosas, es importante que se articule la presente iniciativa, con la concertación de dicho protocolo y de esta manera se facilite el tránsito a la total formalización.

4. MARCO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

MARCO INTERNACIONAL

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Meta 8.3 “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”.

CONVENIOS INTERNACIONALES DEL TRABAJO - Adoptados por la Ley 23 de 1967 “Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en las Reuniones 14^a (1930), 23^a (1937), 30^a (1947), 40^a (1957) y 45^a (1961)”

La Organización Internacional del Trabajo -O.I.T.-, ha procurado generar en los Estados miembros un entorno normativo dedicado a proteger la economía informal, donde determina que esta se tenga en cuenta junto con las categorías de trabajadores que no son empleados, afirmando que la administración del trabajo debería abarcarlos progresivamente. El artículo 7º del mencionado Convenio establece:

“A fin de satisfacer las necesidades del mayor número posible de trabajadores, cuando lo exijan las condiciones nacionales, y en la medida en que la administración del trabajo no haya abarcado ya estas actividades, todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá promover, gradualmente si fuera necesario, la ampliación de las funciones del sistema de administración del trabajo, a fin de incluir actividades, que se llevarían a cabo en colaboración con otros organismos competentes, relativas a las condiciones de trabajo y de vida profesional de determinadas categorías de trabajadores que, a efectos jurídicos, no se pueden considerar personas en situación de empleo, tales como:

(...)

(d) las personas que trabajan según pautas establecidas por la costumbre o las tradiciones comunitarias.”

Dicho esto, la Corte Constitucional de Colombia hace una interpretación de acuerdo con el derecho al trabajo del que deben gozar los vendedores informales, y determina lo siguiente:

“(…) las actividades de subsistencia de los vendedores informales, pretermitiendo la calidad de sujetos de especial protección por su condición de vulnerabilidad económica, sin que se advierta una justificación suficiente para el establecimiento de medidas policiales discriminatorias que desconocen la jurisprudencia constitucional.

(...)

La ponderación entre el derecho al espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales supone tener en cuenta que estos son considerados sujetos de especial protección debido a la condición de vulnerabilidad social y económica.”

MARCO NACIONAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

(...)”.

Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

Artículo 88. “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

(...)”

Artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Artículo 313. “Corresponde a los concejos.

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

(...)”

Artículo 334. “(...) El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores

ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones (...).

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.”

LEYES

Ley 29 de 1963

“Por la cual se derogan unas exenciones de impuestos”

Artículo 1. “Los patrimonios y las rentas de los Municipios y del Distrito Especial de Bogotá son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que los de los particulares. En consecuencia, sólo los Concejos Municipales y el Concejo Distrital podrán decretar exenciones o exoneraciones de los impuestos o contribuciones que por la Constitución, la ley y las ordenanzas les corresponden (...)”

Ley 14 de 1983

“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”

Artículo 38. “Los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal.”

Ley 901 de 2004

“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones”

Artículo 4. Depuración de saldos contables. “Las entidades públicas llevarán a cabo las gestiones necesarias que permitan depurar los valores contables que resulten de la actuación anterior, cuando corresponda a alguna de las siguientes condiciones:

(...)

f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de que se trate;

(...)

Parágrafo 1°. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, las entidades podrán contratar la realización del proceso de depuración contable con contadores públicos, firmas de contadores o con universidades que tengan facultad de contaduría pública debidamente reconocida por el Gobierno Nacional.

(...)"

Ley 1066 de 2006

"Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones"

Artículo 2. "Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán:

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.

(...)"

Artículo 19. "Para efecto de los procesos de saneamiento contable de las cuentas por cobrar, de cartera y asimiladas, las entidades públicas destinatarias de la presente ley, podrán contratar con firmas auditoras de reconocida experiencia y que cumplan con los parámetros que para tal efecto defina el Gobierno Nacional, para que estas revisen, validen y emitan concepto sobre la gestión adelantada frente a cada obligación y, en consecuencia, sobre la procedencia de adoptar las recomendaciones de saneamiento".

DECRETOS

Decreto 4473 de 2006

"Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006"

Artículo 1. Reglamento interno del recaudo de cartera. "El reglamento interno previsto en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales de cada entidad".

Artículo 2. Contenido mínimo del reglamento interno del recaudo de cartera. "El Reglamento Interno del Recaudo de Cartera a que hace referencia el artículo 1° del presente decreto deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Funcionario competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa persuasiva y coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna de la entidad.
2. Establecimiento de las etapas del recaudo de cartera, persuasiva y coactiva.

3. Determinación de los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al procedimiento de cobro coactivo, en términos relativos a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor entre otras”.

RESOLUCIONES

Resolución 193 de 2016

“Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable”

Artículo 1. “Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. El Procedimiento para la evaluación del control interno contable quedará como se indica en el anexo de la presente Resolución”.

MARCO DISTRITAL

DECRETOS

Decreto 397 de 2011

“Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”

Artículo 4. Competencias para ordenar la depuración contable y saneamiento de cartera. “Para ordenar la depuración contable y saneamiento de cartera y en los casos en que se determine su difícil cobro o cuando se compruebe que la relación costo-beneficio para la determinación y/o cobro sea desfavorable para las finanzas distritales en el Sector Central y en las Localidades, son competentes los siguientes servidores, conforme a la estructura de cada entidad u organismo:

(...)

- b) En las entidades de la Administración Central, la competencia funcional para ordenar la depuración contable y saneamiento de cartera originada en conceptos diferentes a impuestos distritales es de los (as) Secretarios (as) de Despacho, los (as) Directores (as) de Departamento Administrativo y de Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica o sus delegados del nivel directivo, previo análisis y recomendación del Comité que para el efecto se conforme”.

Decreto 556 de 2021

“Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital”

Artículo 20. Responsabilidades de los Comités de Conciliación de las entidades y organismos distritales. “Los Comités de Conciliación de las entidades y organismos distritales, en el marco de las funciones de diseñar las políticas generales para la orientación de la defensa de los intereses de la entidad y fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la transacción y la conciliación (...)”

Decreto 315 de 2024

“Por medio del cual se reglamentan los artículos 147 y 549 del Decreto Distrital 555 de 2021, en lo que tiene que ver con el aprovechamiento económico del espacio público y la explotación económica de la infraestructura pública en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1. Objeto. “Reglamentar el aprovechamiento económico del Espacio Público y la explotación económica de la infraestructura pública en el Distrital Capital, así como, prevenir su ocupación indebida, con el propósito de garantizar su integridad, y asegurar su uso, goce, disfrute y beneficio por parte de la ciudadanía, en consonancia con los principios de acceso universal e igualdad de oportunidades, a través de:

- 1.1 El aprovechamiento de los elementos constitutivos y complementarios del espacio público, de acuerdo con su funcionalidad y en concordancia con la misión de las respectivas entidades distritales.
- 1.2 El marco regulatorio de aprovechamiento económico por parte de particulares en el espacio público en el Distrito Capital”.

Artículo 34. Del aprovechamiento económico en el sistema Distrital de Plazas de Mercado. “El Instituto Para la Economía Social -IPES- como administrador y gestor del espacio público de las Plazas Distritales de Mercado del Distrito Capital, expedirá el protocolo el cual contendrá las actividades autorizadas, la fórmula de retribución, los plazos, la forma de interlocución con los aprovechadores y el reglamento administrativo y operativo”.

Artículo 35. Normalización de uso y aprovechamiento en las Plazas Distritales de Mercado. “En el protocolo de aprovechamiento del espacio público de las Plazas Distritales de Mercado, el Instituto Para la Economía Social - IPES incorporará un capítulo específico sobre normalización del uso y aprovechamiento económico de los comerciantes que a la fecha del presente decreto no cuenten con autorización de uso y aprovechamiento, en el que establecerá un plazo máximo para tramitar y culminar la expedición de la autorización del uso y aprovechamiento que propenda por la normalización de la ocupación, sin perjuicio de la protección y conservación del espacio público y del cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de los comerciantes que ocupan irregularmente el espacio público”.

ACUERDOS

Acuerdo 257 de 2006

“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

Artículo 76. Transformación del Fondo de Ventas Populares en el Instituto para la Economía Social - IPES. “Transfórmese el Fondo de Ventas Populares - FVP el cual en adelante se denominará Instituto para la Economía Social - IPES establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”.

Artículo 79. Funciones del Instituto para la Economía Social - IPES. “De conformidad con lo establecido en el artículo anterior adicionase los Acuerdos 25 de 1972 y 04 de 1975 con las siguientes funciones:

a. “Definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios.

b. Gestionar la consecución de recursos con entidades públicas, empresas privadas, fundaciones u Organizaciones No Gubernamentales - ONGs nacionales e internacionales para ampliar la capacidad de gestión de la entidad y fortalecer la ejecución de los programas y proyectos.
(...)”

Acuerdo 927 de 2024

“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 270. Depuración de cartera. “En términos de eficiencia institucional y siguiendo los criterios legales vigentes, en materia de prescripción, remisión de deudas, pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, en virtud de los cuales no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente, las entidades distritales deberán realizar acciones de depuración y saneamiento de la cartera a su cargo de cualquier índole en cualquiera de las etapas del cobro persuasivo y coactivo, mediante el castigo de la misma, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión”.

JURISPRUDENCIA

Sentencia No. T-772-03. (4 de septiembre de 2003). Expediente T-728123. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.

En el marco del conflicto que ha tenido el Estado respecto a la obligación de conservar el espacio público al tiempo que los derechos de los vendedores informales, la Corte se pronunció respecto a este deber estatal, haciendo su interpretación en un contexto de desempleo elevado, desplazamiento masivo y altas tasas de pobreza e indigencia; donde en un contexto de pobreza tan grave como el que aqueja a la capital, junto con la ausencia de oportunidades en el sector formal, las personas se ven obligadas a utilizar las vías, plazas y parques públicos, comercializando artículos de la más diversa índole, para así satisfacer sus propias necesidades básicas y las de sus familias.

“Por lo tanto, en aplicación del principio del Estado Social de Derecho y en el contexto de las condiciones sociales y económicas actuales de la capital, las autoridades distritales competentes están en el deber constitucional de incorporar, como parte integrante de dichas políticas, programas o medidas de recuperación del espacio público, un componente obligatorio de provisión de alternativas económicas para quienes dependen del comercio informal para su sustento vital, el cual se debe haber formulado con base en una evaluación y un seguimiento previos y detallados de las condiciones sociales y económicas reales y cambiantes de la capital, con miras a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales a medida que cambia el contexto dentro del cual se van a implementar, de tal manera que exista correspondencia entre tales políticas, programas y medidas y las dimensiones y características del problema social a resolver. En ausencia de este componente, que se debe ofrecer en principio a todos los comerciantes afectados en forma previa a su desalojo, la política, programa o medida correspondiente será ostensiblemente lesiva de los mandatos constitucionales -es decir, inadmisibles por su carácter desproporcionado-.”

En dicho pronunciamiento, se evidencia que la Corte Constitucional se ocupó de explicar el concepto de Estado Social de Derecho y sus relaciones con el valor de la dignidad humana e igualdad, donde la constitución política impone un deber positivo de actuación a las autoridades, el cual consistente en luchar por la erradicación de las desigualdades sociales existentes, hasta el máximo de sus posibilidades y con el grado más alto de diligencia.

Es así que, cuando el grupo afectado con las medidas de protección del espacio público está integrado por vendedores informales, considerados como un sector social vulnerable debido a sus condiciones socio económicas, las autoridades deben prever medidas complementarias encaminadas a mitigar los efectos negativos de su decisión, de manera tal que estas no acaben por empeorar la situación material de quienes ya están en circunstancias extremas de subsistencia.

5. COMPETENCIA

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

Artículo 313. “Corresponde a los Concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...).”

En segundo lugar, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá - estipula que:

Artículo 12. Atribuciones. “Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito

(...)

23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales.

(...)”.

6. IMPACTO FISCAL

El presente Acuerdo, no impacta fiscalmente las finanzas, el presupuesto y, en general, la economía del distrito, en medida que las obligaciones y los créditos que se espera su recaudo, están sometidos a una expectativa que el distrito, en puridad, no tiene certeza de su recaudo y, con todo, se ajusta al Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”

Cordialmente,

EMEL ROJAS CASTILLO

Concejal de Bogotá

Partido Nueva Fuerza Democrática

HEIDY LORENA SÁNCHEZ BARRETO

Concejala de Bogotá

Partido Unión Patriótica

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejal de Bogotá

Partido Liberal

DONKA ATANSOVA IAKIMOVA

Concejala de Bogotá

Partido Polo Democrático

FABIÁN PUENTES SIERRA

Concejal de Bogotá

Partido Mira

SAMIR BEDOYA PIRAQUIVE

Concejal de Bogotá

Partido Mira

7. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 416 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA DEPURACIÓN DE CARTERA A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES) EN BENEFICIO DE VIVANDEROS, VIVANDERAS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE MERCADO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numerales 1 y 23., en concordancia con los Artículos 13, 19 y 313 de la Constitución Política, Artículo 8 de la Ley Estatutaria 133 de 1994 y el Decreto Reglamentario 354 de 1998;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer los lineamientos para que el Instituto Para la Economía Social (IPES) adelante medidas dirigidas a la condonación de todas las obligaciones derivadas por el uso o tenencia de los cupos, locales, bodegas, establecimientos de comercio y, en general, cualquier espacio destinado para la venta de bienes, productos y servicios que se comercialicen en todas las plazas distritales de mercado de la ciudad en favor de los vivanderos y comerciantes.

PARÁGRAFO: La Administración Distrital, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), desarrollará los criterios para el uso y aprovechamiento del espacio público en las Plazas Distritales de Mercado. Dichos criterios deberán incluir una variable social que contemple de manera prioritaria las necesidades y condiciones socioeconómicas de los comerciantes y vivanderos, promoviendo su inclusión y sostenibilidad económica, conforme a lo establecido en el Decreto 315 de 2024 en su artículo 34.

ARTÍCULO 2. LINEAMIENTOS. Conforme al Manual de Recaudo y Gestión de Cartera PA04-MN-002, el IPES propenderá por implementar medidas destinadas a garantizar la depuración de toda la cartera en la que esté ejerciendo acciones de cobro persuasivo o coactivo y, en general todos los procesos que estén inmersos dentro de las causales de depuración, todas aquellas acreencias derivadas de títulos ejecutivos o derechos de crédito en favor del Distrito y en contra de los vivanderos y comerciantes de las plazas distritales de mercado.

ARTÍCULO 3. INCENTIVOS. El IPES creará un mecanismo de incentivo para que los vivanderos, vivanderas y comerciantes que actualmente no tengan relación formal para el uso, aprovechamiento o explotación de sus cupos, locales y bodegas, deberán suscribirlos contratos de uso administrativo y aprovechamiento económico.

ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, otorgando a la Administración un plazo no mayor a doce (12) meses, contados a partir de la expedición del presente Acuerdo, para adelantar las gestiones necesarias para su ejecución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLA

PROYECTO DE ACUERDO NO 417 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO POLICIAL, CON ENFOQUE DE JUVENTUDES, EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL EN BOGOTÁ”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de acuerdo crea lineamientos para la Atención Integral a Víctimas del Abuso Policial, con enfoque de juventudes, en el marco de la protesta social en Bogotá.

2. ANTECEDENTES

Nº PA	TÍTULO	AUTOR	PONENTES	PONENCIA
350 2021	“Por medio del cual se crean Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas de Abuso Policial, con enfoque de juventudes, en el marco de la protesta social en Bogotá”	H.C Ana Teresa Bernal	H.C. Manuel José Sarmiento Arguello (Coordinador) y H.C. Rolando Alberto González García	Ponencia positiva con modificaciones
021 de 2022	“Por medio del cual se crean Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas de Abuso Policial, con enfoque de	H.C Ana Teresa Bernal	H.C. Julián Espinosa Ortiz (Coordinador) y H.C. Juan Javier Baena Merlano	Ponencia positiva con modificaciones

	juventudes, en el marco de la protesta social en Bogotá”			
134 de 2022	“Por medio del cual se crean Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas de Abuso Policial, con enfoque de juventudes, en el marco de la protesta social en Bogotá”	H.C Ana Teresa Bernal	H.C. Julián Espinosa Ortiz (Coordinador) y H.C. Juan Javier Baena Merlano	Ponencia positiva con modificaciones
188 de 2023	“Por medio del cual se crean Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas de Abuso Policial, con enfoque de juventudes, en el marco de la protesta social en Bogotá”	H.C Ana Teresa Bernal H.C Heidy Lorena Sanchez H.C Jose cuesta H.C Diego Cancino H.C Ati Quigua Izquierdo H.C Maria Victoria Vargas H.C Carlos Carrillo	H.C. Julián David Rodríguez Sastoque (Coordinador) y H.C.Fabián Andrés Puentes Sierra	Ponencia positiva con modificaciones

		<p>H.C Luis Carlos Leal</p> <p>H.C Alvaro Argote</p> <p>H.C Juan Felipe Grillo</p> <p>H.C Manuel Sarmiento</p> <p>H.C María Fernanda Rojas</p>		
368 de 2023	<p>“Por medio del cual se crean Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas de Abuso Policial, con enfoque de juventudes, en el marco de la protesta social en Bogotá”</p>	<p>H.C Ana Teresa Bernal</p> <p>H.C Heidy Lorena Sánchez</p> <p>H.C José Cuesta</p> <p>H.C Diego Cancino</p> <p>H.C Ati Quigua Izquierdo</p> <p>H.C María Victoria Vargas</p> <p>H.C Juan Felipe Grillo</p>	<p>H.C. Javier Alejandro Ospina rodríguez (Coordinador) y H.C. Germán Augusto García Maya</p>	<p>Ponencia positiva H.C. Germán Augusto García Maya y ponencia negativa H.C. Javier Alejandro Ospina rodríguez</p>

		H.C Manuel Sarmiento		
		H.C María Fernanda Rojas		
		H.C Carlos Carrillo		
		H.C Luis Carlos Leal		
		H.C Álvaro Argote		

3. JUSTIFICACIÓN

Diversos informes de organismos de control del país, de organizaciones defensoras de derechos humanos del país y de organismos multilaterales como la CIDH¹⁶⁵, durante los años 2020 y 2021 han alertado sobre graves violaciones a los derechos humanos, la vida y la integridad de ciudadanos y ciudadanas por parte de la fuerza pública en el marco de la protesta social. Actos que expresan la “persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social” (CIDH, 2021, Pág,1).

La violencia que ha marcado dramáticamente a nuestro proyecto de país es un fenómeno de larga duración, multicausal y polifacético, que ha derivado, en una confrontación armada fratricida que materialmente no logramos superar, a pesar de ingentes esfuerzos como el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, dado entre el gobierno nacional y las Farc Ep en el año 2016. En este orden es de mencionar que, a este acuerdo, le anteceden, varios acuerdos de paz con lo que se ha llevado al terreno de la solución política enormes problemáticas asociadas con la pobreza, la inequidad en el acceso a la tierra, la exclusión política, la segregación social y la impunidad, sin encontrar a la fecha soluciones definitivas y estructurales para estos macro problemas.

Con este último Acuerdo de Paz, se plantean grandes retos para nuestra sociedad entre estos, ampliar el espectro político, garantizar el ejercicio diverso de la democracia, avanzar en la reparación integral para las víctimas, abordar los temas de reforma rural integral, darles un manejo integral a los temas de drogas ilícitas, y con estas apuestas de agenda pública que finalmente fortalecerán nuestro Estado Social de Derecho.

En este contexto, la materialización de una paz estable y duradera requiere reconocer a la conflictividad social como un tema neurálgico a comprender y manejar desde una perspectiva democrática. Tal como lo precisa Lederach (2002) “Una sociedad, una comunidad, una congregación o una familia sin conflicto es una entidad exenta de diversidad y de capacidad para crecer”. Los conflictos suceden en la interacción dada entre lo estructural, entendido como condiciones que ordenan lo societal, y las relaciones y acontecimientos que configuran la vida cotidiana.

¹⁶⁵ Órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

La conflictividad social, es la consecuencia de un estado de cosas en la que confluyen intereses, divergencias y se expresa una forma de relación social, Silva¹⁶⁶ (2008) le define:

“El conflicto social no es anómalo, en realidad, no es por definición ni bueno ni malo, es una consecuencia histórica y social natural de las relaciones sociales. Es decir, el conflicto expresa una forma de relación social universal, lo que permite distinguir el conflicto como contenido de las relaciones, de la interacción misma, sus circunstancias de tiempo, espacio o las particularidades del episodio” (Silva, 2008, pág. 41).

En este orden, el reto actual en nuestra sociedad está en darle un manejo democrático a la conflictividad social que tiene una forma de expresión en la protesta social. La fuerza pública debe respetar en todo momento las normas internacionales de derechos humanos y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la manifestación y a la protesta social a través de la protección armónica del derecho a la libertad de expresión y opinión, la libertad de reunión y la libertad de asociación.

En nuestro país la protesta social, es un derecho consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia de 1991 así, “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente (...)”.

La Defensoría del Pueblo¹⁶⁷ (2020) sobre la protesta social precisa:

“Es un derecho humano protegido en la Constitución Política, en la ley y en instrumentos internacionales de derechos humanos, que está estrechamente relacionado con los también derechos fundamentales a la libre expresión y a la libertad de reunión, de asociación, de huelga y de participación. Es también el medio al que acude la ciudadanía para la reivindicación de derechos”.

Desafortunadamente en nuestro país la protesta social ha sido criminalizada y estigmatizada, es decir, se le ha dado un trato negativo, se ha militarizado y se ha privado de un manejo político como lo han señalado múltiples estudios, entre estos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Según la Defensoría del Pueblo

“La estigmatización, por su parte, se entiende como un fenómeno sociocultural, como un proceso de deshumanización, descrédito y menosprecio hacia las personas pertenecientes a ciertos grupos”.

La orden judicial proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el numeral séptimo de la Sentencia STC 7641 del 22 de septiembre de 2020, ampara el derecho fundamental a la protesta pacífica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2021) en su observación Número 8 precisa:

“La Comisión considera que la polarización, la estigmatización, la violencia y la persistencia de lógicas bélicas dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones a la conflictividad

¹⁶⁶ Silva García, (2008), La Teoría del Conflicto, un marco necesario. Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XI, núm. 22, julio-diciembre, 2008, pp. 29-43 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia. Consultado en: <https://www.redalyc.org/pdf/876/87602203.pdf>

¹⁶⁷ Defensoría del Pueblo, 2020. Guía de Bolsillo derechos, deberes, servicios y rutas de atención en el marco de la protesta social pacífica. Consultado: [guia-de-bolsillo-protesta-social-29-01-2021-web.pdf](https://defensoria.gov.co/guia-de-bolsillo-protesta-social-29-01-2021-web.pdf) (defensoria.gov.co).

social. Es imprescindible que los diálogos tengan un enfoque territorial y sean amplios e inclusivos, de forma que involucren a las y los jóvenes, a las personas indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a las personas LGBTI, a las personas en situación de pobreza, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas en movilidad humana y a las víctimas de violaciones de derechos humanos”

Cuando nos aproximamos a este fenómeno de la violencia policial en el marco de la protesta social, lamentablemente a los que nos referimos, en principio, es a una práctica de violación de derechos humanos, tratos inhumanos, afectaciones a la integridad, la vida y la libertad, de quienes han sido afectados por este uso desproporcional de la fuerza que tiene hondas repercusiones en la democracia, la confianza y legitimidad de la Policía Nacional.

Además, estas personas que han sido afectadas en sus cuerpos y en sus vidas son sujeto de atención, dignificación y reparación, tarea que en principio le corresponde al Estado, puesto que estás omisiones, excesos y abusos de autoridad deben ser reconocidos, investigados y judicializados.

Bogotá ciudad epicentro de paz, tal como lo consagra el actual Plan de Desarrollo Distrital, y como se viene perfilando desde diversas administraciones para la garantía de los DDHH, la convivencia pacífica y la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado desde el año 2014, le corresponde liderar medidas, rutas y acciones con enfoque de derechos humanos y de construcción de paz, para salvaguardar los derechos y dignificar a quienes han sido afectados por la violencia policial.

Con el homicidio del ciudadano Javier Ordoñez por un agente de la fuerza pública sale a la luz, una serie de prácticas y maneras de relacionarse entre esta institución con la ciudadanía, que ha prendido las alertas de diversos organismos, y en principio de la misma sociedad.

3.1 Abuso Policial, Violencia Policial.

El artículo 218 de nuestra Constitución Política establece que el fin primordial de la Policía Nacional es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. En esto claramente está sucediendo violaciones que deben ser objeto de investigación y sanción y con esto, la institucionalidad debe desarrollar acciones para atender de manera prioritaria a quienes son víctimas de estas situaciones.

La Defensoría del Pueblo (2020), sobre el abuso policial en el marco de la protesta social, señala que, “el abuso policial en el marco de la protesta social hace referencia a toda práctica o actuación que decaiga en situaciones como las siguientes:

- Intervenciones generalizadas, no diferenciadas, y arbitrarias en el uso de la fuerza.
- Estigmatizar, deslegitimar o descalificar a quienes ejercen su derecho a manifestarse pública y pacíficamente.
- Uso desproporcionado de la fuerza y de las armas menos letales (permitidas), generando afectaciones en los derechos a la vida y a la integridad.
- Privaciones arbitrarias de la libertad, en las que se generan vulneraciones a los derechos a la integridad, vida, debido proceso y defensa.
- Ataques contra la libertad de expresión y prensa”.

En el informe de la ONG Temblores¹⁶⁸ (2020), llamado: “ Bolillo, Dios y Patria” se precisa que, desde el Observatorio de Violencia Policial liderado por esta organización, se identificaron tres tipos de violencia policial que atentan directamente contra los derechos humanos, la vida y la integridad de la ciudadanía así:

- Violencia homicida
- Violencia física
- Violencia sexual

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en su observación No 20, indica que en la sentencia STC 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, del 22 de septiembre de 2020, señala:

“La Sala de Casación Civil encontró que la fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), constituye “una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”.

Entre los años 2017 y 2019, la ONG Temblores (2020) registra 23 casos de violencia homicida policial, siendo esta la cuarta ciudad con mayor cantidad de asesinatos en el País. En este orden, es de anotar que una de las mayores dificultades en la sistematización y seguimiento a estos hechos, es la falta de información, parámetros de seguimiento y en general la escasa tipificación de estas conductas en el ámbito jurídico.

En este mismo sentido, la Corte Constitucional, en el marco de la Sentencia C-600 de 2019, señaló que,

“La función de policía además de los límites constitucionales y de derecho internacional de los derechos humanos se encuentra sometida al principio de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de Policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población”,

Es decir, queda claro que, nunca en las funciones policiales existe el otorgamiento del abuso y los tratos crueles o degradantes a la ciudadanía. Además, la mencionada Sentencia refiere,

“Así, el objetivo constitucional de la Policía Nacional está enmarcado precisamente, en la actividad de policía, desarrollada a través de acciones eminentemente preventivas y desprovistas de carácter castrense, dirigida al manejo del orden público y, de manera particular, al logro de la convivencia entre las personas, preservando la tranquilidad y seguridad públicas.

El artículo 218 superior determinó que la Policía Nacional es un “cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, constituyéndose este en un límite en sí mismo para la actuación de la autoridad de policía”, y que desde el Estado Social de Derecho, existen límites a la actividad de policía debiendo actuar en estricto apego “por el respeto de los derechos y libertades de las personas y por los controles judiciales a su ejercicio. En ese norte la actividad material de policía, se gobierna por un absoluto principio de interdicción de la arbitrariedad y en general, se halla regida por un mandato ético superior de abjurar de todo derroche inútil de la coacción policial. La competencia policial comporta el mandato ético de servir y respetar a los ciudadanos porque el abuso de las competencias y

¹⁶⁸ Temblores, 2020. Consultado en: https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_f40a2b21f9074a208575720960581284.pdf

funciones, o la intimidación gratuita y la exacerbación de la fuerza, son la negación de la propia razón de existencia de la institución policial” (Sentencia C 600, 2019)

En este sentido queda claro que la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza, desembocan en lo que llamamos el abuso policial.

3.2 Factores de vulnerabilidad por el abuso policial en el marco de la protesta social y víctimas del abuso policial

La ONG Temblores (2020) en su informe “Bolillo, Dios y Patria” plantea que una vez hecho seguimientos desde el año 2017 sobre eventos de violencia policial, se encuentra que esta afecta de manera diferenciada a la ciudadanía. En esto se destaca:

“planteamos que la violencia policial afecta de manera diferenciada a las personas con sexualidades y géneros no hegemónicos, a las personas que usan drogas, a las personas habitantes de calle, a las personas afrodescendientes, indígenas, a las personas jóvenes, a las personas que se dedican a la venta ambulante (o economías callejeras), a las personas que se dedican al trabajo sexual y a las mujeres” (pág. 18).

Esta afirmación coincide con la observación No. 29 que realiza la CIDH, en la que señala:

“En el marco de la visita de trabajo, la Comisión Interamericana recibió información sobre graves violaciones a los derechos humanos y distintos obstáculos para garantizar la protesta social. De igual manera, observó el impacto que la polarización y la estigmatización tienen sobre los derechos humanos de las personas manifestantes. Como principales preocupaciones identificó: el uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnico-racial en el marco de la protesta; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar”.

En este orden es de destacar que el fenómeno del abuso policial ha generado víctimas, en especial a ciertos sectores que en el ejercicio de la protesta social han sido perfilados y estigmatizados.

3.3 Movilizaciones sociales, abuso policial y violación de DDHH 2021

Desde el 28 de abril del presente año se han dado un sinnúmero de eventos de protesta social sin precedentes en la historia colombiana, en los que los jóvenes han sido el sujeto social protagónico. Bogotá fue una de las ciudades en la que la protesta tuvo mayor impacto.

Lastimosamente el saldo social de este momento de inconformidad social es crítico, la violencia policial, el trato militar y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional con las masivas aglomeraciones ciudadanas de descontento, ha sido un patrón institucional que ha ocasionado un sinnúmero de violaciones de DDHH, criminalización, estigmatización del derecho de la protesta social y escalamiento

de la tensión social en una situación de confrontación violenta, agotando la vías del diálogo y el trato democrático a la generalizada inconformidad social.

A 13 de mayo de 2021 diversas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales¹⁶⁹, reportan hechos de abuso policial y violación de DDHH, en el Portal de las Américas así: 27 manifestantes heridos, 8 casos documentados de detención y tortura, 4 casos de detención ilegal, 1 homicidio, 12 detenidos sin judicialización y dejados en libertad con heridas, 6 detenidos y dejados en libertad y 1 aterrizaje de un helicóptero de guerra.

Y a nivel distrital durante las protestas del Paro Nacional organizaciones sociales reportan graves hechos como:

“disparos de armas de fuego, incendios y diferentes focos de violencia no identificada, así como la presencia de Fuerzas Militares y de personas civiles vestidas de negro con cascos tomándole fotos a las manifestantes que ponen en riesgo a todas las personas que se encuentran ejerciendo el derecho a la protesta en estos momentos en la ciudad de Bogotá D.C”¹. (Fundación Lazos de Dignidad, 8 de mayo de 2021).

Es de destacar que abuso policial tiene graves antecedentes desde el paro nacional de 21 de noviembre de 2019, con un hito igualmente grave en septiembre de 2020, del cual la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncia:

“entre el 9 y 10 de septiembre pasado, 10 jóvenes (entre 17 y 25 años) fueron asesinados por la Policía Nacional en Bogotá”²

La Defensoría del Pueblo confirma el 7 de mayo de 2021, la muerte de Daniel Zapata de 20 años, quien sería la primera víctima fatal en Bogotá en medio de las manifestaciones, por una bomba aturdidora del ESMAD.

En este orden una hipótesis a explorar en la nueva coyuntura nacional y distrital es la apertura de un nuevo ciclo de conflictividad social con una alta violencia física, moral, cultural y social, en el que el epicentro son las ciudades. En esto, lastimosamente la Fuerza Pública ha jugado un papel represivo con el uso desproporcional de la fuerza que ha vuelto víctimas a miles de jóvenes desarmados y atrapados en un complejo espiral de asimetrías en el orden de lo social y lo económico. Las escasas oportunidades y la débil política social del país y la ciudad, desmontada por décadas de políticas neoliberales, ha dejado sin capacidad de respuesta a nuestro debilitado estado social de derecho.

La encuesta para CM& del Centro Nacional de Consultoría, realizada entre el 7 y el 10 de mayo de 2021 indica datos reveladores tales como:

- El 72% de los entrevistados a nivel nacional creen que el resultado del paro va a ser positivo, en Bogotá el 71%.
- El 65% de los entrevistados a nivel nacional creen que los dirigentes del paro nacional representan a los jóvenes.
- El 43% de los entrevistados a nivel nacional creen que “*el empleo para los jóvenes*”, es uno de los tres temas más urgentes que el actual gobierno debe resolver, seguido de un 43% de “*disminuir la pobreza*”, y un 41% “*educación superior gratuita*”. En Bogotá a esta pregunta de los tres temas más urgentes a resolver es: empleo para los jóvenes: 38%, disminuir pobreza: 39%, educación superior gratuita: 38%.

¹⁶⁹ Marcha Patriótica, Alternativa Popular, Movimiento Alternativa, REDHUS, Ciudad en Movimiento.

- El 99% considera que se debe llegar a acuerdos sobre los grandes temas importantes del país.
- El 47 % de los entrevistados manifiesta que “*la violencia de la fuerza pública*” es uno de los hechos presentados durante el paro, que más daño le ha hecho al país.

Por su parte la Comisión de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá¹⁷⁰ en su informe de este año que presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, indica que según la información reportada por los gestores de convivencia del Distrito Capital e informes de la Policía Nacional, entre el 28 de abril y el 8 de junio de 2021 se registran 1.039 actividades de movilización, de las cuales tan sólo 139 (13%) fueron intervenidas por el ESMAD. Es decir, contrario a la opinión generalizada por medios de comunicación, la protesta social dada en el marco nacional fue mayoritariamente pacífica. Ver tabla siguiente:

Tabla 1 Actividades de Movilización Social en Bogotá en el marco del Paro Nacional de 2021

MECANISMO DE INTERVENCIÓN	NO. ACTIVIDADES	%
INTERVENCIÓN DE LA FUERZA DISPONIBLE-FUDIS MEBOG-	15	1,44
INTERVENCIÓN DE ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS (SOCIEDAD CIVIL)	9	0,87
INTERVENCIÓN DEL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS ESMAD	139	13,38
MEDIACIÓN INSTITUCIONAL (GESTORES DE CONVIVENCIA, DIÁLOGO SOCIAL, PERSONERÍA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PROCURADURÍA)	514	49,47
NO SE PRESENTARON SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD	265	25,51
REGULACIÓN SOCIAL (LOS MANIFESTANTES ESTABLECIERON DINÁMICAS DE AUTOREGULACIÓN)	97	9,34
Total	1.039	

Fuente: Tomado de Informe de Comisión de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá

Sin embargo, es lamentable que este 13% de las actividades de movilización social en el Paro Nacional haya dejado tantas víctimas del abuso policial. En esto, tal como lo señala este informe, la acción violenta del Estado se concentró en circunstancias específicas y sectores concretos, por ejemplo, en el Portal de las Américas, punto en el que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó 1425 casos de heridos por el trato violento por parte de la fuerza pública.

Así mismo, en este contexto del paro nacional, se cuenta con un alto subregistro y muy poca información consolidada de las diversas situaciones de violaciones de DDHH, tratos crueles e inhumanos, así como violencia física y sexual en la que destacaron víctimas de violencia ocular por parte de agentes del ESMAD.

En este orden, esta Comisión a 8 de junio, con reportes de la Secretaría de Salud informa 108 personas víctimas de trauma en cabeza en cara, 43 de trauma ocular, 61 con herida en cabeza y 3 quemaduras en cabeza o cara por abuso policial.

¹⁷⁰ Conformada por los Honorables Concejales: Ana Teresa Bernal, Susana Muhamad, Diego Cancino, Luis Carlos Leal, Heydi Sánchez, Carlos Carrillo para realizar seguimiento en tiempo real a la garantía de los derechos humanos en el marco de la protesta social dada a partir del 28 de abril del presente año.

Tabla 2 Actividades de Movilización Social en Bogotá en el marco del Paro Nacional de 2021**Seguimiento a lesiones y traumas oculares**

DIAGNÓSTICO	TOTAL
Trauma en cabeza o cara	108
Herida en cabeza o cara	61
Quemaduras en cabeza o cara	3
Trauma ocular	43

Fuente: Secretaría de Salud. Corte 8 de junio

Fuente: Tomado de Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá.

En este orden, es altamente preocupante que las situaciones de abuso policial estén generando un gran número de ciudadanos y ciudadanas víctimas que, a la fecha de no cuentan con una ruta de atención y asistencia, así como con un procedimiento claro para el acceso a la justicia y la reparación.

Más allá de los retos que esto nos impone en materia de revisión y abordaje de esta situación en la Policía Nacional, quienes han sido dañados, maltratados, violentados en su dignidad, integridad y libertades, hoy deben ser sujeto de especial de atención y reparación.

Por lo anterior, con este proyecto de acuerdo queremos proponerle a la ciudad que sea líder en la definición de rutas para la atención y resarcimiento de quienes han sido víctimas del abuso policial en el marco de la protesta social.

Por su parte la *Human Rights Watch* ante los eventos de brutalidad policial contra los manifestantes, recomienda una reforma policial así:

“Miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia”.¹⁷¹

Finalmente, en este orden, precisar que este proyecto de acuerdo igual se inscribe en lo acordado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto dado con las Farc Ep en 2016, en especial en lo relacionado con el punto 2 en el que se precisa:

“La construcción de la paz requiere además de la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, y en particular en la implementación del presente Acuerdo. Eso supone, por una parte, el fortalecimiento de las garantías y las capacidades para que los ciudadanos y ciudadanas, asociados en diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera contribuyan a la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y multicultural por diferentes medios, incluyendo la protesta social.” (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, 2016, pág.36).

¹⁷¹ Human Rights Watch, (2021). Consultado en: <https://www.hrw.org/es/news/2021/06/09/colombia-brutalidad-policial-contra-manifestantes>.

3.4 El Enfoque de Juventudes. Política social para juventud.

Colombia cuenta con antecedentes importantes en materia de reconocimiento de la juventud como sujeto de derechos y actor protagónico en la construcción de sociedad, lo cual se expresa desde la Constitución Política de 1991 y en diversos desarrollos normativos que consolidan una política pública de juventudes. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes, tanto así, que esta población a 2021 es una franja de la sociedad excluida, poco integrada en el sistema educativo y productivo, hecho al que se le suma una histórica segregación socio – cultural.

En Bogotá destacan experiencias importantes de construcción de una arquitectura institucional para dar respuesta a las problemáticas de la juventud desde el año 2006, esfuerzo que se apoya en la Ley nacional de juventudes dada en el año 1997.

Entre los instrumentos de política pública más actuales destaca el documento CONPES D.C 08 de 2019 que tiene como objetivo general:

“Ampliar las oportunidades, individuales y colectivas, de las y los jóvenes para que puedan elegir lo que quieren ser y hacer hacia la construcción de proyectos de vida, que permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía para beneficio personal y de la sociedad, a través del mejoramiento del conjunto de acciones institucionales y el fortalecimiento de sus entornos relacionales” (CONPES, 2019).

y para lo cual se priorizan 7 objetivos: Ser Joven, Educación, Inclusión Productiva, Salud Integral y Autocuidado, Cultura, Recreación y Deporte; Paz, Convivencia y Justicia; y Hábitat.

Este documento que retoma el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), define al joven como

“toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía” En este sentido, en varios referentes normativos e instrumentos internacionales se perfila que existe al interior del rango joven tres (3) segmentos a su vez: **i) jóvenes adolescentes:** 14 a 17 años, **ii) Jóvenes:** 18 a 22 años y **iii) Jóvenes adultos:** 23 a 28 años. Para el Departamento Nacional de Estadística DANE, el rango se encuentra entre los 14 y 28 años de edad y para el Ministerio el rango es entre los 14 y 26 años de edad. Estas diferencias en la definición de los rangos, más que una referencia metodológica, refleja una discusión sobre la juventud como una población diversa y de alta complejidad en su lectura.

Para el año 2020 en Colombia se estima una población de jóvenes de 10.990.268 entre los 14 a 26 años, lo que representa el 21,8% de la población total. De estos, 5.552.703 son hombres y 5.437.565. El 21.56 de la población joven del país se encuentra en Bogotá.

En este orden es de precisar que, en el país, tal como se reseña en el CONPES 4023 (2021) se han desarrollado instrumentos de política pública para resolver situaciones que afecta a niños, niñas, jóvenes, como el trabajo infantil, la explotación sexual comercial, el embarazo, el reclutamiento, y la atención a la migración. *“Sin embargo, aún no se han construido protocolos de articulación de estas líneas de política y algunas de estas problemáticas se han agravado en el marco de la emergencia”* (CONPES 4023, 2021).

En Bogotá, según el Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024, “la población joven de Bogotá (...) 14 y 28 años -la cual representa el 25,1% de la población total de la ciudad” es de, 2'028.845 jóvenes, 48,64%

mujeres y 51,3% hombres (EMB, 2017). De estos, 87.390 (4.3%) son jóvenes víctimas del conflicto armado interno.

“Un 60,6% de la totalidad de los jóvenes del Distrito está concentrado en 5 de las 20 localidades (EMB, 2017): Suba con 15,5%, Kennedy con 15,3%, Engativá con 10,3%, Ciudad Bolívar con 10% y Bosa con 9,5% (Distribución población, entre 14–28 años, por localidades para Bogotá (2017)). Las localidades con el menor porcentaje de jóvenes son Sumapaz con 0,01% y La Candelaria con 0,3%.”

El 16% de esta población, ni estudia ni trabaja.

Según el PDD 2020 - 2024, la composición de la población de Bogotá por rangos de edad, a 2018 muestra una mayor proporción de personas en los rangos de edad comprendidos entre los 20 y 24 años, 25 y 29 años, 30 y 34 años y 35 y 39 años. Así mismo, en este se identifica que, “la mayor proporción de Ninis se registra en la localidad de Usme (25,9%), especialmente en la UPZ La Flora (...) donde un poco más de la tercera parte de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudia ni desarrolla actividad laboral alguna”.

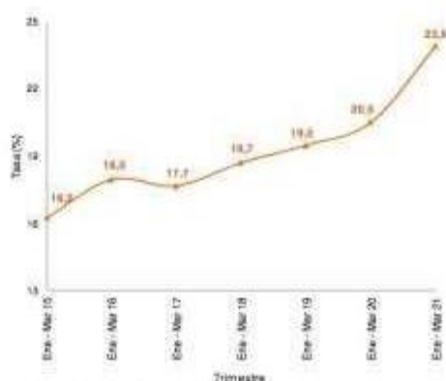
Así mismo, en ese documento se indica que:

“En el año 2018, el 66% de la matrícula de educación superior en Bogotá se concentró en el nivel de formación profesional universitaria, seguida de los niveles tecnológico (20%), especialización (6%), técnico (5%), Maestría (3%) y doctorado (0,3%) (...)” y que, “la deserción por cohorte en educación superior fluctúa alrededor del 50%”. PDD, 2020 - 2024)

A la fecha en Bogotá existen 10 fondos distintos para la educación superior, sin embargo, el 63% de los estudiantes se forman en el SENA.

En este orden las situaciones problemáticas de la juventud se agudizan con los efectos sociales, económicos y de salud por el COVID – 19. Con el aumento de los niveles de pobreza, desempleo, y pérdidas de vidas, la juventud tiene sus propias afectaciones.

A nivel nacional se observa, según datos DANE, que a marzo de 2021 la tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 14 y 28 años fue 42,0%, presentando una disminución de -1,6p.p. comparado con el trimestre enero -marzo 2020 (43,6%). Para los hombres esta tasa se ubicó en 51,6% y para las mujeres la TO fue 32,4%. De otra parte, la tasa de desempleo asciende a 23.9%, de un 19.5% en el año 2019.



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Gráfica 1 Tasa de Desempleo en población joven (14 a 28 años)

Por sector ocupacional el DANE a marzo de 2021, reporta, que “*obrero, empleado particular (49,2%) y trabajador por cuenta propia (36,2%) fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación de la población ocupada joven en el trimestre enero -marzo 2021*”, lo que da cuenta que los jóvenes profesionales además de las dificultades de años anteriores en el mercado laboral, a 2021 su participación es muy baja.

Tabla 3 Participación, variación y contribución según posición ocupacional marzo 2021

	Total Nacional	100,0		-2,9		-2,9
Obrero, empleado particular	49,2		-9,5		-5,0	
Jornalero o peón	4,3		-14,3		-0,7	
Empleado doméstico	1,9		-18,3		-0,4	
Otras posiciones*	2,4		2,6		0,1	
Trabajador sin remuneración*	6,0		1,9		0,1	
Trabajador por cuenta propia	36,2		9,6		3,1	

Fuente: DANE, GEIH.

En cuanto a los indicadores de desempleo en las ciudades y áreas metropolitanas, el DANE a 2021 reporta que, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 28,0%, registrando un aumento de 6,8 p.p. frente al trimestre enero -marzo 2020(21,2%). Para las mujeres esta tasa se ubicó en 32,4% aumentando 7,8p.p. frente al trimestre móvil enero - marzo 2020(24,6%).

Finalmente, en este sentido el DANE informa que la mayor dificultad de la población desocupada entre 14 y 28 años asociada a la pandemia COVID-19, en el primer semestre del 2021, fue que “Perdió el trabajo o la fuente de ingresos, con 28,7% y 32,7%, respectivamente”.

Con los eventos de inconformidad social presentados desde el año 2019, se da cuenta de los múltiples problemas que nos aqueja como sociedad, y con esto, es urgente que la institucionalidad y todos quienes tenemos responsabilidad en las definiciones futuras de país y ciudad, actuar en este punto de inflexión.

En este orden, a manera de conclusión preliminar, entre las problemáticas más sentidas de la juventud en Bogotá destacan:

- Baja matrícula de la educación media.

- Deserción en la educación media del sector oficial.
- Bajo acceso a la educación superior.
- Alta deserción de la educación superior.
- Desigualdad con los jóvenes provenientes de poblaciones minoritarias.
- Indicadores deficitarios del mercado laboral para la juventud.
- Altas tasas de desempleo juvenil con mayor afectación en mujeres jóvenes
- Aumento del número de semanas que dura la población joven buscando trabajo.
- Altos niveles de informalidad del empleo joven.
- Estigmatización
- Segregación
- Discriminación
- Violencia cultural con jóvenes.

La baja inclusión social y productiva de los jóvenes y aún más de la población joven-víctima, deriva en altos niveles de pobreza, dependencia económica, bajos niveles de ocupación y alta informalidad laboral.

Así mismo la estigmatización y violencia de la fuerza pública contra jóvenes en ejercicio de la protesta social está generando innumerables víctimas, así como circuitos de escalonamiento de la conflictividad social en sectores marginales y de alta demanda social como en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá.

Por lo anterior, es urgente definir una ruta de atención de víctimas de violencia policial con enfoque de género, puesto que esta ha sido la población mayoritariamente afectada por esta situación.

3.5 Bogotá en la construcción de paz.

Bogotá juega un papel protagónico en el campo de lo político y lo social para avanzar en la construcción de condiciones para la materialización de la tan anhelada paz. La profundización de la democracia, el fortalecimiento del ejercicio pleno de la ciudadanía, la construcción de confianza en las instituciones, la puesta en marcha de procesos colectivos y participativos de convivencia, el respeto de las diversidades, la inclusión social y económica de las víctimas del conflicto armado interno, la generación de puentes entre la política social y el desarrollo del sector empresarial; son todas dimensiones que aportan a la construcción de una paz a la medida de nuestra realidad histórica.

En el Plan de Desarrollo 2020 - 2024 se le da una importancia central a la Paz como derecho humano a garantizar, en especial en lo relacionado con la territorialización de los Acuerdos de Paz. Esta intención se suscribe en el propósito No 3 de ciudad *“Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”*.

Con el **artículo 51 de Instancias para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación**, se adopta que la Secretaría General a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, coordinará las modificaciones de los Acuerdos Distritales 17 de 1999 y 491 de 2012, para dar cumplimiento al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de paz

Con el **Artículo 52 Estrategia Transversal para territorialización del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera**, se determina que la Administración Distrital en el marco del Acto Legislativo 002 de 2017, ejecutará una estrategia transversal que permita contribuir a la implementación del Acuerdo Final. Para esto se establecerán las estrategias “que respondan

a las particularidades de la ruralidad en Bogotá y la articulación entre las entidades del orden distrital y nacional”

El **Artículo 53 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET** - Bogotá Región adopta el enfoque PDET como un instrumento con carácter reparador que tenga como marco de referencia los planes y programas del Distrito con enfoque territorial, y de construcción de paz para promover el desarrollo integral de las comunidades.

Con el **Artículo 54 Mesa Intersectorial para el seguimiento de los PDET** con este “bajo la secretaría técnica de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, para el seguimiento de la implementación del PDET y de los componentes relacionados con la reincorporación efectiva de excombatientes en la que participarán las diferentes entidades distritales con competencia en el tema, y que podrá invitar a entidades del orden nacional en los temas que se requieran, para la mejor articulación de acciones en el territorio”

En el **Artículo 55 La política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización en Bogotá.** se precisa que las “entidades distritales, de manera coordinada y armónica, desde el ámbito de sus competencias legales y funcionales, adelantarán acciones que respondan a las necesidades particulares de la ciudad para la implementación de la “política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 434 de 198, modificada por el Decreto 885 de 20172

Finalmente, con el **Artículo 56. Atención, asistencia y reparación integral.** “Se fortalecerán las instancias de adopción y ejecución de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, en cumplimiento de las competencias de la Ley 1448 de 2011 para las entidades territoriales, y demás normas reglamentarias. En razón a lo anterior, a través de las instancias de articulación creadas con ocasión a la Ley 1448 de 2011, se consolidarán acciones con las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJR que permitan aportar a la materialización de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral”.

En conclusión, se cuenta con metas estratégicas y metas sectoriales que principalmente están en correspondencia con el Propósito No 3 “*Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación*” en los ámbitos de PDET, memoria histórica y asistencia y atención a víctimas del conflicto armado. (Ver tablas 4 y 5)

Tabla 4. Metas estratégicas. Artículo 13 PDD 2020 2024

PROGRAMA ESTRATÉGICO	N o	META ESTRATÉGICA
Paz y víctimas	82	Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.
Paz y víctimas	83	Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento.

Elaboración propia

Tabla 5. Metas sectoriales en los programas generales. Artículo 14 PDD 2020-2024

PROPÓSITO	PROGRAMA	META SECTORIAL	Nº	INDICADOR
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	Sistema Distrital del Cuidado	Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, desde un enfoque territorial.	47	Número de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado atendidos por la Estrategia Atrapa sueños
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	A 2024 realizar atención psicosocial a 14.400 personas víctimas del conflicto armado.	298	Atención psicosocial a víctimas del conflicto armado

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital.	299	1. Acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados. 2. Medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas. 3. Medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento.	3 0 0	Porcentaje (%) de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.	3 0 1	Porcentaje (%) de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y	Bogotá territorio de paz y atención integral a las	Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y	3 0 2	% de colegios públicos que participan del programa
ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	víctimas del conflicto armado	construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hará a través de profesionales que apoyen la orientación escolar.		

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	Incentivar la creación en las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz.	3 0 3	Número de redes conformadas de padres, madres y cuidadores en las cuales se generan procesos formativos y se comparten experiencias de crianza, como parte del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz
---	--	--	-------------	--

Elaboración propia.

En este orden, se considera importante este proyecto de acuerdo para la creación de Lineamientos para la Atención a víctimas del abuso policial con enfoque de juventudes, con el fin de contribuir a la convivencia pacífica, la transformación dialógica y política de conflictos y el fortalecimiento de la democracia en la ciudad, haciendo un especial énfasis en quienes han sido victimizados por el abuso policial.

4. SUSTENTO JURÍDICO

Dentro del marco jurídico que soporta el presente proyecto se pueden mencionar los siguientes:

- **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:**

ARTÍCULO 2. "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo." (Negrilla de los autores de la Iniciativa).

ARTÍCULO 45 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud

- LEYES Y DECRETOS DE LA NACIÓN

LEY ESTATUTARIA 1622 de 2013, la cual deroga la Ley 375/97 y establece un nuevo marco político, técnico y teórico para garantizar los derechos de los jóvenes. Instauro el marco institucional que permite garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico colombiano y en los tratados internacionales

LEY 1014 DE 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento.

ARTÍCULO 18. Actividades de Promoción. Con el fin de promover la cultura del emprendimiento y las nuevas iniciativas de negocios, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa Presidencial Colombia Joven y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, darán prioridad a las siguientes actividades:

1. Feria de trabajo juvenil: Componente comercial y académico.

(...)

LEY ESTATUTARIA 1622 DE 2013. *“Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones”.*

LEY ESTATUTARIA 1885 de 2018. *“Por la cual se modifica la ley estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.*

LEY DE JUVENTUD 375 de 1997. *“ Por la cual se crea la Ley de Juventud”.*

DECRETO NACIONAL 2365 DE 2019. *“Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público.*

Decreto Distrital 482 de 2006, creado en el marco de la Ley de Juventud 375 de 1997, con el cual se formuló la Política Pública de Juventud 2006– 2016, cuyo propósito fue, *“la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos humanos de los y las jóvenes en función de su ejercicio efectivo, progresivo y sostenible mediante la ampliación de las oportunidades y el fortalecimiento de las potencialidades individuales y colectivas”.*

Acuerdo 257 de 2006, con el cual se da nueva organización institucional, creando a través del Decreto Distrital 607 de 2007, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Subdirección *“para la Juventud, con el objetivo de brindar mecanismos para la planeación, diseño, ejecución, supervisión, control, evaluación y sistematización de las estrategias, programas, proyectos y servicios que se presentan a los y las jóvenes, así como para promover, prevenir o restituir sus derechos vulnerados”.*

Decreto Distrital 499 de 2011, *“por el cual se crea el Sistema Distrital de Juventud SDJ 2019 - 2030”* como una herramienta para la articulación intersectorial de la Política Pública de Juventud, con la finalidad de fortalecer los procesos de implementación y propender por la progresiva materialización de los derechos de la población juvenil en el Distrito.

Acuerdo Distrital 672 de 2017 “ *por el cual se establecen los lineamientos para la actualización de la política pública de juventud del Distrito Capital, se deroga el Acuerdo 159 de 2005 y se dictan otras disposiciones*”.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO

El artículo 287 de nuestra Carta Fundamental, contempló que “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley.

En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

(...)

2.Ejercer las competencias que les correspondan.”

Así mismo, con lo dispuesto en los numeral 1 del artículo 313, le otorga atribución al Concejo Distrital para emitir el presente Proyecto de Acuerdo.

De otra parte, el Concejo de Bogotá D. C., es competente para darle trámite, debate y aprobación al presente Proyecto de Acuerdo, en base al artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que establece: “corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”.

En cuanto a las atribuciones para presentar la iniciativa descrita en el artículo 13 del estatuto orgánico de Bogotá, este Proyecto de Acuerdo, no se encuentra restringido dentro de la atribución exclusiva de los numerales 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17 y 21 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que corresponde a la alcaldesa mayor

El Concejo de Bogotá es competente para dictar normas relacionadas con el objeto del Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales mencionadas que, obligan al Estado a garantizar la vida y la integridad de las personas con ocasión del del derecho fundamental de la protesta social.

6. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las entidades competentes.

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso

reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera

el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”.

“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

7. ANTECEDENTES EN LA CORPORACIÓN

En cuanto a los antecedentes en esta corporación de esta iniciativa normativa, se encuentra el Proyecto de Acuerdo No. 350 de 2021 “Por medio del cual se crean Lineamientos para la Reparación Integral de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado Interno y Víctimas del Abuso de la Fuerza Policial en el marco de la protesta Social en Bogotá”, que contó con ponencias positivas modificatorias de los H.C. Manuel José Sarmiento y Rolando González, el cual se archivó por la culminación del periodo de sesiones ordinarias el 10 de septiembre de 2021.

Con fundamento en los argumentos expuestos, ponemos a consideración del Honorable Concejo de la Ciudad, la presente iniciativa.

Cordialmente,

H.C. ANA TERESA BERNAL MONTAÑES
Concejal de Bogotá D.C.

Bibliografía

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Defensoría del Pueblo (2020) Guía de bolsillo derechos, deberes, servicios y rutas de atención en el marco de la protesta social pacífica. Consultado en; [guia-de-bolsillo-protesta-social-29-01-2021-web.pdf \(defensoria.gov.co\)](https://defensoria.gov.co/guia-de-bolsillo-protesta-social-29-01-2021-web.pdf)

Fundación Lazos de Dignidad. (2021). Consultado en: de: <https://defenderlalibertad.com/category/informes/>

Sentencia STC 7641 del 22 de septiembre de 2020,

Silva García, (2008), La Teoría del Conflicto, un marco necesario. Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XI, núm. 22, julio-diciembre, 2008, pp. 29-43 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia. Consultado en: <https://www.redalyc.org/pdf/876/87602203.pdf>

PROYECTO DE ACUERDO NO 417 DE 2025**PRIMER DEBATE**

Por medio del cual se crean Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas de Abuso Policial, con enfoque de juventudes, en el marco de la protesta social en Bogotá.

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que les confiere el numeral 1 del artículo 12 del decreto ley 1421 de 1993 y numeral 7 del artículo 211 de la ley 1801 de 2016

ACUERDA

ARTÍCULO 1.- OBJETO. Crear Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas de casos de presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno y demás sectores de la Administración Distrital sin perjuicio de sus competencias, en coordinación con la Personería de Bogotá y demás entidades competentes del Ministerio Público.

ARTICULO 2.- ENFOQUES

- a) **ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS.** Este Acuerdo se basa en los valores, principios y normas universales propios de la dignidad de la persona humana que se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto del desarrollo integral de la persona, sustentado en las normas internacionales ratificadas por Colombia, las leyes y la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos.
- b) **ENFOQUE POBLACIONAL Y DE JUVENTUDES.** Este Acuerdo aportará a la construcción de lineamientos de atención integral a víctimas de presuntos casos del uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, reconociendo de manera prioritaria las afectaciones, características, necesidades y potencialidades de la población joven entre los 14 y los 28 años residente en Bogotá, al considerar su mayor exposición y afectación por las prácticas del uso excesivo de la fuerza. Este enfoque no excluye a las personas víctimas que se encuentren en otro rango etario o población afectada en consideración del enfoque poblacional.
- c) **ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.** El enfoque de derechos humanos supone el reconocimiento de las personas como titulares de derechos cuya garantía corresponde a los Estados. Su implementación implica prestar especial atención a la materialización efectiva de los derechos, con énfasis en los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad social, así como a la interdependencia e integralidad de los derechos humanos.
- d) **ENFOQUE DE GÉNERO.** Este Acuerdo recoge la directriz de la Secretaría Distrital de la Mujer que indica que este enfoque es un presupuesto técnico, político, analítico y orientador de la política pública de mujer y equidad de género que permite el “reconocimiento y transformación de las relaciones de poder jerarquizadas que subordinan a las mujeres.
- e) **ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO:** Parte del reconocimiento de que toda acción, toda intervención externa, bien sea que provenga de actores humanitarios, de agencias de desarrollo o de instituciones del Estado, puede causar daño no intencionado. Por ende, incorporar el enfoque implica una reflexión

constante y profunda, por parte de los y las profesionales que trabajan con víctimas, sobre las acciones que llevan a cabo y la forma como las ejecutan. Es decir, un análisis permanente sobre cuál es el impacto de esas acciones, qué mensajes éticos tienen implícitos, qué relaciones de poder implican, cuál es la relación costo-beneficio que conllevan, qué expectativas generan, etc., pero también una pregunta continua e intervenciones que operan bajo los mínimos éticos de dignidad, autonomía y libertad de las personas atendidas.

- f) **PERSPECTIVA INTERSECCIONAL:** La perspectiva interseccional es una metodología orientada a reconocer que las identidades sociales tienen una intersección única entre aspectos como la edad, el sexo asignado al nacer, la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia étnica, la discapacidad, la ocupación, la escolaridad, la pertenencia a un territorio, los roles sociales, las expresiones políticas, el estrato socioeconómico, etc., y que comprenden, de forma integral, la realidad de una persona implica establecer los cruces entre las múltiples y distintas categorías que le definen y constituyen, precisamente, porque es en virtud de esa confluencia de aspectos que se despliegan discriminaciones y se materializan vulneraciones específicas

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES.

- a) **PROTESTA SOCIAL:** Es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de Colombia en el artículo 37, en la Ley y en instrumentos internacionales de derechos humanos, estrechamente relacionado con los derechos fundamentales a la libre expresión y a la libertad de reunión, de asociación, de huelga y de participación.
- b) **ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA:** En virtud de los artículos 416, 423, 424 del Código Penal, para efectos de la ruta de atención, es cualquier acto arbitrario e injusto que, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, como servidor público cometa u ordene un miembro de la Fuerza Pública, así como la omisión de socorro y apoyo que rehúse o demore su debida actuación. En particular, en el marco de los hechos registrados durante la protesta social, se entenderán como exceso de la fuerza y abusos de autoridad aquellos actos en los que los miembros de la Fuerza Pública desatiendan y desconozcan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y uso focalizado de la fuerza, consagrados en instrumentos internacionales, especialmente en el documento de principios básicos sobre el uso de la fuerza de la ONU (1990).
- c) **VÍCTIMA DE ABUSO DE AUTORIDAD COMETIDO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA:** Sobre la categoría de víctima existe senda jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-651 de 2011; 715 de 2012, 253ª de 2012 y C-372 de 2016). Siguiendo los criterios constitucionales y el desarrollo normativo, se entenderá por víctima de presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, a quien individual o colectivamente haya sufrido daños directos o indirectos como resultado del accionar de uno o varios miembros de la Fuerza Pública quienes, con ocasión de sus funciones, se excedan en el ejercicio de las mismas, cometan actos arbitrarios o injustos u omitan su deber de brindar apoyo o socorro.

Estos daños abarcan: pérdida de la vida, lesiones personales transitorias o permanentes que ocasionen o no algún tipo de discapacidad, lesiones oculares, traumas craneoencefálicos, mutilaciones, afectaciones en extremidades, sufrimiento emocional, pérdida financiera, tortura, violencia basada en género, violencia física, violencia psicológica, detenciones arbitrarias, los reclutamientos irregulares, el abuso sexual, el acoso sexual, las amenazas, los hostigamientos, las desapariciones, el daño en bien ajeno y el menoscabo de cualquier derecho fundamental.

La condición de víctima implica que exista un daño real, concreto, y específico, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, que sea atribuible a uno o varios miembros de la Fuerza Pública y que legitime la participación de la víctima en un eventual proceso penal, disciplinario y administrativo para buscar la verdad, la justicia y la reparación.

- d) **ABUSO POLICIAL EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL:** En sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH que hacen parte del bloque constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución Política, determinan que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (art 30, Convención Americana de DDHH).

De conformidad con lo que define la Defensoría del Pueblo (2020), el abuso policial en el marco de la protesta social hace referencia a toda práctica o actuación que decaiga en situaciones como las siguientes:

Intervenciones generalizadas, no diferenciadas, y arbitrarias en el uso de la fuerza.

Estigmatizar, deslegitimar o descalificar a quienes ejercen su derecho a manifestarse pública y pacíficamente.

Uso desproporcionado de la fuerza y de las armas menos letales (permitidas), generando afectaciones en los derechos a la vida y a la integridad.

Privaciones arbitrarias de la libertad, en las que se generan vulneraciones a los derechos a la integridad, vida, debido proceso y defensa.

Ataques contra la libertad de expresión y prensa.

- e). **ATENCIÓN INTEGRAL:** Entendida esta como el conjunto de procedimientos coordinados para preservar la vida y reestablecer los derechos que han sido vulnerados a las víctimas

ARTÍCULO 4.- SUJETOS DE ATENCIÓN. Serán sujetos de atención de estos lineamientos, las víctimas de presuntos casos del uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública en Bogotá D. C., establecidas en el artículo tres (3) de este Acuerdo, con prioridad en la atención a jóvenes en el marco de la protesta social.

Parágrafo: Las víctimas a que hace referencia este artículo, serán incluidas como sujetos de atención de estos lineamientos con la presentación de la denuncia, referenciación o queja realizada ante la autoridad administrativa competente

ARTÍCULO 5.- DECLARACIÓN DE ESTADO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. La Personería Distrital recibirá la declaración de las personas víctimas por presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, referenciando su condición de víctima.

De otra parte, en coordinación con las demás entidades competentes del Ministerio Público, verificará el estado de vulneración de derechos de las víctimas por el presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad, definidas como sujetos de atención según lo establecido en el artículo cuarto (4) del presente Acuerdo.

Parágrafo 1: Esta declaración de estado de vulneración de derechos será objeto de seguimiento por parte de la Personería Distrital con el fin de monitorear el tipo de abuso, las zonas de recurrencia y garantizar el acceso de las víctimas a la atención integral.

Parágrafo 2: Se entregará de forma periódica, mínimo dos (2) veces al año, un informe de verificación de estado de vulneración de derechos conforme a la instancia sugerida en el artículo trece (13) de este Acuerdo

ARTÍCULO 6.- FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE PRESUNTOS CASOS DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y ABUSO DE AUTORIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA EN BOGOTÁ.

La Secretaría de Gobierno liderará el fortalecimiento con participación de organizaciones de DDHH, de la ruta integral de atención a Víctimas de casos de presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, definidas como sujetos de atención según lo establecido en el artículo cuarto (4) del presente Acuerdo, con el fin de contribuir a la dignificación y resarcimiento de derechos de la población afectada.

Esta ruta como mínimo contará con:

- a. Acompañamiento jurídico para el acceso a la justicia.
- b. Acceso prioritario a la salud.
- c. Atención psicosocial.
- d. Acciones para la inclusión educativa, laboral, deportiva y cultural.

Esta ruta considerará acciones prioritarias para la población joven en el marco de la protesta social, al considerar que ha sido la de mayor afectación por el uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad.

Parágrafo. La actualización de esta ruta se realizará en diálogo con organizaciones sociales, organizaciones defensoras de DDHH, centros de estudios y defensores y defensoras de los derechos humanos.

ARTÍCULO 7.- DIVULGACIÓN. La Secretaría de Gobierno, en coordinación con los demás sectores de la Administración Distrital, desarrollarán una estrategia para la divulgación, promoción y orientación a las víctimas de presuntos casos del uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, definidas como sujetos de atención según lo establecido en el artículo cuarto (4) de este Acuerdo.

Parágrafo: En el caso de mujeres víctimas de violencia basada en género en el marco de presuntos casos de exceso de la fuerza y abuso de autoridad de la Fuerza Pública, en coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer, se activarán los canales de atención y el acompañamiento necesario para la aplicación del enfoque de género

ARTÍCULO 8.- ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. La Secretaría de Educación del Distrito en el marco de sus competencias, acompañará a los y las jóvenes y demás personas víctimas de presuntos casos del uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, establecidas en el artículo cuarto (4) de este Acuerdo, con estrategias que garanticen el acceso y permanencia en la educación primaria, básica y media, y realizará procesos de orientación socioocupacional que promuevan en los y las jóvenes el tránsito a la educación posmedia y superior

ARTÍCULO 9.- La Secretaría de Educación del Distrito y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología “Atenea, ampliarán los criterios socioeconómicos de las personas víctimas de

presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, dentro de los términos de las convocatorias y los reglamentos operativos de las estrategias, a través de las cuales se oferten programas de acceso a educación posmedia.

Parágrafo 1: Las personas deberán acreditar la condición de víctima de presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad, con el documento o referenciación dado por la Personería de Bogotá.

Parágrafo 2: En cualquier caso, las personas deberán cumplir con los criterios de habilitación y selección establecidos en cada convocatoria de los programas de acceso a la educación posmedia

ARTÍCULO 10.- PRIORIZACIÓN DE JÓVENES VÍCTIMAS DE PRESUNTOS CASOS DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y ABUSO DE AUTORIDAD, EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR. Serán sujetos de priorización en la inscripción de los programas ofertados por el IDR los y las jóvenes que sean reportados por la secretaria Distrital de Gobierno en el marco de la ruta de atención a víctimas de presunto uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública

ARTÍCULO 11.- ACCIONES DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE PRESUNTOS CASOS DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y ABUSO DE AUTORIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA. La Secretaría de Gobierno en coordinación con los demás sectores de la Administración Distrital, en concertación con las familias, las víctimas de presuntos casos del uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad de la Fuerza Pública, y la comunidad aledaña a las zonas recurrentes afectadas por la confrontación en el marco de la protesta social; implementarán acciones colectivas para la satisfacción y las garantías de no repetición tales como: resignificación de lugares de alta conflictividad social, transformación creativa y participativa de lugares que se han utilizado para la tortura y tratos inhumanos y construcción de espacios de memoria y diálogo social.

ARTÍCULO 12.- PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ. La Secretaría de Gobierno en articulación con el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos, liderarán espacios de encuentro y diálogo distrital sobre la cultura de la transformación democrática de la conflictividad social, acciones para el mantenimiento de la paz, la prevención y el control social a los presuntos casos del uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad de la Fuerza Pública, en la ciudad de Bogotá.

ARTÍCULO 13.- INSTANCIA DE SEGUIMIENTO. Instar a la Administración Distrital en coordinación con las entidades competentes para adelantar la formulación e implementación de una mesa para el seguimiento y monitoreo de los asuntos relacionados con el presente Acuerdo.

Se podrá promover la participación de organizaciones de derechos humanos y víctimas de presuntos casos de uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, en el proceso de seguimiento al presente Acuerdo.

Parágrafo: La Administración Distrital en el marco de sus competencias, podrá invitar a las Comisiones Accidentales de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá, así como a otras organizaciones de la sociedad civil.

ARTÍCULO 14.- PRIORIZACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES VÍCTIMAS DE PRESUNTOS CASOS DE USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y ABUSO DE AUTORIDAD. La Alcaldía Mayor a través de las entidades competentes, ofrecerá atención integral y acceso a las rutas y servicios dirigidos a jóvenes en el marco de la política pública de juventud, entre ellos rutas de atenciones integrales

ARTÍCULO 15.- EMPLEABILIDAD. La Secretaría de Desarrollo Económico, implementará estrategias para la inclusión laboral y productiva de víctimas de presuntos casos de uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública, definidas como sujetos de atención según lo establecido en el artículo cuarto

ARTÍCULO 16.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE